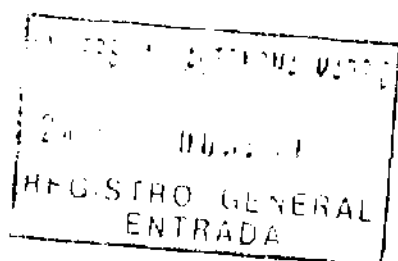


M. SOLEDAD TORRECUADRADA GARCIA-LOZANO



Las Salas *ad hoc* de la Corte Internacional de Justicia.

R.O. 93 308

TESIS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID

1996

Memoria realizada por la Licenciada Dña. M^a d
la Soledad TorreCuadrada García-Lozano, baj
la dirección del Dr. D. Antonio Remiro Brotóns
sobre el tema *Las salas ad hoc de la Cort*
Internacional de Justicia, presentada en mayo d
1996 para la obtención del Título de Doctora e
Derecho.

A la memoria de mi padre y a la de Juli, mi herma

INDICE

Abreviaturas más utilizadas.....

INTRODUCCION

CAPITULO PRIMERO: De las Salas de la CPJI a las Salas de la CIJ.....

1. LAS SALAS DE LA CPJI.....

1.1. Un intento fallido.....

1.2. Tipología:

1.2.1. Salas de Procedimiento Sumario.....

1.2.2. Salas «especiales»

a) Estatuto de 1920 y Reglamento de 1922 -modificado en 1926-

b) Estatuto y Reglamento de 1936

1.3. Formación.....

1.3.1. Composición.....

a) Estatuto de 1920 y Reglamento de 1922 -modificado en 1926-

b) Estatuto y Reglamento de 1936.....

1.3.2. La Presidencia.....

1.3.3. Jueces *ad hoc*.....

1.3.4. Asesores técnicos.....

1.4. Carácter dispositivo de las Salas.....

1.5. Procedimiento: carácter dispositivo.....

1.5.1. Procedimiento en la Sala de Procedimiento Sumario.....

1.5.2. Procedimiento en las Salas «especiales».....

1.6. Algunas consideraciones sobre las sentencias.....

2. LAS SALAS DE LA CIJ.....

2.1. Consideraciones previas.....

2.2. Las Salas de la CIJ desde 1946 hasta 1972.....

2.2.1. Salas de Procedimiento Sumario.....

2.2.2. Salas «especiales».....

2.2.3. Nacimiento de las Salas *ad hoc*.....

2.2.4. Disposiciones comunes a los tres tipos de Salas.....

2.3. Repercusión en las Salas <i>ad hoc</i> de la revisión del Reglamento en 1972 y del nuevo Reglamento de 1978.....	
2.3.1. Historia de la reforma.....	
2.3.2. Novedades en la composición de las Salas.....	
2.3.3. Novedades en el Procedimiento.....	
2.4. La relación entre las Salas <i>ad hoc</i> y el Pleno ¿ Dependencia o independencia?	

CAPITULO SEGUNDO: COMPOSICION DE LAS SALAS AD HOC DE LA CIJ.....

1.CARACTERISTICAS DEL ARREGLO JUDICIAL: PRECONSTITUCION Y PERMANENCIA

2. PARTICULARIDADES DE LA COMPOSICION DE LAS SALAS AD HOC

2.1. Número de miembros de las Salas <i>ad hoc</i>	
2.2. Procedimiento de elección de los miembros de las Salas <i>ad hoc</i> : participación de las partes	
2.3. Aplicabilidad del artículo 9 del Estatuto a las Salas <i>ad hoc</i>	
2.4. Compatibilidad de los cargos de miembro del Pleno y de una Sala <i>ad hoc</i>	
2.5. Permanencia en la Sala de aquellos miembros de la Corte que hubieran perdido esta condición	
2.6. Los Jueces <i>ad hoc</i>	
2.6.1. Características Generales de los Jueces <i>ad hoc</i>	
2.6.2. Participación en las Salas de los Jueces nacionales y <i>ad hoc</i>	
2.6.3. Peculiaridades de la participación de los Jueces <i>ad hoc</i> en las Salas de la Corte	
2.6.4. Formalidades del nombramiento de los Jueces <i>ad hoc</i> en las Salas de la CIJ	

3. EL PROBLEMA DE LA COMPETENCIA PARA MODIFICAR LA COMPOSICION DE UNA SALA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA.....

3.1. Provisión de vacantes.....	
3.2. Modificación de la composición de una Sala (reconstitución). El problema de la intervención	
4. COMPOSICION DE LAS SALAS AD HOC CONSTITUIDAS HASTA EL MOMENTO	

CAPITULO TERCERO: CARACTERISTICAS DE LA JURISDICCION DE LAS SALAS.....

1. LA FUNCIÓN DE LAS SALAS AD HOC ¿SÓLO CONTENCIOSA?.....	
1.1. Interpretación gramatical.....	
1.2. Interpretación histórico-sistemática	
1.3. Interpretación teleológica	
2. BASES DE LA JURISDICCION.....	
2.1. Consideraciones Generales	
2.2. Compromiso.....	
2.3. Demanda o solicitud unilateral	
2.3.1. En virtud de <i>anuencia</i>	
2.3.2. En virtud de un Tratado o cláusula compromisoria	
2.3.3. En virtud de una declaración conforme al art. 36.2 del Estatuto.....	
2.4. El problema de la <i>competencia sobre la competencia</i>	
2.5. Incoación del Procedimiento mediante el envío del asunto desde el Pleno hasta la Sala.....	
3. PROCEDIMIENTO EN LAS SALAS AD HOC	
3.1. La disposición del procedimiento por las partes: el art. 101 del Reglamento.....	
3.2. Principios que rigen el procedimiento ante las Salas <i>ad hoc</i>	
3.2.1. Función directiva del procedimiento.....	
3.2.2. Carácter contradictorio.....	
3.2.3. Escritura y oralidad	
3.2.4. Publicidad.....	

3.3. Analogías y diferencias entre el procedimiento ante el Pleno y ante las Salas <i>ad hoc</i>	2
--	---

CAPITULO CUARTO: PROCEDIMIENTOS INCIDENTALES.....

1. CONSIDERACIONES GENERALES.....	2
2. EXCEPCIONES PRELIMINARES.....	2
2.1. La Corte en General.....	2
2.2. Particularidades de la interposición de excepciones preliminares en las Salas <i>ad hoc</i> : asunto de la <i>Eletronica Sicula S.p.A. (ELSI)</i>	2
2.2.1. Compromiso y Excepciones preliminares con compatibles	2
2.2.2. Las excepciones preliminares son aún más compatibles con las otras bases de la jurisdicción	2
3. MEDIDAS CAUTELARES	2
3.1. Planteamiento general	2
3.2. Las medidas cautelares ante las Salas <i>ad hoc</i> : asunto de la <i>controversia fronteriza Burkina Faso/República de Mali</i>	2
4. INTERVENCION	2
4.1. Planteamiento general	2
4.1.1. Intervención ordinaria	3
a. Requisitos	3
i) Interés Jurídico	3
ii) Plazo de depósito de la demanda de intervención	3
iii) Objeto de la intervención	3
iv) Vínculo jurisdiccional o fundamento de la competencia de la Corte	3
b. Estatuto jurídico del tercero interviniente	3
4.1.2. Intervención interpretativa	3
4.2. La intervención de Nicaragua en la <i>controversia terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras</i>	3

4.2.1. Formación competente para decidir sobre la solicitud de intervención y composición de las Salas <i>ad hoc</i>	3
4.2.2. Vínculo jurisdiccional	3
4.2.3.Efectos de la admisión de la solicitud sobre el estatuto jurídico del interviniente y sobre la composición de la Sala <i>ad hoc</i>	3
4.2.4. Efecto jurídico de la sentencia para el tercero interviniente no parte en el procedimiento principal	3

CAPITULO QUINTO: LAS SENTENCIAS DE LAS SALAS AD HOC..... 3

1. FORMACION Y EFECTOS DE LAS SENTENCIAS: INTROMISION DE LOS COMPROMISOS 3

2. LOS GRANDES PROBLEMAS..... 3

2.1. El problema de la recurribilidad.....	3
2.1.1. Recurso de interpretación	3
2.1.2. Recurso de revisión	3
2.1.3. Posibles remedios	3
2.2. El problema de la ruptura jurisprudencial	3
2.2.1.Consideraciones generales	3
2.2.2.¿ <i>Elettronica Sicala S.p.A. (ELSI) v. Barcelona Traction Light and Power Co. Limited ?</i>	3
2.2.3. Posibles remedios	3
a.- Recurso al Pleno	3
b.- Participación del Presidente de la Corte en la formación de la Sala	3

CONCLUSIONES 3

APENDICE I: COMPOSICION DE LAS SALAS AD HOC DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 4

1. MIEMBROS DE LA SALA ENCARGADA DEL ASUNTO DE LA DELIMITACIÓN DE LA FRONTERA MARÍTIMA EN LA REGIÓN DEL

GOLFO DE MAINE (Canadá/Estados Unidos): R. Ago, A. Gros, H. Mosler, S.M. Schwebel y M. Cohen	
2. MIEMBROS DE LA SALA ENCARGADA DEL ASUNTO DE LA DIFERENCIA FRONTERIZA (Burkina Faso/República de Mali): M. Bedjaoui, M. Lachs, J.M. Ruda, F. Luchaire y G. Abi-Saab	
3. MIEMBROS DE LA SALA ENCARGADA DEL ASUNTO DE LA ELETTRONICA SICULA S.p.A. -ELSI- (Estados Unidos c. Italia): N. Singh -sustituido por J.M. Ruda, R. Ago, Sir R.Y. Jennings, S. Oda y S.M. Schwebel.....	
4. MIEMBROS DE LA SALA ENCARGADA DE LA DIFERENCIA FRONTERIZA TERRESTRE, INSULAR Y MARITIMA (Honduras/El Salvador): J. Sette-Cámara, S. Oda, Sir R.Y. Jennings, N. Valticos y M. Virally -sustituido por S. Torres Bernárdez-.....	4
APENDICE II. DOCUMENTAL.....	4
1. RÉSOLUTION VISANT LA PRATIQUE INTERNE DE LA COUR EN MATIERE JUDICIAIRE.....	4
2. COMPROMISOS.....	4
2.1. Acuerdos celebrados entre Estados Unidos y Canadá de 29 de marzo de 1979	4
2.1.1. Traité entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique visant à soumettre su règlement obligatoire le différend relatif à la délimitation de la frontière maritime dans la région du Golfe du Maine.....	4
2.1.2. Compromis entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique visant à soumettre à une Chambre de la Cour Internationale de Justice la question de la délimitation de la frontière maritime dans la région du Golfe du Maine	4
2.1.3. Compromis entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique visant à soumettre à une Cour d'arbitrage la question de la délimitation de la frontière maritime dans la région du Golfe du Maine.....	4
2.2. Compromiso celebrado entre Alto-Volta (Burkina Faso) y Malí.....	4
2.3. Compromiso entre El Salvador y Honduras	4
3. DECLARACIONES DE ACEPTACION DE LA JURISIDCCIÓN OBLIGATORIA DE LA CORTE.....	4
3.1. Canadá	4

3.2. Estados Unidos	4
3.3. Honduras	4
3.3.1. Declaración de 1960.....	4
3.3.2. Declaración de 1986.....	4
3.4. El Salvador.....	4
5. PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA JURISDICCIÓN OBLIGATORIA DE LA CIJ.....	4

BIBLIOGRAFIA..... 4

1.- BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA SOBRE LAS SALAS AD HOC.....	4
1.1. - Salas. Generalidades.....	4
1.2. - Salas. Estudios sobre los asuntos conocidos por ellas.....	4
A) Delimitación de la frontera marítima en el Golfo de Maine entre Estados Unidos y Canadá.....	4
B) Diferencia fronteriza entre Burkina Faso y la República de Mali.....	4
C) Elettronica Sicula S.p.A -ELSI- Estados Unidos c. Italia.....	4
D) Diferencia Fronteriza terrestre, insular y marítima entre Honduras y El Salvador.....	4
1.3. - La Corte Internacional de Justicia. La reforma del Reglamento...	4
2. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA.....	4
2.1. Generalidades de la Corte.....	4
2.2. Procedimientos incidentales.....	5
2.3. Sentencias de la Corte. Efectos, ejecución y recursos.....	5
2.4. Otros Tribunales Internacionales.....	5
3. OBRAS GENERALES.....	5
4. DOCUMENTOS MÁS UTILIZADOS.....	5
4.1. Textos normativos.....	5
4.2. Decisiones de la CPJI.....	5
4.3. Decisiones de la CIJ.....	5
4.4. Otros.....	5

ABREVIATURAS MAS UTILIZADAS

AFDI -----	Annuaire Française de Droit International.
AGNU -----	Asamblea General de las Naciones Unidas.
AJIL -----	American Journal of International Law.
BYIL -----	British Yearbook of International Law.
CYIL -----	Canadian Yearbook of International Law.
CJTL -----	Columbia Journal of Transnational Law.
CIJ -----	Corte Internacional de Justicia.
CJC -----	Corte de Justicia Centroamericana
CPJI-----	Corte Permanente de Justicia Internacional.
DJIL -----	Dickinson Journal of International Law.
EPIL -----	Encyclopedia of Public International Law.
FILJ -----	Fordham International Law Journal.
GYIL -----	German Yearbook of International Law.
HILJ -----	Harvard International Law Journal
HI&CLR ----	Hastings International and Comparative Law Review.
HJIL -----	Houston Journal of International Law
IJIL -----	Indian Journal of International Law.
ICLQ -----	International and Comparative Law Quarterly.
IDI -----	Instituto de Derecho Internacional.
ILM -----	International Legal Materials.
J.CI.DI. ----	Juris Classeur. Droit International.
JDI -----	Journal de Droit International.
MP -----	Marine Policy.
MJIL&T ----	Maryland Journal of International Law & Trade.
NN.UU. ----	Naciones Unidas.
NILR -----	Netherlands International Law Review.
RBDI-----	Revue Belge de Droit International.
R. des C.----	Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye.
RDI -----	Rivista di Diritto Internazionale.
REDI -----	Revista Española de Derecho Internacional.
REI -----	Revista de Estudios Internacionales.
RIAA -----	Recueil des Sentences Arbitrales.
UN Doc. ---	United Nations, Documents.

RGDIP -----	Revue Générale de Droit International Public.
SJIL&C-----	Syracuse journal of International Law and Commerce
SdN -----	Sociedad de Naciones.
TCEE -----	Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea.
TILJ -----	Texas International Law Journal.
TJCE -----	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Va.JIL -----	Virginia Journal of International Law
ZaöRV -----	Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht.

Introducción.

La Introducción es el primer apartado de toda tesis doctoral. Habitualmente consiste en una exposición resumida del objetivo fundamental del trabajo, los motivos particulares que lo han originado y las partes de que consta¹.

En nuestro caso, esta breve presentación de la investigación científica realizada se desarrollará de acuerdo con este esquema tradicional. En primer lugar, nos ocuparemos del objeto del trabajo (1) y de los motivos que llevaron a la elección del mismo (2); luego, pasaremos a indicar la estructura interna conforme a la cual se va a desarrollar su estudio (3).

1. La CIJ -Órgano Judicial Principal de Naciones Unidas-, puede ejercer su función contenciosa en Pleno -formación ordinaria- o en Sala -formaciones restringidas o extraordinarias-. Dentro de esta categoría el Estatuto perfila tres tipos distintos de Salas, dos de ellas heredadas de la CPJI y una tercera cuyo nacimiento coincide con el de la CIJ. En el período de entreguerra existían unas Salas a las que el Estatuto no calificaba en forma alguna, que estaban caracterizadas por su especialización material, y otras, cuyo objeto era imprimir brevedad o rapidez al procedimiento, que el propio Estatuto denominaba *Salas de Procedimiento Sumario*. Estas fueron las únicas qu

¹ Vid. en A. BERNAL GUERRERO y M. VELAZQUEZ CLAVIJO *Técnicas de investigación educativa. Procedimientos auxiliares*, Sevilla, 1989, p. 153. U. ECO, en su monografía *Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura*, México, 1989, p. 141, indica corrosivo que «el objetivo perseguido con una buena introducción definitiva es que el lector se contente con ella, la entienda y no lea el resto». Pero cuando uno ofrece su primer trabajo de investigación importante es natural que no quiera dar razón al autor italiano.

funcionaron -y lo hicieron en una única ocasión- a pesar de las modificaciones estatutarias y reglamentarias efectuadas con la intención de potenciar su utilización.

En la CIJ se mantuvieron estos dos tipos de Salas, aunque con algunas alteraciones en la regulación de las Salas indicadas en primer lugar, caracterizadas por su especialización material, añadiéndose a ellas un tercer tipo, identificado doctrinalmente como *ad hoc*, cuyo estudio es el objeto de este trabajo.

Las Salas *ad hoc* han sido las únicas formaciones extraordinarias de la CIJ a cuyo conocimiento se ha sometido alguna controversia internacional que ha ocurrido hasta ahora en cuatro ocasiones, pero esto sucedió sólo a partir de 1981, gracias a la reforma de 1978 del Reglamento de la Corte que permitió la aplicación de una disposición estatutaria -el art. 26.2- que durante 36 años fue letra muerta². Tres de las cuatro Salas *ad hoc* constituidas en el pasado lo fueron para conocer de controversias de carácter fronterizo, por lo que se ha afirmado su idoneidad como método de arreglo pacífico de esta clase de controversias. Cabe no obstante, precisar que la primera de las diferencias fronterizas sometidas a una Sala *ad hoc* -la de *delimitación de la frontera marítima en el Golfo de Maine* entre Estados Unidos y Canadá-, poseyó un carácter estrictamente marítimo, la segunda -la *diferencia fronteriza entre Burkina Faso y Mali*- sólo terrestre, siendo la última -la *diferencia fronteriza*

² En este sentido se pronuncian entre otros: H. MOSLER "The ad hoc Chambers of the International Court of Justice. Evaluation after five years of Experience" en *International Law at the Time of Perplexity. Essays in Honour Shabtai Rosenne*, Dordrecht, 1989; R. OSTRIHANSKY "Chambers of the International Court of Justice" en *ICLQ*, v. 37, 1, 1988, p. 30; S.H. SCHWEBEL "chambers of the International Court of Justice formed for particular cases" en *International Law at the Time of Perplexity. Essays in Honour Shabtai Rosenne*, Dordrecht 1989, p. 744; S.H. SCHWEBEL "Ad hoc chambers of the International Court of Justice" en *AJIL*, 1987 vol. 81-4, p. 835; A. ZIMMERMANN "Ad hoc chambers of the International Court of Justice" en *DJIL*, vol. 8 nº p.1.

terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras-, de naturaleza mixta terrestre, marítima e insular. El único asunto de objeto no territorial fue el de la *Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-* (Estados Unidos contra Italia). Se trataba de una demanda de reparación de los Estados Unidos en ejercicio de la protección diplomática de sus nacionales, accionistas mayoritarios de una sociedad italiana: la *Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI)*.

No cabe establecer regla sociológica alguna sobre el recurso a una Sala *ad hoc* en relación con la actitud general de los Estados ante la Corte. Así, mientras Estados Unidos ha acudido a la CIJ como demandante o demandado en dieciséis ocasiones -en ocho de ellas como demandante³, en siete como demandado⁴ y tan sólo una -precisamente la del *Golfo de Maine* - en virtud de un compromiso que fundó la jurisdicción de una Sala *ad hoc*. Burkina Faso, Malí y El Salvador lo hacían por primera vez con ocasión de la notificación de un compromiso para someter una diferencia fronteriza a sendas Salas. Entre ambos extremos encontramos dos Estados que, en su modestia, también han sido o son clientes habituales de la Corte. Nicaragua es el único Estado que ha actuado ante la Corte como demandante⁵, demandado⁶ e interviniente⁷. Italia

³ Seis de ellas en la década de los cincuenta, en el *Trato en Hungría de un avión estadounidense y su tripulación* contra Hungría, *Id. contra URSS, Incidente aéreo de 10 de marzo de 1953, Incidente aéreo de 7 de octubre de 1952, Incidente aéreo de 27 de julio de 1952, Incidente aéreo de 4 de septiembre de 1954*. Además, *Personal Diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán* y *ELSI*.

⁴ *Derechos de los nacionales estadounidenses en Marruecos, Oro amonedado procedente de Roma en 1943*, siendo Italia el demandante, *Interhandel, Actividades militares paramilitares en y contra Nicaragua, cuestiones de interpretación, aplicación de la Convención de Montreal de 1971 sobre el resultado del incidente aéreo de Lockerbie, Plataformas Petrolíferas, Derribo del yumbo iraní...*

⁵ En tres ocasiones *las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua*, e *las acciones armadas fronterizas y transfronterizas* contra Honduras, *id. contra Costa Rica*.

⁶ En una ocasión lo fue por Honduras en el *asunto de la Sentencia arbitral del Rey c. España de 1906*.

⁷ En la Sala entre Honduras y El Salvador.

por su parte, ha actuado en dos ocasiones, una como demandante⁸ y otra como demandado⁹, habiendo instado además, sin éxito, un incidente de intervención¹⁰; Honduras fue demandado una vez¹¹ y demandante otra¹ teniendo como contraparte siempre al mismo Estado: Nicaragua, admitido como interviniente en la Sala convenida por Honduras y El Salvador. Por su parte Canadá fue demandado, después de resolver *la delimitación de la frontera marítima en la zona del Golfo de Maine*, por España¹³. Como puede apreciarse por los datos ofrecidos, las Salas no se han convertido en una *especialidad regional*, atendiendo a las partes, americanas, europeas y africanas.

Todos los conflictos solucionados por una Sala *ad hoc*, resultan de gran interés por distintos motivos. Así, por ejemplo, el asunto de la *Eletronica Sicula S.p.A. (ELSI)* reúne tres rasgos característicos: (a) se trata del primer caso en el que la incoación del procedimiento tiene lugar mediante demanda¹⁴ no por compromiso, como venía siendo habitual en las Salas hasta entonces; (b) el Estado demandado -Italia-, interpuso una excepción preliminar de inadmisibilidad; y, (c) era la primera vez en que Estados Unidos acudía al Corte tras la retirada de su declaración de aceptación de la jurisdicción obligatoria como consecuencia de la Sentencia dictada en el asunto de la

⁸ En el asunto *del oro amonedado procedente de Roma* en 1943.

⁹ En la Sala que conoció de la ELSI.

¹⁰ En la *Plataforma Continental* entre Malta y Libia.

¹¹ En el asunto de *las acciones armadas fronterizas y transfronterizas*.

¹² Con ocasión del asunto de *la sentencia arbitral del Rey de España de 1906*.

¹³ En 1995, en el asunto de *la competencia en materia de pesquerías*.

¹⁴ El fundamento de la misma se encontraba en una cláusula compromisoria inserta en el Tratado Italo-Estadounidense de Amistad, Comercio y Navegación de 2 de febrero de 1948 del Acuerdo complementario de 26 de septiembre de 1951.

Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua. Competencia de la Corte y admisibilidad de la demanda, de 26 de noviembre de 1984.

Por otra parte, la Sala constituida para conocer de la *controversia fronteriza insular, terrestre y marítima* entre El Salvador y Honduras, tiene una subrayada importancia en la jurisprudencia de la Corte, por cuanto por primera vez en su historia se aceptó -aunque muy limitadamente- una demanda de intervención basada en el art. 62 del Estatuto. La solicitud nicaragüense se dirigió al Pleno, pero esta formación estimó que correspondía a la Sala que estaba conociendo del procedimiento principal la decisión acerca de los incidentes procesales planteados al respecto, en este caso la demanda de intervención¹⁵. La Ordenanza en cuestión cuenta con opiniones disidentes entre ellas la del Juez SHAHABUDDEEN, cuyo contenido posee un marcado interés desde un punto de vista doctrinal.

Las dos Salas restantes también ofrecen aspectos relevantes: la que conoció de *la delimitación de la frontera marítima en la zona del Golfo de Main* entre Estados Unidos y Canadá fue la primera en constituirse en el tiempo. La actitud de los Estados partes respecto de la composición de la Sala suscitó e rechazo doctrinal y también de algunos miembros de la Corte que no dudaron en manifestarse contrarios a las exigencias de las partes, como ponen de manifiesto las opiniones disidentes de los Jueces MOROZOV y EL-KHANI¹⁶.

En cuanto a la Sala que conoció de *la diferencia fronteriza entre Burkina Faso y la República de Malí*, cabe señalar la ejemplaridad de su constitución, así como su buen funcionamiento y, en sentido contrario al anterior

¹⁵ Vid. la Ordenanza 13 de enero de 1990, en CIJ Recueil 1990, p. 10 y ss. En contra de esta opinión mayoritaria de la Corte se manifiestan los Jueces ELIAS, TARASSOV y SHAHABUDDEEN.

¹⁶ Vid. Ordenanza de la Corte de 20 de enero de 1982 en CIJ Recueil 1982, p.3 y ss.

la actitud de las partes, caracterizada por su buena disposición hacia la prerrogativa de la Corte. Puede destacarse también que, por primera vez, se utiliza un procedimiento distinto -y contrario- del preceptuado en el art. 31.4 de Estatuto para la designación de Jueces *ad hoc*. También estamos ante la primera utilización de medidas provisionales¹⁷.

2. En cuanto a los motivos particulares que provocaron la elección de las Salas *ad hoc* como objeto de este trabajo de investigación, es necesario tener en cuenta el momento en el que se produjo: el año 1990. Entonces era un tema de máximo interés y actualidad, ya que las Salas habían emitido tres Sentencias y estaba *viva* una cuarta Sala que por esas fechas se pronunciaba acerca del incidente de intervención ex art. 62 interpuesto por Nicaragua. Eso se conjugaba con una relativa escasez de publicaciones doctrinales sobre el objeto elegido. Hemos de subrayar la inexistencia de estudios doctrinales completos sobre las Salas de la CIJ en general antes de que se constituyera la primera de ellas, encargada de *la delimitación de la frontera marítima en la región del Golfo de Maine* entre Estados Unidos y Canadá¹⁸. Posteriormente se han producido algunos estudios de esta índole que, de todos modos, no analizan a fondo la compleja problemática planteada por estas Salas de la CIJ. Es cierto, eso sí, que cada una de las Salas constituidas originó su particular floración de artículos y notas, de los que se da oportuna noticia. En todo caso esta escasez de material bibliográfico acentuó el interés que suscitaba afrontar el estudio de estas formaciones judiciales.

¹⁷ Vid. Ordenanza de 10 de enero de 1986 en CIJ Recueil 1986, pp.3-12.

¹⁸ La Ordenanza de Constitución de la Sala es de 20 de enero de 1982 -Vid. en CIJ Recueil 1982, p. 3 y ss.

Después de que se dictara Sentencia el 11 de septiembre de 1992¹⁹ en el asunto del conflicto fronterizo terrestre, insular y marítimo entre El Salvador y Honduras, no se ha presentado demanda alguna de constitución de una Sala *ad hoc*, por lo que su futuro queda en cierto modo en suspenso. Sin embargo será improcedente sugerir que el tema ha devenido *histórico*. No puede descartarse la aparición de una nueva formación de este tipo. Cabría incluso estimarla mediante una adecuada reforma del Estatuto de la CIJ, el cual, dicho sea de paso, se compadece mal en su presente tenor con algunas de las novedades introducidas en 1972 y mantenidas en el Reglamento de 1978. La modificación reglamentaria se emprendió en una fase de crisis de la Corte, para la que, como M. LACHS apuntó, no existían fórmulas mágicas²⁰.

3. Este trabajo se ha distribuido en cinco capítulos. El primero de ellos se dedica a los antecedentes históricos de las Salas de la Corte de La Haya. Hemos tomado como punto de partida las Salas de la CPJI, a pesar de la escasa relación que guardan con las Salas *ad hoc*, porque suponen la primera manifestación de la jurisdicción internacional en formaciones reducidas. El periplo histórico termina con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de 1978.

El segundo capítulo se ocupa de la composición de las Salas *ad hoc* de la CIJ, que es el aspecto realmente diferenciador no sólo de las formaciones plenarias de la Corte y del arreglo arbitral, sino también del resto de los tipos de Salas previstos por el Estatuto de la Corte. Sin duda, el procedimiento para la formación de las Salas *ad hoc* es uno de sus puntos neurálgicos y fuente principal de sus problemas. Al modificar su Reglamento la propia Corte intentó atraer a los Estados hacia el arreglo judicial introduciendo procedimientos

¹⁹ *Vid.* en CIJ Recueil 1992, pp.352-761.

²⁰ M. LACHS, en un estudio publicado en 1970 en New York Center for International Studies Policy Papers, vol.3, nº4, pp. 1-25, bajo el título "Problems of the World Court: A Member's Perspective".

propios del arbitraje en la selección de los Jueces que habrían de componer estas Salas.

Dedicamos a las características de la jurisdicción de las Salas un capítulo, el tercero. En él se estudian distintos aspectos, como el relativo a su función: ¿únicamente contenciosa o también consultiva?; así como los instrumentos que pueden utilizarse para incoar un procedimiento ante las Salas. Centrándonos en los instrumentos efectivamente utilizados, lo más destacable es que mientras la mayoría de los asuntos son introducidos en el Pleno mediante demanda unilateral, en las Salas la vía por excelencia es el compromiso. El capítulo termina repasando las características del procedimiento ante las Salas *ad hoc*, que presenta escasas novedades respecto del seguido ante el Pleno, puesto que ambos se encuentran regulados por los mismos preceptos reglamentarios, a salvo el art. 92 del Reglamento, que tan sólo se ha utilizado en una ocasión.

A los procedimientos incidentales se dedica el cuarto capítulo. Se trata de un ámbito muy técnico, cuya inclusión está justificada por la práctica habida hasta el momento. En efecto, ante las Salas constituidas se han interpuesto una excepción preliminar, una solicitud de medidas cautelares y una intervención de las previstas en el art. 62 del Estatuto. Adelantemos que en ninguno de los procedimientos evacuados para sustanciar los incidentes planteados se han apreciado diferencias respecto del Pleno. Las peculiaridades han sido fruto de las circunstancias concretas de cada caso, y no de la formación reducida que los ha estudiado.

El último capítulo, el quinto, se dedica al estudio del acto jurídico mediante el cual concluye normalmente el procedimiento: la Sentencia. Los principales problemas relacionados con ella tienen que ver con la identificación del órgano competente para conocer de los posibles recursos de que pudiera

ser objeto. El punto es de difícil solución por cuanto no encontramos respuesta ni en el Estatuto ni en el Reglamento. Tampoco existe una práctica susceptible de auxiliarnos en nuestro empeño. Podemos arriesgarnos y aportar las soluciones ofrecidas por otras jurisdicciones internacionales también estructuradas en Salas, pero aquéllas no resultan de fácil transposición para resolver nuestro problema por dos razones principalmente: (1) la escasa semejanza objetiva entre las Salas de los distintos Tribunales Internacionales y las Salas *ad hoc* de la CIJ, y (2) las soluciones que estas jurisdicciones internacionales ofrecen a la cuestión planteada cuentan con fundamentos jurídicos normativos o jurisprudenciales de los que carece la CIJ.

Una rúbrica de conclusiones pone fin a este trabajo, que se complementa con las preceptivas referencias documentales y bibliográficas y con dos apéndices, uno biográfico de los miembros de las Salas *ad hoc*, y otro documental.

Capítulo Primero: **De las Salas de la CPJI a las Salas de la CIJ.**

La configuración actual de las Salas de la CIJ es el resultado de un proceso evolutivo en el que se pueden distinguir varias etapas. La primera de ellas corresponde a las Salas de la CPJI con sus sucesivas modificaciones. La segunda comienza tras la Segunda Guerra Mundial con la creación de la CIJ y la previsión de las Salas *ad hoc*, y termina el 1 de julio de 1978, fecha de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la CIJ (aunque también podría adelantarse a 1972, año en el que ya se modificó el Reglamento de la Corte en términos que luego reprodujo -y consolidó- el Reglamento de 1978). Se inicia entonces la tercera de las etapas, caracterizada por la potenciación reglamentaria de las Salas *ad hoc*.

Las Salas de la CPJI¹ -como comprobaremos, poco tienen que ver con las actuales Salas *ad hoc*-, resultaron un foro de solución judicial de controversias internacionales prácticamente ignorado por los Estados. De los 66 conflictos que se presentaron a la Corte², tan sólo uno se sometió a la Sala de Procedimiento Sumario. Su objeto fue la interpretación de algunos preceptos del Tratado de Neuilly de 27 de noviembre de 1919³, dando el fallo

¹ La presentación de la primera etapa histórica se ha basado -dada la escasez de estudios monográficos sobre el tema-, en obras generales sobre la CPJI y, fundamentalmente, en los propios textos reguladores de la CPJI: Estatutos -de 1920 en CPJI Serie D, núm. 1, 1ª ed., 1926, pp. 7-27; y 1936 en CPJI Serie D, núm. 1, 4ª ed., 1940, pp. 13-30- y Reglamentos -de 1922, en CPJI Serie D, núm. 1, 1ª ed., 1926, pp. 66-82; 1926 en CPJI Serie D... *ibid.* pp. 33-65 y 1936 en CPJI Serie D, 4ª ed., 1940, pp. 31-61-, así como en las actas de las sesiones de modificaciones reglamentarias de 1926 y 1936 -CPJI Serie D núm. 2, addendum núm. 1, 2, 3 y 4. Es necesario subrayar el extraordinario interés que poseen los últimos textos citados, debido a que contienen las opiniones doctrinales emitidas por los miembros de la Corte sobre aspectos controvertidos de la regulación de la CPJI-.

² En 18 años se presentaron 66 casos, 38 de ellos de carácter contencioso y 28 consultivos, emitiendo la Corte 32 Sentencias y 27 opiniones. *Vid.* CPJI Séries A/B.

³ Art. 179 parte IX, sección IV, anexo, parágrafo 4º - *Vid.* en CPJI, Série C, nº6, y la Sentencia en CPJI Série A, nº 3- en el asunto del *Tratado de Neuilly*. En concreto se formularon dos cuestiones a la Sala: si conforme a dicho texto (1) eran admisibles las reclamaciones basadas

dictado por la Sala ocasión a un recurso interpretativo. Este texto convencional dió lugar, pues, a los dos únicos fallos que una Sala emitió mientras existió la Corte Permanente -Sentencias nº 3 y 4 de la CPJI⁴-. Asimismo, la Sentencia número 3 dió lugar al primer recurso interpretativo interpuesto ante la Corte.

El resultado tan pobre de las Salas de la CPJI se debió en gran medida a su propia regulación, que adolecía de múltiples lagunas, como más adelante veremos.

La segunda de las etapas señaladas comienza tras la Segunda Guerra Mundial. En ella encontramos la concepción inicial de Salas de la CIJ⁵. La relación existente entre esta Corte y su predecesora, la CPJI, es de «continuidad» con carácter general, aunque el Estatuto de la CIJ presenta suficientes modificaciones en lo que a las Salas se refiere, para que podamos considerar las disposiciones relativas a estas formaciones extraordinarias como una excepción al continuismo predicado. Sin embargo, a pesar de las modificaciones introducidas, las Salas tuvieron en este período peor fortuna aún que sus predecesoras, ya que no se sometió a su conocimiento controversia alguna.

Esta segunda etapa se cierra en 1978 con la entrada en vigor -el 1 de julio- del nuevo Reglamento de la CIJ, aprobado el 14 de abril anterior. Como se ha indicado *supra*, antes de esta fecha, en 1972, se había producido una primera modificación reglamentaria, concebida con carácter transitorio.

en actos cometidos por las tropas búlgaras fuera de su territorio; y, (2) si resultaba aplicable también a las personas y no sólo a sus bienes, derechos e intereses.

⁴ Vid. en CPJI Serie A.

⁵ La derivada del Estatuto de 26 de junio de 1945 y del Reglamento de 6 de mayo de 1946. Vid. ambos textos en CIJ *Acles and Documents concerning the Organization of the Court* núm. 1, 2eme.ed., Mayo 1947, pp. 37-52 y 54-83 respectivamente.

fruto temprano de la profunda revisión del Reglamento de la Corte emprendida en 1967.

Ya con el nuevo Reglamento vigente, en 1982, se sometió a conocimiento de una Sala *ad hoc* de la CIJ una controversia entre Canadá y Estados Unidos para la *delimitación de la frontera marítima en el Golfo de Maine*⁶. Tras este primer asunto, se constituyeron tres Salas *ad hoc* más de la

⁶ Sobre esta controversia existe numerosa bibliografía, entre otros pueden consultarse: L.M. ALEXANDER *The Gulf of Maine Case: An International Discussion*, Nueva York, 1988; Hungdah CHIU: "The Problem of Delimiting the Maritime Boundary between the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf of Opposite States", en R.St.J. MACDONALD (ed.) *Essays in honour of Wang TIEYA*, Dordrecht, 1994, pp. 181-190; J. COOPER "Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area", en *Ocean Development and International Law Journal*, 1986-16, pp. 59 y ss.; E. DECAUX "L'arrêt de la chambre de la Cour Internationale de Justice sur l'affaire de la délimitation de la frontière maritime dans le Golfe du Maine (Canada/Etats-Unis) arrêt du 12 octobre 1984" en *AFDI*, 1984, pp. 304 y ss.; N.P. DUNNING "Boundary Delimitation in the Gulf of Maine: implications for the Future of a Resource Area", en *Ocean yearbook*, 1986-6, pp. 390 y ss.; M. B. FELDMAN & D. COLSON "The Maritime Boundaries of the United States" en *AJIL*, 1981, vol.75 n°4, pp. 729 y ss.; G. GUYOMAR "La constitution au sein de la Cour Internationale de Justice d'une chambre chargée de régler le différend de frontières maritimes entre les Etats-Unis et le Canada" en *AFDI*, 1981, p.214 y ss.; L.H. LEGAULT "A Line for all uses: The Gulf of Maine Boundary Revisited", en *International Journal*, XL, 1985, pp. 461 y ss.; L.H. LEGAULT & D.M. McRAE "The Gulf of Maine" en *CYIL*, pp. 267 y ss.; D.M. McRAE "Adjudication of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine", en *CYIL*, 1979, p. 292 y ss.; D.M. McRAE "Proportionality and the Gulf of Maine Maritime Boundary Dispute" en *CYIL*, 1981, p. 287 y ss.; D.M. McRAE "Gulf of Maine Case (1984)", en D. PHARAND & V. LEANZA (ed.) *The Continental Shelf and the Exclusive Economic Zone*, Dordrecht, 1993, pp.119-127; E. McWHINNEY "Special Chambers within the International Court of Justice. The Preliminary Procedural aspect of the Gulf of Maine case" en *SJIL&C*, 12, 1985, p. 1 y ss.; P. MENGOZZI "La funzione e i caratteri dell'acquiescenza e del riconoscimento nella pronuncia che ha peso la Camera Speciale della Corte Internazionale di Giustizia nel caso del Golfo del Maine", en B. VUKAS (ed.) *The Legal Regime of Enclosed or semi-enclosed seas: The Particular Case of the Mediterranean*, Zagreb, 1988; L.D.M. NELSON "The Roles of Equity in the Delimitation of Maritime Boundaries", en *AJIL*, 1990, vol. 84, n°4, pp. 837 y ss.; I. RAILEANU "Equity in Maritime Boundary Delimitations: *The Gulf of Maine Case*", en *HL&CLR*, 1991-3, vol. 14, pp. 669-711; Sang-Myon RHEE "Equitable Solutions to the Maritime Boundary Dispute Between the United States and Canada in the Gulf of Maine" en *AJIL*, julio 1981, vol. 75, n°3, pp. 590 y ss.; D.R. ROBINSON, D.A. COLSON & B.C. RASHKOW "Some Perspectives on Adjudicating before the World Court: The Gulf of Maine Case" en *AJIL*, 1985, vol. 79, n°3, pp. 578 y ss.; J. SCHNEIDER "The Gulf of Maine Case: The Nature of an Equitable Result" *AJIL*, 1985, vol. 79, n°3, pp. 539 y ss.; A.F. SHELLEY "Law of the Sea: Delimitation of the Gulf of Maine", en *HJIL*, 1985, vol. 26, pp. 646 y ss.; L. SICO "Les addaires Tunisie/Libie (1982); Guinée/Guinée-Bissau (1985) et Lybie/Tunisie (1985)", en D. PHARAND & V. LEANZA (ed.) *The Continental Shelf and the Exclusive Economic Zone*, Dordrecht, 1993, pp.133-141; N.T.TERRES "The Gulf of Maine Delimitation", en *MJIL&I*, 1985-1, vol.9, pp. 117-186; L. DE VORSEY & M.C. DE VORSEY "The World Court Decision in the Canada-United States Gulf of Maine Seaward Boundary Dispute: A Perspective From Historical Geography", en *Case Westerns Reserve Journal of International Law*, 1986 (18) pp. 415 y ss.; E. ZOLLER "La première constitution d'une chambre spéciale par la Cour Internationale de Justice: Observations sur l'Ordonnance du 20 janvier 1982" en *RGDIP*, vol. 86

Corte para conocer sendos conflictos, dos de ellos -como el caso del Golfo de Maine- de carácter fronterizo: La *diferencia fronteriza* entre Burkina Faso y Mali⁷ y la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre El Salvador y Honduras⁸. El único hasta el momento que no posee carácter fronterizo, es el caso relativo a la *Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-* entre Estados Unidos e Italia⁹

(1982), p.305-324. La Sentencia de 12 de octubre de 1984 está publicada en CIJ Recueil 1984, pp. 246 y ss.

⁷ Entre la variada bibliografía aparecida sobre esta controversia destacamos los siguientes estudios: G. BARRIE "Uti Possidetis Versus Self Determination and Modern International Law: In Africa the Chickens Are Coming Home to Roost", en Tijdskrift vir die Sud-Afrikaanse Reg, 1988-3, pp. 451-456; E. DECAUX "L'arrêt de la Chambre de la Cour Internationale de Justice dans l'affaire du différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) arrêt du 22 décembre 1986", en AFDI, 1986, t. XXXII, pp. 215-238; G. FISCHER "Les réactions devant l'arrêt de la CIJ concernant le Sud-Ouest africain" en AFDI, 1966, p. 144 y ss; J.C. GAUTRON "Création d'une Chambre au sein de la Cour Internationale de Justice. Mesures conservatoires et médiation dans le différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali. Ordonnance du 10 janvier 1986", en AFDI, 1986, t. XXXII; Mvumbi-di-Ngoma MAVUNGU Le règlement judiciaire des différends interétatiques en Afrique, Friburgo, 1992; G.J. NALDI "The Case Concerning the Frontier Dispute between Burkina Faso and Mali: Provisional Measures of Protection", en ICLQ, vol. 35-4, 1986, pp. 971-975; G.J. NALDI "The Case Concerning the Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali): *Uti Possidetis* in an African Perspective", en ICLQ, vol. 36, 1987-4, pp. 893-903; J-P QUENEUDEC "Le Règlement du différend frontalier Burkina Faso/Mali par la Cour Internationale de Justice" en Revue Juridique et Politique, 1988.42, pp. 29-41; L.I. SANCHEZ RODRIGUEZ "*Uti possidetis*: la reactualización jurisprudencial de un viejo principio (a propósito de la Sentencia del TIJ -Sala- en el asunto Burkina Faso/República de Malí)", en REDI, 1988-2, vol. XL, pp. 121-151. Vid. la Sentencia de 22 de diciembre de 1986 en CIJ Recueil, 1986, pp. 554 y ss.

⁸ Puede consultarse gran variedad de estudios sobre este asunto, entre ellos, los siguientes: M.A. BLEICHERT, "The Effectiveness of Voluntary Jurisdiction in the International Court of Justice: El Salvador v. Honduras, A Case in Point", en FILJ, 1992-1993, pp.799-847; E. DECAUX "Le différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (el Salvador/Honduras), arrêt de la Chambre de la C.I.J. du 11 septembre 1992. La délimitation terrestre", en AFDI, 1992, vol. XXXVIII, pp.393-426; C.A. HARTZENBUSCH, "International Litigation: Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras) Gen. No.75, 1992 I.C.J.-(Judgment of Sept.11)(Nicar.intervening)", en HJIL, 1993, vol. 34, pp.241-257; M. G. KOHEN "La requête à fin d'intervention du Nicaragua dans l'affaire du différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras). L'ordonnance de la Cour du 28 février 1990, et l'arrêt de la Chambre du 13 septembre 1990" en AFDI, 1990, p.343 y ss; B. KWIATKOWSKA "Judge Shigeru Oda's Opinion in Law-of-the- Sea Cases: Equitable Maritime Boundary Delimitation", en GYIL, 1993, vol. 36, pp. 225-294; L. LUCCHINI "Le différend entre le Honduras et El Salvador devant la C.I.J. Aspects insulaires et maritimes", en AFDI, 1992, vol. XXXVIII, pp. 427-459; G. MARTINEZ BLANCO Enfoque histórico y jurídico de la controversia limítrofe entre Honduras y El Salvador, Tegucigalpa, 1991; J.J. QUINTANA "The intervention by Nicaragua in the case between El Salvador and Honduras before an *ad hoc* chamber of the International Court of Justice" en NILR, 1991, pp. 199-208; S.R. RATNER "Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras), Application to Intervene, 1990 ICJ Rep. 92, 29 ILM 1345 (1990)" en AJIL, vol. 85, 1991-4, pp. 680-686; R. RIQUELME CORTADO "Las claves de la limitada autorización de intervención de Nicaragua en la controversia insular y marítima entre Honduras y El Salvador (Sentencia de la CIJ (Sala) de 13 de septiembre de 1990), en REDI, vol. XLIV, 1992.2, p. 87; R. RIQUELME CORTADO La intervención de terceros Estados en el proceso internacional, Tecnos

A efectos de este estudio entendemos concluida la consideración *histórica* de las Salas *ad hoc*¹⁰ en el momento en que empiezan a funcionar con normalidad, es decir en 1982, cuando se produce la primera aplicación de las nuevas disposiciones introducidas en el Nuevo Reglamento de 1978.

Las causas del éxito de las Salas *ad hoc*, que se insertan *ex novo* en 1945 en el Estatuto de la CIJ, pueden resumirse en dos, (1) no comparten con las otras Salas previstas por este texto el carácter de *preconstitución*, sino que se constituyen para cada caso concreto, siendo por tanto sus miembros elegidos para conocer del asunto que se plantea. Este hecho podría implicar una desventaja en la medida en que la preconstitución tiene a su favor que las partes conocen *a priori* la composición del tribunal a cuyo conocimiento someten el arreglo de una controversia; sin embargo se ha trocado en una de sus principales ventajas porque (2) se permite a las partes una mayor intervención en múltiples aspectos del procedimiento, en particular en la

1993; I. SCOBIE "The International Court of Justice and the Gulf of Fonseca. When Two Implies Three but Entails One", en MP, 1994 (3), vol. 18, pp. 249-262; A.C. ZAMORA RODRIGUEZ *Intereses territoriales de Nicaragua: San Andrés y Providencia, Cayos, Golfo de Fonseca, Río San Juan, Managua*, 1995. *Vid.* la Sentencia de 11 de septiembre de 1992, en CIJ Recueil 1992, pp. 351 y ss.

⁹*Vid.* respecto de este asunto: M.H. ADLER "The exhaustion of the local remedies rule after the International Court of Justice's decision in ELSI", en ICLQ, 1990, t. 39-3, p. 641 y ss.; T.D. GILL "Elettronica Sicula S.p.A (ELSI) (United States v. Italy)", en AJIL, vol. 84, 1990-1, p. 249 y ss.; K.J. HAMROCK "The ELSI case: Toward an International Definition of «Arbitrary» Conduct", en IJLJ, 1992-3, pp. 837-864.; C. JEANCOLAS "L'arrêt Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) du 20 juillet 1989 (Etats-Unis d'Amérique c. Italie)" en RGDIP, 1990-3, p. 701 y ss.; P. JUILLARD "L'arrêt de la Cour Internationale de Justice (Chambre) du 20 juillet 1989 dans l'affaire de l'Elettronica Sicula (Etats-Unis c. Italie), procès sur un traité, ou procès d'un traité?", en AFDI, 1989, vol. XXXV, p. 276 y ss.; S.A. KUBIATOWSKI "The case of Elettronica Sicula S.p.A.: Toward Greater Protection of Shareholders'right in Foreign Investment" en CJIL, vol. 29, 1991-1, pp. 215 y ss.; F.A.MANN "Foreign investment in the International Court of Justice: The ELSI Case", en AJIL, 1992, vol. 86-1, pp. 92 y ss.; I. SEIDL-HOHENVELDERN "ELSI and Badger the two Raytheon Cases", en Rivista di Diritto Internazionale Privato e processuale, 1990, n°2, p. 261 y ss.; B. STERN "La protection diplomatique des investissements internationaux. De Barcelona Traction à Elettronica Sicula ou les glissements progressifs de l'analyse" en JDI, p. 897 y ss.; J.A. VIVES CHILLIDA "Las cuestiones relativas a la admisibilidad de la reclamación en la Sentencia Elettronica Sicula -S.p.A. (ELSI)(Estados Unidos/Italia)" en REDI, 1992-1, vol. XLIV, pp. 7 y ss. *Vid.* la Sentencia de 20 de julio de 1989, en CIJ Recueil, 1989, pp. 15 y ss.

¹⁰ El resto de las contempladas por el Estatuto de la CIJ de 1946 -la Sala de Procedimiento Sumario y las «especiales»-, no han tenido oportunidad de conocer de ningún asunto a lo largo de esta nueva etapa de su existencia.

composición de la Sala que va a conocer de la controversia. Aspecto éste potenciado con ocasión de la modificación reglamentaria de 1972 y posteriormente, con el nuevo Reglamento de 1978.

1. LAS SALAS DE LA CPJI.

1.1. Un intento fallido.

Es necesario recalcar el esfuerzo normativo realizado con la finalidad de acercar las Salas de la CPJI a los Estados, ya que su regulación fue uno de los aspectos modificado, con mayor o menor profundidad, en todas y cada una de las reformas sufridas por la Corte, tanto en su Estatuto como en su Reglamento.

La primera de ellas tuvo lugar en 1926 y afectó únicamente a las Salas de Procedimiento Sumario. Las novedades introducidas perseguían subsanar algunas de las deficiencias puestas de manifiesto en el único asunto del que conoció una Sala: las funciones de su Presidente y el número de memorias a depositar por cada parte. Sin embargo, las modificaciones introducidas en esta fecha fueron, en su mayor parte, de carácter formal. Con esta reforma se intentó potenciar el papel de las Salas de Procedimiento Sumario, desligándolas del Pleno e intentando la aplicabilidad de algunas de las características con que se concibieron las Salas «especiales».

Posteriormente, en 1936 se modificó el Estatuto de la CPJI, como consecuencia de un proceso de revisión emprendido en 1929¹¹.

La revisión del Estatuto resultaba imprescindible para la ambiciosa renovación reglamentaria que se pretendía llevar a cabo. De no haber actuado así, se podría haber incurrido en contradicciones o, para evitarlas, se habría limitado el alcance de las modificaciones reglamentarias que se proponían. En el tema que nos ocupa, la reforma del Reglamento también concluida en 1936¹² modificó algunas disposiciones dedicadas a las Salas de la Corte, unificando formalmente su regulación; pero no aportó cambios sustanciales¹³.

A fin de cuentas, todos los intentos que la Corte llevó a cabo para acercar las Salas a los Estados resultaron infructuosos. Las sucesivas reformas introducidas en los textos reguladores de la CPJI -tanto en las Salas de Procedimiento Sumario como en las «especiales»-, fueron intentos fallidos de dotar a las Salas de suficientes atractivos para que los Estados las contemplaran como un posible foro en el que dirimir sus controversias. Por todo

¹¹ En el mes de marzo de 1929 se había reunido en Ginebra un Comité de Juristas con el objeto de elaborar un informe que contuviera las modificaciones que convenía introducir en el Estatuto de la Corte. Luego, el Consejo de la Sociedad de Naciones convocó una Conferencia en la que se redactaron, conforme al informe anterior, las modificaciones del citado texto y un Protocolo, *concernant la revision du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale*, cuyo objeto era regular la entrada en vigor de las modificaciones estatutarias previstas. El mismo preveía (parágrafo quinto) su entrada en vigor en un plazo breve, pero establecía un período transitorio -hasta el 1º de enero de 1931-, durante el cual la Corte continuaría funcionando de acuerdo con el Estatuto de 1920. En la *Résolution relative à la revision du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale* de 14 de septiembre de 1929, la Asamblea manifestó la adopción conjunta de los documentos mencionados y el deseo de que los gobiernos interesados hicieran todo lo posible para asegurar la entrada en vigor de las modificaciones del Estatuto antes de la siguiente sesión de la Asamblea. *Vid.* CPJI Séries D, nº1, pp. 8-10. A pesar de todo hubo de esperarse hasta el 1º de febrero de 1936 para la entrada en vigor del Estatuto revisado.

¹² Si el nuevo Estatuto entró en vigor el primero de febrero de 1936, el 11 de marzo del mismo año -apenas un mes más tarde-, lo hizo el nuevo Reglamento.

¹³ En lo que a composición de las Salas se refiere, se condensaron los arts. 14 y 15 de los Reglamentos de 1922 y 1926 en uno sólo, el art. 24, aunque el contenido se mantuvo sustancialmente. En el Reglamento de 1936 se reunieron en una única Sección los aspectos procedimentales relativos a las Salas, que en los Reglamentos de 1922 y 1926 aparecían en dos Secciones -Sección B «procedimiento ante la Corte y las Salas especiales» y Sección C «procedimiento sumario»-.

ello, esta institución de las Salas de la CPJI, a lo largo de toda su existencia mereció el calificativo de «incomprendida».

1.2. Tipología.

La CPJI, al igual que la CIJ, únicamente ejercía sus funciones constituida en sesión plenaria o en las Salas -art. 25-, expresamente previstas en su Estatuto -arts. 26, 27 y 29-. Lo primero es lo normal; excepcional lo segundo. Las Salas compartían en época de la CPJI con el Pleno su carácter de órgano judicial preconstituido y permanente.

El Estatuto contempla dos tipos distintos de Salas: las que denomina «especiales» -arts. 26 y 27- y la de *procedimiento sumario* -art. 29-. Lo que en realidad las distingue es la especialización técnica de las primeras, característica que sirve de nexo de unión entre los dos subtipos concebidos dentro de aquéllas: para *asuntos laborales* uno, y de *tránsito y comunicaciones*, otro. Si bien es cierto que entre ellos no puede predicarse la identidad, guardan grandes semejanzas. En la regulación de ambas se contempla una limitación **ratione materiae** respecto de los litigios cuya solución les podía ser solicitada.

Los textos reguladores de la CPJI emplean la denominación de «Salas especiales». Nosotros hubieramos optado por calificarlas como «especializadas» por distintos motivos. Según la calificación de Salas de tribunales internacionales realizada por A. PILLEPICH, por Salas «especiales» deben entenderse tanto las que así se llaman como las de Procedimiento

Sumario¹⁴. Ello se debe a que los rasgos que han de reunir las Salas denominadas «especiales» son comunes a los dos tipos de Salas que contempla el Estatuto: (1) su funcionamiento a instancia de las partes en el conflicto; (2) tanto su composición como su duración se encuentran bajo el control del tribunal; (3) no resulta posible el reenvío del asunto al pleno; y (4) las Salas únicamente conocerán de la jurisdicción contenciosa, dado que el art. 71 del Reglamento¹⁵ considera que las opiniones consultivas se emiten tras la deliberación de la Corte reunida en sesión Plenaria.

A pesar de ello, utilizaremos la misma terminología que emplean los textos legales reguladores de la institución que nos ocupa, aunque entrecomillándola.

Por otra parte, persiguiendo una mayor claridad en la exposición de los sucesivos subepígrafes, se ha optado allí donde ha parecido necesario para una mejor comprensión, por una división interna de los mismos atendiendo a un criterio cronológico, estructurado en dos tramos: El primero de ellos, desde el nacimiento de la CPJI hasta 1936 -fecha de la entrada en vigor del segundo de sus Estatutos y del tercero de sus Reglamentos-; el segundo, este último año hasta la desaparición de la CPJI.

¹⁴ A. PILLEPICH "Les Chambres" en *La Juridiction Internationale Permanente*. Paris 1987, p. 45 a 72.

¹⁵ El de 1922 y 1926 y, en el mismo sentido, el 84.1 del Reglamento de 1936.

1.2.1. Las Salas de Procedimiento Sumario.

Las Salas de Procedimiento Sumario de la CPJI se concebían como formaciones reducidas de la Corte -primero de tres¹⁶ y más tarde de cinco miembros-, creadas para tramitar de manera abreviada aquellos conflictos que las partes sometieran a su conocimiento.

La introducción de un procedimiento sumario en el Estatuto de la CPJI de 1920 no puede considerarse novedosa, dado que éste ya existía en la Convención de La Haya de 1907¹⁷. Algunos de sus rasgos se insertan en las posteriores Salas de Procedimiento Sumario de la CPJI¹⁸, entre ellos el número de miembros -tres hasta la reforma del Estatuto de 1936-, o la necesidad de demanda de las partes para que conozcan de una controversia.

En cuanto a las diferencias, cabe indicar que en la Convención de La Haya de 1907 se preveía como medio para obtener la sumariedad del procedimiento la ausencia de fase oral, dejándose **a decisión del tribunal** la posible reinserción de la misma en el procedimiento en cuestión. La Sala de Procedimiento Sumario de la CPJI no comparte en su totalidad estos términos, ya que como veremos al estudiar el procedimiento ante este tipo de Salas, la fase oral tendrá lugar siempre que la Sala la considere necesaria, *salvo que*

¹⁶ Parece prohibirse su constitución con un número inferior al señalado, pero no se encuentra disposición alguna en sentido contrario -a diferencia de lo que ocurre con las Salas «especiales» a las que expresamente se les impide conocer con un número de miembros superior a cinco (Vid. art. 15 Regls. 1922 y 1926).

¹⁷ Concretamente en la Parte IV Capítulo IV de la misma, bajo la rúbrica «Del procedimiento sumario del arbitraje», artículos 86 a 90.

¹⁸ En este sentido entre otros N. SINGH *The Role and Record of the International Court of Justice*, Dordrecht 1989, p. 107; A. PILLEPICH op. cit., p.54.

las partes de común acuerdo se opongan a ello. Tampoco encontramos coincidencia en cuanto a la figura del Juez *ad hoc*. En el texto de 1907 se permitía la elección de Jueces de este tipo para las formaciones que nos ocupan, mientras que en los primeros Reglamentos de la CPJI -de 1922 y 1926-, no existe disposición alguna que ampare dicha posibilidad para estas Salas.

Podemos apuntar aquí, como más adelante confirmaremos (*Vid.* apartado 1.3 de este Capítulo), que si bien las Salas de Procedimiento Sumario reúnen algunas características propias de las Salas «especiales»¹⁹, también cuentan con otras que las aproximan más al Pleno de la Corte²⁰. De ahí que haya de subrayarse el carácter híbrido de la Sala de Procedimiento Sumario, a medio camino entre las Salas «especiales» *stricto sensu* y el Pleno de la Corte.

La doctrina no se ha mostrado uniforme acerca del rasgo definidor de la sumariedad del procedimiento, proponiendo distintas aproximaciones al mismo, como la rapidez²¹ la simplificación o el número reducido de miembros que componen la Sala²², aunque en contra de esta última opinión se elevan voces que manifiestan no comprender el motivo por el que se establece

19 Como su carácter de preconstitución y permanencia y algunos trámites procesales. No obstante, en un primer momento -hasta la reforma del Estatuto- parecen prevalecer las diferencias entre ellas. En las Salas de Procedimiento Sumario, por ejemplo, no podían designarse Jueces *ad hoc*, el número de Jueces que las componían era inferior y su constitución era anual y no trienal.

20 Por ejemplo, son las únicas Salas a las que reglamentariamente se reconocía la facultad de poder dictar Sentencias de la Corte (art. 70).

21 En este sentido se expresó el Juez colombiano Sr. GUERRERO en la 28ª sesión de reforma del Reglamento de 27 de febrero de 1935, en CPJI, Serie D n°2, 3º add., p. 363.

22 De esta manera se pronunció el Juez alemán Sr. SCHÜCKING en la misma sesión citada en la nota anterior. Además R. OSTRIHANSKY op. cit. p. 43, señala lo acertado de la relación entre el reducido tribunal y el procedimiento.

automáticamente la relación causa-efecto entre la sumariedad del procedimiento y la composición reducida de la Sala²³.

Respecto de este tipo de Salas pueden señalarse, entre otras, tres cuestiones conflictivas: asesores técnicos, Jueces *ad hoc* y la aplicabilidad del art. 9 del Estatuto después de su reforma en 1936, aspectos éstos que trataremos más adelante -en el epígrafe 1.2. relativo a la formación de las Salas-.

A pesar de los problemas que suscitan, fue éste el único tipo de Sala a cuyo conocimiento se sometió algún asunto en los veinte años de vigencia de la CPJI, ya que como se indicó *supra* emitió dos Sentencias²⁴. Tres años después de su último fallo, con ocasión del asunto de los *Préstamos Serbios*, se contempló una posible intervención de la Sala de Procedimiento Sumario. En efecto, sometido este asunto al conocimiento de la Corte, el *Greffier* Sr. HAMMARSKJÖLD propuso, dada la previsible imposibilidad de reunir a los miembros del Pleno antes del año siguiente, que el asunto fuera solucionado por esta formación²⁵, pero el agente del gobierno yugoslavo, Sr. J. SPASSOÏEVITCH, respondió negativamente a la propuesta del *Greffier*, en los siguientes términos:

²³ Así el Juez italiano Sr. ANZILOTTI, en la vigesimosexta sesión para la modificación del Reglamento de la CPJI, de 27 de febrero de 1935, en CPJI, Serie D nº2 3º add., p. 364. FROMAGEOT incluso -en el mismo foro- consideró como causa del escaso éxito obtenido por estas Salas, el número restringido de Jueces que las componían.

²⁴ En la primera de ellas interpretó algunos preceptos del Tratado de Neuilly y en la segunda, resolvió un recurso, interpuesto al fallo anterior. Asuntos nº 3 y 4 de la CPJI. *Vid.* en CPJI Série A, nº3 y 4.

²⁵ Por telegrama fechado en La Haya el 15 de noviembre de 1928. CPJI, Serie C, nº 16 III, p. 792

«L'importance de cette affaire est vitale pour notre nation, et celle-ci n'approuverait pas son Gouvernement d'accepter sur pareil sujet la procédure sommaire»²⁶.

Se desvelaba, con esta respuesta, la categoría de asuntos para los que, a su entender, resultaba adecuado el Procedimiento Sumario. Esta idea -la de que la Sala se ocupara de asuntos de menor interés, dejando los «importantes» al Pleno- era sin duda compartida por la generalidad de Estados que formaban la Sociedad Internacional de la época e implicaría el fracaso de la Sala: siempre que nos encontremos ante intereses estatales no hay asuntos de escasa importancia.

Por otra parte, en febrero de 1935, en el curso de la trigésimocuarta sesión ordinaria de la Corte, la Sala de Procedimiento Sumario recibió una solicitud de los contratistas elegidos para la construcción de los nuevos edificios de la Sociedad de Naciones, por la que instaban a esta formación la designación de los miembros de un tribunal arbitral que resolviera un conflicto aparecido entre los mencionados contratistas y la citada Organización Internacional. Posteriormente, el *Greffier* de la Corte, A. HAMMARSKJOLD, transmitió a las partes la sugerencia de la Sala de Procedimiento Sumario para que resolvieran la diferencia en un foro distinto, indicación que aceptaron, llevándola a efecto en mayo del mismo año²⁷.

²⁶ Telegrama de 16 de noviembre de 1928, CPJI, Serie C, nº 16 III, p. 793.

²⁷ El 27 de mayo de 1935, *Vid.* CPJI, Serie E nº 11, p. 152. La noticia de esta solicitud la encontramos en una sección dedicada a «otras actividades» de la Corte, distintas tanto de la competencia contenciosa como consultiva. Evidentemente la competencia de la Sala para conocer de esta diferencia es de carácter voluntario, puesto que no deriva del Estatuto, sino de un acuerdo particular celebrado entre la Sociedad de Naciones y los contratistas. Estamos ante unos particulares que carecen de legitimación para accionar ante la Corte. Tal y como se indica en CPJI Series E, nº10, p. 164, en cuanto no existe ninguna obligación jurídica de tramitar solicitudes de estas características, su aceptación debe ser opcional para la Corte.

1.2.2. Las Salas «especiales».

a) Estatuto de 1920 y Reglamento de 1922 -modificado en 1926-.

A diferencia de las de Procedimiento Sumario, la inserción en el Estatuto de la CPJI de unas Salas cuyo objeto se encontraba materialmente limitado sí que suponía una novedad²⁸. Bajo la categoría genérica de Salas «especiales» se encuentran dos Salas distintas: *laborales* y de *tránsito y comunicaciones*. La especialización técnica las perfila como subtipos de la categoría señalada. Así han sido tratadas tanto por los textos reguladores de esta institución como por la doctrina.

Estas Salas «especiales» de la CPJI se concibieron como formaciones de la Corte de cinco miembros. Su finalidad era resolver aquellas controversias cuyo objeto versara sobre materia laboral o de tránsito y comunicaciones, siempre que su conocimiento les fuera solicitado por todas las partes en el conflicto, de mutuo acuerdo o en virtud de alguna cláusula convencional vigente entre ellas.

La regulación de este tipo de Salas plantea serias dudas en múltiples aspectos, desde la relativa a las funciones y atribuciones de su Presidente hasta el valor jurídico de las Sentencias que hubieran podido emitir. Las normas que perfilan la institución que nos ocupa adolecen de múltiples

²⁸ La Conferencia de La Haya de 1907, contiene una única referencia a la especialización técnica. Es la relativa a los asesores técnicos. En ella se expresa la necesidad en algunos casos de «...*hommes speciaux...qui auront les connaissances spéciales ou techniques indispensables pour l'appréciation du litige*», pero en ningún lugar se refiere a unas Salas que previsiblemente pudieran conocer de asuntos de este carácter.

lagunas legales²⁹ que, en un primer momento, pueden considerarse fruto de la imprevisión con que fueron añadidas al Estatuto de la Corte, a propuesta del Reino Unido³⁰.

Un aspecto problemático es el de la falta de previsión de *quorum* mínimo para este tipo de Salas³¹. La cuestión era: ¿qué ocurriría si el número de Jueces contemplado para la constitución de las Salas no se alcanzaba en el momento de conocer de una controversia, ni con los dos suplentes previstos?. El Reglamento -art. 15 de 1922 y 1926 y 24.5 de 1936- expresaba taxativamente la prohibición de que las Salas entrasen en funcionamiento con más de cinco miembros, sin aludir en ningún momento a otro tipo de limitación³²; de lo que se desprende la posibilidad de que la actuación de la

29 Lagunas que, por otra parte, no pudieron ser subsanadas ni por la práctica, inexistente, ni por las sucesivas reformas de Estatuto y Reglamento que, si bien cubrieron algunas de ellas, no fueron suficientes para conseguir el propósito deseado.

30 El argumento exculpativo de la imprevisión, únicamente resulta admisible respecto del Estatuto de 1920. Sin embargo, no puede aceptarse para los textos posteriores que regulan la citada institución -nos referimos tanto a los Reglamentos de 1922, 1926 y 1936, como al Estatuto de 1936-. En estos últimos las lagunas se mantienen, a pesar del tiempo transcurrido desde que en 1920 se introducen en el citado Estatuto hasta que se llevan a cabo las revisiones señaladas.

31 En este sentido manifestó su opinión el Greffier, Sr. HAMMARSKJÖLD, en la tercera sesión preparatoria del Reglamento de 11 de marzo de 1936, que tuvo lugar el 17 de mayo de 1934:

«...aucun quorum n'est prévu pour les chambres spéciales ...on peut en voir la preuve dans l'article 16 qui prévoit la possibilité de compléter les chambres en faisant appel aux juges qui n'en sont pas membres»

El subrayado es nuestro. Pretendemos con ello recalcar que A. HAMMARSKJÖLD se refería únicamente a las Salas «especiales», y no a las de Procedimiento Sumario, aunque el problema en cuestión podía de igual modo plantearse respecto de éstas y la solución que se adoptara aplicarse por analogía.

32 Hemos de tener en cuenta que la finalidad del art. 15 del Reglamento de 1922 al introducir el *quorum* máximo, era considerar el efecto de los Jueces *ad hoc* sobre la composición de la Sala. Por ello el número de miembros de una Sala «especial» no podía superar la cifra de cinco, incluidos los Jueces *ad hoc*. Por otra parte, el Reglamento de 1936 es el único que se refiere a los dos tipos de Salas, en lo que a número máximo de miembros se refiere, ya que los anteriores únicamente se dirigían a las «especiales».

Sala se desarrollase con un número de miembros inferior al máximo señalado por el Estatuto³³.

En último lugar, cabe señalar la incertidumbre -traducida en inseguridad jurídica- por defecto de regulación, en que estas Salas se encuentran inmersas, siendo éste un rasgo en cierta medida compartido con las Salas de Procedimiento Sumario. Esta incertidumbre es una de las causas -si no la única, sí al menos la más importante-, de que los Estados a la hora de someter la solución de sus conflictos a un método de arreglo judicial las ignorasen, prefiriendo acudir directamente al Pleno, cuya regulación resultaba mucho más completa³⁴.

En el primer asunto de carácter contencioso cuyo conocimiento se sometió a la CPJI, el relativo al vapor *Wimbledon* ³⁵, fue la propia Corte quien se abstuvo voluntariamente de llamar la atención de las Partes acerca de la posibilidad de solucionar su controversia en una Sala «especial» sobre tránsito

³³ De ser así lo importante era que la Corte constituyese las Salas con la debida periodicidad y con el número de miembros señalado en los textos reguladores de esta institución, resultando indiferente que aquél se redujese una vez cumplido este límite.

³⁴ Cabe señalar una última característica diferenciadora entre los tipos genéricos de Salas -la de Procedimiento Sumario y las «especiales»-, como es la posibilidad de reunión de éstas últimas fuera de la Haya, que cuenta con un límite: ha de contarse con el consentimiento de las Partes en la controversia en cuestión. Esta previsión se encuentra en el art. 28 del Estatuto respecto de las Salas «especiales», sin que resulte aplicable ni a las de Procedimiento Sumario, ni al Pleno de la Corte. El tratamiento desigual en el aspecto que acabamos de apuntar, resulta difícilmente justificable. Podría intentarse dicha explicación en aras de la sumariedad del procedimiento, aunque, bien es cierto que sin demasiada convicción, cabría señalar que la posibilidad de reunión fuera de La Haya de las Salas «especiales» deriva de su competencia material. Dado que el objeto de las mismas son cuestiones laborales, de tránsito y comunicaciones, podría entenderse que en algunas ocasiones estos asuntos aconsejaban el desplazamiento.

³⁵ Reino Unido, Francia, Italia y Japón contra Alemania. El objeto de la controversia era que Alemania había impedido al vapor *Wimbledon* -inglés aunque fletado por una sociedad francesa- el libre acceso al canal de Kiel, transgrediendo el art. 380 del Tratado de Versalles, que impedía a Alemania aplicar a dicho canal la ordenanza de neutralidad que este país había promulgado en 1920.

y comunicaciones por entender que las cuestiones que subyacían a la controversia poseían un carácter jurídico y no técnico³⁶.

De esta apreciación de la Corte se infiere que estas Salas únicamente podrían conocer de controversias que tuvieran por objeto un conflicto laboral, de tránsito y comunicaciones **de carácter** primordialmente **técnico** más que **jurídico**. Como consecuencia, desde 1923 se condenaba a las Salas «especiales» al resultado que en definitiva obtuvieron: absoluto fracaso.

b) Estatuto y Reglamento de 1936.

La especialización técnica de las Salas «especiales» comportaba una limitación material de su competencia -controversias con objeto laboral³⁷, tránsito y comunicaciones-, materias éstas expresamente vedadas por el Reglamento -ex art. 35 último inciso- hasta la reforma del Estatuto en 1936, a las Salas de Procedimiento Sumario. Los arts. 26 y 27 del Estatuto de 1936, permiten expresamente el recurso a la Sala de Procedimiento Sumario en los

³⁶ Vid. CPJI Série D, núm.2, p. 36:

«After receipt of the application in the Wimbledon case, the Court decided on January 18th, 1923 that the attention of the Parties should not be drawn to the provisions of Article 27 of the Statute dealing with the competence of the Special Chamber for cases relating to transit and communications. The grounds for this decision appear to have been that it was held that only legal questions (the interpretation of a treaty), and no technical questions, were involved in the case before the Court, and that the clauses of the statute dealing with the special chamber and technical assessors contemplated transit cases possessing technical aspects.»

³⁷ Según el profesor FACHIRI op. cit., p. 51:

«Labour cases' within the meaning of article 26 are primarily those referred to in Part XIII (labour) of the Treaty of Versailles and the corresponding portions of the other Peace Treaties, but they are not necessarily confined to those cases; there may, it would seem be other international disputes arising out of labour questions»

casos que tengan por objeto diferencias en materia laboral, de tránsito o comunicaciones³⁸, supusieron, pues una novedad. Sin embargo, esta limitada potenciación de las Salas de Procedimiento Sumario, no tuvo el efecto deseado.

En este punto hemos de distinguir entre la limitación material activa y pasiva³⁹. El Profesor BLOCISZEWSKI, es partidario de ambos tipos de limitación material y, consecuentemente, considera que si las partes en una controversia no acuerdan someter el arreglo de la controversia a la Sala «especial» correspondiente, tendrán cerrado el acceso al Pleno, debiendo utilizar un procedimiento distinto del arreglo judicial previsto en el Estatuto de la CPJI⁴⁰. No podemos compartir la tesis indicada.

38 También varió en 1936 la redacción del art. 35 del Reglamento para admitir expresamente una posibilidad que en los anteriores Reglamentos se prohibía. Antes, en efecto, se imponía una limitación *ratione materiae* a las Salas de Procedimiento Sumario, que no podían conocer de aquellos conflictos cuyo objeto versara sobre materias reservadas a las Salas «especiales». Hasta la reforma de 1936, si las partes en una controversia sobre materia laboral, de tránsito o comunicaciones, deseaban que fuera solucionada por una Sala de la Corte, debían someter el conocimiento de la misma, obligatoriamente, a la Sala «especial» correspondiente, sin poder acudir para ello a la de Procedimiento Sumario.

39 Conforme a la limitación *activa* entendemos que las Salas «especiales» pueden conocer sólo de unas materias determinadas. Por el contrario, de una limitación *pasiva* deriva que únicamente estas formaciones y no otras podrán juzgar de los ámbitos materialmente reservados a su conocimiento. El primer tipo de limitación material -*activa*- se desprende de la redacción del Estatuto de la Corte, sin que pueda ser discutida, debido a que sólo pueden conocer de las categorías de asuntos expresamente indicados en este texto. Sin embargo, la existencia de una limitación *pasiva* suscita serias dudas, debido a que el conocimiento de la Corte acerca de una determinada controversia resulta doblemente dependiente, en primer lugar desde un punto de vista material, en cuanto al objeto de la diferencia, y en segundo lugar, desde un punto de vista subjetivo, ya que las partes en la controversia de común acuerdo habrán de someterlo a conocimiento de las Salas de la Corte. Por tanto si las Partes deciden acudir al Pleno -o a la Sala de Procedimiento Sumario después de 1936-, pueden libremente hacerlo, de lo que cabe deducir la inexistencia de una limitación *ratione materiae pasiva*.

40 BLOCISZEWSKI, *op. cit.* pp. 31, 35.

1.3. Formación.

1.3.1. Composición.

a) Estatuto de 1920 y Reglamento de 1922 -modificado en 1926-.

El Pleno de la CPJI se componía en sus inicios -art.3 del Estatuto de 1920- de quince miembros, once titulares y cuatro suplentes. La mayoría de ellos -su práctica totalidad- formaban parte también de las Salas constituidas en el seno de esta institución, siendo compatible pues la participación simultánea en ambas formaciones de la Corte.

El procedimiento de designación de los miembros de las Salas, tanto titulares como suplentes, resultaba considerablemente más sencillo que el trámite previsto para la Corte, eligiéndose entre y por los miembros de la Corte, que tenían, por tanto, derecho de sufragio activo y pasivo⁴¹.

De los textos reguladores de la CPJI se desprende que para formar parte de las Salas cabía la designación de miembros de la Corte

⁴¹ Ex . art. 14 de los de 1922 y 1926 y 24 de 1936, introduciéndose en este último un requisito adicional, no contemplado por sus predecesores, el del escrutinio secreto.

independientemente de su carácter de titular o suplente. Sin embargo, en la práctica no fue así. Siempre resultaron elegidos para ello Jueces titulares⁴².

En cuanto a las Salas «especiales», para la designación de sus miembros debían tenerse en cuenta distintos aspectos:

(a) El Estatuto -en sus artículos 26 y 27- expresamente exigía respeto al principio de su art. 9⁴³. Lo que se pretendía era que, cuando se planteara una cuestión ante la Corte, el fallo emitido respondiera realmente al espíritu jurídico *«de toutes les nations qui se tiennent en permanence au siège»*⁴⁴.

(b) El segundo de los aspectos a tener en cuenta, siempre que fuera compatible con el anterior, era el de las preferencias expresadas por los Jueces⁴⁵. Hemos de considerar que los términos la «expresión de sus

⁴² Vid. las composiciones de las sucesivas Salas, en CPJI Serie E, n°1 pp. 55-57; n°2 pp. 19-21; n°3 pp. 15-17; n°4 pp. 36-37; n°5 pp. 35-36; n°6 pp. 27-28; n°7 pp. 48-49; n°8 pp. 28-29; n°9 p. 25; n°10, p. 23; n°11 pp. 22-23; n°12 pp. 31-33.

⁴³ Art. 9: *«Dans toute élection, les électeurs auront en vue que les personnes appelées à faire partie de la Cour, non seulement réunissent individuellement les conditions requises, mais assurent dans l'ensemble la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde »*

⁴⁴ En este sentido se pronuncia V. BRUNS en «La Cour Permanente de Justice Internationale. Son organisation et sa compétence» R. des C., 1937-IV, t. 62, p. 564:

«...il ne pouvait entrer dans l'esprit du Comité de désigner les différents systèmes du droit international, c'est-à-dire les divergences sur la manière dont, tantôt les Européens, tantôt les Américains ou les Asiatiques, abordent les questions de droit international»

«...et ce qu'on voulait c'est qu'au moment où un système de droit est engagé dans un litige les autres systèmes de droit puissent en être immédiatement rapprochés, de manière que ce soit vraiment l'esprit juridique de toutes les nations qui se tiennent en permanence au siège».

⁴⁵ Ex. art. 14 del Reglamento hasta que con la reforma de 1936 dicha indicación desaparece. El conde ROSTWOROWSKI, en las sesiones preparatorias del nuevo Reglamento de 1936, se mostró partidario de una combinación del art.9 del Estatuto y las preferencias de los Jueces, por lo que tal expresión no implicaba respeto absoluto a las formuladas, sino sólo habrían de tenerse en cuenta cuando con ello no se transgrediera el citado art.9. Vid. en CPJI Series D, n°3, 2ª add. décima sesión de 10 de febrero de 1936, p. 518.

preferencias» tienen por objeto dar a conocer los especiales conocimientos de cada miembro de la Corte respecto de materias concretas⁴⁶. Ello con la finalidad de constituir este tipo de Salas con especialistas en las disciplinas cuyo conocimiento expresamente les encomienda el Estatuto.

La aceptación y aplicación estricta de la exigencia anterior conduciría por una parte a que, a pesar de la renovación trienal de su composición, las Salas siempre o casi siempre estarían formadas por los mismos miembros, debido a su necesaria especialización. Al existir un número reducido de candidatos elegibles, difícilmente se encontrarían más de cinco especializados en esas materias concretas, de modo que fuera factible una cierta renovación⁴⁷.

Por otra parte, la especialización de los miembros de las Salas comportaría condicionar la elección no sólo de éstos, sino también de la Corte, a la exigencia de que al menos cinco de ellos -o cuando menos tres, si tenemos en cuenta que para estas Salas se admiten los Jueces *ad hoc*- poseyeran especiales conocimientos sobre cada una de estas áreas de conocimiento -trabajo, tránsito y comunicaciones-. La especialización de los Jueces no restaría en ningún momento sentido a la figura de los asesores técnicos, ya que la función de éstos era la de informar a los miembros de la Sala sobre aspectos técnicos y no jurídicos de la controversia.

Las preferencias de los Jueces suscitan varias cuestiones, algunas de las cuales obtuvieron respuesta en las sesiones preparatorias del

⁴⁶ Por tanto, entendemos las preferencias a expresar como especialización técnica.

⁴⁷ De mantenerse el requisito de la especialización de los miembros de las Salas respectivas no tendría, por tanto, lugar una modificación real de su composición hasta que se procediera a la renovación de la Corte. De hecho, la elección de miembros de las Salas de la CPJI fueron en la mayoría de las ocasiones trámites formales, sin que su composición variara considerablemente.

Reglamento de 1936. En primer lugar, la de su pertinencia o no. Por una parte se encontraban los partidarios de suprimir dicha mención, fundamentando su parecer en la idea de evitar que un Juez pudiera ser excluido de la composición de una Sala por falta de votos, a pesar de haber expresado su deseo de participar en ella⁴⁸. Frente a ellos, el *Greffier* de la Corte -entonces el sueco Sr. HAMMARSKJÖLD-, estimaba necesario el mantenimiento de aquella condición.

De admitir la última opinión señalada, se planteaba la duda acerca de las preferencias que podrían expresarse. El *Greffier* consideraba oportuno que los Jueces manifestasen aquellas materias en las que poseían mayor experiencia. Sin embargo, el término «preferencia» posee un sentido más amplio⁴⁹. Para resolver la cuestión planteada, podría haberse considerado el criterio que el miembro francés de la Corte, Juez FROMAGEOT, defendió en las mismas sesiones respecto del mantenimiento del Juez *ad hoc*. Este Juez entendía la pertinencia del criterio *nacionalidad* como conexión necesaria entre el Estado que lo designa y la persona sobre la que recae dicha elección, estimando que la función de estos Jueces no era sino la de poner al corriente a la Corte de las peculiaridades locales, de los Estados que los han elegido⁵⁰. Utilizando este argumento, podemos subrayar que quien mejor conoce un sistema jurídico es un Juez formado en él. En consecuencia podría

⁴⁸ En este sentido se pronunció el vicepresidente de la Corte en esos momentos, el Juez colombiano Sr. GUERRERO. En la tercera sesión preparatoria del Reglamento del 11 de marzo de 1936, en CPJI Série D, n°2, 3° add., p. 18.

⁴⁹ Vid. 21ª edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, p. 1656: «preferencia. 2. Elección de una cosa o persona, entre varias, inclinación favorable o predilección hacia ella».

⁵⁰ El Juez francés Sr. FROMAGEOT, en la 3ª sesión de preparación del reglamento de 11 de marzo de 1936, CPJI, serie D n° 3, 2ª add. p. 18:

«...le système des juges ad hoc a été adopté après un long débat non pas simplement pour mettre un juge de plus sur le siège, mais afin que la Cour puisse être au courant des circonstances locales et puisse, dans ses décisions, éviter les expressions de nature à blesser les susceptibilités nationales...»

considerarse esta formación de los Jueces como especialización, y por ello como una preferencia a expresar en el momento adecuado⁵¹.

La última duda que plantea esta condición es acerca del momento y la forma de su emisión. A este respecto el Juez ANZILOTTI indicaba que la expresión de las preferencias debería producirse en el momento de la elección de la Sala en cuestión⁵².

b) Estatuto y Reglamento de 1936.

La entrada en vigor en 1936 del nuevo Estatuto de la CPJI -art.3- supuso el incremento del número de los Jueces titulares de la Corte hasta quince, desapareciendo los suplentes que preveía el texto anterior. Esto no supuso que los cuatro Jueces suplentes de la CPJI antes de esa fecha resultaran elegidos como titulares en 1936, la realidad fue la contraria, ya que ninguno de ellos se encontró en la formación designada para la Corte en aquella fecha⁵³.

⁵¹ Por otra parte, J.B.GOLDEN "The World Court: The Qualifications of the Judges", en *Columbia Journal of Law and Social Problems*, pp. 8 y ss, indica que es difícil considerar la nacionalidad como una cualificación.

⁵² En CPJI, Serie D, nº3 2º add., décima sesión -10 de febrero de 1936, pp. 513-521.

⁵³ En CPJI Serie E nº12, p. 23 se indica el nombre de los once Jueces titulares (HURST, GUERRERO, ROSTWOROWSKI, FROMAGEOT, DE BUSTAMANTE, ALTAMIRA, ANZILOTTI, URRUTIA, NEGULESCO, JONKHEER VAN EYSINGA y NAGAOKA). A continuación, se señala:

«Further, until February 1st, 1936, the date of the entry into force of the revised Statute, the Court also comprised the four following deputy-judges: REDLICH, DE MATTA, NOVACOVITCH and ERICH. These deputy-judges, who had been elected on september 25st 1930, had never been called upon to sit»

Ninguno de éstos figuró entre los miembros del Tribunal a partir de 1936.

Desaparecen, en consecuencia, los Jueces suplentes de la Corte. Sin embargo, en las Salas se conservan⁵⁴ con la intención de evitar la posibilidad de que el número de miembros de alguna Sala se redujera por debajo del mínimo inicialmente considerado. Pero estos Jueces suplentes en las Salas son evidente, miembros titulares de la CPJI.

Inicialmente las Salas de Procedimiento Sumario, eran formaciones de tres miembros, aunque posteriormente, en 1936 su número se elevó a cinco -número de Jueces que componían las Salas «especiales»-, elegidos anualmente. De la coincidencia entre el aumento de miembros titulares de la CPJI y el de los miembros de la Sala de Procedimiento Sumario cabría concluir que este último incremento fue el efecto de aquél⁵⁵; esa relación, sin embargo, no existe, puesto que no se altera el número total de miembros de la Corte, sino su estatuto jurídico y las Salas de la CPJI nunca se constituyeron con Jueces suplentes⁵⁶. El factor que favoreció realmente el incremento de los miembros de la Sala de Procedimiento Sumario, fue, sin duda, el interés por potenciar su utilización a través de la posibilidad de designar Jueces *ad hoc* en ellas.

Tras la entrada en vigor del Reglamento de 11 de marzo de 1936 desaparecen, tanto la exigencia expresa de respeto al art.9 del Estatuto como la indicación respecto de las preferencias de los Jueces, aunque únicamente

⁵⁴ Tanto para las Salas «especiales», como para la de Procedimiento Sumario se mantiene en su composición la previsión de designar dos suplentes.

⁵⁵ En este sentido, hemos de tener en cuenta que, para constituir tres Salas de cinco miembros cada una -permanentes y preconstituidas-, son necesarios al menos quince miembros. Sin embargo antes de producirse la mencionada reforma los Jueces de la Corte resultaban elegidos para más de una Sala. Podemos realizar distintas combinaciones al respecto, miembros del Pleno, de una Sala y suplente de otra, o bien formando parte de dos Salas, compartiendo estas tareas con las de miembro del Pleno. Si tomamos como ejemplo el periodo que transcurre entre 1922 y 1928 observamos que un miembro del Pleno lo era también de dos Salas -Sr. WEISS-, otro lo era además de dos Salas y suplente de una -HUBER-, y cuatro eran miembros de una Sala y suplente de otra -ALTAMIRA, Lord FINLAY, ANZILOTTI y HUBER-.

⁵⁶ *Vid.* en este sentido nota nº 42.

para las Salas de Procedimiento Sumario, ya que en el Estatuto de 1936 se mantiene la indicación para las Salas «especiales».

Aunque el punto fue debatido⁵⁷, la ubicación del artículo 9 del Estatuto, dentro del capítulo «*Organisation de la Cour*», sugiere, conforme a una interpretación sistemática, que sus previsiones únicamente se refieren a la elección de los miembros de la Corte por la Asamblea y el Consejo de la Sociedad de Naciones. Por otra parte, el objeto que persigue el citado precepto es mantener en la Corte la representación de los sistemas jurídicos del mundo, y no que las Salas -en cuanto formaciones reducidas de esta institución- deban de igual modo respetarlo, salvo que expresamente así se dispusiera en los textos reguladores de la Corte. En particular, por lo que hace a las Salas de Procedimiento Sumario, cabe argüir que la finalidad de la reforma, al omitir una referencia expresa al art.9 del Estatuto, era justamente la de facilitar la elección de los miembros de la Sala⁵⁸.

Por el contrario, las Salas «especiales» han de tener en cuenta la representación geográfica y de los distintos sistemas jurídicos, dado que expresamente lo dispone el Estatuto. Sin embargo, en este aspecto cabe

⁵⁷ En las sesiones de preparación del Reglamento de 1936, una de las cuestiones que suscitaron cierta polémica fue la del respeto al art. 9 en la formación de las Salas de Procedimiento Sumario. El Prof. URRUTIA, Juez colombiano, opinaba en aquella ocasión respecto de las Salas de Procedimiento Sumario:

«la nomination des juges de cette chambre doit répondre avec plus de raison encore que dans les chambres spéciales au principe de l'article 9».

El profesor NEGULESCO, por su parte, no compartía la argumentación aportada por el Prof. URRUTIA, ya que

«A l'article 29 du Statut qui s'occupe de la chambre du procédure sommaire, on ne trouve pas de renvoi analogue, parce que l'on a voulu laisser les mains libres à la Cour pour la désignation des membres de la chambre de procédure sommaire. Si donc l'on se réfère à l'article 9 en ce qui concerne la chambre de procédure sommaire, on va plus loin que le Statut lui-même»

⁵⁸ A diferencia de las Salas «especiales» cuya regulación estatutaria obligaba a respetar este principio, para las Salas de Procedimiento Sumario nunca existió estatutariamente esta exigencia.

subrayar que el precepto les resulta de difícil aplicación por el reducido número de miembros que componen estas formaciones.

En otro orden de cosas, en todos los tipos de Salas de la CPJI se eligen junto a los Jueces titulares sus suplentes. Sin embargo, igual que sucede con otros aspectos de su regulación, esta previsión no se encuentra -hasta 1936- en el mismo cuerpo normativo para los distintos tipos de Salas. Mientras en el caso de las Salas «especiales» son las disposiciones estatutarias, dirigidas a regular ambos subtipos de Salas, las que incluyen la previsión, en la Sala de Procedimiento Sumario la designación de suplentes fué prevista inicialmente en el art. 14 del Reglamento, hasta que con la modificación del Estatuto en 1936 pasó a tener también rango estatutario⁵⁹.

Por último, ha de indicarse que, una vez constituida, la Sala de Procedimiento Sumario no era susceptible de modificación, salvo por imposibilidad de alguno de sus Jueces -art. 15.2 Regl.-, en cuyo caso habría de ser sustituido por el primero de los suplentes. Este artículo especifica «*les chambres de procedure sommaire*», por lo que a *sensu contrario* cabe entender que las «especiales» (arts. 26 y 27 Est.) sí podían ser objeto de modificación. Además, la aparente omisión podía ser fruto de la posible designación de Jueces *ad hoc* para estas Salas. Prueba de ello es que cuando en 1936 se permitió la intervención de los Jueces *ad hoc* en las Salas de Procedimiento Sumario desapareció la previsión del art. 15.2 del Reglamento.

⁵⁹ En este texto se introduce la elección de Jueces suplentes para las Salas de Procedimiento Sumario en el único artículo que se dedica a esta formación: el 29. Los arts. 26 y 27 continúan disponiendo, igual que antes ocurría, la designación de aquellos en las Salas «especiales».

1.3.2. La Presidencia.

La figura del Presidente de las Salas de la CPJI plantea múltiples problemas. En primer lugar, es necesario indicar que el Presidente de cada Sala es elegido por la Corte en sesión plenaria, salvo que el Presidente o el Vicepresidente de la CPJI formaran parte de aquélla, en cuyo caso serían ellos quienes ostentasen dicho cargo, con preferencia del primero sobre el segundo, caso de ser ambos elegidos⁶⁰. Nos encontramos, por tanto, ante una elección que tiene lugar en el mismo foro en el que se designan dichos cargos para el Pleno -por los propios miembros de la Corte-. Sin embargo, uno y otros supuestos, abstractamente considerados, tienen una lectura distinta.

En el caso de la designación de Presidente de la Corte -ex. art. 9 Regl.-, es el propio órgano en el que ha de ejercer sus funciones quien decide la persona que va a presidirlo. Por el contrario, el de la Sala lo designa también la Corte en Pleno, donde también se encuentran los miembros de la Sala en cuestión, pero en amplia minoría numérica⁶¹. Por tanto, se observa una cierta vigilancia en algunos aspectos de la regulación de las Salas por parte del Pleno cuando, en definitiva, se trata de dos modos de funcionamiento independientes -uno ordinario y otro extraordinario- de la misma institución -ex. art. 25 del Estatuto-.

La regulación de la Presidencia de las Salas padece múltiples lagunas. El Reglamento de 1922 suscita la duda acerca de sus funciones para

⁶⁰ *Vid.* art. 14 de los Reglamentos 1922 y 1926 y art. 24.4 del de 1936.

⁶¹ Art. 14 último párrafo de los reglamentos de 1922 y 1926 y en el mismo sentido de los anteriores el art. 24.4 de la reforma de 1936.

todos los tipos de Sala. Tras la revisión llevada a cabo en 1926, esta cuestión se reduce a las «especiales», puesto que se insertan en el Reglamento -art. 68⁶²- las tareas que suponía el nombramiento de Presidente en las Salas de Procedimiento Sumario, algunas de las cuales ya se contemplaban en el texto anterior, aunque atribuidas de modo genérico al «Président» sin especificar a qué formación -Pleno o Sala- se refería⁶³.

En este punto podemos aplicar un criterio analógico y considerar que, en la medida en que ello sea posible y no se oponga a otras disposiciones, las funciones propias de los Presidentes de las Salas «especiales» serían las contenidas en los arts. 9 a 13 de los Reglamentos de 1922 y 1926, ya que el procedimiento a seguir ante ellas se encuentra bajo la denominación «*Procedimiento ante la Corte y las Salas especiales*»⁶⁴; por tanto, las funciones de los Presidentes de las Salas serían las previstas para el Presidente de la Corte cuando ésta actúa en su formación plenaria⁶⁵.

⁶² En este sentido se prevé en el citado artículo:

«... La Chambre, ou, si elle ne siège pas, son Président, fixe le délai du dépôt de la première pièce de procédure écrite prévue à l'article suivant»

«La Chambre est convoquée par son Président pour la date la plus rapprochée, suivant les exigences de la procédure»

⁶³ El art. 68 del Reglamento de 1926 contiene una regulación especial respecto de la norma general que rige la presidencia de las Salas en los arts. 9 a 13 del Reglamento. Así, el Presidente de la Corte notifica a los miembros de la Sala en cuestión la recepción de una demanda de sometimiento de un asunto a las Salas de Procedimiento Sumario (siendo ésta la única previsión que se contenía ya en el Reglamento de 1922). Una vez recibida dicha demanda, la propia Sala o su Presidente son quienes han de fijar el plazo de depósito de la primera pieza del procedimiento escrito y convocar la constitución de la Sala.

⁶⁴ En la sección B del Título I Capítulo II.

⁶⁵ En principio, podría interpretarse que cuando el Estatuto y el Reglamento se refieren a «*La Cour*» lo hacen tanto al Pleno como a las Salas, ya que ambas formaciones son la Corte y forman parte de ella. Sin embargo, ciertamente, cuando estos textos regulan «la Corte», se remiten a los quince miembros que forman parte de ella y que son los que componen el Pleno, aunque también formen parte de alguna/s de las Salas de la misma. Podemos interpretar ambos términos -Corte y Pleno- como sinónimos. El problema respecto del Presidente de las Salas resulta atenuado si tenemos en cuenta la remisión que el art. 67 de los Reglamentos de 1922 y 1926 realiza al procedimiento contencioso para las Salas de Procedimiento Sumario. Esta previsión en 1936 se hace extensiva a las Salas «especiales». No obstante, antes de realizarse esta remisión el procedimiento a seguir ante éstas se encontraba situado en el mismo título que

Con la reforma de 1936 quedaron subsanadas en cierta medida las lagunas respecto de las Salas «especiales», por la inserción en el Reglamento de una disposición de carácter general que vino a confirmar la solución a la que antes debía llegarse mediante un razonamiento analógico. Se trataba del art.71.4 que extendía la previsión antes contenida en exclusiva para la Sala de Procedimiento Sumario a las «especiales» «...*les pouvoirs du président de la Cour sont exercés dans cette affaire par le président de la Chambre*».

El asunto del *Tratado de Neuilly* tiene interés desde la perspectiva de la presidencia, puesto que en el momento de la constitución de la Sala formaba parte de la misma, el Presidente de la Corte -LODER-, por lo que ocupó dicho cargo en la Sala. Dos meses después de dictarse la primera Sentencia, Grecia interpuso un recurso interpretativo⁶⁶. En ese momento no había mediado la elección para renovar la Sala de Procedimiento Sumario, pero sí había cambiado el Presidente de la Corte, ahora el Juez HUBER, que también formaba parte de la Sala. A pesar de lo cual, se decidió el 3 de marzo de 1925 que LODER continuase en este cargo en el examen del recurso planteado. Esta conservación del cargo de Presidente puede considerarse una norma de cortesía fruto de una interpretación analógica del art. 13.3 del Estatuto de aplicación al Pleno de la Corte.

regulaba el procedimiento contencioso ante el Pleno de la Corte, por lo cual las disposiciones que contemplan los derechos subjetivos y obligaciones del presidente en dicho título habrían de entenderse extensivas a aquellas.

⁶⁶ *Vid.* en CPJI Serie E nº 3, p. 191.

1.3.3. Los Jueces *ad hoc*.

Junto a los Jueces, miembros ordinarios de la Corte cabe que participen en las Salas de la CPJI, Jueces *ad hoc*. El Estatuto no utiliza una calificación concreta, pero sí lo hacen los Reglamentos. Se trata de personas libremente designadas por uno -o los dos- Estados partes en una controversia -hasta el Estatuto de 1936 sólo podían hacerlo en las Salas «especiales»-, en el supuesto de que no existiera un Juez de su nacionalidad en el seno de la CPJI. En el caso de haberlo en el Pleno pero no en la Sala concreta a cuyo conocimiento se somete la diferencia será éste el que actúe como Juez *ad hoc*⁶⁷. Los así nombrados poseerán el estatuto jurídico de miembro de la Corte aunque, a diferencia de los Jueces del Pleno elegidos para formar parte de una Sala, sólo gozarán de aquél mientras dure el procedimiento concreto para cuyo conocimiento se les ha designado⁶⁸.

⁶⁷ Antes del Estatuto de 1936, la libertad con que se llevara a cabo la elección de este tipo de Jueces dependía de que en la lista de suplentes de la Corte existiera algún miembro de la nacionalidad del Estado que pretendía la designación de un Juez de este carácter⁶⁷. De haberlo, tendría preferencia, sólo en su defecto, el Juez *ad hoc*, habrá de ser designado teniendo en cuenta los arts. 4 y 5 del Estatuto -que luego veremos-. El límite que suponía la existencia de la lista de suplentes desaparece lógicamente con el nuevo Estatuto de 1936, al desaparecer esta categoría.

⁶⁸ Sobre Jueces *ad hoc* existe amplia bibliografía; entre ella, cabe indicar la siguiente: S.K. CHATTERJEE "The Role of the Ad-Hoc Judge in the International Court of Justice", en *IJL*, 1979-1, pp. 372-381; J.B. GOLDEN "The World Court: The Qualifications of the Judges", en *Columbia Journal of Law and Social Problems*, 1978, vol. 14-1, pp. 1-46; J.F. LACHAUME "Le juge «ad hoc»", en *RGDIP*, 1966, pp. 265-358; M. LACHS "A Few Thoughts on the Independence of Judges of the International Court of Justice", en *CJTL*, 1987, pp. 593-600; L. MILLAN MORO "El juez «ad hoc» en la Corte Internacional de Justicia", en *Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz*, 1990, pp. 213-258; D.D. NSEREKO "The International Court, Impartiality and Judges ad hoc", en *IJL*, 1973, nº13, pp. 207-230; - L.V. PROTT "The Role of the Judge of the International Court of Justice", en *RBDI*, 1974-2, vol. X, pp. 473-507; J.L. RENAULT *Le Juge ad hoc au sein de la Cour Internationale de Justice*, Tesis leída en Octubre de 1979 en la Universidad de Orleans; K. TANAKA "Independence of International Judges" en *Comunicazioni e studi*, vol. XV, 1975, pp. 855-871.

Se trata de una categoría de Jueces nacida a consecuencia de la aparición de la jurisdicción internacional preconstituida, pues no tenía sentido en el ámbito del arbitraje, dado que los Estados partes en la controversia eran los que determinaban directa o indirectamente la composición de los órganos arbitrales. De modo razonable, ningún Estado hubiera accedido a someter la solución de un conflicto a una Sala en cuya formación participase un nacional de su contraparte, sin que hubiera otro de su misma nacionalidad o tuviera la facultad de nombrar uno de su elección.

En el art. 31 del primer Estatuto de la CPJI no existía la posibilidad de nombrar un Juez *ad hoc* en las Salas, esta previsión se encontraba en los arts. 26 y 27 del mismo texto -que formulaba una remisión al art. 31 de este cuerpo normativo-, sin que esta facultad fuera predicable, por tanto, de las Salas de Procedimiento Sumario. Posteriormente, en el Estatuto de 1936 se amplía el alcance del art. 31 incluyéndose un apartado cuarto en el que se prevé expresamente la aplicación de esta disposición a todos los tipos de Salas.

Una vez elegido, el Presidente de la Sala pediría según los casos, a uno o dos de sus miembros, que cedieran sus asientos a los miembros de la Corte con nacionalidad de las partes -Jueces nacionales aunque designados *ad hoc* para el caso concreto-, y sólo en el supuesto de que ello no fuera posible -por inexistencia de miembros de tal nacionalidad, o porque, existiendo, no les resultase posible acudir a la Sala- se procedería a la incorporación de los Jueces elegidos libremente por las partes.

Los preceptos que el Estatuto contiene respecto de las Salas «especiales» incluyen una regla específica, distinta de la prevista en el art. 4 del Reglamento con carácter general, y que únicamente afecta al procedimiento ante el Pleno de la Corte. El citado art. 4 prevé que los Jueces elegidos *ad hoc*, no se contabilicen en el cómputo del *quorum*. Por el contrario,

en las Salas «especiales» los Jueces elegidos «*ad hoc*» sí se tienen en cuenta a estos efectos. Por ello, con independencia de la intervención o no de Jueces de este tipo, el número de miembros que componen esta formación será de cinco.

Según los primeros textos reguladores de esta institución, no parecía posible la designación de Jueces *ad hoc* para las Salas de procedimiento sumario⁶⁹. En los preceptos a ellas dedicados ni se contempla expresamente la posibilidad apuntada, ni existe remisión alguna al art. 31 del Estatuto de la CPJI. Este artículo, por otra parte, se dirige en todo momento al Pleno de la Corte, sin hacer ninguna referencia a las Salas.

El motivo de la existencia de una prohibición implícita de designación de Jueces *ad hoc* en las Salas de Procedimiento Sumario -hasta 1936- puede encontrarse en el reducido número de miembros que originariamente la formaban, dado que la repercusión de la presencia de un Juez nacional es mucho mayor en una Sala formada por tres miembros que en el Pleno⁷⁰, todo ello siempre haciendo abstracción de la imparcialidad e independencia que ha de presumirse en los Jueces, característica esencial señalada en el art.2 del Estatuto⁷¹.

Aunque la ampliación de los supuestos en los que procedía la designación de Juez *ad hoc* tenía por objeto fomentar el uso de las Salas estatutariamente previstas, el supuesto nunca se verificó. Curiosamente, la

⁶⁹ M. HAMMARSKJOLD -en la 28ª sesión de preparación del Reglamento. Vid. CPJI Série D, nº2, troisième addendum, p. 364-, señala esta imprevisión como causa de su escaso éxito. Argumento que es válido hasta 1936, aunque no a partir de entonces. Sin embargo, no es predicable de las Salas «especiales» para las que si existía esta posibilidad desde el inicio de la CPJI.

⁷⁰ Vid. L. MILLAN MORO, op. cit., p. 232.

⁷¹ El hecho de que se prevenga contra las posibles desviaciones que puedan producir los vínculos nacionales en el sentimiento de los Jueces ha de ser tomado como lo que es: una prevención.

única Sala que tuvo ocasión de conocer de un litigio fue una Sala de Procedimiento Sumario y en un período durante el cual no existía previsión alguna en este sentido respecto de ellas⁷².

1.3.4. Asesores técnicos⁷³.

El de los asesores técnicos es quizá el aspecto de la regulación de las Salas que más las distingue. Dependiendo del tipo de Sala, su elección resulta obligatoria (Sala para asuntos laborales) o facultativa (Sala de tránsito y comunicaciones), no previéndose su nombramiento para las Salas de Procedimiento Sumario.

Hasta la reforma de 1936 la institución de los *asesores técnicos* no planteaba dudas. Se consideraba que la omisión respecto de las Salas de Procedimiento Sumario equivalía a una prohibición. El problema surge después de esta fecha, al desaparecer la limitación material activa, de las Salas de Procedimiento Sumario⁷⁴. Si se permite conocer a las Salas de

⁷² En la Sala de Procedimiento Sumario constituida para dar solución a la controversia entre Bulgaria y Grecia, respecto de la interpretación del art. 179 del Tratado de Neuilly, ninguno de los Jueces que compusieron la Sala tenía la nacionalidad de las partes en conflicto.

⁷³ Entendemos por asesor técnico -ex arts. 7 y 8 de los Reglamentos de 1922, 1926 y 1936-, un órgano de carácter consultivo cuya función es meramente instrumental. Su labor consiste en ayudar o asesorar a la Sala sobre aspectos técnicos del asunto objeto de la controversia en cuestión, no considerándose miembros de las Salas de las que hubieran podido formar parte. Debido al carácter de su función y a su condición de no miembros de la Sala para la que son designados, ni se tienen en cuenta para el cómputo del *quorum* de la misma ni poseen derecho de voto en la toma de decisiones.

⁷⁴ El Juez alemán Sr. SCHÜCKING subrayó en la 28ª sesión de reforma del Reglamento que tuvo lugar el 27 de febrero de 1935, p.368:

«...le statut dans son article 30 reserve à la Cour la possibilité de changer, en matière de procédure sommaire, les principes de la procédure générale. En l'absence

Procedimiento Sumario de asuntos que versen sobre materias hasta entonces reservadas a las Salas «especiales» en las que resultaba obligatoria o facultativa la intervención ¿cual sería el motivo para impedirlo en aquéllas? Habría que advertir que la extensión material ha de incluir el propio procedimiento previsto para la solución de los conflictos que tengan por objeto los asuntos señalados y con ello de todas sus peculiaridades⁷⁵.

Del Estatuto de 1936 no puede extraerse conclusión en ningún sentido, ya que respecto del tema que tratamos no contiene disposición alguna. Sin embargo, el art. 7.2 del Reglamento, al suprimir el término «spéciale»⁷⁶, abre la posibilidad de designación de asesores técnicos para todos los tipos de Sala, con independencia del objeto del asunto del que esté conociendo⁷⁷.

A pesar de lo anterior, si tenemos en cuenta tanto las listas de asesores técnicos de la CPJI⁷⁸, como la utilización que el Pleno ha hecho de

d'une regle expresse la possibilité pour la Cour de procéder ex officio à une expertise n'existe pas en procédure sommaire...

⁷⁵ De modo que se da lugar a un procedimiento mixto entre el sumario y el previsto para la Sala «especial», beneficiándose de las ventajas de ambos, aunque a este respecto no se pronuncian ni Estatuto ni Reglamento.

⁷⁶ Recordemos que la única modificación sufrida por el art. 7.2 del Reglamento en 1936 es la supresión del término indicado, quedando redactado de la siguiente manera: «*Les assessseurs sont désignés, à la majorité absolue, soit, selon le cas, par la Chambre à laquelle ressortit l'affaire à régler....*»

Sr. HAMMARSKJÖLD, Greffier de la Corte señala (en CPJI, serie D nº2, 3º add, p. 497) en las sesiones preparatorias del Reglamento de 1936, respecto de este precepto:

«...à fin de mettre l'article 7 en harmonie avec le Statut révisé, il suffirait de supprimer le mot «spéciale»

⁷⁷ La argumentación anteriormente mantenida respecto de la necesaria asistencia de los asesores técnicos para el conocimiento de los conflictos a tratar, puede en cierta medida hacerse extensiva a este supuesto. Los Jueces necesitan la información sobre aspectos técnicos, independientemente del foro ante el que se sustancie la cuestión.

⁷⁸ Vid. CPJI Serie E nº1 pp. 58-78; CPJI Serie E. nº2, pp. 21-34; CPJI Serie E. nº3, pp. 18-29; CPJI Serie E. nº4, pp. 38-49; CPJI Serie E. nº5, pp. 38-49; CPJI Serie E. nº6, pp. 29-39; CPJI Serie E. nº7, pp. 50-61; CPJI Serie E. nº8, pp. 31-40; CPJI Serie E. nº9, pp. 27-30; CPJI Serie E. nº 10, pp. 24-27; CPJI Serie E. nº11, pp. 24-30; CPJI Serie E. nº12, pp. 34-43; CPJI Serie E. nº13, pp. 36-45; CPJI Serie E. nº14, p. 25; CPJI Serie E. nº15, p. 25; CPJI Serie E. nº16, p. 32.

ellos, comprobamos que, por una parte, la nómina de candidatos a *asesores técnicos* ante la Corte se encuentra únicamente compuesta por especialistas en materia laboral, tránsito y comunicaciones⁷⁹ y, por otra, que el Pleno de la Corte únicamente contó con la presencia de asesores técnicos en procedimientos consultivos de los que era parte la O.I.T., nunca en los contenciosos.

Un segundo problema que planteaban los *asesores técnicos* era el del procedimiento de su elección. El art. 7.2 del Reglamento señalaba que se llevaría a cabo por mayoría absoluta en la Sala concreta a cuyo conocimiento se hubiese sometido el asunto en cuestión. Salvo en las Salas laborales -con un complicado método de elección- y en el de las Salas de tránsito y comunicaciones -a elegir de una lista específica de asesores en estas materias-, la designación se realizaría siguiendo la práctica habitual del Pleno de la Corte, acerca de la cual Estatuto y Reglamento guardaban silencio.

En cuanto a las Salas «especiales», para la encargada de solucionar los conflictos en materia laboral era preceptiva, según el art. 26 del Estatuto, la asistencia de cuatro asesores técnicos -número que debía **obligatoriamente** concurrir-. Su designación se realizaba por un procedimiento especial en el que tenía una gran influencia la O.I.T.. La misma Sala que conocía del conflicto laboral era la encargada de su elección. Para ello se requería, según el art. 26.4 del Estatuto, mayoría absoluta -teniendo en cuenta que habrían de asegurarse los intereses en presencia-. Los candidatos se encontraban en una lista de Asesores para conflictos laborales formada por dos nombres aportados por cada Estado miembro de la Sociedad de Naciones y por un número igual de trabajadores y empresarios, propuesto por el Consejo de Administración de la O.I.T., que aparecían en la lista de personas de

⁷⁹ CPJI, Serie E nº3, p. 29.

experiencia laboral mencionados en el art. 412 del Tratado de Versalles. Antes de la elección de los asesores el Presidente de la Sala recababa todos los datos que podían resultarle útiles para realizar dicha designación, consultando -ex art.7 del Reglamento-, en particular con la O.I.T..

En la Sala de tránsito y comunicaciones, era **posible** -no obligatoria, aunque sí deseable, dada la especificidad de la materia-, la asistencia de asesores técnicos. Su elección se realizaba, según el art. 27.4 Estatuto, -igual que en el caso de las anteriores- por mayoría absoluta en la propia Sala a cuyo conocimiento se sometía el conflicto. En este caso la elaboración de la lista resultaba más sencilla, ya que estaba formada por dos nombres designados por cada Estado miembro de la Sociedad de Naciones. En este supuesto, a diferencia del anterior, al proceder a dicha elección no habían de ponderarse los intereses en presencia.

1.4. Carácter dispositivo de las Salas.

Para que una Sala pueda conocer de una determinada controversia se exige el común acuerdo de las partes en el conflicto, negándose por tanto que la Corte pueda acordar el conocimiento de un asunto por una Sala a petición de una parte y con la oposición de la otra.

Así, una Sala de Procedimiento Sumario o «Especial» **únicamente** podrá conocer de una controversia **a instancia de las Partes** y cuando **exista acuerdo de éstas**. Si tal acuerdo no existe será el Pleno de la Corte quien conozca del conflicto. El art. 29 del Estatuto indica que ésta podrá *«statuer en procédure sommaire lorsque les parties le demandent»*,

pronunciándose en el mismo sentido los arts. 26.2 y 27.2 respecto de las Salas «especiales»⁸⁰.

En las sesiones preparatorias del Reglamento de 1936 se discutió la posibilidad de incluir la demanda unilateral entre los instrumentos válidos para la apertura del procedimiento ante una Sala «Especial». El Juez PESSÔA presentó una propuesta en este sentido, que resultó posteriormente retirada debido al escaso respaldo obtenido⁸¹. El Presidente de la Corte, en el mismo foro, subrayó la claridad con que el Estatuto se refería en sus arts. 26.2 y 27.2⁸² al acuerdo de las partes como única vía para que las Salas especiales conociesen de un asunto⁸³. Era evidente que no se podía contravenir la regulación estatutaria⁸⁴.

De otro lado, si las partes acuerdan someter un asunto a una de las Salas de la CPJI, la Corte no podría oponerse a la decisión adoptada, porque los Reglamentos de esta institución indican que si las partes se pronuncian en este sentido *«il est fait droit à cette demande pour autant que les parties soient*

⁸⁰ Debe advertirse que si bien el Reglamento -art. 68 de 1922, 1926- subrayaba la necesidad del acuerdo para que fuese una Sala de Procedimiento Sumario y no el Pleno quien conociese de la controversia en cuestión no ocurría lo mismo tratándose de Salas «especiales» porque la redacción del art. 35 del Reglamento -de 1922 y 1926-, parecía admitir la posibilidad una respuesta afirmativa de la Corte a una petición unilateral.

⁸¹ El Juez brasileño estaba convencido de la necesidad de añadir tras el cuarto párrafo del art. 35 del nuevo Reglamento, la siguiente frase -*Vid. en CPJI Serie D, nº 2 addendum, p. 270.*:

«Si une seule des Parties demande le recours à la chambre c'est à la Cour de se prononcer sur la compétence de cette chambre»

⁸² CPJI, Serie D, nº2 addendum, pp. 70-77.

⁸³ No así respecto de la Salas de Procedimiento Sumario, ya que el art. 29 de los Estatutos tanto de 1920 como de 1936, únicamente señalaban su existencia.

⁸⁴ En este sentido ha de interpretarse el art. 71.1 del Reglamento de 1936, que indica *«La demande tendant à ce qu'une affaire soit portée devant une des Chambres visées aux articles 26, 27 et 29 du Statut de la Cour doit être formulée dans l'acte introductif d'instance ou l'accompagnement...»*. Esta previsión está dirigida a todos los tipos de Sala.

d'accord»⁸⁵. Aunque en todo caso, tratándose de Salas «especiales», la Corte tendría que verificar que el objeto material de la controversia fuera laboral, de tránsito o de comunicaciones.

El acuerdo por el que se somete el conocimiento de una controversia a una Sala puede ser *ante* o *post hoc*, anterior o posterior al planteamiento del conflicto. En el primer supuesto, nos referimos a una cláusula compromisoria insertada en un tratado de carácter general anterior al surgimiento de la controversia, bilateral⁸⁶ o multilateral⁸⁷. En el segundo cabe tanto un *compromiso* como un acuerdo incluso verbal de los Agentes de las Partes convocadas por el Presidente de la Corte.

⁸⁵ Vid. art. 35 de los Reglamentos de 1922 y 1926 y en el mismo sentido, aunque con una redacción diferente también el art. 71.1 del texto de 1936.

⁸⁶ Entre éstos se pueden señalar el art. 11.3 del Tratado de conciliación y arbitraje entre Hungría y Suiza de 18 de junio de 1924 -en CPJI Serie D, n°6, pp.86-89-, el art. 2.2 del Tratado sobre el arreglo judicial entre Japón y Suiza de 26 de diciembre del mismo año -en CPJI Serie D, n°6, p. 99-. De especial interés resulta el art. VI del Tratado de comercio de 9 de noviembre de 1931 entre Dinamarca y Bolivia, -en CPJI Serie D, n°6, p. 629- y el art. 12.2 del Tratado de comercio y navegación de 9 de noviembre de 1931 concluido entre Dinamarca y Holanda -en CPJI Serie D, n°6, p. 629-, que preveían el recurso a una Sala por demanda unilateral.

⁸⁷ A modo de ejemplo encontramos los siguientes: el Estatuto sobre el régimen internacional de puertos marítimos -Ginebra 9 de diciembre de 1923-, cuyo art. 8 estipula que los Estados contratantes podrán suspender el beneficio de igualdad de trato respecto de un navío de otro Estado, en cuyo caso los dos Estados implicados podrán dirigirse por una demanda a la Corte que «statuera en procédure sommaire», o el art. 22.1 «si l'affaire est soumise à la CPJI, il sera statué dans les conditions déterminées par l'article 27 du Statut de ladite Cour» (Recueil CPJI, serie D, n° 5, p. 206 y 207); el art. 36.1. del Estatuto sobre el régimen internacional de vías férreas -de la misma fecha que el anterior- «si l'affaire est soumise à la CPJI, il sera statué dans les conditions déterminées par l'article 27 du Statut de ladite Cour» (Recueil CPJI, serie D, n°5, p. 201). La misma disposición se encuentra en los arts. 415 a 418 y 423 del Tratado de Versalles respecto de la Sala para litigios laborales (Recueil CPJI serie D, n°5, pp. 88 y ss.)

1.5. El procedimiento: carácter dispositivo.

Las normas que rigen el procedimiento tanto ante el Pleno como ante las Salas poseen carácter dispositivo. Esto quiere decir que las partes, previo acuerdo, pueden proponer a la Corte su modificación, quedando en manos del tribunal la facultad de aceptarl⁸⁸. Aunque el Reglamento se refiere en su art. 32 a la Corte, de una interpretación sistemática se desprende su aplicación a las Salas, por cuanto son también Corte⁸⁹. Por ello, no será el Pleno quien decida sobre las variantes de procedimiento propuestas por las partes. Será la propia Sala que conoce del asunto la competente para adoptar una decisión al respecto.

1.5.1. Procedimiento en la Sala de Procedimiento Sumario.

Mientras que tratándose de las Salas «especiales» las disposiciones estatutarias remiten directamente al capítulo del procedimiento contencioso-, el art. 30 del Estatuto dispone que «*el Reglamento regulará en particular el procedimiento sumario*».

⁸⁸ En virtud del art. 32 del Reglamento -«*Les dispositions du présent titre sont établies sans préjudice de l'adoption par la Cour d'autres règles que les parties intéressées pourraient proposer d'un commun accord en tenant compte des circonstances particulières à chaque affaire*»-.

⁸⁹ El art. 32 del Reglamento es el que abre las disposiciones generales -sección A-, del título dedicado al procedimiento contencioso, cuya segunda sección -la B-, regula el procedimiento contencioso ante la Corte y las Salas «especiales».

No obstante, la regulación reglamentaria⁹⁰ comienza con una remisión en su art. 67 -art. 70 tras la reforma de 1936- al procedimiento ante el Pleno de la Corte. No especifica si se trata del contencioso o del consultivo, pero la ubicación de la regulación del Procedimiento Sumario en el Título dedicado al procedimiento contencioso, es decisiva para despejar cualesquiera dudas.

La Sala de Procedimiento Sumario podía oír y fallar casos mediante un procedimiento abreviado compuesto de dos fases, escrita primero y oral -con carácter facultativo, si hubiera lugar a ella, a diferencia del Pleno en que esta segunda fase es obligatoria- a continuación.

La sumariedad en la fase escrita del procedimiento se consigue mediante la reducción del número de memorias, siendo éste, el aspecto dentro del procedimiento escrito que sufrió mayores cambios en las sucesivas reformas reglamentarias. El primer Reglamento, de 1922, no previó un número concreto de aquéllas, rigiendo en este punto, en aplicación del art. 67 del Estatuto, las disposiciones previstas con carácter general para los contenciosos, contenidas en el art. 39 de dicho Reglamento⁹¹. En la práctica,

⁹⁰ Se trata de la Sección C. del Título Primero del Capítulo Segundo de los Reglamentos de 1922 y 1926. En el de 1936, en la Sección Segunda del Título Segundo, arts. 70 a 73.

⁹¹ Puesto que este artículo está dirigido al procedimiento ante el Pleno, contempla la distinción según el elemento utilizado para someter a conocimiento de la Corte. Art. 39: «*Si l'instance est introduite par la notification d'un compromis, et sauf accord contraire des parties, les pièces de procédure suivantes peuvent être présentées dans l'ordre indiqué ci-dessous, savoir:*

un mémoire, par chacune des parties, dans un même délai;
un contre-mémoire, par chacune des parties, dans un même délai;
une réplique, par chacune des parties, dans un même délai.

Si l'instance est introduite par requête, et sauf accord contraire des parties, les pièces de procédure sont présentées dans l'ordre indiqué ci-dessous, savoir:

la mémoire par la partie demanderesse;
la contre-mémoire par la partie défenderesse;
la réplique par la partie demanderesse;
la duplique par la partie défenderesse

ante la Sala que conoció del asunto del *Tratado de Neuilly* se depositaron una memoria y una réplica por cada parte, de conformidad por tanto con el art. 39.

En el Reglamento de 1926 tampoco se prefijó el número de escritos que habrán de presentarse en el Procedimiento Sumario, haciéndose depender del modo en que las partes hubiesen acordado realizar el depósito de piezas. Si se producía de forma simultánea la Sala podía, una vez recibidas las memorias, «invitar» a las partes a presentar contramemorias -art. 69.1 Regl. 1926- cuyo contenido, igual que el de las memorias, se encontraba especificado -con carácter general- en el art. 40 del Reglamento⁹². Si hubiesen acordado un depósito sucesivo solo podía presentarse una memoria por una parte y una contramemoria, por la otra.

En 1936, la formulación fue algo diferente. Según el art. 72 del Reglamento sólo podía presentarse una pieza escrita por cada parte, aunque las Salas se reservaban el derecho de solicitar a las partes -de oficio o a instancia de parte- el depósito de otros escritos que considerasen oportunos.

En cuanto al procedimiento oral, expresamente se previó que si la Sala, una vez concluida la fase escrita del procedimiento, lo consideraba necesario podía instituirlo **salvo acuerdo contrario de las partes**.

Si las partes, pues, decidían oponerse a la apertura de la fase oral, a pesar de que la Sala hubiese manifestado la insuficiencia de la información facilitada en el procedimiento escrito, esta formación debía fallar conforme a las memorias presentadas. Tampoco cabía, hasta 1936, que la Sala pidiese explicaciones verbales a las partes si consideraba insuficiente la información contenida en las memorias presentadas, dado que del art. 69 se desprendía

⁹² A pesar de que la redacción del artículo 40 tras la reforma de 1926, plantea el supuesto típico de incoación del procedimiento por demanda unilateral, el art. 68 del mismo texto no deja lugar a dudas acerca de la imposibilidad de apertura del procedimiento por aquel medio.

que esta petición podía tener lugar una vez abierta la fase oral del procedimiento, pero no como sustitutoria de ésta. Por consiguiente, se obligaba a la Sala a emitir una Sentencia acerca de un asunto en el que reconocía no tener suficientemente aclarados algunos puntos -en el supuesto en que las partes acordasen la supresión de la fase oral en contra de la opinión de la Sala-. Consideradas sus consecuencias, el supuesto era inverosímil.

De todos modos, tras la reforma del Reglamento de 1936 la cuestión quedó resuelta, al introducirse en el art. 72.4 del citado texto -que viene a sustituir al 69 de los Reglamentos anteriores-, la solución más lógica. El art. 72.4 del Reglamento de 1936 dispuso, en efecto, que aún en ausencia de procedimiento oral la Sala conservaba la facultad de pedir a las partes explicaciones verbales. Por ello, a partir de esta fecha, si bien la Sala carece de la iniciativa absoluta de apertura de la fase oral del procedimiento podía, sin que las oposición de las partes repercutiera sobre esta decisión, abrir una especie de «mini-fase oral».

Pero podemos plantear la hipótesis opuesta, ¿qué hubiera ocurrido de haber acordado las partes que se abriese una fase oral que la Sala consideraba innecesaria? El Reglamento en este punto no era claro, pero podemos concluir que, si bien la Sala conservaba la facultad de decidir, era improbable que ejerciese su prerrogativa contra la petición conjunta de las partes. Cosa distinta es que una parte deseara -y la otra no- abrir una fase oral. En el mismo caso habido, ni Grecia ni Bulgaria -partes en el asunto del *Tratado de Neuilly* - instaron a la Sala de Procedimiento Sumario la apertura de la fase oral del procedimiento, en vista de lo cual la Sala que conocía del caso optó por prescindir de ella

«...la Cour n'a pas jugé nécessaire d'instituer en l'espèce une procédure orale»⁹³

1.5.2. Procedimiento en las Salas «especiales».

Por lo que hace al procedimiento ante las Salas «especiales», únicamente podemos indicar que el mismo se reguló conjuntamente con el del Pleno, en la sección B del Capítulo II de los Reglamentos de 1922 y 1926, bajo la rúbrica *Procédure devant la Cour et devant les Chambres Spéciales (articles 26 et 27 du Statut)*. Las disposiciones procedimentales eran, por tanto, uniformes para ambas formaciones de la Corte sin que pudiesen apreciarse diferencias entre ellas.

Con el Reglamento de 1936 la situación cambió formalmente, ya que se reguló en la misma sección el procedimiento ante las Salas «especiales» y ante las de Procedimiento Sumario⁹⁴. Sin embargo, sustancialmente, la situación siguió siendo la misma, pues el primero de los artículos reglamentarios contenía una remisión al procedimiento contencioso ante el Pleno de la Corte, y los siguientes se referían únicamente a las Salas de Procedimiento Sumario.

⁹³ *Vld.* la Sentencia en CPJI, Serie A, nº3.

⁹⁴ Sección Segunda, del Título II del Reglamento, arts. 70-73.

1.6. Algunas consideraciones sobre las Sentencias.

Una de las lagunas más significativas en la regulación de las Salas de la CPJI es la que se refiere al valor jurídico que hubiera poseído la Sentencia dictada por una Sala «especial». No así el de las de Procedimiento Sumario, cuyo valor se expresaba desde el primero de los Reglamentos de la Corte.

En efecto, los Reglamentos de 1922 y 1926 dispusieron, en el capítulo dedicado al Procedimiento Sumario (art. 70), que «*L'arrêt est rendu par la Cour statuant en Chambre de procédure sommaire...*»⁹⁵. Ninguna referencia, en cambio a las Salas «especiales». ¿Habría de considerarse acaso que sólo los fallos de las Salas de Procedimiento Sumario eran emitidos por la Corte? Evidentemente, no. Encontrándose la regulación de las Salas «especiales» ubicada dentro de las disposiciones dedicadas al Procedimiento Contencioso de la Corte⁹⁶, éstas son aplicables tanto al Pleno como a este tipo de Salas. La precisión del valor jurídico de las Sentencias dictadas en Procedimiento Sumario, era en cambio oportuna por cuanto éste se encontraba regulado en una sección específica -la C-, del citado Título. El art. 55 del Estatuto de la CPJI señala que es la Corte quien dicta la Sentencia⁹⁷.

⁹⁵ La Sentencia n°3 de la CPJI comienza con estos mismos términos: «*La Cour, statuant en Chambre de procédure sommaire...*» Serie A n°3. p. 3.

⁹⁶ Sección B del Título Primero Capítulo Segundo de los citados reglamentos de 1922 y 1926.

⁹⁷ El art. 55 de los dos Estatutos de la CPJI dicen lo siguiente: «*Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents*»

El Reglamento de 1936 -art. 73-, extendió la previsión sobre el valor jurídico de las Sentencias de la Sala de Procedimiento Sumario a las Salas «especiales», debido a cambios en la estructura del texto precedente⁹⁸.

En otro orden de cosas, las Sentencias dictadas por las Salas, tanto las de Procedimiento Sumario como las «especiales», son susceptibles de idénticos recursos que las emitidas por el Pleno: interpretación y revisión. A pesar de que el Estatuto, en este aspecto, siempre se refiere a la Corte, ambos recursos habrán de presentarse ante la formación que dictó la Sentencia objeto del mismo, tal y como señala el art. 66.3 del Reglamento⁹⁹.

Respecto de los recursos interpretativos, recordemos el único conocido por una Sala -la de Procedimiento Sumario-. Apenas dos meses después de ser dictada la Sentencia en el asunto del *Tratado de Neuilly*, el agente griego -por carta de 27 de noviembre 1924¹⁰⁰-solicitó una interpretación auténtica y detallada de la Sentencia, fundamentando jurídicamente su demanda en el art. 60 del Estatuto. La solicitud griega se expresaba en los siguientes términos:

«Prenant en considération ce qui précède et conformément à l'article 60 du Statut de la Cour, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, d'avoir recours à votre bienveillance pour vous prier de bien vouloir lui faire tenir de cet arrêt une interprétation authentique et autant que possible détaillée, notamment sur le point de savoir si, suivant l'arrêt, les réclamations dont il s'agit ne sont payables que sur les avoirs bulgares se trouvant en territoire grec, et cela afin de permettre de préciser la

⁹⁸ Recordemos que este Reglamento dedica la Sección Segunda del Título Segundo al procedimiento ante «Les Chambres Spéciales et la Chambre de Procédure Sommaire», separando aquél formalmente de la regulación del procedimiento ante el Pleno.

⁹⁹ De no ser así, estaríamos ante un reenvío del nuevo procedimiento al Pleno de la Corte. No hemos de olvidar a este respecto que, al contrario de lo que ocurre con los Tribunales de Estrasburgo (Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre) y de Luxemburgo (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas), una vez se había sometido el conocimiento de un asunto a una Sala de la Corte, no podía reenviar el mismo al Pleno.

¹⁰⁰ *Vid.* CPJI Serie C nº 6 p. 13.

portée des fonctions et l'étendue des attributions de l'arbitre prévu par la disposicion contentieuse du Traité susmentionné»¹⁰¹

Esta carta desató un procedimiento cuya fase escrita se completó con unas observaciones del agente búlgaro en forma de anexo a una carta dirigida por este último al *Greffier* de la Corte, de fecha 30 de diciembre de 1924¹⁰². En este texto el agente del Gobierno búlgaro no contestaba la competencia de la Sala para conocer del recurso de interpretación interpuesto, sino la admisibilidad del mismo¹⁰³.

La Sala en esta ocasión rehusó la solicitud griega, porque en su opinión

«...il n'y a pas lieu de donner suite à la demande du Gouvernement hellénique tendant à obtenir, conformément à l'article 60 du Statut, une interprétation authentique de l'arrêt du 12 septembre 1924.»¹⁰⁴

El motivo alegado por la Sala para rechazar la demanda griega fue que su objeto sobrepasaba los límites de la Sentencia misma. Desde una perspectiva material, los límites aludidos por la propia Sala habían sido perfilados en el compromiso firmado en Sofía el 28 de marzo de 1924, entre el Rey búlgaro y el Gobierno de la República Griega. La finalidad de este acuerdo era someter a la CPJI, y en concreto a su Sala de Procedimiento Sumario, la solución de la controversia existente entre ellos¹⁰⁵. La Sala motivó

¹⁰¹ *Id.* nota anterior.

¹⁰² CPJI Serie C, nº6 p. 15.

¹⁰³ Por lo que hace a su competencia, la Sala de Procedimiento Sumario, sólo indicó -Vid. en CPJI Séries A, nº4, p.6- lo siguiente:

«Par conséquent, sa compétence pour la formuler résulte déjà de l'accord des Parties»

¹⁰⁴ CPJI, Serie A, nº4, p. 7 y 8.

¹⁰⁵ El objeto de la misma versaba sobre el alcance de las competencias del árbitro nombrado por Gustave Ador en aplicación del párrafo cuarto del anexo a la sección cuarta de la

escasamente la extralimitación que suponía el *petitum* del recurso de interpretación, ya que tan sólo indicó que la demanda griega estaba basada en una concepción distinta y extraña al compromiso¹⁰⁶.

Por otra parte, esta respuesta negativa de la Sala a la solicitud de interpretación no implica su falta de jurisdicción en materia de recursos, sino todo lo contrario, su ejercicio: al definirse sobre la admisibilidad, estaría afirmando su competencia.

En último lugar, cabe señalar que, en caso de incumplimiento de las Sentencias dictadas por cualquiera de las Salas de la CPJI -en cuanto son Sentencias de la propia Corte-, el Pacto de la Sociedad de Naciones concedía competencias al Consejo con el objeto de hacer posible la ejecución de las citadas decisiones incumplidas¹⁰⁷.

parte novena del Tratado de Paz firmado en Neuilly el 27 de noviembre de 1919. *Id.* nota anterior, p. 6.

¹⁰⁶ *Ibid.*, pp. 6-7.

¹⁰⁷ Art. 13.4 del Pacto de la Sociedad de Naciones:

«Los miembros de la Sociedad se comprometen a cumplir de buena fe las Sentencias dictadas y a no recurrir a la guerra contra un Miembro de la Sociedad que a ellas se someta. En caso de incumplimiento de la Sentencia, el Consejo propondrá las medidas que hayan de asegurar su efecto»

2. LAS SALAS DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA.

2.1. Consideraciones previas.

Tras la Segunda Guerra Mundial desaparece la CPJI y surge la CIJ¹⁰⁸. Es necesario indicar que se trata de un mismo proceso, ya que ambos fenómenos -disolución y creación- poseen una génesis común hasta el extremo de poder afirmar su inseparabilidad.

¹⁰⁸ La relación entre ambas instituciones es calificada de diversas maneras por la doctrina. Pero las diferencias son más de terminología que de concepto. Las diferencias conceptuales afloraron generalmente bajo el estudio de cuestiones concretas, como la suerte de tratados y declaraciones de aceptación de la jurisdicción de la CPJI en relación con los Estados que no tuvieran la condición de miembros originarios de las NN.UU. Así, hay autores que califican de *sucesoria* esta relación, como M. DUBISSON -La Cour ..., op. cit., pp. 110-111-; F. GERBER -Le consentement de l'Etat à la juridiction de la Cour Internationale de Justice, Tesis, Orleans abril de 1980, p.40-; J.D. GONZALEZ CAMPOS, L.I. SANCHEZ RODRIGUEZ Y M.P. ANDRES SAENZ DE SANTAMARIA - en Curso de Derecho Internacional Público, 5ª ed., Madrid 1992, p. 765-; M. MEDINA -La Organización de las Naciones Unidas, Madrid 1974, p. 102-; S. ODA - "Intervention in the International Court of Justice. Articles 62 and 63 of the Statute" en *Völkerrecht als Rechtsordnung Internationale...*, 1983 p. 640-. A. MIAJA DE LA MUELA - "La «sucesión» del Tribunal Permanente de Justicia Internacional por el Tribunal Internacional de Justicia" en Estudios sobre el Tribunal Internacional de Justicia, Zaragoza 1967, pp.39-72-, emplea este último término con una prudencia que le impulsa a utilizarlo siempre entrecomillado. A. REMIRO BROTONS -Derecho Internacional Público. 1. Principios Fundamentales, Madrid 1982, p. 256-, por su parte, se inclina por el término *conversión*. E. HAMBRO -"Quelques observations sur la révision du Règlement de la CIJ" en *Mélanges offerts à Charles Rousseau*, Paris 1985, p. 10-, como también lo hace J.A. PASTOR RIDRUEJO -Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, 5ª ed. Madrid 1994, pp. 751-752-, quien habla de *continuidad* al referirse a la relación entre ambas instituciones; de esta misma opinión se había manifestado A. MIAJA DE LA MUELA - «Derecho y política en el Tribunal Internacional de Justicia» en *REDI*, 1954, p. 463-490-. H.J. HAHN -«International Organizations, Succession» en *EPIL*, vol. 5, p. 166-168- tras señalar las características de esta sucesión, al ocuparse de la relación existente entre ambos Tribunales la califica como transferencia de prerrogativas de una Corte a otra. L. DELBEZ en *Les principes généraux du contentieux International*, Paris 1962, p. 25, únicamente señala la condición de *heredera* de la CIJ respecto de la CPJI.

Entre ambos Tribunales existen ciertamente algunas diferencias importantes. Entre ellas podemos destacar el nexo entre los Estatutos de la CPJI y la CIJ y los textos básicos de la Sociedad de Naciones -Pacto- y las Naciones Unidas -Carta- respectivamente. En el primer caso ambos eran independientes, mientras que en el segundo estamos ante un texto anexo a la Carta que, según su propia redacción «forma parte integrante» de la misma.

La segunda diferencia que apreciamos es de carácter estructural: la Carta de las Naciones Unidas sustituye la autonomía de la CPJI respecto de la Sociedad de Naciones por la calidad de **órgano judicial principal de las Naciones Unidas**, con que los arts. 7 y 92 de la Carta dotan a la nueva Corte.

La tercera diferencia deriva de las anteriores y es la relativa al modo de adquisición de la condición de parte en el Estatuto. Antes hacía falta un acto expreso, mientras que ahora la condición de parte en el Estatuto se infiere del carácter de miembro de la Organización y -aún más que eso-, va indisolublemente unida a dicha condición, ya que el art. 93.1 de la Carta indica que todos los Estados «miembros de las NU son *ipso facto* partes en el Estatuto».

Sin embargo, son más numerosas las identidades que las divergencias entre las dos Cortes y si hemos de calificar de algún modo a la CIJ en relación con la CPJI, debe ser poniendo de relieve el «continuismo». La CIJ puede considerarse heredera de la CPJI¹⁰⁹ por múltiples razones: la nueva Corte asume la jurisprudencia de su predecesora; el art.92 de la Carta de NN.UU. dispone que «*La Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal de las Naciones Unidas; funcionará de conformidad con el Estatuto anexo, que está basado en el de la Corte Permanente de Justicia Internacional.*

¹⁰⁹ En el CIJ, *Annuaire 1946-1947*, p. 9, se define a la CIJ como «*continuatrice*» de la CPJI, señalándose además que la Corte actual ha heredado las tradiciones de su predecesora.

y que forma parte integrante de esta Carta»; el primer Presidente de la CIJ fue la persona que ejerció por última vez dicho cargo en la CPJI -J.G.GUERRERO-: la CPJI fue invitada a enviar dos representantes a la Conferencia de San Francisco, para ayudar al Comité IV-1 en su trabajo¹¹⁰. Además la CIJ ocupa la misma sede y recibió los archivos de la antigua Corte.

Ahora bien, si cabe hablar de sucesión de la CPJI por la CIJ, dicha sucesión fue imperfecta. Baste recordar, aparte de la inexistencia de un Tratado sucesorio o acto jurídico equivalente y las diferencias ya apuntadas entre una Corte y otra, la interpretación dada por la propia CIJ al art 36.5 de su Estatuto¹¹¹; o la circunstancia de que los Estados partes en el Estatuto de la CPJI no fueron automáticamente considerados miembros de la CIJ.

La Corte siempre que ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de la validez de las declaraciones de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la CPJI formuladas por Estados no miembros originarios de las NN.UU. -en definitiva, sobre la operatividad del art. 36.5 del Estatuto¹¹²-, ha resuelto negativamente esta cuestión, lo que se puede interpretar como una intención de subrayar la discontinuidad entre ambas Cortes¹¹³. Solución contraria ha

¹¹⁰ Los enviados fueron su presidente, el Sr. GUERRERO y el Juez HUDSON. Vid. en este sentido CIJ Annuaire 1946-1947, p. 9.

¹¹¹ Art. 36.5: «Las declaraciones hechas de acuerdo con el Artículo 36 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional que estén aún vigentes, serán consideradas, respecto de las partes en el presente Estatuto, como aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia por el periodo que aún les quede de vigencia y conforme a los términos de dichas declaraciones»

¹¹² Vid. las Sentencias de 26 de mayo de 1959 en el asunto relativo al incidente aéreo de 27 de julio de 1955 (Israel c. Bulgaria), en CIJ Recueil 1959, p. 127; de 26 de mayo de 1961, en el Templo de Preah Vihear. Excepciones preliminares (Camboya c. Tailandia), en CIJ Recueil 1961, p. 17 y de 26 de noviembre de 1984, en el asunto de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (Nicaragua c. Estados Unidos) en CIJ Recueil 1984, p. 392.

¹¹³ Ahora bien, este efecto puede no referirse a la naturaleza jurídica de la relación entre ambos Tribunales, sino más bien al fundamento voluntario de la jurisdicción internacional. En este sentido resulta especialmente claro el Prof. CONAC "L'affaire relative à l'incident aérien du 27 juillet 1955 entre Israël et la Bulgarie devant la Cour Internationale de Justice" en RGDI, 1960, pp. 711-736-, al estimar que la disolución de la CPJI equivale a causa de extinción de la

aportado a la aplicación de otro artículo estatutario: el 37¹¹⁴. En todas las ocasiones en las que su competencia para conocer del fondo de un asunto se fundamentaba en el art. 37, la Corte ha puesto de relieve la validez de este instrumento a esos efectos¹¹⁵. Por ello, si la solución al problema planteado dependiese de la interpretación jurisprudencial de los dos preceptos tampoco obtendríamos una respuesta unívoca dado el distinto tratamiento que la Corte ha dispensado a ambos artículos.

Un último argumento aducido contra la existencia de una sucesión entre ambas instituciones, a saber; que las dos Cortes coexistieron durante un breve período de tiempo -desde el 1 de enero al 18 de abril de 1946-, resulta fácilmente rebatible, pues esa agónica coexistencia sirvió precisamente para una transferencia gradual y efectiva de las funciones de un tribunal a otro.

relación jurídica existente por desaparición del objeto de la misma. Por ello es evidente la caducidad de las aceptaciones de jurisdicción obligatoria de la CPJI, tras la desaparición de éste órgano judicial. Conocido lo anterior, es decir, si las declaraciones formuladas al art. 36.2 CPJI han caducado no puede hacerse de la demanda de ingreso de un Estado como miembro de las Naciones Unidas, un sinónimo de la declaración del art. 36.2 del mismo Estatuto, porque entonces estaríamos prescindiendo de la declaración de voluntad de las partes. También L. SIORAT -"L'article 37 du Statut de la Cour Internationale de Justice" en AFDI, 1962-, afirma que el art. 36.5 no puede servir para fundar la competencia de la CIJ.

¹¹⁴ Art. 37 del Estatuto: «Cuando un tratado o convención vigente disponga que un asunto sea sometido a una jurisdicción que debía instituir la Sociedad de las Naciones, o a la Corte Permanente de Justicia Internacional, dicho asunto, por lo que respecta a las partes en este Estatuto, será sometido a la Corte Internacional de Justicia»

¹¹⁵ El art.37 ha servido de fundamento de la jurisdicción del Tribunal. Así ha ocurrido en los asuntos *Ambatielos. Excepciones preliminares* (Grecia c. el Reino Unido) -Sentencia de 1 de julio de 1952. CIJ Recueil 1952, p.28-; *Sudoeste africano. Excepciones preliminares* (Etiopía c. Sudáfrica y Liberia c. Sudáfrica) -Sentencia de 21 de diciembre de 1962. CIJ Recueil 1962, p. 319- y *Barcelona Traction Light and Power Company Limited. Excepciones preliminares* (Bélgica c. España) -Sentencia de 24 de julio de 1964. CIJ Recueil 1964, p.6-.

2.2. Las Salas de la CIJ desde 1946 hasta 1972.

El Estatuto de la CIJ afirma, como ya hiciera el de la CPJI, que la Corte podrá conocer de los asuntos que sean sometidos a su conocimiento mediante el Pleno y las Salas¹¹⁶. Los dos tipos de Salas que existían en el Estatuto de la CPJI se recogen en el mismo texto de la nueva Corte. Sin embargo, sólo tratándose de las Salas de Procedimiento Sumario puede predicarse una cierta continuidad debido a las escasas variaciones introducidas en su regulación. Por el contrario, el otro tipo de Salas, las «especiales», son objeto de tales modificaciones que bien puede afirmarse que responden a una nueva concepción. La renovación de las Salas «especiales» no es la única novedad del Estatuto concerniente a las formaciones reducidas o extraordinarias de la Corte, pues el Estatuto de 1945, añade a las Salas de Procedimiento Sumario y «especiales» las llamadas Salas *ad hoc*.

2.2.1 Salas de Procedimiento Sumario.

Las Salas de Procedimiento Sumario no resultan modificadas significativamente en los textos reguladores de la nueva Corte. El artículo que el Estatuto de la CIJ dedica a este tipo de Salas -el 29- es literalmente el mismo que existía en tiempos de la CPJI. No cambia ni una coma. Por tanto, a

¹¹⁶Vid. arts. 25 Estatutos CPJI y CIJ.

diferencia de los otros tipos de Salas, continúa siendo el Estatuto el que determina el número de Jueces que compondrán esta Sala: cinco miembros y dos suplentes.

El de Procedimiento Sumario es el único tipo de Sala que mantiene el carácter de preconstituido y permanente en el Estatuto de la CIJ. Siguiendo el modelo de la CPJI, el artículo 29 indica que las Salas de Procedimiento Sumario se constituirán con una periodicidad anual, permaneciendo constituidas con independencia de que haya sido sometido a su conocimiento asunto alguno.

Tan sólo a nivel reglamentario se aprecian ligeras modificaciones en lo que hace referencia a su procedimiento escrito. Entre ellas, la principal consiste en que mientras el Reglamento de la CPJI se remitía sin más al procedimiento contencioso de la Corte -art. 41-; el Reglamento de 1946 - art. 72- explícitamente describe el procedimiento escrito que ha de seguirse ante esta Sala¹¹⁷. En cualquier caso, continúa existiendo una remisión con carácter subsidiario al procedimiento contencioso ante el Pleno (art.70).

Una novedad introducida en las Salas de Procedimiento Sumario -aunque ciertamente de escaso interés desde una perspectiva jurídica-, viene dada por la extensión a las mismas -según el art. 28.3 del Reglamento- de la posibilidad de reunión fuera de La Haya. En el texto de la CPJI sólo se contemplaba esta eventualidad para las Salas «especiales». La novedad afecta también al Pleno de la Corte cuando el caso así lo requiera¹¹⁸.

¹¹⁷ El texto del art. 72 del Reglamento de 1946 es idéntico al art. 92 del Reglamento en vigor, con dos salvedades: 1) las previsiones relativas a expertos y testigos -ap.5- y, 2) la regulación actual se refiere al procedimiento ante todas las Salas de la Corte, por tanto también a las del art.26 del Estatuto. En 1946 se contemplaban dos artículos distintos: uno para las Salas «especiales» y las *ad hoc* (art. 71) y otro para las Salas de Procedimiento Sumario (art.72).

¹¹⁸ Los miembros de la Corte, cuando redactaron este artículo de su Reglamento sin duda recordaban lo sucedido con la invasión de Holanda por las tropas alemanas.

También apreciamos una diferencia en cuanto a la posibilidad de designar asesores, ya que el Reglamento de 1946 sólo reconoce expresamente la posibilidad de su designación en las Salas de procedimiento sumario, en detrimento de los otros tipos de formaciones extraordinarias o restringidas de la Corte.

2.2.2. Salas «especiales».

El Estatuto de la CIJ dedica a las Salas «especiales» un apartado del art. 26: el primero. Se trata de una regulación insuficiente que suscita más dudas que la de sus predecesoras y que ni el Reglamento ni la práctica judicial posterior han esclarecido.

En primer lugar, el Estatuto de la CIJ cambia la concepción que de las Salas «especiales» se tenía en tiempos de la Corte Permanente, dado que se otorga a la Corte un poder discrecional para proceder a su formación cuando y como considere conveniente¹¹⁹.

La naturaleza -preconstituidas y permanentes, o no- de este tipo de Salas no resulta clara atendiendo únicamente al Estatuto, cuyo art. 26.1 se limita a indicar que *«cada vez que sea necesario, la Corte podrá constituir ...»* una o varias Salas de este tipo. Por tanto, el único dato que nos aporta este artículo es la discrecionalidad de que goza la Corte para constituir Salas «especiales».

¹¹⁹Vid. art. 26.1 del Estatuto y 24.1 y 25.1 del Reglamento.

A pesar de esta incertidumbre estatutaria, el Reglamento parece esclarecer nuestras dudas cuando su art. 71.1 comienza indicando que «*La demande tendant à ce qu'une affaire soit portée devant une des Chambres prévues aux article 26, paragraphe 1 y 29 du Statut, et déjà constituées...*» y, a continuación señala el procedimiento a seguir para solicitar que un asunto sea conocido por una Sala «especial» ya constituida. Ahora bien, si las partes en una controversia acuden a la Corte solicitando que sea una Sala de este tipo -aún no constituida- la que conozca de la misma, el tribunal puede decidir si la constituye o no. Nada impediría que en un supuesto concreto la Corte decidiera constituir una Sala «especial» después de la solicitud de las partes en una controversia, ya que según el art. 24.1 del Reglamento, corresponde sólo a la CIJ decidir con qué objeto y cuando constituir una formación de este tipo¹²⁰.

En este supuesto, no se trataría de una Sala *ad hoc*, porque el hecho de que se constituya una Sala «especial» *con ocasión* de una determinada controversia, no implica bajo ningún concepto que la Sala desaparezca una vez emitida Sentencia en el asunto que *detonó* su constitución. El art. 26.1 es claro al respecto al indicar que el objeto de la creación de las Salas «especiales» es «*...conocer de determinadas categorías de negocios...*» . Si, por el contrario, la Sala desapareciera una vez dictada Sentencia, ya no estaríamos en el 26.1 -aunque formalmente fuera éste su fundamento jurídico-, sino ante el 26.2 -cuya finalidad es «*...conocer de un negocio determinado...*» - (las Salas *ad hoc*). La especialización material implica permanencia y esta característica es la diferencia fundamental entre ambos tipos de Salas.

¹²⁰ Art. 24.1 del Reglamento: «*Lorsque la Cour juge à propos de constituer une ou plusieurs Chambres prévues à l'article 26, paragraphe 1, du Statut, elle prend à cet effet une décision par laquelle elle détermine la catégorie d'affaires en vue de laquelle chaque Chambre est constituée, la composition de celle-ci, la durée des pouvoirs des juges qui seront appelés à y siéger, ainsi que la date d'entrée en fonctions de ceux-ci après un renouvellement. Elle procède de même pour modifier la compétence, la composition ou le mode de renouvellement d'une Chambre ou pour en décider la suppression*»

La regulación de las Salas «especiales» adolece de múltiples lagunas debidas, sobre todo, a un problema de adecuación entre el Estatuto, innovador, y el Reglamento, estancado. En el Estatuto de 1920 las Salas «especiales» encontraban su regulación en dos extensos artículos, cada uno de los cuales se dirigía a uno de los subtipos ya estudiados -Salas laborales y de tránsito y comunicaciones- mientras que en 1945 toda la regulación estatutaria se reduce a un breve apartado del art.26. Por el contrario, las disposiciones reglamentarias correspondientes no varían, de manera que el Reglamento de 1946 hereda los preceptos de los Reglamentos de la CPJI respecto de estas Salas «especiales», conformes con una concepción, distinta y distante de la que aflora en el art. 26.1 actual¹²¹.

En otro orden de cosas, hemos de señalar que el objeto de estas Salas varía significativamente. Si bien el art. 26.1 del Estatuto de 1945 continúa aludiendo a litigios laborales, de tránsito y comunicaciones, se trata de una enumeración abierta, de carácter ejemplificativo, de categorías de para las que se consideran apropiadas. El Estatuto confiere a la Corte un poder para determinar la clase de controversias de que conocerá la Sala que se va a crear, así como el número de Jueces que formarán parte de ellas. El art. 24 del Reglamento subraya este aspecto:

«Lorsque la Cour juge à propos de constituer une ou plusieurs Chambres prévues à l'article 26, paragraphe 1, du Statut, elle prend à cet effet une décision par laquelle elle détermine la catégorie d'affaires en vue de laquelle chaque Chambre est constituée...».

Respecto de sus predecesoras, las Salas «especiales» de la CIJ, mantienen dos rasgos principales: (1) una limitación **ratione materiae** -de carácter activo-, aunque ahora las categorías a las que se limita su

¹²¹ Hoy nos encontramos con la misma cuestión, ya que la única transformación que el art. 71.1 del Reglamento de 1946 ha sufrido, ha sido de carácter numérico. Vid. art. 91.1 del Reglamento de 1978.

conocimiento no se especifican en el Estatuto: y. (2) la especialización técnica de sus miembros¹²²

Todo ello se traduce en una gran dependencia de las Salas «especiales» respecto del Pleno de la Corte, ya que se han concebido como la formación reducida de solución de controversias en mayor medida subordinada a él.

En la actualidad las Salas «especiales» parecen útiles, no ya para los asuntos que menciona el Estatuto, por respeto a la tradición, sino más bien para otras categorías, como la delimitación de espacios marinos¹²³ y, en general, para conflictos fronterizos¹²⁴, o también para resolver problemas medio-ambientales, tan importantes en la actualidad. De hecho la única Sala «especial» constituida hasta el momento tiene por objeto precisamente el conocimiento de problemas de este tipo.

A pesar de las modificaciones introducidas por el Estatuto de 1945 el resultado cosechado por este tipo de Salas no ha diferido del de sus predecesoras. No se ha constituido ninguna hasta 1993¹²⁵, y nunca se les ha

¹²² La especialización técnica de sus miembros no se menciona en el Estatuto de la CIJ y tampoco en su primer Reglamento, aunque aparece posteriormente en el art. 25.2 en la modificación reglamentaria de 1972, que indica como uno de los criterios a tener en cuenta para su elección «...leurs connaissances particulières, de leurs aptitudes techniques ou de l'expérience qu'ils ont acquise antérieurement eu égard à la catégorie d'affaires dont la chambre doit connaître».

¹²³ Como señala el Prof. R. OSTRIHANSKY en "Chamber of the International Court of Justice" en ICLQ, vol. 37, 1, 1988, p. 34.

¹²⁴ Aunque, como veremos más adelante, cuando las partes en alguna controversia de carácter fronterizo han solicitado que fuera conocido por una Sala, no se han dirigido a una Sala «especial», inexistente por otra parte, sino a una Sala *ad hoc*.

¹²⁵ Desde el período 1985-86 se había tomado en consideración la posibilidad de constituir una Sala «especial» para el conocimiento de asuntos en materia medio-ambiental. Sin embargo, la propia Corte había estimado que no era necesario por cuanto podía hacer frente a las posibles demandas para que una Sala «especial» conociera sobre un asunto, mediante la creación de una Sala *ad hoc*. No obstante, en 1993 se constituyó la primera formación de este tipo, especializada en cuestiones medio-ambientales. *Vid.* en CIJ Annuaire 1985-86, n° 40, p. 14. CIJ Annuaire 1986-87, n° 41, p. 15, CIJ Annuaire 1987-88, n° 42, p. 15, CIJ Annuaire 1988-89, n°

sometido el conocimiento de controversia alguna¹²⁶. Nada parece indicar que la situación vaya a cambiar.

Cabe acusar a las múltiples lagunas de la regulación de estas Salas «especiales» como una de las causa de su fracaso, dada la incertidumbre que generan. Ciertamente también detectamos lagunas normativas en las disposiciones reguladoras de las Salas *ad hoc*, incluso tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento de 1978¹²⁷, y ello no ha impedido su utilización, generadora de una práctica que ha ido cubriendo tales lagunas.

Probablemente, el fracaso de las Salas «especiales» haya estado, primero en la tardía respuesta de la Corte a la posibilidad abierta por el Estatuto y, luego, a la ventajosa competencia que han supuesto las Salas *ad hoc*. Si tenemos en cuenta las Salas *ad hoc* constituidas hasta el momento comprobamos, en efecto, que cuando los Estados acuerdan la composición de una de estas Salas, lo hacen observando el criterio de nacionalidad -o al menos procedencia geográfica- más que la posible especialización técnica en la materia objeto de la controversia. Las Salas «especiales» presentan, desde

43, p. 16, CIJ Annuaire 1989-90, nº 44, p. 16, CIJ Annuaire 1990-91, nº 45, p. 17, CIJ Annuaire 1991-92, nº 46, p. 17. En CIJ Annuaire 1992-93, nº 47, p. 16, junto a la argumentación mantenida hasta el momento para justificar su negativa a la constitución de una Sala «especial» para cuestiones medio-ambientales, la Corte da noticia de la decisión adoptada al respecto, al señalar «*Compte tenu des faits qui se sont produits au cours de ces dernières années dans le domaine du droit et de la protection de l'environnement, et considérant qu'elle devrait être prête dans toute la mesure du possible à traiter de toute affaire d'environnement relevant de sa juridiction, la Cour juge maintenant opportune d'établir une chambre pour les questions d'environnement*». Vid. CIJ Annuaire 1992-93, nº 47, pp.16-17. Una vez decidida la constitución de la Sala, sus miembros fueron elegidos por escrutinio secreto, resultando la siguiente composición: M. BEDJAQUI, J. EVENSEN -posteriormente sustituido por FLEISCHHAUER-, G. HERCZEGH, R. RANJEVA, S. SCHWEBEL, M. SHAHABUDEEN y C.G. WEERAMANTRY. Esta Sala comenzó sus funciones el 6 de agosto de 1993 y lo hizo por un periodo de seis meses. Sin embargo, cumplido el mismo, se decidió prorrogar su mandato hasta el 6 de febrero de 1995. Vid. CIJ Annuaire 1993-1994, pp.16-17.

¹²⁶ Los dos importantes asuntos de carácter medioambiental -*de las tierras con fosfatos en Nauru. Excepciones Preliminares* (Nauru c. Australia) - Vid. Sentencia de 26 de Junio de 1992, en CIJ Recueil 1992, p. 240- y el relativo al *Proyecto Gabčíkovo-Nagymaros* (Hungría c. Eslovaquia) - Vid. Ordenanza de 20 de diciembre de 1994, en CIJ Recueil 1994, p. 151-, se dirigieron al Pleno en lugar de hacerlo a esta Sala.

¹²⁷ Vid. *infra*, en epígrafe 2.3 de este mismo capítulo.

este punto de vista un inconveniente: el de su preconstitución. Para establecer su composición no pueden ser tenidas en cuenta las preferencias estatales, hecho éste que, tras el nuevo Reglamento de 1978, constituye el principal atractivo de las Salas *ad hoc*.

2.2.3. Nacimiento de las Salas *ad hoc*¹²⁸.

En este epígrafe vamos a formular algunas generalidades de este tipo de Salas, sin profundizar en ellas, dado que su estudio constituye el núcleo de la investigación que se desarrollará a continuación.

Estas formaciones merecen una especial atención por ser el único tipo de Salas que -en el marco de la CIJ- ha tenido ocasión de conocer de algunas controversias¹²⁹, aportando, por tanto, soluciones prácticas a los problemas teóricos que pudiera plantear su regulación.

El objeto de las Salas *ad hoc*, según el Estatuto, es el de conocer de un negocio determinado. La diferencia entre este nuevo tipo de Sala y las «especiales» es claro, ya que si bien las últimas serían especializadas en determinados tipos conflictos, las que ahora nos ocupan se constituirán para

¹²⁸ Ni el Estatuto ni el Reglamento de la CIJ se refieren a ellas bajo esta denominación, sino que lo hacen aludiendo al art. 26.2 del Estatuto de la CIJ, dedicado a su regulación.

¹²⁹ Así, estas Salas han tenido oportunidad de conocer de un conflicto entre dos Estados de América del Norte, para resolver la *delimitación de la frontera marítima en el Golfo del Maine* entre Estados Unidos y Canadá; un conflicto entre un Estado de América del Norte y uno Europeo, Estados Unidos e Italia respecto del asunto de la *Elettronica Sicula ELSI S.p.A.*; de un conflicto entre dos Estados africanos, en la *diferencia fronteriza* entre Burkina Faso y Mali; y en último lugar, una diferencia entre dos latinoamericanos respecto de la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítimo* entre la República de El Salvador y Honduras.

conocer de una controversia concreta, con independencia de la materia sobre la que versen.

Uno de los atractivos que estas Salas poseen para los Estados es, como se ha dicho, que permiten la intervención de las partes en su composición, dado que aunque según el Estatuto la Corte conserva la potestad para determinar el número (y, por supuesto, la identidad) de los miembros que compondrán una determinada Sala, ha de contar con la previa aprobación de las partes. En consecuencia, este aspecto distingue las Salas *ad hoc* de las de Procedimiento Sumario y de las «especiales».

En este sentido, las Salas *ad hoc* se conciben con carácter privilegiado respecto del resto. El art. 71 del Reglamento, cuyo contenido es por lo demás similar al de 1936, inserta un nuevo párrafo respecto de las Salas del art. 26.2, disponiendo que cuando el Presidente haya conseguido el asentimiento de las partes para que sea una Sala *ad hoc* la que conozca del asunto en cuestión

«...le président s'informe des désirs des parties au sujet du nombre des juges qui devront siéger dans cette chambre».

Ni el Estatuto ni el Reglamento determinan un número mínimo de Jueces, ni un máximo. De donde se deduce que, al menos desde un punto de vista teórico, podemos encontrarnos con diversas formaciones, desde la más cercana a un tribunal arbitral -tres miembros; uno de la Corte y dos designados *ad hoc*- hasta otras más numerosas que no coincidirían plenamente con el concepto de Sala, que se supone restringida. Sin embargo, de la práctica se desprende que el número de miembros preferido es el de cinco y en su mayoría se trata de dos integrantes nacionales, o designados *ad hoc* por las partes con independencia del vínculo de la nacionalidad, y tres componentes de la Corte elegidos por votación secreta de sus miembros.

A las Salas *ad hoc* también se les otorga un régimen más favorable en cuanto al momento en el que deba someterseles el conocimiento de un asunto, dado que se permite el inicio del mismo por el Pleno y la posterior remisión a una Sala *ad hoc*, siempre que las partes lo soliciten -art. 71.3 del Reglamento-, antes de la conclusión del procedimiento escrito¹³⁰. Estas disposiciones se mantienen tras la reforma del Reglamento -art. 26.3 del Regl. de 1972 y 17.1 del de 1978-. No obstante, en los asuntos de los que han conocido hasta el momento formaciones de este tipo, la demanda para que fuera una Sala *ad hoc* la que conociera de la controversia se ha realizado en el instrumento de introducción de la instancia.

Podemos estimar que este tipo de Salas posee una autonomía respecto del Pleno, mayor que cualquier otro, aunque no por ello han de considerarse del todo independientes del mismo. Ello se debe a que es el Pleno quien elige a sus miembros, que -salvo los *ad hoc* - comparten las tareas en ambas formaciones, es el Pleno el que señala los plazos de depósito de las primeras memorias y es el Pleno además el encargado de proveer las vacantes en su formación.

2.2.4. Disposiciones comunes a los tres tipos de Salas.

En lo que hace a la constitución, el párrafo 4 del art. 24 del Reglamento extiende expresamente a todo tipo de Salas la aplicación de las

¹³⁰ A diferencia de lo que ocurre con los otros tipos de Salas, para las que el art. 71.1 del Reglamento dispone que ha de formularse en el documento que sirve de introducción en la instancia o acompañarlo.

previsiones de los arts. 13.3 del Estatuto y 13.1 del Reglamento¹³¹. Conforme a este último artículo y al 24.5 del mismo texto, el Presidente de la Corte presidirá de oficio todas las Salas de las que sea miembro, haciéndolo el vicepresidente en aquéllas de las que no sea miembro el Presidente o, siéndolo ambos, en ausencia de este último. Existe una excepción al principio anterior en el supuesto de que el Presidente sea nacional de uno de los Estados partes en la controversia cuya solución se somete a conocimiento de la Corte. En este caso -art. 32.1 Regl.- cederá la presidencia de la Sala a otro miembro de la misma. Este principio se aplica también al vicepresidente o a cualquier miembro de la Sala que sea llamado a presidirla.

En cuanto al procedimiento, el primer aspecto a destacar es el relativo a su similitud para todos los tipos de Sala¹³². Del mismo modo que ocurría antes, el Reglamento dispone una remisión al procedimiento contencioso, con una excepción: las disposiciones especiales que contiene el mismo texto¹³³.

¹³¹ El art. 24.4 del Reglamento de 1946 indica «*Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du Statut, les membres d'une Chambre continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis bien qu'ils aient cessé d'être membres de cette Chambre*». El artículo 13.3 del Estatuto dispone que «*los miembros de la Corte continúan desempeñando las funciones de sus cargos hasta que tomen posesión sus sucesores. Después de reemplazados, continúan conociendo de los casos que hubieren iniciado hasta su terminación*».

¹³² Los aspectos procedimentales se regulan en la Sección Segunda, del Título Segundo, bajo la denominación de «*Procédure devant les chambres*», con un total de cuatro artículos: 70-73.

¹³³ Tan sólo se regula expresamente el procedimiento sumario, y en lo que a él se refiere se aprecia una única variación en el Reglamento de 1946 -art. 72-, que consiste en la suficiencia de la demanda unilateral como instrumento de incoación del procedimiento ante esta formación.

2.3. Repercusión en las Salas *ad hoc* de la revisión del Reglamento de 1972 y el nuevo Reglamento de 14 de abril de 1978.

2.3.1. Historia de la reforma.

La modificación del Reglamento de 1946 resultó un proceso lento y de larga duración. Debido al trabajo judicial de la Corte, la tarea de reforma del Reglamento hubo de suspenderse durante un período total de seis años (entre 1968-1970 y 1972-1976). En conjunto, en la elaboración del nuevo Reglamento de 1978 se invirtieron once años: desde el 19 de mayo de 1967, en que se constituye el primer comité encargado de la revisión del texto de 1946, hasta el 14 de abril de 1978, fecha en que la CIJ adopta el nuevo Reglamento, entrando éste en vigor el primero de julio del mismo año.

En 1967 la Corte, ante el escaso número de controversias sometidas a su conocimiento, decidió que era necesaria la reforma de su Reglamento por cuanto

«Il est apparu à la Cour que certaines parties du Règlement qu'elle a adopté en 1946 ne répondent plus entièrement aux besoins d'une juridiction internationale moderne. La nécessité se fait sentir de l'adapter aux transformations intervenues au cours des dernières années et au rythme des événements internationaux. La Cour estime que, si sa procédure était définie de manière plus précise et plus complète, son utilisation serait rendue plus facile»¹³⁴

¹³⁴Vid. CIJ Annuaire 1966-1967, n°22, p. 86.

La CIJ emprende dicha reforma en virtud del artículo 30.1 de su Estatuto. El objetivo de la revisión del Reglamento es introducir los cambios suficientes para que la justicia internacional resulte más rápida y económica¹³⁵, ya que los problemas que se plantean en los procedimientos ante el Pleno se resumen en dos: lentitud y carestía, aunque de ninguno de ellos podía culparse exclusivamente a la Corte. Los Estados también tenían su parte de responsabilidad, por su empeño en nombrar un elevado número de abogados y reclamar largos plazos para el depósito de sus memorias escritas con el objeto de prepararlas con mayor seguridad. La carestía, en particular, no está provocada por la Corte, ya que son los Estados quienes fijan el número de consejeros y asesores y los salarios a pagar por sus servicios¹³⁶.

El primer paso hacia la reforma que emprende la Corte es la creación de un Comité, formado por los Jueces FITZMAURICE, JESSUP, GROS, AMMOUN y LACHS¹³⁷. Tres años más tarde, se designa un segundo comité, esta vez formado por LACHS, IGNACIO-PINTO, MOROZOV, JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA y DILLARD¹³⁸. A éste se le encargó la preparación de una lista de materias -entre las que se encontraban las Salas-, cuya revisión aún se encontraba pendiente. Este Comité apreció la necesidad de una reforma

¹³⁵ Recordemos a modo de ejemplo el asunto de la *Barcelona Traction Light and Power* que enfrentó a Bélgica y España: la controversia se sometió al conocimiento de la Corte en 1958 y se cerró sólo en 1970, con la Sentencia de 5 de julio de 1970, *Vid.* en CIJ Recueil 1970, p.4 y ss.

¹³⁶ *Vid.* J.N. HYDE "A Special Chamber of the International Court of Justice-an alternative to ad hoc arbitration" en AJIL, 1968, vol. 62, n°2, pp. 439-441; J.M. RUDA Presente y Futuro del Tribunal Internacional de Justicia, Granada, 1990, pp. 26-27.

¹³⁷ El 19 de mayo de 1967. *Vid.* CIJ Annuaire 1967-68, n° 22, pp. 86-87. Por otra parte, un extracto de las propuestas más relevantes de los distintos grupos nacionales del TPA puede consultarse en P.C. JESSUP "The International Court of Justice Revisited", en Va.JIL, 1971-3, vol. 11, pp. 299-309.

¹³⁸ *Vid.* CIJ Annuaire 1970-71, n° 25, p. 109-110.

inmediata capaz de imprimir a los procesos rapidez y flexibilidad¹³⁹. Por ello, siguiendo su recomendación, el 10 de mayo de 1972 se aprobó el texto reformado que entró en vigor de modo transitorio, como enmienda del Reglamento de 1946, el primero de septiembre de 1972. Estamos, pues, ante un texto que supone una modificación parcial y provisional del Reglamento de 1946. Parcial, porque no se trata de una reforma exhaustiva sino de aspectos concretos; y provisional, por cuanto sólo habría de estar vigente hasta completar la revisión en profundidad del resto de los aspectos no modificados en este texto de 1972.

139 Antes del nuevo Reglamento de 1978 la doctrina ya estudiaba la modificación del Estatuto de la Corte -Vid. M. BARTOS "La révision du Statut ...op. cit.; C. DOLFEN "The World Court: ...op. cit.; R.J. DUPUY "La Réforme du Règlement ...op. cit.; R. FALK "The Role of Domestic ...op. cit.; R.A. FALK "Realistic Horizons...op. cit.; L. GROSS "Conclusions", op. cit.; T.O. ELIAS "Report", op. cit.; C. JENKS "The Prospects...op. cit.; R.Y. JENNINGS "Report" op. cit.; E. McDOWELL (ed) Digest...op. cit.; H. MOSLER & R. BERNHARDT (ed.) Judicial Settlement ...op. cit.; J.F. O'CONNOR "The International Court of Justice ...op. cit.; E. WARREN "Toward a More ...op. cit.-. También antes de esa fecha la CIJ hizo uso por primera vez -y hasta el momento única- del art. 70 del Estatuto. Fue en el primer semestre de 1969 -Ver U.N. Doc A/7591, A/7591/add 1(1969). Art. 70: «La Corte estará facultada por proponer las reformas que juzgue necesarias al presente Estatuto, comunicándolas por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas a fin de que sean consideradas de conformidad con las disposición del Artículo 69». Sin embargo, la Corte no era ambiciosa en su propuesta, ya que tan sólo planteaba la posibilidad de enmendar tres de sus setenta artículos -concretamente los arts. 22, 23 y 28 (Art. 22. «1.- La sede de la Corte será La Haya. La Corte podrá, sin embargo, reunirse y funcionar en cualquier otro lugar cuando lo considere conveniente. 2.- El Presidente y el Secretario residirán en la sede de la Corte»; Art. 23. «1.- La Corte funcionará permanentemente, excepto durante las vacaciones judiciales, cuyas fechas y duración fijará la misma Corte. 2. Los miembros de la Corte tienen derecho a usar de licencias periódicas, cuyas fechas y duración fijará la misma Corte, teniendo en cuenta la distancia de La Haya al domicilio de cada magistrado. 3. Los miembros de la Corte tienen la obligación de estar en todo momento a disposición de la misma, salvo que estén en uso de licencia o impedidos de asistir por enfermedad o por razones graves debidamente explicadas al Presidente»; Art. 28 «Las Salas de que tratan los artículos 26 y 29 podrán reunirse y funcionar, con el consentimiento de las partes, en cualquier lugar que no sea La Haya»)-. A pesar de ello, la AGNU nunca debatió el fondo de la reforma planteada, que no afectaba de manera sustancial a las Salas en general ni en modo particular, a las Salas *ad hoc*. La Corte pretendía modificar realmente sólo un artículo, el 22, y otros dos -arts. 23 y 28-, sólo en cuanto guardaban relación con aquél. El objetivo de la Corte era conferir competencias a la AGNU para trasladar su sede. Los términos propuestos para el art. 22 eran: «La sede de la Corte es La Haya o cualquier otro lugar que la Asamblea General determine, en cualquier momento, a recomendación de la Corte». La argumentación adoptada por la Corte como fundamento de esta pretensión era que puesto que la AGNU puede decidir la sede de las Naciones Unidas, lo lógico es que sea también la que determine la de todos sus órganos. Vid. el texto en CIJ Annuaire 1969/70, n°24, p. 113-. La respuesta de la AGNU consistió en anotar esta cuestión en el orden del día provisional de la sesión ordinaria siguiente, hasta que el 24 de septiembre de 1976, decidió en sesión plenaria su supresión- Vid. en este sentido CIJ Annuaire 1969-70, p.113, CIJ Annuaire 1970-71, p. 109, CIJ Annuaire 1971-72, p.122, CIJ Annuaire 1972-73, p.111, CIJ Annuaire 1973-74, p. 126, CIJ Annuaire 1974-75, p. 119 y CIJ Annuaire 1975-76, p. 2. En CIJ Annuaire 1976-77, p. 114, se informa de la decisión de borrar esta cuestión de su agenda de trabajo.

Esencialmente, la reforma del Reglamento en lo que a las Salas se refiere se centra en las Salas *ad hoc*. Los otros tipos de Salas reciben escasos cambios¹⁴⁰.

En 1974, dos años después de la entrada en vigor de la reforma de 1972 y dos antes de que se reanudaran los trabajos que conducirían al Nuevo Reglamento de 1978, la AGNU aprobó la resolución 3232 (XXIX) de 12 de noviembre de 1974 -"Examen de las funciones de la Corte Internacional de Justicia"¹⁴¹-. En ella, después de señalarse que la reforma del Reglamento de 1972 ha simplificado el procedimiento ante la Corte y permitido una mayor influencia de las partes en la composición de las Salas especiales, reitera las recomendaciones que respecto de las competencias contenciosa y consultiva de la CIJ ya se formulaban en la resolución 171(II). Además de ello, insta a los Estados a recurrir a los artículos 26 y 29 del Estatuto, en los que se regulan las Salas de la Corte¹⁴².

El último de los Comités que interviene en esta reforma reglamentaria (el 3º), se nombró en 1976, formado en esta ocasión por el inevitable LACHS, MOROZOV, WALDOCK, MOSLER, ELIAS y TARAZI¹⁴³. El

¹⁴⁰ Ciertamente es que en 1972 se desdobló el antiguo art. 24 que contenía disposiciones para todas las Salas en tres artículos diferentes: uno para cada una. Por otra parte, el art. 76-90 en el Reglamento de 1978- extiende el procedimiento sumario a todos los tipos de Sala, con la posibilidad de suprimir el procedimiento oral -art. 77.3 en 1972 pasa al 92.3 3º en 1978-, si las partes y la Corte así lo acuerdan.

¹⁴¹ El 14 de noviembre de 1947, la AGNU había aprobado una resolución con idéntico objeto a la que ahora nos ocupa: estimular a los Estados para que acudieran a la Corte a resolver sus controversias. Era la 171 (II), casualmente adoptada poco después del Reglamento de 1946. Posteriormente, a partir de 1965 y a propuesta británica, se había inscrito en el orden del día de la vigésima sesión de la AGNU el posible refuerzo de los medios de arreglo pacífico de controversias internacionales. Ver en este sentido O. DELEAU "L'examen du rôle de la Cour Internationale de Justice par l'Assemblée Générale des Nations Unies", en AFDI, 1970, pp. 325-337.

¹⁴² En realidad, esta última recomendación es la única novedad que contiene respecto de la resolución 171(II).

¹⁴³ Vid. CIJ Annuaire 1976-77, nº 31, p. 114.

texto resultante de sus trabajos recibió la aprobación del Pleno de la Corte en noviembre de 1977, entrando en vigor el 14 de abril siguiente.

En realidad, el nuevo Reglamento de 1978 no introdujo reformas sustantivas, aunque sí formales, en relación con las modificaciones que habían entrado en vigor en 1972 con carácter transitorio¹⁴⁴.

2.3.2. Novedades en la composición de las Salas.

Las modificaciones que se introducen en 1972 en el Reglamento de la CIJ respecto de las Salas *ad hoc* -que se mantienen en el nuevo Reglamento de 1978- se refieren fundamentalmente a su composición, centrándose aquéllas en dos aspectos, acentuados además con ocasión de la primera Sala *ad hoc* constituida en el tiempo: (1) la participación de las partes en la elección de sus miembros y (2) la permanencia en la Sala de aquellos miembros de la Corte que hubieran perdido esta condición con posterioridad a la constitución de aquélla¹⁴⁵.

La participación de las partes en la composición de la Sala es objeto fundamentalmente de dos modificaciones. El primer Reglamento de la CIJ, el de 1946, preveía -art. 71.3- que «*el Presidente, una vez recibida la demanda ... se informa del número de Jueces que deberán conocer del asunto*», mientras que tras la modificación de 1972, el contenido del art. 26.1 dispone que «*el*

¹⁴⁴ Se hace una reestructuración de este último texto: por una parte, se desglosan artículos con múltiples apartados y, por otra, se cambia la ubicación de algunos de ellos.

¹⁴⁵ Este aspecto es también objeto de comentario en el capítulo siguiente. *Vid infra*, Capítulo Segundo.

Presidente consultará a los agentes sobre la composición de la Sala e informará a la Corte al respecto»¹⁴⁶.

Se trata de un cambio sustancial en el procedimiento previsto para la constitución de estas formaciones, suficiente para conferir un importante margen de maniobra a las partes en un aspecto de gran interés. Antes, con el Reglamento de 1946, las partes únicamente habían de ponerse de acuerdo e informar al Presidente de la Corte del número de miembros que, en su opinión debería componer la Sala. Después de la entrada en vigor de la Reforma de 1972, no sólo comunican al Presidente este aspecto, sino también sus preferencias en cuanto a la composición efectiva de la Sala en cuestión¹⁴⁷. Es decir, las partes pueden acordar una determinada formación para la Sala y comunicárselo así al Presidente de la CIJ. La Corte no tiene obligación jurídica de aceptarla aunque, de plantearse como condición para el sometimiento del asunto particular a la Sala, de hecho, así lo hará¹⁴⁸.

Pero no acaban aquí las modificaciones que en 1972 se introducen en cuanto a la composición de las Salas *ad hoc*. Así, el art. 27.2 -art. 17.4 del nuevo Reglamento de 1978-, dispone que

¹⁴⁶ Se trata de una sugerencia sueca, que fue objetada por el Reino Unido. Vid. U.N. Doc. A/8382, parágrafo 137 y ad. 1 parágrafo 9 respectivamente.

¹⁴⁷ SHAHABUDDEEN -Vid. en Recueil 1990, p. 23- estima a este respecto que

«Delicacy in legislative formulation could not really conceal the fact that one way or another the parties were being conceded a substantial, if not indeed a "decisive", say in the selection of particular judges, or it could not be supposed that they were being accorded a right to express views which the Court was free entirely to disregard».

¹⁴⁸ Vid. Asunto de la delimitación de la frontera marítima en el Golfo del Maine entre Estados Unidos y Canadá en Ordenanza de 20 de enero de 1982, CIJ Recueil 1982, p. 4 y ss.

«si ni el Presidente ni el Vicepresidente son miembros, la Sala elegirá su propio Presidente por votación secreta y por mayoría absoluta de sus miembros»¹⁴⁹.

La nueva redacción tiene valor en cuanto significa una aplicación analógica de las disposiciones previstas para el Pleno de la Corte. Se trata de que la misma formación llamada a conocer de un asunto sea quien elija a la persona que vaya a desempeñar las funciones propias de la Presidencia. Con ello se intenta conferir una mayor autonomía a este tipo de Salas respecto del Pleno.

Por otro lado, en 1972 se introdujo una regulación propia en cuanto a la permanencia en la Sala de los miembros de la Corte que hubieran agotado su mandato como miembros después de la constitución de la Sala. En 1946 este punto se regía por las disposiciones generales del Estatuto -art.13.3- y del Reglamento -art.24.4-, por lo que el nuevo art. 26.3 -17.4 del texto de 1978- supone la introducción de un régimen especial en este tema.

En conclusión, la novedad más importante introducida en el Reglamento en el aspecto que nos ocupa -y la que más críticas ha recibido-, es la relativa a la participación de las partes en la composición efectiva de las Salas *ad hoc*. La relación entre estas nuevas disposiciones reglamentarias y el art. 27 de Estatuto plantean el problema, que con gran acierto señala E. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, acerca de la posibilidad de que un tribunal arbitral *de hecho*, emita una Sentencia de la Corte. No hemos de olvidar, en este sentido, que las Salas, independientemente de cual sea el carácter de su

¹⁴⁹ Se trata de una disposición dirigida a todos los tipos de Sala, con excepción de las Salas de Procedimiento Sumario en cuya composición, como ya señalamos -art. 24.1 de 1972- se encuentran siempre como miembros natos el Presidente y el Vicepresidente de la Corte.

formación, dictan Sentencias de la Corte y que por tanto *de iure* son la Corte¹⁵⁰.

2.3.3. Novedades en el Procedimiento.

Las reformas de carácter procedimental pueden resumirse sucintamente señalando su objeto, que es imprimir una mayor rapidez a los procesos ante la Corte, objetivo que, sin embargo, cabe anticipar, no se ha cumplido, ya que en todas las Salas constituidas hasta el momento se han presentado el mismo número de escritos que en los procedimientos ante el Pleno. En realidad, el incumplimiento de la finalidad marcada no es imputable a la Corte, por cuanto son las partes las responsables no solo del número de memorias señaladas, sino también de la extensión de los plazos para el depósito de las mismas.

Era propósito de la reforma reducir la fase escrita del procedimiento a una memoria por cada parte. El plazo para su presentación se hacía depender del instrumento utilizado para la incoación del procedimiento. Si era una demanda unilateral¹⁵¹ el depósito sería sucesivo, dado que el demandado debía preparar su documentación en un plazo prudencial. Si era la notificación de un compromiso, las partes también podían convenir una secuencia sucesiva

¹⁵⁰ E. JIMENEZ DE ARECHAGA "Amendments to rules of procedure of the International Court of Justice" en AJIL, vol. 67, 1973, p. 3.

¹⁵¹ Este instrumento de sometimiento de una controversia a conocimiento de la Corte, suscitaba serias dudas en cuanto a las Salas, hasta que en 1987 Estados Unidos lo utilizó para demandar a Italia en el *asunto de la Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-*, Vid. Ordenanza de 2 de marzo de 1987, en CIJ Recueil 1987, p. 3 y ss.

para la presentación de memorias; pero en su defecto, el Reglamento establecía la regla de la presentación simultánea.

Por otra parte, la aceleración de la fase oral del procedimiento no implicaba su desaparición. Dicha fase existirá siempre, salvo que las partes en la controversia acuerden lo contrario y cuenten con la conformidad de la Sala. El problema en este punto se plantea cuando la voluntad de las partes no coincide con la Sala, en cuyo caso será ésta la que decida, según se desprende de la redacción del art. 92.3 del Reglamento. Aunque hemos de tener en cuenta que una cosa es la redacción de un precepto y otra la oportunidad de usarlo.

La posibilidad atribuida a las partes -también ante el Pleno- para proponer a la Sala modificaciones procesales deriva del art. 34 del Reglamento de 1972 -aunque ya existía en Reglamentos anteriores (art. 31 de 1936 y 1946)-; en 1978 se incorporó en el art.101, en el que se aprecian modificaciones, aunque de carácter formal: se añade una referencia expresa a las Salas y cambia su ubicación pasando a ser la última sección del Título III del Reglamento, dedicado al Procedimiento Contencioso.

La utilidad de esta disposición deriva de la posibilidad de incrementar el número de documentos a depositar en la fase escrita del procedimiento o de acordar el depósito sucesivo de los mismos en lugar de sumultáneo. Sin embargo, a pesar de su contenido esta disposición nunca ha sido invocada. Cuando en las Salas *ad hoc* se ha producido un incremento del número de piezas no ha sido en aplicación del art. 101 del Reglamento de 1978 (34 de 1972) sino del propio compromiso y de los arts. 46 y 92.2 de 1978¹⁵² (45 y 77 de 1972).

¹⁵² En el asunto del *Golfo de Maine*, la Ordenanza de 5 de noviembre de 1982 hace referencia a los artículos mencionados y al art. VI.I del Compromiso de 29 de marzo de 1979, *Vid.*

2.4. Relación entre las Salas *ad hoc* y el Pleno ¿Dependencia o independencia?

Si en los epígrafes anteriores se han ido enunciando las diferencias y semejanzas existentes entre las Salas *ad hoc* y el Pleno de la Corte, bien está que ahora nos ocupemos de la relación existente entre ambas formaciones. En cuanto formación reducida de la Corte, una Sala *ad hoc* no, obviamente, es el Pleno de la Corte, pero tampoco puede afirmarse en términos absolutos que sea un órgano independiente del mismo. En este sentido, habríamos de afirmar como lo hacen M. BEDJAOUI y R. JENNINGS que las Salas forman parte de esta institución como expresión abreviada de aquélla y no como un órgano dotado de autonomía propia¹⁵³.

Contra esta apreciación se ha manifestado R. OSTRIHANSKY¹⁵⁴, quien fundamenta la independencia judicial de la Sala respecto del Pleno en dos imposibilidades: (a) la de apelar ante el Pleno una Sentencia dictada por una Sala; y (b) la de transferir o reenviar un asunto desde la Sala al Pleno de la

en CIJ Recueil 1982, p. 560. En la *ELSI*, Vid. Ordenanza de 17 de noviembre de 1987 en CIJ Recueil 1987, p.185-186 alude a los arts. 92 y 44 del Reglamento. En Burkina Faso/Mali, en la Ordenanza de 12 de abril de 1985, en CIJ Recueil 1985, pp. 10-11, se hace referencia a los arts. III.2 de su compromiso y 44, 46 y 92 del Reglamento y en El Salvador/Honduras la Ordenanza de 13 de enero de 1989 en CIJ Recueil 1990, p.3 hace referencia a los arts. 44 y 92 del Reglamento y 3 del Compromiso.

¹⁵³ Vid. M. BEDJAOUI "Universalisme et regionalisme au sein de la Cour Internationale de Justice: La constitution de Chambres *ad hoc*" en *Liber amicorum*, Colección de estudios jurídicos en homenaje al Prof. Dr.D. José Pérez Montero, Oviedo 1988, p. 170 y R. JENNINGS "Chambers of the International Court of Justice and Courts of arbitration" en *Mélanges Rene-Jean Dupuy*, Humanité et Droit International, Paris 1991, p. 199. Sir R. JENNINGS señala que las Salas *ad hoc*, al igual que el resto de los tipos de Salas de la Corte, no son un cuerpo independiente del Pleno, puesto que no pueden actuar como formación autónoma de aquélla, sino como un brazo de la Corte misma.

¹⁵⁴ R. OSTRIHANSKY "Chambers of the International Court of Justice" en *ICLQ*, v. 37.1, 1988, p. 46.

Corte. La única relación que existe entre ambas formaciones, por tanto, sería la que deriva de la autoridad que el Estatuto confiere a la Corte para constituir sus Salas.

La argumentación del Prof. OSTRIHANSKY, si bien es jurídicamente correcta en líneas generales, debe ser matizada. La primera de sus afirmaciones resulta evidente puesto que las Sentencias de la Corte son inapelables -art. 60 Estatuto- y las de las Salas son, según el art. 27, Sentencias de la Corte. Por otra parte, es cierto que ni el Estatuto ni el Reglamento contemplan la posibilidad de reenvío de un asunto desde la Sala al Pleno.

Sin embargo, no resulta tan evidente que el Pleno de la Corte no pueda conocer de los recursos -revisión e interpretación- que pueda suscitar una Sentencia de una Sala. De concluir la posibilidad de que sea el Pleno y no la Sala la formación competente al respecto, cabría afirmar una cierta superioridad jerárquica del Pleno de la Corte respecto de sus Salas.

Según el Reglamento de la Corte -arts. 80 del de 1946, 85 del de 1972 y 100.1 del de 1978- la formación que dictó Sentencia es la competente para conocer de los recursos a los que este acto jurídico pudiera dar lugar. Esta apreciación es válida para todos los tipos de Salas, aunque plantea problemas su consideración en las Salas *ad hoc*, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de formaciones cuya existencia se agota una vez han emitido Sentencia. Desaparecida la Sala, debería ser el Pleno de la Corte el que conociera de los recursos que se suscitaran, aunque las partes pueden disponer otra cosa en virtud del art.101 del Reglamento de 1978 -31 del de 1946 y 34 del de 1972-. Es decir, cabe suponer que a pesar del art. 100.1 del Reglamento, según el cual habrá de conocer de los recursos suscitados por una Sentencia la formación de la Corte que hubiera dictado ésta, si las partes no prevén nada en

este sentido será el Pleno de la Corte y no la Sala -ya desaparecida- quien conozca del mismo¹⁵⁵.

De la práctica de la Corte no se puede extraer una respuesta general para el problema apuntado, de manera que la solución dependerá de la voluntad de las partes en la controversia. En cualquier caso, aunque los dos rasgos en los que se apoya el Prof. OSTRIHANSKY para fundamentar su opinión fueran irrefutables, no resulta convincente que ambos conduzcan irremediablemente a la afirmación de la independencia de las Salas respecto de la Corte en Pleno. Ello es así porque OSTRIHANSKY olvida, o deja de valorar al menos, aquellos factores que sirven de base a la dependencia de las Salas, a saber: la decisión de la Corte en Pleno de constituir o no la Sala, la permanencia en el Pleno de la Corte de sus miembros permanentes una vez constituida, la necesidad de que sea la CIJ en sesión plenaria la que designe los Jueces que van a componer aquélla y cubra las vacantes, o el que sea el Pleno el que fije el plazo de depósito de las memorias...

Sin embargo, tampoco podemos afirmar una dependencia absoluta de las Salas respecto del Pleno de la Corte, pues las facultades que este ejerce respecto de aquéllas responden principalmente a manifestar necesidades de hecho más que al designio de establecer una relación jerarquizada¹⁵⁶.

Dicho esto, se observa a pesar de todo una cierta contradicción en la actuación de la Corte, que si más veces ha afirmado que la función del Pleno

¹⁵⁵ Aún en el supuesto de que lo prevean, se plantean problemas, de los que nos ocuparemos *infra*, en el Capítulo Quinto dedicado a las Sentencias emitidas por las Salas *ad hoc*.

¹⁵⁶ Así, por ejemplo, la Sala puede prorrogar los plazos indicados por el Pleno para el depósito de las memorias.

respecto de las Salas se agota en el momento de la constitución de éstas¹⁵⁷, otras, ha fomentado la idea de subordinación, probablemente inducido por la necesidad de esa misma construcción. Comprobamos ésto último cuando el Pleno fija los plazos de depósito de las memorias, o decide mediante una Ordenanza que corresponde a la Sala y no al Pleno la competencia sobre una demanda de intervención en un asunto sometido a aquélla¹⁵⁸. ¿Por qué no dejar en manos de la Sala la decisión sobre su propia competencia?

De todo lo anterior cabe concluir, por tanto, que si bien las Salas *ad hoc* son una formación reducida de la Corte en cuya constitución y procedimiento se concede a la voluntad de las partes en la controversia en cuestión una importancia decisiva, no pueden considerarse formaciones absolutamente independientes respecto de la formación ordinaria -el Pleno- de la Corte. La dependencia que apreciamos entre ambas formaciones resulta del todo lógica porque las Salas necesitan del Pleno para empezar a funcionar; pero una vez constituidas, trabajan en general con autonomía.

¹⁵⁷ Vid. Ordenanza de 28 de febrero de 1990, en CIJ Recueil 1990, p. 4 y ss., como se verá *infra*, en el Capítulo Cuarto dedicado a los procedimientos incidentales.

¹⁵⁸ Es el supuesto de la solicitud de intervención nicaragüense en el asunto de la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador, la Corte emite una Ordenanza -Vid. nota anterior-, en lugar de transmitirle a la formación competente el estudio de la misma, como indicaron en la Ordenanza de 28 de febrero de 1990, S. ODA -en su declaración- y T.O. ELIAS -en su opinión disidente- Vid. CIJ Recueil 1990, pp. 7 y ss.; 9 y ss. respectivamente.

Capítulo Segundo: **Composición de las Salas *ad hoc* de la CIJ.**

En el Capítulo anterior hemos estudiado el origen de las Salas de la Corte de La Haya y, en particular, de las Salas *ad hoc*. Los textos reguladores -Estatutos y Reglamentos- fueron, junto con una pequeña dosis de especulación, los mimbres de que nos servimos, dada la imposibilidad de contrastar las disposiciones de los textos con datos tomados de una práctica, inexistente para las Salas «especiales», estrictamente singular para la de Procedimiento Sumario -caso de la interpretación del Tratado de Neuilly- y tardía -1982- para las Salas *ad hoc*.

No obstante, aunque tardía, la práctica de las Salas *ad hoc* se enriqueció notablemente al calor de las modificaciones reglamentarias de 1972, confirmadas en el nuevo Reglamento de 1978, suscitando preguntas y ofreciendo algunas respuestas a problemas -como los planteados en los capítulos que siguen- que habían sido hasta entonces reino de la especulación. Una especulación, dicho sea de paso, no particularmente abundante, por el escaso entusiasmo que podían suscitar en los medios doctrinales instituciones presas en la cárcel del papel que las sustentaban.

En este capítulo, como en los siguientes, nos vamos a centrar en el estudio empírico de las Salas *ad hoc*. Es decir, intentaremos establecer una regulación más precisa de estas formaciones reducidas de la Corte. Para ello, pretendemos completar con la práctica de estas Salas las posibles lagunas dejadas en su regulación por el Estatuto y el Reglamento.

1. CARACTERÍSTICAS DEL ARREGLO JUDICIAL: PRECONSTITUCIÓN Y PERMANENCIA.

Los procedimientos de arreglo jurisdiccional de controversias cuentan con algunos rasgos que los distinguen. Así, el rasgo principal del arreglo judicial, respecto del arreglo arbitral, deriva de su naturaleza. Los órganos judiciales se caracterizan por ser preconstituidos y permanentes, frente a los arbitrales que se constituyen *ad hoc*. Por otra parte, la CIJ en particular tiene naturaleza institucional, por ser el órgano judicial principal de Naciones Unidas.

Por lo demás, unos y otros fundan su competencia en el acuerdo o consentimiento de las partes y no existen entre ambos diferencias sustanciales de procedimiento ni de normativa aplicable, debiendo basarse sus decisiones, igualmente obligatorias y vinculantes, en el Derecho Internacional, a menos que las partes hayan dispuesto otra cosa (*ad ex* que el tribunal decida *ex aequo et bono*)¹.

La principal distinción entre el arreglo judicial y el arbitral es expuesta así por Ch. ROUSSEAU:

«ya que el órgano arbitral tiene carácter ocasional ("mediante Jueces por ellos elegidos"), siendo establecido por un tratado bilateral concluido por los Estados litigantes para la solución de un conflicto determinado con posterioridad al nacimiento de ésta.

¹ S. ROSENNE *The Law and Practice of the International Court*, Leiden, 1965, vol. I, p.8; T. HOLTON *An International Peace Court. Design for a Move from State Crime toward World Law*, La Haya, 1970, pp. 28-29; E. LAUTERPACHT *Aspects of the Administration of International Justice*, Cambridge, 1991, p. 14; LODER *La différence entre l'Arbitrage International et la Justice Internationale*, Paris, 1923; J. MERRILLS *International Dispute Settlement*, Londres 1984, p. 93; A. PIERO SERENI *La Jurisdicción Internacional*, Valladolid, 1969, p. 37; N. POLITIS *La Justice Internationale*, Paris, 1924; S. ROSENNE *The World Court. What Is It and How It Works*, Dordrecht, 1995, 5ªed., p. 8; A. SANCHEZ DE BUSTAMANTE *The World Court*, Nueva York, 1925; S.M. SCHWEBEL "Reflections on the Role of the International Court of Justice", en *Justice in International Law*, Cambridge, 1991, p. 4; N. SINGH *The Role and Record of the International Court of Justice*, Dordrecht, 1989, p. 7.

*por el contrario, el órgano jurisdiccional preexiste al conflicto y no ha sido directamente instituido por los Estados interesados, sino por un tratado plurilateral para un tiempo indefinido y un número indeterminado de litigios».*²

Esta es una distinción clásica, que había sido avanzada en los años veinte por autores como LODER, POLITIS o BUSTAMANTE, quienes indicaban la utilidad de la noción de permanencia para distinguir entre el arbitraje y el arreglo judicial³.

Aplicada esta distinción a las Salas *ad hoc*, puede caerse en la tentación, puesto que estas formaciones comparten con el arbitraje un cierto carácter ocasional, que en ellas subyace el espíritu arbitral, aunque tomen cuerpo en la estructura orgánica de la CIJ y, por ello, se manifiestan formalmente como un método de arreglo pacífico de controversias de naturaleza judicial⁴. Estaríamos ante formaciones arbitrales cuyas Sentencias se consideran, ex. art. 27 del Estatuto, emitidas por el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, con todos los efectos que éstas poseen.

² Ch. ROUSSEAU *Derecho Internacional Público*, 3ª ed., Barcelona 1966, p. 499.

³ LODER *La différence entre l'Arbitrage international et la Justice Internationale*, Paris, 1923; N. POLITIS *La Justice Internationale*, Paris, 1924; A. SANCHEZ DE BUSTAMANTE *The World Court*, Nueva York, 1925.

⁴ Aunque algunos autores consideren que en realidad se trata de un procedimiento de solución jurisdiccional de controversias internacionales «*a medio camino entre el arbitraje y el arreglo judicial*». Entre ellos, M. BEDJAOUI "Remarques sur la creation de Chambres ad hoc au sein de la Cour Internationale de Justice" en SOCIETE FRANÇAISE DE DROIT INTERNATIONAL «*LA JURIDICTION INTERNATIONALE PERMANENTE*», Colloque de Lyon, Paris 1987; M. BEDJAOUI "Universalisme et Regionalisme au sein de la Cour Internationale de Justice: La constitution des Chambres «ad hoc»" en *Liber amicorum*. Colección de Estudios Jurídicos en homenaje al Prof. Dr. D. José PEREZ MONTERO, Oviedo 1988, p. 165; R.J. DUPUY "La réforme du Reglement de la Cour Internationale de Justice" en AFDI, p. 270; J.N. HYDE "A Special chamber of the International Court of Justice - an alternative to ad hoc arbitration" en AJIL, 1968, vol. 62, núm.2, pp. 439-441; Sir R. JENNINGS "Chambers of the International Court of Justice and Courts of arbitration" en *Humanité et Droit International. Mélanges René-Jean Dupuy*, Paris 1991, p. 197; S.J. TOOPE "Pragmatic Compromise or mere Transaction? The Use of Chamber Procedures in International Adjudication", en VJIL, 1990-1, p. 66.

Sin embargo, esta conclusión sería temeraria, de sostenerse exclusivamente sobre la base de su formación «*ocasional*». Además, la Sala *ad hoc* es ocasional sólo hasta cierto punto, pues la Sala, en efecto, ni está preconstituída ni es permanente; pero la elección de sus miembros está sometida a límites que son desconocidos para los órganos propiamente arbitrales.

2. PARTICULARIDADES DE LA COMPOSICIÓN DE LAS SALAS *AD HOC*.

El Estatuto de la CIJ -art.2- caracteriza a sus miembros por la independencia e imparcialidad. Características ambas de las que deberán gozar los Jueces de cualesquiera formaciones de la Corte. En cuanto a la primera de ellas, la independencia, en particular frente al Estado del que son nacionales, es ocioso recordar que los Jueces no son sus representantes y no reciben sus órdenes. La imparcialidad es un efecto de la independencia y una condición inherente a la de Juez. Es por eso que el art. 31.1 del Estatuto proclama la permanencia de los Jueces que posean la nacionalidad de una de las partes en la controversia. La posibilidad estatutaria (art. 31.4) de designar un Juez *ad hoc* cuando exista uno nacional de la otra parte, lejos de poner en duda la imparcialidad de los Jueces, no hace sino reforzarla. Realmente esa posibilidad ampara a todas las partes en la controversia cuando ninguna cuenta con un nacional propio en la Corte y, además, puede emplearse para designar como Juez a un nacional de otro Estado, lo que permite proponer que detrás de la institución figuran otros objetivos aún más importantes que la salvaguardia de las apariencias de imparcialidad. Esto, en todo caso, cuenta también con una previsión reglamentaria -art. 32- que imposibilita el ejercicio de la Presidencia

de la Corte por un nacional de una de las partes en la controversia en causa, disposición igualmente aplicable a las Salas contempladas en el art. 26.2 del Estatuto. Así se infiere del art.18.4 del Reglamento, por cuanto el art. 32 de este texto lo concibe como un impedimento para el ejercicio de la Presidencia⁵.

La diferencia fundamental entre el Pleno y las Salas, en lo que a su composición se refiere, estriba en el número de miembros que componen una y otra formaciones, así como en el procedimiento para su elección. Ambos puntos son objeto de consideración posterior -*Vid. infra* epígrafes 2.1 y 2.2-. Además, con la modificación del Reglamento que tiene lugar en 1972 y se consolida en el nuevo Reglamento de 1978 se advierte la permanencia en esta formación de los miembros de la Corte que fueron designados para formar parte de ella y con posterioridad a esta elección perdieron su condición de tales⁶.

2.1. Número de miembros de las Salas *ad hoc* .

La principal diferencia que existe entre el Pleno y las Salas *ad hoc* de la CIJ se encuentra en el número de miembros que componen ambas formaciones y, fundamentalmente, en el procedimiento a seguir para su designación. Tanto el número de miembros del Pleno de la Corte, como el *quorum* mínimo requerido para su constitución, vienen expresamente fijados en el Estatuto -arts. 3.1 y 25.3-. Por el contrario, no encontramos una indicación

⁵ Art. 18.«4. Si el Presidente de una Sala no puede participar en ella o presidirla, la presidencia será asumida por el miembro de la Sala más antiguo en el orden de precedencia y que no esté impedido para actuar»

⁶ Art. 17.4 del Reglamento de 1978: « Los miembros de una Sala constituida en virtud del presente artículo, que sean reemplazados a causa de la terminación de su periodo de funciones, conforme al artículo 13 del Estatuto, continuarán formando parte del Tribunal en todas las fases del asunto cualquiera que sea el momento en que se encuentre»

semejante en relación con las Salas *ad hoc*, puesto que ni el Estatuto ni el Reglamento contemplan de manera explícita el límite máximo o mínimo de Jueces que deben componer una Sala *ad hoc*. Lo único que el Estatuto señala tras facultar a la Corte para «*constituir en cualquier tiempo una Sala para conocer de un negocio determinado*» es que «*La Corte fijará, con la aprobación de las partes, el número de magistrados de que se compondrá dicha Sala*» (art. 26.2)⁷.

A pesar de ello, si interpretamos gramaticalmente el art. 26.2 del Estatuto, deducimos el número mínimo de Jueces que compondrán una Sala. Conforme al precepto citado una Sala de este tipo estará formada siempre por un mínimo de tres miembros, dado que este texto emplea este último término en un número plural -la Sala *unipersonal* sería un despropósito- y el número par plantearía problemas que conviene evitar en el proceso de toma de decisiones.

En cuanto al límite máximo de miembros de estas formaciones resulta obvio que habrá de ser menor que el número total de los que componen la Corte, pues de no ser así estaríamos ante una sesión plenaria y no ante una formación reducida de la Corte. Pero podemos ser aún más precisos considerando que según el art. 25.3 del Estatuto de la CIJ una sesión plenaria está debidamente constituida cuando se encuentran presentes nueve de sus miembros, podría sugerirse que éste es el número máximo de Jueces que podría componer una Sala *ad hoc*. No obstante, la voluntad de las partes será determinante y hay que suponer que se inclinará por un número más reducido. La práctica confirma esta apreciación, dado que todas las Salas constituidas hasta el momento se han formado por cinco miembros. De no ser así, la preferencia por esta formación de la Corte perdería una buena parte de su razón

⁷ El art. 17.3 del Reglamento también hace referencia a la preceptiva aprobación de las partes, en los siguientes términos «*Una vez que el Tribunal haya determinado, con el consentimiento de las partes, el número de sus miembros que constituirán la Sala, se procederá a su elección de la forma prevista en el art. 18, párrafo 1, del presente Reglamento*»

de ser y casi podría sospecharse que su elección respondía más al propósito de exclusión de los Jueces menos acomodados a la visión del asunto compartida por las partes.

En todo caso, los textos consienten la mayor flexibilidad. Mientras que el Estatuto dispone que las Salas de Procedimiento Sumario serán formaciones de cinco miembros y las Salas «especiales» se encontrarán compuestas por un mínimo de tres, estando facultada la Corte -por el art. 16.1 del Reglamento-, para decidir el número apropiado en cada caso concreto⁸, las Salas *ad hoc* podrán formarse con un número de miembros variable, dependiendo de cada asunto, ya que la decisión acerca de este aspecto corresponde a la Corte, aunque a diferencia de las Salas «especiales», en este caso se necesita aprobación de las partes.

2.2. Procedimiento de elección de los miembros de las Salas *ad hoc* : participación de las partes.

La otra gran distinción entre las formaciones que nos ocupan es el procedimiento de selección de sus miembros. En primer lugar, es necesario subrayar que el número de candidatos para formar parte del Pleno es amplio y abierto, mientras que el de los sujetos elegibles para la composición de una Sala se reduce a los quince del Pleno. Por otra parte, en este último supuesto, el de las Salas -no sólo *ad hoc*, sino también el resto de las contempladas por el Estatuto-, los miembros de la Corte reúnen la doble cualidad de electores y

⁸ La Sala «especial» formada para conocer de asuntos medioambientales ha sido constituida con siete miembros. Vid. nota nº 125 del Capítulo anterior.

elegibles, a diferencia de lo que ocurre en el trámite -ciertamente heterogéneo- a seguir para la selección de los miembros del Pleno⁹

Si la decisión acerca del número de miembros de la Sala -según el art. 26.2 del Estatuto- corresponde a la Corte previa consulta y consentimiento de las partes, el nuevo Reglamento de 1978 ha ampliado, además, el contenido de esas consultas, al indicar que el Presidente de la Corte se informa acerca de las opiniones de las partes sobre la composición de aquella y, una vez recabada ésta, ha de comunicarla a la Corte (art. 17.2)¹⁰.

La compatibilidad de estas disposiciones reglamentarias con el Estatuto de la Corte es muy discutida¹¹. Si interpretamos restrictivamente el art. 26.2 del Estatuto concluiremos que este precepto prohíbe la participación de las partes en cualquier decisión distinta a la designación del número de miembros

⁹ En este último caso, la condición de electores recae tanto en la AGNU como en el CdS -art. 8 Estatuto-, mientras la de elegibles la poseen aquellos cuyos nombres aparecen en la lista que, por orden alfabético, prepara el Secretario General de las Naciones Unidas con los candidatos presentados por los grupos nacionales del TPA -ex art. 5.1 del Estatuto-.

¹⁰ Art. 17 del Reglamento: «2. Cuando las partes estén de acuerdo, el Presidente se informará sobre sus puntos de vista en cuanto a la composición de la Sala e informará de ello al Tribunal. Asimismo adoptará todas las medidas que sean necesarias para asegurar la aplicación del artículo 31, párrafo 4, del Estatuto». Esta disposición era el art. 26.2 del Reglamento de 1946, enmendado en 1972.

¹¹ Vid. entre otros R.J. DUPUY "La Réforme du Règlement de la Cour" en AFDI, 1972, pp. 265-283; M. BEDJAOUI "Universalisme et régionalisme....op. cit. p. 157; E. HAMBRO "Quelques observations sur la révision du Règlement de la Cour Internationale de Justice" en Melanges Rousseau, Paris, 1974, pp. 128-131.; E. JIMENEZ DE ARECHAGA "The Amendments to the Rules of Procedure of the International Court of Justice" en AJIL, vol. 67-1, p. 3 y ss. y "Les amendements au Règlement de la Cour Internationale de Justice" en Conference Commémorative Gilberto Amado, Ginebra 1972, p. 29; M. LACHS "Some comments on ad hoc Chambers of the International Court of Justice" en Humanité et Droit International. Mélanges René Jean Dupuy, Paris 1991, p. 206; E. LAUTERPACHT Aspects of the Administration of International Justice, Cambridge 1991; McWHINNEY "Special Chambers within the International Court of Justice. The Preliminary Procedural aspect of the Gulf of Maine case" en SJIL&C, 12, 1985, p. 8; M. SHAHABUDEEN en la Ordenanza de 13 de diciembre de 1989 en CIJ Recueil, 1989, p. 19 y ss; S. ROSENNE The World Court....op. cit., p. 222; S.M. SCHWEBEL "Chambers of the International Court of Justice Formed for Particular Cases", en International Law at a Time of Perplexity: Essays in Honour of Shabtai Rosenne, Y. DINSTEIN (ed.), Dordrecht, 1989; E. ZOLLER "La première constitution d'une chambre spéciale par la Cour Internationale de Justice: Observations sur l'Ordonnance du 20 janvier 1982", en RGDIP, t. 86/1982/2, p.318 y ss. C. ESCOBAR op. cit. p. 300 entiende que las consultas previas se configuran como una forma de manifestación del consensualismo y garantizan la confianza de las partes en el órgano judicial.

que compondrá la Sala¹². Pero en contra de esta opinión cabe aducir. 1) que el Estatuto no limita el alcance de las consultas entre el Presidente de la Corte y las partes¹³ y, por lo tanto, no puede hablarse de contradicción entre el Estatuto y el Reglamento, sino más bien de un aspecto acerca del cual el Estatuto guarda silencio y sobre el que el Reglamento se pronuncia; y 2) que, justamente, la finalidad de la reforma reglamentaria se concreta en este punto en facilitar una mayor intervención de las partes, con objeto de aproximar estas Salas a los Estados¹⁴. Como manifestara M. SHAHABUDDEEN, tan sólo se había cambiado el procedimiento que conducía a la composición de las Salas *ad hoc* para hacerlo más atractivo¹⁵. Ahora bien, una cosa es la conformidad literal del Reglamento con el Estatuto y otra su práctica.

De las disposiciones reglamentarias se desprende que la función del Presidente es la de informarse acerca de las preferencias de las partes en la controversia y **no** la de negociar con ellas la composición de la Sala¹⁶, por lo

¹² R.J. DUPUY "La réforme du Règlement de la Cour" en AFDI, 1972, p. 272.

¹³ E. JIMENEZ DE ARECHAGA "The Amendments to the Rules of Procedure of the International Court of Justice" en AJIL, vol. 67-I, p.3 y "Les amendments au Règlement de la Cour....op. cit. p. 29; L. MILLAN MORO "El Juez ad hoc en la Corte...op. cit. p. 247.

¹⁴ R.J. DUPUY "La réforme...op. cit. p. 270. Este autor señala que para ello se introduce el espíritu del arbitraje en la institución judicial. M. SHAHABUDDEEN Opinión disidente a la ordenanza de 28 de febrero de 1990 en CIJ Recueil 1990, p.23; G. GUYOMAR *Commentaire du Règlement de la Cour Internationale de Justice adopté le 14 avril 1978. Interpretation et pratique*, Paris 1983, p. 71, indica que la finalidad de los cambios introducidos en las Salas *ad hoc*, responden al objeto de facilitar y simplificar el recurso a este tipo de Salas que «*se révèlent bénéfiques et favorisent l'utilisation plus fréquentes des procédures judiciaires de règlement des différends entre Etats*»

¹⁵ *Vid.* M. SHAHABUDDEEN Opinión disidente a la Ordenanza de 28 de febrero de 1990, en CIJ Recueil 1990, pp. 25-32. La crítica formulada por este miembro de la Corte está jurídicamente bien construida, es sólida, aunque quizá no tiene presentes los motivos de oportunidad política y sobre todo el criterio de utilidad. Es fundamental tener instituciones que respeten sus textos constitutivos y se comporten de un modo responsable jurídicamente. Sin embargo ¿de qué nos sirven si no son útiles, si no responden a las necesidades de la sociedad a las que se dirigen? Ahora bien, no es lógico justificar por esta vía cualquier modificación sobre todo si conlleva la desnaturalización del órgano que nos ocupa. Habría que intentar que la utilidad de éste derive de una aplicación cabal de los textos que lo regulan.

¹⁶ H. MOSLER op. cit. p. 457.

que en el supuesto de que los Estados partes en la controversia no se muestren de acuerdo en cuanto a los miembros de la futura Sala, el Presidente no podrá proponer soluciones alternativas y, de hacerlo, habría que entender su actitud como una extralimitación en el cumplimiento de las funciones que le atribuye el Reglamento, particularmente a la luz del art. 18.1 del mismo Reglamento¹⁷.

Sin embargo, se ha acusado a la Corte de formar Salas entregándose a la voluntad de las partes más allá de lo que su propio decoro podía digerir, haciendo una farsa del procedimiento reglamentariamente previsto y alterando su misma naturaleza como órgano judicial. Esta crítica no encuentra sus trazas en las Ordenanzas de Constitución de las Salas, ya que en éstas únicamente se indica que se ha procedido a las consultas pertinentes con las partes, así como la decisión final de la Corte; por otro lado, las deliberaciones de la Corte -ex art. 54.3 del Estatuto y 21.1 del Reglamento- son y permanecerán secretas. No obstante, el hecho de que algunos miembros de la Corte presentes en las deliberaciones, acusen en sus opiniones el papel representado por las partes -y ninguno lo desmienta- permitiría establecer la evidencia de ese hecho, que se hace aparatoso en la lectura que ciertos Estados han hecho de su papel en la composición de las Salas en los *compromisos* concertados para acudir a ellas.

¹⁷ Art. 18.1 «Las elecciones para todas las Salas serán por votación secreta. Los miembros del Tribunal que consigan mayor número de votos y obtengan la mayoría de los miembros que compongan el Tribunal en el momento de la elección serán declarados elegidos. Para cubrir las vacantes se procederá, si fuere necesario, a varias votaciones limitando cada una al número de vacantes que queden por cubrir». La aplicación de esta disposición a la elección de los miembros de una Sala *ad hoc* está expresamente prevista por el art. 17.3 del Reglamento. Vid. en este sentido la opinión disidente de P.D. MOROZOV y Abdallah EL-KHANI en la Ordenanza de 20 de enero de 1982, en el asunto de la *delimitación de la frontera marítima en el Golfo del Maine* en CIJ, Recueil 1982, pp. 11 y ss. M. SHAHABUDDEEN, por otra parte, opina que aunque el Estatuto no prohíbe expresamente las consultas previstas por el art. 17.2 del Reglamento, de la naturaleza de la Corte en cuanto órgano judicial se desprende la imposibilidad de la participación de las partes en la composición del órgano que va a juzgar de la controversia. A esta afirmación añade SHAHABUDDEEN una salvedad: la relativa a la elección de Jueces *ad hoc* que tiene un fundamento estatutario. Vid. Opinión Disidente de Mohamed SHAHABUDDEEN a la Ordenanza de 28 de febrero de 1990, en CIJ Recueil 1990, p. 41.

Especialmente ilustrativo a este respecto fue lo ocurrido en la composición de la Sala que había de conocer la diferencia sobre *la delimitación marítima del Golfo de Maine* entre Estados Unidos y Canadá

La Sala constituida para conocer de la delimitación de la frontera marítima en la zona del Golfo de Maine fue controvertida por distintos motivos: (1) al ser la primera en el tiempo, despertaba expectación la aplicación de la nueva regulación de este tipo de Salas; y, 2) la libertad que las partes se arrogaron para interpretar las disposiciones del Estatuto y del Reglamento de la Corte -que se tradujo en el Compromiso de 29 de marzo de 1979- sobrepasó toda previsión, valiéndoles las críticas de la doctrina y de los propios miembros de la CIJ¹⁸. Las partes depositaron en la Secretaría de la Corte, junto con el propio compromiso el resto de los Acuerdos celebrados entre ellas¹⁹, de ahí que un Juez, P.D. MOROZOV lo calificara de *ultimatum*²⁰.

Buena prueba de lo discutida que resultó la constitución de esta Sala es la Ordenanza de 20 de enero de 1982. Por ella, la Corte aceptaba proceder a dicha constitución, siguiendo los pareceres de las partes en la controversia. Además, se insertaban las respuestas aportadas por Estados Unidos y Canadá a unas cuestiones que les fueron planteadas por la Corte a ambos Estados mediante una carta de 18 de diciembre de 1981²¹.

¹⁸ Vid. la Declaración de S. ODA y las Opiniones disidentes de MOROZOV y EL-KHANI a la Ordenanza de 20 de enero de 1982, en CIJ Recueil 1982, pp. 10 y ss; también la de SHAHABUDEEN a las ordenanzas de 13 de diciembre de 1989, en CIJ Recueil 1989, pp. 169 y ss y de 28 de febrero de 1990, en CIJ Recueil 1990, pp. 4 y ss.

¹⁹ El texto de los distintos acuerdos celebrados entre Estados Unidos y Canadá se encuentran transcritos en el apéndice documental de este trabajo.

²⁰ Vid. la Opinión Disidente de P.D. MOROZOV, a la Ordenanza de 20 de enero de 1982, en CIJ Recueil 1982, p. 12.

²¹ Vid. Ordenanza de 20 de enero de 1982 en CIJ Recueil 1982, p.6. Las preguntas en cuestión fueron cuatro: (1) la posible conciliación entre el art. III del Acuerdo de 29 de marzo de 1979 con los arts. 26.2 del Estatuto y 17.3 y 18.1 del Reglamento en cuanto a la provisión de vacantes «*in a manner acceptable to the Parties*» -Vid. *infra* parágrafo 3.1.- ; (2) la compatibilidad

Los embajadores en La Haya de los dos Estados respondieron a las cuestiones formuladas por la Corte mediante una carta conjunta. En ella concluían no sólo la compatibilidad sino también la complementariedad del Estatuto y el Reglamento con el Acuerdo firmado por Estados Unidos y Canadá, de 29 de marzo de 1979.

La Corte, en la Ordenanza de 20 de enero de 1982, transcribe las respuestas aportadas por las partes a las cuestiones planteadas. Sin embargo no se pronuncia acerca de las mismas. Es decir, decide acceder a las pretensiones de los dos Estados sin declarar si considera satisfactorias o no las explicaciones dadas. Unicamente señala que se procederá a su examen en la Sala del Consejo. Aunque tanto el Estatuto como el Reglamento prevén -en los arts. 54.3 y 21.1 respectivamente-, que las deliberaciones de la Corte se celebrarán en privado y permanecerán secretas, de las opiniones formuladas a esta Ordenanza se desprende que el citado examen se produjo y no fue nada versallesco. Sin duda, como en tantas otras ocasiones, lo más interesante de esta Ordenanza sea, no ya su contenido en cuanto tal, sino las declaraciones y opiniones disidentes que se le anexan. Así, en primer lugar aparece una declaración de Shigeru ODA²² seguida de las opiniones disidentes de P. D. MOROZOV²³ y A. EL-KHANI²⁴.

de los arts. 31 del Estatuto y 35 del Reglamento con la disposición inserta en el compromiso, según la cual la notificación del nombre del Juez *ad hoc* designado por Canadá se fijaba como determinante tanto para la constitución de la Sala como para el comienzo del plazo para depósito de las memorias de las partes; (3) la relación entre el art. II.4 del Acuerdo (por el que las partes en la controversia reconocen la Sentencia de la Sala como definitiva y obligatoria) y el 27 del Estatuto -*Vid. infra* Capítulo Quinto-; y, (4) la aparente oposición del art. VII.2 del Acuerdo (cuyo contenido podía interpretarse como previendo la posibilidad de que una tercera parte reexaminara la decisión que adoptara la Sala) con los arts. 59 y 60 del Estatuto -*Vid. infra* Capítulo Quinto-.

²² *Vid.* en CIJ Recueil 1982, p. 11.

²³ *Vid.* en CIJ Recueil 1982, p. 12.

²⁴ *Vid.* CIJ Recueil 1982, p. 13.

El Juez japonés S. ODA, declara haber votado a favor de la Ordenanza, aun conociendo que la Corte ha aceptado los deseos de las partes respecto de la composición de la Sala «*for reasons best known to itself*»²⁵.

Por su parte, P.D. MOROZOV, tras señalar que el Estatuto de la Corte confiere a esta institución un poder discrecional para constituir una Sala *ad hoc*, se opone a que la Corte proceda al trámite señalado antes de que tenga lugar la renovación parcial de este órgano jurisdiccional. El mismo Juez considera errónea la interpretación que la CIJ aportó al art. 26.2 del Estatuto. Conforme a dicha interpretación, las partes pueden elegir no sólo el número de miembros, como cabría deducir del tenor literal del 26.2, sino también proceder a la designación concreta de los Jueces «*and even present these proposals to the Court in the form of some kind of "ultimatum"*». Todo ello a pesar de que, según el Reglamento, habrán de designarse por escrutinio secreto. Por último, MOROZOV no considera convincentes las respuestas remitidas por los embajadores de Estados Unidos y Canadá a las cuestiones planteadas por la Corte. El motivo de su desacuerdo se encuentra en que considera las contestaciones aportadas como repetición y confirmación de la incorrecta presunción señalada antes, conforme la cual las partes en una controversia pueden indicar formalmente a la Corte los miembros que pueden ser elegidos para formar parte de la Sala que va a conocer del asunto en cuestión. La consecuencia de esta presunción, para MOROZOV es la siguiente

«In this situation, the sovereign right to the Court to carry out the election independently of the wishes of the Parties, by secret ballot in accordance with the provisions of the Statute and Rules of Court becomes in substance meaningless»

El contenido de la opinión disidente formulada por el Juez sirio Abdullah EL-KHANI no difiere de la anterior. Este miembro de la Corte se centra

²⁵ *Id.* nota nº 22.

en el primero de los motivos señalados por MOROZOV como causa del sentido negativo de su voto a la Ordenanza que nos ocupa. Es decir, alude a la elección del francés A. GROS para formar parte de la Sala.

El problema de la designación del miembro de la Corte, A. GROS, radicaba en que los Estados partes en la controversia sabían que no era candidato a la reelección y eran conscientes de que, fruto de la renovación parcial de la Corte, sería elegido otro Juez francés, G. LADREIT DE LACHARRIERE, en su puesto. De modo indirecto, con la constitución de una Sala formada por un Juez que no va a ser reelegido y la designación para el Pleno de otro miembro de su misma nacionalidad, se está permitiendo, según la opinión de este autor, la presencia de dos Jueces de la misma nacionalidad en la Corte: uno del Pleno y otro de la Sala, cuyo mandato como miembro de la formación ordinaria de esta institución ya expiró, contraviniendo con ello el art. 2 del Estatuto. A esta crítica cabe responder que también existen dos miembros de la Corte de la misma nacionalidad cuando se designa un Juez *ad hoc* de nacionalidad coincidente con la de uno de los Jueces permanentes de la Corte y ello nunca suscitó problema alguno²⁶.

En este punto hemos de distinguir claramente dos actitudes que pueden mantener las partes. En primer lugar, cabe que pretendan una mera **influencia** -ejercer una persona o cosa predominio, o fuerza moral en el ánimo-, respecto de la composición de la Sala concreta, lo que podemos considerar legítimo, como ocurrió en la Sala que juzgó de la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador²⁷; pero también es posible que

²⁶ Vid. *infra* par. 2.5.

²⁷ N. SINGH en *The Role and Record...*, op. cit., p. 112 indica que también El Salvador y Honduras expusieron al Presidente sus intenciones acerca de la composición de las Salas y sus detalles. Según este Juez no había acuerdo escrito, pero sugirieron que de no aceptarse sus deseos acerca de la composición acudirían al arbitraje.

su intención sea la de ejercer **presión** -fuerza o coacción que se hace sobre una persona o colectividad²⁸-; como hicieron Estados Unidos y Canadá, para ver finalmente cumplidos sus deseos, lo que será ilegítimo. Cabe establecer una diferencia de carácter formal entre ambos conceptos. Estaremos ante una u otra en función de la actitud de las partes respecto de la composición deseada. Observaremos la primera si las partes se limitan a señalar la formación que pretenden que conozca su caso, intentando en alguna medida persuadir a los miembros de la Corte para que su decisión final se acomode a sus expectativas. Hablaremos por el contrario de **presión** cuando la conformación de la Sala -total o parcialmente- se plantea como una *conditio sine qua non* para el sometimiento a esta formación de la controversia. En este punto hemos de distinguir si la exigencia se plantea como una *conditio sine qua non* por escrito, en cuyo caso sí se puede hablar de presión, o por el contrario, se realiza *sotto voce*. Si la actitud de las partes se manifiesta de forma verbal parece que el elemento coaccionador es más leve, en la medida en que es menos notorio, mientras que si se realiza con papeles por medio es más grave.

El trámite de la selección de los componentes de la Sala, una vez que el Presidente de la Corte ha informado a sus miembros acerca de las preferencias de las partes, se decide mediante una elección por votación secreta. Así lo dispone el art. 18.1 del Reglamento de 1978, conforme al cual, resultarán miembros de la Sala aquellos Jueces que consigan la mayoría simple de votos de los miembros de la Corte presentes en el momento de la elección. M. SHAHABUDDEEN estima que la influencia de los Estados en esta elección supone una cesión de una parte esencial del poder judicial, que resulta patrimonio de la Corte, ya que aquél no comprende sólo la potestad de conocer, sino también de decidir qué miembros de la Corte participarán en un asunto

²⁸*Id.* ambas definiciones en el Diccionario de la Real Academia Española, 21ª ed. 1994, pp. 1164 y 1662 respectivamente.

concreto, inscribiéndose este último en el proceso por el que la Corte fija las modalidades de ejercicio de su poder judicial²⁹. Además, entiende que esta transferencia es ilícita, por cuanto los destinatarios de la misma son órganos extraños a ella, como son los Estados cuya controversia se pretende someter al conocimiento de una Sala.

Considera M. SHAHABUDDEEN, acertadamente a nuestro entender, que con ello se confiere a las partes un derecho de selección de los miembros de la Sala que no les corresponde, ya que el Estatuto atribuye esta facultad a la Corte y no a las partes, y que por tanto se está transgrediendo el Estatuto. Derecho de selección con una doble vertiente: a) positiva, fruto de una interpretación flexible del art. 17.2 del Reglamento; y, b) negativa o de recusación, como derecho de veto respecto de los Jueces que no desean que formen parte de la Sala. El Reglamento no contiene expresamente esta última vertiente, pero resulta evidente su existencia, puesto que las partes al expresar sus preferencias respecto de la composición de la Sala al Presidente de la Corte, le harán saber tanto las favorables como las recusatorias, aunque sea por omisión³⁰.

La práctica ha demostrado que el procedimiento reglamentario no se respeta desde un punto de vista sustancial, aunque sí formalmente. Así, en el *asunto de la delimitación de la frontera marítima en la zona del Golfo de Maine -Estados Unidos/Canadá-*, las partes impusieron su opinión, consiguiendo que la composición efectiva de la Sala respondiera a sus deseos³¹.

²⁹ Vid. M. SHAHABUDDEEN Opinión disidente a la Ordenanza de 28 de febrero de 1990, en CIJ Recueil 1990, p. 43.

³⁰ *Id.* nota anterior, p. 55.

³¹ A este respecto el Juez T.O. ELIAS señala que el procedimiento de selección de los miembros de esta Sala se presentó por el presidente a la Corte, después de las conversaciones con las partes, como un *fait-accompli*. Vid. en T.O. ELIAS *The United Nations Charter and the World Court*, 1989, p. 212. Curiosamente, quedaron fuera de la composición

En esta controversia las partes plantearon la composición de la Sala como condición *sine qua non* de constitución de la misma. Es decir, de no aceptarse los criterios de Estados Unidos y Canadá al respecto, recurrirían a un tribunal arbitral³². Tal y como señala M. SHAHABUDDEEN, para que puedan considerarse válidas, las elecciones deben ser libres³³. El nuevo sistema que aparece en el Reglamento de 1978 implica además una violación de la regla del secreto, en la medida en que el resultado de la elección se conoce antes de proceder al propio sufragio³⁴. La elección secreta tampoco será libre, por cuanto existen presiones externas sobre los electores. Por tanto ¿sería válida una elección en la que únicamente se mantiene el secreto del procedimiento formal? ¿Podría ser nula la constitución de una Sala por violación de estos requisitos necesarios que conlleva el sufragio libre y secreto? Ausente la elección de las características prescritas por el Reglamento, una respuesta se insinúa: Los resultados se conocen antes de realizarse la votación, por tanto formalmente se respeta lo preceptuado, pero no su sustancia.

En sentido contrario, cabe aducir que la Corte puede estimar inadmisibles las condiciones impuestas por las partes y decidir en consecuencia

elegida dos miembros de la Corte cuyos conocimientos sobre Derecho del mar eran notorios: S.ODA y N. SINGH.

³² Artículo II del Acuerdo de 29 de marzo entre Estados Unidos y Canadá *visant à soumettre au règlement obligatoire le différend relatif à la délimitation de la frontière maritime dans la région du Golfe du Maine*. Ver en ICJ Pleadings, oral arguments, documents, pp. 8-9. El Texto de estos acuerdos se encuentra transcrito en el Apéndice documental.

³³ Vid. CIJ Recueil 1989 p. 44.

³⁴ Respecto de las limitaciones de la Corte en el ejercicio de su función judicial, resulta especialmente clara la CPJI, en el asunto de *las Zonas francas de la Alta Savoya y del Pais de Gex* : en su ordenanza de 19 de agosto de 1929 -CPJI Séries A/B, nº22, p.13, la Corte responde a la demanda de las partes de información oficiosa «*Considérant ... qu'il importe néanmoins d'établir clairement que les Compromis par lesquels la Cour est saisie de différends internationaux devraient désormais être rédigés en tenant exactement compte des formes dans lesquelles il appartient à la Cour de manifester son opinion selon les termes mêmes des actes constitutionnels qui régissent son activité et de telle sorte que la Cour puisse connaître naturellement que ces différends sans recourir, comme dans le cas actuel à une construction qui doit être considérée comme strictement exceptionnelle*»

que no procede la constitución de la Sala solicitada, lo que puede hacer en todo caso, sin tener que motivar su actitud³⁵. También es posible que constituya esta formación, pero puesto que los miembros de la Corte son libres de votar en conciencia y resistir a la **influencia** o la **presión** exteriores antes apuntadas, el resultado de esta elección podría no adecuarse a las preferencias expresadas por las partes, en cuyo caso la Corte constituirá una Sala *ad hoc*, aunque con una composición distinta de la pretendida³⁶ y expresada por los Estados enfrentados. La Corte es igualmente libre de observar o no los deseos de las partes en lo que a la composición de la Sala hace referencia en el supuesto de que aquéllas hubieran hecho depender del resultado de esta elección el sometimiento de la controversia a una Sala *ad hoc*; aunque en este último

³⁵Vid. E. ZOLLER "La première constitution d'une chambre...op. cit., p. 322; M. BEDJAOUI "Remarques sur la création des chambres ad hoc au sein de la Cour Internationale de Justice", en *Colloque de Lyon*, p. 77, señala también que la Corte conserva jurídicamente el poder de elegir a los miembros de la Sala por sufragio secreto. P. BRETON "Vers un élargissement du rôle de la Cour Internationale de Justice? La déclaration américano-soviétique su 23 septembre 1989 relative à une initiative commune à propos de la CIJ", en AFDI, 1990, vol. XXXVI, p. 334; E. HAMBRO en "Will The Revised Rules of Court Lead to Greater Willingness on the Part of Prospective Clients?", en L.GROSS (ed.) *The Future of the International Law of Justice*, vol.I, Nueva York 1976, pp. 365-373, afirma que la Corte podrá negarse a las pretensiones de las partes, aunque para ello necesitará importantes razones. Por su parte G.WILNER "Comments", en *The Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice: A Turning point? Proceedings of the Roundtable in honour of Luis B. Sohn*, Bruselas, 1990, p. 74, indica que el uso de las Salas de la Corte muestra que las partes en una controversia pueden de alguna manera seleccionar a aquellos que van a decidir aquélla. A pesar de ello, la creación de una Sala es una prerrogativa de la Corte que podrá acceder o no a la petición de las partes. En igual sentido se pronuncia P.D. MOROZOV, en su opinión disidente a la constitución de la Sala que conoció de la delimitación de la frontera marítima en el Golfo de Maine, entre Estados Unidos y Canadá, Vid. Ordenanza de 20 de enero de 1982, CIJ Recueil 1982, p. 12. También S. ODA en su Declaración a la Ordenanza de 8 de mayo de 1987 de constitución de la Sala que conoció de la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima entre Honduras y El Salvador*, vid en CIJ Recueil 1987, p. 13, señala que en la constitución de una Sala del 26.2 es estatutariamente necesario el consentimiento de las partes para fijar el número de miembros. Sin embargo, aunque el Presidente debe informarse del deseo de las partes acerca de la composición de la Sala, la Corte es soberana procesalmente pudiendo por ello elegir cualquier composición.

³⁶Vid. M. BEDJAOUI "Remarques sur la creation des chambres ad hoc au sein de la Cour Internationale de Justice" en *Colloque de Lyon*, p. 77; M. LACHS "Some comments on ad hoc chambers of the International Court of Justice" en *Humanité et Droit International. Mélanges René Jean Dupuy*, Paris 1991, p. 206; E. ZOLLER "La première constitution d'une chambre...op. cit. p. 322. En igual sentido que los anteriores se pronuncia P.D. MOROZOV en su opinión disidente a la constitución de la constitución de la Sala que conoció del asunto de la *delimitación de la frontera marítima en la zona del Golfo de Maine* entre Estados Unidos y Canadá, Vid. Ordenanza de 20 de enero de 1982, en CIJ Recueil 1982, p. 12. También la Opinión Disidente de M. SHAHABUDEEN a la Ordenanza de 28 de febrero de 1990, en CIJ Recueil 1990, p.24.

supuesto el efecto de una decisión contraria a la voluntad de las partes sería el desistimiento de éstas en la continuación del proceso. Por tanto, la opinión de las partes, sin ser determinante, puede considerarse decisiva³⁷ y la Corte difícilmente se va a olvidar de ella cuando proceda a la elección de miembros para la Sala³⁸, porque ello equivaldría a renunciar al conocimiento del asunto en cuestión. Este efecto es seguro cuando las partes han impuesto como *conditio sine qua non* una determinada composición. En la otra hipótesis apuntada -la mera influencia-, el desistimiento no es tan previsible, pero resulta evidente que la Corte, con su comportamiento ortodoxo se arriesga a ello.

Si la actitud de las partes en una controversia fuera en todos los casos idéntica a la mantenida por Estados Unidos y Canadá respecto del asunto de *la delimitación de la frontera marítima en el Golfo de Maine*, es decir, supusiera una regla de comportamiento general en esta materia, ello pondría de relieve un formidable poder de las partes³⁹. La posición de la Corte es débil cuando aspira a retener un asunto y las partes se muestran firmes en controlar la composición de una Sala. Ahora bien, ésto no implicaría necesariamente una proximidad mayor de las Salas *ad hoc* al arbitraje que al arreglo judicial, pues no es menos cierto que incluso la composición de la Sala *ad hoc* que resolvió el asunto mencionado no fue elegida con absoluta libertad por Estados Unidos y Canadá, como hubiera ocurrido con los árbitros, sino que su libertad se vió

³⁷ Vid. M. SHAHABUDEEN en CIJ Recueil 1990, p.44.

³⁸ Vid. en este sentido también E. JIMENEZ DE ARECHAGA "The amendments...op. cit., p.3.

³⁹ En el resto de las ocasiones, salvo en la *diferencia fronteriza* entre Burkina Faso y la República de Malí, las partes han **influido** en la decisión de la Corte y no ha recibido tantas críticas como las partes en el asunto del *Golfo de Maine*. Pero es que mientras que en el art. I del Acuerdo de 29 de marzo de 1979 entre Estados Unidos y Canadá se disponía que si la constitución de la Sala no respondía a la voluntad de las partes, éstas podrían hacer uso del Tratado de arbitraje anexo al anterior, que también se había notificado a la Corte, en el resto de las controversias -salvo en la de la *diferencia fronteriza* entre Burkina Faso y Malí- las partes determinaron la composición de la Sala de una forma más sutil sin formalizar disposición alguna en este sentido en los compromisos.

subjetivamente limitada a los miembros de la Corte que estimaban más favorables a sus intereses respectivos. Por tanto, el criterio utilizado para la elección de los miembros de la primera de las Salas *ad hoc* constituidas en el tiempo resulta criticable por su disconformidad respecto del art. 18.1 del Reglamento, pero no puede afirmarse, por este único motivo, la naturaleza *arbitral* de las Salas *ad hoc*.

La diferencia entre este tipo de Salas y los órganos arbitrales viene dada porque en las primeras el número de miembros y la elección de los mismos no está totalmente a la disposición de las partes. En cuanto al primer aspecto indicado, han de respetar, en efecto, los límites máximo -menos de nueve- y mínimo -más de uno- que el Estatuto impone para este tipo de formaciones. Además, es la Corte la que, en definitiva, fija el número de magistrados que compondrá la Sala en cuestión, según prevé el art. 26.2 de este texto, aunque para ello habrá de contar con aprobación de las partes. En cuanto al segundo aspecto, la elección por las partes, caso de ser posible, quedaría limitada a los miembros de la Corte, con la salvedad de los Jueces designados *ad hoc*, cuando proceda su nombramiento⁴⁰. Además, aunque ya se ha señalado como una hipótesis de difícil producción, según el Estatuto y el Reglamento, la Corte siempre puede negarse a constituir una Sala, o bien puede hacerlo con una formación distinta a los deseos expresados por las partes, aún sabiendo que en este caso la controversia será o podrá ser sometida a otro procedimiento de solución. Es decir, que la Corte se arriesga a *perder el asunto*.

⁴⁰ Cabe señalar que a pesar de las críticas de M. SHAHABUDDEEN al respecto, formalmente se han respetado los trámites previstos en el Reglamento en cuanto a la composición de las Salas *ad hoc*, salvo el del nombramiento de los Jueces *ad hoc*.

Ahora bien, existe una categoría de Jueces para cuya elección las partes disponen casi de absoluta libertad⁴¹. Nos referimos a los ya mencionados Jueces *ad hoc*, institución que la doctrina contempla como un reducto arbitral, contraviniendo el adagio *Nemo iudex in causa sua* ⁴². Sin embargo, la posibilidad de su designación no constituye una característica exclusiva de las Salas, sino que es compartida por los procedimientos ante el Pleno, sin que ésto sirva para alegar su naturaleza arbitral. De hecho el Juez *ad hoc* no solo es una institución frecuente en las jurisdicciones internacionales⁴³, sino que, además, su nacimiento está estrechamente vinculado al de la jurisdicción permanente, por cuanto hasta este momento las partes podían libremente elegir los miembros del tribunal. De lo anterior se infiere que la figura del Juez *ad hoc* forma parte del precio a pagar por la jurisdicción internacional, para establecerse y consolidarse. En la práctica, desde el punto de vista de su importancia, es evidente que los Jueces *ad hoc* mantienen una relación inversamente proporcional con el número de miembros que forman parte del órgano que va a conocer de un asunto. Cuanto más reducido sea éste más peso tendrá el Juez *ad hoc*; por tanto, será mayor en una Sala que en el Pleno, porque si cada parte designa uno, nos encontraremos con formaciones en las

⁴¹ Decimos *casi* porque una parte podría objetar la designación realizada por la otra.

⁴² *Vid. infra* 2.6 de este mismo Capítulo.

⁴³ El TEDH contempla la posibilidad de nombrar un Juez de este tipo. El TJCE no permite su designación -art. 19 del Estatuto del TJCE. Tampoco lo permitía la Corte de Justicia Centroamericana. Las razones que motivan esta negativa son evidentes, ya que en la formación de ambos Tribunales se encuentran nacionales de todos los Estados que pueden recurrir a su jurisdicción, por tanto resulta innecesario. Con una salvedad: las Salas del TJCE, en cuyo caso, podemos encontrar que un asunto sea sometido a conocimiento de una Sala en la que participe un nacional de una de las partes en la controversia, sin que la otra tenga la posibilidad de designar uno *ad hoc*.

que dos de sus -cinco- miembros fueron libremente elegidos por las partes⁴⁴. Eso reforzará su capacidad para influir en la deliberación y en el fallo.

El derecho a designar esta categoría de Jueces no lo poseen todos los Estados partes en una controversia, sino sólo aquellos que no cuenten con un nacional como miembro de la Corte, puesto que el art. 31.4 del Estatuto prevé que si una de las partes contara con un Juez nacional en el Tribunal y no resultare elegido para la Sala *ad hoc* será incluido en la formación de esta Sala.

En cuanto a la designación de Juez *ad hoc* existe un límite común para el Pleno y las Salas, derivado del art. 31.5 del Estatuto y regulado en el Reglamento -art. 36-: cuando dos o más Estados hagan causa común y ninguno de ellos tenga un Juez de su nacionalidad como miembro de la formación que conoce de su controversia, la Corte -en este caso sería la Sala- decidirá si procede la elección de un sólo Juez *ad hoc*, que se nombrará de común acuerdo entre estos Estados que hacen causa común. Al contrario, si la Corte comprueba la existencia de esta situación y uno de estos Estados posee un Juez de su nacionalidad como miembro de la Sala, al otro u otros no les ampararía el derecho de nombrar un Juez *ad hoc*. Por el momento, las Salas *ad hoc* no han tenido oportunidad de aplicar este precepto, aunque no cabe duda acerca de este extremo.

Además de lo anterior, conocida la influencia de las partes en el procedimiento de selección de los miembros de las Salas *ad hoc*, no parece necesaria la precaución indicada, dado que aunque una parte *plural* cuente con

⁴⁴ Aunque sólo en dos ocasiones la composición de las Salas *ad hoc* ha respondido al parámetro indicado, lo cierto es que una de las restantes, se formó con un Juez nacional y otro designado *ad hoc* -*asunto de la delimitación de la frontera marítima en la zona del Golfo de Maine*-, mientras en la otra participaron los miembros de la Corte nacionales de ambas -*asunto de la Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI)*-. Con lo cual, el efecto en todos los casos fue el mismo, en lo que a nosotros nos interesa en este punto, puesto que de una forma -libre designación- u otra -nacionalidad- existía algún vínculo respecto de las partes en litigio.

más de un Juez nacional en el Pleno de la Corte -en la hipótesis que nos planteamos tenemos más de dos Estados que hacen causa común frente a un tercero también parte en la controversia- la otra difícilmente accederá a constituir una Sala en cuya formación sus oponentes cuenten con más de un Juez de su nacionalidad, estando ella amparada por su derecho a designar un único Juez *ad hoc*.

Sin embargo, un supuesto diferente lo encontramos en el caso de aceptarse a un Estado como **parte interviniente**. Estamos ante dos Estados que someten el conocimiento de una diferencia a la Corte -al Pleno o a una Sala *ad hoc*-; pero en el curso del procedimiento un tercer Estado formula una solicitud de intervención, por entender que la decisión de la Corte -la formación que conoce del fondo del asunto- afectará a sus intereses. El Pleno, o la Sala, acepta esta demanda de intervención, confiriendo al tercero el Estatuto jurídico de **parte interviniente**. En esta hipótesis, cabría plantearse la posibilidad de que la Corte -en cualquiera de sus formaciones-, entendiera los intereses de este tercer Estado coincidentes con los de una de las partes originarias de la controversia. De ser así, este tercero no tendrá la posibilidad de designar Juez *ad hoc*; pero si los intereses no coinciden este nombramiento sí procedería. En todo caso, habremos de esperar a que la Corte -o una de sus Salas- admita a un tercero como **parte interviniente**, ya que hasta el momento, sólo aceptó la intervención de Nicaragua en el asunto de *la diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador, pero confiriéndole el Estatuto jurídico de **interviniente no parte** en la controversia, derivándose de ello que, puesto que no era parte, carecía del derecho a designar un Juez *ad hoc*.

En definitiva, las diferencias que acabamos de señalar subrayan únicamente que en las Salas en general, en cuanto formaciones reducidas de la Corte, el foro de elección de sus miembros queda limitado al ámbito de esta institución. Pero éste no es un argumento que pueda ser utilizado en contra de

la naturaleza judicial de las Salas *ad hoc*, porque de hacerlo estaríamos negando esta naturaleza judicial a todas las formaciones reducidas de los distintos tribunales. Aunque sí es cierto que debido a la aplicación de los preceptos reglamentarios que regulan la composición de estas formaciones, la CIJ, como indica G. ABI-SAAB, queda reducida a una lista de *arbitrables* para que las partes elijan de ella la composición de la Sala que va a conocer de su diferencia⁴⁵.

La única razón por la que se cuestiona la *judicialidad* de estas Salas no es, pues, la relación de elegibles, sino el procedimiento seguido en algunas ocasiones, para la selección de sus miembros, o lo que es lo mismo, la interpretación flexible -en exceso- de los preceptos reglamentarios que regulan la composición de la Sala que, al conceder un papel demasiado relevante a las partes oscurece la *distancia* que respecto de éstas se presume ha de guardar la Corte, y que es una característica propiamente judicial⁴⁶.

⁴⁵ Vid. G. ABI-SAAB "De l'evolution...op. cit., p. 288.

⁴⁶ Vid. en este sentido entre otros G. ABI-SAAB "De l'evolution...op. cit., p. 281; L.C.GREEN "Is There a Universal International Law Today?" en CYIL, 1985, vol. 23, p. 27; E. LAUTERPACHT *Aspects of the Administration of International Justice*, Cambridge, 1991, p. 16; E. McWHINNEY "Special Chambers Within the International Court of Justice: The Preliminary, Procedural Aspect of the Gulf of Maine Case", en SJIL&C, 1985, vol. 12, pp. 1-13; S. ROSENNE "Article 27 of the Statute of the International Court of Justice", en Va.JIL, 1991, vol. 32, p. 225; J.M. RUDA *Presente y futuro del Tribunal Internacional de Justicia*, Granada, 1990, p. 17; N. SINGH *The Role and record of the International Court of Justice*, Dordrecht, 1989, p. 108; B. STERN "Chronique de jurisprudence de la Cour Internationale de Justice (1975-1983)", en JQI, 1984, vol. 111, pp. 652-654; CH. de VISSCHER "La Cour Permanente de Justice Internationale et son rôle dans le règlement des différends entre Etats", en Nordisk Tidsskrift for International Ret, 1933, p.147.

2.3. Aplicabilidad del art.9 del Estatuto a las Salas *ad hoc*.

Otra cuestión debatida en cuanto a la composición de las Salas es la que se refiere a la aplicabilidad o no del art. 9 del Estatuto⁴⁷. En tiempos de la CPIJ no existían dudas acerca de su alcance respecto de las Salas «especiales», ya que los arts. 26 y 27 de su Estatuto remitían expresamente al art. 9 del mismo texto. Pero el Estatuto actual no contiene esta previsión en los preceptos dedicados a las Salas y de la redacción del Reglamento se desprende una respuesta negativa. Si los autores del Estatuto querían otra cosa, ¿por qué retiraron la mención de los preceptos relativos a las Salas?

En sentido contrario cabría argüir que el art.9 del Estatuto ha de ser respetado por la Corte y ello supone que en todas las manifestaciones de esta institución ha de prevalecer esta representación y, por ello, también debería aplicarse a las Salas en cuanto formaciones de la Corte. *Item más* si tenemos en cuenta que las Sentencias emitidas por una Sala *ad hoc* se consideran ex art. 27 del Estatuto dictadas por el Órgano Judicial Principal de las Naciones Unidas. La composición de esta institución debería designarse, pues, teniendo en cuenta -como manda el art. 9 del Estatuto- la representación de las principales formas de civilización y sistemas jurídicos del mundo. ¿Es ésto factible? Las dificultades prácticas derivadas del número de miembros de las Salas y el papel que se pretende para las partes en su designación permiten ponerlo en duda. La idea de la representación universal en la Sala puede ser

⁴⁷ Art. 9 del Estatuto: «En toda elección, los electores tendrán en cuenta no sólo que las personas que hayan de elegirse reúnan individualmente las condiciones requeridas, sino también que en el conjunto estén representadas las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del mundo»

una buena directriz de comportamiento, pero no es una imposición estatutaria o, siquiera, reglamentaria.

La posible *regionalización* de la Corte se ha enunciado como uno de los problemas que se apuntan acerca de la constitución de las Salas *ad hoc*. En este sentido se han pronunciado M. BEDJAOUI y A. EL-KHANI⁴⁸, al señalar que todas las Salas constituidas hasta la actualidad, salvo la que conoció de *la diferencia fronteriza entre Burkina Faso y la República de Malí*, -de la que aquél era Presidente- respondían básicamente, por sus miembros, a sistemas jurídicos occidentales⁴⁹. Ello podría implicar la ruptura de una de las características esenciales de la Corte que, en cuanto institución universal, debe tener -y tiene- representación de los principales sistemas jurídicos del mundo. Evidentemente es muy difícil trasladar esta composición a unas formaciones reducidas de cinco miembros; pero lo que se está pidiendo es que al menos en ellas haya representación de otros sistemas jurídicos, además del occidental.

Por otra parte, A. EL-KHANI señala que el regionalismo de la composición de las Salas puede implicar la ruptura de la unidad jurisprudencial

⁴⁸ M. BEDJAOUI "Remarques sur la creation des Chambres *ad hoc* au sein de la Cour Internationale de Justice" en Colloque de Lyon, p. 77. Abdullah EL-KHANI en su opinión disidente a la Ordenanza de 20 de enero de 1982. *Vid.* en CIJ Recueil 1982, p. 13.

⁴⁹ Recordemos que la Sala que conoció de *la delimitación de la frontera marítima en la zona del Golfo de Maine* -Estados Unidos/Canadá- se encontraba formada por AGO (italiano), GROS (francés), MOSLER (británico), SCHWEBEL (estadounidense) y el Juez *ad hoc* designado por Canadá (COHEN). La segunda de las Salas, la de *la diferencia fronteriza Burkina Faso/República de Malí*, contaba con un Juez polaco (LACHS), otro argentino (RUDA) y el tercero argelino (BEDJAOUI), además de los dos Jueces *ad hoc* designados por las partes, uno francés (LUCHAIRE) y otro egipcio (ABI- SAAB). La Sala que conoció del asunto de la *Elettronica Sicula S.p.A*, Estados Unidos c. Italia contaba con los Jueces N. SINGH (indio) -posteriormente sustituido por el argentino J.M. RUDA-, ODA (japonés), AGO (italiano), SCHWEBEL (estadounidense) y JENNINGS (británico). De la última de las Salas constituidas hasta el momento, para el asunto de *la diferencia fronteriza terrestre, insular y marítimo* -El Salvador/Honduras- formaban parte ODA (japonés), SETTE-CAMARA (brasileño) y JENNINGS (británico), además de dos Jueces *ad hoc*, el francés M. VIRALLY, sustituido tras su fallecimiento por el español S. TORRES BERNARDEZ y el griego N. VALTICOS.

de la Corte⁵⁰. Sin embargo, dicho peligro no tiene por qué provenir sólo de la regionalización de las Salas. El temor surge cada vez que se produce una renovación parcial de los miembros de la Corte, dado que los Jueces elegidos provienen no sólo de distintos sistemas jurídicos sino, como indicó J.M. RUDA, de distintas civilizaciones, con valores distintos⁵¹. El equilibrio regional fruto de la aplicación del art. 9 del Estatuto no implica necesariamente la continuidad en la línea jurisprudencial de la Corte. El que una Sala se desvie de la línea jurisprudencial marcada por el Pleno depende de la homogenea heterodoxia que destilen sus miembros, lo que su pertenencia a un mismo sistema sin duda facilita, pero no impone ni es su exclusiva⁵².

Una cierta *regionalización* de las Salas no ha de tener necesariamente efectos negativos. Al contrario, puede permitir una mejor adaptación del órgano que administra justicia a las peculiaridades y circunstancias del caso. La crítica que acaso podría hacerse a la Corte es que una composición sesgada del Pleno hiciese imposible una correcta regionalización de una Sala⁵³.

⁵⁰ Vid. la opinión disidente de Abdullah EL-KHANI a la Ordenanza de 20 de enero de 1982, en CIJ Recueil 1982, p. 13.

⁵¹ J.M. RUDA *Presente y Futuro del Tribunal Internacional de Justicia*. Granada, 1990, p. 24.

⁵² Vid. en este sentido el *palmetazo* de E. LAUTERPACHT a la Sala en la demanda de intervención de Nicaragua en el asunto de la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador. Vid. *Infra* Capítulo Cuarto.

⁵³ Algún autor ha indicado otros, como por ejemplo M. BARTOS la alteración del número de miembros que conforman el propio tribunal -M. BARTOS "La révision du Statut de la Cour Internationale de Justice", en *Revue de la Politique Internationale*, 1974, Nos. 570-593, pp. 9-11-, al entender que éste era un aspecto representativo de la sociedad internacional de la época en la que se creó la CPJI - En 1922, la proporción existente entonces era de un juez por casi tres Estados y medio. Por el contrario, en la actualidad esos casi tres Estados y medio se han multiplicado por cuatro, de modo que existe un juez por cada catorce Estados (algo más), ello sin tener en cuenta que cinco de los quince asientos del Tribunal corresponden de hecho en exclusiva a jueces de nacionalidad de los miembros permanentes del CdS. De lo anterior se deduce que si el número de Estados se ha cuadruplicado, para mantener idéntica proporción de representatividad debería haberse aplicado la misma progresión para los miembros de la Corte, mientras que al permanecer invariable este número, la representatividad se ha reducido de una manera significativa-. La aplicación de esta opinión estaría vinculada a una modificación radical de

2.4. Compatibilidad de la condición de miembro del Pleno y de una Sala *ad hoc*.

Un argumento a favor de la existencia de dos únicos procedimientos jurisdiccionales de arreglo de controversias, el arbitraje y el arreglo judicial⁵⁴ -entendiendo, por tanto, que las Salas *ad hoc* no son una *tercera vía*, en contra de lo que estima algún sector doctrinal- vendría dado por la condición de los miembros de las Salas como Jueces de la Corte. Los que son Jueces ordinarios han de compaginar además, una vez elegidos para formar parte de una Sala, sus labores en cuanto tales con las que les corresponden como miembros del Pleno. No sólo no hay incompatibilidad sino que, todo lo contrario, ser miembro de una Sala es una consecuencia estatutaria posible de ser miembro de la CIJ. La participación en estas formaciones es una tarea judicial de la Corte. En cambio, cuando un miembro de la CIJ es llamado para formar parte de un

la actual formación de la CIJ sustituyendo el Pleno por las Salas. Para mantener en alguna medida la dinámica actual de trabajo. Si la actual CIJ adolece de retrasos procesales y carestía del procedimiento ya que los Estados han de invertir cuantiosas sumas en presentar las cientos de copias de cada informe, documento o memoria, imaginemos lo que costaría y demoraría acudir a un Tribunal formado por sesenta jueces. Las reuniones y discusiones sin ninguna duda alcanzarían una gran altura intelectual -desarrolladas entre sesenta juristas (según el art.2 del Estatuto) «*capacitados para desarrollar las más altas funciones judiciales en sus respectivos países*»-, aunque a consecuencia de ello la Sentencia se retrasaría de forma considerable, hemos de pensar que para la adopción de este acto deberían conseguir un acuerdo al respecto al menos treinta de ellos. Al resultar imposible imaginar un funcionamiento semejante, inevitablemente habría de conformarse este macro-tribunal en Salas estructuradas atendiendo a un criterio regional o material, pero la actuación en pleno sería imposible.

⁵⁴ Vid. M. BEDJAOUI "Universalisme et Régionalisme au sein de la Cour Internationale de Justice: La constitution des Chambres «ad hoc»" en *Liber amicorum*. Colección de Estudios Jurídicos en homenaje al Prof. Dr. D. José PEREZ MONTERO, Oviedo 1988, p. 165; R.J. DUPUY "La réforme..." op. cit. p. 270; J.N.HYDE "A Special chamber of the International Court of Justice: An alternative to ad hoc arbitration" en *AJIL*, 1968, vol. 62, núm.2, pp. 439-441; R. JENNINGS "Chambers of the International Court of Justice and Courts of arbitration" en *Humanité et Droit International*. Mélanges René-Jean Dupuy, Paris 1991, p. 197; S.M. SCHWEBEL *International Arbitration: past and prospects* (ed. A.H.A. SOONS), Dordrecht, 1990, p. 107.

tribunal arbitral será el Pleno quien decida, en caso de duda, si esa labor es compatible o no con su condición de miembro de la Corte.

El motivo de que las partes en una controversia concreta decidan formar un tribunal arbitral con miembros de la Corte podemos encontrarlo en su deseo de resolver una disputa jurídica fuera de la CIJ, lo que les permite tener un mayor control sobre la composición del órgano al que se somete la solución de la diferencia y también sobre las normas procesales a aplicar. Ello sin prescindir del prestigio y la reputación de los miembros individuales de esta institución. La duda se encuentra en saber a qué se refiere el Estatuto cuando prohíbe -art. 16- «*cualquier otra ocupación de carácter profesional*». En este sentido, Sh. ROSENNE entiende que la incompatibilidad no se extiende automáticamente a la participación de los miembros de la Corte en un tribunal arbitral o en comisiones de conciliación. El límite se encontraría en la posibilidad de que el asunto concreto llegara posteriormente a la Corte:

«...the basic condition is that there is no likelihood of the case coming before the Court, whether on appeal or in some other way»⁵⁵

La práctica, sin embargo, ha sido más generosa todavía, hasta el punto de atenuar considerablemente la diferencia enunciada en principio. No sólo la compatibilidad ha sido la regla general, permitiéndose en muchos casos la actuación de los Jueces de la Corte como árbitros⁵⁶, sino que el mismo límite juiciosamente apuntado por ROSENNE se ha desvanecido en ocasiones⁵⁷.

⁵⁵ S. ROSENNE *The world Court...* op. cit. p. 67.

⁵⁶ Ejemplos de órganos arbitrales formados por miembros de la Corte encontramos en los siguientes asuntos: *Canal de Beagle* *International Law Reports*, vol. 52, p.93; *Plataforma continental anglo-francesa* *International Law Reports*, vol. 54, p. 6; *Delimitación de la frontera marítima entre Guinea y Guinea Bissau* *International Legal Materials*, vol. 25, p.251.

⁵⁷ Así, tras el pronunciamiento de un Tribunal arbitral en el asunto de Senegal y Guinea Bissau, las partes acudieron a la Corte para zanjar diferencias alrededor de la Sentencia dictada por un órgano constituido por M. BEDJAOUÍ, A. GROS y J.BARBERIS. M. BEDJAOUÍ es miembro de la Corte desde 1982, y su Presidente actual; por tanto poseía esta condición cuando fue designado y ejerció como árbitro lo que, al parecer, no condujo a su abstención en el Pleno

Por otro lado, en épocas en que la Corte tenga que conocer de un elevado número de controversias, podría entenderse improcedente recargar la agenda de alguno de sus miembros por este motivo. La programación de actividades de la Corte y la dedicación de sus miembros no debería sufrir por atender expectativas personales. Cabe suponer que fuera del círculo de la Corte es posible encontrar quienes sean capaces de ejercer con solvencia el magisterio de la justicia tornasolado por los intereses de las partes y un cierto sentido práctico.

El problema de la disponibilidad material de los Jueces se plantea, por lo demás, dentro de la misma Corte, cuando unos son miembros -y otros no- de las Salas. De haberse producido la temida proliferación de estas formaciones reducidas de la CIJ y en ellas las partes hubieran introducido tantos elementos probatorios como los de la primera de ellas -*Golfo de Maine*- y la última -la de *la diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador- ciertamente los miembros de las Salas poseedores de esta condición en el Pleno de la Corte se habrían encontrado con dificultades reales para poder compatibilizar ambas labores.

2.5. Permanencia en la Sala de aquellos miembros de la Corte que hubieran perdido esta condición.

Las elecciones parciales regulares para designar los miembros de la CIJ se producen cada tres años y su entrada en funciones tiene lugar el 6 de febrero siguiente a esta elección. Existe la posibilidad de que la Corte se

que dictó la Sentencia de la Corte. Vid. Sentencia de 12 de noviembre de 1991, en CIJ Recueil 1991, pp. 53-76.

encuentre en esas fechas conociendo de alguna controversia, en cuyo caso -según el art. 13.3 del Estatuto y 24.4 del Reglamento de 1946-, para evitar retrasos debidos a los cambios introducidos en la composición del Tribunal, los reemplazados «*continuarán conociendo de los casos que hubieren iniciado hasta su terminación*». Esta es la norma general de aplicación a la formación plenaria de la Corte.

El art. 33 del Reglamento de 1978 mantiene esta disposición, indicando que estos Jueces relevados como miembros de la Corte se mantendrán «*en el Tribunal hasta la terminación de toda fase de un asunto en el que el Tribunal se hubiere reunido para la fase oral con anterioridad a la fecha de reemplazo*»⁵⁸. Por tanto, el límite temporal establecido para introducir cambios en la composición del órgano se encuentra en el inicio de la fase oral. Si cuando tiene lugar la renovación parcial del Tribunal, se está desarrollando la fase escrita de algún asunto serán los nuevos miembros quienes conozcan de un caso cuya tramitación se inició antes de su incorporación al Tribunal. Podemos encontrarnos así en un momento concreto ante situaciones en las que la composición del Pleno para conocer simultáneamente de dos asuntos distintos sea diferente porque cuando se produjo la renovación de los miembros de la Corte, uno de ellos estaba en la fase escrita mientras en el otro se estaba ya en la fase oral⁵⁹.

⁵⁸ Se trata de un artículo nuevo, aunque su contenido se encuentra inspirado en el 27.5 de la modificación introducida en el Reglamento en 1972, aunque este art. 33 posee una formulación más general que el antiguo 27.5.

⁵⁹ No obstante, resulta posible el mantenimiento como miembro de la Corte de un Juez cuya sustitución se produjo antes del comienzo de la fase oral en el supuesto de su designación como Juez *ad hoc* por una de las partes en la controversia. Esta situación se produjo en *el asunto relativo a la sentencia arbitral de 31 de julio de 1989*: a su comienzo, el senegalés Keba MBAYE era vicepresidente de la Corte, por lo que Senegal, al poseer un Juez nacional en la formación del Tribunal, no tenía derecho a designarlo *ad hoc*; sin embargo, el 5 de febrero de 1991 K. MBAYE terminó su mandato y Senegal lo designa *ad hoc* ex. art. 31.3 del Estatuto. Sentencia de 12 de noviembre de 1991, en CIJ Recueil 1991, pp. 53-76.

Hasta aquí la regla aplicable con carácter general a la Corte. Sin embargo, con ocasión de la modificación del Reglamento de 1972 -art.26.3-, se introdujo una norma especial, a este respecto, para las Salas *ad hoc*, que se mantiene en el nuevo texto de 1978 -17.4-, al disponerse que aquéllos que hubieren sido reemplazados «*a causa de la terminación de su período de funciones continuarán formando parte del Tribunal en todas las fases del asunto cualquiera que sea el momento en que se encuentre*».

Es necesario subrayar dos aspectos en relación con el párrafo transcrito. En primer lugar, sólo se prevé el mantenimiento en funciones para los Jueces que hayan terminado su mandato y no hayan sido reelegidos, pero no cuando, por ejemplo, un miembro de la Corte haya renunciado a su cargo, hubiese sido reemplazado por estar desempeñando tareas incompatibles con el ejercicio de su condición de Juez del Tribunal -recogidas en el art.16 del Estatuto-, o bien hubiera «*dejado de satisfacer las condiciones requeridas*»⁶⁰. Aunque hasta el momento no se ha planteado una situación de este tipo en el seno de una Sala *ad hoc*, puesto que las vacantes producidas en su composición se han debido al fallecimiento de uno de sus miembros⁶¹.

El segundo aspecto a subrayar es la diferencia entre esta disposición especial dirigida a las Salas *ad hoc* y la general que se contempla para el resto de las formaciones de la Corte en el art. 33 del Reglamento de 1978. La distinción apuntada es de carácter temporal, ya que consiste en que es

⁶⁰ Son los motivos que los arts. 13.4, 16, 17 y 18 del Estatuto de la Corte contemplan para la sustitución de uno de sus miembros.

⁶¹ El Presidente de la Sala -N. Singh- en el asunto de la *Electronica Sicula S.p.A. -ELSI-* y del Juez designado *ad hoc* por Honduras -M. VIRALLY- en el de la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador. También falleció recientemente el Juez J.M. RUDA -que había participado en dos Salas *ad hoc*, precisamente en una de ellas (la ELSI) para sustituir a N. SINGH- designado *ad hoc* por Qatar en la *diferencia fronteriza* Qatar c. Bahrein, asunto del que conocía el Pleno de la Corte.

suficiente con que se haya designado la composición de la Sala para que la aplicación del art. 17.4 del Reglamento tenga lugar.

Así, en el asunto de la *delimitación de la frontera marítima en el Golfo de Maine*, la Ordenanza de constitución es de 20 de enero y uno de sus miembros, A. GROS abandonaba la Corte apenas 15 días más tarde, sin que hubiere sido candidato para la reelección. A. GROS se mantuvo en la formación de la Sala con el estatuto de miembro de la Corte.

El objeto perseguido con el art. 17.4 del Reglamento es, claramente, el de asegurar a las partes que salvo por razones de fuerza mayor la composición de la Sala no sufrirá modificaciones. Observamos así mismo el interés por imprimir rapidez y agilidad al procedimiento, ya que el efecto de las sustituciones en la formación de las Salas es un considerable retraso en el procedimiento. La *recomposición* de la Sala no sólo requiere la decisión acerca de quién cubrirá la vacante, sino también la puesta al día del nuevo Juez en lo que al conocimiento del asunto se refiere. Ello quiere decir que si en el momento de la designación está avanzada la fase escrita del procedimiento, el nuevo Juez deberá estudiar toda la documentación introducida por las partes⁶². Por tanto la finalidad de este precepto, aplicable únicamente a las Salas *ad hoc*, es nuevamente el de beneficiar a esta formación respecto de las restantes de la Corte -Pleno o los otros tipos de Salas-.

En contra de esta modificación se han manifestado diversos autores, incluso algunos Jueces. El más riguroso al respecto es M.SHAHABUDDEEN, quien entiende esta disposición como una modificación de la definida por el

⁶² Especialmente problemático hubiera resultado que esta situación se hubiera producido en el curso del procedimiento de la Sala que conoció de la *delimitación de la frontera marítima en la zona del Golfo de Maine* entre Estados Unidos y Canadá, en cuyo procedimiento escrito se introdujo una ingente cantidad de documentación escrita, quizás superada tan solo por la que se produjo años antes con ocasión del asunto de la *Barcelona Traction Light and Power Co. Ltd.*

Estatuto con carácter general⁶³. Ciertamente, como indica este Juez, desde un punto de vista estrictamente teórico, la Corte es una con independencia de cual sea la formación que esté conociendo de un determinado asunto⁶⁴. Así que cabe cuestionarse si una Sala constituida conforme al procedimiento introducido en 1972 y mantenido en 1978 puede considerarse como una manifestación legítima de la Corte y, por tanto, si las decisiones que dicte tendrán el valor jurídico que el art.27 del Estatuto atribuye a sus Sentencias. La respuesta, aportada por la práctica, ha de ser afirmativa.

Otro inconveniente, apuntado por C. ESCOBAR, es de índole práctico, dado que el efecto del art. 26.3 -actual 17.4- es el incremento de Jueces de la Corte, al haber miembros en la Sala que no lo son del Pleno⁶⁵. Por otra parte, puede implicar la existencia de dos miembros de la Corte de la misma nacionalidad -como ocurrió en el asunto del *Golfo de Maine*-, hecho éste que, de todos modos, en contra de la opinión del Juez EL-KHANI⁶⁶, no contraviene el art.2 del Estatuto, porque no existen dos Jueces de la misma nacionalidad en una misma formación concreta de la Corte -Pleno o Salas-. Según la argumentación de este Juez el art. 2 también se contravendría cuando se designa un Juez *ad hoc* de la misma nacionalidad de uno de los miembros

⁶³ A su entender, la reforma suscita tres ámbitos de problemas respecto de las Salas *ad hoc*, uno es éste que nos ocupa y los restantes son la compatibilidad del Reglamento con el Estatuto y la posibilidad de la Corte de volver sobre sus decisiones anteriores acerca del derecho de las partes de influir decisivamente en la composición de la Sala. Vid. en CIJ Recueil 1990, p.24 y p.51.

⁶⁴ *Id.* nota anterior, p. 52. Independientemente de lo que signifique «*begun*», del texto inglés, o «*déjà saisi*» del francés -términos que figuran en el texto constitutivo- no pueden tener distinto significado para los Jueces del Pleno y de la Sala. Además, el carácter judicial de la Corte no ha resultado modificado por la introducción en 1945 de las Salas *ad hoc*. Vid. también p. 54.

⁶⁵ C.ESCOBAR "Las Salas...op. cit., p.305.

⁶⁶ Vid. Ordenanza de 20 de enero de 1982, en CIJ Recueil 1982, p. 11.

permanentes de la Corte⁶⁷, lo que parece desmentido por la práctica⁶⁸. De una interpretación sistemática del precepto indicado se desprende su relación únicamente con el procedimiento de elección de miembros permanentes u ordinarios de la Corte, sin que haya que extrapolarlo a todas y cada una de las circunstancias concretas que puedan desarrollarse ante la CIJ⁶⁹.

Por otra parte, desde una perspectiva práctica esta regulación especial respecto de las Salas *ad hoc* resulta del todo lógica, si tenemos en

⁶⁷ Lo que Abdallah EL-KHANI pretendía subrayar con esta crítica-*Vid. CIJ Recueil* 1982 p. 11-, era el mantenimiento indirecto de la condición de miembro de la Corte -aún sin ser parte del Pleno- como consecuencia de la elección de A. GROS para participar en una Sala *ad hoc* pocos días antes de que terminara sus funciones como miembro de la Corte, conociendo las partes que no era candidato a la reelección. El problema se agravaba, a juicio de EL-KHANI porque Francia como miembro permanente del Consejo de Seguridad contaría a partir de esa elección con dos miembros de la Corte de su nacionalidad, uno en el Pleno: Ladreit de LACHARRIÈRE y otro de la Sala: A. GROS (cuyo mandato como miembro de la Corte había expirado). E. ZOLLER -"La première constitution d'une chambre spéciale par la Cour Internationale de Justice: Observations sur l'ordonnance du 20 janvier 1982" en *RGDIP*, t. 86/1982/2, pp. 319-320- responde a la crítica de EL-KHANI, basándose en el art. 2 del Estatuto, al señalar que la referencia expresa a la nacionalidad de los Jueces, sobre todo cuando procede de otro miembro de la Corte, es un atentado al honor y a la dignidad de los destinatarios de la crítica, ya que no representan más que las «grandes formas de civilización» y los «principales sistemas jurídicos del mundo». Además las críticas formuladas por EL-KHANI, según la profesora francesa recaen indirectamente sobre todos los miembros de la Corte, perjudicando en definitiva el prestigio de esta institución.

⁶⁸ La verdad es que no ha sido una situación habitual, pero sí se ha producido en diversas ocasiones y curiosamente salvo en una ocasión la nacionalidad coincidente ha sido la francesa. La primera vez fue ante una Sala *ad hoc*, la que enfrentó a Burkina Faso y la República de Malí, ya que el primer Estado designó al francés F. LUCHAIRE; posteriormente en el asunto de las *Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua*, este último Estado designó a C.-A. COLLIARD, también francés; S. BASTID -fallecida en 1995- fue nombrada como Juez *ad hoc* por Túnez en la *Solicitud de revisión e interpretación de la Sentencia de 24 de febrero de 1982*, en el asunto de la *Plataforma continental entre Túnez y Libia* y Honduras, en el asunto de la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* (Honduras/El Salvador) designó como Juez *ad hoc* a M. VIRALLY. Durante todo este tiempo existía en el seno de la Corte un miembro permanente de esa nacionalidad: G. LADREIT DE LACHARRIÈRE. También en el asunto de la *Sentencia arbitral de 31 de julio de 1989* (Guinea Bissau c. Senegal) el Juez elegido *ad hoc* por Guinea Bissau era francés: H. THIERRY, pero en esta ocasión G. GUILLAUME había sustituido al anterior en la Corte. En el asunto de la *Aplicación de la Convención para la prevención y represión del crimen de genocidio* (Bosnia-Herzegovina c. Yugoslavia -Serbia y Montenegro-) E. LAUTERPACHT del Reino Unido fue nombrado Juez *ad hoc* por Bosnia-Herzegovina, manteniéndose en la formación permanente de la Corte un Juez de esta nacionalidad: Sir R. JENNINGS.

⁶⁹ En este sentido C. ESCOBAR "Las Salas...op. cit. p.305 opina que «la prohibición de acumulación de dos Jueces de una misma nacionalidad está prevista para el TIJ considerado como órgano plenario, de tal forma que las Salas sólo infringirán la misma si en su composición concurren dos Jueces de idéntica nacionalidad como consecuencia del fenómeno de la cobertura de vacantes»

cuenta que con ello no se interfiere en el trabajo normal de la Corte. Es decir, una vez constituida ésta, si se procede a una renovación parcial el Pleno puede desempeñar sus funciones correctamente con los nuevos miembros y la Sala en cuestión también con los suyos, sin que en su composición repercuta esta renovación. El art. 17.4 del Reglamento tiene una ventaja evidente: evita retrasos procesales y tranquiliza a las partes.

Sin embargo, este precepto reglamentario puede plantear, desde una perspectiva conceptual, un problema derivado del hecho de que pueden formar parte de una Sala a título de miembros, Jueces que ya no poseen esta condición respecto de la Corte. Podemos, por ello, encontrarnos con que participen en la Sala tres categorías de Jueces: (1) los miembros de la Corte designados para este asunto; (2) los designados *ad hoc* -en el caso de que las partes hayan hecho uso del derecho que, en determinados supuestos, les ampara-; y (3) junto a ellos, una tercera categoría, la de aquellos que no son Jueces *ad hoc*, ni son ya miembros del Pleno de la Corte pero que sí lo fueron cuando se constituyó la Sala.

Un ejemplo, el más extremo de esta última situación, fue el de A. GROS en el asunto antes mencionado del *Golfo de Maine*. En este caso, las partes acordaron incluirlo en la Sala que iba a conocer del asunto, a pesar de saber perfectamente que el mandato del Juez GROS expiraba el 5 de febrero de 1982 y no era candidato a la renovación trienal⁷⁰. Los Jueces MOROZOV y

⁷⁰ El 25 de noviembre de 1981 había sido depositada en la Secretaría de la Corte una carta conjunta de los Embajadores en Holanda de Estados Unidos y Canadá por la que introducían en la instancia la controversia que los enfrentaba además de una copia del compromiso de 29 de marzo de 1979. *Vid.* Ordenanza de 20 de enero de 1982 en CIJ Recueil 1982, p. 3. El tiempo en el que el Juez GROS compaginó su condición de miembro del Pleno y de la Sala fue muy reducido, no alcanzando más que quince días. La primera Ordenanza que dictó esa Sala fue de 1 de febrero de 1982. Esta, por otra parte no habría podido constituirse más allá del 5 de febrero de 1982. De ahí que el Juez EL-KHANI hablara de *precipitación*. *Vid.* G. GUYOMAR "La constitution au sein de la Cour Internationale de Justice d'une chambre chargée de régler le différend de frontières maritimes entre les États-Unis et le Canada", en AEDI, 1981, p. 213-14; E. ZOLLER "La première ...*op. cit.* p. 305.

EL-KHANI criticaron esta designación en una opinión disidente a la Ordenanza de 20 de enero de 1982⁷¹. También J. SETTE-CAMARA fue nombrado para la Sala que conoció de *la diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador en las mismas circunstancias, aunque en su caso el tiempo que le restaba de mandato era más amplio y se contaba con su reelección, finalmente frustrada. Que ésta no se produjera fue una auténtica sorpresa, incluso un fiasco, dada la calidad del Juez brasileño, candidato -se decía- a la misma Presidencia de la Corte.

Que las Sentencias dictadas por un órgano de este tipo puedan considerarse ex. art. 27 del Estatuto, Sentencias de la Corte a algunos parece incomodarles, dada la situación de minoría en que se encuentran sus miembros ordinarios y que, eventualmente, podría conducir a una decisión tomada por el voto de una mayoría formada por ex-miembros de la Corte y Jueces *ad hoc*. La situación apuntada pudo darse, por ejemplo, en los asuntos de la *delimitación de la frontera marítima en la zona del Golfo de Maine* entre Estados Unidos y Canadá⁷² y de *la diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre El Salvador y Honduras⁷³. Pero así son las cosas y, desde otro punto de vista, parece *corporativo* imputar a los miembros últimamente citados, los problemas que pudieran plantearse acerca del art. 27 del Estatuto, puesto que cuando esta

⁷¹ Vid. en CIJ Recueil 1982, pp. 11 y ss.

⁷² Formación que contaba con un Juez nacional estadounidense, uno designado *ad hoc* por Canadá, un tercero cuya condición de miembro de la Corte expiraba escasos días después de adoptarse la Ordenanza de constitución de la Sala y dos Jueces que continuaron siendo miembros de la Corte hasta el final del procedimiento.

⁷³ Sir R. JENNINGS y Shigeru ODA eran los únicos miembros de la Sala que poseían esta condición también respecto del Pleno, ya que el mandato de J. SETTE-CAMARA había expirado el 5 de febrero de 1988. Vid. en CIJ Annuaire 1989-90, p. 11.

disposición se redactó, las Salas que podía constituir la Corte no eran, desde luego, las que ahora contemplamos⁷⁴.

2.6. Los Jueces *ad hoc*.

Si bien es cierto que el Estatuto de la CIJ contempla la posibilidad de designar Jueces *ad hoc* tanto para el Pleno como para las Salas de la Corte, se incluye este apartado por entender que las diferencias entre ambas formaciones lo justifican.

2.3.1. Características generales de los Jueces *ad hoc*

El Estatuto de la CIJ contempla la institución del Juez *ad hoc* como un derecho de las partes, cuando no cuenten con un Juez de su nacionalidad en la Corte⁷⁵; por tanto, siempre que se produzca este requisito y que individualmente

⁷⁴ Este artículo es una herencia de la CPJI, ya que existía en el primero de los Estatutos de esta institución.

⁷⁵ Vid. en este sentido entre otros T. FRANCK *The Structure of Impartiality*, p. 116; G. GUYOMAR *Commentaire du Règlement de la Cour Internationale de Justice. Interpretation et pratique*, Paris 1973, p. 24; E. JIMENEZ DE ARECHAGA *La constitución de las Naciones Unidas*, II, Madrid 1958. J.F. LACHAUME "Le juge «ad hoc»" en *RGDIP*, 1966, pp. 265-358; M. LACHS "Arbitration and International adjudication", en *International arbitration past and prospects*, A.H.A. SOONS (Ed.), Dordrecht, 1990, P. 47; E. LAUTERPACHT *International Law*, Manchester, 1982, 2ª ed. p. 150; E. LAUTERPACHT *Aspects of the Administration of International Justice*, Cambridge, 1991, p. 16; MAKOWSKY "L'arbitrage International", en *B.des.C.*, 1931 (II), t. 36, p. 300; L. MILLAN MORO "El Juez «ad hoc» en la Corte Internacional de Justicia", en *Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz*, 1990, pp. 213-258; D.D. NSEREKO "The International Court, Impartiality and Judges ad hoc", en *IJIL*, 1973, nº13, pp. 207-230; J.L. RENAULT *Le juge ad hoc au sein de la Cour Internationale de Justice*, Tesis doctoral, leída en la Universidad de Orleans en 1979; S. ROSENNE *The World Court. What Is It and How It Works*, 5ª ed., Dordrecht 1995, p. 73; J.M. RUDA *Presente y Futuro del Tribunal Internacional de Justicia*, Granada, 1990,

así lo estimen las partes existirá un Juez *ad hoc*. Sin embargo, para proceder a esta designación deberán observarse las condiciones estatutariamente previstas, que se reducen a dos:

1) Los requisitos que con carácter general se exigen a todo miembro de la Corte, a saber, la «alta consideración moral», junto a la capacidad profesional, es decir «las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países, o que sean jurisconsultos de reconocida competencia en materia de Derecho Internacional» (art.2 del Estatuto); y, 2) una doble independencia: a) frente a las partes, ya que los Jueces designados *ad hoc* han de formular la declaración del art. 4.1 prevista para todos los miembros de la Corte; y, b) frente al asunto; lo que significa que no han de haber participado antes en el mismo. Esta doble independencia en el caso de los Jueces *ad hoc* se cuestiona por la doctrina, por cuanto partimos de que cada uno de estos Jueces es designado por una de las partes en la controversia.

La designación personal del Juez *ad hoc* está sometida a un control de la Corte, que puede ejercerse en dos momentos: 1) antes de producirse la entrada en funciones; y, 2) en el curso del procedimiento.

En el primer momento, cuando el *Greffier* de la Corte recibe la notificación por la que se le informa de la persona designada como Juez *ad hoc*, se da traslado a la otra parte para que pueda formular objeciones a este nombramiento. Si ésta última contesta esta designación, el Tribunal decide si procede o no el nombramiento del Juez *ad hoc* propuesto (art. 35 del Reglamento).

p.35; M. THIERRY *Cours de Droit International Public*, Paris 1970, p. 284; B.A. WORTLEY "Les judges of the World Court: The National Element", en *IJL*, 1989, pp. 448-451.

Ya en el curso del procedimiento parece que el art. 24 del Estatuto confiere al Presidente de la formación que esté conociendo del asunto -aunque el Estatuto únicamente se refiere al Presidente de la Corte-, un derecho de recusación sobre la persona así nombrada. El art. 31.6 del Estatuto contiene una remisión respecto de los preceptos que rigen las características que deben concurrir en los miembros de la Corte.

Si el Presidente -de la Corte o de la Sala- estima que uno de sus miembros -ya sean titulares o *ad hoc*- ha dejado de cumplir las condiciones requeridas, lo pondrá en conocimiento del afectado. Si éste no estuviera de acuerdo con el Presidente acerca de esta cuestión, será la Corte quien decida. Del art. 24 del Estatuto parece desprenderse la actuación *ex officio* del Presidente, aunque el art. 34.2 del Reglamento prevea expresamente la comunicación confidencial a la Corte sobre los hechos que crea relevantes para la aplicación de la disposición estatutaria indicada.

2.6.2. Participación de los Jueces nacionales y *ad hoc* en las Salas.

Ya en tiempos de la CPJI -desde su Estatuto de 1929, que entró en vigor en 1936-, se preveía la posible designación de Jueces *ad hoc* para las Salas. Con anterioridad, el Estatuto sólo contemplaba tal posibilidad para las Salas «especiales», no para las de Procedimiento Sumario. El Estatuto de la CIJ prevé la posibilidad de elegir Jueces *ad hoc stricto sensu* en cualquiera de sus formaciones cuando en la composición -del Pleno o las Salas- no hubiese ningún miembro con nacionalidad de las partes -de alguna o de todas ellas-.

En este punto se plantean distintas cuestiones de carácter general, por cuanto afectan tanto a los procedimientos ante el Pleno como ante las Salas que nos ocupan, ya que la posibilidad de designación de un Juez *ad hoc* por cada una de las partes en la controversia se encuentra en el art. 31.3, dirigido al Pleno: (1) ¿Siempre ha de haber Jueces nacionales de las partes o designados directamente por ellas? (2) ¿Poseen los Jueces de nacionalidad de las partes un mejor derecho que el resto de los miembros de la Corte para participar en las Salas que conozcan de controversias que afecten al Estado cuya nacionalidad ostentan? Del art. 31.4 parece desprenderse una respuesta afirmativa a ambas cuestiones⁷⁶.

Según E. LAUTERPACHT la institución de los Jueces nacionales perpetúa la idea de la representación de los intereses nacionales de la Corte, contribuyendo, por otra parte, a la confusión entre Jueces y abogados⁷⁷, ya que ambos son fruto de una designación estatal, aunque los primeros son miembros de la Corte, y están al servicio de la CIJ -percibiendo su remuneración de esta institución-, mientras que los segundos carecen de dicha condición, siendo el Estado el que fija su salario -evidentemente mediante la negociación del mismo con el interesado- y, en general, les paga⁷⁸.

⁷⁶ Cabría pensar que si ello fuera así, se estaría contraviniendo el art. 2 del Estatuto. Este precepto subraya que los miembros de la Corte serán designados «*sin tener en cuenta su nacionalidad*». Sin embargo, la afirmación anterior no es correcta, puesto que el artículo citado enumera las condiciones que han de reunir los candidatos a la composición de la Corte. Puestos a ver contradicciones estatutarias, podemos apuntar una más, en el art. 3.1 expresamente se indica que no podrá haber en la Corte dos miembros de la misma nacionalidad ¿Cómo se consigue éste resultado si la elección se lleva a cabo sin tener en cuenta la nacionalidad de los candidatos?

⁷⁷ E. LAUTERPACHT *Aspects of the Administration of International Justice*, Cambridge 1991, p. 81.

⁷⁸ Con ocasión del asunto de la *diferencia fronteriza* entre Burkina Faso y Mali, se tomó conciencia de las dificultades económicas que suponía para los Estados más pobres acudir a la Corte a resolver sus controversias internacionales. Cuando, en aplicación del artículo IV de su Compromiso, hubieron de proceder a designar tres expertos para que les asistieran en la demarcación de la frontera establecida por la Sala, Burkina Faso y Mali carecían de fondos suficientes para asumir el costo derivado de esa previsión. A pesar de ello, se pudo realizar por la financiación del Gobierno suizo. Se materializó entonces la sospecha de que elevado coste

Por otra parte, la función de los abogados es sustancialmente diferente a la de los Jueces *ad hoc*. Los primeros deben presentar los argumentos que sirven de fundamento jurídico a la pretensión del Estado que les ha contratado. Los segundos forman parte del Tribunal y actúan en cuanto miembros de la Corte, después de formular la declaración prevista para los Jueces ordinarios en el Reglamento⁷⁹. Entre los abogados y el Estado existirá un vínculo de naturaleza contractual, careciendo la relación entre el Juez *ad hoc* y el Estado que lo designó de este carácter.

Si los Jueces nacionales de las partes -que forman parte del Pleno- tienen un mayor derecho que el resto a participar en la Sala que conoce de la controversia, cabe plantear una hipótesis de difícil materialización práctica: si hubiera Jueces nacionales en la composición de la CIJ y, fruto de la elección secreta -art. 17 del Reglamento-, no resultaren elegidos para formar parte de la Sala, ¿pueden ser designados Jueces para esa Sala en función de su nacionalidad? Esta situación no se ha producido nunca en la breve historia de las Salas⁸⁰, y difícilmente se verá, ya que no hemos de olvidar que la elección

derivado de la jurisdicción internacional podía ser la causa del rechazo por los países más pobres y para paliar estas dificultades se creó el 1 de noviembre de 1989 el Fondo de afectación especial para ayudar a los Estados a resolver sus controversias en la CIJ. Con esta iniciativa se intenta transponer a la jurisdicción internacional las ventajas que los ordenamientos internos disponen para la población menos favorecida. *Vid.* en P.H.F. BEKKER "International Legal Aid in Practice: The ICJ Trust Fund", en *AJIL*, vol. 87, 1993, pp. 659-668; M.E. O'CONNELL "International Legal Aid: The Secretary General's Trusts Fund to Assist States in the Settlement of Disputes through the International Court of Justice", en *International Courts for the Twenty-First Century*, M. Janis (ed.), Dordrecht, 1992, pp. 235-244; D. VIGNES "Aide au Développement et assistance judiciaire pour le règlement des différends devant la Cour Internationale de Justice", en *AFDI*, 1989, pp. 321-324.

⁷⁹ Los Jueces *ad hoc* no pueden ayudar a explicar las declaraciones y argumentos de los Estados que los han designado, ya que esta actitud atentaría contra el principio procesal según el cual nadie puede ser Juez y testigo en una misma causa.

⁸⁰ Léase S. SCHWEBEL, estadounidense en la *controversia de la delimitación de la frontera marítima en el Golfo de Maine* entre Estados Unidos y Canadá y también en la *Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-*, en la que además participó igualmente R. AGO, italiano. Por tanto, hasta el momento, la elección de los Jueces nacionales de las partes, ha respondido siempre a la mención prevista en el art. 17 del Reglamento.

secreta del art. 17 está influida directamente por las opiniones que las partes en la controversia han puesto en conocimiento del Presidente de la Corte.

Nos resta por formular una última cuestión: si una parte no quisiera que su nacional miembro de la Corte formara parte de la Sala que va a juzgar de una controversia concreta ¿podría ejercer el derecho a designar un Juez *ad hoc*? La situación sería muy embarazosa puesto que el supuesto planteado no encontraría amparo en la disposición estatutaria destinada a regular la figura de los Jueces *ad hoc*, ya que el art. 31.4 expresamente dispone «...*el Presidente pedirá a uno de los miembros de la Corte que constituyen la Sala, o a dos de ellos, si fuere necesario, que cedan sus puestos a los miembros de la Corte que sean de la nacionalidad de las partes interesadas, y si no los hubiere, o si estuvieren impedidos, a los magistrados especialmente designados por las partes*»⁸¹. De modo que la entrada del nacional en la composición de las Salas es automática, según el tenor literal del art. 31.4 recién transcrito, por lo que no es necesaria la instancia de la parte o partes interesadas en este sentido. Por otra parte, según este artículo, salvo que el deseo del Estado del que es nacional el Juez ordinario de la Corte sea equiparable a impedimento, no podrá proceder a la designación de un Juez *ad hoc* mientras posea un nacional en la composición de la Corte.

Hemos de concluir que el Estado interesado en que su Juez nacional no estuviera en la composición de la Sala, así lo comunicaría al Presidente de la Corte cuando evacuara consultas. Aunque no pensamos que una interpretación incluso muy flexible del art. 31.4 del Estatuto ampare la pretensión estatal.

⁸¹ El subrayado es nuestro.

2.6.3. Peculiaridades de la participación de los Jueces *ad hoc* en las Salas de la Corte.

Como ya se ha anticipado, y a riesgo de caer en la reiteración, el Juez *ad hoc* es un miembro de la Corte, por lo que participa en igualdad de derechos y deberes con los Jueces ordinarios en el procedimiento incluido, obviamente, el derecho de voto.

A pesar de ello, existen algunos aspectos en los que se distinguen los Jueces *ad hoc* del resto de los miembros de la Corte. El primero es el temporal: el Juez ordinario lo es por un período estatutariamente señalado, de nueve años, reelegible, frente al Juez *ad hoc* que posee este *status* por un tiempo indefinido, condicionado por el desarrollo del asunto en causa. Sin embargo, no se trata de una peculiaridad del Juez *ad hoc*, ya que en la Sala es compartido este carácter por todos sus miembros, con independencia de su Estatuto como Jueces permanentes u ordinarios de la Corte o *ad hoc*. Estamos por tanto ante una dualidad funcional, se trata de Jueces permanentes u ordinarios de la CIJ que poseen carácter *ad hoc* en las Salas, porque estas formaciones son de una naturaleza *ocasional* que afecta a todos sus miembros.

En segundo lugar, a los Jueces *ad hoc* no se les tiene en cuenta en el cómputo del *quorum* ante el Pleno, pero sí cuando participan en las Salas⁸². En este sentido el Juez *ad hoc* en la Sala se *aproxima* más al miembro permanente de la Corte y si conjugamos este dato con el reducido número de miembros que conforman las Salas estaremos de acuerdo en su mayor relevancia. Hasta el momento todas ellas se han constituido con cinco

⁸² La exclusión de los Jueces *ad hoc* del cómputo del *quorum* previsto en el art. 20.3 del Reglamento resulta únicamente aplicable al supuesto indicado en el 25.3 del Estatuto que prevé la necesaria presencia de nueve miembros para que la Corte en Pleno pueda funcionar.

miembros, entre los se cuentan los designados *ad hoc*. Por tanto, resulta evidente la repercusión de las opiniones expresadas por los Jueces *ad hoc* en este foro y, consecuentemente, su mayor importancia en estas Salas comparada con el Pleno de la Corte.

En las dos formaciones de la Corte sólo resulta decisivo el sentido del voto del Juez *ad hoc* cuando existe un empate. Sin embargo, este resultado es considerablemente más difícil de lograr en un Tribunal que puede contar -a los efectos que aquí nos interesan- con un mínimo de diez miembros y con un máximo de 17⁸³, que en una Sala de cinco Jueces. En ambas formaciones encontramos tres situaciones *tipo* : (a) los Estados partes en la controversia cuentan con miembros de su nacionalidad en el Tribunal, designándose a éstos para la Sala sin que proceda, por tanto la elección de uno *ad hoc*⁸⁴; (b) sólo una de las partes tiene un nacional en la Corte, por lo que su contraparte ejercerá el derecho que le confiere el art. 31 del Estatuto⁸⁵; (c) en la formación del Tribunal no existe miembro alguno de nacionalidad de uno de los Estados en causa, por lo que ambos podrán designar uno *ad hoc*⁸⁶.

⁸³ Evidentemente diez [porque el *quorum* de constitución del Pleno -según el art. 25.1 del Estatuto- se encuentra en nueve y a ellos han de sumarse el o los designado/s *ad hoc*] diecisiete cuando estén presentes todos los miembros de la Corte, sin que ninguno de ellos sea nacional de los Estados partes en la controversia, en cuyo caso, si ambos ejercen el derecho que les confiere el art. 31 del Estatuto, habremos de sumarlos dos más.

⁸⁴ Es el caso de la *Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-* (Estados Unidos/Italia). En la CIJ se encontraba S.M. SCHWEBEL de nacionalidad estadounidense y R. AGO, italiana.

⁸⁵ Este supuesto se produjo en la primera de las Salas *ad hoc* que se formaron en el seno de la CIJ, el asunto de la *delimitación marítima en la región del Golfo de Maine* (Estados Unidos/Canadá). S.M. SCHWEBEL era miembro de la Corte, por lo que Canadá procedió a la designación de Maxwell COHEN, como Juez *ad hoc*. La doctrina indica que se ha intentado lograr el equilibrio de los Estados ante el Tribunal por adición, es decir, sumando un miembro más, en lugar de hacerlo por sustracción, impidiendo que el Juez nacional de una de las partes en la controversia formara parte del tribunal que va a conocer de la misma. Ciertamente esta última solución sería más injusta para los miembros de la Corte, que por otra parte resultan sostener en menor porcentaje que los *ad hoc* las opiniones de los Estados de los que son nacionales.

⁸⁶ Tanto Burkina Faso y Mali en la *diferencia fronteriza*, como Honduras y El Salvador en la *diferencia fronteriza, terrestre, insular y marítima*, procedieron de este modo. En el primer asunto citado, Burkina Faso designó al francés LUCHAIRE, y Mali al egipcio G. ABI-SAAB. En el segundo, El Salvador nombró al griego N. VALTICOS y Honduras al francés M. VIRALLY, que

En tercer lugar, se insertan en el orden de precedencia establecido para los miembros permanentes de la Corte en último lugar, después de todos los demás, por lo que serán los primeros en votar⁸⁷. Esta regla es aplicable tanto al Pleno como a las Salas, puesto que en ningún texto rector de la CIJ se señala especialidad alguna en este sentido.

El aspecto salarial constituye la última de las diferencias respecto del resto de sus compañeros. Mientras los Jueces permanentes u ordinarios cobran sueldos anuales -art. 32.1 del Estatuto y la res. 19 (I) de la AGNU, de 6 de febrero de 1946-, los *ad hoc* perciben dietas cuyo cómputo se elabora mediante la aplicación de la relación 1/365 diario del sueldo anual de los Jueces titulares no sólo a los días de sesión, sino también a los de estudio del asunto⁸⁸, sin que se tengan en cuenta a estos efectos el complemento que reciben los miembros de la Corte tras la res. AGNU 31/204 de 22 de diciembre de 1976⁸⁹.

falleció en el curso del procedimiento, siendo sustituido por el español S. TORRES BERNARDEZ. También podrían haber renunciado al ejercicio de este derecho, puesto que al no tener la otra parte Juez nacional ante el Tribunal, no había nada que *neutralizar*, pero ninguno lo hizo.

⁸⁷ Antes de 1978 el art. 33.5 del Reglamento indicaba el orden de votación era inverso al del art. 2 del Reglamento. Ahora, el 7.3 únicamente indica que se colocan en lo que a la precedencia se refiere después de los Jueces de la Corte y entre los Jueces *ad hoc* se atenderán al criterio de edad. El orden de votación se establece en el Reglamento de Procedimiento Interno de la Corte.

⁸⁸ Según la res. AGNU 45/250 de 21 de diciembre de 1991, con efecto 1 de enero de 1991 los Jueces *ad hoc* perciben por cada día de ejercicio de sus funciones 397 dólares. *Vid.* en este sentido CIJ *Annuaire* 1993-94, p. 265-6

⁸⁹ Los Salarios los fija la AGNU en aplicación del art. 32.5 del Estatuto. Desde 1974 el presupuesto de la CIJ se aprueba con carácter bienal. El pago de los Jueces *ad hoc* proviene de la sección presupuestaria de la CIJ para gastos imprevistos y extraordinarios. En este sentido J.L. RENAULT *Le juge ad hoc au sein de la Cour Internationale de Justice*, Tesis, Orleans 1979, p. 149 y LACHAUME *op. cit.*, p. 327.

2.6.4. Formalidades del nombramiento de los Jueces *ad hoc* en las Salas de la CIJ.

El procedimiento que ha de seguirse para designar un Juez *ad hoc* difiere entre las Salas y el Pleno. Según el trámite dispuesto por el art. 31 del Estatuto para la designación de Jueces *ad hoc* en las Salas, en primer lugar se elige la composición de ésta y, después, el Presidente de la Corte pide a uno o a dos de los Jueces así designados que cedan sus asientos a los designados *ad hoc* por las partes⁹⁰.

El procedimiento estatutariamente previsto para la designación de Jueces *ad hoc* en las Salas (art. 31.4 del Estatuto) que será el Presidente el que pida a uno o dos de los miembros de la Corte que constituyen la Sala que cedan sus lugares a los Jueces elegidos por las Partes. La decisión, por tanto, la adopta el Presidente de la Corte⁹¹.

Ahora bien ¿qué trámite ha de seguirse hasta alcanzar la decisión? M. SHAHABUDDEEN opina que con carácter previo a la decisión el Presidente habrá de consultar con las partes para decidir qué Juez es sustituido por el/los designados *ad hoc*⁹². En un plano doctrinal se ha sugerido, por el contrario, que

⁹⁰ En este epígrafe partimos de la inexistencia de Jueces nacionales de las partes en el seno de la Corte que no hayan sido elegidos para formar parte de la Sala, en cuyo caso según el tenor literal del art. 31.4 del Estatuto no procede la designación de un Juez *ad hoc*, sino que el Presidente reemplazará a uno de los miembros de la Sala por el Juez ordinario nacional de una de las partes en la controversia. Sólo en el supuesto de que carezcan de un nacional en la composición de la Corte procederá la designación de Juez *ad hoc*.

⁹¹ *Vid.* Ordenanza 20 de enero de 1982 en CIJ Recueil 1982, pp. 8-9.

⁹² Opinión Disidente a la Ordenanza de 28 de febrero de 1990 *Vid.* en CIJ Recueil 1990, p. 39.

esta decisión, sin responder a regla objetiva alguna, se deja a la absoluta discrecionalidad del Presidente del Tribunal⁹³. La práctica actual no se ha hecho eco del problema, pero cabe suponer que es un valor convenido en la elección del Pleno y podemos suponer que las consultas mantenidas por el Presidente de la Corte con las partes en la controversia alcanzan también este extremo, puesto que el art. 17.3 del Reglamento no limita las consultas en este sentido.

En el asunto *de la delimitación de la frontera marítima en la zona del Golfo de Maine*, así se hizo aunque con alguna irregularidad ya que el Acuerdo entre Canadá y Estados Unidos para someter al arreglo obligatorio la diferencia ambos Estados, al disponer (art.1) que: acordaron lo que sigue: «*La Chambre de la Cour Internationale de Justice est réputée avoir été constituée lorsque le Greffier de la Cour a été notifié du nom du juge ad hoc ou des noms des juges ad hoc*», dió pie a una irregularidad al entenderse constituida la Sala sólo despues de la recepción por el *Greffier* de la Corte de la notificación de la persona elegida como Juez *ad hoc*.

El nombre del Juez designado *ad hoc* por Canadá se hizo público en la primera Ordenanza dictada por la Sala, no en la de su constitución⁹⁴. En los casos posteriores la práctica no ha respondido a las previsiones reglamentarias. Tanto en el asunto de la *diferencia fronteriza Burkina Faso/República de Malí*⁹⁵, como en el de *la diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima Honduras/El*

⁹³ *Vid.* entre nosotros C.ESCOBAR "Las Salas...op. cit. p. 301.

⁹⁴ *Vid.* Ordenanza de 1 de febrero de 1982 en CIJ Recueil 1982 p. 16. En la Ordenanza de la Sala se hace referencia al nombramiento aunque de modo indirecto, ya que la fecha de la comunicación del mismo al *Greffier* sirve como inicio del plazo de depósito de las memorias. De la redacción de la Ordenanza podemos deducir que si las partes no hubieran impuesto el cumplimiento de este trámite como inicio del plazo de depósito, la Ordenanza de la Sala ni tan siquiera habría mencionado dicha designación.

⁹⁵ *Vid.* CIJ Recueil 1985, pp. 6-7.

Salvador⁹⁶, las partes notificaron a la Corte el nombramiento de los Jueces *ad hoc*, procediéndose después a la elección del resto de los miembros de la Sala mediante el procedimiento indicado en el art. 17 del Reglamento, y figurando todos en la misma Ordenanza constitutiva de la Sala.

El nuevo procedimiento de designación de Jueces *ad hoc* para las Salas, sin fundamento estatutario o reglamentario, cuenta con detractores y defensores. Entre los primeros encontramos a M. SHAHABUDDEEN, miembro de la Corte desde el 6 de febrero de 1988, quien indica que la Corte no es competente para conferir a las partes el derecho que le otorga el art.31.4⁹⁷. Además, al tratarse de un precepto estatutario, su contenido no puede ser modificado ni por la práctica posterior ni por el Reglamento.

Esta observación anterior resulta tan correcta como embarazosa. La práctica judicial no puede oponerse a las prescripciones del Estatuto y, de hacerlo, las vías para contrarrestarla son engorrosas⁹⁸. Por otro lado, la función que el art.30 del Estatuto confiere al Reglamento es la de desarrollar este

⁹⁶Vid. CIJ Recueil 1987, p. 12.

⁹⁷Vid. su Opinión Disidente a la Ordenanza de 28 de febrero de 1990 en CIJ Recueil 1990, pp. 38-40. A pesar de todas las críticas que formula al nuevo procedimiento utilizado por los Estados partes en las últimas controversias sometidas al conocimiento de una Sala, entiende que el procedimiento del 31.4 no tenía sentido dado el método seguido para la designación de los Jueces y aprecia que el nuevo procedimiento puede responder a razones de economía procesal. En general SHAHABUDDEEN, se manifestó disidente, no de las Salas *ad hoc* como tales, cuya utilidad reconoce (p. 19), sino de algunas de las disposiciones reglamentarias introducidas en 1972 y confirmadas en 1978.

⁹⁸ De hecho los redactores del Compromiso entre Honduras y El Salvador hubieron de acudir a una fórmula rebuscada que acababa poniendo en duda el papel de los Jueces *ad hoc* en el cómputo del *quorum* de la Sala. Vid. art.1.1: «...una Sala de la Corte Internacional de Justicia, compuesta por tres miembros...» Art.1.2: «Adicionalmente, integrarán la Sala dos Jueces *ad hoc*, especialmente nombrados uno por El Salvador y otro por Honduras, los que podrán tener la nacionalidad de las partes».

La última frase transcrita merece un comentario, dado que como el propio Reglamento indica en su art. 35.1, el Juez designado *ad hoc* podrá no tener la nacionalidad del Estado que lo designa; por tanto, esta disposición del Compromiso entre Honduras y El Salvador a primera vista superflua, está redactada "por si las dudas", dado que las partes podrían haber acordado lo contrario.

texto⁹⁹, no la de violentarlo y, está claro que sus disposiciones no deberán prevalecer sobre una norma de rango superior.

Sin embargo, las ventajas del *nuevo* procedimiento de designación de Jueces *ad hoc* son bastante patentes. G. GUYOMAR, por ejemplo, califica el procedimiento del art. 31.4 de aberrante. El motivo de esta caracterización es que, en primer lugar, se elige a un Juez como miembro de la Sala y posteriormente se le excluye de esta formación para que su lugar sea ocupado por otro Juez miembro ocasional de la Corte y sin embargo, ocupa esta plaza en virtud de su designación por una sola de las partes¹⁰⁰.

La explicación histórica de la disposición controvertida que propone GUYOMAR resulta convincente. Ciertamente el contenido de este artículo es una herencia de la CPJI. El precepto existía antes de que se concibiera este tipo de Salas *ad hoc*. Está pensado para las Salas preconstituidas que existían cuando se redactó; en la actualidad es un trámite sin ningún sentido para las Salas *ad hoc*. Podemos concluir en este aspecto que, si las partes desean que la Sala en cuestión esté compuesta por dos Jueces *ad hoc*, resulta más lógico designarlos desde el principio que cumplir el trámite -gratuito y hasta mortificante, por otra parte- previsto en este artículo de designar cinco miembros para esta formación, sabiendo que dos de ellos serán excluidos de la misma.

La discusión, a la postre, carece de relevancia práctica ya que el resultado de ambos procedimientos es el mismo. Sin embargo, desde un punto de vista teórico, la cuestión que se plantea puede reducirse a la aplicación de las disposiciones del Estatuto -trámite del 31.4 del Estatuto- *versus* adecuación

⁹⁹ «Determinar la manera de ejercer sus funciones», dice el art. 30 del Estatuto.

¹⁰⁰ G. GUYOMAR "La constitution d'une chambre chargée de régler les frontières maritimes entre les Etats Unis et le Canada" en AFDI, 1981, p.220. *Vid.* también entre nosotros C.ESCOBAR "Las Salas...op. cit. p. 301-2.

práctica de esta institución a una nueva realidad que aconseja la inversión del procedimiento de constitución de la Sala. El Estatuto prevé que primero se constituye la Sala y después se designan los Jueces *ad hoc*, hay que esperar a aquel nombramiento para proceder a este trámite por lo que de esta previsión pudiera derivar además un retraso en la constitución de la Sala.

Por otro lado, habida cuenta de que habitualmente la designación de los Jueces *ad hoc* se produce en la Ordenanza -constitutiva- de la Sala, se plantea si la naturaleza de la Ordenanza se extiende a todos sus extremos, incluida la designación de los Jueces *ad hoc*, lo que no parecería muy conforme con el tenor de un Estatuto que proclama la elección de un Juez *ad hoc* como un derecho de las partes, lo que inclinaría a creer que el acto de la Corte deberá ser declarativo, por cuanto se limita a informar, a hacerse eco del ejercicio de ese derecho. En este sentido, como indica M. SHAHABUDDEN, el nombramiento de los Jueces *ad hoc*

*«simplement est relaté dans le cadre du rappel chronologique de la procédure qui fait objet des paragraphes liminaires de l'ordonnance ou de la décision que la Cour a par la suite d'occasion de rendre en l'espèce»*¹⁰¹.

¹⁰¹ Vid. Opinión individual a la Ordenanza de 13 de diciembre de 1989 en CIJ Recueil 1989, p. 166. El mismo SHAHABUDDEEN advierte *id.* p. 172 que la Corte no puede proponer candidatos a Juez *ad hoc*, sino tan sólo negarse a las pretensiones del Estado. También afirma M. SHAHABUDDEEN que el derecho de designar un Juez *ad hoc* incide en la composición de la CIJ y que por ello está directamente regido por el instrumento constitutivo de la Corte, el Estatuto, cuyo art. 31 no atribuye ningún papel a la Corte, en momento alguno del proceso, acerca de su designación directa o indirectamente «*par le jeu des autres dispositions qui y sont mentionnées*». Tampoco, con una interpretación flexible, los límites del poder reglamentario que el art. 30 del Estatuto confiere a la Corte, permitirían atribuir a ésta un papel que no le confía el Estatuto. Por tanto, el Pleno de la Corte en las Ordenanzas de 3 de abril de 1985 (Vid. CIJ Recueil 1985, p. 6-7) como en la de 13 de diciembre de 1989 (Vid. CIJ Recueil 1989, p. 10) se limita a tomar nota del nombramiento de 3 Jueces titulares y la adición de 2 elegidos *ad hoc* nominativamente designados. La CIJ por tanto no nombra 5 reservándose el Presidente de solicitar a alguno de ellos que cedan su lugar a Jueces designados *ad hoc*, a diferencia de lo que prevé el art. 31.4 del Estatuto.

3. EL PROBLEMA DE LA COMPETENCIA PARA MODIFICAR LA COMPOSICIÓN DE UNA SALA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA.

3.1. Provisión de vacantes.

El Estatuto nada dice sobre esta cuestión, pero sí lo hace el Reglamento que en su artículo 17.3 *in fine* dispone que «*las vacantes serán cubiertas siguiendo el mismo procedimiento*» que el de la designación de los Jueces, lo que como entiende BEDJAOUI¹⁰² es bien lógico.

Sin embargo, los *abusos* detectados en la composición inicial de las Salas podrán reproducirse en este supuesto: así el art. III del Tratado entre Canadá y Estados Unidos para someter al arreglo judicial la diferencia relativa a *la delimitación de la frontera marítima en la región del Golfo de Maine* preveía la posibilidad de que las vacantes que pudieran producirse en el seno de una Sala se designaran de igual forma que los titulares de la misma en caso de ser necesario. En este texto se estipuló además que, de no proceder de esta forma, cualquiera de ellos podrían denunciar el compromiso del que derivaba la competencia de la Corte, entrando en vigor el Compromiso de Arbitraje anexo a ambos. El problema que el contenido de este artículo planteaba fué suscitado por los miembros de la Corte (es la primera de las cuestiones formuladas por la Corte a Estados Unidos y Canadá antes de proceder a la constitución de la Sala) y la respuesta de las partes en la controversia se hizo pública en la

¹⁰² M. BEDJAOUI "Universalisme et Regionalisme au sein de la Cour Internationale de Justice: La constitution de chambres «ad hoc»" en *Liber amicorum*. Colección de estudios jurídicos en homenaje al Prf. Dr. D. José Pérez Montero, Oviedo 1988, p. 163.

Ordenanza de 20 de enero de 1982¹⁰³. Las partes entienden que el art. III del Acuerdo de 29 de marzo de 1979 no contraría ni el Estatuto ni el Reglamento de la Corte, puesto que su intención es cubrir de acuerdo con las previsiones de ambos textos las vacantes que pudieran producir aquellos miembros de la Sala que no poseen la nacionalidad de ninguna de ellas¹⁰⁴.

A pesar de todo, el problema no deriva del contenido de esta disposición del Acuerdo de 29 de marzo de 1979 celebrado entre Estados Unidos y Canadá, acorde aparentemente con las previsiones reglamentarias, sino del efecto distorsionador producido sobre esas mismas previsiones. Es cierto que las partes en su compromiso podrán variar, si media autorización de la Corte, algunos preceptos procedimentales, al amparo del art. 101 del Reglamento; pero los aspectos relativos a la composición de la Sala no se encuentran en el Título III que es el ámbito de aplicación de este art. 101.

Otra cuestión es la del órgano competente para formalizar el trámite sustitutorio. El art. 26.2 del Estatuto señala al Pleno de la Corte para proceder a la constitución de una Sala *ad hoc* y los arts. 17 y 18 del Reglamento indican el

¹⁰³ Vid. CIJ Recueil 1982, p. 6.

¹⁰⁴ La respuesta completa de las partes a esta pregunta es la siguiente:

«Article III of the Treaty is wholly consistent with the Statute and Rules of the Court. The parties have at all times expected that any vacancy on the Chamber would be filled in accordance with the Statute and the Rules. The procedures set forth in Articles 17 and 18 of the Rules provide for ascertaining the views of the parties and for a subsequent election by the Court in the case of a vacancy created by the absence of a member of the Court not a national of either party. Article III of the Treaty in no way interferes with the operation of these provisions. It simply specifies the circumstances under which the parties may exercise their right to terminate the Special Agreement and, pursuant to Article 88 of the Rules, to discontinue the proceedings before the Court.

The parties note that the right of termination, as discussed above, is provided for in the Treaty which was transmitted to the Court as background information. Unlike the Special Agreement, the Treaty was not notified to the Court pursuant to Article 40 of the Statute and thus does not call for any action by the Court. In respect of the operation of Article III of the Treaty, the parties contemplate that they would jointly request the election of a member of the Court to fill any vacancy that might arise among those Judges not nationals of either party and either party would have the option of terminating the Special Agreement if the result of the election was not in accordance with this joint request» (CIJ Recueil 1982, p. 6.)

procedimiento a seguir para designar su composición. Las ordenanzas por las que se designa la composición de una Sala son emitidas por la Corte en Pleno, pero, conviene recordar que su carácter es constitutivo por lo que hace a la designación de sus miembros que también lo son de la Corte, y declarativo por lo que hace a la designación de los Jueces *ad hoc*. Dado que los textos reguladores de la Corte no dicen nada al respecto, ¿ha de entenderse que la competencia para reemplazar a los miembros de una Sala ya constituida permanece en el Pleno? En nuestra opinión, cabe entender que tratándose de una modificación de la composición personal, determinada en la Ordenanza de constitución de la Sala, deberá llevarse a cabo, mediante una decisión de iguales características, esto es, una Ordenanza de la Corte en Pleno. Por tanto, en el supuesto de reemplazo de uno de los Jueces que comparten su condición de miembros de ambas formaciones de la Corte, será necesaria una Ordenanza del Pleno¹⁰⁵. Esta fue la situación planteada en la Sala que conoció del asunto de la *Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-* como consecuencia del fallecimiento del Presidente de la Corte, N. SINGH¹⁰⁶.

¹⁰⁵ Previamente deberá procederse -conforme al art. 17.3 del Reglamento- a las consultas con las partes para escuchar sus opiniones acerca del Juez permanente u ordinario de la Corte que consideraran más adecuado para cubrir esa vacante dejada en el seno de la Sala y, posteriormente, la elección por sufragio *libre y secreto*.

¹⁰⁶ *Vid.* en este sentido la segunda Ordenanza de constitución dictada por el Pleno de la Corte en el asunto de la *Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-*, Estados Unidos c. Italia, de 20 de diciembre de 1988, en CIJ *Recueil* 1988, p. 158. En esta decisión se indica el procedimiento llevado a cabo, al menos en cuanto a los aspectos que nos interesan: se informa de la existencia de las conversaciones -previas a la elección-, entre el Presidente de la Corte -el recientemente fallecido J.M. RUDA- y los Estados partes en la controversia. Así, en la citada Ordenanza de 20 de diciembre de 1988 se dice

«*Considérant que les Parties ont été de nouveau consultées au sujet de la composition de la Chambre conformément à l'article 17, paragraphe 2, du Règlement de la Cour;*

DECLARE:

1) *que lors d'une élection tenue le 20 décembre 1988, M. RUDA a été élu membre de la Chambre pour occuper le siège devenu vacant à la suite du décès de M. Nagendra SINGH.*

Cuando se trata, en cambio, de la provisión de una vacante producida por un Juez *ad hoc* cabría matizar, atendiendo las cuestiones planteadas por el Juez SHAHABUDEEN en su opinión individual a la Ordenanza de 13 de diciembre de 1989¹⁰⁷. Con carácter general no se precisa una Ordenanza para la sustitución de un Juez *ad hoc* pero la Ordenanza del Pleno de la Corte resulta preceptiva para cubrir la vacante producida en la medida en que la Ordenanza de constitución de la Sala haya señalado nominativamente a los Jueces *ad hoc*, al indicar la composición de la misma y ello porque aun haciéndose con efecto declarativo supone una modificación de un acto jurídico de la Corte¹⁰⁸.

¹⁰⁷ Vid. la Ordenanza de 13 de diciembre de 1989, en CIJ Recueil 1989, pp. 161 y ss., y la Opinión de M. SHAHABUDEEN, en pp. 165 y ss.

¹⁰⁸ Por otra parte, si para modificar la composición de la Sala es preceptiva una Ordenanza del Pleno ¿Por qué para prorrogar los plazos de depósito de las memorias de las partes que son fijados por el Pleno de la Corte en una Ordenanza es suficiente un acto jurídico de una Sala? (No siempre se ha señalado el plazo para el depósito de las piezas escritas del procedimiento en las Ordenanzas de constitución de la Sala, de hecho, tan sólo ha ocurrido en una ocasión: en la Ordenanza de 2 de marzo de 1987 -CIJ Recueil 1987, p.3- por la que se constituye la Sala encargada de juzgar el *asunto de la Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-*. En el resto de las ocasiones no se ha procedido de este modo. Es cierto que quien dictó los plazos en todos los casos fue el Pleno de la Corte pero no en el mismo acto jurídico por el que se constituía la Sala. Así en el asunto del *Golfo de Maine* la Ordenanza de Constitución de la Sala es de 20 de enero de 1982 y la de plazos de 1 de febrero del mismo año -en CIJ Recueil 1982, pp. 8 y 15 respectivamente-. En la *diferencia fronteriza* la Ordenanza de constitución es de 3 de abril de 1985 y la de plazos de 12 del mismo mes -en CIJ Recueil 1985, pp. 6 y 10 respectivamente- y en la *diferencia fronteriza...* entre Honduras y El Salvador la Ordenanza de constitución de la Sala es de 8 de mayo de 1987 y la de plazos de 27 del mismo mes -en CIJ Recueil 1987, pp. 165 y 173 respectivamente-. La respuesta resulta evidente, por cuanto hablamos de prórroga -continuación de una cosa por un tiempo determinado- y no de sustitución -poner a una persona o cosa en lugar de otra- (Vid. ambas definiciones en el Diccionario de la Real Academia española, 21ª edición, 1994, pp. 1679 y 1925 respectivamente); bajo este último concepto subyace el sentido de modificación, mientras en el primero es el de mantenimiento. Cuando se prorrogan los plazos, los inicialmente fijados no desaparecen sino que se prolongan, ya que el Reglamento de la Corte -art. 44.3- confiere a las partes la facultad de solicitar una prórroga de los mismos. La formación que conoce del asunto -Pleno o Sala- es la más adecuada para estudiar esta demanda y decidir al respecto. Además, el fundamento de la determinación de los primeros plazos de depósito de las memorias de las partes por el Pleno de la Corte es de carácter funcional, para imprimir rapidez al procedimiento; si no fuera así habría de esperarse a la constitución de la Sala para que ésta decidiera los plazos indicados, de lo cual derivarían retrasos no deseados. Por otra parte, el Reglamento -art. 92- señala que si la Sala estuviere ya constituida la Corte, antes de fijar estos plazos, deberá consultar aquella formación. Resulta por otra parte, evidente que si la Sala es la que dirige los procedimientos instados ante ella, puede utilizar todos los instrumentos necesarios para desarrollar la citada dirección.

Así se hizo cuando fué preciso cubrir la vacante dejada por el fallecimiento de M. VIRALLY, en la Sala que conoció de la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador¹⁰⁹, que fue la que suscitó el cuestionamiento del inquieto Juez guyanés.

Tratándose de la sustitución de un Juez *ad hoc*, cabe preguntarse si y hasta qué punto le afecta la previsión del art. 35 del Reglamento que, en relación con la designación de estos Jueces indica que debe comunicarse al Tribunal el nombre, la nacionalidad y una breve biografía del Juez elegido «*al menos dos meses antes de la terminación del plazo fijado para la presentación de la contra-memoria*». Si esta disposición fuera aplicable a la sustitución del Juez *ad hoc*, nos encontraríamos con que si la vacante se produjera una vez transcurrido este tiempo, al Estado que lo designó no le sería posible nombrar un sustituto, lo cual dejaría a la Sala con un número par de miembros -no deseado que potenciaría el voto de calidad del Presidente- y al Estado afectado por la vacante, en una situación precaria ante el Tribunal.

Puesto que ni el Estatuto ni el Reglamento nos dan una indicación expresa podemos utilizar la analogía para aplicar a este supuesto la solución dada por el art. 37.1 del Reglamento al caso del Juez nacional, según el cual el

Por el contrario, la constitución de la Sala es una competencia del Pleno, puesto que estamos ante formaciones carentes del rasgo de preconstitución y permanencia. De manera que toda alteración en la composición de la Sala habrá de determinarla la formación que es responsable de su constitución.

¹⁰⁹Vid. la segunda ordenanza de constitución de la Sala que conoció de la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador, de 13 de diciembre de 1989, en CIJ Recueil 1989, p.162 y ss, por la que se sustituía a M. VIRALLY, Juez designado *ad hoc* por Honduras, por S. TORRES BERNARDEZ. M. SHAHABUDDEEN adjuntó una opinión individual. Idéntico trámite hubiera sido necesario de haberse planteado una vacante en la Sala que conoció de la *diferencia fronteriza* entre Burkina Faso y Malí. Vid. Ordenanza de 3 de abril de 1985, en CIJ Recueil 1985, pp. 6-8. En esta decisión la Corte por primera vez figuran nominalmente los Jueces designados *ad hoc* por las partes. En cambio, para la sustitución del Juez designado *ad hoc* por Canadá en el *asunto de la delimitación de la frontera marítima en el Golfo de Maine*, no hubiera sido necesaria una Ordenanza del Pleno, puesto que en la Ordenanza de Constitución de la Sala no se determinó personalmente la designación canadiense.

Estado cuya nacionalidad ostenta el Juez impedido para continuar conociendo del asunto concreto podrá designar un Juez *ad hoc* «en el plazo fijado por el Tribunal». Por tanto, cuando se produzca la vacante de un Juez *ad hoc* en el seno de una Sala la parte interesada deberá notificarlo a la formación que está conociendo del caso y será en ese momento cuando la propia Sala señalará el plazo dentro del cual habrá de designarse el sustituto del originariamente nombrado¹¹⁰.

En realidad, a menos que en el compromiso de sumisión del caso a una Sala las partes convengan otra cosa, cubrir una vacante producida en la formación de una Sala *ad hoc* no sería estrictamente necesario para su actuación, porque no existe un *quorum* mínimo ni estatutaria ni reglamentariamente establecido. Es la percepción de igualdad de las partes y las circunstancias de una composición *par* en la toma de decisiones las que, como ya hemos apuntado, aconsejan en todo caso cubrir las vacantes.

Nos restan dos cuestiones por plantear. En primer lugar, el problema relativo a los Jueces que eran miembros de la Corte en el momento de la

¹¹⁰ En el supuesto de Honduras/El Salvador, la vacante se produjo por fallecimiento del Juez *ad hoc* designado por Honduras M. VIRALLY, el 27 de enero de 1989. La notificación de la sustitución se realiza mediante carta fechada el 9 de febrero de 1989, cuando ni siquiera se había cumplido el plazo previsto con carácter general por el art. 35 del Reglamento para la designación de Jueces *ad hoc*. A pesar de la celeridad hondureña, la segunda Ordenanza de constitución de la Sala fue diez meses posterior a la citada notificación: 13 de diciembre de 1989 (CIJ Recueil 1989, p. 162), retraso considerable que se debió a que hasta el 30 de octubre de 1989, el Gobierno salvadoreño no notificó a la Corte su opinión favorable a la designación de S. TORRES BERNARDEZ como Juez *ad hoc* hondureño. El Salvador nunca llegó a formalizar las objeciones que pudiera albergar respecto de este nombramiento. ¿Cuál habría sido el efecto de las observaciones salvadoreñas? En realidad, únicamente llamar la atención de la Corte sobre la posibilidad de que la persona indicada no cumpliera los requisitos personales y profesionales previstos en el Estatuto. Los Estados son quienes han de designar sus Jueces *ad hoc* pero la Corte ha de aceptarlos. Es decir, la Corte controlará que la persona elegida por el Estado cumple los requisitos señalados por el Estatuto. *Vid.* en este sentido la Opinión de M. SHAHABUDEEN a la Ordenanza de 13 de diciembre de 1989, en CIJ Recueil 1989, p. 172; L. MILLAN MORO "El Juez *ad hoc* en la Corte Internacional de Justicia" en Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz, 1990, pp. 223-226; D.D. NSEREKO "The International Court, Impartiality and judges «ad hoc»" en IJIL, n°13, 1973, p. 229; J.L. RENAULT Le juge *ad hoc* au sein de la Cour Internationale de Justice, Tesis, Orleans 1979, p. 28; Sh. ROSENNE Procedure in the International Court, Dordrecht, 1983, pp. 27-29; G. SCHWANZERBERGER International Law as applied by International Courts and Tribunals, Vol. IV, International Judicial Law, Londres, 1986, p. 374

constitución de la Sala y posteriormente dejaron de serlo: ¿Cuál es el órgano competente para proveer una vacante dejada por ellos? No existe ni en la práctica de las Salas ni en los textos nada que nos ayude a resolver el problema. La única solución aceptable es actuar como si de un miembro ordinario de la Corte se tratase. Es decir, acudir al procedimiento del art. 17.3 del Reglamento, ya que, si bien cuando se produjo la vacante el miembro de la Sala no contaba ya con la condición de Juez ordinario de la Corte, se le designó para esta formación en cuanto tal. Es decir, si en el momento de constitución de la Sala no hubiera sido miembro de la Corte no se le habría elegido para formar parte de aquélla.

La segunda cuestión que nos resta por resolver es de carácter general, es decir, afecta tanto al Pleno como a las Salas; sin embargo, la tratamos aquí porque se planteó en el asunto de la *Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-*. En esta Sala participaron los miembros de la Corte que poseían la nacionalidad de las partes en la controversia y cabe preguntarse: ¿con qué carácter actuaron? Ambos Jueces eran miembros de la CIJ y fueron elegidos por ello. Como existían nacionales de las partes en la composición de la Corte no se designaron Jueces *ad hoc*¹¹¹. De haberse producido una vacante, ¿qué procedimiento cabría aplicar? En este punto hemos de tener en cuenta que pueden plantearse dos supuestos: 1) que de la elección prevista en el art. 17 del Reglamento haya resultado el Juez nacional para formar parte de la Sala, como ocurrió en el asunto del *Golfo de Maine* y la *Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-*; y, 2) que en esa elección no hubiera resultado elegido, pero en aplicación del art.

¹¹¹ No es éste un caso aislado, ya que en el asunto de la *delimitación de la frontera marítima en la zona del Golfo de Maine*, uno de los miembros del Tribunal era SCHWEBEL y al igual que en éste asunto, fué integrado en la composición de la Sala. Por lo que cabe deducir que en los dos únicos casos en los que han existido Jueces nacionales de alguna de las partes en la controversia como miembros de la Corte, han sido designados para formar parte de la Sala que iba a conocer del asunto en cuestión.

31.4 del Estatuto el Juez nacional hubiera reemplazado a uno de los originariamente designados.

En cualquiera de los supuestos la respuesta es la misma ya que el art. 37.1 del Reglamento señala, en relación con el Pleno, que cuando un Juez nacional esté impedido para actuar en un asunto en causa, el Estado afectado «podrá designar un Juez *ad hoc*». No hay razón para no aplicar esta regla a las Salas. Sin embargo, si la vacante dejada por este Juez nacional es cubierta en el Pleno por otro miembro de su misma nacionalidad procedería más que la designación de un Juez *ad hoc*, la del nuevo Juez nacional que se encuentra en el seno de la CIJ.

3.2. Modificación de la composición de una Sala (re-constitución). El problema de la intervención.

En el epígrafe anterior hemos indicado que la formación competente para decidir la provisión de vacantes en la composición de una Sala *ad hoc* es el Pleno de la Corte, incluso para sustituir a un Juez designado *ad hoc*.

La cuestión de la que nos vamos a ocupar ahora es la del órgano al que corresponde decidir, no ya la simple sustitución personal dentro de la composición de una Sala, sino un supuesto más complejo, como es el de la reestructuración de esta formación. Para ello hemos tomado como hilo conductor la argumentación sostenida por la Corte en el supuesto de la intervención nicaragüense en el asunto de la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador.

Si para una sustitución personal en la composición de la Sala es necesaria una Ordenanza del Pleno de la Corte, cabría suponer con mayor motivo que éste habría de ser también el foro competente para conocer de una reestructuración en aquélla. Sin embargo, paradójicamente, la solución aportada por la Corte en la Ordenanza de 28 de febrero de 1990, es distinta y distante de la lógicamente supuesta¹¹².

Dos meses después de la Ordenanza del Pleno de 13 de diciembre de 1989, recaída en el asunto de la *diferencia fronteriza, terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador para cubrir la vacante de un Juez *ad hoc*¹¹³, el Pleno hubo de pronunciarse acerca del órgano competente para reestructurar la composición de la Sala. La oportunidad se la brindó una demanda de intervención nicaragüense en dicha controversia¹¹⁴. El Pleno de la Corte consideró entonces

*«Whereas under Article 26, paragraph 2, of the Statute the Court has power to form a chamber to deal with a particular case, and consequently to regulate matters concerning its composition; whereas it is for the tribunal seised of a principal issue to deal also with any issue subsidiary thereto; whereas a chamber formed to deal with a particular case therefore deals not only with the merits of the case, but also with incidental proceedings arising in that case (cf. Frontier Dispute, Provisional Measures, Order of January 1986, ICJ Reports 1986, p.3; Elettronica S.p.A. (ELSI), ICJ Reports 1989, p.42, para.49).»*¹¹⁵

Llegando a la conclusión de que la Sala era competente para regular esta cuestión ¿Cuál puede ser el motivo del diferente criterio adoptado por la

¹¹²Vid. en CIJ Recueil 1990, p.4.

¹¹³Vid. en CIJ Recueil 1989, pp. 162 y ss.

¹¹⁴Vid. el epígrafe 4. del Capítulo Cuarto dedicado al procedimiento incidental de intervención. Nicaragua presentó su demanda de intervención ante el Pleno de la Corte por *«reasons of elemental equity (that of consent and that of the equality of States)»*, dado que no confiaba en la composición de la Sala en cuestión ya que, a su modo de ver, reflejaba la voluntad de las partes en la diferencia. Vid. Ordenanza de 28 de febrero de 1990, en CIJ Recueil 1990, Opiniones disidentes de N. TARASSOV, p. 12 y de M. SHAHABUDEEN, p. 56

¹¹⁵Vid. Ordenanza de 28 de febrero de 1990, en CIJ Recueil 1990, p.4.

Corte en este punto, dos meses después de haber emitido una Ordenanza de modificación de la composición de la misma formación?

Las diferencias existentes entre los supuestos objeto de ambas Ordenanzas son múltiples, pero en nada beneficia el cambio de criterio. Entre ellas cabe señalar que en el primer supuesto nos encontramos ante una sustitución de un Juez *ad hoc* -una modificación en la composición de la Corte que podemos calificar de carácter leve, por cuanto es únicamente personal-, mientras que en el segundo supuesto observamos que un Estado no parte en la controversia -Nicaragua- solicita de la Corte «...*only the making of those changes strictly necessary in order to maintain the minimum standards of efficacy and procedural fairness*»¹¹⁶, entendiendo por tal la posibilidad de reformar la composición de la Sala, con el objeto de permitir la designación de un tercer Juez *ad hoc*, el elegido por Nicaragua. Por tanto, no estamos ante una sustitución personal, sino ante la modificación estructural de la formación que nos ocupa -ante una *recomposición* o *reestructuración*-, lo que implica una variación de carácter más grave que la anterior¹¹⁷. Además, las partes en el procedimiento en causa formularon objeciones al respecto.

Una diferencia más: el Estado que pretendía esta modificación en la composición de la Sala planteaba ante la Corte un incidente acerca de un asunto de cuyo procedimiento se encontraba conociendo aquélla¹¹⁸. Por tanto,

¹¹⁶Vid. Ordenanza de 28 de febrero de 1990, en CIJ Recueil 1990, p.5.

¹¹⁷Vid. Opinión disidente de N. TARASSOV a la Ordenanza de 28 de febrero de 1990, en CIJ Recueil 1990, p. 13.

«*The intervening State does not have this possibility and its procedural position before a chamber is not on a par with the position of the initial parties. Such an inequality might be especially harmful to the intervening party if it were to seek to reformation of the existing composition of a chamber or a modification of that chamber's mandate*»

¹¹⁸ El problema derivaba de la formación que se encontraba conociendo del procedimiento en causa: una Sala *ad hoc*, y no del incidente procesal suscitado. La doctrina se muestra partidaria de la posibilidad de nombrar un Juez de este tipo por el Estado interviniente en un procedimiento ante la Corte cuando no exista identidad de intereses con alguno de los

la posibilidad de la *recomposición* o *reestructuración* de la Sala dependía de la aceptación o no por el foro competente del incidente solicitado por Nicaragua, y además, del estatuto jurídico que se reconociera al Estado que pretendía intervenir¹¹⁹. Si Nicaragua hubiera sido admitida como **parte interviniente**, que no lo fué, hubiera contado con el derecho contemplado en el art. 31.4 del Estatuto, por lo que podría haber solicitado la designación de un Juez *ad hoc*, y entonces ¿cuál sería el foro competente para conocer de esta solicitud? ¿El Pleno o la Sala en cuestión? Pensamos que, de acuerdo con la actuación de la Corte en los casos de sustituciones personales que tratamos en el epígrafe anterior, debería haber sido el Pleno quien conociera de la solicitud nicaragüense, a pesar de la afirmación contenida en la Ordenanza de 28 de febrero de 1990¹²⁰. Resulta ciertamente paradójico que para realizar una sustitución personal en la composición efectiva de la Sala se acuda a una Ordenanza del Pleno de la Corte y para decidir acerca de lo que en definitiva es una variación de carácter estructural en la composición de la Sala, se entienda competente a esta formación reducida. Como señala Nikolai K. TARASSOV

«It is obvious that all the proposed transformations i.e., the full or partial reformation of the existing Chamber, or the modification or limitation of its mandate, cannot be effected by the existing Chamber itself. Only the full Court, which formed the present Chamber to deal with a land, island and maritime frontier dispute between El Salvador and Honduras and thus conferred upon it its mandate 'to deal with the present case' (ICJ Reports

Estados partes en la controversia. Vid. J.F. LACHAUME "Le juge «ad hoc»" en RGDIP, 1966, nº70, pp. 287-288; L. MILLAN MORO "El Juez...op. cit., p. 244; S. ROSENNE Procedure...op. cit., pp. 86-87; G. SCHWARZENBERGER International Law...op. cit, pp. 377-382; J.L.RENAULT Le juge... op. cit. pp.126-137

¹¹⁹ Según la Corte, el foro competente para conocer del incidente procesal planteado era aquel al que se había sometido el procedimiento principal: la Sala *ad hoc*. Vid. Ordenanza de 28 de febrero de 1990, en CIJ Recueil 1990, pp. 3 y ss. La Sala admitió a Nicaragua únicamente como interviniente, es decir no parte en la controversia. Puesto que según el art. 31 del Estatuto sólo los Estados partes se encuentran amparados por el derecho de designar Jueces *ad hoc*, Nicaragua carecía del *status* procesal de parte y por tanto no podía ejercer un derecho que no poseía. Vid. en este sentido la Sentencia de 13 de septiembre de 1990, en CIJ Recueil 1990, p. 117.

¹²⁰ *Id.* nota anterior, p.4.

1987, Order of 8 May 1987, p.12), has the power to undertake a actions of that kind»¹²¹

Personalmente compartimos la opinión manifestada por este Juez de la Corte -recientemente fallecido-. Aún conociendo que «*whereas it is for the tribunal seised of a principal issue to deal also with any issue subsidiary thereto*», como indica la Corte para fundamentar la solución planteada¹²², nos resulta muy difícil creer que el Pleno sea competente para emitir Ordenanzas de composición de una Sala y para las posibles modificaciones -personales- posteriores a la misma y sin embargo, sea la Sala la competente para proceder a las de carácter estructural. La argumentación de la Corte en la Ordenanza de 28 de febrero de 1990 es inconsistente o, por lo menos, oportunista.

4. COMPOSICIÓN DE LAS SALAS AD HOC CONSTITUIDAS HASTA EL MOMENTO.

Tan solo once miembros ordinarios de la Corte han formado parte de las Salas *ad hoc* constituidas hasta el momento en el seno del Tribunal. El número resulta reducido si tenemos en cuenta que han funcionado un total de cuatro Salas de cinco miembros cada una, siendo el número total no de 20, sino de 22, ya que en las Salas que conocieron de los asuntos de la *Eletronica Sicula S.p.A. -ELSI-* (Estados Unidos c. Italia) y de la *delimitación de la frontera terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador, participaron seis miembros y no cinco, dado que en la primera el Presidente N. SINGH falleció en el curso del procedimiento siendo sustituido por J.M. RUDA y en la segunda el

¹²¹ Vid. Ordenanza de 28 de febrero de 1990, en CIJ Recueil 1990, p.12.

¹²² *Id.* nota anterior, p.4.

Juez *ad hoc* designado por Honduras -M. VIRALLY- fue reemplazado por idéntico motivo por S. TORRES BERNARDEZ.

Sin embargo, a esas veintidós plazas de Jueces que han formado parte de este tipo de Salas, debemos restarle las que fueron ocupadas por Jueces *ad hoc*, por el carácter transitorio de su condición de miembros de la Corte. Por lo tanto, a veintidós habremos de restar seis¹²³, con lo cual concluiríamos que fueron un total de dieciseis, los miembros de la Corte que hubieran podido repartir sus tareas entre ambas formaciones: Pleno y Sala.

El hecho de que cinco de ellos hicieran *doblete* contrajo su número a once. Se trata casualmente de los Jueces que formaron la Sala que conoció del asunto de la *Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-*. Tres de ellos -R. AGO, S.M. SCHWEBEL y J.M. RUDA- habían participado en una de las Salas anteriores (AGO y SCHWEBEL en la que conoció de la *delimitación de la frontera marítima en la zona del Golfo de Maine* y RUDA de la *diferencia fronteriza* entre Burkina Faso y Mali), mientras los dos restantes -Sir R. JENNINGS y S. ODA-, formaron parte de la que se constituyó un mes después de ésta (la encargada de la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador). La superposición de procedimientos hizo, además, que estos dos últimos, compaginaron durante algún tiempo -algo más de dos años- sus trabajos entre el Pleno y dos Salas de la Corte, participando en todas las formaciones del Tribunal existentes en ese momento.

123 En la Sala que conoció de la *delimitación de la frontera marítima en la zona del Golfo de Maine*, solo participó un miembro en esta calidad: el designado por Canadá COHEN, debido que en la composición de la Sala se encontraba un Juez de la Corte con nacionalidad de los Estados Unidos: S. SCHWEBEL; en la *diferencia fronteriza* (Burkina Faso/República de Mali) ambos Estados partes en la controversia eligieron Jueces *ad hoc*: LUCHAIRE -Burkina Faso- y ABI-SAAB -República de Mali-; la formación que conoció del asunto de la *Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-*, no contaba con ningún Juez de este tipo, dado que los dos Estados partes en la controversia contaban con Jueces de su nacionalidad en la composición del Tribunal: S. SCHWEBEL -estadounidense- y R. AGO -italiano-; en la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador, ambos Estados designaron Jueces *ad hoc*, N. VALTICOS -El Salvador- y M. VIRALLY -Honduras-, posteriormente sustituido por S. TORRES BERNARDEZ.

Por otra parte, del hecho que se acaba de constatar se infiere -y no deja de ser curioso- que los Jueces designados para la composición de una Sala *ad hoc* en más de una ocasión, no lo fueron por razón de la materia: es decir, su repetición no se dió en asuntos que fueran objetivamente similares, sino todo lo contrario. Baste señalar que no hay un sólo Juez que haya formado parte de dos Salas cuyo objeto haya sido el conocimiento de asuntos fronterizos, paradójicamente, materia precisamente de tres de los cuatro asuntos sometidos a las Salas *ad hoc*.

Por tanto, salvo en la Sala constituida para conocer del asunto de la *Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-*, del resto de las Salas *ad hoc* han formado parte, junto a los miembros de la Corte señalados, otros que asumieron por primera -y por única- vez esta tarea por diversos motivos, unos porque en el transcurso del procedimiento ante la Sala agotaron su mandato como miembros de la Corte -A. GROS o J. SETTR-CAMARA-, fallecieron -N. SINGH- o, sencillamente, no fueron designados para asuntos posteriores a pesar de seguir formando parte de la CIJ -M. LACHS, ya desaparecido, H. MOSLER, sustituido en 1994 por su compatriota C-A. FLEISCHHAUER- y BEDJAOUI, aún en la Corte, que actualmente preside.

La composición elegida para conocer de la *Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-* cuenta con un interés añadido, como es que por primera -y también única- vez en la corta historia de las Salas se eligiese al Presidente de la Corte -N. SINGH- para formar parte de la Sala, facilitando la presidencia de ésta en aplicación del art.18.2 del Reglamento. La vacante dejada por su fallecimiento fue asimismo cubierta por el nuevo Presidente de la Corte, el Juez argentino J.M. RUDA.

Por lo que hace a la procedencia de los miembros de la Corte que han formado parte de las Salas *ad hoc*, cabe señalar que existe mayoría

euroatlántica -seis-¹²⁴, habiendo participado también dos latinoamericanos¹²⁵, dos asiáticos¹²⁶ y un africano¹²⁷. Por tanto, existe mayoría occidental en la composición de estas formaciones reducidas de la Corte. Y ello es aún más ilustrativo si se agrega el dato de los Jueces de la Corte que han repetido: ya que de los cinco miembros de la CIJ que participaron en más de una Sala de este tipo tres eran euroatlánticos -AGO¹²⁸ JENNINGS¹²⁹ y S.M. SCHWEBEL-, uno latinoamericano -RUDA- y otro asiático -S. ODA-, en todo caso del Primer Mundo. Teniendo en cuenta que la mitad de las Salas afectaban a asuntos de países en vías de desarrollo, la conclusión que se puede alcanzar es la de la escasa sensibilidad de los gobiernos de algunos de estos países acerca de su propia condición, máxime cuando no resultó una imposición de la Corte, sino que fue la materialización de las preferencias expresadas al respecto por las partes¹³⁰.

Volviendo a los once Jueces ordinarios de la Corte que formaron parte de la composición de las cuatro Salas formadas hasta la actualidad, ha de señalarse que seis de ellos habían tenido alguna relación con la CIJ antes de alcanzar la condición de miembros de esta institución. Así, A. GROS había sido

¹²⁴ A. GROS -francés-, M. LACHS -polaco-, H. MOSLER -alemán-, R. AGO -italiano-, S.M. SCHWEBEL -estadounidense- y Sir R. JENNINGS británico-.

¹²⁵ J.M. RUDA -argentino-y J. SETTE-CAMARA -brasileño-.

¹²⁶ Los Jueces S. ODA -japonés- y N.SINGH -indio-.

¹²⁷ El Juez argelino M. BEDJAOUJ, actual Presidente de la Corte.

¹²⁸ Recientemente fallecido y sustituido por L.FERRARI-BRAVO.

¹²⁹ Renunció como Juez de la Corte y fue reemplazado el 12 de julio de 1995 por la primera mujer miembro ordinario de la Corte: R. HIGGINS. Había un único antecedente de participación judicial femenina en la CIJ, el de S. BASTID como juez *ad hoc* por Túnez en el asunto de la delimitación de la Plataforma Continental entre Libia y Túnez.

¹³⁰ Vid. en este sentido la Opinión disidente de M. SHAHABUDDEEN a la Ordenanza de 28 de febrero de 1990, en CIJ Recueil 1990, p.44 y S. ODA "Further Thoughts on the Chamber Procedure of the International Court of Justice", AJIL, 1988, vol. 82, p. 558.

representante francés en aquellos asuntos -media docena- llevados ante la CIJ por la República Francesa antes de su designación como Juez de la Corte; H. MOSLER, Juez *ad hoc* de la RFA en el asunto de *la Plataforma Continental del Mar del Norte*; S. ODA, consejero de la RFA en el mismo asunto; también R. AGO, Juez *ad hoc* por Honduras en el asunto de *la Sentencia arbitral del Rey de España de 1906*; S. SCHWEBEL, agente adjunto de Estados Unidos en la CIJ en el asunto del *personal diplomático y consular estadounidense en Teherán*; y Sir R. JENNINGS consejero de Túnez en el asunto de *la Plataforma Continental* entre Túnez y Libia.

En cuanto a los Jueces nombrados *ad hoc* en los asuntos resueltos ante una Sala, también podemos señalar una característica común: la homogeneidad, entendida no en un sentido geográfico, como regionalización, sino en cuanto a su formación occidental. Así M. COHEN -canadiense, es el único que posee la nacionalidad del Estado que lo ha designado-, G. ABI-SAAB -de origen egipcio pero con una formación universitaria en Francia (Paris) y Estados Unidos (Michigan y Harvard)- y residiendo hoy en Suiza, donde es Profesor en el Centro de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, LUCHAIRE -francés-, N. VALTICOS -de nacionalidad griega- M. VIRALLY -francés aunque formado también en Suiza (Ginebra) y Estados Unidos (Columbia)- y S. TORRES BERNARDEZ -español-. Algunos de ellos habían participado en asuntos anteriores como Jueces *ad hoc*; este es el caso de N. VALTICOS en el asunto de *la Plataforma Continental entre Libia y Malta* (fondo); y otros lo hicieron en otros posteriores a los que son objeto de nuestro estudio, como G. ABI-SAAB, Juez *ad hoc* elegido por Chad en el *asunto de la diferencia territorial entre Libia y Chad*; o S. TORRES BERNARDEZ, antiguo *Greffier* de la Corte, que fue designado por Qatar, al fallecimiento de J.M. RUDA en el asunto de *la delimitación marítima y cuestiones territoriales entre Qatar y Bahrein* (Qatar c.

Bahreïn) y más recientemente por España en el asunto de la *competencia en materia de pesquerías* (España c. Canadá)¹³¹.

Sin embargo, no cabe extraer de lo anterior más consecuencias que las estrictamente puntuales. Una valoración sociológica no nos conduce a conclusión alguna, salvo la limitación de recursos humanos de los países en vías de desarrollo para alimentar con *nacionales* las plazas de Jueces *ad hoc*. Entre todos ellos observamos la presencia de una mayoría de europeos -cuatro- frente a un americano y un africano. En cuanto a los sistemas jurídicos que representan, cinco de ellos -los europeos y el egipcio G. ABI-SAAB- proceden básicamente de una tradición romanística o continental; sólo M. COHEN, por el contrario cuenta con una formación anglosajona.

De la composición de las Salas no es posible tampoco extraer una conclusión general acerca de los motivos por los que se designaron esos Jueces. Salvo la primera de las Salas, el resto de ellas gozan de relativa heterogeneidad, aunque es cierto que unas en mayor medida que otras. No obstante, tras considerar dicha composición creemos que la *preferencia* -por utilizar la terminología reglamentaria- de unos miembros del Tribunal en lugar de otros responde a tres tipos de razones: 1) a su nacionalidad, que invita a la elección de Jueces provenientes de países amigos; 2) al consenso entre las partes en la controversia, necesario para lograr la constitución de esta formación concreta; y 3) a una política de prestigio, reflejada en el intento de evitar las críticas diplomáticas, judiciales o doctrinales.

Entre los motivos señalados no figura la especialización material de los miembros del Tribunal. Pero ¿cómo si no? En la única Sala en la que coincidieron los dos grandes expertos en Derecho del Mar con asiento en la

¹³¹ Vid. el apéndice de este trabajo, donde se registra un *curriculum* sucinto de cada uno de los miembros de las Salas *ad hoc*.

Corte -a saber N. SINGH y S. ODA- fue precisamente la relativa a la *Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-* y, si tomamos como ejemplo la formación encargada de juzgar el asunto de la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador donde el contencioso terrestre con base en títulos históricos era fundamental, advertiremos que el único Juez hispanoparlante de la Sala accedió a ella, casi de milagro¹³².

¹³² En el momento en que se produjo la constitución de esta Sala, J.M. RUDA -argentino- era miembro de la Corte, por tanto, podría haberse incrementado la presencia latinoamericana en la Sala. Además, cabría haber utilizado la figura de los Jueces *ad hoc* para introducir la variable requerida: conocimiento suficiente sobre el principio a aplicar.

Capítulo Tercero: Características de la jurisdicción de las Salas.

1. LA FUNCIÓN DE LAS SALAS *AD HOC* ¿SÓLO CONTENCIOSA?

Cuando nos referimos a las Salas o formaciones extraordinarias de la Corte, siempre aludimos a su función contenciosa. El problema a plantear en este punto es si las Salas tienen también un papel a representar en el ejercicio de la jurisdicción consultiva.

El art. 90.1 del Reglamento de 1972 disponía que «*Toda opinión consultiva se emite después de deliberación por la Corte en sesión plenaria*»; sin embargo, en el Reglamento de 1978, esta disposición desaparece. ¿Qué conclusión podemos extraer de ello? Aunque la doctrina no se plantea en general esta cuestión, la tónica es incluir la exposición de las Salas en el marco de la jurisdicción contenciosa, de donde podría inferirse una opinión contraria a la posibilidad de ejercicio de una función consultiva¹. Esta es, por

¹ J. ACOSTA ESTEVEZ *El Proceso ante el Tribunal Internacional de Justicia*, Barcelona 1995, pp. 240-242; M. BEDJAOUI "Remarques sur la creation de Chambres ad hoc au sein de la Cour Internationale de Justice" en *La juridiction internationale, Colloque de Lyon*, Paris 1987, pp.73-78; M. BEDJAOUI "Universalisme et regionalisme au sein de la Cour Internationale de Justice: La constitution de chambres «ad hoc»" en *Liber Amicorum. Colección de estudios jurídicos en homenaje al Prof. Dr. D. José Pérez Montero*, Oviedo, 1988, pp. 155-171; L. DELBEZ *Les principes Généraux du contentieux international*, Paris, 1972; M. DUBISSON *La Cour Internationale de Justice*, Paris 1964; C. GRAY *Judicial Remedies in International Law*, Oxford, 1987; R. JENNINGS "Chambers of the International Court of Justice and Court of arbitration" en *Humanité et Droit International. Mélanges Rene-Jean Dupuy*, Paris 1991, pp. 196-201; M. LACHS "Some comments on *ad hoc* chambers of the International Court of Justice" en *Humanité et Droit International. Mélanges Rene-Jean Dupuy*, Paris, 1991, pp. 203-210; M. LEIGH & S.D. RAMSEY "Confidence in the Court: It need not be a «hollow chamber»" en L.F. DAMSROSCHE *The International Court at a Crossroads*, Nueva York, 1987, pp.106-122; L.H. MEYER "The Ad hoc Chambers: Perspectives of the parties and the Court" en *Archiv des Völkerrechts*, vol. 27 (1989) pp. 413-441; E. McWHINNEY *Judicial Settlement of International Disputes. Jurisdiction, Justiciability and Judicial Law-Making on the Contemporary International Court*, Dordrecht, 1991; J.G. MERRILLS *International Dispute Settlement*, Londres, 1991; H. MOSLER "The *ad hoc* chambers of the International Court of Justice: Evaluation After Five Years of Experience" en *Essays in Honour Shabtai Rossenne*, Dordrecht, 1987, pp. 449-460; A. PILLEPICH "Les Chambres" en *La juridiction internationale, Colloque de Lyon*, Paris 1987, pp. 45-72; S. ROSENNE *The World Court. What It is and How It Works*, Dordrecht, 1989; A. de SAAVEDRA y MUGUELAR "La creación y el funcionamiento de las Salas *ad hoc* del Tribunal Internacional de Justicia", en *Liber amicorum. Colección de Estudios jurídicos en homenaje al*

otro lado, la posición expresamente adoptada por algunos autores, como el Juez SCHWEBEL, la comentarista del Reglamento de la Corte, G. GUYOMAR, y entre nosotros, C. ESCOBAR, que niegan categóricamente la jurisdicción consultiva de las Salas, fundamentando su criterio en una interpretación gramatical del Estatuto de la Corte². También A. ZIMMERMANN, no mostrándose expresamente contrario a la posibilidad de una función consultiva de las Salas, apunta las dificultades que para ello derivan de una interpretación gramatical del texto del Estatuto, señalando que en el procedimiento consultivo no hay caso ni partes que puedan acordar el número de Jueces que constituirán la Sala, tal y como prevé el Estatuto de la CIJ³.

Frente a los anteriores, no faltan sin embargo quienes se manifiestan favorables a la función consultiva de las Salas con variados argumentos. Entre ellos cabe mencionar a L. GROSS, E. HAMBRO, E. LAUTERPACHT, R. OSTRIHANSKY y S. ROSENNE⁴. Así, E. LAUTERPACHT estima que *«[I]t seems reasonable to suggest that Advisory Opinions -or at any rate some of them- are an area of the Court's activity very suitable for reference to a*

Prof. Dr. D. José Pérez Montero, Oviedo, 1988-III, pp. 1285-1303; N. SINGH *The Role and Record of the International Court of Justice*, Dordrecht, 1989.

² G. GUYOMAR *Commentaire du Règlement de la Cour Internationale de Justice*, Adopté le 14 avril 1978, Interpretation et pratique, Paris, 1983, p. 581; C. ESCOBAR HERNANDEZ "Las Salas *ad hoc* del Tribunal Internacional de Justicia" en *Hacia un nuevo orden internacional y europeo. Homenaje al Prof. M. Díez de Velasco*, Madrid 1993, p. 307; S.M. SCHWEBEL "Chambers of International Court of Justice Formed for Particular Cases", en *Essays in honour Shabtai Rosenne*, Dordrecht, 1989, p. 766

³ A. ZIMMERMANN "Ad Hoc Chambers of International Court of Justice", en *DJIL*, vol. 8, n°1, p. 32

⁴ L. GROSS "The International Court of Justice: Considerations of Requirements for Enhancing its Role in the International Legal Order" en *AJIL*, 1971, vol. 65-2, p. 277; E. HAMBRO "Will the Revised Rules of Court Lead to Greater Willingness on the Part of Prospective Clients?", en L. GROSS (ed.) *The Future of the International Court of Justice*, vol. I, Nueva York, 1976, p. 367; R. OSTRIHANSKY "Chambers of the International Court of Justice" en *ICLQ*, 1988, vol. 37.1, p. 39; C. PRATAP *The Advisory Jurisdiction of the International Court*, Londres, 1972, p. 203; S. ROSENNE *Procedure in the International Court*, La Haya, 1983, p. 215.

Chamber»⁵; Sh. ROSENNE entiende que la competencia consultiva de las Salas *ad hoc* puede responder a una delegación realizada por el Pleno de la Corte; además, indica que no existe una opinión definida acerca del efecto «*if any, that change might have on the controversy whether an advisory opinion can be rendered by a chamber*»⁶.

La práctica judicial en la materia no nos sirve para fundamentar la posibilidad de que las Salas *ad hoc* conozcan de cuestiones consultivas, pero tampoco para negarla. La Corte no ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto, ya que las cuatro Salas constituidas hasta el momento tuvieron carácter contencioso, un dato que no justifica por sí sólo una respuesta negativa, debido a que nunca se ha solicitado la constitución de una Sala *ad hoc* para conocer de un asunto de naturaleza consultiva.

Los textos reguladores de la CIJ aparentemente tampoco resuelven esta cuestión de manera definitiva. De ahí que no parezca del todo inútil tratar de llegar a establecer un criterio mediante una interpretación (1) gramatical del texto del Estatuto; (2) histórico-sistemática del Estatuto y del Reglamento y, en concreto, de la regulación que en estos textos se contiene tanto respecto de las Salas como del procedimiento consultivo; y, (3) teleológica, buscando la finalidad de la Corte al introducir las modificaciones reglamentarias en el punto que ahora nos interesa.

⁵ E. LAUTERPACHT, *Aspects of the Administration of International Justice*, Cambridge, 1991, pp. 95-96.

⁶ Sh. ROSENNE *Procedure in ... op.cit.*, p. 188

1.1. Interpretación gramatical

Una interpretación gramatical del Estatuto de la Corte conduce -como algunos autores han sugerido- a una respuesta negativa a la cuestión de la jurisdicción consultiva de las Salas *ad hoc*. El primer dato en este sentido lo aporta el precepto estatutario que perfila esta formación, al indicar que para la constitución de una Sala *ad hoc* es necesaria la aprobación por «*las partes*» del número de miembros que compondrán la misma. Por un lado, según el propio Estatuto -art. 34- sólo los Estados pueden ser partes en procedimientos ante la Corte. Por otra, este mismo texto indica -arts. 65 a 68- que en los procedimientos consultivos no existen «*partes*», sino «*Estados con derecho a comparecer ante la Corte*» y «*organismo autorizado para ello por la Carta de las Naciones Unidas*». Si observamos la Carta comprobamos que en su art. 96 indica los órganos legitimados activamente para solicitar estas opiniones consultivas de la Corte: la AGNU o el CdS y «*los otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados*», estos últimos doblemente limitados: 1) porque han de ser debidamente autorizados por la AGNU; y, 2) materialmente, por cuanto solo pueden solicitar la respuesta de la Corte acerca de las cuestiones de carácter jurídico que surjan dentro de la esfera de sus actividades.

Por tanto el Estatuto de la Corte, cuando trata las Salas *ad hoc*, se está refiriendo implícitamente al procedimiento contencioso. De acuerdo con lo anterior y según este texto estamos ante formaciones que únicamente poseen una jurisdicción contenciosa, no consultiva.

Sin embargo, esta interpretación gramatical tal vez podría llevarnos demasiado lejos, al conducir a una limitación competencial que no sería exclusiva de las Salas *ad hoc*, sino que resultaría predicable también de las de Procedimiento Sumario: el Estatuto de la CIJ -en su art. 29- dispone, en efecto, la necesaria «*petición de las partes*» para que sea una formación de este tipo la que conozca de un asunto, en lugar del Pleno de la Corte. En cuanto al tercer tipo de Salas, las «especiales», debemos señalar que, aunque no cabe afirmar que del art. 26.1 del Estatuto derive restricción alguna en este sentido, también resultarían afectadas por el mismo límite, ya que el 26.3 del citado texto dice que, al igual que las Salas *ad hoc*, podrán oír y fallar los casos si «*las partes*» así lo solicitan⁷.

No obstante, desde un punto de vista gramatical el recién indicado no es aparentemente el único impedimento que contiene el Estatuto para la jurisdicción consultiva de las Salas, ya que las disposiciones que este texto les dedica refieren que estas formaciones conocerán de «casos» (los textos francés e inglés del Reglamento aluden respectivamente a «*affaires*» y «*cases*»), mientras que el procedimiento de naturaleza consultiva se ocupa de «*cuestiones*» (en la versión francesa «*question juridique*», «*legal question*», en la inglesa). En primer lugar, pudiera parecer que la diferencia entre unas y otras expresiones radica en la noción de oposición o controversia puntual y concreta, propia de la naturaleza contenciosa, que subyace en las primeras.

⁷ Pero no sólo el Estatuto se refiere a las «partes» al tratar de las Salas, también el Reglamento lo hace. Así su art. 17 indica respecto de las Salas *ad hoc* que cuando el instrumento de introducción en la instancia sea la demanda unilateral, el Presidente de la Corte averiguará si la otra da su asentimiento. También en la sección dedicada al Procedimiento ante las Salas encontramos el término indicado: el art. 91.1 señala que si hay acuerdo entre las partes para que sea una Sala de Procedimiento Sumario o «especial» la que conozca del asunto en cuestión, se accederá a la petición; el art. 92, en cuanto a la fase escrita del procedimiento, prevé que estará compuesta por un alegato escrito por cada parte y que se presentarán de manera simultánea cuando se haya introducido por compromiso, salvo si las partes acordaron presentarlo sucesivamente; también la Sala podrá autorizar o disponer la presentación de otros alegatos escritos si las partes están de acuerdo en ello. En cuanto a la fase oral del procedimiento, el artículo indicado señala que tendrá lugar salvo renuncia de las partes y que, a pesar de ello, la Sala conserva la facultad de pedir a las partes explicaciones orales.

mientras que, por el contrario, en el término «cuestión» el sustrato conflictual aunque posible, no es necesario.

Sin embargo, como sostiene C. ESPOSITO MASSICCI, no existe una diferencia material entre cuestiones consultivas y demandas contenciosas; tampoco una limitación *ratione materiae* para aquéllas. Las solicitudes de opiniones consultivas tienen por objeto «*cuestiones materiales concretas*», ya que la AGNU y el CdS -y demás órganos y organismos autorizados por la AGNU dentro de la esfera de sus actividades- podrán conocer de cualquier materia -y plantear cuestiones jurídicas acerca de ellas- que quepa incluir dentro de los confines -amplios- del art.1 de la Carta de NNUU⁸.

Por tanto, lo que inicialmente pudiera parecer un argumento gramatical para distinguir materialmente las cuestiones consultivas de los asuntos o negocios contenciosos, queda reducido a una distinción subjetiva: será una u otra según quienes sean los sujetos legitimados para formularla. Hasta tal punto es así, que es posible que las partes en una controversia sometan su conocimiento al Consejo de Seguridad y este órgano solicite una opinión consultiva a la Corte acerca de aquélla. El art. 102.3 del Reglamento actual contempla la posibilidad de que se solicite una opinión consultiva relativa a «*una cuestión jurídica actualmente pendiente entre dos o más*

⁸ C. ESPOSITO MASSICCI La jurisdicción consultiva de la Corte Internacional de Justicia, Madrid 1996, Capítulo IV.

Estados»⁹. En la práctica de la Corte podemos encontrar ejemplos de esta clase tanto en tiempos de la CPJ¹⁰ como de la actual CIJ¹¹.

En último término, el art. 27 del Estatuto indica que la Sentencia que pudiera dictar una de sus Salas se entenderá emitida por la Corte. De una interpretación estricta del precepto indicado, se desprende que sólo las Sentencias y no las opiniones consultivas, se consideran de la Corte, suscitándose la duda acerca del efecto que pudiera derivar de la formulación por una Sala de una opinión consultiva. Sin embargo, junto a la interpretación anterior, podemos ensayar la extensiva, aunque resulta ciertamente forzada. De este modo entenderíamos que el precepto citado no se refiere a Sentencias en sentido estricto como resultado de la función contenciosa, sino que por el contrario está aludiendo al resultado de cualquiera de las funciones derivadas de la Carta y del Estatuto, realizada en las distintas formaciones de la Corte.

Por tanto, la única conclusión que podemos extraer tras una interpretación gramatical del Estatuto de la CIJ en cuanto a la competencia consultiva de sus Salas -de todos los tipos contemplados por él-, es que su texto abona una posición negativa, sin ser absolutamente concluyente. Esa conclusión se debilita cuando se recuerda que nos encontramos con un texto de 1922, modificado en 1936 y, escasamente, en 1946. ¿Debemos hacerla

⁹ No se trata de una novedad introducida en el texto del Reglamento de 1978, sino que ya existía desde el primero de ellos de la CPJ, de 1922.

¹⁰ *Carelia Oriental* (entre Finlandia y Rusia), en CPJ Série B nº5 y *Mosul* (entre Turquía y el Reino Unido), en CPJ Série B, nº 12. En el primero de ellos, la Corte rechazó pronunciarse precisamente por entender que se trataba de una controversia entre Estados.

¹¹ *Interpretación de Tratados de Paz* con Bulgaria, Hungría y Rumanía, primera fase, opinión consultiva de 30 de marzo de 1950, en CIJ Recueil 1950, pp. 65-119 y segunda fase de 18 de julio de 1950, en CIJ Recueil 1950, pp. 221-261; *Reservas a la Convención para la prevención y la represión del crimen de genocidio*, opinión consultiva de 28 de mayo de 1951, Vid. en CIJ Recueil 1951, p. 15; *Consecuencias jurídicas para los Estados de la presencia continua de Africa del Sur en Namibia (Sudoeste Africano) nonostante la resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad*, de 21 de junio de 1971, Vid. en CIJ Recueil 1971, p. 16 y del *Sahara Occidental*, de 16 de octubre de 1975, en CIJ Recueil 1975, p. 12.

prevalecer sin tener en cuenta otras consideraciones? Está claro que los autores del Estatuto y Reglamento solo tuvieron *in mente* la función contenciosa de las Salas, y no se plantearon la posibilidad de su función consultiva; pero no puede deducirse una actitud hostil o prohibitiva a la misma. Lo que legitimaría buscar una respuesta favorable mediante otros criterios interpretativos.

1.2. Interpretación histórico-sistemática

En cuanto al argumento histórico-sistemático, hemos de remontarnos en nuestro estudio a la CPJI. Hasta 1978 los Reglamentos, tanto de la CPJI como de la CIJ, no ofrecían dudas acerca de la cuestión que nos ocupa, ya que todos ellos contenían un precepto en el que se indicaba que las opiniones consultivas se emitían después de la deliberación por la Corte en sesión plenaria¹². Por tanto, *a sensu contrario*, no era posible la intervención de las Salas en los procedimientos consultivos de la Corte. Sólo cuando desaparece dicha referencia en 1978 nos podemos plantear la cuestión indicada.

Por si esta previsión expresa no bastara, el procedimiento ante las Salas «especiales» y de Procedimiento Sumario de la CPJI se regulaba directamente en el Título dedicado al procedimiento contencioso. En los Reglamentos de 1922 y 1926 se encontraban en secciones distintas -dentro del capítulo II dedicado al procedimiento contencioso-. Las normas procesales

¹² El primer Estatuto de la CPJI no contiene disposición alguna acerca del procedimiento consultivo, que en 1936 se incorpora a este texto. Sin embargo, este nuevo Estatuto no indica que las opiniones consultivas deban debatirse en sesión plenaria. Esta disposición deriva del Reglamento y, concretamente, de sus arts. 71 -textos de 1922 y 1926- y 83 del de 1936. En cuanto a la CIJ, este contenido se encontraba en los arts. 84.1 del Reglamento de 1946 y 90.1 del de 1972.

aplicables a las primeras estaban en la Sección B del mismo, bajo la rúbrica «*procedimiento ante la Corte y las Salas especiales*», mientras su Sección C se dedicaba al procedimiento ante las Salas de Procedimiento Sumario. Entre las normas que regulaban estas últimas Salas existía una remisión al procedimiento ante el Pleno para todos aquellos aspectos que no estuvieran previstos específicamente. Aunque no se indicaba el destino concreto de esta remisión -la jurisdicción contenciosa o consultiva-, ello no era necesario porque la remisión a la contenciosa resultaba evidente y se desprendía de la propia ubicación de la regulación de este tipo de Salas -la sección C de ambos Reglamentos se ocupaba de las Salas de Procedimiento Sumario, encontrándose dentro del capítulo dedicado al procedimiento contencioso-.

En el Reglamento de 1936 se regula conjuntamente el procedimiento ante los dos tipos de Salas existentes en tiempos de la CPJI: en la sección segunda del Título II dedicado al procedimiento en materia contenciosa -*Procedimiento ante las Salas especiales y de procedimiento sumario*-. El art. 70 de este texto contiene una remisión conjunta -para ambos tipos de Sala- «a las prescripciones relativas al procedimiento ante la Corte en Pleno». El precepto transcrito no especifica cual de las jurisdicciones de la Corte es la destinataria de esta remisión. A pesar de ello la concreción de la misma resulta innecesaria, por idénticos motivos a los vistos respecto de los Reglamentos anteriores.

Ya en tiempos de la CIJ, las disposiciones procedimentales que regulan las Salas en los Reglamentos de 1946 y 1972 se remitian al procedimiento ante el Pleno de la Corte -art. 70 y 75 respectivamente- con carácter genérico. De ambos preceptos cabría inferir la posibilidad de que las Salas ejercieran las dos funciones que la Carta de las NN.UU. otorga a la CIJ: tanto la consultiva como la contenciosa. Sin embargo, la conclusión continúa siendo idéntica a la apuntada respecto de la CPJI, puesto que se mantiene el

contenido de Reglamentos anteriores acerca de los dictámenes consultivos: se emitirán después de deliberación en sesión plenaria de la Corte.

Es en el Reglamento de 1978 cuando se introducen dos modificaciones significativas respecto de los anteriores. Por una parte, las disposiciones relativas al procedimiento consultivo se refieren a la Corte y no concretamente a sus sesiones plenarias, dejando por tanto abierta la posibilidad de que sea una Sala y no el Pleno el órgano que pueda conocer de la cuestión, siguiendo la tónica general de las labores de modificación de este texto. Por otra, se especifica que el procedimiento aplicable a las Salas será el contencioso. Esta última matización resulta innecesaria si observamos un criterio sistemático. No podemos olvidar que la sección en la que se regula el procedimiento ante las Salas siempre se ha ubicado dentro del Título dedicado al contencioso. Por tanto aunque no fuera así, el reenvío realizado en la línea anterior ya tenía como destino este procedimiento. La inclusión del matiz recién indicado tiene por objeto discriminar entre las disposiciones contenidas en los títulos a los que se dirige, de manera que únicamente sean de aplicación las relativas al procedimiento contencioso y no a otras cuestiones distintas de los aspectos estrictamente procedimentales¹³.

Sin embargo, esta remisión al procedimiento contencioso no resulta definitiva, porque encontramos una prácticamente idéntica en el Estatuto -art.68- y en el Título IV del Reglamento, respecto del procedimiento en materia consultiva¹⁴. Por tanto, observamos que en los preceptos indicados el contenido se repite señalando que, para aquellas cuestiones no reguladas

¹³ La remisión se realiza en bloque a los Títulos I a III de este Reglamento. El Título I es el que regula la organización de la Corte y sólo su Sección C se dedica a las Salas. Por su parte, el Título II es el relativo a la Secretaría de la Corte.

¹⁴ El art.68 del Estatuto indica «El Tribunal se guiará, además, por las disposiciones de este Estatuto que rijan en materia contenciosa, en la medida en que la propia Corte las considere aplicables.». El art. 102.2 del Reglamento es idéntico, únicamente añade que el Tribunal se guiará por las disposiciones del Estatuto y del Reglamento en materia contenciosa.

específicamente en el capítulo dedicado a las funciones consultivas de la Corte, serán de aplicación las disposiciones que rigen el procedimiento contencioso. En definitiva, el contenido de los artículos citados es prácticamente idéntico al que se encuentra en el art.90 del Reglamento respecto de las Salas.

Evidentemente, las normas procedimentales aplicables a los asuntos contenciosos de los que pueda conocer una Sala son las que rigen estos procedimientos ante el Pleno; lo que no tiene por qué implicar necesariamente la imposibilidad de acudir a las funciones consultivas¹⁵.

1.3. Interpretación teleológica.

La relativa inconclusión a que nos lleva una argumentación gramatical y sistemática, aconseja una interpretación teleológica, atenta a la naturaleza del procedimiento consultivo para verificar si, obviando dificultades, cabría plantear la competencia de las Salas para conocer de cuestiones consultivas.

El punto de partida, como ya se ha dicho y repetido, es la desaparición en el Reglamento de 1978 de la necesidad de sesión plenaria para que la Corte conozca de cuestiones consultivas.

¹⁵ La falta de previsión no implica prohibición, de modo que si se acudiera a las funciones consultivas de estas Salas, el procedimiento aplicable sería el previsto en el Título IV del Reglamento, dedicado a las opiniones consultivas emanadas de la Corte.

En primer término, el Reglamento de la Corte prevé la posibilidad de acelerar el procedimiento consultivo en el supuesto de urgencia¹⁶. El art. 103 indica que cuando se requiera una respuesta urgente «*el Tribunal adoptará todas las medidas necesarias para acelerar el procedimiento y se reunirá lo antes posible para celebrar sesión y deliberar sobre la demanda*». Una primera lectura de este artículo podría inclinarnos a una solución negadora del ejercicio por las Salas de la función consultiva de la Corte. Por otra parte, el texto no especifica el método a seguir para lograr esa aceleración y cabría entender que la deliberación -indicada en el precepto reglamentario citado- podría tener como resultado la decisión de transferir la cuestión urgente a la Sala de Procedimiento Sumario, entendiendo por tanto que este envío es una de las posibles medidas necesarias para acelerar el procedimiento.

Sin embargo, la respuesta anterior plantea un problema derivado de la necesaria solicitud de las partes para que sea una Sala la formación que conozca de la controversia concreta en lugar del Pleno de la Corte¹⁷. Si partimos de este requisito podemos plantear dos hipótesis: (1) que el órgano u organismo que solicita la opinión consultiva sea el que entienda la urgencia de la consulta y plantee la posibilidad de acudir al Procedimiento Sumario; y (2), que sea la Corte la que estime la necesidad de que la cuestión consultiva se transfiera a una Sala.

La primera hipótesis parece viable, no así la segunda porque la petición de las partes es el punto de partida del procedimiento ante las Salas. No obstante, si la Corte, una vez visto el asunto, entendiera más adecuado que

¹⁶ Art. 82.2 del Reglamento de 1946, 87.2 del de 1972 y 103 de 1978.

¹⁷ El art. 29 del Estatuto indica que la Sala de Procedimiento Sumario podrá oír y fallar los casos «*a petición de las partes*». En el mismo sentido se pronuncia el art. 26.3 tanto respecto de las Salas *ad hoc* como de las «especiales». Por su parte, los apartados 1 y 2 del art. 91 del Reglamento aplicables a las Salas previamente constituidas, requieren petición en este sentido.

el estudio en profundidad lo realizara una Sala y el órgano u organismo solicitante de la opinión consultiva se aviniera a ello, ¿podríamos equipararlo a una solicitud de las partes, preceptiva tanto para el Estatuto como para el Reglamento?

Esta pregunta plantea un problema de carácter estrictamente temporal, derivado del momento en el que, según el art. 91.1 del Reglamento, ha de formularse la solicitud para que las Salas de Procedimiento Sumario (y las «especiales») entiendan de un asunto¹⁸. Según el precepto indicado, para que estos dos tipos de formaciones extraordinarias de la Corte puedan conocer de una diferencia, la solicitud debe ir en el instrumento de incoación del procedimiento o acompañarlo, por lo que no cabe en un momento posterior formular esta petición, a diferencia de lo que acontece con las Salas *ad hoc*, respecto de las cuales el plazo termina con el procedimiento escrito.

Desde una perspectiva estrictamente técnica y respetando la disposición reglamentaria citada, habría de replantearse la cuestión, de modo que, en aras de la rapidez, se estaría fabricando un resultado contrario al perseguido¹⁹. Habría, pues, que ser flexibles y, llegado el momento, adaptar los textos a las expectativas abiertas por esta interpretación.

En cuanto a las Salas «especiales», a pesar de la redacción del Reglamento puede sugerirse que este tipo de Salas resulta no sólo acorde con la naturaleza del procedimiento consultivo, sino también adecuado. Si, por ejemplo, se suscitara ante la Corte una cuestión consultiva sobre un objeto medio-ambiental cabría considerar particularmente cualificada para conocer de

¹⁸ Entiéndase aquí «asunto» como sinónimo tanto de controversia como de cuestión de naturaleza consultiva.

¹⁹ Además de atender al criterio de la economía procesal que debe presidir la actividad del Tribunal.

la misma a la Sala «especial» constituida por la corte en 1993 para asuntos del medio-ambiente²⁰ y, de mediar la solicitud del peticionario ¿por qué no admitirla?

En lo concerniente a las Salas *ad hoc*, no tendría ningún objeto acudir a ellas en lugar de hacerlo al Pleno, ya que a diferencia de los otros tipos de Salas de la CIJ, ni imprimen sumariedad al procedimiento (Salas de Procedimiento Sumario), ni tampoco están materialmente especializadas (Salas «especiales»). Por otra parte, no se crearon para desbloquear una hipotética saturación de trabajo de la Corte, y las formalidades de su constitución parecen difícilmente compatibles con la identidad y posición ante el asunto de los sujetos peticionarios.

Por tanto, a modo de conclusión, podemos recapitular indicando que las modificaciones introducidas en 1978 en el Reglamento siembran la tentación acerca de la jurisdicción consultiva de las Salas de la Corte al omitir -a diferencia de los textos anteriores- que los dictámenes consultivos se emitirán después de deliberación de la Corte «*en sesión plenaria*».

En esa tentación puede caerse del brazo de la Sala de Procedimiento Sumario y de las Salas «especiales», pero no, sin embargo, del de las Salas *ad hoc*, que se compadecen mal con la función consultiva.

Ha de entenderse por ello que son las Salas de Procedimiento Sumario y las «especiales» no las *ad hoc*, las beneficiarias potenciales de esta interpretación del Reglamento de 1978. En la actualidad no existen objeciones de principio ni dificultades reglamentarias y técnicas insalvables para que estas Salas conozcan de cuestiones de naturaleza consultiva: lo que

²⁰ *Vid.* Capítulo Primero, nota n°125.

además se recomienda en supuestos de urgencia en el primer caso, o de especialización material en el segundo.

En este aspecto debemos apuntar la conveniencia de una reforma del Estatuto de la CIJ para adecuarlo a las necesidades reales actuales, aunque, somos conscientes de sus dificultades políticas y técnicas. Entretanto hay que moverse de forma flexible y progresista sobre las omisiones del Estatuto, dirigiendo con buen ánimo las críticas más conservadoras. Las aplicaciones, por lo demás, están por ver.

2. BASES DE LA JURISDICCIÓN.

2.1. Consideraciones generales.

Hemos de comenzar este epígrafe recordando que *siempre*, desde la creación de la Corte hasta hoy, ha sido la notificación de la voluntad coincidente de las partes el único cauce estatutario para que una Sala -sea de Procedimiento Sumario, «especial» o *ad hoc* - conozca de una diferencia. Así, el art. 26.3 dispone, en relación con las Salas «especiales» y *ad hoc* que: «*Si las partes lo solicitaren, las Salas de que trata este artículo oirán y fallarán los casos*»²¹. En cuanto a las Salas de Procedimiento Sumario, el art. 29 Estatuto expresamente indica que «*a petición de las partes, podrá oír y fallar casos sumariamente*». Así pues, sin acuerdo, no hay Sala.

²¹ Además, esta necesidad implícitamente se deriva para las Salas *ad hoc* del propio art. 26.2, por cuanto exige la aprobación de las partes para fijar el número de miembros de la Sala, lo que presupone su acuerdo acerca de su constitución.

Por otra parte, la Corte cuenta con un poder discrecional para *constituir* una Sala «especial» -art. 26.1 del Estatuto-, pero tiene la obligación de enviar un asunto a la misma si hay acuerdo de las partes²². En este punto, el carácter preconstituido de las Salas «especiales» marca la diferencia con las Salas *ad hoc*. Tratándose de éstas lo que las partes solicitan no es sólo su aplicación a un caso concreto, sino su constitución misma para ese caso, lo que la Corte decide discrecionalmente si para una Sala «especial» -preconstituida- el acuerdo de las partes es condición necesaria y suficiente (y lo mismo cabe decir de la Sala de Procedimiento Sumario) para una Sala *ad hoc* que ha de constituirse, el acuerdo de las partes es necesario pero no suficiente.

En las Salas de Procedimiento Sumario y las «especiales», hemos de distinguir, pues dos actos distintos que en las *ad hoc* van unidos: la constitución y el envío del asunto desde el Pleno a la Sala. La primera está preconstituida por el Estatuto, las segundas pueden ser constituidas discrecionalmente por el Pleno, en el momento y número que estime necesario; las terceras -*ad hoc* - sólo pueden constituirse a petición conjunta de las partes en una diferencia sometida a la Corte. Pero todas -y en esto coinciden- cuando conocen de un caso lo hacen porque así lo acuerdan las partes.

Sin embargo, a diferencia de las de Procedimiento Sumario y las «especiales», tratándose de las *ad hoc*, el acuerdo de las partes, desde una perspectiva teórica no garantiza que la Corte proceda al trámite indicado, aunque en la práctica jamás lo haya negado hasta el momento. El art. 26.2 del Estatuto contempla la constitución de una Sala *ad hoc* como un acto

²² El art. 91.1 del Reglamento, indica que si el citado acuerdo se pusiera en conocimiento del Tribunal de la forma recién señalada «*se accederá a la petición si existe acuerdo entre las partes*». La Corte no puede considerar la idoneidad de la Sala para decidir el caso; su competencia es discrecional.

discrecional de la Corte y no como una obligación de esta institución²³. De forma más directa y hasta ahora la más experimentada para instar la constitución de una Sala *ad hoc* ha sido -es- el *compromiso*. Tres de los cuatro asuntos llevados a una Sala *ad hoc* lo ha sido, en efecto, gracias al compromiso previo de las partes²⁴.

No ha de descartarse, sin embargo, que la constitución de la Sala resulte de una demanda unilateral, sea por *anuencia* del demandado -como ocurrió en el asunto *Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-*, sea como consecuencia de la aplicación de un Tratado o de una cláusula compromisoria en que así se haya previsto. ¿Acaso podría ser también el resultado de declaraciones de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte, condicionadas a la constitución de una Sala *ad hoc*? Se trata de una hipótesis, por ahora, y como tal, discutible. De lo que no cabe duda es de que el acuerdo de las partes para transferir un asunto a una Sala podría producirse estando en marcha un procedimiento ante el Pleno, con tal de que no haya terminado la fase escrita.

De todo esto nos ocuparemos en los párrafos que siguen.

²³ Esta discrecionalidad se deriva del tiempo verbal empleado por el Estatuto al señalar que «La Corte podrá constituir en cualquier tiempo...». Es el mismo que se contiene en el párrafo anterior, el 26.1 relativo, como sabemos, a las Salas «especiales».

²⁴ En la *delimitación de la frontera marítima en el Golfo de Maine*, el Acuerdo de 29 de marzo de 1979, *Vid.* CIJ Recueil 1984. En la *controversia fronteriza* entre Burkina Faso y la República de Mali, el Compromiso de 16 de septiembre de 1983, *Vid.* en CIJ Recueil 1986, p. 557 y ss. Por último en la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador, el Compromiso para someter a la decisión de la Corte Internacional de Justicia la controversia existente entre los dos Estados, suscrito en la ciudad de Esquipulas, República de Guatemala el día 24 de mayo de 1986, *Vid.* en CIJ Recueil 1990, p. 95 y ss. Se advierte la diferencia con los datos de la Corte en general: la mayoría de los asuntos de los que ha tenido la oportunidad de conocer han tenido como instrumento de incoación del mismo la demanda unilateral. Así, de un total de 70 casos entre 1946 y 1994, 58 han utilizado la demanda unilateral (lo que supone un 82'86%) y sólo 12 la notificación de un compromiso (17'14%). Entre estos últimos se encuentran los tres que fueron sometidos a conocimiento de las Salas *ad hoc*. Por tanto, las controversias sometidas a conocimiento de las Salas *ad hoc* suponen un 25% de las que han tenido como instrumento de incoación del procedimiento la notificación de un compromiso en toda la historia de la CIJ.

2.2. Compromiso.

Ninguno de los textos que regulan la CIJ se ocupa directamente del compromiso, aunque el Reglamento, en cierta medida, lo presupone, para señalar algunos aspectos que las partes pueden prever en él²⁵.

En cuanto a las Salas *ad hoc*, el Estatuto no prevé expresamente la necesidad de compromiso ni contiene disposición alguna acerca de su forma o contenido. La libertad de las partes al respecto sólo tiene un límite infranqueable, el que suponen las disposiciones generales e imperativas del Estatuto y el Reglamento de la Corte²⁶.

Podemos considerar cuales son las disposiciones más usuales que se insertan en estos documentos, atendiendo al contenido de los compromisos en los tres asuntos sometidos a una Sala *ad hoc* que lo utilizaron como instrumento de incoación del procedimiento. Del examen se desprende que un acuerdo de este tipo incluye cláusulas sobre el número de miembros de la

²⁵ En este sentido el Reglamento se refiere al compromiso cuando señala en su art. 39.1 que su notificación podrá ser conjunta o por una o varias partes; en el 39.2 indica que la notificación deberá ir acompañada del original o copia certificada del compromiso; el 40.3 dice que la parte que realiza la notificación del citado documento indicará el nombre de su agente; el 46.1 prevé que el número y orden de presentación de los escritos será el que se fije en el compromiso, salvo que el Tribunal decida otra cosa; el 46.2 dispone que si el compromiso no contiene previsiones al respecto y las partes no alcanzan un acuerdo sobre el mismo, el depósito de los documentos será simultáneo y el Tribunal no autorizará la presentación de réplica y dúplica salvo que lo considere necesario; por último, del 92.1 se deduce que no es necesario que el compromiso prevea el orden de presentación de memorias, puesto que si se inicia de este modo, los escritos se presentarán simultáneamente salvo que las partes hayan convenido hacerlo de manera sucesiva.

²⁶ *Vid.* L.C. MARION "La saisine de la Cour Internationale de Justice par voie de compromis", en RGDIP, t. 100, 1995-2, p. 270.

Sala²⁷, las disposiciones estatutarias conforme a las que se solicita su constitución²⁸, el objeto de la controversia²⁹, las normas procedimentales³⁰, los plazos de depósito de las memorias -y contramemorias en su caso-³¹, el idioma³², los efectos de la Sentencia³³, la ejecución de la misma³⁴, la entrada

27 Así el Compromiso de 29 de marzo de 1979 entre Estados Unidos y Canadá en su art. I, disponía que la Sala estuviera formada por cinco miembros. El compromiso entre Burkina Faso y la República de Mali no fijaba el número de miembros. El Salvador y Honduras establecía éste en tres miembros de la Corte (art. 1.1) y dos Jueces designados *ad hoc* (art. 1.2).

28 En el art. I del compromiso entre Estados Unidos y Canadá se establece que para la constitución de la Sala se observarán los arts. 26.2 y 31.4 del Estatuto y el Acuerdo especial. Por su parte, Burkina Faso y la República de Mali, no aluden al art. 31.4, lógicamente, puesto que el trámite seguido para designar el Juez *ad hoc* no se adecuó a lo prescrito en este precepto. El acuerdo entre El Salvador y Honduras señala genéricamente el «Estatuto y el presente compromiso en cuanto al procedimiento de constitución establecidos en el Estatuto de la Corte». Vid. Ordenanza de 13 de septiembre de 1990, en CIJ Recueil 1990, p. 95.

29 Estas disposiciones -como no podía ser de otra manera- se contienen en los tres compromisos que estamos estudiando: entre Estados Unidos y Canadá art. II; Burkina Faso y República de Mali art. I; y El Salvador/ Honduras art. 2.

30 Estas normas se encuentran, igual que en el caso anterior, en todos los compromisos que nos ocupan. Vid. epígrafe 2.1.1. En cualquier caso, las normas reglamentarias son subsidiarias de las contenidas en el compromiso, ya que éste es un ámbito dispositivo de las partes en virtud de la aplicación del art. 101 del Reglamento, siempre que exista autorización de la Corte -en Pleno o en Sala-.

31 Vid. en este sentido la Ordenanza de 28 de julio de 1982 en CIJ Recueil 1982, p.557; y las Ordenanzas de 12 de enero de 1989 y 13 de diciembre del mismo año en CIJ Recueil 1989, pp. 4 y 129 respectivamente.

32 Por lo que respecta al idioma, el art. 39 del Estatuto establece que son oficiales el francés y el inglés. Sin embargo, si una de las partes prefiere usar otro, la Corte la autorizará a utilizarlo. Los trámites que se han de seguir en el procedimiento escrito en este último supuesto se contienen en el art. 51 del Reglamento. En los asuntos de los que ha conocido una Sala *ad hoc* hasta el momento se han utilizado los idiomas oficiales de la Corte. El Compromiso entre Estados Unidos y Canadá para resolver la diferencia fronteriza en el Golfo de Maine no estableció ninguno. Burkina Faso y Mali, acordaron (art.III.1) la utilización del francés. El acuerdo entre Honduras y El Salvador, determina la utilización indistinta de ambos.

33 Vid. los arts. II.4 del Acuerdo entre Estados Unidos y Canadá y IV de Burkina Faso y la República de Mali.

34 Encontramos previsiones de este tipo en los arts. IV.2 del Compromiso entre Burkina Faso y la República de Mali y 6.1 del celebrado por El Salvador y Honduras.

en vigor del compromiso³⁵, así como su publicación³⁶ y notificación³⁷. Disposiciones sobre el Derecho aplicable³⁸ o las disposiciones técnicas o «*technical provisions*»³⁹, aparecen también en algún acuerdo.

Puede considerarse que, en su conjunto, el contenido es relativamente uniforme, aunque la pertinencia de algunas de sus cláusulas es discutible; por ejemplo, las que hacen referencia a los efectos de la Sentencia de la Sala⁴⁰.

Ni el Estatuto ni el Reglamento contienen disposición alguna sobre la entrada en vigor de un *compromiso*. Es natural. Hemos de acudir por tanto al Derecho Internacional, a la Convención de Viena de 23 de mayo de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, cuyo art. 24.1, que ha de entenderse declarativo de una norma consuetudinaria general, indica que «*un Tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los negociadores*». Prima, pues, la voluntad de las partes y, como veremos a continuación, hasta ahora la entrada en vigor de los compromisos que han servido como instrumentos de incoación del procedimiento, se ha subordinado a un factor distinto, fruto del acuerdo entre las partes en la controversia.

³⁵ Tanto en el acuerdo celebrado entre Estados Unidos y Canadá (art. VIII) como en los de Burkina Faso y Mali (art. VI.1) y el de El Salvador y Honduras (art.7.1) observamos disposiciones de este tipo.

³⁶ A la publicación y/o registro le dedican sendos artículos los compromisos de Burkina Faso/Mali -art. V.2- y Honduras-El Salvador -art. 7.2-.

³⁷ *Vid.* en este sentido los arts. V.3 y V.4 del compromiso celebrado por Burkina Faso y Mali y el art.8 del de Honduras y El Salvador. A pesar de que el de Canadá y Estados Unidos carecía de disposición alguna a estos efectos, lo cierto es que este compromiso también fue notificado conjuntamente.

³⁸ Artículo 5 del Compromiso celebrado entre Honduras y El Salvador.

³⁹ Artículo IV del Acuerdo entre Canadá y Estados Unidos.

⁴⁰ *Vid.* Capítulo Quinto.

Canadá y Estados Unidos celebraron el 29 de marzo de 1979 un Tratado por el que acordaban someter la controversia existente entre ellos al arreglo judicial. Este texto convencional iba acompañado de dos anexos: un Acuerdo especial para que fuera una Sala la que conociera de la delimitación fronteriza -el denominado *Compromiso*- que sirvió como instrumento de incoación del procedimiento y un Acuerdo para someter al arbitraje la disputa en cuestión que sólo entraría en vigor si alguna de las partes denunciaba el anterior por no ser atendidas sus pretensiones. Estados Unidos y Canadá dispusieron además que su *compromiso* entraría en vigor -según su art. VIII- en la misma fecha que cumpliera este trámite el Tratado para someter la *delimitación marítima en el área del Golfo de Maine* al arreglo judicial de controversias⁴¹.

Por su parte, Burkina Faso y la República de Malí, acordaron que la entrada en vigor de su *compromiso* se produjese en la fecha de la firma del mismo (art. V.1)⁴².

El Salvador y Honduras (art. 7.1 de su compromiso)⁴³ señalaron, por su parte, una fecha cierta para la entrada en vigor del mismo: el 1º de octubre de 1986, aunque la misma se hacía depender del previo cumplimiento de los procedimientos constitucionales que la legislación interna de ambos Estados preceptuaba para su celebración. Cumplida esta condición, el compromiso entró en vigor en la fecha prevista.

⁴¹ La ratificación por el Senado de los Estados Unidos presentó dificultades, hasta el punto de tener que modificarse el contenido del mismo. Vid en este sentido G. GUYOMAR "La constitution au sein de la Cour Internationale de Justice d'une chambre chargée de régler le différend de frontières maritimes entre les Etats-Unis et le Canada" en AFDI, 1981, p. 213.

⁴² Vid. en CIJ Recueil 1986, p. 557 y ss.

⁴³ Vid. en CIJ Recueil 1990, p. 75 y ss.

Consideremos, por último la publicación y notificación de un compromiso. Según el art. 102.1 de la Carta de Naciones Unidas «*Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualesquiera Miembros de las Naciones Unidas después de entrar en vigor esta Carta serán registrados en la Secretaría y publicados por ésta a la mayor brevedad posible*»; además, según el párrafo segundo del mismo artículo, para que un Tratado Internacional pueda invocarse ante uno de los órganos de esta Organización Internacional debe haber sido previamente registrado conforme a las disposiciones del párrafo precedente.

Dado que, por lo que hace a la publicación del compromiso, no encontramos disposición alguna ni en el Estatuto ni en el Reglamento, hemos de remitirnos, a la Carta de las Naciones Unidas. De acuerdo con este texto ha de convenirse en la exigencia de registro en la Secretaría General de la Organización para que la Corte, tanto en Pleno como en Sala, pueda aceptar un *compromiso* como instrumento de incoación del procedimiento. Por tanto, para que pueda invocarse un compromiso como fundamento de la competencia de la Corte es preceptivo su registro, su publicación y la ulterior notificación de este texto a la Secretaría de la Corte.

En cuanto a los compromisos concretos en que se basaron tres de los cuatro asuntos sometidos a una Sala *ad hoc* de la Corte, ha de señalarse en primer lugar que Estados Unidos y Canadá no previeron disposición alguna respecto de la publicación de su acuerdo. Por el contrario, si contenían disposiciones acerca de la publicación y/o notificación del compromiso los acuerdos celebrados entre Burkina Faso y la República de Mali y entre El Salvador y Honduras.

El art. V.2 del del compromiso entre Burkina Faso y la República de Mali dispuso, en efecto, que el Registro en la Secretaria de las NN.UU. se

realizaría en aplicación del art. 102 de la Carta a iniciativa de la parte más diligente. En parecidos términos se expresó el art. 7.2 del compromiso entre El Salvador y Honduras, al indicar que su publicación se produciría conjuntamente o por cualquiera de las partes.

En cuanto a la notificación del compromiso a la Secretaría de la Corte, se refiere a ella el art. 39.1 del Reglamento. Este precepto señala que el citado trámite podrá efectuarse conjuntamente, por una de las partes o por varias de ellas. Tal como acontecía con la publicación el acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, no contenía previsión alguna en este sentido⁴⁴, mientras que, por el contrario, Burkina Faso y la República de Mali (art. V.3) y El Salvador y Honduras (art.8) dispusieron que su compromiso se notificara al *Greffier* de la Corte mediante carta conjunta de ambos y, en su defecto, por la parte más diligente⁴⁵.

Por último, en cuanto al registro del compromiso en la Secretaría de las Naciones Unidas, el único que hizo referencia a él fue el celebrado entre Burkina Faso y la República de Mali, al prever (artículo V.2) que el registro se produciría en aplicación del art. 102 de la Carta, a iniciativa de la parte más

⁴⁴ La notificación del mismo se produjo mediante carta conjunta a la Secretaría de la Corte, el 25 de noviembre de 1981. Acompañaban al Compromiso de 29 de marzo de 1979 en la notificación el Tratado de arreglo judicial y el acuerdo de arbitraje, además del protocolo de 20 de noviembre de 1981, de intercambio de instrumentos de ratificación del Tratado anterior.

⁴⁵ En ambos casos, la notificación del Compromiso a la Secretaría de la Corte se realizó mediante carta conjunta de 14 de octubre de 1983 (Burkina Faso-Mali) y 11 de diciembre de 1986 (El Salvador-Honduras). El Compromiso entre los países africanos disponía la notificación unilateral a partir de los tres meses desde la entrada en vigor del Compromiso; el latinoamericano, por su parte, preveía la notificación conjunta antes del 31 de diciembre de 1986. El problema que podría haberse suscitado con la fijación de esta fecha es: ¿qué hubiera pasado si para la fecha indicada por El Salvador y Honduras para la notificación conjunta del compromiso no se hubieran cumplido los trámites constitucionales internos exigidos en ambos Estados para la entrada en vigor del mismo?. ¿Se podría notificar por cualquiera de ellas o señalarían un plazo para efectuar conjuntamente este trámite?. La fecha que se fijaba para la entrada en vigor era el 1º de octubre de 1986.

diligente⁴⁶. A pesar de carecer de indicación alguna al respecto también el Compromiso entre El Salvador y Honduras cumplió este trámite⁴⁷.

En este punto puede plantearse si el art. 40.3 del Estatuto, que indica que una vez recibida la notificación del compromiso «*El Secretario (lo) notificará también a los Miembros de las Naciones Unidas por conducto del Secretario General, así como a los otros Estados con derecho a comparecer ante la Corte*» puede considerarse como un trámite alternativo al preceptuado en el art. 102 de la Carta, de modo que esta notificación del Secretario de la Corte permitiría la aplicación de un acuerdo que de conformidad con el art. 102 de la Carta de las NN.UU. no podría -a falta de registro previo- invocarse ante ninguno de los órganos de esta Organización Internacional, incluida la Corte. Acerca de este aspecto la Corte nunca se ha pronunciado con carácter general y tampoco respecto de los compromisos que se han utilizado para someter una controversia a una Sala *ad hoc* ⁴⁸, aunque de la práctica se deduce que el trámite del art. 40.3 del Estatuto debe considerarse como una excepción a la regla general contenida en el art. 102 de la Carta de las NN.UU..

⁴⁶ Registro del que se da noticia en CIJ *Annuaire* 1984-85, p. 178, donde se indica que el registro efectivamente se produjo. El texto se encuentra publicado en *United Nations Treaty Series*, n°22373, 1983, vol. 1333, p. 95.

⁴⁷ *Vid.* en este sentido CIJ *Annuaire* 1987-88, n°42, p. 143.

⁴⁸ Todos registrados salvo el de Estados Unidos y Canadá. Tampoco se ha pronunciado acerca de los Compromisos que han servido para someter a conocimiento del Pleno una controversia y del que no se encuentra noticia en la Colección de Tratados de NN.UU. Así, en *United Nations Treaty Series* no encontramos constancia del registro del Compromiso de 25 de marzo de 1948 entre el Reino Unido y Albania de 25 de marzo de 1948 -Estrecho de Corfú-; ni del Acta de Lima de 31 de agosto de 1949 entre Colombia y Perú -Derecho de Asilo-. Sin embargo, algunos compromisos han cubierto el trámite del Registro, así los celebrados entre Francia y el Reino Unido el 29 de diciembre de 1950 -*Minquiers et Ecrehos*- *Vid.* en *UN Treaty Series*, n° 1603, vol. 118, p. 149; entre Bélgica y Holanda el 7 de marzo de 1957 -soberanía sobre ciertas parcelas fronterizas-, *Vid.* en *UN Treaty Series*, n°4100, vol. 282, 1957, p. 241; también el de 2 de febrero de 1967 entre la RFA, Holanda y Dinamarca -Plataforma Continental del Mar del Norte- *Vid.* en *U.N. Treaty Series*, n° 8777, vol. 606, 1967, p.89.

2.3. Demanda o solicitud unilateral.

2.3.1. En virtud de *anuencia*.

El art. 17.1 del Reglamento de la Corte dispone que si el instrumento utilizado para la introducción en la instancia del asunto considerado es una solicitud de carácter unilateral -una demanda- y en ella consta la voluntad de que sea una Sala *ad hoc* -no el Pleno- quien conozca de la controversia, el Presidente de la Corte habrá de ponerse en contacto con la otra parte, con el fin de averiguar si ésta consiente en someter aquélla al foro indicado por el demandante. Del contenido de este precepto se deduce la necesidad de acuerdo de las partes para someter el conocimiento del asunto a una Sala *ad hoc*, máxime cuando en el párrafo siguiente del citado artículo, comienza indicando que «una vez comprobado el acuerdo de las partes, el Presidente indagará...». El acuerdo precede, pues, en todo caso las averiguaciones del Presidente sobre las opiniones de los Estados partes en la controversia respecto de la composición de la Sala que ha de ser constituida. Caso de que el demandado no consienta -admitiendo la jurisdicción de la Corte- el demandante habrá de seguir el procedimiento ante el Pleno, a menos que desista de su acción.

A diferencia de lo que ocurre respecto de las Salas «especiales» y de Procedimiento Sumario -arts. 26.1 y 29 del Estatuto-, en las *ad hoc* no es preceptiva la *anuencia* previa a la solicitud a la Corte para que sea una Sala la que conozca del fondo del asunto en lugar del Pleno. Cabe -como ocurrió en la Sala que conoció de la controversia de la *Elettronica Sicula S.p.A.* -ELSI- la *anuencia* de la contraparte en un momento posterior.

La distinción entre el *compromiso* y la *anuencia*, es muy clara. Por *compromiso* ahora entendemos un tratado entre Estados para la sumisión de una diferencia existente entre ellos a la Corte, con precisión o no de la atribución de jurisdicción a una Sala⁴⁹. Al hablar de *anuencia* nos referimos al consentimiento que una parte da a las propuestas o iniciativas de la otra en el curso del procedimiento. A pesar de las diferencias cronológicas y formales que existen entre el *compromiso* y la *anuencia* subsiguiente a la interposición de una demanda para que sea una Sala y no el Pleno la formación que conozca de una controversia, sus efectos procesales son idénticos, no obstante, hay que tener en cuenta que en el supuesto de que las partes en un compromiso acuerden someter el asunto a una Sala *ad hoc* -y sólo a una Sala *ad hoc* - la Corte carecerá de base de jurisdicción a falta de aquélla; por el contrario, la *anuencia* significa que el Estado demandado -si existe un vínculo jurisdiccional respecto de la CIJ-, puede optar entre aceptar la competencia de la Sala -lo que le permitirá imponer ciertas condiciones en materia procedimental y/o en la composición de esta formación-, o negarse. El efecto de su negativa podrá ser la competencia del Pleno para conocer del caso.

Precisamente porque la base del procedimiento ante una Sala es el acuerdo entre los Estados resultaba difícil pensar que pudiera utilizarse la demanda o solicitud unilateral como instrumento para la incoación del procedimiento ante una de estas formaciones. Sin embargo, en 1987 se verificó esta hipótesis, advirtiéndose las posibilidades de la *anuencia* como medio de obtención del acuerdo.

⁴⁹ Todo Tratado ha de ser registrado en la Secretaría General de NN.UU. de conformidad con el art. 102 de la Carta. Este registro es condición de invocabilidad de un Tratado ante cualquiera de los órganos de las NN.UU., trámite éste que no siempre ha sido cumplido. Vid. nota nº48. Además de lo anterior, se precisa la notificación de este texto a la Secretaría de la CIJ, por cuanto constituye el instrumento de introducción del asunto a conocimiento de la Corte o la solicitud para que constituya una Sala *ad hoc*.

En efecto, en el asunto de la *Elettronica Sicula -ELSI- S.p.A.*, el Secretario de Estado de Estados Unidos⁵⁰, transmitió a la Corte una demanda contra Italia haciendo saber a la Corte la solicitud del Gobierno estadounidense para que fuera una Sala de la Corte la formación que conociera la controversia. El Presidente de la Corte puso en conocimiento del Gobierno italiano la solicitud estadounidense y el Ministro de Asuntos Exteriores de la República italiana respondió aceptando que el asunto se sustanciase ante una Sala⁵¹. Por ello la Corte estimó encontrarse ante una petición formulada por los dos Estados implicados y decidió acceder a ella constituyendo una Sala de cinco Jueces.

¿Qué hubiera ocurrido de no avenirse Italia a los requerimientos de Estados Unidos? En ese caso la Corte no podría haber constituido la Sala. Como ya hemos señalado el consentimiento de todas las partes en la controversia es el fundamento del procedimiento ante todo tipo de Salas y en concreto, las *ad hoc*.

Naturalmente, la actitud de las partes ante la constitución o no de la Sala deja íntegro y aparte el problema de la jurisdicción o competencia de la Corte que, de ser planteado, habría de ser resuelto por el Pleno, pues ha de desestimarse la alternativa de aceptar la constitución de la Sala para, en ella, impugnar la jurisdicción de la Corte. Esta afirmación, que parece pacífica, no deja de presentar sin embargo algunas zonas *grises*, en la medida en que el demandado disienta no la calidad, sino el *quantum* de la jurisdicción, la

⁵⁰ Carta de 6 de febrero de 1987. *Vid.* Ordenanza CIJ de 2 de marzo de 1987. En *CIJ Recueil* 1987, p. 4 y ss.

⁵¹ Por telegrama de 13 de febrero de 1987. *Vid.* Ordenanza de 2 de marzo de 1987. *Id.* nota anterior.

*reciprocity*⁵² y no la *mutuality*⁵³, tratándose de declaraciones con base en el art. 36.2 del Estatuto, o de la interpretación de una cláusula compromisoria en tratados contemplados en el art. 36.1 del mismo texto.

En el caso mencionado, en el momento de presentación de la demanda estadounidense no existía declaración de ninguno de los Estados en causa por la que se aceptara la jurisdicción obligatoria de la Corte. Italia, pese a ser miembro de las Naciones Unidas desde 1955⁵⁴, no había depositado una declaración en aplicación de la cláusula facultativa u opcional del art. 36.2 del Estatuto. Pero aunque lo hubiera hecho, su declaración tampoco habría servido como vínculo jurisdiccional, por cuanto de estas declaraciones sólo derivan efectos recíprocos, es decir, respecto del *Estado que acepte la misma obligación* y en este sentido, cabe recordar que el 8 de octubre de 1985, Estados Unidos había retirado su declaración de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte⁵⁵, como consecuencia del fallo de la Corte en el asunto

⁵² La *Reciprocity* es una manifestación del principio de igualdad. Su ausencia no implica imposibilidad de fundamentar la competencia de la Corte en el 36.2 del Estatuto.

⁵³ La *Mutuality* es un Principio estructural de la forma de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la CIJ prevista en el art. 36.2 del Estatuto. La ausencia de *mutuality*, la inexistencia de declaraciones facultativas de las partes en conflicto, impide fundamentar la competencia de la Corte en este precepto estatutario.

⁵⁴ Desde el 14 de Octubre de 1955.

⁵⁵ Vid. el texto de las declaraciones de los Estados que habían asumido en 1988 la jurisdicción obligatoria de la Corte en CIJ Annuaire 1987-88, pp. 64-102, entre ellas no figura ni la estadounidense ni la italiana. La última vez que se publica la declaración de Estados Unidos es en el CIJ Annuaire 1984-85, en cuya página 76 aparece la declaración de 26 de agosto de 1946 y en la 77 la modificación a la misma de 6 de abril de 1984. International Legal Materials, 1985, n°24, p. 1742; L.F. DAMROSCH *The International Court at a Crossroads*, Nueva York, 1987, pp. 476-478; D.J. ENDE "Reaccepting the Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice: A Proposal for a New United States Declaration" en *Washington Law Review*, vol. 61, 1986-3, p. 1154; T.M. FRANCK *Judging the World Court*, Nueva York 1986, p. 24; A. GIUSTINI "Compulsory Adjudication in International Law: The Past, the Present, and Prospects for the Future", en *ILJ*, 1985-86, pp. 213-256; R.N. GARDNER "U.S. Termination of the Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice", en *CJTL*, vol. 24, 1985-86, pp. 421-427; N. KEBBON "The World Court's Compulsory Jurisdiction under the Optional Clause-Past, Present and Future", en *Nordic Journal of International Law*, 1989, núms. 3/4, pp. 257-283; R.S. LEE "A Case for Facilitation in the Settlement of Disputes", en *GYIL*, vol. 34, 1991, pp. 138-174; M. LIZZI "Delimiting the World Court's Jurisdiction: Realism in the Interest of Progress", en *New York School Journal of International and Comparative Law*, 1991, núms. 1 y 2, pp. 203-235; P.M. NORTON "The

de las *actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* (competencia de la Corte y admisibilidad de la demanda)⁵⁶.

Estamos, pues, ante un supuesto en el que ninguno de los dos Estados partes en la controversia, en el momento en que se presenta la demanda ante la Corte, había reconocido como obligatoria la jurisdicción de este Tribunal con base en el art. 36.2 del Estatuto. No obstante, el vínculo jurisdiccional existía -trámite del art. 36.1- gracias a la vigencia del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 2 de junio de 1948, celebrado entre Italia y Estados Unidos, en cuyo art. XXVI se había insertado una cláusula compromisoria de carácter mixto y subsidiario⁵⁷. Mixto, por cuanto se somete el arreglo de aquellas diferencias que pudieran surgir entre las partes contratantes acerca de la interpretación o aplicación del Tratado en cuestión a un método de solución de carácter político: la negociación diplomática, y a otro de carácter jurisdiccional: la CIJ. Subsidiario, por cuanto sólo cuando las partes

Nicaragua Case: Political Questions Before the International Court of Justice", en *Va.JIL*, vol. 27-2, 1987; J. PIÑOL I RULL "Los asuntos de las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y en contra de este Estado", en *REDI*, 1987-1, vol. XXXIX, pp. 108-109; J.M. QUINTANA "The Hague Declaration and the Acceptance of the Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice: A Missed Opportunity?", en M. BRUNS *The United Nations Decade of International Law: Reflections on International Dispute Settlement*, Dordrecht, 1991; G.L. SCOTT & K.D. CSAJKO "Compulsory Jurisdiction and Defiance in the World Court: A Comparison of the PCIJ and the ICJ", en *Denver Journal of International Law and Policy*, 1988 -2/3, pp. 377-392; L.B. SOHN "The Limited Acceptance of the Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice by the United States", en *The Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice: A Turning Point? Proceedings of the Roundtable, in honour of Louis B. SOHN*, Bruselas 1990, pp. 66-75; J. VERHOEVEN "Le Droit, le juge et la violence. Les arrêts Nicaragua c. États-Unis", *BGDIP*, 1989, p. 1198; A. ZAMORA "La Haya: Un juicio para la historia", en *Revista Pasos*, agosto 1991, p. 39.

⁵⁶ *Vid.* CIJ *Recueil* 1984, p. 392 y ss. Resulta especialmente interesante la lectura del artículo de R.N. GARDNER "U.S. Termination of the Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice", en *CJTL*, vol. 24, 1985-86, pp. 421-427, en el que rebate una a una las causas en las que fundamentó la Administración norteamericana la retirada de la declaración de 1946.

⁵⁷ Nicaragua alegó como fundamento subsidiario de la competencia de la Corte en el asunto de las *actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua*, el art. XXIV parágrafo 2 del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación celebrado entre Estados Unidos y Nicaragua el 24 de mayo de 1958. En este texto convencional entre Estados Unidos y Nicaragua se había incluido igualmente una cláusula compromisoria por la que acordaban la competencia de la Corte para conocer de las controversias relativas a la interpretación y aplicación del Tratado en el que se insertaba.

contratantes «...*shall not satisfactorily adjust by diplomacy, shall be submitted to the International Court of Justice*»⁵⁸. También contiene una excepción a este procedimiento de arreglo, cuando las partes contratantes acuerden someter la solución de la controversia en cuestión a otros medios pacíficos. Italia no impugnó esta jurisdicción y consintió la Sala. En realidad, se trataba de un valor entendido entre las partes. Italia prestó servicio político a los Estados Unidos, deseosos de manifestar su aprecio por el arreglo judicial en un momento en que desdeñaban una jurisdicción que entendían impuesta⁵⁹.

Si Italia no se hubiese avenido a la demanda estadounidense para que fuera una Sala *ad hoc* y no el Pleno el órgano que conociera de la controversia, la cláusula compromisoria indicada serviría como fundamento de la competencia de la Corte en su formación ordinaria, pero no de la Sala *ad hoc*.

2.3.2. En virtud de un Tratado o Cláusula compromisoria previa.

Tanto en las cláusulas compromisorias como en los tratados anteriores al surgimiento de la controversia puede aceptarse la competencia de las Salas de la Corte, en lugar de hacerlo respecto del Pleno. Pero ¿y si el demandado, llegado el caso, se niega a la constitución de la Sala o incluso impugna la jurisdicción de la Corte? Por una parte incurriría en responsabilidad

⁵⁸Vid. el texto del Acuerdo en CIJ Recueil 1989, p.41.

⁵⁹ Italia interpuso no obstante una excepción preliminar a la admisibilidad de la demanda, cuyo examen se unió al fondo del asunto ya que las partes en la citada controversia acordaron «*be heard and determined within the framework of the merits*». Vid. Ordenanza de 17 de noviembre de 1987, en CIJ Recueil 1987, p. 185.

internacional derivada del incumplimiento de una norma convencional⁶⁰, y por otra, impediría la constitución de la Sala. Ahora bien, en el supuesto de que el vínculo jurisdiccional indicado desarrollase suficientemente los aspectos requeridos para la constitución de la Sala solicitada, nada impediría -según el Estatuto-, que se procediera a la misma. El art. 26.2 de este texto requiere la aprobación de las partes para señalar el número de miembros de la Sala. Sin embargo de una interpretación gramatical del mismo no podemos concluir que este consentimiento deba ser actual, bien al contrario, los términos en los que está formulado permiten la validez de un consentimiento anterior a la aparición de la controversia.

¿Es ésto compatible, sin embargo, con el art. 17 del Reglamento? Esta disposición indica en primer lugar que el Presidente recabará la conformidad de la otra parte cuando haya recibido una demanda tendente a que sea una Sala y no el Pleno quien conozca de la controversia. En segundo término, sólo una vez conocido el acuerdo de las partes en este sentido «se informará sobre sus puntos de vista en cuanto a la composición de la Sala». En tercer lugar, cuando el «Tribunal haya determinado, con el consentimiento de las partes, el número de sus miembros que constituirán la Sala, se procederá a su elección». Por tanto, de no mediar el consentimiento de ambas partes, ante una cláusula compromisoria o un Tratado anterior al surgimiento de la controversia que confiera competencia a una Sala de la Corte, no podría procederse a la constitución de ésta. En este caso, y a menos que la cláusula compromisoria o el Tratado confieran competencia a la Corte en general y no a una de sus Salas de manera específica, el margen de discrecionalidad de la

⁶⁰ Vid. en este sentido art. 18 del Proyecto de Artículos de la CDI acerca de la Responsabilidad Internacional de los Estados.

Corte es muy limitado porque no puede llegar a sustituir a la Sala por el Pleno en contra de la voluntad de una de las partes⁶¹.

El Pleno de la Corte lo único que puede hacer es decidir si la constitución solicitada procede o no, pero no puede sustituir a la Sala y entrar a conocer del fondo del asunto, a menos que cuente con un fundamento de jurisdicción propio no vinculado a la constitución de aquella formación extraordinaria.

2.3.3. En virtud de una declaración conforme al artículo 36.2 del Estatuto.

Cuatro de los de los siete Estados que han sometido sus diferencias a una Sala *ad hoc* habían aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte ex art. 36.2 del Estatuto y, curiosamente, los cuatro eran Estados del continente americano. Así, cuando Estados Unidos y Canadá notificaron el Acuerdo de 29 de marzo de 1979 a la Corte, ambos contaban con sendas declaraciones en vigor⁶²; también El Salvador y Honduras⁶³. El número se elevaría a cinco de

⁶¹ C.ESCOBAR "Las Salas *ad hoc* del Tribunal Internacional de Justicia" en *Hacia un Nuevo Orden Internacional y Europeo. Homenaje al Prof. M. Díez de Velasco*, Madrid, 1993, p. 295.

⁶² La declaración de Canadá era de 7 de abril de 1970 y, la estadounidense de 14 de agosto de 1946. *Vid.* Apéndice II: Documentos, 3.1 y 3.2 respectivamente.

⁶³ Se encontraba en vigor la declaración salvadoreña de 26 de noviembre de 1973 -*Vid.* Apéndice II: Documentos, 3.4 -, de la cual no derivaba la competencia ni de las Salas ni del Pleno, por cuanto expresaba que «*La presente declaración de aplica únicamente a las situaciones o a los hechos posteriores al día de hoy*», y no hemos de olvidar que nos encontramos ante un conflicto secular. Honduras, por su parte, pocos días después de concluirse el Acuerdo de Esquipulas -el 6 de junio de 1986- depositó una nueva declaración de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte que vino a reemplazar la anterior de 10 de marzo de 1960. En esta nueva declaración se excluían de la jurisdicción de la Corte, entre otras, las diferencias territoriales, aunque no las de todo tipo, sino tan sólo las marítimas e insulares. -*Vid.* Apéndice II: Documentos, 3.3-.

contar a Nicaragua, que participó en una Sala *ad hoc* como **interviniente no parte**. Sin embargo, ninguna de estas declaraciones hubiera servido como base de jurisdicción vinculada a la Sala y de hecho, en ninguno de los dos casos señalados, la incoación del procedimiento ante una Sala tuvo nada que ver con las declaraciones *sub art. 36.2* del Estatuto del Estatuto⁶⁴.

Hemos de comenzar indicando que la declaración facultativa u opcional, que se contiene en el art. 36.2 del Estatuto de la Corte, es válida en principio únicamente respecto del Pleno, la formación ordinaria de esta institución. Para las Salas será necesario el acuerdo de las partes en la controversia, con independencia de que exista o no depósito de la declaración indicada -aquel puede tratarse a los efectos que aquí nos interesan como *lex*

64 Respecto de estas declaraciones existe una amplia bibliografía: S.A. ALEXANDROV *Reservations in Unilateral Declarations Accepting the Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice*, Dordrecht, 1995; R.P. ANAND *Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice*, Londres 1961; R. CASADO RAIGON *La jurisdicción contenciosa de la Corte Internacional de Justicia*, Granada, 1987; A. GIUSTINI "Compulsory Adjudication in International Law: the Past, the Present, and Prospects for the Future", en *FILJ*, 1985-86, pp. 213-256; R.C. LAWSON "The Problem of the Compulsory Jurisdiction of the World Court", en *AJIL*, 1952, vol. 46 n°2, p. 234; Ch. LEBEN "La Jurisdiction Internationale", en *DROITS: Revue Française de Théorie Juridique*, n° 9, 1989, p. 144; R.E. LUTZ "The World Court in a Changing World: An Agenda for Expanding the Court's Role from a Unites States Perspective", en *Stanford Journal of International Law*, 1990-1991 (2), pp. 265-343; T. MOSQUERA IRURITA *La Corte Internacional de Justicia*, Bogotá, 1988, p. 36; F. PRZETACZNIK "The Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice as a Prerequisite for Peace", en *Revue de Droit International, de sciences diplomatiques et Politiques*, 1990-1, pp. 39-74; J.M. QUINTANA "The Hague Declaration and the Acceptance of the Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice: A Missed Opportunity?", en M.BRUS & S.WIEMERS (ed) *The United Nations Decade of International Law: Reflections on International Dispute Settlement*, Dordrecht, 1991; S. ROSENNE *The Law and Practice of the International Court of Justice*, Leiden 1965, vol. I, pp. 373-374; S. ROSENNE *The World Court. What it is and How it Works*, 5ª ed., Dordrecht, 1995, p. 81; S. ROSENNE "Some Thoughts on International Arbitration Today", en *Israel Law review*, 1993-2, vol. 27; J.M. RUDA *Presente y Futuro del Tribunal Internacional de Justicia*, Granada, 1990, pp. 11, 13-18; R.SZAFARZ *The Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice*, Dordrecht 1993; *The Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice: A Turning Point? Proceedings of the Roundtable in Honour of Louis B. Sohn*, Bruselas, 1990; S. TORRES BERNARDEZ "La 'Reciprocidad' en el «sistema de jurisdicción obligatoria» establecida en el artículo 36 parágrafo 2 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia", en *Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz*, 1988, p. 318-438 y del mismo autor "Reciprocity in the System of Compulsory Jurisdiction and in Other Modalities of Contentious Jurisdiction Exercised by the International Court of Justice", en *Essays in honour of Judge Taslim Olawale Elias*, vol. I, *Contemporary International Law and Human Rights*, Dordrecht, 1992. Recordemos que no estamos ante un acto unilateral en sentido estricto, sino de naturaleza *sui generis*, ya que para ser eficaz requiere *mutualidad y reciprocidad*.

specialis respecto de esta última-. En defecto del acuerdo señalado, será el Pleno quien conozca, siempre que se produzcan las condiciones habituales: (1) que se interponga una demanda ya que la Corte no puede actuar *ex officio*; y (2) que del estudio de las declaraciones en presencia derive la competencia de la Corte.

Del propio texto del Estatuto de la Corte se desprende que el depósito de una declaración facultativa u opcional del art. 36.2 del Estatuto concierne al Pleno de la Corte. El Estatuto, cuando regula algún aspecto de la Corte, lo hace como sinónimo del Pleno, su formación ordinaria. Las únicas disposiciones estatutarias que se refieren a las Salas de la Corte son las expresamente dirigidas a ellas⁶⁵.

Pero ¿no cabría una declaración concretando la aceptación de la jurisdicción de la Corte a su ejercicio por una Sala?

Al hilo de la cláusula facultativa u opcional cabe plantear la posibilidad de formular una declaración aceptando la jurisdicción de la Corte como obligatoria, pero previendo que las controversias en las que se actúe como demandado sólo podrán ser conocidas por una Sala *ad hoc*. Esta hipótesis la planteó el Asesor Jurídico del antiguo Secretario de Estado de los Estados Unidos, Monroe LEIGH, como consecuencia de la retirada de la declaración estadounidense de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte⁶⁶. Sin embargo, como señala A. ZIMMERMANN⁶⁷, resulta cuando menos

⁶⁵ Es decir, los arts. 25.1, 26, 27, 29 y 31.4.

⁶⁶ Vid. T.M. FRANCK *Judging the World Court*, Nueva York, 1986; R. GARDNER "United States termination of the Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice" en *CJIL*, 1986, n°24, pp. 426-427; M. LEIGH y S.D. RAMSEY "Confidence in the Court: It need not be a «Hollow Chamber»" en *The International Court of Justice at a Crossroads*, Nueva York, 1987, p. 117.

⁶⁷ A. ZIMMERMANN "Ad hoc chambers of the International Court of Justice" en *DJIL*, vol. 8, n°1, p.10.

dudosa la compatibilidad de una condición semejante con este tipo de cláusula.

Para fundamentar la incompatibilidad de una reserva del tipo propuesto por M. LEIGH podemos apuntar diversos motivos: en primer lugar, surge la cuestión de la *mutuality*, sin la cual el cruce de declaraciones no produce el efecto obligatorio para los declarantes. La declaración «*respecto a cualquier otro Estado que haya aceptado la misma obligación* » (art. 36.2 del Estatuto) y cabe dudar que, a menos que la referencia a las Salas se encuentre en las declaraciones de todos los implicados, aquélla se limita a jugar como mera condición de *reciprocidad*. Con otras palabras, si el Estado demandante acepta la jurisdicción obligatoria de la Corte en Pleno, pero no en Salas o cuando menos no en este tipo de Salas *ad hoc*, para determinar la formación de la Corte a cuyo conocimiento se somete la controversia, se necesitaría el acuerdo de las partes interesadas. En su defecto, el Pleno no podría conocer del caso.

En segundo lugar, el propio art. 36.2 indica que: «*Los Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial... la jurisdicción de la Corte*»⁶⁸, pues bien, siempre que nos encontremos con una declaración como la propuesta será preceptivo un convenio especial -que podrá presentar forma verbal o escrita-. Es cierto que no resulta necesario para la manifestación de la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte, puesto que para ello sirve la declaración formulada ex. art. 36.2 del Estatuto, pero sí para la propia constitución de la Sala, de manera que sin ese acuerdo especial no será posible el conocimiento por la Sala de la cuestión litigiosa para la que la

⁶⁸ El subrayado es nuestro.

declaración sirve de vínculo jurisdiccional y de fundamento de la competencia de la propia formación *ad hoc*⁶⁹.

Además de lo anterior, el art. 36.3 reconoce que las declaraciones pueden ser incondicionales, pero también encontrarse sometidas a unas condiciones que se indican: «*reciprocidad por parte de varios o determinados Estados o por determinado tiempo*». La reciprocidad a la que se hace referencia en este párrafo del art. 36 es distinta a la del párrafo precedente; según C.H.M. WALDOCK:

*«Paragraph 3 of Article 36, it has already been seen, provides that a declaration may be made "unconditionally or on condition of reciprocity on the part of several or certain States or for a certain time" this paragraph does not relate to "reciprocity". it simply authorizes States to accept compulsory jurisdiction under the Optional Clause for limited periods, and to make their liability to jurisdiction conditional on compulsory jurisdiction having been also accepted by a particular number of other States or by particular named States. »*⁷⁰.

En definitiva, el problema es doble. De una parte, se plantea si la formulación de una declaración en la que se acepte la jurisdicción obligatoria de la Corte reservando la competencia a una Sala *ad hoc* es viable, es decir, compatible con el Estatuto⁷¹. De otra parte se plantea si dicha declaración sería operativa y, por ende, eficaz.

⁶⁹ En este sentido, véanse las reflexiones que acerca de excepciones de este tipo realizaron Sh. ROSENNE en *The Law and...* op. cit., p. 371 y A. ZIMMERMAN ...op. cit.. Este último señala en la p. 13:

«... therefore a transaction, which appears to be a declaration under article 36, paragraph 2, but which contains or purports to require elements of negotiation, is in fact incompatible with the normalities of the Statute»

⁷⁰ C.H.M. WALDOCK en "Decline of the Optional Clause" BYIL, 1955-56. p. 255.

⁷¹ El art. 36.3 del Estatuto proclama la posibilidad de formular estas declaraciones «*incondicionalmente o bajo condición de reciprocidad por parte de varios o determinados Estados o por determinado tiempo*», por lo que el tipo de exclusión planteada no encuentra amparo en el texto transcrito. Sin embargo, la inexistencia de fundamento estatutario no ha impedido la inclusión de otro tipo de reservas personales o materiales, que han proliferado en las declaraciones realizadas por diferentes Estados. *Vid.* como ejemplo de variedad de exclusiones posibles la declaración de la India, aunque este supuesto es distinto, porque no se están

Será la Corte la que en virtud del art. 36.6 de su Estatuto decida, una vez suscitado el asunto en cuestión. A nuestro entender, una condición de este tipo ha de considerarse formalmente válida, por cuanto el único requisito que el art. 36.4 del Estatuto contempla es su transmisión al Secretario General de las Naciones Unidas⁷². Sin embargo, no podemos entenderla del mismo modo desde la perspectiva de la validez material, que puede calificarse de inconstitucional, por cuanto es contraria al Estatuto de la Corte.

Los autores que proponen una nueva declaración estadounidense sobre estas bases, RAMSEY y LEIGH, no arguyen razonamientos técnicos en su defensa. El único fundamento aportado es su posible funcionamiento como instrumento para incrementar la confianza de los Estados en la Corte y aumentar, por esta vía, el número de conflictos sometidos a este método.

Por otra parte, podemos afirmar que la aceptación de la propuesta del Asesor Jurídico del antiguo Secretario de Estado norteamericano, desde un punto de vista práctico, implica la consolidación de la idea conforme a la cual las Salas *ad hoc* se configuran como una tercera vía paralela tanto al arreglo judicial como al arbitral. Si la Corte admitiera la eficacia de esta exclusión, podríamos concluir cuestionando, en este sentido, si en realidad se acepta la jurisdicción de la Corte o, por el contrario, lo que se hace es reconocer la existencia de un tercer procedimiento de arreglo jurisdiccional de controversias internacionales, como acabamos de indicar⁷³. La duda en este punto es si con — — — — —
excluyendo determinados tipos de la competencia de la Corte sólo se reservan del conocimiento de una de sus formaciones: el Pleno.

⁷² Aunque el art. 36 en sus apartados 2, 3 y 4 expresamente no exige la forma escrita como requisito de validez, de su redacción se infiere que la misma es preceptiva, puesto que han de remitirse «para su depósito al Secretario General de las NN.UU.».

⁷³ Vid. en este sentido: M. BEDJAOUI "Remarques sur la creation de Chambres ad hoc au sein de la Cour Internationale de Justice" en *La Juridiction Internationale Permanente, Colloque de Lyon*, Paris 1987; J.N.HYDE "A Special chamber of the International Court of Justice - an alternative to ad hoc arbitration" en *AJIL*, 1968, vol. 62, núm.2, pp. 439-441; Sir R. JENNINGS "Chambers of the International Court of Justice and Courts of arbitration" en *Humanité et Droit International. Mélanges René-Jean Dupuy*, Paris 1991, p. 197; M. BEDJAOUI "Universalisme et

ella se acepta como obligatoria la jurisdicción de la Corte, puesto que de la misma se excluye la del Pleno.

¿Cuál sería la reacción de la Corte ante una declaración de aceptación de la jurisdicción obligatoria no de la CIJ, sino tan sólo de una Sala *ad hoc*? ¿cedería y daría por válida tal exclusión, todo con tal de elevar el número de casos sometidos a su jurisdicción, en detrimento de su prestigio institucional? o, por el contrario, ¿se mantendría firme manifestando la ineficacia de este tipo de exclusiones, aunque con ello renunciara a que algunos casos le fueran sometidos en el futuro? Son dos preguntas que sólo la Corte puede responder.

Hasta el momento no se ha introducido en ninguna declaración de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte una condición del tipo de la propuesta por M. LEIGH. Sin embargo, el problema de la compatibilidad con el Estatuto de determinadas exclusiones contenidas en las declaraciones de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte --la denominada *inconstitucionalidad*-- se ha planteado en distintas ocasiones en la historia de la CIJ.

Así, en el *asunto relativo a ciertos empréstitos noruegos* (Francia c. Noruega)⁷⁴, *Interhandel* (Suiza c. Estados Unidos)⁷⁵ y en el *Derecho de Paso sobre territorio indio* (Portugal c. India)⁷⁶ existían reservas presuntamente

Regionalisme au sein de la Cour Internationale de Justice: La constitution des Chambres "ad hoc" en *Liber amicorum*, Colección de Estudios Jurídicos en homenaje al Prof. Dr. D. José PEBEZ MONTERO, Oviedo 1988, p. 165; R.J. DUPUY "La réforme du Règlement de la Cour Internationale de Justice" en AFDI, p. 270.

⁷⁴ Sentencia de 6 de julio de 1957, *vid.* en CIJ Recueil 1957, pp. 9-28.

⁷⁵ *Vid.* la Sentencia de 21 de marzo de 1959 en CIJ Recueil 1959, pp. 6-30.

⁷⁶ Sentencia de 26 de noviembre de 1957, en CIJ Recueil 1957, p. 125 y ss.

contrarias al Estatuto, aunque la Corte evitó pronunciarse acerca de este aspecto.

En los dos casos citados en primer lugar -*ciertos empréstitos noruegos* e *Interhandel* - el fundamento de la oposición al Estatuto se infería de las reservas automáticas que se encontraban en las declaraciones francesa y estadounidense -demandante y demandado respectivamente-⁷⁷. Mediante estas reservas los Estados formulantes excluían de la competencia de la Corte las controversias que fueran de su *jurisdicción doméstica* según los propios declarantes. El efecto de este tipo de exclusiones era que los declarantes se atribuían de modo unilateral la competencia calificadora para determinar las controversias que poseían un carácter doméstico. En el asunto del *Derecho de paso por territorio indio* (Portugal c. India) la reserva portuguesa presuntamente incompatible con el Estatuto -según la argumentación del Estado demandado- implicaba el derecho del formulante a añadir otras reservas a las ya contenidas en la declaración portuguesa, con efectos inmediatos desde la notificación.

Los casos citados se refieren a un tipo de exclusión distinto del objeto de este epígrafe -la aceptación de la jurisdicción obligatoria sólo de las Salas de la Corte-, pero nos ocupamos de ellas aquí porque nos parece de utilidad para el estudio de la propuesta estadounidense antes indicada.

En el *asunto relativo a ciertos empréstitos noruegos* (Francia c. Noruega), la Corte admitió una excepción preliminar noruega declarándose

⁷⁷ Curiosamente ninguno de estos Estados mantiene hoy una declaración de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte. La retirada de las anteriores fue motivada por fallos posteriores de la CIJ: la declaración francesa, por el desarrollo del asunto de los *ensayos nucleares*, procediendo Francia a retirar la declaración antes de que la Corte fallara sobre su competencia para conocer del fondo. La de Estados Unidos fue fruto de la decisión de la Corte en el asunto de *las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua -excepciones provisionales-*.

incompetente para conocer del fondo del asunto⁷⁸. La objeción noruega encontraba uno de sus fundamentos en la aplicación del criterio de la reciprocidad a la reserva *automática* francesa⁷⁹. Según la tesis del demandado ello excluía la jurisdicción de la Corte para apreciar su propia competencia. Ahora bien, la Corte no se pronunció acerca de la validez de esta reserva ni de su compatibilidad con el art. 36.6 del Estatuto, porque en el procedimiento este aspecto no se había cuestionado⁸⁰.

Por el contrario, en el asunto *Interhandel* Suiza -Estado demandante- había alegado en el curso del procedimiento la incompatibilidad de las reservas automáticas no solo respecto de la jurisdicción obligatoria prevista en el art. 36.2, sino también del art. 36.6, que confiere a la Corte el poder de determinar su propia competencia. Sin embargo, a pesar de ello, la Corte evitó pronunciarse al respecto. Por tanto, en las dos ocasiones en que la CIJ ha tenido la posibilidad de resolver las dudas suscitadas por este tipo de reserva, ha evitado hacerlo. De modo que las únicas referencias a su compatibilidad o no con el Estatuto las encontramos en las opiniones individuales y disidentes, no en el fallo; opiniones individuales y disidentes formuladas que coinciden en afirmar la incompatibilidad de la reserva

⁷⁸ El efecto de esta Sentencia fue el comienzo de la desconfianza francesa hacia la Corte. Desconfianza posteriormente incrementada con el asunto de las *ensayos nucleares*. La consecuencia inmediata derivada de las Sentencia de la Corte en el asunto de los *empréstitos noruegos* fue la modificación de la declaración francesa de 18 de febrero de 1947. Francia depositó una nueva declaración, excluyendo de la competencia de la CIJ «*Des différends relatifs à des questions qui, d'après le Droit International, relèvent exclusivement de la compétence nationale*», ver en CIJ Annuaire 1958-59, pp. 208-209. La nueva declaración francesa fue asimismo modificada en 1966 para añadirle la reserva del derecho de completar, modificar o retirar en cualquier momento las reservas formuladas con efectos automáticos desde la fecha de su notificación.

⁷⁹ El tenor de la reserva francesa de 1947 (el instrumento de ratificación de la declaración se depositó el 1 de marzo de 1949) era el siguiente: «*Cette déclaration ne s'applique pas aux différends relatifs à des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale telle qu'elle est entendue par le Gouvernement de la République Française*».

⁸⁰ Noruega no lo había puesto en duda porque le favorecía y Francia tampoco iba a hacerlo puesto que era el Estado declarante.

automática con el Estatuto -art. 36.1, 3 y 6⁸¹-, así como con la Carta de las Naciones Unidas cuyo art. 92 dispone que la Corte funcionará de conformidad con el Estatuto.

Una vez se concluye la nulidad de la reserva, el paso siguiente es estudiar la separabilidad de la misma respecto de la declaración, es decir, plantear, como hace H. LAUTERPACHT si es posible entender válida la declaración, salvo lo tocante a la reserva considerada, o por el contrario, si la nulidad de ésta arrastra a la totalidad de la declaración. En este sentido, el Juez citado opta por la segunda posibilidad, fundamentando este posicionamiento en el amplio alcance de la reserva cuestionada. No podemos olvidar que el fundamento del arreglo judicial de controversias internacionales es que la competencia de la Corte solo existe si así lo quieren las partes. La reserva francesa anterior a 1959 no resulta separable del resto de la declaración⁸².

Los argumentos esgrimidos por H. LAUTERPACHT en el *asunto de los Empréstitos noruegos*, resultan aplicables a *Interhandel* y así el mismo LAUTERPACHT, como el Juez SPENDER y el Presidente de la Corte KLAESTAD los utilizaron en sus Opiniones disidentes⁸³. También ARMAND-UGON añadió una Opinión Disidente a esta Sentencia, llegando a idéntica conclusión, aunque el fundamento de la misma se encuentra en la propia

⁸¹ Vid. las opiniones formuladas por LAUTERPACHT, GUERRERO y READ a la Sentencia en el asunto de *Ciertos empréstitos noruegos* en CIJ Recueil 1957, pp.28 y ss.

⁸² Vid. en CIJ Recueil 1957, pp. 34-66.

⁸³ Vid. en CIJ Recueil 1959, pp.95-122, 54-74 y 75-82. KLAESTAD entiende la necesidad de que la Corte estudie la validez de la reserva estadounidense según la cual Estados Unidos decide cuando un asunto corresponde a su jurisdicción interna. Considera que la Corte no puede aplicar estos términos por su oposición al Estatuto, por cuanto unilateralmente el Estado declarante se atribuye una competencia que estatutariamente corresponde a la Corte. Concluye igualmente indicando que la nulidad de la reserva arrastra la de toda la declaración, por impedir la aplicación del art. 36.6 del Estatuto.

naturaleza jurídica de la declaración del 36.2 del Estatuto⁸⁴. No obstante, tampoco han faltado las opiniones de que la nulidad de la reserva -o mejor, de la atribución de su apreciación al declarante- no ha de comportar la de la declaración⁸⁵.

El tercero de los asuntos antes apuntados, el relativo al *Derecho de Paso sobre territorio indio -excepciones preliminares-* (Portugal c. India)⁸⁶, versa también sobre la incompatibilidad de una reserva portuguesa -la tercera de las contenidas en la declaración de 19 de diciembre de 1955- con el Estatuto de la CIJ. Apreciamos dos diferencias entre esta Sentencia y las anteriores: 1) la reserva presuntamente viciada de nulidad no es una cláusula automática; y, 2) en esta Sentencia la Corte sí se pronuncia sobre la compatibilidad de la exclusión aludida con el Estatuto. La reserva estaba redactada en los siguientes términos:

«3)Le Gouvernement portugais se réserve le droit d'exclure su champ d'application de la présente déclaration, à tout moment au cours de sa validité, une ou plusieurs catégories déterminées de différends, en adressant au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies une notification qui prendra effet à la date où elle aura été donnée»⁸⁷

El fundamento utilizado por la India para alegar la incompatibilidad de esta reserva con el Estatuto giraba en torno de tres motivos: en primer lugar,

⁸⁴ Vid. en CIJ Recueil 1959, p. 85-94. Según este Juez una declaración del art. 36.2 es un acto secundario vinculado por la aplicación de los arts. 36.2, 3 y 6 del Estatuto. Estos son el sustrato jurídico de aquél, de modo que la declaración es un acto condicionado por un acto primario. La función de la Corte es velar por la salvaguardia del Estatuto y en cuanto tal tiene la facultad de verificar si el acto secundario de la declaración corresponde al texto primario. Puesto que las declaraciones de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte no pueden contrariar las disposiciones del Estatuto, la Corte podrá apreciar la legalidad de distintos elementos que componen la declaración, con el objeto de verificar la correcta aplicación de las directrices estatutarias.

⁸⁵ GUERRERO en los *empréstitos noruegos*, en CIJ Recueil 1957, pp. 67-70 y ARMAND-UGON en *Interhandel*, en CIJ Recueil 1959, pp. 85-94

⁸⁶ Vid. la Sentencia de 26 de noviembre de 1957, en CIJ Recueil 1957, p. 125 y ss.

⁸⁷ Id. nota anterior p. 141.

entendía que de los términos en que la reserva portuguesa estaba redactada se desprendía la retroactividad de la modificación. Ello indicaba -según las tesis del Estado demandado- que Portugal podría en cualquier momento procesal añadir una reserva a su declaración cuyo efecto -puesto que era automático a la notificación- se haría sentir en el mismo procedimiento aunque éste se hubiera iniciado, de modo que la Corte podría resultar incompetente en virtud de esta modificación permitida por la reserva portuguesa para conocer de un asunto aunque el procedimiento hubiera comenzado. La Corte rechaza este argumento indio por entender que

«Construed in their ordinary sense, these words mean simply that a notification under the Third Condition applies only to disputes brought before the Court after the date of the notification. Such an interpretation leads to the conclusion that no retroactive effect can properly be imputed to notifications made under the Third Condition.»⁸⁸

El segundo motivo invocado por la India para fundamentar la incompatibilidad con el Estatuto de la reserva portuguesa es que la misma es una fuente de inseguridad acerca de los derechos y obligaciones recíprocos, estimando en consecuencia que carece de valor práctico una declaración de aceptación de la jurisdicción obligatoria de este tipo. La respuesta de la Corte a esta argumentación es negativa, y ello por entender que

«It is true that during the interval between the date of a notification to the Secretary General and its receipt by the Parties to the Statute, there may exist some element of uncertainty. However, such uncertainty is inherent in the operation of the system of the Optional Clause and does not affect the validity of the Third Condition contained in the Portuguese Declaration»

El tercer motivo indio es que la reserva portuguesa es contraria al principio de reciprocidad. La Corte tampoco acepta esta tesis, por entender que este criterio es inherente a toda declaración realizada en virtud del art. 36.2 del

⁸⁸*ibid.* p. 142.

Estatuto. Declara por tanto la compatibilidad de esta reserva con el Estatuto de la Corte, desestimando la excepción por la que India pretendía que si la reserva era contraria al Estatuto y resultaba indivisible de la declaración portuguesa ésta era nula en su totalidad y por tanto Portugal carecía de legitimación para interponer una demanda frente a aquel Estado⁸⁹.

2.4. El problema de la Competencia sobre la Competencia.

El art. 36.6 del Estatuto regula la denominada *competencia de la competencia* ⁹⁰. En caso de duda, sólo la Corte ha de decidir si posee o no jurisdicción para conocer de los asuntos suscitados ante ella⁹¹. Dicho esto, ¿se

⁸⁹ Contra esta decisión de la Corte se formula la Opinión Disidente del Juez CHAGLA, designado *ad hoc* por la India, Vid. en CIJ Recueil 1957, pp. 166 y ss.

⁹⁰ Según los términos empleados por la versión española del Estatuto «*En caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá*». Acerca de la *competencia de la competencia* existen múltiples estudios doctrinales, entre ellos R.P. ANAND *Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice*, Londres 1961, p. 259 y ss.; del mismo autor *International Court and Contemporary Conflicts*, Londres 1974, p. 206; D.J. ENDE "Reaccepting the Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice: A Proposal for a New United States Declaration", en *Washington Law Review*, vol. 61, 1986 n°3, p. 1154; G. FITZMAURICE "The Law and Procedure of the International Court of Justice: 1951-1954: Questions of Jurisdiction, Competence et Procédure", en *BYIL*, vol. XXXV, 1958, p. 25; F. GERBER *Le consentement de l'Etat à la juridiction de la Cour Internationale de Justice*, tesis, Orleans abril de 1980; S. GLICHITCH *La juridiction obligatoire de la Cour Permanente de Justice Internationale*, Tesis, Paris 1940; P. GROSS "Competence of Competence: An English View", en *Arbitration International*, 1992-2, p. 205 y ss.; J.R. RENAULT *Les juges ad hoc au sein de la Cour Internationale de Justice*, Tesis, Orleans 1979, p. 40; P. SCHLOSSER "The Competence of Arbitrators and of Courts", en *Arbitration International*, 1992-2, pp. 189-204; I.F.I. SHIHATA *The Power of the International Court of Justice to determine Its Own Jurisdiction: Compétence de la Compétence*, La Haya 1965, pp. 15 y ss.; J.N. SINGH *International Justice*, Nueva Delhi, 1991, p. 48 y ss.

⁹¹ La Corte aplica este art. 36.6 en todos los supuestos en los que su competencia resulta contestada. En este sentido se pronunció en el asunto *Nottebohm* - Vid. Sentencia de 18 de noviembre de 1953, en CIJ Recueil 1953, p. 119- al indicar

«*La Cour n'a pas hésité à statuer sur sa propre compétence dans des cas où la contestation élevée à ce sujet dépassait l'interprétation et l'application du paragraphe 2 de l'article 36. Dans l'affaire du Détroit de Corfou (arrêt du 9 avril 1949, CIJ Recueil 1949, pp. 23-26 y 36) elle a statué sur une contestation de sa compétence pour fixer le montant*

refiere el precepto citado tan sólo al Pleno o también a las Salas?. Una Sala *ad hoc* ¿puede decidir acerca de su competencia para entender de un asunto determinado antes de entrar en el análisis del mismo? Evidentemente, el supuesto será muy improbable si el procedimiento resulta de un compromiso, pero no en otros casos en que una parte, demandada, podrá interponer una excepción preliminar de falta de competencia de esta formación, admitiendo la jurisdicción de la Corte. En nuestra opinión será la Sala la que habrá de juzgar acerca de su competencia, si ha sido ya constituida. Ocurre, sin embargo, que lo lógico es que una excepción tal se plantee antes de la constitución de la Sala, no después⁹². Cabe recordar que el Reglamento -art. 17.1- prevé que el Presidente de la Corte una vez recibida la demanda «*averiguará si la otra parte da su asentimiento*».

Sin embargo, se nos ocurre una situación que podría responder a la hipótesis planteada, a saber, si existiera un Tratado o una cláusula compromisoria estableciendo la jurisdicción de una Sala *ad hoc* para conocer controversias con un objeto material determinado, surgiera una diferencia y una de las partes la entendiese materialmente amparada por ese Tratado o cláusula compromisoria mientras que su contraparte discrepara acerca de su alcance.

de la réparation, contestation portant sur l'interprétation d'un compromis: dans l'affaire Ambatielos (arrêt du 1er. juillet 1952, CIJ Recueil. 1952, p. 28) elle a statué sur une contestation de compétence concernant l'interprétation de la clause compromissoire inscrite dans un traité; ici et là, le différend sur la compétence se rattachait au paragraphe premier et non au paragraphe 2 de l'article 36»

⁹² El Prof. OSTRIHANSKY op. cit. p. 48, se manifiesta en este sentido, al señalar que puesto que es necesario el consentimiento de las partes para que la Corte constituya una Sala, la manifestación del mismo agota la posibilidad de reclamar la excepción de incompetencia.

2.5. Incoación del procedimiento mediante el envío del asunto desde el Pleno hasta la Sala.

Como hemos visto, los procedimientos ante las Salas *ad hoc* se han iniciado en la práctica, sólo a través de dos vías: el compromiso -vía ordinaria- y la demanda unilateral -en una ocasión-. Sin embargo, el Reglamento -art. 17.1- permite una *tercera vía* de introducción de la instancia ante una Sala. El supuesto es el siguiente: sometido inicialmente un asunto a conocimiento del Pleno -por cualquiera de las vías conocidas- luego, con posterioridad a este hecho, solicitan las partes de común acuerdo que sea una Sala la que lo resuelva, requiriendo al Pleno su constitución y la transferencia a la misma de la controversia en cuestión. En definitiva, un reenvío, hasta el momento no experimentado, desde el Pleno a una Sala *ad hoc*, sería factible en cualquier momento antes de la terminación de la fase escrita⁹³.

Como señala C.ESCOBAR⁹⁴, se trata de una posibilidad abierta, cuyo rasgo distintivo es la importancia que se otorga a la voluntad de las partes en la controversia «*en el desarrollo del procedimiento ante el TIJ*». De modo que se concede a los Estados la facultad de sustituir al Pleno del Tribunal por una Sala *ad hoc* si existe acuerdo entre ellos en este sentido. Este procedimiento suscita, por lo demás, múltiples dudas, dadas las lagunas reglamentarias que no han podido ser resueltas por la práctica de la Corte.

⁹³ Esta es una posibilidad contemplada por el art. 17.1 del Reglamento únicamente respecto de las Salas *ad hoc*, ya que, como vimos, la solicitud para que sea una Sala «especial» o de Procedimiento Sumario la que conozca de una controversia debe formularse en el momento inicial del procedimiento.

⁹⁴ C. ESCOBAR HERNANDEZ "Las Salas *ad hoc* ...op. cit., p. 294.

debido a que, como ya hemos mencionado, nunca ha sido utilizado. Así, por ejemplo, ¿qué ocurre con el procedimiento escrito? ¿se interrumpe una vez recibida la notificación del consenso de las partes en este sentido? ¿Vuelve a comenzar ante la Sala en cuestión una vez constituida? ¿Termina de conocer del mismo el Pleno que lo inició? O, sencillamente ¿Se transfiere el asunto tal y como estaba en el momento en que se solicitó el envío para que continúe conociendo la Sala? En último lugar, como apunta C. ESCOBAR, en el supuesto de que la Corte se negase a la petición de las partes, ¿seguiría conociendo del asunto el Pleno en contra de la voluntad de éstas⁹⁵?

A pesar de todo, podemos ensayar alguna respuesta, aún a riesgo de ser acusados de practicantes de la futurología, adoptando para ello el parámetro analógico que nos ofrece la práctica de la Corte en otros aspectos. Así, en cuanto al procedimiento escrito, lo más lógico resulta que el Pleno lo transfiera a la Sala en el estado en que se encontraba en el momento en el que la Corte accedió a las pretensiones de las partes y no de la solicitud de éstas, por cuanto como hemos visto *supra* el art. 91 del Reglamento no es aplicable a este tipo de Salas, en la medida en que la constitución de una formación de este tipo es un poder discrecional del Tribunal. La alternativa propuesta -el nuevo inicio del procedimiento- implicaría un retraso procesal considerable, además de un costo elevado para las partes que deberían nuevamente introducir todas las copias de los documentos y memorias ya depositados ante el Pleno.

Ante la hipótesis de que la Corte se negase a la constitución de una Sala *ad hoc* para la continuación de un procedimiento inicialmente sometido al conocimiento del Pleno, cabe suponer que existiendo una base de jurisdicción suficiente respecto de la formación ordinaria del Tribunal,

⁹⁵ Vid. C. ESCOBAR op. cit. p. 295.

continuaría ésta con el asunto a menos que se produjese un desistimiento como consecuencia de la negativa del Pleno a constituir una Sala, lo que, por otro lado, parece poco probable.

3. PROCEDIMIENTO EN LAS SALAS *AD HOC* ANÁLOGO AL DEL PLENO.

Resulta quizá desmesurado dedicar todo un epígrafe al estudio de las normas que rigen el procedimiento ante las Salas de la CIJ, por cuanto no existen diferencias significativas en los procedimientos ante el Pleno y las Salas de la Corte; más bien todo lo contrario. Observamos una práctica identidad corroborada por su sujeción, salvo escasas excepciones, a las mismas disposiciones. No obstante, obviar los aspectos procedimentales en un estudio acerca de las Salas sería una desatención imperdonable hacia temas fundamentales en la vida de todo órgano jurisdiccional.

Así los párrafos que siguen se articularán en torno a dos ejes: (1) los principios rectores del procedimiento en las Salas, principios, por otra parte, idénticos a los que rigen el procedimiento ante el Pleno; y, (2) las diferencias, excepcionales, que cabe apreciar entre ambos procedimientos.

3.1. La disposición del procedimiento por las partes: el art. 101 del Reglamento.

Existe un precepto en el Reglamento que podría inducirnos, en un primer momento, a pensar que en el procedimiento contencioso ante la Corte las partes pueden introducir modificaciones de tal alcance que, en algunas ocasiones, nos acercarian al procedimiento arbitral. En efecto, según el art. 101:

«Las partes en un asunto podrán proponer, de común acuerdo, modificaciones particulares de los Artículos de este Título o adiciones particulares a los mismos (con excepción de los artículos 93 a 97 inclusive), que podrán ser aplicadas por la Corte o la Sala de que se trate si la Corte o la Sala las estiman apropiadas a las circunstancias del asunto»

Sin embargo, a pesar de que pudiera pensarse que la introducción de este precepto tiene una relación directa con la potenciación de las Salas *ad hoc* derivada del Reglamento de 1978, el art.101 no es una novedad; bien al contrario, se trata de una modificación formal del art.34 del Reglamento de 1972, cuyo contenido era igual al art. 31 del Reglamento de 1946, a su vez heredado del texto de 1936.

En todo caso, si de la interpretación del art. 101 del Reglamento resultara predicable el carácter *arbitral* del procedimiento, eso afectaría también al Pleno de la Corte y a las otras Salas y no sólo a las Salas *ad hoc* , no siendo por tanto un rasgo distintivo y propio de éstas.

De todos modos, el precepto citado contiene dos limitaciones, una primera en cuanto a su ámbito de aplicación, al excluir de la facultad dispositiva los arts. 93 a 97, relativos a los efectos de las Sentencias de la Corte y a los recursos de los que este acto jurídico es susceptible (interpretación y revisión)⁹⁶, y una segunda, relativa a la eficacia del propio acuerdo, ya que las modificaciones decididas por las partes sólo serán aplicadas por la Corte o la Sala que conozca del asunto en cuestión, si las consideran apropiadas a la controversia particular. Ciertamente, la decisión acerca de las modificaciones sugeridas por las partes corresponde siempre a la formación encargada de conocer del asunto concreto: al Pleno de la Corte o a una de sus Salas. De modo que las partes pueden decidir introducir esas alteraciones procedimentales y la formación encargada del estudio de la controversia es libre de rechazarlas o admitirlas⁹⁷.

Esto significa que la voluntad de las partes no tendrá, al menos desde un punto de vista teórico, tanta relevancia -en lo que a aspectos procedimentales se refiere-, como en el arbitraje. Es cierto que las partes poseen un poder de iniciativa para solicitar modificaciones de las normas procedimentales, pero ello no implica que conserven de igual modo el poder de decisión. Por el contrario, éste se mantiene a disposición de la Corte, en Pleno o en Sala.

A pesar de la amplitud de su redacción y de las posibilidades que, en cuanto a modificaciones procedimentales ofrece, el art. 101 del Reglamento no

⁹⁶ El art. 93 dispone que los fallos de las Salas se leerán en audiencia pública de la Sala de la que emane. Los arts. 94 a 97 forman la subsección A - fallos- de la sección F -fallos, interpretación y revisión- del Título III- procedimiento contencioso-. Cuestiones de las que nos ocuparemos en el Capítulo Sexto de este trabajo.

⁹⁷ Los motivos que se acojan como fundamento de la decisión concreta podrán variar desde los estrictamente jurídicos a los de oportunidad o el interés de la Corte.

ha sido utilizado con la frecuencia que podríamos suponer⁹⁸, entre otras razones, por la misma posibilidad y atención a la voluntad de las partes que animan las reglas que encauzan paso a paso el procedimiento. Así, por ejemplo, cuando se trata de incrementar el número de piezas de la fase escrita no es necesaria la aplicación del art. 101 del Reglamento. Así, cuando el asunto se introduce mediante una demanda unilateral -tanto en el Pleno, como en la Sala-, el número de escritos puede incrementarse⁹⁹ siempre que el órgano encargado de conocer del fondo del asunto lo considere pertinente, pudiendo adoptar esta decisión de oficio o a instancia de parte, y, si el instrumento utilizado para iniciar el asunto es la notificación del compromiso, el número y orden de presentación son los indicados en él, salvo que la formación encargada de conocer del fondo del asunto no lo estime adecuado¹⁰⁰. Si el compromiso no dispone nada al respecto y las partes no alcanzan un acuerdo, sólo podrán presentar una memoria y una contramemoria por cada parte. De la redacción del art. 46.2 se desprende, por otro lado, la posibilidad de presentación de réplica y dúplica si el tribunal lo estima necesario, de oficio o a instancia de las partes interesadas.

La práctica confirma este planteamiento. En las Salas *ad hoc* nunca se ha invocado el art. 101. Cuando se ha producido el incremento del número de escritos no ha sido en aplicación del art. 101, sino del propio compromiso y de los arts. 46 y 92.2 del Reglamento¹⁰¹.

⁹⁸ De hecho, según la jurisprudencia nunca se ha empleado.

⁹⁹ Inicialmente se prevé únicamente una memoria del demandante y una contramemoria del demandado, según el art. 45.1 del Reglamento.

¹⁰⁰ Según el art. 46.1 del Regl.

¹⁰¹ En el asunto del *Golfo de Maine*, la Ordenanza de 5 de noviembre de 1982 hace referencia a los artículos mencionados y al art. VI.1 del Compromiso de 29 de marzo de 1979. *Vid.* en CIJ *Recueil* 1982, p. 560. En la ELSI, *Vid.* Ordenanza de 17 de noviembre de 1987 en CIJ *Recueil* 1987, p.185-186 alude a los arts. 92 y 44 del Reglamento. En Burkina Faso/Mali, a los arts. III.2 de su compromiso y 44, 46 y 92 del Reglamento y en El Salvador/Honduras *Vid.*

3.2. Principios que rigen el procedimiento ante las Salas *ad hoc*.

Como ya hemos indicado los principios rectores del procedimiento ante la Corte en cualquiera de sus formaciones -Pleno o Salas- resultan, a salvo algunas diferencias menores, idénticos. Dirección del procedimiento por el Tribunal, contradicción, forma escrita y oral y publicidad son principios comunes, por otra parte, a cualesquiera tribunales¹⁰².

En este epígrafe vamos a referirnos a estos principios indicando cuando proceda las diferencias que se aprecian en la aplicación por el Pleno o por las Salas en general, o en su caso, *ad hoc*.

3.2.1. Función directiva del procedimiento.

Del estudio de los preceptos del Estatuto y del Reglamento de la Corte, se deduce que el procedimiento ante este Tribunal no está regido ni por el principio de inquisición ni por el acusatorio o de disposición, sino por un sistema mixto en el que, a pesar de que las partes mantienen gran parte de la iniciativa procesal, la Corte no se limita a un papel pasivo en los procedimientos desarrollados ante ella. Por tanto, nos encontramos ante un

Ordenanza de 13 de enero de 1989 en CIJ Recueil 1990, p.3 hace referencia a los arts. 44 y 92 del Reglamento y 3 del Compromiso.

¹⁰² Sobre los Principios procesales y procedimentales ante la Corte Internacional de Justicia, *vid.* por todos J. ACOSTA ESTEVEZ *EL Proceso ante el Tribunal Internacional de Justicia*, Barcelona 1995, pp. 87-99.

tipo de procedimiento mixto cuyo control no corresponde en exclusiva ni al Tribunal que conoce del mismo -propio del tipo inquisitorio-, ni a las partes interesadas -propio del tipo acusatorio o dispositivo-, sino que es compartido por ambos¹⁰³.

La Corte puede actuar de oficio en algunas ocasiones y en otras puede hacerlo a instancia de las partes -una o ambas-; asimismo por el contrario, existen otras actuaciones en las que, si media acuerdo de las partes, la Corte está **obligada** a adoptar una decisión en el sentido instado por ellas.

1. ¿Qué puede hacer la Corte de oficio?

El Estatuto confía a la Corte tanto el poder de dirección del proceso como la administración de pruebas¹⁰⁴, además de conferir la facultad de pedir a los agentes de las partes que produzcan cualquier información oral o documentalmente, designar a un sujeto de su elección para que realice una investigación o formule un dictamen pericial¹⁰⁵ y decidir de oficio o con acuerdo de las partes que no se admita público en las vistas orales¹⁰⁶.

¹⁰³ *Vid.* en este sentido el art. 31 del Reglamento «En todo asunto sometido al Tribunal, el Presidente tomará nota de la opinión de las partes sobre las cuestiones de procedimiento. A este objeto, citará a los agentes de las partes tan pronto como sean nombrados y cada vez que sea necesario»

¹⁰⁴ Art. 48 Estatuto « La Corte dictará las providencias necesarias para el curso del proceso, decidirá la forma y términos a que cada parte debe ajustar sus alegatos, y adoptará las medidas necesarias para la práctica de pruebas»

¹⁰⁵ Además del anterior, los arts. 49 y 50 del Estatuto disponen respectivamente: «Aún antes de empezar una vista, la Corte puede pedir a los agentes que produzcan cualquier documento o den cualesquiera explicaciones. Si se negaren a hacerlo, se dejará constancia formal del hecho.» «La Corte podrá, en cualquier momento, comisionar a cualquier individuo, entidad, negociado, comisión u otro organismo que ella escoja, para que haga una investigación o emita un dictamen pericial»

¹⁰⁶ Art. 46 del Estatuto indica «Las vistas de la Corte serán públicas, salvo lo que disponga la propia Corte en contrario, o que las partes pidan que no se admita al público»

Por otra parte, tanto el Estatuto como el Reglamento confieren a la Corte, y no sólo a las partes, la investigación de los hechos controvertidos¹⁰⁷; la Corte podrá también ordenar de oficio la presencia de un testigo y un perito y pagarlos con fondos de la CIJ¹⁰⁸.

La Corte puede autorizar de oficio o a instancia de parte o partes la presentación de réplica y dúplica cuando el asunto se haya sometido a su conocimiento mediante una demanda unilateral¹⁰⁹ o, habiéndose iniciado mediante notificación de compromiso, cuando en éste no se haya fijado el número de escritos a presentar por las partes¹¹⁰; también entre las normas que regulan el procedimiento ante las Salas observamos la extensión expresa de la disposición anterior a estas formaciones, indicando que las Salas si lo estiman necesario podrán autorizar de oficio o a instancia de parte la presentación de otros escritos¹¹¹. La Corte establece de igual modo la

¹⁰⁷ Art. 62.1 del Reglamento «El Tribunal puede, en todo momento, invitar a las partes a aportar los medios de prueba o las explicaciones que juzgue necesarios para precisar cualquier aspecto de las cuestiones en litigio o puede por sí mismo tratar de obtener otras informaciones al mismo fin».

¹⁰⁸ En este sentido vid. el Reglamento, art. 62.2 «El Tribunal puede, si procede, examinar a un testigo o recabar el dictamen de un experto en el curso del proceso» y art. 68 «Las cantidades a pagar a los testigos y expertos que se presenten a iniciativa del Tribunal conforme al artículo 62, párrafo 2 del presente reglamento y a los investigadores y peritos designados conforme al artículo 67, párrafo 1, serán satisfechas, si procede, de los fondos del Tribunal».

¹⁰⁹ Art. 45.2 del Reglamento «El Tribunal puede autorizar o establecer la presentación de una réplica del demandante y de una dúplica del demandado si las partes están de acuerdo al respecto o si el Tribunal decide ya sea de oficio o a instancia de parte que dichos escritos son necesarios».

¹¹⁰ Art. 46.2 del Reglamento «Si el compromiso no contiene ninguna disposición a este respecto y si las partes no llegan a un acuerdo sobre el número y el orden de presentación de los escritos, cada una de las partes presentará una memoria y una contramemoria dentro de los mismos plazos. El Tribunal no autorizará la presentación de réplica y dúplica a menos que lo estime necesario».

¹¹¹ Art. 92.2 «La Sala puede autorizar o establecer la presentación de otros escritos si las partes convienen en ello o si la Sala decide, de oficio o a instancia de parte, que tales escritos son necesarios».

acumulación de procedimientos¹¹²; fija la apertura del procedimiento oral¹¹³; decide la continuación del procedimiento en un lugar distinto de La Haya¹¹⁴; el momento en el que las partes van a informar de las pruebas realizadas¹¹⁵; el orden de intervención de las partes en las audiencias orales¹¹⁶; puede formular preguntas o solicitar aclaraciones a las partes durante esas audiencias, conservando esta facultad aunque se prescinda de esta fase oral¹¹⁷; también en la fase preliminar el Tribunal, si lo estima necesario, puede indicar a las partes las cuestiones -de hecho o de derecho- que considere pertinentes y a utilizar todos los medios probatorios necesarios que puedan ayudar a esclarecer la excepción controvertida¹¹⁸; también de oficio o a instancia de parte la Corte puede decidir la conveniencia de obtener pruebas sobre el

112 Art. 47 Reglamento «El Tribunal puede en todo momento ordenar la acumulación en dos o más asuntos. Puede así mismo disponer que las fases escritas u orales, incluso la presentación de testigos, tengan un carácter común; o bien puede, sin dar lugar a acumulación formal, ordenar actuaciones comunes respecto a uno o varios elementos del proceso»

113 Art. 54 Regl. «A la terminación de la fase escrita, el asunto se halla concluso para la vista. la fecha de apertura de la fase oral será fijada por el Tribunal, el cual podrá también decidir, cuando proceda, el aplazamiento de la apertura o de la continuación de la fase oral»

114 Art. 22 Estatuto «La sede de la Corte será La Haya. La Corte podrá, sin embargo, reunirse y funcionar en cualquier otro lugar cuando lo considera conveniente» y art.55 Reglamento prácticamente reitera el contenido del artículo recién transcrito, aunque añade que «previamente recabará el parecer de las partes»

115 Art. 58.1 Regl. «El Tribunal determinará si las partes han de informar antes o después de la práctica de la prueba, sin perjuicio del derecho de las partes a comentar los medios de prueba»

116 Art. 58.2 Regl. «El orden de actuación de las partes, el método aplicable a la práctica de la prueba, el examen de los testigos, el dictamen pericial, así como el número de consejeros y abogados que hagan uso de la palabra en nombre de las partes, serán fijados por el Tribunal después de que éstas hayan expresado sus pareceres conforme al artículo 31 del presente Reglamento»

117 Art. 61 Regl. «1. El Tribunal puede en todo momento, antes o durante la vista, señalar los puntos o los problemas que quisiera fueren tratados especialmente por las partes o aquellos que considere ya suficientemente tratados. 2. El Tribunal puede, en el curso de la vista, hacer preguntas a los agentes, a los consejeros y abogados o pedirles aclaraciones»

118 Art. 79.6 «Al objeto de permitir al Tribunal pronunciarse sobre su competencia en la fase preliminar del procedimiento, el Tribunal podrá, si fuere necesario, invitar a las partes a distinguir toda cuestión de hecho o de derecho y a presentar todos los medios de prueba que tengan relación con el tema a debatir»

terreno¹¹⁹; también podrá la Corte de oficio o a instancia de parte solicitar a una organización internacional pública información acerca de un asunto sometido a su conocimiento, debiendo respetar para ello como límite temporal el final de la fase oral ¹²⁰; la Corte estima de oficio -o a instancia de parte- la adopción de medidas cautelares¹²¹ y puede decidir, de oficio, la supresión de una Sala «especial», aunque de hacerlo la Sala deberá concluir aquellos asuntos que cuya tramitación hubiere iniciado en esta formación¹²².

2. ¿Qué **debe** hacer la Corte si las partes -una o las dos- se lo piden?

En primer lugar, la Corte debe circunscribir el objeto de su estudio a los aspectos señalados por las partes, puesto que son éstas las que determinan el objeto de la controversia. Ello quiere decir que el Tribunal -cualquiera de sus formaciones: Pleno o Salas- no puede variar el *petitum* de

¹¹⁹ Art. 66 Regl. «El Tribunal puede en todo momento decidir de oficio o a petición de una parte, el ejercicio de sus funciones para la obtención de pruebas en los lugares a que se refiera el asunto, en las condiciones que el mismo determine, una vez oído el parecer de las partes»

¹²⁰ Art. 34.2 del Estatuto «Sujeta a su propio Reglamento y de conformidad con el mismo, la Corte podrá solicitar de organizaciones internacionales públicas información relativa a casos que se litiguen ante la Corte y recibirá la información que dichas organizaciones envíen a iniciativa propia». Las disposiciones reglamentarias referidas se encuentran en el art. 69 del Reglamento cuyo parágrafo primero prevé que «En cualquier momento antes de la terminación de la fase oral, el Tribunal puede de oficio o a instancia de parte comunicada en la forma prevista en el artículo 57 del presente Reglamento, solicitar a una organización internacional pública información referente al asunto del que conozca»

¹²¹ Art. 41.1 del Estatuto «La Corte tendrá facultad para indicar, si considera que las circunstancias así lo exigen, las medidas provisionales que deban tomarse para resguardar los derechos de cada una de las partes». El art. 75.1 del Reglamento prácticamente reitera el contenido del artículo recién transcrito. Vid. respecto de las medidas cautelares el epígrafe 3. del Capítulo Cuarto.

¹²² Art. 16.3 Regl. «El Tribunal puede decidir la supresión de una Sala sin perjuicio del deber que incumbe a ésta de terminar los asuntos cuyo conocimiento hubiere iniciado»

las partes, hasta el punto de que una decisión *ultra petita* podría significar la nulidad de la Sentencia¹²³.

Cuando el asunto fue sometido a conocimiento de la Corte mediante un instrumento unilateral, la CIJ debe limitarse a juzgar según lo alegado por las partes, por el contrario cuando se introdujo por compromiso habrá de estarse a la definición que del *petitum* se contenga en este texto. Ello es así, porque siempre corresponde a las partes fijar los puntos de hecho controvertidos y pertinentes a la solución del asunto. Es decir, la actividad judicial -conforme al contenido de este principio- debe reducirse únicamente a resolver las cuestiones planteadas por las partes o que en la instrucción del asunto concreto resulten controvertidas entre ellas. La Corte no podrá pronunciarse *ultra petita*, resolviendo o esclareciendo otros aspectos distintos de los sometidos a su conocimiento. Así la Corte señaló que «*La Cour ne doit pas excéder la compétence qui lui ont reconnue les Parties, mais elle doit exercer toute sa compétence*»¹²⁴.

Tanto el Estatuto como el Reglamento contienen puntos en los que actuando las partes de acuerdo, la Corte debe proceder de conformidad con ellas.

Así, por ejemplo, por lo que hace al procedimiento escrito, si se utilizó una demanda unilateral para someter a conocimiento de la Corte el asunto y las partes acuerdan que esta fase escrita se sustancie en una memoria y una réplica del demandante y una contramemoria y una dúplica del

¹²³Vid. la Sentencia del Tribunal Internacional de Arbitraje de 21 de octubre de 1994, en el asunto *Laguna del desierto* entre Chile y Argentina § 106.

¹²⁴Vid. la Sentencia de la Corte en el asunto de la *Plataforma Continental entre Libia y Malta*, en CIJ Recueil 1985, p. 24.

demandado, la Corte deberá aceptar esta disposición¹²⁵. Asimismo, habrá de aceptar la Corte vistas a puerta cerrada, si las partes se lo piden¹²⁶.

Una vez iniciado el procedimiento es frecuente la interposición de excepciones a la competencia o la admisibilidad de la demanda, excepciones que la Corte sustancia en un procedimiento preliminar salvo que las partes decidan la unión de su estudio al fondo del asunto, en cuyo caso se aplica lo acordado por los Estados interesados o que tras su estudio la propia Corte alcance esta conclusión¹²⁷.

Las partes determinan mediante acuerdo el idioma en el que se va a desarrollar el procedimiento. Si las partes hubieren acordado el desarrollo del procedimiento en francés o en inglés, cada una de ellas puede utilizar el de su preferencia dentro de las lenguas oficiales de la Corte, en cuyo caso, dictará Sentencia en el idioma elegido de común acuerdo por las partes.

En el supuesto de que una parte solicite o ambas acuerden utilizar idioma diferente del francés y el inglés -aunque resulta considerablemente más económico utilizar uno de éstos-, el Estatuto indica que la Corte *la autorizará* a proceder de este modo, pudiendo en todo caso hacerlo siempre que, a cada uno de los escritos a depositar en una lengua distinta del francés o el inglés deberán ir acompañados por una traducción a uno de los idiomas oficiales de la Corte¹²⁸. También podrá participar en las audiencias orales en la lengua

¹²⁵Vid. art. 45.2.

¹²⁶ Art. 46 del Estatuto «*Las vistas de la Corte serán públicas, salvo lo que disponga la propia Corte en contrario, o que las partes pidan que no se admita al público*».

¹²⁷ Vid. art. 79.8 del Reglamento «*El Tribunal hará efectivo todo acuerdo celebrado entre las partes al objeto de que una excepción planteada en virtud del párrafo 1 del presente artículo sea resuelta en la misma forma que la cuestión principal*».

¹²⁸ Art. 39 del Estatuto «*1. Los idiomas oficiales de la Corte serán el francés y el inglés. Si las partes acordaren que el procedimiento se siga en francés, la Sentencia se pronunciará en este idioma. Si acordaren que el procedimiento se siga en inglés, en este idioma se pronunciará la Sentencia. 3. Si lo solicitare una de las partes, la Corte la autorizará para usar*

elegida para la fase escrita; en este caso deberá asegurarse la interpretación de las vistas orales a uno de estos idiomas¹²⁹.

El límite temporal que el Reglamento establece para la presentación de documentos probatorios se encuentra en el final de la fase escrita, pero si después la contraparte consiente su introducción fuera de plazo la Corte deberá admitirlo como prueba¹³⁰. En cuanto a los testigos y expertos a los que pueden recurrir las partes, el Reglamento establece que las partes deberán realizar un listado incluyendo la identificación de los mismos y el motivo de su comparecencia. Este listado debe presentarlo cada una de las partes antes de la apertura de la fase oral, pudiendo si así lo desea llamar a todos y cada uno de ellos. La Corte en este caso deberá escuchar la intervención de todos los testigos y expertos incluidos en ese listado confeccionado por las partes al efecto¹³¹.

... cualquier idioma que no sea ni el francés ni el inglés» El Reglamento indica los requisitos exigidos en este último caso, así su art. 51 «2. Cuando de conformidad con el artículo 39, párrafo 3 del Estatuto, se utilice una lengua distinta del francés o del inglés, deberá adjuntarse al escrito original una traducción certificada por la parte que lo presente en francés o en inglés» Asimismo deberán ir acompañados de traducción igualmente certificada los documentos anejos que se encuentren redactados en una lengua diferente de las lenguas oficiales de la Corte.

129 Art. 70.2 del Reglamento «Cuando, de acuerdo con el artículo 39, párrafo 3 del Estatuto, se emplee un idioma distinto del francés o del inglés corresponderá a la parte interesada adoptar las medidas necesarias para asegurar la interpretación en una u otra de las lenguas oficiales», puesto que el traductor es designado por la parte interesada, con el objeto de evitar posibles interpretaciones parciales o incorrectas, el precepto indicado continúa con una cautela «Sin embargo, el Secretario adoptará las medidas necesarias para verificar la interpretación suministrada por una parte respecto a los medios de prueba de la misma». La necesidad de que la parte interesada aporte un intérprete no es extensiva a la comparecencia de testigos o de expertos, en este supuesto será la Secretaría la encargada de esta traducción. Art. 70.2 Reglamento *in fine* «En el caso de testigos o de expertos que comparezcan a iniciativa del Tribunal, la interpretación será asegurada por la Secretaría»

130 Vid. Artículo 56.1 del Reglamento «Después de la conclusión de la fase escrita y sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 2 del presente artículo, ningún documento nuevo podrá ser presentado al Tribunal excepto con el consentimiento de la parte contraria (...) Se presumirá el consentimiento de la otra parte si ésta no se opone a la presentación del documento»

131 Artículos 57 del Reglamento «...cada parte comunicará al Secretario, en tiempo suficiente antes de la apertura de la fase oral, los medios de prueba de que intente servirse o los que pretenda que sean obtenidos por el Tribunal. Esta comunicación incluirá una lista con los apellidos, nombres, nacionalidades, características y domicilios de los testigos y expertos que esa parte desee proponer, con indicación, en términos generales, de los puntos a los que ha de referirse la prueba» y art. 63.1 «Las partes pueden llamar a todos los testigos y expertos que figuren en la lista comunicada al Tribunal conforme al artículo 57 del presente Reglamento»

También las partes pueden poner fin al procedimiento en cualquier momento antes del fallo sobre el fondo -mediante allanamiento o desistimiento-¹³², en cuyo caso, la Corte se limita a declarar el incidente producido.

Todo lo anterior es aplicable a las Salas. En las Salas y concretamente en las de Procedimiento Sumario y las «especiales», se sienten los efectos del acuerdo de las partes incluso antes de iniciarse el procedimiento. De tal modo que, si existe acuerdo de las partes para que sea una Sala de los tipos indicados la que resuelva la controversia entre ellas en lugar del Pleno, esta petición tendrá efecto, puesto que el Reglamento contiene un mandato imperativo en este caso, de modo que escuetamente se indica que «Se accederá a la petición si existe acuerdo entre las partes»¹³³.

3. ¿Qué puede hacer la Corte si las partes -una o las dos- consienten?

En las Salas *ad hoc* ésta que puede denominarse dirección compartida del procedimiento se reafirma porque se requiere el asentimiento de ambas partes aún antes de comenzar el procedimiento, para que sea una Sala de este tipo la que conozca del caso en lugar de hacerlo el Pleno. Recordemos además que antes de proceder al trámite de la elección de la composición de la Sala, el Presidente se informa de la opinión de las partes al respecto, por lo que podemos indicar que se requiere también la *anuencia* de

¹³² Art. 89.1 del Reglamento «*Si en el curso del procedimiento incoado mediante solicitud escrita, el demandante comunica por escrito al Tribunal que renuncia a la continuación del procedimiento y si, en la fecha de la recepción en la Secretaría de tal desistimiento el demandado todavía no ha intervenido en el proceso, el Tribunal resolverá mediante auto tomando nota del desistimiento y disponiendo la remoción del caso de la lista*»; y art. 88.1 «*Si en cualquier momento anterior a la Sentencia, las partes notifican por escrito al Tribunal, conjunta o separadamente, que han acordado desistir en la continuación del proceso, el Tribunal tomará nota del desistimiento y resolverá mediante auto la remoción del caso de la Lista*».

¹³³ *Vid. supra* Art. 91.1 del Reglamento.

las partes en este punto¹³⁴. También necesitan las Salas -a diferencia del Pleno- el consentimiento de las partes para reunirse fuera de La Haya¹³⁵.

En cuanto a trámites procesales aplicables tanto al Pleno como a las Salas, se requiere la petición de una parte y consentimiento de la otra para la corrección de los errores materiales que se pudieran contener en los documentos presentados en el curso del procedimiento. En defecto de este asentimiento de la contraparte es posible llevar a cabo la corrección solicitada con autorización del Presidente de la Corte¹³⁶.

4. ¿Qué puede hacer la Corte si las partes se lo piden?

Resulta innegable que la apertura del procedimiento es acusatoria, porque estamos ante una jurisdicción voluntaria basada en la presentación de una demanda o la notificación de un compromiso. En estos instrumentos se solicita a la Corte que conozca acerca de unas cuestiones objeto de diferencia. No podemos olvidar que sin esta actuación de las partes en una controversia no habrá lugar al procedimiento, ya que el Tribunal no puede iniciar asuntos de oficio. En el Pleno es suficiente la instancia de una de las partes, puesto que en los supuestos de existencia de vínculo jurisdiccional no es necesario acuerdo posterior para someter a conocimiento de la Corte una controversia. Una vez recibida una notificación de un compromiso o de una demanda unilateral, la Corte puede por diferentes razones estimar o rechazar pronunciarse sobre el asunto sometido -Vid. el listado que aparece en el anuario de la Corte en el que se enumeran las peticiones desestimadas-.

¹³⁴ Vid. en este sentido el Capítulo Segundo dedicado a la composición de las Salas.

¹³⁵ Art. 28 del Estatuto «Las Salas de que tratan los Artículos 26 y 29 podrán reunirse y funcionar, con el consentimiento de las partes, en cualquier lugar que no sea la Haya»

¹³⁶ Art. 52.4 del Reglamento «La Corrección de un error material en un documento presentado puede hacerse en cualquier momento con el asentimiento de la parte contraria o con la autorización del Presidente»

En cuanto a la composición de la Corte, una parte puede objetar la designación llevada a cabo por su contraparte de Juez *ad hoc*, en cuyo caso la Corte decidirá una vez haya escuchado las opiniones de todos los interesados¹³⁷. También puede una parte entender que algún miembro de la Corte incurre en incompatibilidades o que por alguna otra causa un Juez no debe participar en el estudio de un asunto, en cuyo caso comunicará confidencialmente a la Corte los motivos en los que fundamenta esta sospecha y el Tribunal decidirá¹³⁸.

Por lo que a trámites procesales se refiere la Corte puede, si lo considera oportuno, aceptar las modificaciones propuestas de mutuo acuerdo por las partes, en lo que al procedimiento contencioso se refiere, aunque con una exclusión en cuanto al ámbito material del objeto del acuerdo: las disposiciones relativas a sus Sentencias¹³⁹. Así, si el asunto se ha puesto en conocimiento de la Corte mediante la notificación de un compromiso y en él se contienen el número y orden en los que deberán presentarse los escritos, la

¹³⁷ Art. 35 del Reglamento «3. El secretario dará traslado de copia de toda notificación referente a la designación de un Juez *ad hoc* a la parte contraria para que presente en el plazo fijado por el Presidente las observaciones oportunas. Si en dicho plazo la parte contraria no presenta ninguna objeción y si el Tribunal tampoco encuentra ninguna, las partes serán informadas al respecto. 4. En caso de objeción o de duda, el Tribunal decidirá después de oír a las partes si procede»

¹³⁸ Art. 34 del Reglamento «En caso de duda sobre la aplicación del artículo 17, párrafo 2, del Estatuto o en caso de desacuerdo sobre la aplicación del artículo 24 del Estatuto, el Presidente informará a los miembros del Tribunal, los cuales tomarán una decisión. 2. La parte que desee llamar la atención del Tribunal sobre hechos que considere de posible relevancia para la aplicación de las disposiciones del Estatuto contempladas en el párrafo precedente y crea que el Tribunal no ha tenido conocimiento de los mismos, los comunicará confidencialmente por escrito al Presidente». Art. 17.2 del Estatuto «No podrán tampoco participar en la decisión de ningún asunto en que hayan intervenido anteriormente como agentes, consejeros o abogados de cualquiera de las partes, o como miembros de un tribunal nacional o internacional o de una comisión investigadora, o en cualquier otra calidad» Art. 24 del Estatuto «1. Si por alguna razón especial uno de los miembros de la Corte considerare que no debe participar en la decisión de determinado asunto, lo hará saber así al Presidente. 2. Si el Presidente considerare que uno de los miembros de la Corte no debe conocer de determinado asunto por alguna razón especial, así se lo hará saber. 3. Si en uno de estos casos el miembro de la Corte y el Presidente estuvieren en desacuerdo la cuestión será resuelta por la Corte»

¹³⁹ Art. 101 del Reglamento. *Vid.* epígrafe 3.1.

Corte fijará los así establecidos. Ello con una salvedad, que «*tras conocer la opinión de las partes, decida otra cosa*»¹⁴⁰.

Además de lo anterior puede prorrogar los plazos inicialmente indicados para el depósito de los escritos si entiende justificado este retraso o validar actuaciones realizadas extemporáneamente¹⁴¹; decidir a instancia de parte que es necesaria la presentación de réplica y dúplica cuando el instrumento utilizado para poner en conocimiento de la Corte el asunto fue una demanda unilateral o un compromiso en el que no se previó la posibilidad de presentar estos escritos¹⁴²; autorizar la producción de un documento después del cierre del procedimiento escrito previa petición de una parte aunque la otra se oponga siempre lo estime necesario¹⁴³. Encontramos una previsión análoga a la recién indicada respecto de la posible comparecencia de un testigo o experto en la fase oral del procedimiento cuando su presencia no se hubiere indicado en el listado que es preceptivo entregar a estos fines antes de la apertura de esta fase oral¹⁴⁴. Además de lo anterior, de oficio o a instancia de

¹⁴⁰ Vid. art. 46.1 del Reglamento «*En un asunto iniciado mediante la notificación de un compromiso, el número y el orden de presentación de los escritos serán los que fije el propio compromiso, a menos que el Tribunal, tras conocer...*»

¹⁴¹ Art. 44.3 del Reglamento «*El Tribunal puede, a petición de parte interesada, prorrogar un plazo o considerar como válida una actuación efectuada después del plazo fijado, si estima que la petición al respecto está debidamente justificada. En uno y otro caso se concederá a la parte contraria la posibilidad de manifestar su opinión al respecto*»

¹⁴² Art. 45.2 del Reglamento «*El Tribunal puede autorizar o establecer la presentación de una réplica del demandante y de una dúplica del demandado si las partes están de acuerdo al respecto o si el Tribunal decide ya sea de oficio o a instancia de parte que dichos escritos son necesarios*» Art. 46.2 «*Si el compromiso no contiene ninguna disposición en este aspecto y si las partes no llegan a un acuerdo sobre el número y el orden de presentación de los escritos, cada una de las partes presentará una memoria y una contramemoria dentro de los mismos plazos. El Tribunal no autorizará la presentación de réplica y dúplica a menos que lo estime necesario*»

¹⁴³ Vid. el artículo 56 Reglamento citado *supra*.

¹⁴⁴ El art. 63 del Reglamento indica «*Las partes pueden llamar a todos los testigos y expertos que figuren en la lista comunicada al Tribunal conforme al artículo 57 del presente Reglamento. Si en algún momento de la fase oral una parte desea llamar a un testigo o experto que no figura en dicha lista informará de ello al Tribunal y a la parte contraria facilitando los datos*

parte, puede decidir el Tribunal la práctica probatoria «*en los lugares a los que se refiera*» el asunto¹⁴⁵. También a instancia de parte podrá decidir que resulta necesaria la información que sobre el objeto de la controversia pudiera facilitar una Organización Internacional¹⁴⁶.

Como se señaló *supra* las audiencias orales son públicas salvo acuerdo de las partes en contrario o decisión de oficio de la Corte, pero en el supuesto de que no medie acuerdo y una de las partes solicite que no se admita público en las vistas orales será la Corte la que decida en consecuencia¹⁴⁷.

No termina aquí el catálogo de actos cuya realización depende de la decisión de la Corte previa petición de las partes. Además de lo anterior, en los incidentes procesales resulta igualmente necesaria esa instancia. Así, en los procedimientos desarrollados en ausencia de una de las partes si el compareciente solicita de la Corte una solicitud favorable a sus intereses, el Tribunal podrá dictar Sentencia en este sentido, previa comprobación de su competencia para conocer del fondo del asunto y del correcto fundamento fáctico y jurídico de las pretensiones del compareciente¹⁴⁸. Las medidas cautelares pueden adoptarse de oficio o a instancia de parte, pero solamente cabe su modificación o revocación antes de pronunciarse la Sentencia si

previstos en el artículo 57. El testigo o experto podrá ser oído si la parte contraria no se opone o si el Tribunal considera que tal medio de prueba puede ser pertinente»

¹⁴⁵ *Vid. supra* artículo 66.

¹⁴⁶ *Vid.* art. 69.1 del Reglamento transcrito *supra*.

¹⁴⁷ Ni el art. 46 del Estatuto ni el 59 del Reglamento contemplan expresamente este supuesto pero de la redacción de ambos se deduce que la decisión de la Corte puede adoptarse de oficio o a instancia de parte.

¹⁴⁸ Art. 53 del Estatuto « 1. Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor. 2. Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho»

media instancia de parte¹⁴⁹. Igualmente se requiere la actuación de una parte para la remisión especial al Tribunal¹⁵⁰, evidentemente las excepciones preliminares solo pueden interponerlas las partes en la controversia -una o ambas-. También es necesaria la petición para que un tercero pueda intervenir en el procedimiento en causa ante la Corte, pero en este caso la solicitud no será de una de las partes en la controversia, sino de ese Estado no parte que desea intervenir en uno de los supuestos previstos en el Estatuto; la Corte es la que resuelve este incidente pero es necesaria la previa instancia de este tercero¹⁵¹.

Consecuencia de esta necesidad de instancia de parte es la exigencia del mismo requisito para la tramitación de un recurso, de interpretación o revisión¹⁵².

¹⁴⁹ Art. 76.1 del Reglamento «A instancia de parte, el Tribunal puede en todo momento antes de la Sentencia revocar o modificar cualquier decisión relativa a medidas provisionales si en su opinión, algún cambio en las circunstancias aconseja dicha revocación o modificación»

¹⁵⁰ Art. 87 del Reglamento «La solicitud escrita de incoación de procedimiento indicará la decisión o el acto del órgano internacional referido y se adjuntará copia de dicha decisión o acto»

¹⁵¹ Art. 81.1 «La petición de intervención en el proceso fundada en el artículo 62 del Estatuto...» y Art. 82.1 «El Estado que desee hacer uso del derecho a intervenir que le confiere el art. 63 del Estatuto presentará a dicho efecto una declaración ...»

¹⁵² Art. 60 del Estatuto «En el caso de desacuerdo sobre el sentido o el alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes» Art. 98 del Reglamento «En caso de divergencia sobre el sentido o el alcance de una Sentencia, cualquier parte podrá presentar una demanda de interpretación, tanto si el procedimiento fue incoado por solicitud escrita como por notificación de compromiso». Art. 61 del Estatuto «1. Sólo podrá pedirse la revisión de un fallo cuando la solicitud se funde en el descubrimiento de un hecho de tal naturaleza que pueda ser factor decisivo y que, al pronunciarse el fallo, fuera desconocido de la Corte y de la parte que pida la revisión, siempre que su desconocimiento no se deba a negligencia» y 99 del Reglamento «1. La demanda de revisión de Sentencia se presentará mediante solicitud escrita que contendrá las indicaciones necesarias para establecer que las condiciones previstas en el artículo 61 del Estatuto se han cumplido». Vid. Capítulo Quinto .4.

3.2.2. **Carácter contradictorio.**

Este principio traduce, y se verifica, con la igualdad procesal de las partes. Tiene alcance general, es decir, el procedimiento es contradictorio en todas sus fases, tanto en la escrita como en la oral. Ello es así porque, en ambas, las partes han de gozar de una posición de igualdad. Es posible que algún Estado renuncie en una controversia concreta al ejercicio de los derechos que en este sentido derivan del Estatuto y del Reglamento y opte por no defenderse de los hechos que se le imputan. Esta actitud, sin embargo, no implica que el procedimiento pierda su carácter contradictorio.

Así la consecuencia que deriva de una declaración de rebeldía -según el art. 53 del Estatuto-, es la posibilidad del otro Estado parte en la controversia de solicitar al Tribunal que decida a su favor. La Corte lo hará, siempre que haya comprobado su competencia para conocer del asunto y que la demanda esté correctamente fundada, tanto desde una perspectiva fáctica como jurídica. Los Jueces pueden acabar siendo, por su celo, los mejores abogados del *rebelde*. Si bien es imposible la constitución de una Sala *ad hoc* sin el acuerdo de los Estados partes en la controversia en cuestión, no podemos descartar una situación de rebeldía en estas Salas, ya que la misma puede darse en una fase posterior al trámite inicial indicado.

No existe diferencia alguna en lo que a este carácter contradictorio hace referencia entre el Pleno y las Salas en general. Sin embargo, en esta última formación el principio de igualdad procesal de las partes resulta afianzado en mayor medida, dado que ningún Estado puede imponer a otro la decisión de acudir a una Sala para resolver la controversia.

¿Cuál es la traducción material del principio que nos ocupa? Por lo que hace referencia a la fase escrita del procedimiento, resulta de aplicación desde el inicio de la misma. Los actos del procedimiento son siempre conocidos por la contraparte, de manera que para que un documento sea considerado por el Tribunal es necesaria la comunicación de una copia certificada del mismo a aquélla¹⁵³. Con la última previsión apuntada se persigue una doble finalidad; en primer lugar, permitir a cada parte facilitar su interpretación acerca de los hechos controvertidos y, en segundo término, darles la oportunidad de responder a las alegaciones vertidas por el otro Estado.

En apoyo de lo anterior podemos señalar que, en principio, una vez cerrada la fase escrita del procedimiento, sólo podrán introducirse documentos nuevos si la contraparte no formula ninguna objeción. Ello con una salvedad: que la Corte entienda, una vez oídas las partes en la controversia, la necesidad de la producción del documento en cuestión¹⁵⁴. Aunque en este caso resulta igualmente predicable el principio de contradicción, porque la otra parte tendrá la posibilidad de responder al contenido del documento introducido de manera tardía y además fundamentar documentalmente las observaciones realizadas al respecto. Incluso en el supuesto de que el documento en cuestión haya sido recibido por la Corte después del cierre de la fase oral del procedimiento,

¹⁵³ El carácter contradictorio del procedimiento lo preside completamente, afectando también a la actividad probatoria desarrollada en el curso del mismo. El art. 43 del Estatuto y en concreto el parágrafo 4 que indica «*Todo documento presentado por una de las partes será comunicado a la otra mediante copia certificada*». Además, una de las funciones del Secretario de la Corte *ex* art. 26.1.d) del Reglamento es la de transmitir a las partes copias no sólo de todos los alegatos presentados por escrito, sino también de los documentos que acompañen a éstos.

¹⁵⁴ *Vid.* art. 56 del Reglamento.

igualmente se comunicará a la otra parte dándole la oportunidad de responder al contenido del mismo, reabriéndose esta última fase si fuera necesario¹⁵⁵.

La aplicación del principio de contradicción a la fase oral del procedimiento se produce de diversas formas. En primer lugar, las partes, durante las audiencias, únicamente se referirán a los documentos que hayan sido debidamente comunicados a la otra parte¹⁵⁶. En segundo término, ambas partes tendrán conocimiento de las pruebas, testigos y peritos propuestos por su oponente, así como del objeto de la intervención de éstos últimos en el curso de esta fase¹⁵⁷. De manera que sólo podrán comparecer los testigos y peritos acerca de cuya identidad y objeto haya sido informada la contraparte. Sin embargo, será posible su intervención a pesar de no figurar en el listado de los medios de prueba que cada parte antes de la fase oral habrá de depositar ante el Secretario, siempre que, conocido por el Tribunal el deseo de una parte de llamarlo, la otra no se oponga, o incluso, a pesar de esta oposición, si el tribunal estima la oportunidad de la comparecencia¹⁵⁸.

Además, las partes conservan siempre el derecho a comentar las pruebas presentadas, aunque éstas se hayan introducido después de pronunciar sus alegatos¹⁵⁹. En último término, cada parte escucha la

¹⁵⁵ El art. 72 del Reglamento indica «Toda respuesta escrita de una parte a una pregunta que le haya sido formulada conforme al artículo 61 del presente Reglamento o todos los medios de prueba o explicaciones aportadas por una parte o explicaciones aportadas por una parte conforme al artículo 62 y recibidos por el Tribunal después de la terminación de la fase oral serán trasladados a la parte contraria, que tendrá la posibilidad de presentar observaciones. A este fin puede abrirse de nuevo la fase oral, si procede».

¹⁵⁶ Art. 56.4 del Reglamento «El contenido de un documento que no haya sido presentado conforme al artículo 43 del Estatuto o del presente artículo no podrá ser alegado en la fase oral, a menos que dicho documento forme parte de una publicación fácilmente accesible».

¹⁵⁷ Art. 57 Reglamento.

¹⁵⁸ Vid. art. 63 del Reglamento.

¹⁵⁹ Vid. art. 58 Reglamento.

intervención oral de su oponente, así como las conclusiones finales del agente, transmitiéndose una copia firmada por éste último a la contraparte¹⁶⁰.

Este carácter contradictorio del procedimiento fue recientemente subrayado desde una perspectiva diferente a la habitual, es decir, no en un plano *ad intra* -desarrollado en párrafos anteriores-, como igualdad de las partes en el procedimiento en causa -aspecto éste sobradamente consolidado en la práctica de la Corte-, sino en su vertiente *ad extra*, en relación con los terceros Estados, es decir, igualdad respecto de aquéllos que intervienen en el procedimiento -no necesariamente en su totalidad-, aunque no poseen el estatuto procesal de parte. Nos estamos refiriendo, evidentemente, a la intervención nicaragüense en la *controversia terrestre, insular y marítima* entre El Salvador y Honduras¹⁶¹. Esta era la primera vez que se admitía un incidente procesal de intervención -ex. art. 62 del Estatuto- ante la CIJ y tuvo lugar, no ante el Pleno, sino ante una Sala *ad hoc*.

Como se verá en el Capítulo siguiente es por lo menos dudoso que se respete en su integridad el principio de igualdad procesal respecto del Estado que intervenía, ya que no fué aceptado su estatuto como *parte interviniente*. Al no ser considerado como parte -aunque fuera interviniente- no se le confirieron los derechos correspondientes a ésta categoría jurídica, quedando considerablemente reducida la posibilidad de defensa de sus intereses, que es precisamente el objeto perseguido con las intervenciones fundadas en el art. 62 del Estatuto.

¹⁶⁰ El art. 60 del Reglamento «1. Los informes de las partes se pronunciarán de la forma más sucinta posible dentro de los límites necesarios para la adecuada presentación de los argumentos en la vista. A dicho efecto se centrarán en los puntos que todavía separan a las partes, no recogiendo todo lo expuesto en los autos ni repitiendo simplemente los hechos y argumentos que ya han sido invocados. 2. Al término del último informe realizado por una parte en la vista, su agente dará lectura a las conclusiones finales de la misma, sin recapitular la argumentación. Una copia del texto escrito, firmado por el agente será facilitado al Tribunal y trasladado a la parte contraria».

¹⁶¹ Vid. Sentencia de 13 de septiembre de 1990, en CIJ Recueil 1990, pp. 92 y ss.

Antes de 1990 -fué el 13 de septiembre de 1990 cuando se pronunció la Sala respecto de la intervención nicaragüense-, la aplicabilidad de este principio en la perspectiva indicada encontraba fundamento tanto en las disposiciones estatutarias -especialmente el art. 31- como en las que el Reglamento dedica a los trámites procesales. Quedaba la duda, a falta de práctica judicial en la materia, de si el tercero interviniente tendría o no el estatuto jurídico de parte. De la asignación de esta categoría en aquellos aspectos en los que estuviera interesado, se desprendía la aplicación o el respeto del principio de igualdad procesal para todas las partes en litigio.

Después de la fecha indicada, se observa que sólo el estatuto de parte en el procedimiento principal implica el total respeto del principio contradictorio. Al tercero que interviene para proteger un interés jurídico posiblemente afectado por la decisión de la Corte sobre el fondo, no le ampara el principio de igualdad procesal en aquellos aspectos objeto de su interés porque carece del estatuto jurídico necesario para ello. Cabe formular esta afirmación con carácter general, puesto que difícilmente la práctica judicial podrá ofrecernos un caso más claro que el de la naturaleza jurídica de un espacio marítimo del que son ribereños tres Estados, dos de ellos partes en el procedimiento en causa y el tercero, interviniente no parte. Aquí lo criticable es que no se le concediera el estatuto de parte, lo que limitó sus derechos.

Por tanto, se observa claramente la preocupación por mantener la igualdad procesal sólo de las partes originarias en todas aquellas controversias cuya solución pudiera someterse a conocimiento de la Corte. Esta actitud juega siempre en detrimento de terceros Estados interesados y, más aún, afectados por el resultado del mismo.

3.2.3. Escritura y oralidad.

Como hemos señalado en múltiples ocasiones a lo largo de este trabajo, los procedimientos ante la CIJ se componen de dos fases sucesivas: una primera escrita y una segunda oral¹⁶². Además, se configura del modo indicado no sólo en las cuestiones de fondo, sino también en los procedimientos incidentales. En cuanto a éstos últimos, tanto las excepciones preliminares como la *intervención* normalmente cuentan con estas dos fases. Las primeras se componen de una inicial escrita, teniendo lugar la oral salvo decisión contraria de la formación de la Corte que se esté ocupando de este incidente¹⁶³. También la intervención consta de idénticas fases, una primera escrita y si en ésta se presentan objeciones, se pasa a la fase oral.

La doble fase no queda reservada a las cuestiones de fondo e incidentes procesales. También los procedimientos relativos a los recursos interpuestos frente a las Sentencias pueden poseer esta estructura, aunque con variaciones. Así, el recurso de interpretación se sustanciará en una única fase escrita, a la que podrá añadirse una mini-fase oral, dependiendo del instrumento utilizado para su interposición: demanda o notificación de un compromiso y de la decisión de la Corte -en Pleno o en Sala-, al respecto¹⁶⁴.

¹⁶²Vid. art. 43 del Estatuto.

¹⁶³ Así el art. 79.4 del Reglamento indica que «*Salvo decisión en contrario del Tribunal, la continuación del procedimiento revestirá la forma oral*».

¹⁶⁴ Artículo 98 del Reglamento «3. Si la demanda de interpretación se presenta en forma de solicitud escrita, los argumentos de la parte que la presenta serán expuestos en la misma y la parte contraria tendrá el derecho de presentar observaciones escritas en el plazo fijado por el Tribunal o, si éste no se hallare reunido, por el Presidente. 4. Tanto si la demanda de interpretación ha sido presentada mediante notificación escrita como por notificación de

En el primer caso, una vez conocidos por la otra parte los argumentos contenidos en la solicitud de interpretación puede presentar observaciones escritas. En el segundo caso, se prescinde de este trámite, obviamente innecesario, puesto que la manifestación de la existencia de acuerdo en este sentido es el propio compromiso notificado. En ambos supuestos, el Tribunal se reserva el derecho de solicitar información complementaria, en forma oral o escrita. En cuanto al recurso de revisión -únicamente cabe su interposición mediante demanda unilateral-, comienza por una fase escrita¹⁶⁵, pudiendo el Tribunal dar a las partes la posibilidad de presentar sus opiniones al respecto, aunque no se indica bajo qué forma ni en qué situaciones podrá hacerse¹⁶⁶.

Sólo las medidas cautelares -procedimiento que podrá iniciarse de oficio o a instancia de parte- y las demandas reconconvencionales se sustancian en un procedimiento únicamente oral¹⁶⁷.

En la fase escrita del procedimiento se desarrolla la instrucción. En ella las partes depositan sus memorias en las que expresan sus argumentos, alegaciones y conclusiones. El contenido de las memorias de las partes se

compromiso, el Tribunal podrá, si procede, conceder a las partes la posibilidad de aportar por escrito o verbalmente información complementaria».

¹⁶⁵ Su regulación se encuentra en el art. 99.2 del Reglamento «La parte contraria tendrá el derecho de presentar observaciones escritas sobre la admisibilidad de la demanda en el plazo fijado por el Tribunal o, si éste no se hallare reunido, por el Presidente. Dichas observaciones serán trasladadas a la parte que presenta la solicitud»

¹⁶⁶ El art. 99.3 señala «Antes de resolver sobre la admisibilidad de la solicitud el Tribunal podrá brindar a las partes la posibilidad de presentar nuevamente sus opiniones al respecto.»

¹⁶⁷ Así se expresa el Reglamento respecto de ambos incidentes. Se deduce de la redacción del art. 74 respecto de las medidas provisionales «2. Si el Tribunal no se halla reunido en el momento de la presentación de la demanda, será convocado inmediatamente para resolver con urgencia sobre la misma. 3. El Tribunal o, si no se hallare reunido, el Presidente, fijará el oportuno señalamiento de modo que las partes puedan estar representadas. El Tribunal recibirá y tomará en consideración todas las observaciones que le sean presentadas antes de la terminación de este procedimiento» y expresamente en el 80 del Reglamento sobre las demandas reconconvencionales «3. Si la relación de conexión entre la demanda presentada como reconvención y el objeto de la demanda presentada por la parte contraria no es evidente, el Tribunal, después de oír a las partes, decidirá si procede o no la acumulación de la demanda reconconvencional a la cuestión principal».

delimita en el art. 49 del Reglamento: La memoria contendrá una exposición de los hechos controvertidos, fundamentos de derecho y conclusiones; el objeto de la contramemoria es responder el contenido de la memoria, por lo que deberá constar en ella el reconocimiento o la negación de los hechos alegados por la contraparte en su memoria, observaciones a los fundamentos de derecho contenidos en la misma, fundamentos de derecho en los que se basa su postura frente a la demanda, así como las conclusiones de la parte que formula la contramemoria¹⁶⁸. Si la Corte autorizara réplica y dúplica, estos escritos no podrán ser recapitulación de los anteriores, sino que deberán intentar aclarar los aspectos que todavía les separan.

También se introducen en esta fase escrita, como anexos a las memorias, los fundamentos documentales de las respectivas argumentaciones de las partes¹⁶⁹. Esta primera fase tiene alguna prevalencia sobre la oral, aunque ello no implica que esta última carezca de relevancia, ni mucho menos.

La fase oral del procedimiento puede resultar fundamental para el resultado del mismo, porque su objeto es la introducción de nuevas argumentaciones por las partes, pudiendo la Corte solicitar la aclaración de algunos aspectos que considera insuficientemente explicados en los escritos presentados.

¹⁶⁸ La memoria ha de ajustarse a la demanda, evitando la demanda nueva. Vid. en este sentido la Sentencia de 26 de junio de 1992, en el asunto de *algunas tierras con fosfatos en Nauru* Nauru c. Australia, en CIJ Recueil 1992, pp. 240 y ss.

¹⁶⁹ Acerca del procedimiento escrito en general Vid. arts. 44 a 53 del Reglamento que regulan su fase escrita y en particular respecto de los aspectos indicados el art. 50 de este texto que indica «1. Al original de cada escrito se adjuntarán copias certificadas de todos los documentos pertinentes que sean alegados en apoyo de las tesis formuladas en el mismo. 2. Si alguno de dichos documentos resulta sólo en parte pertinente bastará con adjuntar los particulares del mismo que sean necesarios a la finalidad del escrito. Una copia del documento en su integridad deberá depositarse en la Secretaría, a menos que se halle publicado de forma fácilmente accesible. 3. En el momento de la presentación de un escrito deberá facilitarse una lista de los anejos del mismo»

La apertura de las audiencias tendrá lugar tras el cierre de la fase anterior, recayendo su dirección en el Presidente de la formación encargada de conocer del fondo del asunto -según el art. 45 del Estatuto-. Antes de abrirse la fase oral, y una vez concluida la escrita, la Corte -en Pleno o en Sala- decidirá los puntos sobre los que es necesario ampliar la información facilitada en la etapa procesal precedente. También se reúne la Corte durante el desarrollo de esta fase oral, con vistas tanto a su continuación, como para ejercer el derecho que ampara a los Jueces, en virtud del art. 61.3 del Reglamento, de formular preguntas a los agentes y abogados. Estas cuestiones deben ser conocidas tanto por el Presidente de la Corte -en Pleno o en Sala, por cuanto a él le corresponde la dirección del procedimiento- como por los restantes miembros de la formación encargada de juzgar este asunto -para evitar la reiteración de preguntas-.

En esta fase oral tienen lugar dos actividades procesales diferentes:

1) La actividad probatoria, para la que las Salas resultan especialmente adaptadas, en cuanto formaciones restringidas de la Corte¹⁷⁰.

Esta actividad probatoria podrá ser dos tipos: escrita -documental- o/y oral -testigos y peritos-. Del texto del Estatuto se desprende que las partes gozan de absoluta discrecionalidad para elegir los medios de prueba que consideran más adecuados¹⁷¹. Además, ni en el Estatuto ni en el Reglamento encontramos disposición alguna tendente a limitar materialmente ni tan siquiera a ilustrar el posible contenido de la citada actividad probatoria. Lo que

¹⁷⁰ E. DECAUX en "Jurisdiction Internationale. Le différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) arrêt de la Chambre de la CIJ du 11 septembre 1992. La délimitation terrestre", en AEDI 1992, p. 395; G. GUILLAUME en Les formations restreintes des juridictions internationales, Paris 1992; R. LILLICH (ed.) Fact-finding before International Tribunals, 1991.

¹⁷¹ El art.54 del Estatuto indica «Cuando los agentes, consejeros y abogados han hecho valer bajo control de la Corte todos los medios de prueba que consideran útiles, el Presidente declara el cierre de la fase oral».

si contiene este texto son indicaciones acerca de la competencia para controlar tal actividad ya que, de la interpretación conjunta de los arts. 48 y 58.1 del Estatuto, concluimos que la producción de los medios de prueba -que entienden necesarios o «útiles»-, corresponde a las partes, mientras la adopción de las medidas para su ejecución compete a la Corte¹⁷².

Si bien es cierto que no existen limitaciones materiales para la presentación de los medios de prueba que las partes consideren oportunos, si se prevén límites formales a respetar para su introducción: así el Reglamento requiere la certificación de conformidad con el original del documento presentado¹⁷³. Otro límite formal es el derivado de la lengua en la que debe depositarse; si no se produce en una de las lenguas oficiales de la Corte, será necesario adjuntar una traducción del mismo en francés o inglés, pudiendo el Estado interesado optar por una u otra indistintamente¹⁷⁴.

2) Los alegatos de las partes, que -según el art. 58.1 del Reglamento- pueden ser anteriores o no a la actividad probatoria. Lo normal es que sean posteriores a ésta, pero cabe el supuesto contrario, en cuyo caso, las partes conservan el derecho a comentar las pruebas realizadas.

Una vez agotadas las dos actividades procesales anteriores, y tras la lectura de las conclusiones finales de las partes, se considera concluida la fase oral del procedimiento.

¹⁷² El art. 48 del Estatuto indica que la Corte adopta todas las medidas que comporta la administración de pruebas.

¹⁷³ Así, el art. 50.1 del Reglamento.

¹⁷⁴ Art. 51.3 Reglamento «Cuando un documento anejo no se halle redactado en una de las lenguas oficiales del Tribunal deberá ir acompañado de una traducción en una de esas dos lenguas, certificada por la parte que lo presenta. La traducción puede limitarse a una parte o a particulares de un anejo, pero, en tal caso, debe ir acompañado de una nota explicativa indicando las páginas traducidas. El Tribunal puede, sin embargo, solicitar la traducción de otras partes o una traducción integral».

A diferencia de lo que ocurre con la escrita en la que el Reglamento perfila los contenidos mínimos que deben tener los actos producidos por las partes, no encontramos disposición alguna en el Reglamento que nos indique cual debe ser el contenido de las intervenciones orales en esta segunda fase del procedimiento. Sin embargo, ello no quiere decir que las partes gocen de una discrecionalidad absoluta, sino que, por el contrario, ésta será relativa al contar con dos límites que se han de respetar. En primer lugar, las exposiciones orales deberán tratar de aquellos puntos en los que persiste discusión entre las partes. De manera que la intervención de las partes en las audiencias orales no podrá ser reiteración de alegaciones previas ni recapitulación de las mismas¹⁷⁵. El segundo límite deriva de la facultad que mantiene la Corte -en Pleno o en Sala- para reconducir las audiencias indicando a las partes aquellos aspectos cuya profundización considera necesaria, así como los que entiende que fueron suficientemente discutidos y acerca de los cuales no estima oportuno volver¹⁷⁶. De lo anterior se desprende el papel activo del que goza el Tribunal en esta fase oral del procedimiento.

Las consideraciones introducidas en párrafos anteriores respecto del principio que nos ocupa son predicables tanto del Pleno como de las Salas -en realidad, a lo largo de estos epígrafes utilizamos el término Corte como sinónimo, no de Pleno, sino de la formación competente en el momento indicado, del mismo modo que lo hace el Reglamento-. Sin embargo, no estamos ante procedimientos idénticos. Aunque la fase escrita desarrollada ante las Salas no difiere de manera sustantiva respecto de la del Pleno, en las Salas encontramos la especialidad que supone la posibilidad de prescindir de la fase oral del procedimiento; por tanto, existe una primera diferencia en

¹⁷⁵ Vid. en este sentido art. 60 del Reglamento transcrito.

¹⁷⁶ Vid. art. 61 del Reglamento

cuanto al principio de oralidad. En este último caso -como ya señaláramos en epígrafes anteriores- debe mediar consentimiento de la Sala. Esta formación es la que debe fallar y, por ello, es la única indicada para decidir acerca de la suficiencia de los datos facilitados por las partes; por lo que, a pesar de optar por la supresión de la fase oral del procedimiento, mantiene la facultad de solicitar a las partes el esclarecimiento de aquellos aspectos que pudiera considerar que no han quedado resueltos en la fase escrita y, además, que esta información le sea facilitada oralmente. En este punto observamos una aplicación de la función directora del procedimiento corresponde al Tribunal.

La única distinción procedimental que apreciamos, por tanto, entre el Pleno y las Salas, a estos efectos, se encuentra en la posibilidad de imprimir sumariedad al procedimiento, aunque las partes nunca han utilizado esta facilidad otorgada por el Reglamento.

3.2.4. Publicidad.

Los procedimientos ante la Corte en cualquiera de sus formaciones son públicos. La primera aplicación de este principio se produce respecto del mismo acto de incoación del procedimiento, ya que cuando un Estado pone un asunto en conocimiento del Tribunal, el *Greffier* debe transmitir copias al Secretario General de las Naciones Unidas; a los Miembros de esta Organización Internacional y a cualesquiera otros Estados que no poseyendo este estatuto tengan derecho a comparecer ante la Corte¹⁷⁷.

¹⁷⁷ El art. 42 del Reglamento indica «La Secretaría trasladará copia de toda solicitud escrita o notificación de compromiso que dé lugar a procedimiento ante el Tribunal :

- a) al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas;
- b) a los Miembros de las Naciones Unidas;

El dato recién indicado no es el único fundamento de la publicidad del procedimiento ante el Tribunal, sino que tanto en el Estatuto como en el Reglamento de la Corte encontramos múltiples detalles que así lo corroboran. De esta manera, durante la fase escrita del procedimiento la Corte puede decidir que los ejemplares de los alegatos escritos y los documentos anexos a ellos se pongan a disposición de los Estados con derecho a comparecer ante la Corte, siempre que hayan solicitado previamente esta comunicación¹⁷⁸. Una vez concluida la fase escrita del procedimiento, la Corte podrá entender la conveniencia de que el público tenga acceso a esos alegatos escritos y a los documentos anexos a ellos. En ambos casos, antes de adoptar una decisión al respecto, la Corte deberá informarse de la opinión de las partes en la controversia acerca de esta cuestión¹⁷⁹. Sin embargo, del Reglamento no podemos inferir que la oposición de aquéllas implique necesariamente la decisión negativa de la Corte. Evidentemente, la opinión de las partes implicadas es un dato que esta institución tendrá en cuenta, pero no el único, por lo que su opción definitiva responderá a una ponderación de todos los intereses en presencia.

En lo que a la fase oral hace referencia, las audiencias son públicas¹⁸⁰, salvo decisión contraria de la Corte o acuerdo de las partes en este sentido. Por tanto, cabe que el Tribunal estime la necesidad de proceder a puerta cerrada, de oficio o a instancia de parte. Sin embargo, si éstas acuerdan

c) a otros Estados admitidos a comparecer ante el Tribunal».

¹⁷⁸ Art. 53.1 del Reglamento «El Tribunal o, si éste no se halla reunido, el Presidente, podrá en cualquier momento resolver, una vez conocida la opinión de las partes, que copias de los escritos y de los documentos anejos sean puestos a disposición de cualquier Estado que esté dotado de acceso al Tribunal y que haya solicitado dichas copias».

¹⁷⁹ El art. 53.2 del Reglamento de 1978 indica que la Corte podrá «después de informarse de la opinión de cada una de las partes, decidir qué ejemplares de los alegatos escritos y de los documentos anexos a los mismos se hagan accesibles al público a la apertura del procedimiento oral o con ulterioridad».

¹⁸⁰ Según los arts. 46 del Estatuto y 59 del Reglamento.

solicitar a la Corte que las audiencias orales no sean públicas, esta fase del procedimiento se desarrollará sin público. En el sentido anterior resulta especialmente claro el Estatuto cuando para expresar esta salvedad, afirma «*si las dos partes lo solicitan*».

Sin embargo, a pesar de lo anterior, el procedimiento ante la Corte, en Pleno o en Sala, goza del principio de publicidad, porque tanto las memorias escritas y la documentación anexa a ellas, como las actas de las audiencias orales se publican en la colección de la CIJ *Mémoires, Plaidoiries et documents*. Además, el requisito de la publicidad no termina con la finalización del procedimiento, sino que resulta predicable en momentos posteriores a éste. Por ejemplo, el de la lectura de la Sentencia que tendrá lugar siempre en audiencia pública. El contenido de la misma será obligatorio para las partes desde su lectura en audiencia pública y no desde la fecha en la que se les comunica. En este sentido, no cabe argüir el art. 46 del Estatuto -«*Las vistas de la Corte serán públicas, salvo lo que disponga la propia Corte en contrario, o que las partes pidan que no se admita al público*»- para evitar la lectura del fallo en una sesión pública, porque esta disposición únicamente se refiere a la fase oral del procedimiento y la lectura del fallo bajo ningún concepto puede entenderse parte de aquélla. A lo anterior cabe añadir la existencia de un precepto posterior al indicado -art. 58- que expresamente dispone que la lectura del fallo tendrá lugar en una sesión pública¹⁸¹.

El texto de las Sentencias de la Corte es público en un momento posterior al de la lectura. Ello es así porque se producen varios ejemplares de

¹⁸¹ Tanto en las sesiones plenarias de la Corte como ante las formaciones extraordinarias o reducidas de este Tribunal, así se prevé expresamente en los arts. 94 y 93 del Reglamento. Art. 94 «1. Cuando el Tribunal haya terminado su deliberación y adoptado su Sentencia, se notificará a las partes la fecha en la que se procederá a la lectura. 2. La Sentencia será leída en sesión pública del Tribunal; se considera que tiene fuerza obligatoria para las partes a partir del día de su lectura»; art. 93 «Toda Sentencia de una Sala será leída en sesión pública de la misma»

la misma. Uno queda depositado en los archivos de la Corte, enviándose otro a cada una de las partes en la controversia. Además se remiten copias a los mismos sujetos a quienes el Secretario de la Corte está obligado a comunicar copia de las demandas y notificaciones de compromiso utilizadas como instrumento para incoar un procedimiento ante la CIJ¹⁸², es decir, al Secretario General de las Naciones Unidas, a los miembros de esta Organización y a aquéllos que sin serlo tengan derecho a comparecer ante la Corte¹⁸³.

Además, por si lo anterior no fuera suficiente garantía de publicidad, el texto de las Sentencias se publica en la colección de la Corte Internacional de Justicia denominada *Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances* o *Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders*.

Por tanto, y a modo de conclusión en lo que a este principio o rasgo del procedimiento perfilado por el Estatuto y el Reglamento de la Corte se refiere, resulta difícil establecer un sistema que posea mayores garantías de publicidad. Evidentemente, uno de los motivos subyacentes a todo ello es el interés por diseñar un sistema de solución pacífica de controversias lo más parecido posible a los jurisdiccionales internos, alejado en mayor medida de las típicas relaciones entre Estados caracterizadas por su reserva. Si observamos detenidamente el contenido de ambos textos, únicamente las deliberaciones en la Sala del Consejo permanecen secretas.

¹⁸² Según el art. 42 del Reglamento.

¹⁸³ El art. 95.3 del Reglamento así lo dispone, al señalar que « *Un ejemplar de la Sentencia, debidamente firmado y sellado con el sello del Tribunal será depositado en los archivos del mismo y otro será remitido a cada una de las partes. Se remitirán copias por el Secretario: a) al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas; b) a los miembros de las Naciones Unidas; c) a los demás Estados con derecho a comparecer ante el Tribunal* ».

3.3. Analogías y diferencias entre el procedimiento ante el Pleno y ante las Salas *ad hoc*.

La regulación reglamentaria del procedimiento ante las Salas contiene una remisión a las reglas rectoras de este trámite ante el Pleno. De ello deriva una consecuencia: a diferencia del procedimiento arbitral, quedan bajo control de las partes sólo ciertos aspectos de carácter *formal* o *adjetivo*, y no *material* o *sustantivo*.

Así, hemos de comenzar señalando que del mismo modo que ocurre en el procedimiento ante el Pleno, rige el poder de iniciativa de las partes, residiendo el decisorio en la Sala concreta -eventualmente, en el mismo Pleno, según el momento procesal en que nos encontremos-. A modo de ejemplo, las partes pueden pedir la ampliación del número de escritos -ex. art. 45.2 Regl.-, la prórroga de un plazo -aunque los plazos de depósito los fija la Corte ex. art. 44.3-, siendo la Sala en cuestión en ambos supuestos el órgano decisor. Los preceptos indicados resultan de aplicación en virtud de la remisión realizada en el art.90. Las partes en una controversia también pueden acordar que todo el procedimiento escrito se siga en uno de los idiomas oficiales de la Corte -art. 51.1-, o requerir la autorización para usar una lengua distinta de aquellos -art. 39.3 Estatuto¹⁸⁴-.

Por el contrario, los aspectos *materiales* están regulados por el Reglamento o, en su defecto, se reservan a la Corte -en los procedimientos ante el Pleno-, o a la Sala concreta, dependiendo, igual que en los casos anteriores, del desarrollo procesal. El procedimiento ante las Salas se rige por

¹⁸⁴ El Estatuto también se refiere a la Corte, pero resulta de aplicación a las Salas por idéntico motivo al señalado.

las disposiciones contenidas en el Reglamento respecto del contencioso, con la salvedad de los arts. 91 -sólo para las Salas de Procedimiento Sumario y las «especiales»- y 92. Este último dispone la presentación de una sola pieza escrita, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento ante el Pleno, en el que será la Corte quien decida -art. 44.1- el número y orden de los escritos a presentar por las partes. Sin embargo, ninguna de las Salas ha hecho uso de esta prerrogativa reglamentaria, puesto que en todas ellas se decidió la presentación de segundas memorias a instancia de las partes interesadas, tal y como prevé el segundo apartado del art. 92¹⁸⁵.

A pesar de la diferencia apuntada, la desigualdad resulta más teórica que práctica, ya que ninguna Sala constituida hasta el momento ha tenido ocasión de aplicar el primer párrafo del art. 92 -del que deriva la ventaja apuntada-, sino el segundo, con lo que queda demostrado que el objeto perseguido por las partes al acudir a estas Salas no era ni la economía ni la rapidez procesal¹⁸⁶. La cuestión es que la Corte, al adoptar una decisión al

¹⁸⁵ En el asunto de *la delimitación de la frontera marítima en el Golfo de Maine* entre Estados Unidos y Canadá, la Ordenanza de 5 de noviembre de 1982, Vid. en CIJ Recueil 1982, p. 560 da noticia de la aplicación del artículo VI.I del compromiso celebrado entre las partes en la controversia 29 de marzo de 1979. En el asunto de *la Diferencia fronteriza* entre Burkina Faso y la República de Mali, ordenanza de 3 de octubre de 1985, CIJ Recueil 1985, p. 189; en el de *la Elettronica Sicula -ELSI- S.p.A. Estados Unidos c. Italia*, Vid. Ordenanza de 17 de noviembre de 1987. En la ordenanza de 29 de mayo de 1987 -Vid. en CIJ Recueil 1987, p. 177-, la Sala encargada de conocer de *la diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador aplica lo acordado por las partes al respecto en el art. 3.1 a) del compromiso celebrado entre estos dos Estados.

¹⁸⁶ En este sentido, en el art. VI del compromiso entre Estados Unidos y Canadá se establece el depósito de una memoria y una contramemoria por cada Estado y otros escritos que la Sala declare necesarios. El art. III del acuerdo entre Burkina Faso y la República de Mali dispone la entrega de una memoria y una contramemoria de cada parte, así como cualquier otra pieza de procedimiento que la Sala considere necesarias. En el caso de El Salvador y Honduras, su art. 3 contempla el depósito de una memoria y una contramemoria de cada parte y, además, señala que

«La Corte podrá autorizar o prescribir la presentación de una dúplica si las partes están de acuerdo a este respecto, o si la Corte decide de oficio o a solicitud de una de las partes que esta pieza del procedimiento es necesaria ».

Este precepto plantea dos cuestiones: (1) ¿se habla de la Corte entendiéndola como sinónimo de Sala? o, por el contrario, ¿se piensa que es la Corte, en cuanto Pleno, el órgano capaz de adoptar tal decisión? y (2) respecto de su eficacia en cuanto reiteración del contenido del art. 92 del Reglamento.

respecto, deberá tener en cuenta los acuerdos que las partes pudieran haber alcanzado -art. 44.2-, acerca del número y orden de los escritos a presentar. Podemos también señalar que los Estados se encuentran más preocupados -lógicamente, por otra parte-, por defender en la medida de sus posibilidades sus intereses que por obtener una solución rápida al conflicto en causa. De ello deriva, probablemente, la aplicación del segundo párrafo del art. 92, en lugar del primero que es el que imprime una mayor rapidez al procedimiento.

Tanto en el Pleno como en la Sala prevalecerán, por otro lado, las previsiones contenidas en el compromiso, si se utilizase su notificación como instrumento para someter a conocimiento de la Corte una diferencia. De modo que aunque en esta hipótesis la regla general, en cuanto a la forma de depósito de las memorias de las partes, es su evacuación en plazos simultáneos, el art. 92 contempla una excepción: que las partes hubieren acordado en el compromiso que esta documentación se presentara de modo sucesivo. Por el contrario, si el asunto llegó a conocimiento de la Corte mediante una demanda unilateral, las memorias de las partes se presentarán de forma sucesiva. En este caso el Reglamento no tiene necesidad de acoger una excepción convertida, ahora, en regla¹⁸⁷.

El objeto de esta exigencia de depósito sucesivo es evidente: puesto que la demanda es el instrumento de introducción en la instancia es imposible

Por lo que hace referencia a la primera de cuestión, se designa a la Corte como sinónimo de Sala, ya que, en efecto, es la Sala, mediante su ordenanza de 29 de mayo de 1987, la que establece el plazo para el depósito de los citados documentos, en el 1 de junio de 1989. En cuanto a la segunda de las cuestiones planteadas, ha de recordarse que, en virtud del art. 101 del Reglamento, las partes podían proponer a la Sala en cuestión la modificación de algunas disposiciones procedimentales, incluida ésta del art. 92. Las partes, sin embargo no lo hacen. En cualquier caso se trata de una disposición -la del compromiso- que carece de relevancia, puesto que, al decidir la Sala la presentación de duplica, se toma como fundamento jurídico no el art. 3 de su acuerdo sino el art. 92 del Reglamento.

¹⁸⁷ En el asunto de la *Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI)*, la Corte en Pleno determinó, en aplicación del art. 92 del Reglamento, el depósito sucesivo. Vid. en Ordenanza de 2 de marzo de 1987, en CIJ Recueil 1987, pp. 3 y ss.

que la otra parte pueda presentar de manera simultánea una memoria en la que exprese sus puntos de vista acerca de la controversia sometida a conocimiento de la Corte; también es necesario dejar a la parte demandada el tiempo necesario para preparar su respuesta. Además, sabemos que en caso de que el demandado tenga dudas acerca de la competencia de la Corte para conocer del fondo del asunto o de la admisibilidad de la demanda introducida, el plazo para interponer una excepción preliminar en este sentido es el establecido para el depósito de la contramemoria, por tanto, deberá tener el tiempo suficiente para ello.

No sólo el Estado demandado tiene derecho a dudar de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la demanda. Como veremos en el Capítulo Cuarto todas las partes en la controversia tienen derecho a interponer estos incidentes procesales, pero lo habitual es que sea el demandado el que lo haga. En el supuesto de que no sea el demandado quien introduzca una excepción preliminar, el art.79.1 indica que el plazo para ello será el señalado para la presentación de su primer documento escrito.

En cuanto a los plazos de depósito de las memorias de las partes, el art. 92 del Reglamento dispone que serán fijados por la Corte o por su Presidente, previa consulta con la Sala de que se trate si ya estuviese constituida¹⁸⁸. El contenido de este precepto debe interpretarse literalmente. Es decir, será la Corte funcionando en Pleno y no en Sala la que fije los plazos de depósito. No será la Sala quien los señale porque la disposición indicada se encuentra dentro de la sección E, relativa al «Procedimiento ante las Salas», sección ésta en la que no cabe interpretar el término «Corte» como institución global comprendiendo sus dos formaciones posibles, sino como sinónimo de

¹⁸⁸ Respecto de la manera en que han de fijarse los plazos para el cumplimiento de actos de procedimiento, el art. 48 del Reglamento señala que podrán ser establecidos indicando un período determinado, pero deberán siempre especificar una fecha precisa y habrán de ser tan cortos como lo permita la naturaleza del asunto.

Pleno¹⁸⁹, al contrario de lo que ocurre en secciones anteriores. En ellas, en efecto, en virtud de la remisión contenida en el art. 90 al Procedimiento contencioso de los títulos I a III del Reglamento, cabe interpretar el término «Corte» en sentido comprensivo.

En virtud de la disposición mencionada, los cuatro asuntos de los que ha conocido una Sala *ad hoc*, los plazos de depósito de las memorias han sido señalados mediante una Ordenanza del Pleno de la Corte¹⁹⁰.

En el compromiso entre Estados Unidos y Canadá (art. VI) se había establecido un plazo máximo para el depósito de las memorias de siete meses. El momento a partir del cual se empieza a contar el mismo es el de la recepción por el Registro de la CIJ de la notificación del nombre del Juez designado *ad hoc* por Canadá¹⁹¹. Por lo que respecta a las contramemorias, el límite máximo acordado por las partes fue el de seis meses a contar desde el depósito de memorias. Es el compromiso el que establece estos plazos, es decir, se fijan mediante acuerdo de las partes. Esta previsión tiene como fundamento jurídico el art. 101 del Reglamento, aunque la Corte en Pleno y por

189 Esto implica dos consecuencias, según C. ESCOBAR "Las Salas... op. cit., p. 317: la primera, el reforzamiento de la relación entre el Pleno y la Sala y, la segunda, que induce a establecer una dependencia jerárquica entre el Pleno y la Sala que no se desprende ni del Estatuto ni del Reglamento. Este efecto lo tienen también otros actos de la Corte; por ejemplo, se acusó de lo mismo a la Corte cuando en respuesta a la demanda nicaragüense de intervención, el Pleno resolvió mediante una Ordenanza declarando que la formación competente para conocer del procedimiento incidental requerido era la Sala.

190 Así en el asunto de la *delimitación de la frontera marítima en la zona del Golfo de Maine*, es la Ordenanza de la Corte y no de la Sala en cuestión de 1 de febrero de 1982. Vid. en CIJ Recueil 1982, p. 16; en la *diferencia fronteriza* entre Burkina Faso/República de Mali, lo hace también la Corte mediante su Ordenanza de 12 de abril de 1987, Vid. en CIJ Recueil 1987, p. 10; en la *Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-* (Estados Unidos c. Italia) lo hace la Corte por la Ordenanza de 2 de marzo de 1987, Vid. en CIJ Recueil 1987, p. 5 y por último en la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre El Salvador y Honduras, es también la Corte en su Ordenanza de 8 de mayo de 1987 quien lo fija, Vid. CIJ Recueil 1987, p. 17.

191 El objeto de esta disposición era preservar la igualdad de partes y esperar a que la Sala estuviera debidamente constituida.

analogía también la Sala, podría haberse opuesto a ello. La Corte acepta el plazo acordado por las partes, aunque podría no haberlo hecho.

En cuanto al compromiso entre Burkina Faso y la República de Mali, estos Estados acordaron que el plazo máximo para el intercambio de las memorias sería de seis meses tras la adopción por la Corte de la Ordenanza de constitución de la Sala. Se fijó por tanto un momento inicial a partir del cual empezar a contar los plazos, momento totalmente objetivo e independiente de la voluntad de las partes, a diferencia del compromiso anterior. Para las contramemorias se estableció el mismo plazo que, en este caso, se empezaría a contar desde la presentación de las memorias.

Por otra parte, el art. 3 del acuerdo entre El Salvador y Honduras dispuso que el límite máximo para el depósito de memorias sería de diez meses a partir de la notificación del compromiso; para la presentación de las contramemorias se previó el mismo plazo, a contar desde la notificación de las memorias.

En realidad, de la práctica se desprende que son las partes quienes deciden esos plazos. Lo hacen, como se acaba de señalar, en el compromiso que sirve de instrumento de incoación del procedimiento. El Tribunal, por tanto, lo único que ha hecho ha sido acoger como propias las decisiones de las partes. La Corte desempeña una función constitutiva al fijar estos plazos, ya que según los textos normativos que regulan la institución le corresponde a ella señalarlos y los plazos indicados en el compromiso son sólo proposiciones de las partes que no vinculan a la Corte. Pero, de hecho, se ha limitado a formalizar los plazos convenidos por las Partes.

Resulta, por otra parte, ilógico que la Sala que conoce del asunto no pueda establecer los plazos de depósito de las memorias, y sin embargo,

tenga capacidad no sólo para prorrogar aquéllos¹⁹², sino también para autorizar la presentación de contramemorias, réplicas y réplicas, además de fijar el plazo de depósito de estos documentos¹⁹³. En este sentido, desde el punto de vista de la jerarquía, se plantea un problema: si afirmamos que el hecho de que la Corte en un procedimiento ante una Sala fije los plazos de depósito de las memorias induce a establecer una dependencia jerárquica entre el Pleno y la Sala, ¿qué ocurre cuando consideramos a la Sala capaz de prorrogar estos plazos, fijados por una formación de la Corte, desde este punto de vista, jerárquicamente superior?

La solución que C.ESCOBAR aporta para evitar todos los problemas que esta actuación implica es la de interpretar el término «Corte» como sinónimo de formación extraordinaria de la Corte¹⁹⁴. Con esta interpretación se persigue que sea el Presidente de la Sala quien adopte estos plazos. De este modo se conseguiría que las funciones del Pleno se agotasen en la constitución de la Sala; pero como ya se indicó, no creemos que esta solución pueda mantenerse desde una perspectiva estrictamente técnico-jurídica, ya que la ubicación del precepto no permite sostenerla.

¹⁹² Vid. en el asunto de la *delimitación de la frontera marítima en el Golfo de Maine* la Ordenanza de 28 de julio de 1982 en CIJ Recueil 1982, p. 557-8. En la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre El Salvador y Honduras, Ordenanzas de 12 de enero de 1989 y 13 de diciembre del mismo año en CIJ Recueil 1989, pp. 4 y 129 respectivamente.

¹⁹³ Vid. en la *delimitación de la frontera marítima en la zona del Golfo de Maine*, Ordenanzas de 5 de noviembre de 1982 en CIJ Recueil 1982, p. 559-561, de 27 de julio de 1983 en CIJ Recueil 1983, p. 5-7; en la *diferencia fronteriza* entre Burkina Faso y Mali, Ordenanza de 3 de octubre de 1985 en CIJ Recueil 1985, p. 189-190; en la *Electronica Sicula -ELSI-* S.p.A., Ordenanza de 17 de noviembre de 1987, en CIJ Recueil 1987, p.185-6; en la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre El Salvador y Honduras Ordenanzas de 29 de mayo de 1987, en CIJ Recueil 1987, p. 176-7, de 12 de enero de 1989 y 13 de diciembre del mismo año en CIJ Recueil 1989, pp. 4 y 129 respectivamente, y de 14 de octubre de 1990, en CIJ Recueil 1990, p. 146-7.

¹⁹⁴ C. ESCOBAR HERNANDEZ "Las Salas...op. cit., p. 309.

El hecho de que sea el Pleno quien fije el plazo para la presentación de las memorias responde a un criterio de economía temporal o de rapidez. De no ser así, habría que esperar a que la Sala en cuestión estuviera debidamente constituida para proceder. Además, hay plazos convenidos que comienzan a contar antes de la constitución de la Sala¹⁹⁵. La prórroga de los mismos ya compete a la Sala porque la solicitud de este trámite es un derecho de las partes que se ejerce ante la Sala ya constituida, que lejos de revocar un acto adoptado por el Pleno, lo que hace es alargar sus efectos.

Una vez concluida la fase escrita del procedimiento en el Pleno se pasa a la oral. La única forma en que las partes pueden prescindir de esta fase es acudiendo al art. 101 (*supra*). Sin embargo, las partes en una diferencia que se sustancia en Sala pueden convenir una renuncia a la fase oral¹⁹⁶, renuncia que será efectiva de mediar el consentimiento de la Sala ante la que se está desarrollando el procedimiento -art. 92.3 Regl.-¹⁹⁷. En definitiva, será la Sala quien decida la conveniencia o no de esta fase oral, aunque normalmente si las partes así lo solicitan prescindirá de ella, sobre todo teniendo en cuenta que, a pesar de la inexistencia de esta fase oral, el Reglamento reserva a la

¹⁹⁵ Vid. por ejemplo la Ordenanza de 2 de marzo de 1987, en CIJ Recueil 1987, p. 4, es la Ordenanza de constitución de la Sala la que fija los plazos de depósito de la memoria de Estados Unidos y la contramemoria de Italia.

¹⁹⁶ El único Compromiso en el que se hace referencia a la fase oral del procedimiento es el de El Salvador/Honduras, que señala en su art. 3.3 que el procedimiento oral y otras cuestiones procesales se ajustarán a lo dispuesto en el Estatuto y el Reglamento de la Corte. Evidentemente, esta previsión no era necesaria, ya que, aunque no existiera, siempre sería aplicable el Reglamento de la Corte.

¹⁹⁷ Hasta el momento, en ninguna de las Salas *ad hoc* se ha prescindido de la fase oral del procedimiento. Vid. en este sentido las referencias que encontramos a las audiencias orales en las Sentencias dictadas en cada caso. Así, en la *delimitación de la frontera marítima en el Golfo de Maine* entre Estados Unidos y Canadá, Sentencia de 12 de octubre de 1984, pp. 256, 260 y 261; la Sentencia de 22 de diciembre de 1986 en el asunto de la *diferencia fronteriza* entre Burkina Faso y la República de Mali, Vid. en CIJ Recueil 1986, p. 560; la Sentencia de 20 de julio de 1989 en el asunto de la *Elettronica Sicula -ELSI- S.p.A.*, Vid. en CIJ Recueil 1989, pp. 19 y 26 y también la Sentencia de 11 de septiembre de 1992 en el asunto de la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador, Vid. en CIJ Recueil 1992, pp. 360, 361 y 371-378.

Sala el derecho de solicitar a las partes «*informaciones o aclaraciones en forma oral*». La Sala no podrá, en todo caso, decidir *ex officio* la supresión de esta fase del procedimiento, aunque no sería antirreglamentario que fuera la Sala la que propusiera obviar el trámite a las partes.

Por otra parte, en el supuesto de que esta fase oral del procedimiento se desarrolle, las audiencias tanto ante el Pleno como ante las Salas, serán públicas en principio; pero las partes pueden solicitar que no se admita público en ellas y también la propia Corte (en Pleno o en Sala) podría decidir de oficio esta medida.

A modo de conclusión acerca del procedimiento ante las Salas de la Corte cabe indicar que el rasgo característico diferenciador frente al procedimiento ante el Pleno, en una consideración formal del Reglamento, es el interés por la rápida solución de las controversias sometidas a su conocimiento; sin embargo, hasta el momento, las partes interesadas en las controversias de las que han conocido las Salas *ad hoc* no han buscado el beneficio de las ventajas procesales -rapidez y economía- que el Reglamento les ofrecía.

Capítulo Cuarto: **Procedimientos incidentales.**

1. CONSIDERACIONES GENERALES.

Las Salas *ad hoc* de la Corte Internacional de Justicia poseen jurisdicción incidental. Prueba de ello es que tres de ellas han resuelto sendos incidentes procesales. Las Salas ante las que se interpusieron -demandas de medidas cautelares, una excepción preliminar y una solicitud de intervención- se manifestaron competentes para conocer de los mismos, sin que siquiera se cuestionara su competencia hasta la última ocasión, cuando se introdujo la demanda nicaragüense de intervención en el asunto de la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador¹.

La formación que conoció de la *diferencia fronteriza* entre Burkina Faso y la República de Malí, había sido muy precisa al afirmar que:

«*Considérant que, dans la présente espèce, la Chambre, constituée pour connaître du fond de l'affaire à la suite de la notification d'un compromis conclu par les deux Parties, et saisie en outre de leurs demandes parallèles en indication de mesures conservatoires, tient pour manifestement acquise sa compétence pour indiquer de telles mesures*»²

Asimismo, la Sala encargada de juzgar el asunto de la *Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-*, se había manifestado categórica acerca de la jurisdicción incidental de las formaciones reducidas de la Corte, al indicar que «... *the jurisdiction of the Chamber is not in doubt*»³, sin apuntar expresamente el fundamento de su aseveración.

¹ Vid. Ordenanza de 28 de febrero de 1990, en CIJ Recueil 1990, p. 2 y ss.

² Vid. en Ordenanza de 10 de enero de 1986, en CIJ Recueil 1986, p. 8.

³ Vid. en la Sentencia de 20 de julio de 1989, en CIJ Recueil 1989, p. 42.

Tuvimos, pues, que esperar hasta el último de los asuntos sometidos a una Sala para obtener un pronunciamiento general y motivado sobre la competencia incidental de las Salas, reconocida por el Pleno de la Corte en la Ordenanza de 28 de febrero de 1990. Entendiendo que la única competencia que posee el Pleno sobre las Salas se reduce a su constitución y, considerando que, puesto que «*Every intervention is incidental to the Proceedings in case*» «...it is for the tribunal seised of a principal issue to deal also with any issue subsidiary thereto»⁴, la Corte concluye que la Sala -debidamente constituida- es competente para juzgar todos los incidentes procesales que pudieran plantearse en el curso del procedimiento. El Pleno de la Corte invoca además para apoyar esta solución la práctica judicial en la materia, es decir, los asuntos de la *diferencia fronteriza* entre Burkina Faso y la República de Malí y la *Elettronica Sicala S.p.A. -ELSI-*.

De lo anterior se infiere que aunque las Salas no hayan tenido todavía la oportunidad de conocer de los restantes incidentes procesales que se encuentran bajo esta denominación en la Sección D del Título Tercero del Reglamento de 1978, a saber: la reconvención, la remisión especial al Tribunal y el desistimiento, también serán, por los mismos motivos, competentes para conocer de ellos⁵.

La jurisdicción incidental de las Salas no es, por otra parte, una jurisdicción incidental *especial*, puesto que no se encuentra regulada separadamente de la de la Corte. La CIJ posee jurisdicción incidental en

⁴ Ambas frases se encuentran en la Ordenanza de 28 de febrero de 1990, en CIJ Recueil 1990, p.4, siendo la primera de ellas una cita tomada de la Sentencia de la CIJ de 13 de junio de 1951, en el asunto *Haya de La Torre*, en CIJ Recueil 1951, p. 76. Vid. Capítulo Quinto.4.

⁵ Además de los señalados, conceptualmente cabe entender como incidentes procesales los recursos de que son susceptibles las Sentencias. Sin embargo, al encontrar su objeto en la Sentencia emitida y encontrarse fuera de la sección reglamentaria así denominada, se ha optado por estudiarlos separadamente de los incidentes procesales, junto con la Sentencia.

cualquiera de sus formaciones, de modo que en Pleno o en Sala por esa jurisdicción goza de idénticas características y límites. No existe una única fuente de la jurisdicción incidental de la Corte, sino que dependiendo del incidente concreto al que nos refiramos, ésta derivará del Estatuto -arts. 36.6, 41, 53, 62 y 63- o del Reglamento -art. 80, 87, 88 y 89-. Además, para ejercerse esta jurisdicción necesita un requisito añadido: la existencia de una relación entre el incidente introducido y un procedimiento en causa respecto del cual se plantea. Ahora bien, «*une fois le Cour régulièrement saisie, la Cour doit exercer ses pouvoirs tels qu'ils sont définis par le Statut (...) tant qu'il ne lui a pas été démontré, sur une autre base, qu'elle est incompétente ou que la demande est irrecevable*»⁶; sin que sea necesario, por tanto, el consentimiento puntual de las partes para el ejercicio por la Sala de esta jurisdicción incidental, siendo suficiente el consentimiento inicialmente prestado.

Tras afirmar la jurisdicción incidental de las Salas con carácter general, hemos de indicar que en este Capítulo centraremos nuestro análisis en los tres supuestos conocidos por la práctica de las Salas *ad hoc*: excepciones preliminares, medidas cautelares e intervención, supuestos que poseen una característica común: la de sustanciarse por un procedimiento distinto del principal⁷. De modo que, una vez instado el incidente, el procedimiento de

⁶ Son las palabras que la Corte empleó en el asunto *Nottebohm*. Vid. en CIJ Recueil 1953, p. 122.

⁷ A pesar de estar regulados en la misma sección del Reglamento, lo cierto es que la única característica común entre los incidentes contenidos en ella es su aparición en el curso de un procedimiento en causa, su carácter accesorio, lateral, en definitiva incidental a éste. En el caso del desistimiento, allanamiento y rebeldía no se abre procedimiento alguno. Por tanto incidente procesal y procedimiento incidental no son términos sinónimos puesto que los únicos incidentes procesales que dan lugar a un procedimiento incidental son las excepciones preliminares, las medidas cautelares y la intervención. Sin embargo, ésta no es la única diferencia apreciable entre ellos. Así, unos deben respetar ciertos límites temporales. El Reglamento fija los plazos dentro de los cuales puede solicitarse la intervención, interponer excepciones preliminares o demandar la indicación de medidas cautelares. En cambio, el desistimiento, el allanamiento y la rebeldía no están sujetos por su misma índole a restricción alguna en este sentido. Incluso el desistimiento y el allanamiento puede sobrevenir mientras la Corte está reunida para deliberar.

fondo se suspende para ceder ante éste. Por otro lado, a pesar de que hasta ahora se haya planteado a cada una de las Salas un único incidente, no hay que descartar en las Salas *ad hoc* un *incidentalismo múltiple* tal y como ha quedado reflejado en la práctica del Pleno de la Corte⁸.

Si es posible la presencia de varios incidentes en un procedimiento en causa ante una Sala, la Sala deberá afrontar, además, el problema del orden de su evacuación, en el caso de coincidir o solaparse su planteamiento. Esta cuestión que es de interés cuando se trate de incidentes sustanciados en un procedimiento especial, la ha resuelto parcialmente la práctica judicial de la CIJ. De conformidad con ella procederá en primer lugar al estudio de la solicitud de medidas cautelares -art. 41 Est.-, aún en el supuesto de que se hayan interpuesto excepciones preliminares y se haya dudado de la competencia de

También observamos diferencias concernientes al acto por el que se presuelven los incidentes. Mientras en las excepciones preliminares y la intervención la decisión es definitiva y se contiene en una Sentencia, para el resto de los incidentes procesales se dictan ordenanzas, por cuanto su contenido no es definitivo. Las medidas cautelares que un Estado puede ver denegadas, también pueden ser solicitadas reiteradamente, mientras se encuentre dentro del plazo previsto para ello. La rebeldía ni tan siquiera requiere acto alguno.

Además, dentro de las Ordenanzas unas son de carácter declarativo -allanamiento y desistimiento- mientras otras, las que interesan a las medidas cautelares son constitutivas. Por tanto, los efectos del procedimiento que nos ocupa son necesariamente diferentes porque unos ponen siempre fin al procedimiento -desistimiento y allanamiento-, otros pueden hacerlo -caso de aceptarse alguna excepción preliminar- y los restantes no afectan el desarrollo del procedimiento principal, cualquiera que sea el sentido de la decisión adoptada por la Corte.

⁸ Un ejemplo paradigmático en este sentido es el *asunto de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua*, en el que se planteó la práctica totalidad de los incidentes que recogen Estatuto y Reglamento. Nicaragua solicitó que la Corte dictara medidas cautelares el mismo día que depositó la demanda: el 9 de abril de 1984 -la Corte dictó estas medidas cautelares mediante una Ordenanza de 10 de mayo de 1984, *Vid.* en CIJ Recueil 1984, pp. 186 y ss-. El Salvador introdujo una declaración de intervención del art. 63 del Estatuto, que le fue denegada -*Vid.* Ordenanza de 4 de octubre de 1984, en CIJ Recueil 1984, p. 216-, Estados Unidos presentó una batería de excepciones preliminares, todas las cuales fueron denegadas -*Vid.* Sentencia de 26 de noviembre de 1984, en CIJ Recueil 1984, pp. 392-442-. A esta Sentencia de la Corte Estados Unidos respondió no compareciendo en el procedimiento desarrollado sobre el fondo de la demanda nicaragüense, incurriendo por tanto en rebeldía. Por último, Nicaragua desistió de la tercera fase del procedimiento en la que debía fijarse el monto de la indemnización debida por los Estados Unidos como reparación por la responsabilidad en que había incurrido, declarada por la Corte. La Corte en este caso, mediante una Ordenanza de carácter declarativo toma nota del desistimiento nicaragüense procediendo a borrar el asunto de la lista -*Vid.* Ordenanza de 26 de septiembre de 1991, en CIJ Recueil 1991, pp. 47-49-.

esta formación para conocer del fondo del asunto. Después continuará el estudio de las excepciones preliminares. Si en el curso del procedimiento acerca de la competencia de la Corte y la admisibilidad de la demanda se depositare una solicitud de intervención, su consideración interrumpirá o no la etapa preliminar, en función de la fase en la que pretenda intervenir el tercero. Si el Estado solicita intervenir en la fase en curso, habrá de considerarse la petición antes, evidentemente de que dicha fase concluya. Por el contrario, si la demanda de intervención no tiene relación con las cuestiones competenciales, sino con el fondo del asunto, su estudio podrá posponerse hasta que se haya terminado la fase preliminar en curso.

Aquellos incidentes cuya notificación no implica la apertura de un procedimiento preliminar resultan de difícil ubicación desde una perspectiva temporal. Así ocurre con el desistimiento y la rebeldía que pueden producirse en cualquier momento procesal. En el supuesto de la rebeldía⁹, la Sala deberá asegurarse únicamente de su competencia, de modo que, si existen dudas,

⁹ Es un supuesto previsto en el art. 53 del Estatuto. El ejemplo más conocido es el de Estados Unidos en el asunto de *las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (fondo)*, pero han existido otros casos semejantes, como el de Albania en el asunto del *Canal de Corfú*, Gran Bretaña contra Albania, en la fijación del monto de las reparaciones que adeudaba la República Popular de Albania a Gran Bretaña (Sentencia de 15 de diciembre de 1949, *Vid.* en CIJ Recueil 1949, p. 244). Irán en el asunto de la *Anglo-iranian oil Company*, Gran Bretaña c. Irán, en la solicitud de medidas provisionales (Ordenanza de 5 de julio de 1951; *Vid.* en CIJ Recueil 1951, p. 89 y ss) y excepciones preliminares (Sentencia de 22 de julio de 1952; *Vid.* en CIJ Recueil 1952, p. 93). Guatemala en el asunto *Nottebohm*, Liechtenstein c. Guatemala, en las excepciones preliminares (Sentencia de 18 de noviembre de 1953; *Vid.* en CIJ Recueil 1965, p. 111). Islandia en el asunto de la *Competencia en materia de pesquerías*, el Reino Unido contra Islandia y la R.F.A. contra Islandia, tanto en la competencia (dos Sentencias de 2 de febrero de 1973. *Vid.* en CIJ, Recueil 1973, p. 4 y ss. y 49 y ss. respectivamente) como sobre el fondo (dos Sentencias de 25 de julio de 1974. *Vid.* en CIJ Recueil 1974, pp. 3 y ss. y 175 y ss. respectivamente). India en el asunto de los *Prisioneros de guerra paquistaníes* Paquistán c. India en las medidas provisionales (Ordenanza de 13 de julio de 1973. *Vid.* en CIJ Recueil 1973, p. 328). Francia en el asunto de los *Ensayos nucleares* Australia c. Francia y Nueva Zelanda c. Francia (dos Sentencias de 20 de diciembre de 1974. *Vid.* en CIJ Recueil 1974, pp. 253 y 457 respectivamente). Turquía en el asunto de la *Plataforma Continental del Mar Egeo*, Grecia c. Turquía, en la solicitud de medidas provisionales (Ordenanza de 11 de septiembre de 1976, *Vid.* en CIJ Recueil 1976, p. 172 y Sentencia de 19 de diciembre de 1978, en CIJ Recueil 1978, p. 3 y ss). Irán en el asunto del *Personal diplomático y consular de Estados Unidos en Irán*, Estados Unidos c. Irán (Sentencia de 24 de mayo de 1980. *Vid.* Sentencia en CIJ Recueil 1980, p. 3 y ss.).

deberá fijar este aspecto de manera prioritaria¹⁰. En cuanto al desistimiento o allanamiento, ha de ser necesariamente previo al resto, puesto que se trata de retirar la demanda introducida -en el caso del desistimiento- o avenirse a las pretensiones del demandante -en el allanamiento-; en ambos casos, el efecto es la retirada del asunto del conocimiento de la Sala, que sólo tomará nota del incidente ocurrido y procederá a borrar aquél de la lista de los asuntos

¹⁰ Cuando la Corte se encuentra con un asunto en el que tan sólo comparece una de las partes, debe desarrollar algunas tareas que en un procedimiento con presencia de ambas no suele realizar. Así habrá de comprobar su competencia para conocer de aquél, verificar los hechos alegados por la parte que ha comparecido así como el fundamento jurídico de sus conclusiones. En este sentido se ha pronunciado en su jurisprudencia: asunto de la *competencia en materia de pesquerías* (UK c. Islandia y RFA c. Islandia) Sentencias ambas de 2 de febrero de 1973, en CIJ Recueil 1973, pp. 7 y 54 respectivamente; asunto de los *Ensayos nucleares* (Australia y Nueva Zelanda c. Francia) Sentencia de 20 de diciembre de 1974, CIJ Recueil 1974, pp. 257 y 461 respectivamente; *Plataforma continental del Mar Egeo* (Grecia c. Turquía) Sentencia de 19 de diciembre de 1978, Recueil 1978, p.7-8; asunto relativo al *personal diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán*, Sentencia de 24 de mayo de 1980, en CIJ Recueil 1980, pp. 9-10; asunto de las *actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* (Nicaragua c. Estados Unidos), Sentencia de 27 de junio de 1986, en CIJ Recueil 1986, pp. 23-24.

Además de comprobar su competencia hemos indicado que la Corte debe verificar que los hechos alegados por la parte que ha comparecido son reales, puesto que no existe defensa de la contraparte que pueda rechazar la veracidad de los mismos. Así lo ha señalado el Tribunal en diversos asuntos: en el del *Estrecho de Corfú* Sentencia de 15 de diciembre de 1949, en CIJ Recueil 1949, pp. 246-248; *competencia en materia de pesquerías* (UK c. Islandia y RFA c. Islandia) , Sentencia de 25 de julio de 1974 en CIJ Recueil 1974, pp. 9 y 181 respectivamente; asunto del *personal diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán*, Sentencia de 24 de mayo de 1980, en CIJ Recueil 1980, pp. 9-10; asunto de las *actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* (Nicaragua c. Estados Unidos), Sentencia de 27 de junio de 1986, en CIJ Recueil 1986, pp. 25-26.

En último término debe examinar el fundamento jurídico de las alegaciones del Estado que comparece ante él, así lo ha indicado en el asunto de la *Competencia en materia de pesquerías* (UK y RFA c. Islandia), Sentencia de 25 de julio de 1974, en CIJ Recueil 1974, pp. 9-10 y 181 respectivamente; asunto de las *actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* (Nicaragua c. Estados Unidos), Sentencia de 27 de junio de 1986, p. 33.

El rebelde, a pesar de su ausencia, es parte en el litigio. Así lo dijo la CIJ en el asunto del *estrecho de Corfú* Sentencia de 15 de diciembre de 1949, en CIJ Recueil 1949, p. 248, también en las *actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* (Nicaragua c. USA), Sentencia de 27 de junio de 1986, p. 24 «*El Estado que decide no comparecer debe aceptar las consecuencias de su decisión, siendo la primera de ellas la continuación del procedimiento*». Le resulta aplicable la Sentencia en cuanto es parte en el litigio. El art. 59 también se refiere a él. Por tanto, la Sentencia, poseerá idéntico valor a la dictada en un procedimiento contradictorio, lógicamente, puesto que el Estatuto no puede bajo ningún concepto beneficiar a aquél que se niega a comparecer y defender sus intereses ante él.

pendientes. La decisión que adopte la Sala tendrá efectos puramente declarativos y no definitivos¹¹.

Por último, a pesar de que el objeto de esta investigación son las Salas *ad hoc*, en este capítulo se examinan distintos procedimientos incidentales -excepciones preliminares, medidas cautelares e intervención- que, con carácter general, se regulan en el Estatuto y en el Reglamento de la CIJ. Hemos de empezar analizando estos incidentes del modo indicado debido a que el art. 90 del último texto citado nos remite en lo que a aspectos procedimentales se refiere al procedimiento contencioso ante el Pleno. Posteriormente se valorará la aplicabilidad de esta regulación a las Salas *ad hoc*, sus ventajas -de haber alguna- e inconvenientes.

2. EXCEPCIONES PRELIMINARES.

2.1. La Corte en general.

Un Estado puede haber reconocido la obligatoriedad de la jurisdicción de la Corte pero esto no basta. La Corte debe ser competente para juzgar una *determinada diferencia*. Y habrá de serlo *ratione materiae*, *ratione personae* y *ratione temporis*, no sólo respecto del objeto, los sujetos y el tiempo

¹¹ Ello quiere decir que el desistimiento o allanamiento no tienen efectos de *res iudicata*, de manera que la parte que se allana o ambas podrán introducir nuevamente el asunto a conocimiento de la misma formación ante la que se allanó o se introdujo el desistimiento -véase como ejemplo el asunto de la *Barcelona Traction Light & Power*, en la Ordenanza de 7 de agosto de 1962, en CIJ *Recueil* 1962, p. 310, el desistimiento belga no impidió la introducción de una nueva demanda material y subjetivamente semejante a la anterior.

en que se produjo la controversia, sino también cuando se someten los hechos a su conocimiento¹².

Por otra parte, como sabemos, la competencia de la Corte puede reconocerse *ante, ad o post hoc*. Las formas de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte que plantean más problemas son las *ante hoc*, dado que uno de los Estados partes en la controversia -normalmente el demandado¹³- puede sentirse tentado a cuestionar el alcance del vínculo jurisdiccional, es decir, puede contestar la competencia de la Corte por entender que la controversia escapa a la obligación adquirida. Otro tanto ocurrirá, por supuesto, si no hay base de jurisdicción alguna¹⁴. El vehículo utilizado para cuestionar el alcance -o la simple existencia- de esta aceptación son las excepciones preliminares¹⁵, que la Corte resolverá en aplicación del art. 36.6 del Estatuto, en el que se contiene *la competencia de la competencia*¹⁶.

¹² De modo que la Corte habrá de tener competencia subjetiva respecto de un determinado género de sujetos -según el art. 34.1 del Estatuto los Estados- y también concretamente de los sujetos partes en el asunto; competencia material, sobre una determinada categoría de controversias y del preciso objeto de la controversia en cuestión; y, en último término, competencia temporal, sobre las diferencias producidas durante un determinado periodo o cuyo fundamento se encuentra en ese tiempo y además en el momento en que se somete a su conocimiento la misma.

¹³ Nada impide desde luego que la excepción preliminar sea interpuesta por el demandante. Así lo acoge el Reglamento y así ocurrió en el asunto del *oro amonedado procedente de Roma*. Sentencia de 15 de junio de 1954, *Vid.* en CIJ Recueil 1954, pp. 28-30.

¹⁴ Sabemos que si en lugar de actuar de este modo, el Estado interesado -normalmente el demandado-, responde sobre el fondo nos encontraremos en último término, aunque faltara cualquier otra base de jurisdicción, ante la competencia de la Corte por consentimiento tácito del demandado: la institución del *forum prorogatum*. *Vid.* Sentencia de 26 de abril de 1928 en el asunto relativo a *algunos derechos de las minorías en la Alta Silesia*, en CPJI Série A/B, n°29. M. MABROUK *Les exceptions de procédure...* op. cit., p. 312, indica que la Corte deberá declarar inadmisibles las excepciones que contesten su competencia, interpuestas después de haberse producido una aceptación tácita de la misma para conocer del fondo del asunto en causa.

¹⁵ Existen múltiples estudios sobre esta cuestión, entre ellos G. ABI-SAAB *Les exceptions Préliminaires dans la procédure de la Cour Internationale*, Paris, 1967, p. 27; R. CASADO RAIGÓN *La jurisdicción contenciosa de la Corte Internacional de Justicia: estudio de las reglas de su competencia*, Córdoba 1987; B.S. CHIMNI "The International Court and the Maintenance of Peace and Security: The Nicaragua Case Decision and the United States Respons", en ICLQ 1986, vol. 35, pp. 960-970; L. CONDORELLI "Des lendemains qui chantent pour la justice internationale? Le Droit International au service de la paix, de la justice et au

Estamos, sin duda, ante el incidente procesal más utilizado de los que contempla el Reglamento. Tanto en tiempos de la CPJI¹⁷, como de la actual

developpement: Mélanges Michel Virally, 1991, pp. 205-214; D.W. GREIG "Nicaragua and the United States: Confrontation over the jurisdiction of the International Court", en BYIL, 1991, vol. 62, pp. 119-281; M. MABROUK Les exceptions de procédure devant les juridictions internationales, Paris, 1966, p. 13; R. PINTO "L'Organisation judiciaire internationale: La Cour Internationale de Justice" en Jurisclasseur de Droit International, fasc. 217, p.8; R. OSTRIHANSKY "Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice in the Dispute Between Nicaragua and United States" Hague Yearbook of International Law, vol. 1, 1988, pp. 3-58; F. PRZETACZNIK "The Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice as a prerequisite for peace?" en Revue de Droit International, des sciences diplomatiques et politiques, vol. 68 (1990), pp. 39-74; J.J. QUINTANA "The Hague Declaration and the Acceptance of the Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice: a missed opportunity?", en The United Nations Decade of International Law (M. Brus ed.) pp. 43-49, también en Leyden Journal of International Law, 1990, aff.3, pp. 43-49; M.A. ROGOFF "International Politics and the Rule of Law: The United States and the International Court of Justice" en Boston University of International Law Journal, vol. 7 (1989), aff.2 pp. 267-299; G.L. SCOTT & K.D. CSAJKO "Compulsory Jurisdiction and defiance in the World Court: a Comparison of the Permanent Court of International Justice and the International Court of Justice", en Denver Journal of International Law and Policy, vol. 16 (1988), aff.2-3, p. 377-392; L.B. SOHN "Suggestions for the Limited Acceptance of Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice by the United States", en Georgia Journal of International and Comparative Law, vol. 18 (1988), pp. 1-18; G. SPERDUTTI "La recevabilité des exceptions préliminaires de fond dans le procès international", RDI, 1970, pp. 465-467; G. SPERDUTTI "Le eccezioni tratte dalla nozione di dominio riservato quali eccezioni preliminari di merito" en RDI, 1974, p.649; L.v.B. SUTTON "Political Asylum and Other Concerns: some Reflections on the World, Yesterday and Today", en Denver Journal of International Law and Policy, vol. 19 (1990-91), aff. 3, pp. 475-490; S. TORRES BERNARDEZ "Reciprocity... op. cit, pp. 291-329; CH. DE VISSCHER Aspects récents du Droit Procédural de la Cour Internationale de Justice, Paris, 1966, p. 100.

¹⁶Vid. la Sentencia en el caso *Nottebohm*, en CIJ Recueil 1953, p. 119, en la que la Corte señalaba que todo Tribunal es Juez de su propia competencia. No existe acuerdo doctrinal acerca de la posible apertura *ex officio* de un procedimiento preliminar, dado que no ha recibido una respuesta unánime. G. ABI-SAAB en Les exceptions préliminaires...op. cit., pp. 206-213, hace depender la existencia o no de este poder de la Corte de la categoría a la que pertenezca la cuestión preliminar en causa. Existe acuerdo doctrinal acerca de esta posibilidad en dos supuestos: 1) en la hipótesis prevista en el art. 53 del Estatuto -rebeldía del demandado- y 2) cuando la propia Corte duda de su competencia -manifiestamente infundada- o de la admisibilidad de la demanda introducida a su conocimiento en determinadas situaciones -por ejemplo, cuando no es de un sujeto legitimado para ello-. Por su parte, G. FITZMAURICE "The Law and Procedure of the International Court of Justice 1951-1954", en BYIL, 1958, p. 26 indica que el poder del art. 36.6 usualmente se ejerce a instancia de una de las partes en la controversia; a pesar de ello «It may however also be exercised by the Tribunal acting *proprio motu*». R.P. ANAND International Court and Contemporary Conflicts, Londres 1974, p. 206, indica que la Corte puede examinar su competencia *ex officio*, aunque las partes no la contesten e indica la obligación de proceder de este modo cuando se interpongan excepciones preliminares y en el supuesto del art. 53 del Estatuto; R. CASADO RAIGON La jurisdicción...op. cit., p. 8; P. LAMBERTI ZANARDI "Forme nuove di contestazione della competenza della Corte Internazionale di Giustizia e potere della Corte di appire d'ufficio un procedimento sulla competenza" en Comunicazioni e Studi, vol. XIV, 1975, pp. 444-445; R.C. LAWSON "The Problem of the Compulsory Jurisdiction of the World Court", en AJIL, 1952, vol. 46 n°2, p. 234; S. ROSENNE "The reconceptualization...op. cit., pp. 750-760.

CIJ¹⁸, ha recibido un elevado número de demandas en este sentido si las comparamos con el resto de los procedimientos incidentales.

¹⁷ Se interpusieron en un total de 13 ocasiones: *Concesiones Mavrommatis en Palestina* (Sentencia de 30 de agosto de 1924 -Vid. en CPJI Série A, nº2-); *Ciertos intereses alemanes en la Alta Silesia polaca* (Sentencia de 25 de agosto de 1925 -Vid. en CPJI, Série A, nº6-); *Fábrica de Chorzow* (Sentencia de 26 de julio de 1927 -CPJI Série A, nº 9-); *Concesiones Mavrommatis en Jerusalén* (Sentencia de 10 de octubre de 1927 -CPJI Série A, nº11-); *Interpretación del estatuto del territorio de Memel* (Sentencia de 24 de junio de 1932 -CPJI Série A/B, nº47-); *Administración del Príncipe Von Pless* (Ordenanza de 4 de febrero de 1933 -CPJI Série A/B, nº52-); *Recursos contra algunas Sentencias del Tribunal Arbitral Mixto hungaro-checoslovaco* (Ordenanza de 12 de mayo de 1933 -CPJI Série A/B, nº56-); *Asunto Pajzs, Csáky, Estherházy* (Ordenanza de 23 de mayo de 1936 -CPJI Série A/B, nº66-); *Losinger y Cia* (Ordenanza de 27 de junio de 1936 -CPJI Série A/B, nº67-); *Borchgrave* (Sentencia de 6 de noviembre de 1937 -CPJI Série A/B, nº72-); *Asunto de los fosfatos de Marruecos* (Sentencia de 14 de junio de 1938 -CPJI Série A/B, nº74-); *Ferrocarril Panevezys-saldutiskis* (Ordenanza de 23 de febrero de 1939 -CPJI Série A/B, nº75-); *Compañía de electricidad de Sofía y de Bulgaria* (Sentencia de 4 de abril de 1939, CPJI Série A/B, nº77-).

¹⁸ La Corte se ha pronunciado respecto de excepciones preliminares en los asuntos siguientes: *Estrecho de Corfú* -Reino Unido c. Albania- (Sentencia de 25 de marzo de 1948 -CIJ Recueil 1947-1948, p. 15 y ss.-); *Ambatielos* -Reino Unido c. Grecia- (Sentencia de 1 de julio de 1952 -CIJ Recueil 1952, p. 28 y ss.-); *Anglo-iranian Oil Company* -Reino Unido c. Irán- (Sentencia de 22 de julio de 1952 - CIJ Recueil 1952, p. 93 y ss.-); *Nottebohm* -Liechtenstein c. Guatemala- (Sentencia de 18 de noviembre de 1953 -CIJ Recueil 1953, p. 111 y ss.-); *Oro amonedado procedente de Roma en 1943* -Italia c. Francia, Reino Unido y Estados Unidos- (Sentencia de 15 de junio de 1954 -CIJ Recueil 1954, p. 16 y ss.-); *Ciertos empréstitos noruegos* -Francia c. Noruega- (Sentencia de 6 de julio de 1957 -CIJ Recueil 1957, p. 9 y ss.-); *Derecho de paso sobre territorio indio* -Portugal c. India- (Sentencia de 26 de noviembre de 1957 -CIJ Recueil 1957, p. 125 y ss.-); *Interhandel* -Suiza c. Estados Unidos- (Sentencia de 21 de marzo de 1959 -CIJ Recueil 1959, p.6 y ss.-); *Incidente aéreo de 27 de julio de 1955* -Israel c. Bulgaria- (Sentencia de 26 de mayo de 1959 - CIJ Recueil 1959, p. 127 y ss.-); *Templo Preah Vihear* -Camboya c. Tailandia- (Sentencia de 26 de mayo de 1961 -CIJ Recueil 1961, p. 17 y ss.-); *Sudoeste africano* -Etiopía c. Sudáfrica y Liberia c. Sudafrica- (Sentencia de 21 de diciembre de 1962, -CIJ Recueil 1962 pp. 319 y ss.-); *Camerún septentrional* -Camerún c. Reino Unido- (Sentencia de 2 de diciembre de 1963, -CIJ Recueil 1963, pp. 15 y ss.-); *Barcelona Traction, Light and Power Ltd.* -Bélgica c. España, nueva demanda de 1962- (Sentencia de 24 de julio de 1964, -CIJ Recueil 1964, pp. 16 y ss.-); *Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-* -Estados Unidos c. Italia- (Sentencia de 20 de julio de 1989 -CIJ Recueil 1989, p. 15 y ss.-) y *Ciertas tierras fosfatadas en Nauru* -Nauru c. Australia- (Sentencia de 26 de junio de 1992 -CIJ Recueil 1992, p. 240 y ss.-) La Corte no se ha pronunciado todavía sobre las excepciones preliminares interpuestas en el asunto del *Incidente aéreo de 3 de julio de 1988* -República Islámica de Irán c. Estados Unidos- y las *Plataformas petroleras* -República islámica de Irán c. Estados Unidos-. No ha debido pronunciarse en otras ocasiones, ya sea por retirada de la excepción, como en el caso de los *Derechos de los nacionales de Estados Unidos en Marruecos* -Francia c. Estados Unidos- (Ordenanza de 31 de octubre de 1951 -CIJ Recueil 1951, pp. 109 y ss.-), o por desistimiento como en el *incidente aéreo de 27 de julio de 1955* -Estados Unidos c. Bulgaria (Ordenanza de 30 de mayo de 1960 -CIJ Recueil 1960, pp. 146 y ss.-); *Barcelona Traction Light and Power Ltd.* -Bélgica c. España, primera demanda- (Ordenanza de 10 de abril de 1961 -CIJ Recueil 1961, pp. 9 y ss.-); *Compañía del puerto, muelles y depósitos de Beirut y la Sociedad de Radio Oriente* -Francia c. Líbano- (Ordenanza de 31 de agosto de 1960 -CIJ Recueil 1960, pp. 186 y ss.-). También ha tratado cuestiones de competencia en los asuntos siguientes: *Competencia del Consejo de la OACI* -India c. Paquistán- (Sentencia de 18 de agosto de 1972, -CIJ Recueil 1972, pp. 46 y ss.-); *Competencia en materia de pesquerías* (Sentencia de 2 de febrero de 1973, Vid. en CIJ Recueil 1973, pp. 3 -Reino Unido c. Islandia- y ss y 49 y ss.-RFA c.

La función de las excepciones preliminares no sólo es impedir la posibilidad de que conozca del fondo de un asunto y dicte sentencia un órgano que carece de competencia de un órgano que, siendo competente, se abstenga de conocer del fondo de un asunto, invocando para ello una causa de inadmisibilidad. Nos encontramos, pues, formalmente con dos tipos de excepciones preliminares: las de incompetencia y las de inadmisibilidad, aunque materialmente la competencia y la admisibilidad van tan unidas que su distinción conceptual no es uniforme, sino mutable en función de las circunstancias¹⁹, y no es verosímil -al menos de la práctica de la Corte no se desprende- la apertura de dos fases preliminares sucesivas, de incompetencia y de inadmisibilidad o viceversa.

En cuanto a las excepciones de incompetencia, las declaraciones formuladas ex art. 36.2 del Estatuto son las que mayor número de problemas plantean, debidos sobre todo a la interpretación y alcance de las reservas o condiciones introducidas en ellas. También las cláusulas compromisorias obligan ocasionalmente a la Corte a hacer ejercicios interpretativos. Incluso los *compromisos* permiten hipotetizar con posibles excepciones de

Islandia-); *Ensayos nucleares* -Australia c. Francia y Nueva Zelanda c. Francia- (Sentencia de 20 de diciembre de 1974 -CIJ Recueil 1974, pp. 253 y ss.-); *Plataforma continental del Mar Egeo* -Grecia c. Turquía- (Sentencia de 19 de diciembre de 1978 -CIJ Recueil 1978, pp. 3 y ss.-); *Personal Diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán* -Estados Unidos c. Irán- (Sentencia de 24 de mayo de 1980 -CIJ Recueil 1980, pp. 3 y ss.-); *Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* -Nicaragua c. Estados Unidos- (Sentencia de 26 de noviembre de 1984 -CIJ Recueil 1984, p. 392 y ss.-); *Acciones armadas fronterizas y transfronterizas* -Nicaragua c. Honduras- (Sentencia de 20 de diciembre de 1988 -CIJ Recueil 1988, p. 70 y ss.-); *jurisdicción y admisibilidad en la delimitación marítima y cuestiones territoriales entre Qatar y Bahrain* -Qatar c. Bahrain- (Sentencia de 15 de febrero de 1995 -CIJ Recueil 1995, pp. - ; *asunto de Timor Oriental* -Portugal c. Australia- (Sentencia de 30 de junio de 1995)

¹⁹Vid. en este sentido la Opinión disidente de BARWICK en *los ensayos nucleares*, CIJ Recueil 1974 p. 396 y pp. 422-423; Opinión individual de G. FITZMAURICE, en el *asunto del Camerún Septentrional*, CIJ Recueil 1963, pp. 102-103; Declaración de E. JIMENEZ DE ARECHAGA en *los ensayos nucleares (medidas provisionales)*, en CIJ Recueil 1973, pp. 107-108 y 144; Opinión individual de PETREN en *los ensayos nucleares (medidas cautelares)*, CIJ Recueil 1973, p. 126 y en la Sentencia en el mismo asunto, en CIJ Recueil 1974, pp. 301-302.

incompetencia²⁰. Aunque la práctica de la Corte en este punto es singular, no es inexistente. El asunto BORCHGRAVE, introducido a conocimiento de la Corte de La Haya mediante compromiso, fue objeto, en efecto, de excepciones preliminares, tanto de incompetencia como de inadmisibilidad²¹.

Ya sabemos que una vez se ha interpuesto una excepción preliminar se suspende el procedimiento de fondo y se abre una fase previa cuyo objeto es precisamente el estudio de las excepciones introducidas. La cuestión que resta por plantear es ¿cual será la actuación de la Corte -en cualquiera de sus formaciones- si se interponen conjuntamente excepciones de incompetencia y de inadmisibilidad? En el asunto del *Sudoeste africano*²² la Corte estimó que poseían prioridad las de competencia sobre las de admisibilidad; sin embargo, en un asunto anterior, *Interhandel*, la Corte decidió estudiar primero una excepción sobre la admisibilidad de la demanda y posteriormente otra acerca de la competencia de la Corte²³. Después de las excepciones de incompetencia procede el examen de las que la CIJ, en el asunto del *Camerún Septentrional*²⁴, denominó limitaciones inherentes al ejercicio de toda jurisdicción contenciosa, acerca de las que la Corte puede y debe pronunciarse de oficio²⁵.

²⁰ Quizá el instrumento utilizado -compromiso- incline en principio a pensar lo contrario, pero podemos alcanzar algún supuesto en el que es razonable esta posibilidad, así cuando se condiciona la ejecución del compromiso. Si se pretende ejecutar el mismo notificándolo a la Corte antes del cumplimiento de esta condición o incluso el incumplimiento de la misma, estas actuaciones contrarias a lo convenido por las partes justificaría una excepción de este tipo.

²¹ *Vid.* Sentencia de 8 de octubre de 1937 en CPJI Séries A/B, n°72 y comentario *infra* en epígrafe 2.2.1. de este mismo capítulo.

²² *Vid.* Sentencia de 18 de julio de 1966, en CIJ Recueil 1966, pp. 42-43.

²³ *Vid.* Sentencia de 21 de marzo de 1959, en CIJ Recueil 1959, pp. 23-24.

²⁴ *Vid.* la Sentencia de 2 de diciembre de 1963, en CIJ Recueil 1963, p. 37. Indica la Corte «If the Court is satisfied, whatever the nature of the relief claimed, that to adjudicate on the merits of an Application would be inconsistent with its judicial function, it should refuse to do so»

²⁵ Ch. DE VISSCHER *Aspects récents...* op. cit., p. 106.

El procedimiento sobre las excepciones preliminares se sustancia en una fase escrita y otra oral y termina, como ocurre generalmente con los procedimientos de fondo, con una Sentencia²⁶. Estamos ante un pronunciamiento definitivo, con las consecuencias propias de estos actos aunque no ponga fin al caso. El único límite que encuentra este pronunciamiento de la Corte -en Pleno o en Sala- es de carácter material: no puede prejuzgar el fondo del procedimiento en causa²⁷. Si se desestima/n la/s excepción/es preliminar/es- se retoma el procedimiento sobre el fondo en el mismo momento en que se suspendió para proceder al estudio del incidente interpuesto.

Sin embargo, puede que la Corte -en Pleno o en Sala-, ni acoja ni desestime la excepción introducida, sino que decida unir su estudio al fondo del asunto -como se prevé en el art. 79.7 del Reglamento²⁸-. Actuará así por

²⁶ Art. 79.7 del Reglamento. La Corte, siempre que sea cuestionada su competencia, debe resolver la duda, *Vid.* asuntos de las zonas francas, CPJI, Serie A/B, nº46, p. 16 y *Camerún Septentrional*, CIJ Recueil 1963, pp. 15-30.

²⁷ En la Sentencia de 18 de julio de 1966 sobre el *Sudoeste africano*, *Vid.* en CIJ Recueil 1966, p. 38, la Corte señaló que sus pronunciamientos sobre las excepciones preliminares son «decisiones interlocutorias» y lo hace únicamente para subrayar que las mismas no podrán prejuzgar el fondo del asunto. Por lo tanto, no utiliza esta categoría jurídica con propiedad, ya que ello implicaría despojarlas del efecto de cosa juzgada con carácter general.

²⁸ El art. 62.5 del Reglamento de 1946 indicaba «*La Cour, après avoir entendu les parties, statue sur l'exception ou la joint au fond*»; el art. 67.7 del Reglamento modificado en 1972 y el art.79.7 del texto de 1978 prevé «*El Tribunal, después de oír a las partes, resolverá mediante Sentencia si admite la excepción, si la desestima o si declara que en las circunstancias del caso no tiene un carácter exclusivamente previo*». Aparentemente la nueva redacción reglamentaria no introduce novedades en el precepto anterior. Según la Opinión individual de S. PETREN en el asunto de los *Ensayos nucleares*, ver en CIJ Recueil 1974, pp. 304-305 y 489 «*...comme la précédente, la nouvelle disposition confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire d'apprécier au stade initial d'une affaire si telle ou telle question préliminaire doit être réglée avant tout. En exerçant ce pouvoir discrétionnaire, la Cour doit, à mon avis, apprécier le degré de complexité de la question préliminaire par rapport à l'ensemble des questions faisant partie du fond. Si la question préliminaire revêt un caractère relativement simple, tandis qu'un examen au fond donnerait lieu à une procédure longue et compliquée. La Cour se doit de trancher tout de suite la question préliminaire. Voilà ce qu'exige l'esprit dans lequel le nouvel article 79.7 du Règlement a été rédigé*». M. SHAHABUDEEN, en su Opinión individual en el asunto de ciertas tierras fosfatadas en *Nauru* (*Nauru c. Australia*) Sentencia de 26 de junio de 1992 en CIJ Recueil 1992, p. 272, se expresa al respecto en los siguientes términos: «*Ce qui n'est guère discutable toutefois, c'est que le nouveau Règlement devait souligner la nécessité de régler une exception préliminaire au stade préliminaire chaque fois que cela était raisonnablement possible, le but bien connu étant d'éviter que se répètent le type de situation qui s'est présenté à la fin dans l'affaire de la Barcelona Traction*

distintos motivos, en primer lugar, cuando entienda que la excepción carece de carácter realmente preliminar y el conocimiento del fondo sea absolutamente necesario para pronunciarse sobre la excepción²⁹. La Corte deberá -se trata de un mandato reglamentario- decidir esta unión si las partes así lo acordaron, como ocurrió en el asunto de la *Elettronica Sicala S.p.A. (ELSI)* ³⁰. Antes de 1972 se requería la instancia de parte, pero a partir de esta fecha puede la Corte apreciar la presencia de estos requisitos *ex officio*³¹. En caso de duda la excepción se unirá al fondo³².

et les critiques qui en résultent. Une urgence nouvelle a été conférée à l'application des critères anciens, notamment en ce qui concerne la conception antérieure de la Cour selon laquelle la jonction ne devait pas être ordonnée, sauf "pour des motifs sérieux". Le fond peut être examiné, dans la mesure limitée où cela est nécessaire pour permettre à la Cour de se prononcer sur l'exception, à condition, toujours, que le problème soulevé ne soit pas lié au fond de manière si inextricable qu'il soit impossible de se prononcer sans statuer sur le fond ou une partie du fond ou d'en préjuger»

²⁹ De acuerdo con Ch. DE VISSCHER *Aspects récents...* op. cit., p. 106, la necesidad de individualizar el tratamiento de las excepciones se impuso gradualmente lo que implicó la inserción del 62.5 en el Reglamento de 1936, que conlleva la unión al fondo de una excepción «*La Cour après avoir entendu les Parties, statue sur l'exception ou la joint au fond*». Sin embargo, hasta el Reglamento de 1972 no encontramos la fórmula actual «*El Tribunal, después de oír a las partes, resolverá, mediante Sentencia si admite la excepción, si la desestima o si declara que en las circunstancias del caso no tiene un carácter exclusivamente preliminar*». Antes de la modificación de este precepto reglamentario, la Corte ya había unido el estudio de algunas excepciones preliminares al fondo del asunto, aunque en todos ellos existió una solicitud de una parte en este sentido. En el asunto del Derecho de paso por territorio indio -Portugal c. India- (Sentencia de 26 de noviembre de 1957 -CIJ Recueil 1957, p. 125 y ss.-) Portugal solicitaba de la Corte que las excepciones formuladas por India en quinto y sexto lugar fueran rechazadas o subsidiariamente, se uniera su estudio al del fondo del asunto -p. 137-; también en la *Barcelona Traction* -Bélgica c. España- (Sentencia de 24 de julio de 1964 -CIJ Recueil 1964, p. 6 y ss.-), el Gobierno belga se pronunció en semejantes términos acerca de las excepciones tercera y cuarta del Gobierno español -pp. 13-14-.

³⁰ Vid. la Sentencia de 20 de julio de 1989, en CIJ Recueil 1989, p. 15 y ss.; y antes había sucedido en el asunto de *ciertos empréstitos noruegos* -Francia c. Noruega- (Sentencia de 6 de julio de 1957 -CIJ Recueil 1957, pp. 9 y ss.-).

³¹ El asunto de *las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua*, fue la primera ocasión en que la Corte hizo uso de «*la potestad introducida en 1972 de declarar que una excepción preliminar "no tiene, en las circunstancias del caso un carácter exclusivamente preliminar"*». Vid. en la Sentencia de 27 de junio de 1986, en el asunto de *las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua -fondo-*, parágrafo 38, p. 29.

³² M. MABROUK *Les exceptions de procédure...* op. cit., p. 286.

Una vez se ha unido el estudio de la excepción al del fondo, la consideración de aquélla posee en todo caso carácter preliminar respecto del último. Esta actuación es lógica, puesto que de resultar aceptada la excepción tendrá el efecto señalado *Supra*: terminación del proceso en causa³³.

2.2. Particularidades de la interposición de excepciones preliminares en las Salas *ad hoc*: asunto de la Elettronica Sicula S.p.A.(ELSI)

En un principio, se pensaba que no era posible la interposición de excepciones preliminares en las Salas *ad hoc*, al entender que poseían un único fundamento competencial de naturaleza consensual: el compromiso, sin que fuera posible plantear dudas acerca de la competencia de la formación en cuestión, pasándose por alto que el viejo precedente *BORCHGRAVE* advertía que la introducción de un asunto a conocimiento de la Corte mediante compromiso no implicaba la imposibilidad -sólo la menor probabilidad- de interponer excepciones preliminares³⁴. Desde luego, habida cuenta de las características de estas formaciones, el supuesto, si no imposible, será raro o, por lo menos, más improbable que tratándose de la Corte en Pleno³⁵. El hecho de que haya habido un caso -y sólo uno- en que un Estado demandado ante

³³ Quizá los ejemplos más significativos de esta actuación son los del *Sudoeste africano* Sentencia de 18 de julio de 1966, *Vid.* en CIJ Recueil 1966, p. 38 y el de la *Barcelona Traction Light and Power Company Limited*, de 5 de febrero de 1970, *Vid.* en CIJ Recueil 1970, p.4.

³⁴ *Vid.* Sentencia de 6 de noviembre de 1937, en CPJI Série A/B, nº72, p.158 y ss.

³⁵ G. ABI-SAAB *Les exceptions préliminaires...* op. cit., p. 118, indica al respecto «...la volonté politique de soumettre l'affaire au règlement arbitral ou judiciaire, ainsi qu'en témoigne la signature du compromis, rend une telle éventualité improbable et ses applications assez rares dans la pratique Arbitrale»

una Sala haya planteado una excepción preliminar -de inadmisibilidad de la demanda interpuesta- confirma el aserto.

La constitución de una Sala *ad hoc* no priva a los Estados del ejercicio de todos los medios de defensa que considere oportunos, pero las exigencias de constitución de las Salas *ad hoc* dificultarán el planteamiento de excepciones preliminares. No obstante, siempre cabe objetar el *quantum* de la competencia atribuida a la Sala o plantear objeciones a la admisibilidad de la pretensión de una de las partes, sobre todo si su apreciación va unida al fondo que enfrente a más partes dispuestas a que la Sala zanje su diferencia. Por otra parte, dado que ni el Estatuto ni el Reglamento contienen reglas particulares al respecto, la interposición de excepciones preliminares ante las Salas *ad hoc*, está cubierta por la remisión general al Procedimiento Contencioso que se hace en el art. 90 del Reglamento.

2.2.1. Compromiso y excepciones preliminares son compatibles.

En efecto, resulta en apariencia contradictorio que dos Estados acuerden someter una diferencia a un órgano judicial con unos límites determinados en un compromiso y en el curso del procedimiento promuevan excepciones preliminares con las que persiguen la terminación del mismo sin que la Corte entre a conocer del fondo de la diferencia en cuestión.

Sin embargo, este problema, que se había suscitado en la doctrina³⁶, quedó pronto aparentemente resuelto en la jurisprudencia de la CPJI -asunto *BORCHGRAVE*-. La Corte, en este asunto -primero y único hasta el momento introducido mediante compromiso y objeto de la interposición de excepciones preliminares-, no se planteó expresamente la cuestión que nos ocupa³⁷, pero la mencionó en el apartado dedicado a la exposición de los hechos. Existía un compromiso -acuerdo especial- de 20 de febrero de 1937 entre España y Bélgica -notificado por Bélgica a la CPJI el 5 de marzo de 1937-, por el que ambos Estados habían decidido:

«soumettre, par voie de compromis, le différend à la décision de la Cour Permanente de Justice Internationale conformément aux articles 36 et 40 du Statut et l'article 35 de son Règlement.

Article premier.- La Cour permanente de Justice internationale est priée de dire si, étant données les circonstances de fait et de droit concernant le cas, la responsabilité du Gouvernement espagnol se trouve engagée»³⁸

En la memoria belga se preguntaba a la Corte acerca de la responsabilidad española en dos extremos: la derivada del crimen del ciudadano belga, barón Jacques Borchgrave, y la falta de diligencia en la actuación del gobierno español en la búsqueda y persecución de los culpables del mismo.

Tras la notificación belga del compromiso, la Corte fijó los plazos de depósito de las memorias y lo hizo de manera sucesiva y no simultánea como es usual en los asuntos que utilizan un compromiso como instrumento para

³⁶ Vid. en este sentido M. MABROUK *Les exceptions...* op. cit., pp. 179-183 y bibliografía allí citada.

³⁷ En CPJI Serie E, n°16, p. 169, se indica: *«Estimant que ce cas n'était pas exclu par son Règlement»*

³⁸ Vid. Sentencia de 6 de noviembre de 1937, en CPJI Série A/B, n°72, p.159 y el comentario de la Sentencia realizado por K. HERNDL "Borchgrave case" en *EPIL* t.2, pp. 37-39.

someterlo a conocimiento de la Corte. Aunque se haya empleado a tales fines la notificación del acuerdo, parece que el tratamiento procesal subsiguiente se adecuó más al de una demanda que a un compromiso propiamente dicho.

En su contramemoria España promovió dos excepciones preliminares, una de incompetencia de la Corte para examinar la segunda conclusión belga, por entender que la decisión del Tribunal acerca de este punto concreto constituiría un pronunciamiento *ultra petita*, al no encontrarse previsto en el acuerdo especial. Por tanto se planteaba la cuestión de la interpretación y aplicación del compromiso³⁹. La otra excepción introducida por España contestaba la admisibilidad de la demanda por entender que el gobierno belga no había agotado los recursos internos españoles, requisito necesario para el ejercicio de la protección diplomática.

Si bien ni en los textos que regulan esta institución ni en la jurisprudencia de la Corte se deriva límite alguno a la posibilidad de promover excepciones preliminares por el instrumento utilizado para incoar el procedimiento, como señala M. MABROUK⁴⁰, existen algunas objeciones cuya interposición no resulta acorde con el empleo de un compromiso para someter a la Corte el conocimiento de la diferencia en cuestión. Según MABROUK,

³⁹ Este problema también se planteó en el asunto de la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador. El art. 2 del Compromiso suscitaba dudas acerca del espacio terrestre sometido a delimitación, derivadas de la amplia fórmula empleada para determinar el *petitum*, ya que las partes pedían a la Corte (1) «*Delimitar la línea fronteriza en las zonas o sectores no descritos en el art. 16 del Tratado General de Paz de 30 de octubre de 1980*» ; y, (2) «*Determinar la situación jurídica de las islas y de los espacios marítimos*». Por lo que a la controversia insular se refiere, Honduras solicitaba de la Corte la declaración de Meanguera y Meanguerita como islas bajo soberanía hondureña, por el contrario, El Salvador pretendía una decisión de la Corte acerca del conjunto de islas del Golfo de Fonseca, salvo Zacatal Grande, isla que El Salvador reconocía formaba parte de la costa hondureña. También se planteaba respecto a la función judicial en los espacios marinos: la determinación a que se refiere el art. 2.2. Honduras -interesado en el trazado de una línea de delimitación en el interior y en el exterior del Golfo de Fonseca-, sostenía que la *determinación de la situación jurídica* era equiparable a la delimitación de la zona considerada. El Salvador, por su parte, consideraba que la ausencia de una disposición expresa en este sentido en el Compromiso impedía a la Sala proceder a su delimitación.

⁴⁰ M. MABROUK *Les exceptions*, op. cit., p. 183

evidentemente, si las partes han determinado con precisión y de mutuo acuerdo el objeto de la diferencia⁴¹, los litigantes pierden la posibilidad de promover excepciones de incompetencia *ratione materiae* de la Corte, a menos que una de las partes en el curso del procedimiento modifique aquél, desconociendo tanto la letra como el espíritu del compromiso. Tampoco podrían prosperar algunas excepciones de inadmisibilidad, como la divergencia de opinión, la ausencia de negociaciones previas⁴², o, en opinión de MABROUK, la falta de agotamiento de recursos internos.

Podemos formular algunas observaciones a la argumentación de M. MABROUK. En primer lugar, ha de señalarse que la cuestión no es si existe alguna limitación de los Estados para interponer excepciones preliminares -que no las hay porque podrán libremente utilizar los medios de defensa que estimen oportunos-, sino bien al contrario, cual será la actitud de la Corte cuando se encuentre ante una objeción de este tipo.

En segundo lugar, en la medida en que haya una diferencia sobre la interpretación de reglas convencionales o generales de que depende la jurisdicción y admisibilidad de una pretensión, las partes pueden convenir someterla también a una Sala de la CIJ, debiendo pronunciarse esta formación sobre los aspectos sometidos a su conocimiento.

⁴¹ Precisión que no siempre es posible, por cuanto en múltiples ocasiones se acuerdan fórmulas que consiguen la anuencia de las partes pagando por ello el precio de la ambigüedad o las definiciones amplias, como ocurrió en el asunto de *la diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador *Vid. supra* nota nº39.

⁴² G. ABI-SAAB *Les exceptions préliminaires...* op. cit., p. 116, indica que «...la condition de négociations diplomatiques préalables est intimement liée à celle de l'existence d'un différend». Sin embargo, hemos de señalar que en este sentido son especialmente clarificadoras las palabras de A. REMIRO BROTONS en *Derecho Internacional Público. 1. Principios fundamentales*, Madrid, 1982, p. 246, cuando señala «la anterioridad de negociaciones diplomáticas sobre los otros medios de arreglo no es una prioridad impuesta por el derecho, sino una precedencia natural, lógica».

En tercer lugar, estamos de acuerdo con la imposibilidad de que la ausencia de negociaciones diplomáticas previas pueda ser objeto de una excepción preliminar. Sin embargo, entendemos que con independencia del vehículo introductorio, la solución ha de ser la misma, si tenemos en cuenta que en todo caso la existencia de estas negociaciones no es una prioridad jurídica, sino fáctica a menos que haya una obligación particular al respecto. La Corte apreciará la improcedencia de la excepción salvo que, en el caso concreto, dicha obligación forme parte del compromiso.

La última de las matizaciones que merece la aseveración de MABROUK es respecto de la falta de agotamiento de recursos internos. La argumentación de la CPJI en el asunto *BORCHGRAVE*⁴³ no sirve para fundamentar la opinión de este autor, porque la Corte no entró a conocer de la segunda excepción planteada por el Gobierno español. El abogado español solicitó en la fase oral su unión al fondo⁴⁴, desistiendo posteriormente las partes de continuar el procedimiento ante la CPJI⁴⁵. Además, no podemos estar de acuerdo con la apreciación de este autor, si tenemos en cuenta la Sentencia de la Sala *ad hoc* que conoció del asunto de la *Elettronica Sicola S.p.A. -ELSI-*. Tan sólo cabe excluir esta posibilidad cuando expresamente se prevea en el compromiso en cuestión pero no en otros supuestos:

«...The Chamber has no doubt that the parties to a treaty can therein either agree that the local remedies rule shall not apply to claims based on alleged breaches of that treaty, or confirm that it shall apply. Yet the Chamber finds itself unable to accept that an important principle of customary international law should be held to have been

⁴³ Vid. Sentencia de 6 de noviembre de 1937, en CPJI Serie A/B, nº72, p.169.

⁴⁴ La Corte, aceptó la petición española, indicando que «...la jonction au fond n'est possible que pour les exceptions dont la Cour est saisie. Le retrait de l'exception préliminaire n'a rien laissé subsister comme telle que l'on puisse joindre au fond» (Vid. Sentencia de 6 de noviembre de 1937, en CPJI Série A/B, nº72, p.169).

⁴⁵ La Ordenanza de 30 de abril de 1938 da noticia de la celebración del Acuerdo de febrero de 1937, en CPJI Serie A/B, nº73.

*tacitly dispensed with, in the absence of any words making clear an intention to do so...*⁴⁶

Si las excepciones preliminares de incompetencia de la Corte o inadmisibilidad de la demanda tienen por objeto que el Tribunal entienda terminado el procedimiento en cuestión sin entrar a conocer del fondo del mismo, cabría sugerir que si el fundamento de ambos -competencia de la Corte y admisibilidad de la demanda- se reconoce expresamente en el mencionado compromiso, con la interposición de las excepciones podría entenderse que la parte que la alega está infringiendo el principio *pacta sunt servanda*⁴⁷, salvo que el desacuerdo verse sobre el alcance de este instrumento -o de normas generales no afectadas por éste-.

En definitiva, la Corte en cualquiera de sus formaciones será la que decida los términos discutidos de una controversia concreta y para ello interpretará el compromiso al objeto de decidir si procede o no la admisión de la excepción preliminar.

2.2.2. Las excepciones preliminares son aún más compatibles con otras bases de la jurisdicción.

Resulta extraño, imaginar con carácter general la interposición de excepciones preliminares en el tipo de Salas que nos ocupan. Ello es así, como ya se ha advertido, debido a las formalidades de constitución requeridas por el Estatuto y el Reglamento de la Corte. Ambos textos exigen el acuerdo de las

⁴⁶ Vid. Sentencia de 20 de julio de 1989, en CIJ Recueil 1989, p. 42.

⁴⁷ Vid. K. OELLERS-FRAHM "Compromis" en EPIL, t.I, p. 46

partes para que dicha constitución pueda llevarse a cabo y aunque del primero de ellos no se desprende que el consentimiento deba formularse en un momento determinado, los preceptos reglamentarios exigen el acuerdo de las partes previo a la constitución de la formación solicitada.

Sin embargo, si bien podemos pensar que la interposición de excepciones preliminares en estas formaciones no tienen mucho sentido y que únicamente conducen a retrasos en la solución de la controversia en cuestión, no siempre es así. Podemos plantear múltiples hipótesis en esta línea, todas ellas cuando la competencia de la Corte deriva de un consentimiento prestado *ante hoc*. Pensemos en cláusulas compromisorias o Acuerdos Generales de arreglo pacífico de controversias. En ambos casos, frente a una demanda unilateral, el Estado demandado puede pretender mediante la interposición de una excepción preliminar que la Corte en pleno o en Sala defina el alcance del vínculo jurisdiccional citado y lo haga con carácter definitivo⁴⁸. Otra hipótesis es el planteamiento de excepciones preliminares de inadmisibilidad de la demanda; en este sentido el Estado demandado podría avenirse a la constitución de la Sala para inmediatamente contestar en ella la admisibilidad de aquélla, prefiriendo esta formación al Pleno; aún más si existe un vínculo jurisdiccional entre ambos Estados para someter el conocimiento de la controversia a una Sala *ad hoc*. Para avalar la viabilidad del supuesto planteado tenemos el asunto de la *Elettronica Sicula S.p.A. - ELSI*.

El único asunto hasta el momento del que conoció una Sala *ad hoc* en el que se promovió una excepción preliminar fue incoado mediante una

48 Ni el Estatuto ni el Reglamento desmienten esta posibilidad. Pensemos en una cláusula compromisoria por la que dos Estados (A y B) se obligan a acudir a una Sala *ad hoc* para que conozca de todos los problemas derivados del tratado que en aquélla se inserta. Suscitada la controversia, uno de ellos la somete a conocimiento de la CIJ que procede a consultar al otro Estado, sin que éste se niegue a ello, aunque contesta la competencia de la Sala porque le interesa conocer el alcance de esa cláusula compromisoria, de modo que si la decisión de la Sala acerca de esta excepción preliminar le favorece será cosa juzgada entre ellos. También podrá utilizarse como maniobra dilatoria.

demanda unilateral. En este caso -*Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI)*- no se plantearon problemas para la constitución de la Sala porque una vez comunicadas las pretensiones del demandante -Estados Unidos- al demandado -Italia- el Gobierno italiano se avino a que fuera una Sala *ad hoc* la que conociera y decidiera la diferencia. Pero Italia promovió ante la Sala una excepción de inadmisibilidad de la demanda alegando para ello la falta de agotamiento de recursos internos⁴⁹, una excepción, por lo demás, cuyo carácter estrictamente preliminar es más que discutido y que, a menudo se presenta como un requisito constitutivo del ejercicio de la protección diplomática. En el caso que nos ocupa fueron las mismas partes las que acordaron su consideración conjunta con el fondo, de conformidad con lo previsto en el art. 79.7 del Reglamento⁵⁰. La Sala rechazó la excepción en la Sentencia y lo hizo por unanimidad, al estimar que Estados Unidos sí había agotado la vía judicial interna italiana⁵¹.

Del art. 79.7 del Reglamento cabe inferir que aunque las objeciones presentadas no reúnan las características preceptivas para su unión al fondo, si las partes así lo hubieran acordado es imperativo para la Corte sustanciar la excepción de conformidad con lo solicitado por los Estados interesados y así hizo la Sala *ad hoc* en el asunto *Elettronica Sicula S.p.A.-ELSI-*. En este punto

⁴⁹ La memoria italiana contenía un doble requerimiento, el segundo de ellos subsidiario respecto del anterior, previendo que la Sala rechazara su excepción preliminar (*Vid.* Ordenanza de 17 de noviembre de 1987 en CIJ Recueil 1987, p.185):

1.- La demanda de Estados Unidos es inadmisibile porque no se han agotado los recursos internos italianos.

2.- Solicita el rechazo de la demanda porque no se ha infringido ninguno de los preceptos del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 2 de febrero de 1948 alegados por los Estados Unidos como fundamento de la demanda: el parágrafo 2 del artículo III; los parágrafos 1, 2 y 3 del artículo V; el artículo VII; el artículo primero del acuerdo complementario de 26 de septiembre de 1951.

⁵⁰ El art.79.7 del Reglamento prevé «El Tribunal, después de oír a las partes, resolverá mediante Sentencia si admite la excepción, si la desestima o si declara que en las circunstancias del caso no tiene un carácter exclusivamente previo».

⁵¹ *Vid.* en CIJ Recueil 1989, pp. 44, 81.

no existe diferencia procesal alguna entre las excepciones promovidas ante el Pleno y ante las Salas *ad hoc*. El art. 79 del Reglamento es aplicable a las Salas *ad hoc* en virtud de la remisión que se contiene con carácter general en el art. 90 del mismo texto.

Aunque el art. 17.1 Regl. en un primer momento parezca invitar a afirmar la imposibilidad de interposición de excepciones preliminares ante estas Salas⁵², no existe ningún argumento jurídicamente válido para negar con carácter de principio aquélla.

En definitiva, el compromiso o el acuerdo de las partes rigen la lógica de las excepciones preliminares, tanto ante el Pleno como ante las Salas.

⁵² Art. 17.1 «La petición de constituir una Sala para conocer de un asunto determinado, a tenor de lo previsto en el artículo 26, párrafo 2, del Estatuto, podrá formularse en cualquier momento antes de la terminación de la fase escrita. Una vez recibida la petición formulada por una de las partes, el Presidente se informará sobre si la otra parte está conforme en ello»

3. MEDIDAS CAUTELARES⁵³

3.1. Consideraciones generales.

Las medidas cautelares o provisionales son aquéllas que se adoptan con carácter preventivo y tienen por objeto salvaguardar los derechos sobre los que la Corte tendrá que decidir en el procedimiento en causa. Por tanto, han de dictarlas los tribunales que conocen del fondo de un asunto cuando a su juicio son objetivamente necesarias⁵⁴. El fundamento jurídico de la adopción de este tipo de medidas por la CIJ se encuentra en el art. 41.1 de su Estatuto⁵⁵.

⁵³ R. CASADO RAIGON La jurisdicción contenciosa de la Corte Internacional de Justicia. Estudio de las reglas de su competencia, Córdoba 1987, p. 27; A. COCATRE-ZILGIEN "les mesures conservatoires décidées par le juge international", en RGDIP, 1966, p.2; L. DELBEZ Les principes généraux du contentieux international, Paris 1962, p.117; M. DUBISSON La Cour Internationale de Justice, Paris 1964, p.223; J. B. ELKIND Interim Protection. A functional approach, La Haya, 1981, p.23; G. FITZMAURICE The Law and Procedure of the International Court of Justice, vol. II, Cambridge, 1986, pp. 533-550; J.C. GAUTRON "Création d'une chambre au sein de la Cour Internationale de Justice, mesures conservatoires et médiation dans le différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali. Ordonnance du 10 janvier 1986", en AFDI, 1986, t. XXXII, p. 211; P. GUGGENHEIM "Les mesures conservatoires dans la procédure arbitrale et judiciaire" en E.des C., 1932-II, pp. 645-761; C. LANG L'affaire Nicaragua/États-Unis devant la Cour Internationale de Justice, Paris, 1990; K. OELLERS-FRAHM "Interim measures of protection" en Bernhardt (ed.) EPIL t. 1 (1981), p.69; P. PESCATORE "Les mesures conservatoires et les Referes" Colloque de Lyon. La juridiction internationale Permanente, Paris, 1987, pp.324 y 349-350; S. ROSENNE The World Court. What It is and how It works, Dordrecht, 1989, p. 95-96; J. SZTUCKI Interim Measures in the Hague Court, Deventer, 1983, pp. 1-23; G. TESAURO "Le misure cautelari della Corte Internazionale di Giustizia" en Comunicazioni e studi, vol. XIV, 1975, p. 860; H.W.A. THIRLWAY "The Indication of Provisional Measures by the International Court of Justice", en R. BERNHARDT (ed.) Interim Measures Indicated by International Courts, Berlin, 1993, pp.1-36; B.A. WORTLEY, Q.C. "Interim reflections on procedures for interim measures of protection in the International Court of Justice" en Comunicazioni e studi, vol. XIV, 1975, pp. 1009-1019. El poder de dictar este tipo de medidas se concibe como un principio procesal de Derecho Internacional en el asunto de la *Compañía de Electricidad de Sofía*. Vid. Ordenanza de 5 de diciembre de 1939 en CPJI Série A/B, n° 79.

⁵⁴ Vid. en este sentido las Ordenanzas de 3 de agosto de 1931, en el asunto del *estatuto jurídico del Territorio de Groenlandia Oriental*, en CIJ Série A/B, n°48, p.284; Ordenanza

Las medidas cautelares poseen dos rasgos distintivos (1) su finalidad, la protección de los derechos que son objeto de la controversia en causa⁵⁶; y (2) su carácter doblemente transitorio, en primer lugar porque se pueden modificar en cualquier momento y, en segundo término, por cuanto, de no ser modificadas o revocadas antes, resultan de aplicación sólo hasta que el Tribunal dicte la Sentencia definitiva en el asunto principal. El efecto que el fallo de la Corte puede tener sobre las medidas dictadas puede ser múltiple, ya que cabe su confirmación, su sustitución por otras, o bien, su terminación, si con la Sentencia se zanja la controversia. Este incidente tiene además, carácter prioritario. Cuando coincide con el planteamiento de excepciones a la competencia⁵⁷ es

de 29 de julio de 1933 en el *asunto de la Reforma Agraria polaca* en CPJI, Série A/B, nº58 p. 177; Ordenanza de 5 de julio de 1951 en el *asunto de la Anglo-iranian Oil Company*, en CIJ, Recueil 1951, p. 93 y Ordenanza de 24 de diciembre de 1957 en el asunto *Interhandel*, en CIJ, Recueil 1957, p. 111.

⁵⁵ Sin embargo, es necesario señalar que el contenido de este precepto es diferente en las versiones francesa e inglesa. Del texto francés deriva el mandato imperativo para la Corte de indicar las medidas que «*doivent être prises*»-, sin embargo el tiempo verbal utilizado en el texto inglés es un condicional, de modo que corresponderá a la Corte la adopción de medidas cautelares que «*which ought to be taken*»-, careciendo, por tanto del carácter imperativo predicado respecto de la versión francesa. El texto español del precepto se aproxima más al francés, al introducir un presente de subjuntivo, según el precepto estatutario español la Corte podrá indicar medidas cautelares «*que deban tomarse*». La regulación concreta de las mismas en los procedimientos ante la CIJ se contiene en el Reglamento de esta institución -Sección D, Subsección I, arts. 73-78-.

⁵⁶ Protección requerida, por tanto, con carácter urgente, como señaló la Corte entre otros en los asuntos *Interhandel*, Ordenanza de 24 de octubre de 1957 en CIJ Recueil 1957, pp. 110-112 y el *Pasaje por el Gran Belt* (Finlandia c. Dinamarca) Ordenanza de 29 de julio de 1991, en CIJ Recueil 1991, p. 17. A. COCATRE-ZILGIEN en "Les mesures conservatoires en Droit International", *Revue Egyptienne de Droit International*, 1955, vol. 11, p. 84, indica una triple finalidad: 1) conservar algunos elementos probatorios, 2) salvaguardar los derechos de las partes *pendente lite* y 3) impedir la agravación del conflicto, siendo esta última una consideración política.

⁵⁷ Como ocurrió en el asunto del *Proceso de los Prisioneros de Guerra Paquistanies* (Paquistán c. India) en el que la Corte estimó que, debido al rechazo por parte de la India de la competencia de la Corte para conocer del fondo del asunto, resultaba prioritario resolver esta última cuestión señalada. *Vid.* en Ordenanza de 11 de mayo de 1973, en CIJ Recueil 1973, pp. 328 y ss; o el asunto de la *Plataforma Continental del Mar Egeo* -Grecia c. Turquía- Ordenanza de 11 de septiembre de 1976, en CIJ Recueil 1976, p.3 y ss. Lo mismo sucedió en los asuntos siguientes: *Anglo-iranian Oil Company*, Ordenanza de 5 de julio de 1951, *Vid.* en CIJ Recueil 1951, pp. 89 y ss.; *Interhandel*, Ordenanza de 24 de octubre de 1957, *Vid.* en CIJ Recueil 1957, pp. 105 y ss.; *Competencia en materia de pesquerías* -UK c. Islandia- Ordenanza de 12 de julio de 1972, *Vid.* en CIJ Recueil 1972, p.17 y ss; *Competencia en materia de pesquerías* -RFA c. Islandia-

obligado por la Corte verificar ésta *prima facie*, aplicando el denominado test de LAUTERPACHT⁵⁸. Con ello no se demora excesivamente la adopción de las medidas cautelares necesarias para la salvaguardia de los derechos pendientes de la decisión del Tribunal, amenazados en el transcurso del proceso, pero tampoco se reconoce una competencia autónoma de la Corte respecto de la que debe tener para conocer del fondo del asunto principal.

La aplicación de esta teoría, sin embargo, tiene un inconveniente: que después de dictar y ejecutar estas medidas, la Corte decida su incompetencia para conocer del fondo del asunto, en cuyo caso, las medidas inicialmente indicadas devienen sin efecto, puesto que fueron adoptadas por un órgano carente de competencia para conocer del procedimiento principal con los

Ordenanza de 12 de julio de 1972 *Vid.* en CIJ Recueil 1972, pp.35 y ss; *Ensayos Nucleares -Australia c. Francia-* Ordenanza de 22 de junio de 1973, en CIJ Recueil 1973, pp. 99 y ss; *Ensayos Nucleares -Nueva Zelanda c. Francia-* Ordenanza de 22 de junio de 1973, en CIJ Recueil 1973, pp.135 y ss.; *Personal diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán* Ordenanza de 15 de diciembre de 1979, *Vid.* en CIJ Recueil 1979, pp.7 y ss.; *Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua -Nicaragua c. Estados Unidos-* en Ordenanza de 10 de mayo de 1984, *Vid.* en CIJ Recueil 1984, pp. 179 y ss.; Ordenanza de 8 de abril de 1993, en CIJ Recueil 1993, p. 231 y ss.. En la Sentencia de 26 de noviembre de 1984 recaída en la fase de competencia de la Corte y admisibilidad de la demanda en el último de los asuntos citados -*Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua*- , ante la interposición de la demanda estadounidense de incompetencia, la Corte subrayó que no era necesario alcanzar una solución definitiva al respecto antes de decidir sobre la indicación de las medidas cautelares solicitadas por Nicaragua, afirmando que únicamente procedería la adopción de éstas cuando las disposiciones que el demandante alega parecen constituir *prima facie* una base competencial suficiente. *Vid.* también Ordenanza de 2 de marzo de 1990 en CIJ Recueil 1990, pp. 68-69, en el asunto relativo a la Sentencia arbitral de 31 de julio de 1989 (Guinea Bisau c. Senegal).

⁵⁸ Recibe esta denominación porque fue formulado por este Juez en su opinión individual a la Ordenanza de 24 de octubre de 1957, en el asunto del *Interhandel* (Suiza c. Estados Unidos) *Vid.*, en CIJ Recueil 1957, pp.118-119. La Corte, en el asunto de la *competencia en materia de pesquerías*, indicó que no deben adoptarse estas medidas cautelares cuando su incompetencia sobre el fondo del asunto es manifiesta. *Vid.* en CIJ Recueil 1973, p. 15. Podemos encontrar otra formulación de este test en la opinión del Juez ELIAS acerca de que competencia de la Corte para adoptar medidas cautelares puede derivar del art. 36.6 del Estatuto. -T.O. ELIAS "The International Court of Justice and the indication of provisional Measures of Protection" en Gilbert D'Amado Memorial Lecture, 1978, p.9-. La declaración introducida por E. JIMENEZ DE ARECHAGA a la Ordenanza de 22 de junio de 1973, en el asunto de los *Ensayos Nucleares* puede interpretarse como apoyo a esta teoría -*Vid.* en CIJ Recueil 1973, pp. 106-108-. En este mismo sentido se pronunciaron los Jueces M.LACHS, J.M.RUDA y H.MOSLER en la Ordenanza por la que se denegaban las medidas cautelares en el asunto de la *Plataforma Continental del Mar Egeo*. Es la Ordenanza de 11 de noviembre de 1976, en CIJ Recueil 1976, pp. 19, 23 y 25, casi veinte años después de que H.LAUTERPACHT la formulara.

consiguientes perjuicios que pudieran derivar por los efectos producidos por esas medidas sobre el Estado que debió adoptarlas, sin que quepa posteriormente reclamación alguna por esos posibles daños⁵⁹.

El procedimiento se sustancia en una fase oral. En él la Corte debe analizar la necesidad de adopción de estas medidas, es decir, la urgencia de las mismas⁶⁰, así como su justificación⁶¹. A pesar de ello, la presentación de observaciones por escrito acerca de la adopción de medidas cautelares es una práctica frecuente, si tenemos en cuenta las ocasiones en las que ello se ha llevado a cabo⁶². El objeto del procedimiento es lógicamente averiguar su procedencia o no, pudiendo participar en él los Jueces que hayan sido designados *ad hoc* por las partes⁶³.

⁵⁹ Un ejemplo de esta situación es el asunto de la *Anglo-iranian Oil Company*, en cuya Sentencia -de 22 de julio de 1952 Vid. en CIJ Recueil 1952, pp. 93 y ss-, se declara incompetente para conocer del fondo del asunto anulando consecuentemente las medidas cautelares dictadas un año antes, por la Ordenanza de 7 de julio de 1951. Vid. en CIJ Recueil 1951, pp. 89 y ss.

⁶⁰ Vid. en este sentido la bibliografía indicada *supra* y, últimamente, la Ordenanza de 29 de julio de 1991 en el asunto del *Pasaje por el Gran Belt* en CIJ Recueil 1991, p. 12 y ss.

⁶¹ La justificación requiere la existencia de una conexión directa entre los actos que se pretenden evitar con la adopción de las medidas cautelares y el objeto del asunto principal. Vid. en este sentido la Ordenanza de 2 de marzo de 1990 en el asunto relativo a la *Sentencia arbitral de 31 de julio de 1989* (Guinea Bisau c. Senegal) en CIJ Recueil 1990, p. 69.

⁶² *Anglo-iranian Oil Company*, Ordenanza de 5 de agosto de 1951, Vid. en CIJ Recueil 1951, pp. 91-92; *Interhandel*, Ordenanza de 24 de octubre de 1957, Vid. en CIJ Recueil 1957, p. 107; *Competencia en materia de pesquerías* (Reino Unido c. Islandia y RFA c. Islandia) Ordenanzas de 17 de agosto de 1972, Vid. en CIJ Recueil 1972, pp. 14 y 32 respectivamente; *Plataforma Continental del Mar Egeo* (Grecia c. Turquía), Ordenanza de 11 de septiembre de 1976, en CIJ Recueil 1976, p. 3 y ss.; *Personal Diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán*, Ordenanza de 15 de diciembre de 1979, Vid. en CIJ Recueil 1979, pp. 10-11; *Diferencia fronteriza entre Burkina Faso y Malí*, Ordenanza de 10 de enero de 1986, Vid. en CIJ Recueil 1986, pp. 5-7; *asunto de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* (Nicaragua c. Estados Unidos), Ordenanza de 10 de mayo de 1984, en CIJ Recueil 1984, p. 169; *Asunto relativo a la Sentencia arbitral de 31 de julio de 1989* (Guinea Bisau c. Senegal) Ordenanza de 2 de marzo de 1990, en CIJ Recueil 1990, pp. 66-68; *Asunto del pasaje por el Gran Belt*, Ordenanza de 29 de julio de 1991, Vid. en CIJ Recueil 1991, pp. 14-15; *Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la prevención y represión del crimen de genocidio* (Bosnia-Herzegovina c. Yugoslavia -Serbia y Montenegro-), Ordenanza de 8 de abril de 1993, Vid. en CIJ Recueil 1993, p. 3 y ss.

⁶³ Ex art. 31.6 del Estatuto. Participaron Jueces *ad hoc* en los asuntos siguientes : *Groenlandia Oriental* (de ambas partes); *Interhaendel* (elegido por Suiza); *Ensayos Nucleares* (el Juez designado por Australia y Nueva Zelanda); *Plataforma del Mar Egeo* (Grecia); *Diferencia*

Afirmada su competencia *prima facie*, el Tribunal puede actuar de diferente modo: cabe (1) que estime las medidas solicitadas como las más adecuadas y en consecuencia, proceda a dictarlas; (2) que entienda que, si bien resulta necesaria la adopción de medidas provisionales, las sugeridas por la/s parte/s no son las más convenientes al caso, en cuyo caso, la Corte indicará unas medidas distintas de las propuestas por la/s parte/s⁶⁴. En ambas hipótesis la Corte, una vez adoptadas, deberá comunicarlas al Secretario General de las Naciones Unidas, para que las transmita al CdS⁶⁵; (3) tras analizar las

fronteriza entre Burkina Faso y Mali (los nombrados por ambos Estados); en el asunto relativo a la *Sentencia arbitral de 31 de julio de 1989* (el designado por Guinea Bisau, ya que hasta el 5 de febrero de 1991, Senegal contó con un Juez nacional en el Tribunal -Kéba MBAYE-, posteriormente en virtud del art. 31.3 del Estatuto fue elegido como Juez *ad hoc* por Senegal -Vid. en la Sentencia de 12 de noviembre de 1991, en CIJ Recueil 1991, p. 56-); y en el asunto del *Pasaje por el Gran Belt* (tanto el designado por Finlandia como el designado por Dinamarca). No participaron pese a haber sido designados en el asunto de la *Fábrica de Chorzow* (ni por Alemania ni por Polonia), *Compañía de electricidad de Sofía* (el Juez *ad hoc* búlgaro declinó su participación alegando fuerza mayor Vid. en CPJI Serie E, nº16, p.151), en el asunto de los *prisioneros de guerra paquistaníes* (el Juez designado por Pakistán, Muhamed Zafrulla Khan lo fue hasta el 2 de julio de 1973, ocho días después de esta fecha el Agente paquistaní informó a la Corte del desistimiento de su Estado). No se nombraron Jueces *ad hoc*, en el asunto de la *Anglo-iranian Oil Company* (fue designado posteriormente), *Competencia en materia de pesquerías* (ni la RFA ni Islandia), *Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua*.

64 Ya que la Corte ex art. 75.2 no tiene la obligación de adoptar las medidas propuestas por las partes. Vid. en este sentido *Anglo-iranian oil company* en CIJ Recueil 1951, pp. 89; *competencia en materia de pesquerías* (UK c. Islandia y RFA c. Islandia) en CIJ Recueil 1972, pp. 12 y ss. y 30 y ss. respectivamente; *Ensayos Nucleares* (Australia c. Francia y Nueva Zelanda c. Francia) en CIJ Recueil 1973, pp. 99 y ss y 135 y ss respectivamente; *Personal diplomático y consular de Estados Unidos en Irán* (Estados Unidos c. Irán) en CIJ Recueil 1979, p.7.

65 Al respecto se plantean dos cuestiones: (1) si sólo ha de facilitarse la información indicada respecto de las medidas cautelares adoptadas a instancia de parte y (2) acerca de la función de este trámite. La respuesta a la segunda cuestión iluminó la respuesta a la primera: se trata de mantener informado al Consejo de Seguridad, en situaciones que podrían ser amenazas para la paz internacional. Por eso la información debería darse en todo caso, ocurre, sin embargo que, la práctica no ha conocido hasta ahora medidas cautelares adoptadas de oficio. Vid. *infra* nota nº 66.

Hay también quienes opinan, como señalan J.B. ELKIND -*Interim Protection...* op. cit., pp. 159-161- y J. SZTUCKI - *Interim Measures...* op. cit., pp. 294-298-, que el objeto de la comunicación es facilitar el recurso al 94 de la Carta, en el supuesto de incumplimiento de las medidas decididas por la Corte. Ahora bien, aunque el art. 94.1 de la Carta se refiere a *decisiones*, el apartado siguiente alude a *fallos*, por tanto, el único incumplimiento al que se dirige este precepto de la Carta es a las Sentencias de la Corte, decisiones de carácter definitivo. No cabría pues, ampararse en este precepto para fundamentar la intervención del Consejo en el supuesto de incumplimiento, porque el texto del artículo es suficientemente claro al respecto: «Cada Miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de

circunstancias del asunto en cuestión, puede decidir que no procede la indicación de medidas cautelares, rechazando en consecuencia la demanda. En cuyo caso, la parte interesada puede renovar su solicitud de medidas cautelares tantas veces como crea conveniente⁶⁶, con la única limitación temporal derivada de la permanencia en causa del procedimiento del que éste es incidental.

La Corte se pronuncia respecto de una demanda de medidas cautelares mediante una Ordenanza. Este hecho es lógico, si tenemos en cuenta que, a diferencia del resto de los procedimientos incidentales, el Tribunal puede considerar su indicación de oficio. Además, el contenido de las Ordenanzas no tiene carácter definitivo. Ambas características en ningún caso podrán predicarse de las Sentencias del Tribunal. Lo anterior se traduce en el hecho de que cuando la Corte ha dictado las medidas que ha considerado necesarias para salvaguardar los derechos objeto del procedimiento principal, puede revocarlas⁶⁷, o modificarlas⁶⁸.

Justicia en todo litigio en que sea parte», con lo que evidentemente se está refiriendo a la decisión final de la Corte. Vid. *infra* nota n° 70.

⁶⁶ En el asunto de la *Denuncia del Tratado Chino-belga de 2 de noviembre de 1865*, la petición de medidas, primera de este tipo, fué desestimada por la Corte. Sin embargo, posteriormente se planteó una segunda demanda de 18 de junio de 1927 con el mismo objeto que la anterior, siendo en esta ocasión estimada. Vid. en Ordenanza de 8 de enero de 1927, en CPJI Série A, n°8, p.6.

⁶⁷ Como ocurrió en los asuntos de la *Anglo-iranian Oil Company*, Sentencia de 22 de julio de 1952, en CIJ Recueil 1952, pp. 114; *Ensayos Nucleares* (Australia c. Francia y Nueva Zelanda c. Francia) Sentencia de 20 de diciembre de 1974, en CIJ Recueil 1974, pp. 272 y 478 respectivamente.

⁶⁸ Esto sucedió en el asunto de la *Competencia en materia de pesquerías*, Ordenanza de 12 de julio de 1973, en CIJ Recueil 1973, p. 302-304. El trámite a seguir para la modificación de las medidas dictadas básicamente idéntico al previsto para la indicación de medidas cautelares -ex art. 76 Regl.-, aunque con dos diferencias básicas: en primer lugar, se requiere instancia de parte y, en segundo término, el Reglamento deja abierta la posibilidad de formular las observaciones pertinentes al respecto, por escrito o en una audiencia oral.

Una vez la Corte ha indicado estas medidas⁶⁹, mantiene un control -muy leve- sobre su ejecución, ya que el Reglamento -en su art. 78-, prevé la reserva de la Corte para solicitar información a las partes acerca de la puesta en práctica de las medidas dictadas. Ciertamente, pretende ser un control sobre la ejecución de éstas, aunque se queda en algo tan liviano que, a duras penas, puede ser calificado como tal⁷⁰.

⁶⁹ Normalmente las medidas cautelares adoptadas por la Corte consisten en un mandato dirigido a una de las partes -*denuncia del tratado de comercio chino-belga*, a China; *Compañía de electricidad de Sofía*, a Bulgaria; en la *competencia en materia de pesquerías*, a Islandia, en los *Ensayos nucleares*, a Francia; en el *Personal Diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán*, a Irán; en las *actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua*, a Estados Unidos-, pero también -aunque en escasas ocasiones- puede adoptar medidas que deban ejecutar ambos. También la CPJI y posteriormente la CIJ han intentado lograr un acuerdo provisional inter-partes acerca de la cuestión por la que se solicita la adopción de este tipo de medidas. Es el caso del *Tratado de Comercio Chino-belga*. La Corte dicta medidas provisionales -Ordenanza de 8 de enero de 1927, *Vid.* en CPJI Série A, n°8, p.6-, un mes más tarde constata la existencia de un acuerdo en este sentido y anula su auto anterior -Ordenanza de 15 de febrero de 1927 CPJI, Série A, n°8, p.9-. En el asunto relativo a *Groenlandia Oriental*, el Tribunal rechaza la demanda noruega solicitando medidas provisionales convencida de que las partes tenían intención de evitar incidentes -CPJI, Serie A/B, n°54, p. 277-. En el asunto del *Príncipe de Pless*, la CPJI constató la existencia de un acuerdo entre las partes declarando sin objeto la demanda alemana -CPJI Serie A/B n°54, p.150-.

⁷⁰ Algunos autores como L. DELBEZ -*Les principes généraux ... op. cit.* p. 118-, afirman que el único problema delicado que plantea este procedimiento incidental es el de su autoridad: si de ellas deriva una obligación jurídica o tan sólo poseen un carácter recominatorio. Un sector doctrinal opina -acertadamente a nuestro entender-, que ha de existir una obligación jurídica de ejecutar las medidas cautelares adoptadas por la Corte -*Vid.* A. COCATRE-ZILGIEN "Les mesures conservatoires en Droit International", en *Revue Egyptienne de Droit International*, 1955, p. 98; M. DUBISSON *La Cour Internationale...op. cit.*, p. 223; GOLDSWORTHY "Interim measures of Protection in the International Court of Justice" en *AJIL*, 1974, pp.258; P.GUGGENHEIM "Les mesures conservatoires...op. cit., p.679; A. EL-QUALI *Effets juridiques de la sentence internationale. Contribution à l'étude de l'exécution des normes internationales*, Paris 1984, pp. 92-100; K. OELLERS-FRAHM "Interim measures...op. cit., pp. 71-2; P. PESCATORE, "Les mesures conservatoires...op. cit., p. 350; Sh. ROSENNE *The Law and Practice of the International Court*, vol. 1, Leyden 1965, pp. 141-142; J. SZTUCKI *Interim measures...op. cit.*, pp. 269-294. En contra de esta opinión se ha manifestado G. TESAURO "Le misure cautelari...op. cit., pp. 894-901, quien además de señalar que la adopción de estas medidas «*no vincola le parti*», además subraya «*ma addirittura non ha senso*»; U. VILLANI "In tema di indicazioni di misure cautelari da parte della Corte Internazionale di Giustizia" en *RDI*, 1974, pp. 670-676-. P.GUGGENHEIM "Les mesures conservatoires...op. cit., p.679, entendía que el art. 41 del Estatuto de la CPJI -y de la CIJ-, contenía una derogación indirecta del principio de las medidas cautelares dispositivas, consagrado en los Tratados Bryan, derogación derivada de la introducción de la obligación de notificar las medidas cautelares al Consejo de la Sociedad de Naciones, apreciación que puede mantenerse en la actualidad-. La cuestión que se plantea a continuación es que dado que estas medidas son de obligado cumplimiento, en el supuesto de no proceder a su ejecución ¿la parte cumplidora podría recurrir al CdS en virtud del art. 94.2 de la Carta de NN.UU.? La mayoría de la doctrina resuelve negativamente esta cuestión -L. DELBEZ *Les principes généraux...op. cit.*, p. 118; M. DUBISSON *La Cour Internationale...op. cit.*, p. 223; P. PESCATORE "Les mesures...op. cit., p.

La solicitud de medidas cautelares tiende en general a aumentar, pero ni con mucho se acerca su número al de las excepciones preliminares planteadas⁷¹. El panorama es más desolador cuando se toma en consideración

350; GOLDSWORTHY "Interim measures of Protection in the International Court of Justice" en AJIL, 1974, pp.258; P.GUGGENHEIM "Les mesures conservatoires...op. cit., p.679; K. OELLERS-FRAHM "Interim measures...op. cit., pp. 71-2; P. PESCATORE, "Les mesures conservatoires...op. cit., p. 350; Sh. ROSENNE The Law and Practice of the International Court, vol. 1, Leyden 1965, pp. 141-142; J. SZTUCKI Interim measures...op. cit., pp. 269-294-, debido a la formulación del art. 94.2 de la Carta. Vid. *supra* nota nº 65.

Se trata de un problema no resuelto jurisprudencialmente, aunque se suscitó con ocasión del asunto de la *Anglo-iranian oil Company*. La Corte dictó una serie de medidas y ante el incumplimiento de las mismas por Irán, el Reino Unido acudió al CdS por entenderle competente para la ejecución forzosa de la ordenanza anterior. Sin embargo, una vez puesta la situación en conocimiento del CdS, la Corte se declaró incompetente para conocer del fondo del asunto, por lo que el tema que nos ocupa quedó pendiente. El Reino Unido utilizó los arts. 35 y 39 de la Carta, en lugar del 94.2, evitando los problemas que plantea este último. El objeto de aquéllos es someter la controversia a «la atención del Consejo de Seguridad», -art. 35- que recomiende o decida las medidas que deberán adoptarse «de conformidad con los artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales» -art. 39-. Utilizando aquel procedimiento estaríamos sometiendo la nueva controversia surgida en torno de la ejecución de ésta, a conocimiento del CdS. En definitiva, se trata del empleo paralelo de dos métodos de arreglo pacífico de controversias: ante la Corte y ante el CdS. Esta es la única vía que, consideramos, cuenta con fundamento jurídico suficiente para que el CdS pueda conocer del incumplimiento de las medidas cautelares indicadas por la Corte. Además, la existencia de un doble procedimiento de arreglo no impide la competencia de la Corte para conocer del asunto -En este sentido se ha pronunciado el Tribunal en distintas ocasiones: en el asunto de la *Plataforma Continental del Mar Egeo* -Sentencia de 19 de diciembre de 1978, Vid. en CIJ Recueil 1978, p. 12-; *Personal Diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán* -Ordenanza de 15 de diciembre de 1979, Vid. en CIJ Recueil 1979, p.15-; *Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* -Ordenanza de 10 de mayo de 1984, Vid. en CIJ Recueil 1984, p. 207-y en el asunto de la *diferencia fronteriza* entre Burkina Faso y la República de Mali -Ordenanza de 10 de enero de 1986, Vid. en CIJ Recueil 1986, p.7-.

⁷¹ Desde 1946 se ha solicitado la adopción de medidas cautelares en menos de una docena de ocasiones: *Anglo-iranian Oil Company*, Ordenanza de 5 de julio de 1951, Vid. en CIJ Recueil 1951, pp. 89 y ss.; *Interhandel*, Ordenanza de 24 de octubre de 1957, Vid. en CIJ Recueil 1957, pp. 105 y ss.; *Competencia en materia de pesquerías* -UK c. Islandia- Ordenanza de 12 de julio de 1972, Vid. en CIJ Recueil 1972, p.17 y ss.; *Competencia en materia de pesquerías* -RFA c. Islandia- Ordenanza de 12 de julio de 1972 Vid. en CIJ Recueil 1972, pp.35 y ss.; *Ensayos Nucleares* -Australia c. Francia-Ordenanza de 22 de junio de 1973, en CIJ Recueil 1973, pp. 99 y ss.; *Ensayos Nucleares* -Nueva Zelanda c. Francia- Ordenanza de 22 de junio de 1973, en CIJ Recueil 1973, pp.135 y ss.; *Prisioneros de guerra paquistaníes* Ordenanza de 13 de julio de 1973, Vid. en CIJ Recueil 1973, pp. 328 y ss.; *Plataforma Continental del Mar Egeo* -Grecia c. Turquía-, Ordenanza de 11 de septiembre de 1976, Vid. en CIJ Recueil 1976, pp. 3 y ss.; *Personal diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán* Ordenanza de 15 de diciembre de 1979, Vid. en CIJ Recueil 1979, pp.7 y ss.; *Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* -Nicaragua c. Estados Unidos- en Ordenanza de 10 de mayo de 1984, Vid. en CIJ Recueil 1984, pp. 186 y ss.; *Diferencia fronteriza* entre Burkina Faso y Mali, Ordenanza de 10 de enero de 1986, en CIJ Recueil 1986, p. 3 y ss.; *asunto relativo a la Sentencia arbitral* de 31 de julio de 1989 (Guinea Bissau c. Senegal), Ordenanza de 2 de marzo de 1990, Vid. en CIJ Recueil 1990, pp. 64 y ss.; *asunto del Pasaje por el Gran Belt*, Ordenanza de 29 de julio de 1991, Vid. en

la actitud de los demandados ante las medidas indicadas por la Corte. Dictadas habitualmente en medio de la impugnación de la competencia de la Corte y la ausencia del demandado, han sido a menudo desatendidas por sus destinatarios⁷².

3.2. Las medidas cautelares ante las Salas *ad hoc*: asunto de la controversia fronteriza Burkina Faso/República de Malí.

Tal como acontece con los demás incidentes no existen diferencias procesales entre las medidas cautelares solicitadas al Pleno y a las Salas de la Corte. Por tanto, cualquiera de sus formaciones puede adoptar este tipo de medidas de oficio⁷³ -a diferencia de otras jurisdicciones internacionales- o a instancia de parte. Por otra parte, no cabe señalar peculiaridades de las Salas puesto que el procedimiento por el que se tramita es idéntico, regulado por los mismos preceptos reglamentarios.

CIJ Recueil 1991, p. 12 y ss.; *Cuestiones de interpretación y aplicación de la Convención de Montreal de 1971, acerca del Incidente aéreo en Lockerbie* -Libia c. UK y Libia c. Estados Unidos- (Ordenanza de 14 de abril de 1992, Vid. en CIJ Recueil 1992, pp. 3-26 y 114-128); *Aplicación de la Convención de la Prevención y represión del crimen de genocidio* -Bosnia y Herzegovina c. Yugoslavia (Serbia y Montenegro)- (Ordenanzas de 8 de abril y 13 de septiembre de 1993. Vid. en CIJ Recueil 1993, pp. 3 y ss. y 325 y ss.)

⁷² El incumplimiento de las medidas cautelares decididas por la Corte es un hecho harto frecuente. Hemos de tener en cuenta que al menos en cinco de los casos en los que fueron adoptadas por esta institución, no resultaron aplicadas: *Anglo-iranian*, *Competencia en materia de pesquerías*, *ensayos nucleares*, *personal diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán* y *actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua*.

⁷³ La Corte nunca ha aplicado el art. 75 del Reglamento, aunque la República de Malí, la sugirió a la Sala que conocía de la *diferencia fronteriza* con Burkina Faso, en su carta de 27 de diciembre de 1985, Vid. en la Ordenanza de 10 de enero de 1986, CIJ Recueil 1986, p.6. En cuanto al objeto de esta previsión, P. PESCATORE "Les mesures..." op. cit., p. 328, entiende que responde a la idea de preservación del orden público internacional, indicando así el parentesco entre la CIJ y el Consejo de Seguridad, por lo que hace referencia a la misión pacificadora que a ambos les ha sido atribuida. S. SZTUCKI *Interim measures...* op. cit., p. 154, subraya que esta disposición es una excepción al principio judicial *non ultra petita*.

El problema de la coincidencia de excepciones preliminares y medidas cautelares -indicado *supra* - nunca se ha planteado ante una Sala. La práctica incidental en esta formación queda reducido a un único asunto de excepciones preliminares y a otro de medidas cautelares solicitados ambos incidentes por separado; a pesar de ello, nada impide que la coincidencia apuntada pueda producirse en una Sala en el futuro.

La posibilidad de adopción de medidas cautelares por las Salas *ad hoc* no ha planteado problema alguno, en virtud del principio «*qui maius potest, minus potest*»⁷⁴. La competencia general de las formaciones reducidas de la Corte para indicar este tipo de medidas procesales resulta ventajosa por dos motivos, fundamentalmente: (1) Rapidez, la formación que se encuentra conociendo del fondo de un asunto puede dictar estas medidas con mayor celeridad; y, (2) que la adopción de las mismas se lleve a cabo por una Sala y no por el Pleno de la Corte no contraviene el Principio de igualdad de trato ni entre las Partes, ni tampoco para terceros Estados -a diferencia de lo que ocurre con la intervención-.

Ahora bien, el único asunto ventilado ante una Sala *ad hoc* en que se solicitaron e indicaron medidas cautelares, el de la *diferencia fronteriza* entre Burkina Faso y la República de Mali, presenta algunas peculiaridades dignas de mención. En primer lugar, el Reglamento contempla sólo la demanda unilateral como medio para solicitar la adopción de medidas cautelares y de hecho ha

⁷⁴ Existe acuerdo acerca de la competencia de las Salas para dictar medidas cautelares aunque en tiempos de la CPJI hubo discrepancias doctrinales al respecto. *Vid.* en este sentido E. DUMBAULD, *Interim measures of Protection*, Londres, 1932, p. 157; FACHIRI *The Permanent Court of International Justice*, 2ª ed., Londres, 1932, p.100; HUDSON *The Permanent Court of International Justice*, 2ªed., Londres 1943, p.427. Más recientemente, a pesar de la certeza indicada, había autores que dudaban que las Salas *ad hoc* tuvieran oportunidad de adoptarlas. *Vid.* J. SZTUCKI *Interim Measures in the Hague Court*, Deventer, 1983, p.148, entiende que esta situación no pasa de ser hipotética por dos razones, en primer lugar porque el recurso a las Salas no es frecuente y, en segundo, porque la existencia de una Sala presupone la existencia de un acuerdo de las partes en la controversia «*This, in turn, presupposes that the case is submitted by a special agreement; and it is most improbable that the question of interim protection might arise in a case so submitted*»

sido el único utilizado a estos fines. La peculiaridad apuntada deriva de que en el asunto de la *diferencia fronteriza* entre Burkina Faso y la República de Malí, encontramos solicitudes unilaterales sí, pero introducidas de manera paralela. En la controversia indicada, Burkina Faso pidió su adopción telefónicamente, y después utilizó a estos fines un telegrama, mientras la República de Malí lo hizo por carta⁷⁵.

La primera y única vez que, en efecto, una Sala *ad hoc* ha tenido oportunidad, hasta ahora, de adoptar medidas de este tipo ha sido en la controversia fronteriza entre *Burkina Faso y la República de Malí*. Ambos Estados -Alto Volta (desde el 4 de agosto de 1984, cambia su denominación por la de Burkina Faso⁷⁶) y Malí- habían firmado un compromiso el 16 de septiembre de 1983⁷⁷, con el objeto de someter a conocimiento de una Sala *ad hoc* la controversia relativa a la delimitación de una parte de su frontera común⁷⁸.

⁷⁵ Vid. Ordenanza de 10 de enero de 1986, en CIJ Recueil 1986, p.4.

⁷⁶ Por una carta, depositada en la Secretaría de la Corte el 4 de septiembre de 1984, se informa a esta institución del cambio de denominación de este Estado. Vid. Sentencia de 22 de diciembre de 1986, en CIJ Recueil 1986, p. 558.

⁷⁷ Este compromiso -cuya celebración fue una sugerencia senegalesa- se depositó en la Secretaría de la Corte el 20 de Octubre de 1985. Vid. en este sentido Sentencia de 22 de diciembre de 1986, Vid. en CIJ Recueil 1986, p. 557. Entre la doctrina E. DECAUX "L'arrêt de la Chambre...op. cit., p.215; J.C. GAUTRON "Création d'une chambre au sein de la Cour Internationale de Justice, mesures conservatoires et médiation dans le différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali. Ordonnance du 10 janvier 1986" en AFDI, 1986, t. XXXII, pp.192-3 y 199-202; J-P QUENEUDEC "Le Règlement du différend frontalier Burkina Faso/Mali par la Cour Internationale de Justice" en Revue Juridique et Politique, 1988, vol. 42, pp. 29-41.

⁷⁸ Según el art. I del Compromiso de 16 de septiembre de 1983 (Vid. este artículo en la Ordenanza de 10 de enero de 1986, CIJ Recueil 1986, p.9 y el texto completo del compromiso en la Sentencia de 22 de diciembre de 1986, en CIJ Recueil 1986, p.557), entre Burkina Faso y la República de Malí, la zona pendiente de delimitación es aquella franja territorial «qui s'étend du secteur Koro (Mali) Djibo (Burkina Faso), jusques et y compris la région de Béli». Según E. DECAUX "L'arrêt de la Chambre...op. cit., pp. 216-217; J.C. GAUTRON "Création d'une chambre...op. cit., pp. 194-196; J-P QUENEUDEC "Le Règlement ...op. cit, p.34. Es una zona que comprende 300 km. de los 1.300 Km que tiene la frontera común entre ambos Estados.

Durante el desarrollo de la fase escrita del procedimiento⁷⁹ se produjeron unos incidentes⁸⁰ que degeneraron en confrontaciones armadas el día de Navidad de 1985. Las acciones armadas recordaban las producidas diez años antes -en 1974-, e hicieron temer una inminente guerra fronteriza. Estos hechos provocaron la constitución de una comisión de mediación en el seno de la OUA para que intentara aportar una solución al conflicto. Posteriormente, las partes acudieron nuevamente a la mediación aunque en esta ocasión en un marco defensivo: el del Acuerdo de No agresión y de Asistencia en materia de Defensa -ANAD-⁸¹. Gracias a estos últimos esfuerzos mediadores no sólo se logró el alto el fuego de 30 de diciembre de 1985, sino también el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas por la Sala *ad hoc* encargada de conocer del fondo del asunto⁸².

En vista de la situación, el co-agente de Burkina-Faso, comunicó al Secretario de la Corte su intención de solicitar la indicación de medidas cautelares⁸³, con el objeto de mantener la paz en la zona. En los primeros días

⁷⁹ Ambos Gobiernos depositaron sus memorias ante el *Greffier* de la Corte el 3 de octubre de 1985. Por tanto, las acciones armadas objeto de la solicitud de medidas cautelares señaladas tuvieron lugar cuando había transcurrido poco más de un mes desde la presentación de aquéllas.

⁸⁰ Los incidentes armados se produjeron en los lugares cuya soberanía suponía el objeto del litigio principal. Burkina Faso emprendió una operación de empadronamiento en la zona cuya soberanía era controvertida aunque se encontraba bajo su administración. Esta operación provocó disturbios, por lo que las Autoridades de Burkina Faso decidieron que los agentes del censo realizaran su labor acompañados por «*brigades de comités de défense de la révolution et des éléments réguliers des forces armées*» -J.C. GAUTRON "Création d'une chambre...op. cit., p. 203-. La respuesta de Mali no se hizo esperar, lanzando un ataque aéreo sobre algunas zonas fronterizas e iniciándose combates armados en el resto -E. DECAUX "L'arrêt de la chambre...op. cit., p. 217-.

⁸¹ El Acuerdo fue firmado en Abidjan el 9 de julio de 1977 entre los Estados miembros de la Comunidad Económica de África Occidental.

⁸² *Vid.* en este sentido E. DECAUX "L'arrêt de la Chambre...op. cit., p. 192; J.C. GAUTRON "Création d'une chambre...op. cit., pp. 197-198 y 206-209; J-P QUENEUDEC "Le Règlement ...op. cit., p.32.

⁸³ Esta información en primer lugar se realizó telefónicamente y después mediante telegrama. Al co-agente de la República de Malí se le comunica la solicitud de Burkina Faso por teléfono y, en el transcurso de esta conversación anuncia el envío de una carta en la que sugería la

de enero de 1986 Burkina Faso presenta una demanda de indicación de medidas cautelares. Cuatro días más tarde, Mali depositaba un documento en el mismo sentido que el anterior⁸⁴.

Es la primera vez que dos Estados partes en una controversia se dirigen a la Corte de modo paralelo solicitando la adopción de medidas cautelares y, también, en que se demanda la indicación de estas medidas en un procedimiento incoado ante una Sala *ad hoc*. Evidentemente, no cabe predicar este paralelismo como peculiaridad de estas Salas, ya que el que fueran ambos Estados los que solicitasen de manera unilateral -aunque cronológicamente coincidente- la consideración de este tipo de medidas responde a la evolución del propio conflicto. Este asunto no sólo requirió la indicación de medidas provisionales por la Sala, sino también la mediación, desarrollada en el marco de la ANAD -anterior a la solicitud de aquellas-⁸⁵.

En la carta de 2 de enero -fechada el 30 de diciembre-, Burkina Faso demandaba la adopción de tres tipos de medidas -la primera, activa, y las dos últimas, pasivas-, todas ellas de carácter bilateral⁸⁶. A saber: (1) solicita la retirada de las tropas -de ambos lados- de la línea que propuso el 14 de junio de 1975 la Subcomisión Jurídica de la Comisión de Mediación de la OUA; (2)

adopción de este tipo de medidas. *Vid.* Ordenanza de 10 de enero de 1986, en CIJ Recueil 1986, p.4.

⁸⁴ Las cartas estaban fechadas respectivamente el 30 y el 27 de diciembre de 1985, habiendo sido recibidas por el *Greffier* los días 2 y 6 del mes de enero de 1986. *Vid.* Ordenanza de 10 de enero de 1986, en CIJ Recueil 1986, p.4.

⁸⁵ Los Jefes de Estado, tanto de Burkina Faso como de la República de Malí, decidieron el 31 de diciembre de 1985 las modalidades de alto el fuego, que ya habían sido acordadas en la reunión extraordinaria de la ANAD del día anterior en Abidjan. Mientras, el *Greffier* de la Corte recibió el 2 y el 6 de enero de 1986 las copias tanto de la demanda de medidas cautelares de Burkina Faso como de la carta de Malí. Los originales llevan fecha de 30 y 27 de diciembre de 1985 respectivamente. *Vid.* Ordenanza 10 de enero de 1986, en CIJ Recueil 1986, p. 4.

⁸⁶ *Vid.* Ordenanza de 10 de enero de 1986, en CIJ Recueil 1986, p.5.

las partes se abstendrán de impedir o dificultar la ejecución de la Sentencia de la Sala de la Corte; (3) las partes igualmente impedirán la pérdida de los elementos probatorios en esta fase incidental.

Por su parte, en la carta recibida por la Corte el 6 de enero -con fecha de 27 de diciembre de 1985⁸⁷-, Mali formula unas observaciones en las que plantea la adopción de oficio por la Sala de medidas cautelares, sugiriendo la procedencia de unas concretas de carácter unilateral únicamente aplicables a Burkina Faso⁸⁸. Entre ellas, una pasiva: invitar a Burkina Faso a que se abstenga de realizar cualquier acto que pueda agravar la controversia sometida a la Sala de la Corte; y otra activa: retirar los elementos armados en las zonas en las que hubiera introducido estos efectivos. Si bien formalmente no es una demanda de medidas cautelares, sustancialmente puede calificarse de este modo, como observó el gobierno de este Estado⁸⁹.

De las primeras solicitudes de las partes se desprende que la finalidad perseguida por ambos Estados con la indicación de las medidas cautelares era distinta. La República de Mali pretendía obtener una especie de sanción judicial al comportamiento de Burkina Faso, mientras este último solicitaba que la Sala fijase la línea de retirada de tropas. Por tanto, nos encontramos ante demandas paralelas de adopción de medidas cautelares, aunque asimétricas, puesto que no existe una coincidencia sustantiva ni en cuanto a los objetivos perseguidos por las partes ni en cuanto a la identidad de las medidas.

⁸⁷ Como indica J.C. GAUTRON "Création d'une chambre... op. cit., p. 205, a pesar de la fecha de esta carta, del contenido de la misma se infiere su posible redacción antes de producirse los incidentes del día de Navidad de 1985, ya que hace referencia a las actuaciones llevadas a cabo por Burkina Faso, sin mencionar los hechos producidos en la fecha señalada.

⁸⁸ Vid. Ordenanza de 10 de enero de 1986, en CIJ Recueil 1986, p.5 .

⁸⁹ Vid. J.C. GAUTRON "Création d'une chambre...op. cit., p. 204.

El 7 de enero la República de Mali depositó una demanda formal de indicación de medidas cautelares. En ella se hacía notar la inoperancia de la sugerencia contenida en la carta anterior, por lo que decidía solicitar la adopción de unas medidas que en esta ocasión poseen carácter bilateral y sustancialmente son menos estrictas que las anteriores, al desaparecer la invitación a Burkina Faso para la retirada de sus elementos armados introducidos en la zona en la que se produjeron los disturbios⁹⁰. Con esta variación en la solicitud de Mali su *petitum* se aproxima al de Burkina Faso, pese lo cual, subsisten las discrepancias entre ellas⁹¹. Así, Mali no desea el pronunciamiento de la Sala sobre los aspectos de los que conoce la ANAD⁹².

Los frutos que esta mediación va obteniendo provocan la modificación de las solicitudes de medidas de las partes. El Gobierno de Malí señaló que la Sala no debería pronunciarse sobre una de las cuestiones indicadas por Burkina Faso: la retirada de tropas que era el objeto de la mediación en el marco de la ANAD⁹³.

En las audiencias orales -9 de enero de 1986- las partes se ratifican en el contenido de sus últimos escritos y Burkina Faso añade una cuarta medida

⁹⁰ Vid. Ordenanza de 10 de enero de 1986, en CIJ Recueil 1986, p. 6.

⁹¹ La solicitud de la República de Malí tiene carácter pasivo y supone la invitación a las Partes a abstenerse de todos los actos que puedan prejuzgar los derechos de la otra o agravar la diferencia sometida a la Corte.

⁹² Además, este último Estado introduce una observación a la demanda de Burkina Faso -Vid. Ordenanza de 10 de enero de 1986, en CIJ Recueil 1986, p.7-, tendente a la retirada de tropas, al estimarla

«...incompatible avec la déclaration signée par les deux Chefs d'Etat de Burkina Faso et du Mali le 31 décembre 1985 par laquelle ils ont arrêté les modalités du cessez-le feu»

⁹³ Así lo manifestó tanto en la carta de 7 de enero, como en las intervenciones de sus representantes -el Co-agente Sr. DIARRA y el Consejero Sr. SALMON- en las audiencias orales.

-pasiva-: la abstención de las partes de cualquier acto de administración territorial más allá de la línea señalada en junio de 1975 por la OUA⁹⁴.

A pesar de las reticencias manifestadas por Mali, la Sala se manifestó competente con carácter general para decidir medidas cautelares en el caso concreto, competencia que derivaba de la doble solicitud acerca de la adopción de estas medidas. A este respecto ya se había manifestado el Pleno con anterioridad al asunto que nos ocupa; así en la Sentencia de 19 de diciembre de 1978 en el asunto de la *Plataforma Continental del Mar Egeo*:

*«Consequently, the fact that negotiations are being actively pursued during the present proceeding is not, legally, any obstacle to the exercise by the Court of its judicial function»*⁹⁵

Posteriormente, la Corte se pronunció en el mismo sentido en los asuntos del *Personal Diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán*, respecto de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas⁹⁶, y de las *actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua*, acerca de la mediación del Grupo de Contadora⁹⁷.

Así, ahora, la Sala se pronuncia sobre el aspecto objetado por la República de Malí, al entender

*«que le fait que les deux Parties ont chargé un autre organe de définir les modalités du retrait des troupes ne prive nullement la Chambre des droits et devoirs qui sont les siens dans l'affaire portée devant elle»*⁹⁸

⁹⁴ *Id.* nota anterior, pp. 7-8.

⁹⁵ *Vid.* en CIJ Recueil 1978, p. 12.

⁹⁶ Ordenanza de 15 de diciembre de 1979, *Vid.* en CIJ Recueil 1979, p.15.

⁹⁷ Ordenanza de 10 de mayo de 1984, *Vid.* en CIJ Recueil 1984, p. 207

⁹⁸ *Vid.* Ordenanza de 10 de enero de 1986, en CIJ Recueil 1986, p.10.

Años más tarde, en 1992 con ocasión del asunto *Lockerbie*, la CIJ rechazó indicar medidas cautelares porque «*les circonstances de l'espèce ne sont pas de nature à exiger l'exercice de son pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires en vertu de l'article 41 du Statut*»⁹⁹. La Corte en su argumentación conjuga los arts. 25 y 103 de la Carta para concluir que los Estados miembros de las Naciones Unidas asumen la prevalencia de las obligaciones derivadas de la Carta sobre cualesquiera otras, en este caso sobre las contenidas en el Convenio de Montreal de 1972. Por ello la CIJ no puede proteger mediante la adopción de medidas cautelares los derechos de este último texto convencional frente a las resoluciones del CdS¹⁰⁰.

Volviendo a la *diferencia fronteriza* entre Burkina Faso y Mali, la Sala resolvió, por unanimidad, indicar unas medidas cautelares, de carácter pasivo todas ellas, que coincidían prácticamente con las solicitadas por Burkina Faso. La Sala, en efecto, pidió a las partes que facilitasen la ejecución de la Sentencia a dictar por la Sala en este asunto y que se abstuviesen de actos que pudiesen impedir la reunión de pruebas necesarias para resolver el fondo

⁹⁹ Vid. en la Ordenanza de 14 de abril de 1992, en CIJ Recueil 1992, p. 17.

¹⁰⁰ La argumentación completa de la Corte es la siguiente (CIJ Recueil 1992, p. 15):

«Considérant que la Libye et les Etats-Unis, en tant que Membres de l'Organisation des Nations Unies, sont dans l'obligation d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de Sécurité conformément à l'article 25 de la Charte; que la Cour, qui, à ce stade de la procédure, en est à l'examen d'une demande en indication de mesures conservatoires, estime que prima facie cette obligation s'étend à la décision contenue dans la résolution 748 (1992); et que, conformément à l'article 103 de la Charte, les obligations des Parties à cet égard prévalent sur leurs obligations en vertu de tout autre accord international, y compris la convention de Montréal;

Considérant que si, à cet stade, la Cour n'a donc pas à se prononcer définitivement sur l'effet juridique de la résolution 748 (1992) du Conseil de Sécurité, elle estime cependant que, quelle qu'ait été la situation avant l'adoption de cette résolution, les droits que la Libye dit tenir de la convention de Montréal ne peuvent à présent être considérés comme des droits qu'il conviendrait de protéger par l'indication de mesures conservatoires;

Considérant en outre qu'une indication des mesures demandées par la Libye serait de nature à porter atteinte aux droits que la résolution 748 (1992) du Conseil de Sécurité semble prima facie avoir conférés au Royaume Uni»

del asunto e impuso el respeto del alto el fuego acordado en la reunión de la OUA de 31 de diciembre de 1985. Además, la Sala dispuso la determinación de unas líneas de protección, acordadas entre los Gobiernos de los Estados en conflicto, de modo que fuera de ellas no pudiesen encontrarse tropas de dichos Estados, y ordenó, que no se modificase la administración territorial que era objeto de las medidas cautelares¹⁰¹.

Por lo que respecta al resultado del doble -y simultáneo- método de solución de controversias empleado: mediación y arreglo judicial, se aprecia su complementariedad para lograr el objeto previsto¹⁰².

La afirmación anterior ha de entenderse en el sentido siguiente: (1) El acuerdo alcanzado el 30 de diciembre de 1985 en el seno del ANAD es el que motivó tanto la demanda formal de Mali, como la de Burkina Faso introducida en la audiencia oral¹⁰³; (2) La referencia a la retirada de tropas se hace a la línea marcada por la subcomisión jurídica de la OUA en 1975¹⁰⁴; (3) La Ordenanza de la Sala produjo una aceleración del procedimiento de arreglo político en el seno del ANAD¹⁰⁵; (4) Gracias a la mediación fue posible por primera vez en la historia de la CIJ la ejecución de las medidas cautelares indicadas por la Corte -por una de sus Salas *ad hoc*-¹⁰⁶.

¹⁰¹ La Corte puede adoptar medidas cautelares que deba ejecutar una de las partes en una diferencia o a ambas, aunque esta última modalidad la ha utilizado en escasas ocasiones (*Anglo-iranian oil company* y *Diferencia fronteriza* entre Burkina Faso y la República de Mali). Además en este último asunto, la Sala invitó a las partes a acordar las líneas provisionales de retirada, que serían posteriormente fijadas por esta formación -Ordenanza de 10 de enero de 1986, CIJ, Recueil 1986, p.10-12.

¹⁰² Vid. en este sentido E. DECAUX "L'arrêt de la Chambre...op. cit., p. 192; J.C. GAUTRON "Création d'une chambre...op. cit., pp. 209-214.

¹⁰³ Vid. J.C. GAUTRON "Création d'une chambre...op. cit., pp. 205-206.

¹⁰⁴ Vid. Ordenanza de 10 de enero de 1986, pp. 11-12.

¹⁰⁵ Vid. Sentencia de 22 de diciembre de 1986, en CIJ Recueil 1986, p. 559.

¹⁰⁶ *Id.* Nota anterior.

El procedimiento por el que se adoptaron medidas cautelares en este caso ofrece otras particularidades que es oportuno referir, además de la ya indicada de su petición unilateral aunque cronológicamente paralela. Así ha de destacarse la celeridad con que fueron adoptadas las medidas, por cuanto una semana después de la recepción de las cartas solicitándola se adoptó la Ordenanza -el 10 de enero de 1986-. En cierto momento, Malí alegó como causa de incompetencia de la Sala para indicar medidas cautelares la litispendencia. Esta no era ciertamente una defensa novedosa, pero sí lo suponía el Órgano respecto del cual se alegaba esta objeción. No era ya el Consejo de Seguridad como en ocasiones anteriores -y posteriores- sino un órgano de carácter defensivo: ANAD. En cuanto al procedimiento para la indicación de estas medidas se sustanció mediante la presentación de unas observaciones escritas -las cartas de las partes- y unas audiencias orales. La CIJ indicó unas medidas parcialmente coincidentes con las solicitadas con una de las partes: Burkina Faso.

4. INTERVENCIÓN.

4.1. Planteamiento general.

Como señala, acertadamente a nuestro entender, A. ZIMMERMANN, el procedimiento ante las Salas y la intervención no son *per se* incompatibles¹⁰⁷. Sin embargo, el Estado que desea intervenir puede preferir

¹⁰⁷ Vid. A. ZIMMERMANN "Ad hoc Chambers of the International Court of Justice" en *DJIL*, vol. 8, nº1, 1989, pp. 26-27 y su nota 183.

que la solicitud de intervención sea ventilada por un foro distinto de la Sala *ad hoc* que está conociendo del procedimiento principal, precaución lógica si observamos el trámite por el que se establece la composición de estas formaciones.

En la historia de la Corte se ha solicitado la intervención en distintas ocasiones¹⁰⁸. Unas veces, las menos, la Corte ha aceptado la demanda; otras, las más, ha rechazado estas solicitudes y eso sin contar las solicitudes que no llegaron a concretarse¹⁰⁹.

El Estatuto contempla dos tipos de intervención con regímenes yuxtapuestos. El art.62¹¹⁰ contiene la norma general¹¹¹. Por este concepto sólo

¹⁰⁸ Ciertamente, dada la utilización que de esta institución han hecho los Estados, la intervención no puede ser calificada como un incidente operativo. Ello se debe a dos motivos: el primero, la Corte en escasas ocasiones ha recibido solicitudes de aplicación de este incidente y, el segundo, en la casi totalidad de ellas, la respuesta de la Corte fue el rechazo de la demanda. Por ello, E. DECAUX "L'intervention" en *La juridiction internationale permanente. Colloque de Lyon, Paris 1987*, p.233, habla de procedimiento *largamente olvidado*. Marcelo G. KOHEN "La requête à fin d'intervention du Nicaragua dans l'affaire du différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras). L'ordonnance de la Cour du 28 février 1990, et l'arrêt de la Chambre du 13 septembre 1990" en *AFDI*, 1990, p.343, señala que se creía una institución difunta por el rechazo de las demandas maltesa e italiana. En ellas la CIJ, según este autor, había erigido un verdadero principio de *no intervención* en los procedimientos internacionales.

¹⁰⁹ Islandia inicialmente solicitó intervenir en el asunto del *estatuto jurídico de Groenlandia Oriental*; sin embargo, tras el cambio de su Primer Ministro fue retirada la demanda. *Vid.* CPJI Serie A/B, n°43 y CPJI Serie C, n°67, pp. 4081 y 4118. Yugoslavia, en el asunto del *Estrecho de Corfú*, solicitaba una intervención indirecta o colaboración con el Tribunal. *Vid.* en CIJ *Recueil*, 1949, p. 17. Islandia en el asunto de las *pesquerías anglo-noruegas* en CIJ *Memoires, pladoires et documents*, vol IV, p. 639 (carta del ministro islandés) y p. 671-672 (respuesta del *Greffier*). Cabría añadir las recientes solicitudes en el caso de las pruebas nucleares francesas.

¹¹⁰ Art. 62 del Estatuto: «1. Si un Estado considerare que tiene un interés de orden jurídico que puede ser afectado por la decisión del litigio, podrá pedir a la Corte que le permita intervenir. 2. La Corte decidirá con respecto a dicha petición»

¹¹¹ *Vid.* en este sentido G. MORELLI "Sul controllo della Corte Internazionale di Giustizia circa l'ammissibilità dell'intervento in causa" en *RDI*, 1984-1, p.7; "Note sull'intervento nell processo internazionale" en *RDI*, 1982, p.805 y "Fonction et objet de l'intervention dans le procès international" en *Essays in International Law in honour of Judge Manfred Lachs*, p. 403. Se ha denominado como intervención ordinaria o discrecional. *Vid.* R. CASADO RAIGON *La jurisdicción contenciosa de la Corte Internacional de Justicia*, Córdoba, 1987, p.16; A. DAVI *L'intervento davanti alla Corte Internazionale di Giustizia*, Napoles, 1984, p. 51; E. DECAUX "L'intervention" op. cit. p. 219, la define como solicitud de intervención sometida a decisión; T.O. ELIAS *The ICJ and some contemporary problems*, La Haya 1983, p. 83; G. FITZMAURICE "The Law and Procedure of International Court of Justice 1951-1954: Questions of Jurisdiction, Competence and Procedure"

ha sido aceptada -y lo fue parcialmente- la intervención de Nicaragua en la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador -asunto del que conoció una Sala *ad hoc*¹¹²-, habiéndose solicitado a la Corte la intervención por el mismo concepto por Fiji, en el asunto de los *Ensayos Nucleares*¹¹³, por Malta en la *Plataforma Continental entre Túnez y Libia*¹¹⁴ y por Italia en el asunto de la *Plataforma Continental entre Libia y Malta*¹¹⁵. La primera vez que la CIJ ha admitido la intervención de un tercer Estado ex art. 62 del Estatuto ha sido, por tanto, en una Sala *ad hoc*, sin que ello implique la idoneidad técnica de estas formaciones para la tramitación de estos incidentes procesales.

El art. 63¹¹⁶ determina la norma especial¹¹⁷. Con fundamento en este precepto han sido admitidas las intervenciones de Polonia en el asunto

en BYIL, 1958, pp. 126-127; G. FITZMAURICE *The Law and Procedure of International Court of Justice*, vol. II, Cambridge, 1986, p. 550; G. GUYOMAR *Commentaire du Règlement de la Cour Internationale de Justice* (adopté le 14 avril 1978) *Interpretation et pratique*, Paris 1983, p. 535; Facultativa, la denomina P.C. JESSUP "Intervention in the International Court" en *AJIL*, vol. 75, 1981-4, pp.903-909; P. LAMBERTI ZANARDI "Il procedimento sulle eccezioni preliminari nel processo davanti alla Corte Internazionale di Giustizia" en *RDI*, 1965, p.566; G. MORELLI "Sul controllo della Corte Internazionale di Giustizia circa l'ammissibilità dell'intervento in causa" en *RDI*, 1984-1, p.7; "Note sull'intervento nell processo internazionale" en *RDI*, 1982, p.805 y "Fonction et objet de l'intervention dans le procès international" en *Essays in International Law in honour of Judge Manfred Lachs*, p. 403; J.J. QUINTANA "The intervention by Nicaragua in the case between El Salvador and Honduras before an *ad hoc* chamber of the International Court of Justice" en *NILR*, 1991, p. 200; R.M. RIQUELME CORTADO *La intervención...* *op. cit.*, p. 17.

¹¹² Vid. en Ordenanza 13 de septiembre de 1990 en CIJ Recueil 1990, p.92 y ss.

¹¹³ Vid. CIJ Recueil 1973, pp. 321 y 325 y ss.

¹¹⁴ Vid. CIJ Recueil 1981, pp.3 y ss.

¹¹⁵ Vid. CIJ Recueil 1984, p.3 y ss.

¹¹⁶ Art. 63 del Estatuto: «1. Cuando se trate de la interpretación de una convención en la cual sean partes otros Estados además de las partes en litigio, el Secretario notificará inmediatamente a todos los Estados interesados.2. Todo Estado así notificado tendrá derecho a intervenir en el proceso; pero si ejerce ese derecho, la interpretación contenida en el fallo será igualmente obligatoria para él.»

¹¹⁷ Doctrinalmente calificada como interpretativa o automática. Esta última calificación se debe a la propia concepción de este tipo de intervención como un derecho de los Estados

*Wimbledon*¹¹⁸ y de Cuba en el *Haya de La Torre*¹¹⁹. Aunque solicitudes de intervención de esta clase son desconocidas en la práctica de las Salas *ad hoc*, nada obsta para que puedan plantearseles.

4.1.1. Intervención ordinaria.

Conocida la actitud de la Corte hacia las solicitudes de este tipo de intervención parecía que nunca fuéramos a presenciar una respuesta afirmativa a las demandas con fundamento en el art 62 del Estatuto. Debimos esperar a que ello se produjera ante una Sala *ad hoc* de la Corte, lo que planteó para el tercero interviniente un problema adicional a los derivados de la interposición de este tipo de incidentes: el que encontraba fundamento en el procedimiento de composición de la Sala y la influencia de las partes en el mismo.

En este epígrafe nos vamos a referir a dos problemas que plantea este tipo de intervención: en primer lugar, a los requisitos que estatutaria y reglamentariamente deben satisfacerse para que sea admitida una demanda en este sentido; en segundo término, nos ocuparemos del estatuto jurídico del tercero admitido como interviniente.

partes en el Tratado cuya interpretación es objeto del litigio. A pesar ello, habrán de respetar unos requisitos formales, tal y como se desprende de la argumentación de la Corte en la Ordenanza de 4 de octubre de 1984, por la que se rechazaba la demanda salvadoreña de intervención, en el asunto de las *actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua*. En esta ocasión la Corte entendió que la declaración de intervención presentada por El Salvador «*is inadmissible inasmuch as it relates to the current phase of the proceedings brought by Nicaragua against the United States*» -CIJ Recueil 1984, p.216-

¹¹⁸ Vid. Sentencia de 28 de junio de 1923 en CPJI Serie A, vol.1, pp.11 y ss.

¹¹⁹ Vid. Sentencia de 13 de junio de 1951, en CIJ Recueil 1951, pp. 71 y ss.

a.- Requisitos

Para que pueda producirse la admisión de una solicitud de intervención basada en el art. 62 del Estatuto, es necesario el cumplimiento de una serie de requisitos. Estos son idénticos con independencia de la formación de la Corte -Pleno o una de las Salas- ante la que se formule la solicitud, por cuanto no existe una regulación especial de las Salas a estos efectos, sino bien al contrario, el art. 90 del Reglamento contiene una remisión general a las normas que rigen el procedimiento ante el Pleno. Algunos de los requisitos apuntados están impuestos por el Estatuto -art. 62.1- y otros únicamente por el Reglamento -art. 81.2-.

i) Interés jurídico (art. 62.1 Estatuto y 81.2.a) del Reglamento)

El primero de los requisitos a cumplir por una solicitud de intervención del art. 62 del Estatuto es la apreciación de la existencia de un *interés jurídico* del Estado que pretende intervenir, interés que ha de resultar susceptible de afectación por la decisión de la Corte acerca del procedimiento en causa. Al tratarse de un requisito estatutario deberá ser el primer aspecto a considerar por la Corte cuando reciba una solicitud de intervención.

En cuanto al interés objeto de protección, hemos de indicar la existencia de una doble limitación: una primera, en cuanto a su naturaleza, pues habrá de tratarse de un interés *jurídico* y no de otro tipo¹²⁰; y una segunda

¹²⁰ Vid. en este sentido G. FITZMAURICE "The Law and Procedure of the International ...op. cit., p. 126; M.G. KOHEN "La requête... op. cit. p.361; P. LAMBERTI ZANARDI

resaltada últimamente por la Sala encargada de la solicitud nicaragüense de intervención en el asunto El Salvador/Honduras, consistente en la demostración por el solicitante de que su interés jurídico **puede** resultar *afectado* -y no que lo será necesariamente-¹²¹.

No puede indicarse la precisión con que habrá de desarrollar este punto el solicitante. Si comparamos la consistencia de este requisito en las solicitudes de intervención que se han producido hasta el momento ex art. 62 cabría contrastar el supuesto italiano¹²² con el nicaragüense. Mientras que la Corte estimó que, aunque Italia solicitaba salvaguardar sus derechos,

*«...the unavoidable practical effect of its request is that the Court will be called upon to recognize those rights, and hence, for the purpose of being able to do so, to make a finding, at least in part, on disputes between Italy and one or both of the Parties»*¹²³,

en el extremo opuesto al italiano, la Sala que conoció de la solicitud nicaragüense reprocha a Nicaragua la escasa precisión del interés jurídico objeto de protección¹²⁴. Es decir, a Nicaragua se le reprende por haber tratado de ajustar su argumentación a los motivos inspiradores del rechazo de la Corte a la solicitud italiana, y si a Italia se le acusó en 1984 de haber procedido a la

¹²¹ Il procedimiento... op. cit. p.568; R. RIQUELME CORTADO La intervención... op. cit., p. 64; Sh. ROSENNE "Some Reflections on Intervention in the International Court of Justice" en NILR, 1987, p.79.

¹²² Vid. Sentencia de 13 de septiembre de 1990, en el asunto de la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* (El Salvador/Honduras), en CIJ Recueil 1990, p.117. Vid. CIJ Recueil 1990, p.117.

¹²³ Con este término nos referimos a la demanda de intervención de Italia en el asunto de la *Plataforma Continental entre Malta y Libia* y la subsiguiente Sentencia de la Corte.

¹²⁴ Vid. en CIJ Recueil 1984, paragrafo 29.

¹²⁵ Marcelo G. KOHEN "La requête... op. cit., p. 362 indica que Nicaragua en su interés por evitar pecar por exceso, peca en este sentido por defecto

determinación de las zonas acerca de las que solicitaba intervenir, a Nicaragua se le reclama precisamente no haberlo hecho¹²⁵.

Por tanto, el Estado que pretende intervenir ha de expresar el interés jurídico objetivo susceptible de ser afectado por la decisión de la Corte en el procedimiento principal, siempre con el desasosiego de que se juzgue por exceso su minuciosidad y por defecto su laconismo. No existen, como ha advertido Marcelo G. KOHEN, criterios precisos al respecto¹²⁶.

Sin embargo, hay algunos supuestos en los que el objeto de la controversia sometido a conocimiento de la Corte puede afectar a terceros Estados, hasta el punto de arriesgarse a disponer de sus derechos; son casos en los que la Corte se ha negado a pronunciarse precisamente por la ausencia de este tercer Estado que no ha solicitado esta intervención. Recordemos el

125 *Vid* respectivamente CIJ Recueil 1984, pp.19-22 y CIJ Recueil 1990, pp. 125-128.

126 Marcelo G. KOHEN "La requête...op. cit. p. 365.

caso del oro amonedado procedente de Roma en 1943¹²⁷, o el más reciente de Timor Oriental¹²⁸.

ii) Plazo de depósito de la demanda de intervención (art. 81.1 del Reglamento)

El segundo requisito, que viene de antiguo en los Reglamentos de la Corte, es el relativo al plazo de depósito de la solicitud de intervención. El texto de 1978 introdujo, no obstante, en él un elemento restrictivo, limitándolo como regla general al final del procedimiento escrito, mientras los textos precedentes -art. 69.1 de los Reglamentos de 1946 y de 1972- lo extendían hasta la apertura de la fase oral. De todos modos la Corte se reserva la posibilidad de conocer de las solicitudes presentadas fuera de plazo en circunstancias excepcionales. El

¹²⁷ Italia c. Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. La CIJ se pronuncia acerca de la excepción preliminar interpuesta por el demandante, puesto que el oro retirado de Roma por los alemanes en 1943 pertenecía al Banco Nacional de Albania y Albania no era parte en el proceso. La Corte admitió esta excepción preliminar declarándose incompetente para conocer del fondo del asunto. *Vid.* la Sentencia de 15 de junio de 1954 en CIJ Recueil 1954, p. 19 y ss. El asunto de *ciertas tierras fosfatadas en Nauru* (Naurú c. Australia) es un caso en que una parte intenta -y no consigue- que la Corte no conozca del caso acudiendo a la doctrina del *Oro amonedado*. Naurú solicita que la Corte se pronuncie acerca de la violación por parte de Australia de las obligaciones de tutela derivadas del art. 76 de la Carta de las NN.UU., así como del Acuerdo de tutela de 1 de noviembre de 1947. Naurú perseguía un pronunciamiento de la Corte para que Australia reparase a Nauru por los perjuicios sufridos por ciertas tierras explotadas por su carácter fosfático. Australia introduce excepciones preliminares de incompetencia de la Corte e inadmisibilidad de la demanda por entender que en la empresa explotadora de estas tierras no participaba únicamente Australia, junto a ella se encontraban también el Reino Unido y Nueva Zelanda. La Corte declara competente para conocer del fondo y la admisibilidad de la demanda, rechazando por tanto las excepciones australianas salvo una cuyo estudio decide unir al fondo. Durante la fase escrita del procedimiento las partes depositan ante el *Greffier* de la Corte una notificación conjunta por la que comunican a la Corte haber alcanzado un acuerdo amistoso y su intención de desistir de la continuación procesal. *Vid.* Sentencia de 26 de junio de 1992, en CIJ Recueil 1992, pp. 240 y ss.

¹²⁸ Portugal c. Australia. Australia había celebrado un tratado con Indonesia de exploración y explotación de la plataforma continental en la denominada falla de Timor. Portugal se consideraba legitimado para demandar a Australia como potencia administradora sobre ese territorio, entendía que debía haber participado en la negociación de aquel Tratado. El problema era que el territorio de Timor Oriental había sido ocupado por Indonesia. La Corte se declara incompetente para conocer del fondo del asunto por considerar a Indonesia -ausente del procedimiento- *parte indispensable* en él.

problema que deriva de esta salvedad es el relativo a la falta de precisión de las circunstancias referidas. Además, en éste, como en tantos otros aspectos relativos a la Corte, carecemos de la práctica judicial que nos indique en qué situaciones concretas se traducen las apuntadas circunstancias excepcionales. Ahora bien, teniendo en cuenta la inclinación restrictiva que la CIJ ha manifestado hasta el momento respecto de este incidente procesal, cabe suponerle llegado el caso una actitud más bien rigurosa.

Por otra parte, no ha sido la infracción de este requisito lo que ha llevado a la Corte a denegar solicitud alguna, ya que todas las que pretendían la intervención ex art. 62 del Estatuto, se depositaron dentro del plazo indicado por el art. 81.1, aunque unas¹²⁹ con mayor antelación que otras¹³⁰.

129 Fiji depositó su solicitud de intervención en el asunto de los *Ensayos Nucleares -Australia y Nueva Zelanda c. Francia-*, siete días después de introducirse las demandas de estos dos últimos Estados. Estas se depositaron el 9 de mayo de 1973 y la de Fiji el día 16 del mismo mes (Vid. en CIJ *Recueil* 1973, pp. 320 y 324). Las Ordenanzas de 22 de junio de 1973 (CIJ *Recueil* 1973, p.106 y 142), señalaron que la fecha límite para el depósito de las memorias australiana y neozelandesa es el 21 de septiembre de 1973, mientras para la francesa, se fijó tres meses más tarde. Posteriormente la Ordenanza de 28 de agosto de 1973 (CIJ *Recueil* 1973 p.339) retrasó el plazo de depósito para la memoria australiana al 23 de noviembre de 1973 y la francesa al 19 de abril del año siguiente. Por su parte, la Ordenanza de la Corte de 6 de septiembre de 1973 prorroga el plazo de depósito de las memorias neozelandesa y francesa al 2 de noviembre de 1973 y 22 de marzo de 1974 respectivamente. Por tanto, no sólo no se había agotado el plazo de depósito de las memorias escritas, sino que se llevó a cabo con demasiada antelación a juicio de la Corte, por lo que decide (por ocho votos contra cinco)

«surseoir à l'examen de la requête par laquelle le Gouvernement fidjien demande à intervenir dans l'instance introduite par l'Australie contre la France jusqu'à ce qu'elle ait statué sur les questions dont traiteront les pièces écrites mentionnées dans son ordonnance du 22 juin 1973»

Vid. en las ordenanzas de 12 de julio de 1973, en CIJ *Recueil* 1973, p.321. Con idénticos términos se pronuncia la Corte respecto de la demanda neozelandesa en CIJ *Recueil* 1973, p.325.

Nicaragua, por su parte, presentó su demanda de intervención cuando faltaban algo menos de dos meses para el final del procedimiento escrito (56 días exactamente). El de la solicitud nicaragüense es el segundo de los depósitos producidos en lo que a rapidez se refiere. Por tanto, igual que en el caso anterior, no cabe cuestionarse acerca de la posible preclusión del plazo. Lo que se plantea M. G. KOHEN "La requête...op. cit., p.349; es en qué medida si el depósito hubiera sido anterior a la constitución de la Sala -que tuvo lugar en la Ordenanza de 8 de mayo de 1987-, esta demanda de intervención habría repercutido en la composición de esta formación, ya que los miembros de la Corte elegidos para formar parte de aquella se habían manifestado partidarios de concepciones flexibles a la intervención: Shigeru ODA Vid. Opiniones disidentes a las Sentencias de 14 de abril de 1981 y de 21 de marzo de 1984, en CIJ *Recueil* 1981, pp.23-34 y CIJ *Recueil* 1984, pp.90-113, respectivamente; J. SETTE-CAMARA y Sir R.

iii) Objeto de la intervención (art. 81.2.b) del Reglamento)

El Estatuto de la Corte no contempla expresamente este requisito, incorporado por una enmienda reglamentaria, introducida en 1978. En los textos anteriores únicamente se señalaba que la demanda en cuestión debía contener una indicación del asunto y la exposición de las razones jurídicas y fácticas que justificaban la intervención, así como la memoria de los documentos adjuntados - arts. 69.2 de los Reglamentos de 1946 y 1972-.

La Corte, por su parte, ha interpretado que el art.62 del Estatuto, al prevér la intervención de un Estado en defensa de un interés jurídico posiblemente afectado por la decisión a adoptar por el Tribunal en el procedimiento en causa, contempla como objeto de la intervención asegurar la protección o la salvaguarda del citado interés jurídico impidiendo que sea afectado por la decisión¹³¹. Por tanto, la Corte habrá de apreciar al decidir sobre

JENNINGS, *Vid.* Opiniones disidentes a la Sentencia de 21 de marzo de 1984 en CIJ Recueil 1984 pp.71-89 y 148-160, respectivamente.

¹³⁰ Malta en la *Plataforma Continental entre Tunes y Libia* (Sentencia de 14 de abril de 1981 *Vid.* en CIJ Recueil 1981, p.6) utiliza como instrumento para demandar la intervención en el asunto en causa una carta de su Primer Ministro con fecha de 28 de enero de 1981, recibida por la Secretaría de la Corte el día 30 del mismo mes. Si tenemos en cuenta que, la fase escrita del procedimiento se cerraba el 2 de febrero del mismo año (fecha fijada para el depósito de la contramemoria libia) comprobamos que, el depósito se produjo tan sólo dos días antes del límite que el Reglamento establece al respecto. El supuesto italiano es idéntico al anterior en cuanto a su depósito temporal: la demanda italiana tenía fecha de 23 de octubre de 1983 y se recibe en la Secretaría de la Corte al día siguiente. Teniendo en cuenta que las contramemorias debían presentarse como muy tarde el día 26 de octubre, el depósito de la solicitud de intervención se produce dos días antes de finalizar el plazo para ello. La Corte, en este caso a pesar de que Libia aduce la preclusión del plazo que el Reglamento dispone para ello, señala que no ha sido depositada fuera de plazo y no comporta ningún vicio que la haga inadmisible (*Vid.* Sentencia de 21 de marzo de 1984 en CIJ Recueil 1984, p.9)

¹³¹ *Vid.* Sentencia de 21 de marzo de 1984, en CIJ Recueil 1984, p. 18.

la solicitud de intervención si realmente la finalidad perseguida con la intervención es o no dicha protección o salvaguardia de intereses jurídicos.

En algunas ocasiones, podemos apreciar que el interés jurídico que se debe proteger y el objeto de la intervención se confunden. A. REMIRO BROTONS, abogado de Nicaragua en el asunto de la intervención de esta República en la controversia fronteriza entre El Salvador y Honduras, explica

«Il existe sans aucun doute, un rapport étroit entre l'intérêt susceptible d'être mis en cause et l'objet de l'intervention¹³²»

Indicando sucintamente, a continuación, el objeto concreto de la intervención nicaragüense:

«Protéger les intérêts juridiques de Nicaragua en empêchant qu'ils soient réellement affectés par la décision quant au fond¹³³»

A pesar de que interés jurídico y objeto de la intervención son dos elementos diferentes que en la jurisprudencia anterior no se distinguían¹³⁴, no era la primera ocasión en que esta dificultad se indicaba. Así, el brasileño SETTE-CAMARA, Presidente de la Sala que conoció de la controversia entre El Salvador y Honduras, había formulado con anterioridad una Opinión Disidente a la Sentencia por la que se resolvió la intervención italiana en el *asunto de la Plataforma Continental entre Libia y Malta*, en la que apuntaba esta confusión conceptual¹³⁵.

La Sala estimó la existencia de intereses jurídicos nicaragüenses susceptibles de ser afectados por la decisión sobre el fondo de la controversia

¹³² Vid. A. REMIRO BROTONS en C4/CR 90/5, p.39.

¹³³ Vid. A. REMIRO BROTONS en C4/CR 90/5, p.40.

¹³⁴ Vid. Sentencias de 14 de abril de 1981 y 21 de marzo de 1984 en CIJ Recueil 1981, pp. 17-18 y CIJ Recueil 1984, pp.18-20.

¹³⁵ Vid. en CIJ Recueil 1984, p.81.

entre Honduras y El Salvador¹³⁶. Por ello, entendió que debía pasar a examinar el objeto del incidente instado por Nicaragua. La finalidad nicaragüense parecía ser la de proteger tales intereses por todos los medios legales posibles y la de informar a la Sala sobre la existencia de aquellos que podían ser afectados por su eventual Sentencia sobre el fondo

*«i.e.) to prevent them being affected by the Chamber's decision, or to ensure that a decision affecting them is only taken after Nicaragua has been heard»*¹³⁷

La Sala declara, en consecuencia, que el objeto de la intervención pretendida resulta acorde con la función de la misma¹³⁸.

iv) Vínculo jurisdiccional o fundamento de la competencia de la Corte (art. 81.2.c) del Reglamento)

Como ya hemos señalado en otro lugar, con fundamento en el art. 62 del Estatuto han solicitado intervenir en procedimientos en causa ante la Corte, Fiji, Malta, Italia y Nicaragua. Salvo la demanda de intervención nicaragüense, el resto fueron rechazadas por la Corte con idéntico motivo: la inexistencia de vínculo jurisdiccional entre el Estado que pretendía intervenir y los Estados partes en la controversia principal; sólo la demanda nicaragüense fue admitida, si bien es cierto que con un carácter muy limitado.

¹³⁶ Sentencia de 13 de febrero de 1990 en CIJ Recueil 1990, p.129.

¹³⁷ Sentencia de 13 de septiembre de 1990. *Vid.* en CIJ Recueil 1990, p. 129. R. RIQUELME CORTADO La intervención... op. cit., p.101-109, distingue entre objeto prioritario y secundario o complementario. Por el primero entiende «la protección de los intereses jurídicos de Nicaragua» y por los segundos, proporcionar a la Sala información sobre la naturaleza de los intereses jurídicos susceptibles de ser afectados por una decisión sobre el fondo de la controversia principal.

¹³⁸ Sentencia de 13 de febrero de 1990 en CIJ Recueil 1990, p. 130.

La necesidad de un vínculo jurisdiccional es un requisito reglamentario, introducido en el nuevo texto de 1978¹³⁹. A pesar de ello, el debate acerca de su necesidad no es una cuestión nueva. Ya se discutía sobre ella en las sesiones de redacción del primer Reglamento de la CPJI¹⁴⁰.

Como señalara G. SPERDUTTI, la principal dificultad para que fueran admitidas demandas de intervención con fundamento jurídico en el art. 62 del Estatuto estribaba en la exigencia de un vínculo jurisdiccional entre los Estados partes en el procedimiento y el tercero que deseaba intervenir, requisito éste que el art.62 del Estatuto no lo expresa, ni implica atendiendo a su contenido¹⁴¹. La misma opinión manifestaron G. MORELLI y E. JIMENEZ DE ARECHAGA¹⁴² y más recientemente, en su opinión separada a la Sentencia de 11 de septiembre de 1992, S. ODA¹⁴³.

El problema que encontramos respecto del art. 82.1.c) se deriva del instrumento que sirve de fundamento de la competencia de la Corte. En principio cabe señalar que si es una cláusula compromisoria o una declaración facultativa, el vínculo jurisdiccional necesario sería que el tercero poseyera la misma condición. Es decir, o bien que fuera parte en el tratado en el que se inserta la cláusula compromisoria o bien que hubiese depositado una

¹³⁹ Como señala R. RIQUELME CORTADO *La intervención...* op. cit., p.65, la inserción de esta disposición implica un endurecimiento de las condiciones que el Estado que pretende intervenir ha de cumplir para que su solicitud pueda ser aceptada.

¹⁴⁰ E. DECAUX "L'intervention" op. cit., p.239-240.

¹⁴¹ *Vid.* ambas afirmaciones respectivamente en G. SPERDUTTI "La sauvegarde des droits de l'Etat tiers dans le procès devant la Cour Internationale de Justice" en RDI, 1988, p.87 y *Débats Colloque de Lyon*, p.268; del mismo autor "Notes sur l'intervention..." op.cit., p.275.

¹⁴² *Vid.* G. MORELLI op. cit., en RDI 1982, p. 813; y la Opinión Separada de E. JIMENEZ DE ARECHAGA a la Sentencia de 21 de marzo de 1984 sobre la *demande de intervención italiana en el asunto de la Plataforma Continental* (Túnez-Libia), en CIJ Recueil 1981, p.40.

¹⁴³ *Vid.* en CIJ Recueil 1992, p. 619.

declaración facultativa u opcional y que del juego de la mutualidad y de la reciprocidad se desprenda la competencia de la CIJ. Sin embargo, si la competencia de la Corte encuentra fundamento en un compromiso, la única vía posible sería que las partes en la controversia consintieran esa demanda de intervención¹⁴⁴.

b.- Estatuto jurídico del tercero interviniente.

Una vez que la Corte ha admitido una demanda de intervención, se plantea la cuestión del estatuto jurídico del tercer Estado, interviniente en un procedimiento en causa ante esta institución. Problema que ni el Estatuto ni el Reglamento resuelven, ya que no indican si la admisión de una demanda en este sentido significa la concesión del estatuto jurídico de *parte* en aquéllos aspectos de la controversia susceptibles de afectar sus intereses o sólo de *tercero interviniente*.

La versión inglesa del primer Estatuto de la CPJI, como recordó la Corte en 1981, resolvía la cuestión que planteamos, ya que su redacción

«...it seems to have been assumed that a State permitted to intervene under Article 62, would become a "party" to the case. That was only to be expected as the English text of Article 62 then spoke specifically of permission to intervene "as a third partie"»¹⁴⁵

Sin embargo, fruto de la primera modificación estatutaria -que entró en vigor en 1936- y para adecuar los textos francés e inglés, se optó por

¹⁴⁴ G. SPERDUTTI "Note sull'in...p.cit., p. 91.

¹⁴⁵ Vid. Sentencia en la demanda de Malta para intervenir en el asunto de la Plataforma Continental entre Túnez y Libia, CIJ Recueil 1981, pp. 14-15.

suprimir los términos indicados, habiendo llegado el art. 62 de esta manera hasta nuestros días.

Por su parte, el art. 85 del Reglamento actual no aporta datos suficientes para responder a la cuestión planteada, ya que tan sólo menciona derechos que en todo caso se reconocen a los Estados intervinientes en virtud del art. 62 del Estatuto¹⁴⁶. ¿Son esos todos sus derechos? He ahí la cuestión. Al respecto se puede argumentar tanto en sentido positivo como negativo. Negativo, fruto de una interpretación restrictiva, indicando que el art.85 del Reglamento contiene un catálogo cerrado de derechos susceptibles de ser reconocidos por el Tribunal en una decisión en cuanto a la intervención de un tercer Estado en un procedimiento en causa. En sentido positivo, mediante una interpretación extensiva o flexible del art. 85 puede argüirse que este artículo contiene unos derechos mínimos que han de atribuirse al Estado interviniente. Por tanto, su catálogo sería susceptible de ampliación, dependiendo del interés jurídico posiblemente afectado por la decisión de la Corte.

4.1.2. Intervención interpretativa¹⁴⁷.

Este tipo de intervención procesal nunca se ha planteado ante una Sala. Sin embargo, tanto el Estatuto como el Reglamento de la CIJ la permiten. El Estatuto no especifica la formación de la CIJ a la que se refiere el art. 63

¹⁴⁶ Art. 85.1 «se proporcionarán copias de las memorias escritas y los documentos anexos a los mismos al Estado interviniente que tendrá derecho a presentar una declaración escrita dentro de un plazo fijado por la Corte» y art. 85.3 «a presentar observaciones sobre el objeto de la intervención».

¹⁴⁷ Respecto de la evolución histórica del art. 63 Vid. la Opinión disidente de Shigeru ODA a la Sentencia de 21 de marzo de 1984 en el asunto de la *Plataforma continental* entre la Jamahiriya Árabe Libia y Malta en CIJ Recueil 1984, pp.100-106.

debiendo entenderse que es aplicable en cualquiera de ellas; en cuanto al Reglamento, contiene una remisión en su art. 90 -relativo a las Salas- a las disposiciones que rigen el procedimiento ante el Pleno, infiriéndose, por tanto, la misma posibilidad. Además, la práctica de las Salas y el pronunciamiento del Pleno de la CIJ respecto de la relación entre ambas formaciones de la Corte en su Ordenanza de 28 de febrero de 1990, refuerzan este planteamiento¹⁴⁸.

Entre esta intervención *interpretativa*¹⁴⁹ y la *ordinaria* existen más diferencias que identidades. El art. 63 no contempla una demanda judicial, sino el ejercicio de un derecho¹⁵⁰. Cuando en 1984 la Corte rechazó la intervención de El Salvador en el *asunto de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua*, no por consideraciones sustanciales, sino por el momento procesal en el que se presentó la declaración¹⁵¹, quedó claro que ese ejercicio debía ajustarse a la fase de fondo del procedimiento en curso.

Una vez se ha aceptado la declaración de intervención de un tercer Estado, se le confieren los derechos que contempla el art. 86 Regl., proporcionándosele copias de los escritos de las partes y de los documentos anexos a los mismos y el Estado interviniente tendrá derecho a presentar sus observaciones escritas sobre el objeto de la intervención¹⁵². Pero, a diferencia de la intervención *sub* art. 62, las partes carecen en este caso de la posibilidad de responder por escrito a la declaración del tercero acerca de la interpretación

¹⁴⁸ Vid. la Ordenanza de 28 de febrero de 1990 en CIJ Recueil 1990, p.4.

¹⁴⁹ A. DAVI *L'intervento davanti alla Corte Internazionale di Giustizia*, Nápoles 1984, p. 51; P. LAMBERTI ZANARDI "Il procedimento sulle eccezioni preliminari nel processo davanti alla Corte Internazionale di Giustizia" en BDI, 1965, p.566

¹⁵⁰ A. DAVI, op. cit., p. 55 señala en este sentido el «*No-adversary character dell'intervento interpretativo*»

¹⁵¹ Vid. Ordenanza de 4 de octubre de 1984 en CIJ Recueil 1984, p. 216.

¹⁵² Hasta este punto la redacción del precepto es idéntica a la del artículo precedente, dedicado a los derechos del tercero interviniente ex art. 62.

de la convención presentada por el Estado que pretende intervenir, por lo que los derechos de éstas se restringen.

El art. 82 del Reglamento señala los requisitos que han de cumplir las declaraciones de intervención *sub* art. 63: el plazo de presentación es más largo que el previsto para el art.62 -hasta 1978 era uniforme para ambos tipos de intervención: la fecha fijada para la apertura del juicio oral-. La declaración de intervención deberá expresar su interpretación acerca de la convención presente en el procedimiento, sin que se requiera una conexión directa con el objeto de la controversia¹⁵³. Por otra parte, no se exige un vínculo jurisdiccional, bastando la condición de parte en la convención multilateral de la que también lo son los Estados partes en el procedimiento principal.

¹⁵³ El Estado que desea intervenir *ex* art. 63 en una controversia tiene reconocido tal derecho aunque la interpretación de la convención no forme parte por sí misma del objeto de la controversia y constituya un simple presupuesto de la decisión del juicio -A. DAVI op. cit., p.59-.

4.2. La intervención de Nicaragua en la diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras¹⁵⁴.

Como ya hemos señalado, tan sólo en una ocasión se ha interpuesto una solicitud de intervención en un asunto sometido a una Sala *ad hoc*, con base en el art. 62 del Estatuto y por primera vez en la historia de la Corte, una de estas solicitudes fue admitida, si bien con un alcance limitado.

En efecto, en el asunto de la *delimitación de la frontera terrestre, insular y marítima*, entre Honduras y El Salvador¹⁵⁵, Nicaragua, tomando como fundamento el principio de igualdad soberana, planteó una solicitud de intervención ante el Pleno de la Corte, a pesar de que el procedimiento principal se estaba desarrollando en una Sala *ad hoc*. Sin embargo, la Corte rechazó este planteamiento y, tras informarse de las opiniones de los Estados implicados, decidió que el examen del mismo correspondía a la formación que

¹⁵⁴ Existe gran variedad de estudios doctrinales acerca de la intervención nicaragüense. Además de los ya indicados *supra* en nota n° 111, pueden consultarse G. CELLAMARE "La competenza a decidere sull'ammissibilità dell'intervento nel processo pendente dinanzi ad una camera della Corte Internazionale di Giustizia", en RDI, 1990-2, pp. 383 y ss.; D.W.GREIG "Third Party Rights and Intervention Before the International Court", en Va.JIL, 1991, vol. 32, pp. 287-376; el comentario que K. HIGHET y G. KAHLE III, hacen de la Sentencia de 13 de septiembre de 1990 en "International Decisions" AJIL, 1991, pp. 680-686; A.J.J. DE HOOGH "Intervention Under Article 62 of the Statute and the Quest for Incidental Jurisdiction Without the Consent of the Principal Parties", en Leiden Journal of International Law, 1993-1, pp. 17-46; R.ST.J. MACDONALD & V. HUGHES "Intervention before the International Court of Justice", en African Journal of International and Comparative Law, 1993-5, pp. 1-33; A.F. MOORE "Ad Hoc Chambers of the International Court and the Question of Intervention", en Case Western Reserve Journal of International Law, vol. 24, 1992, pp. 667-698; J.J.QUINTANA "The Intervention by Nicaragua in the Case between El Salvador and Honduras before an *Ad Hoc* Chamber of the International Court of Justice", en Netherlands Yearbook of International Law, 1991, pp. 199-208; J.SEIFI "Nicaragua Granted Permission to Intervene in the (El Salvador/Honduras) Land, Island and Maritime Frontier Case", en International Journal of Estuarine and Coastal Law, vol. 6, 1991, pp. 253-263.

¹⁵⁵ *Vid.* Sentencia de 11 de septiembre de 1992, en CIJ Recueil 1992, p. 351 y ss.

estaba conociendo del procedimiento principal¹⁵⁶. Después de conocer el contenido de esta Ordenanza, Nicaragua dirigió su solicitud a la Sala *ad hoc* y la intervención fue parcialmente admitida. No obstante, las limitaciones con que se encontró Nicaragua para defender sus intereses jurídicos susceptibles de ser afectados por la decisión de la Corte respecto del procedimiento principal la convirtieron en términos de R.M. RIQUELME CORTADO, «*en interviniente y mártir*»¹⁵⁷.

Entre las múltiples cuestiones que suscita este caso, nos vamos a detener ahora en cuatro de ellas, que atienden a: (1) la formación competente para dirimir estas solicitudes y el procedimiento por el que se decide la composición de las Salas *ad hoc*; (2) las dificultades que se presentan para el establecimiento del vínculo jurisdiccional -requisito del art. 81.2.c Regl.-, en los procedimientos ante una de estas formaciones de la Corte; (3) los efectos de la admisión de la solicitud sobre el estatuto jurídico del interviniente y sobre la composición de la Sala *ad hoc*; y, (4) el efecto jurídico de la Sentencia para el tercero interviniente no parte en el procedimiento principal.

¹⁵⁶ Mediante su Ordenanza de 28 de febrero de 1990 -Vid. en CIJ Recueil 1990, p. 4 y ss. Como señaló el Juez SHAHABUDDEEN, el resultado adoptado por el Pleno de la Corte en la recién citada Ordenanza -Vid. CIJ Recueil 1990, pp. 62-63- no tiene en cuenta los problemas que suscita su actitud

«A solution, if there is one, must, in the circumstances of this particular case, take account of the principle of equality of States, and there is no possibility of satisfying this principle without appropriate action taken by the full Court within the framework of the very special relationship existing between itself and the Chamber»

¹⁵⁷ R.M. RIQUELME CORTADO La intervención... op. cit. p. 150.

4.2.1. Formación competente para decidir sobre una solicitud de intervención y composición de las Salas *ad hoc*.

Evidentemente, no es lo mismo evacuar este incidente ante el Pleno o ante una Sala cuya composición ha estado mediatizada, si se permite la expresión, por la voluntad de las partes en el procedimiento principal, aunque en el caso que nos ocupa éstas no fueran particularmente sensibles a las posiciones de los miembros de la Corte sobre la intervención procesal, teniendo en cuenta que favorecieron la elección de quienes más abiertos se habían mostrado en el pasado a su aceptación¹⁵⁸. El principio de igualdad procesal y el objeto mismo de este incidente, muy diferente al de los otros incidentes, avalaban la competencia de la Corte en Pleno para pronunciarse sobre su admisión¹⁵⁹.

Sin embargo la Corte, con un argumento procesalmente impecable retomado del asunto *Haya de la Torre*¹⁶⁰ entiende que, al ser la intervención un incidente de procedimiento, la competencia para juzgar del mismo corresponde

¹⁵⁸ Vid. las opiniones de ODA en CIJ Recueil 1981, pp. 23-34 y Recueil 1984, pp. 90-113; SETTE-CAMARA y Sir R. JENNINGS, en CIJ Recueil 1984, pp. 71-89 y 148-160, respectivamente. Visto objetivamente el contexto geográfico en el que se desarrollaba la diferencia, con la elección de los miembros de la Sala parecía favorecerse la intervención del tercer Estado: Nicaragua, que no podía permanecer impasible mientras se decidía la naturaleza y el régimen jurídico de un espacio marino del que era también ribereño.

¹⁵⁹ Hemos de tener en cuenta la especial naturaleza de la intervención que la diferencia del resto de los procedimientos incidentales. Este incidente implica la entrada de un tercero en el procedimiento, motivo por el cual habría de observarse especial cuidado de no transgredir el principio de igualdad -ver opinión contraria de C. ESCOBAR HERNANDEZ, op. cit., p. 311-, lo que en apariencia ocurre si se somete la decisión acerca de la intervención de este tercer Estado a una Sala cuya composición se viene estableciendo como hasta ahora.

¹⁶⁰ Vid. en CIJ Recueil 1951, p. 76.

al órgano que se encuentra conociendo del principal¹⁶¹. Esta afirmación, válida para tribunales en cuya composición no hayan participado las partes, es cuestionable, sobre todo desde 1978, cuando se predica de las Salas *ad hoc*, por razones antes dichas¹⁶².

A pesar de ello, no podemos calificar de adecuada la decisión del Pleno respecto de la solicitud de intervención formulada por Nicaragua, sobre todo si tenemos en cuenta que la composición de la Sala -tal era la preocupación nicaragüense- respondía a la voluntad de las partes en la controversia y difícilmente podía considerarse compatible con el respeto del principio de igualdad¹⁶³.

Item más, la atribución de competencia a la Sala podía dar lugar a argumentaciones temerarias y embarazosas, sobre la autoridad de esta formación para manifestarse en términos disconformes con los precedentes del Pleno. Así el Prof. Elihu LAUTERPACHT, como abogado de El Salvador confeccionó un atrevido argumento doctrinal conforme al cual los miembros de una Sala debían respetar y aplicar las decisiones que la Corte había adoptado en asuntos precedentes

«...the duty of the Members of the Chamber, individually and collectively, is to find the Law and, in so doing, to give greatest weight to what the majority of the full Court has said Having found the Law, it is no less the duty of Members of Chamber to apply it, even if its conflicts with their own dissenting opinions expressed in earlier cases on the same subject matter. This is because, almost by definition, what the Court has said is the law, even if individual members of the

¹⁶¹ Vid. en CIJ Recueil 1990, pp. 4-6.

¹⁶² Como señala el Juez M.SHAHABUDDEEN, en su opinión disidente a la Ordenanza de 28 de febrero de 1990 -Vid. en CIJ Recueil 1990, p. 19-, no es sino que

«Nicaragua obviously takes the view that the Chamber, as it stands, cannot discharge the functions of the International Court of Justice, considered as a court of justice, in relation to itself».

¹⁶³ Como señala M. SHAHABUDDEEN en su Opinión disidente a la Ordenanza de 28 de febrero de 1990. Vid. en CIJ Recueil 1990, p. 63.

Chamber have disagreed with it. There is no intellectual impropriety in a judge who has in one case dissented on a point concluding in a later case that the view of the majority must be accepted as the law and deliverin an opinion to that effect in that later case»¹⁶⁴

En este caso concreto, el de la Sala constituida para conocer de la controversia entre Honduras y El Salvador, algunos de sus distinguidos miembros, si bien se había manifestado en asuntos anteriores favorable a la admisión de terceros intervinientes en los procedimientos en causa, casualmente se habían pronunciado en contra de los intereses nicaragüenses en otros dirimidos ante la CIJ en los que Nicaragua era parte. Así, los Jueces ODA y JENNINGS habían votado en contra de la competencia de la Corte para conocer de la demanda Nicaragüense en el asunto de *las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua*, añadiendo a la misma sendas opiniones disidentes¹⁶⁵. Luego habían hecho *doblete*, votando igualmente en contra de la Sentencia de fondo en este mismo asunto y, formulando opiniones disidentes¹⁶⁶. El tercero de los miembros ordinarios de la Corte elegidos para formar parte de esta Sala fue J. SETTE-CAMARA, que en esta Sentencia votó con la mayoría, incluso redactó una Opinión individual expresando los motivos por los que discrepaba de la exclusión de la aplicación de los Tratados multilaterales en este caso¹⁶⁷. Este no fue sin embargo, el único asunto en el que Nicaragua fue parte ante la Corte. Posteriormente demandó a Honduras

¹⁶⁴ Vid. en C4/CR 90/3, p. 82.

¹⁶⁵ Vid. Sentencia de 26 de noviembre de 1984, en CIJ Recueil 1984, pp. 442, 471 y ss -opinión de ODA- y 533 y ss -Opinión de JENNINGS-. JENNINGS además había votado en contra de la decisión de la Corte de rechazar la audiencia a El Salvador sobre su declaración de intervención ex art. 63 del Estatuto en este asunto de *las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua*. Vid. Ordenanza de 4 de octubre de 1984, en CIJ Recueil 1984, p. 385.

¹⁶⁶ Vid. Sentencia de 27 de junio de 1986, en CIJ Recueil 1986, pp. 146-150, Opinión disidente de ODA -había votado a 11 de las 13 cuestiones planteadas en contra de la mayoría-, pp. 213 y ss. y de JENNINGS -había votado en 9 ocasiones contra la posición mayoritaria de la Corte-, pp. 528 y ss.

¹⁶⁷ Vid. en CIJ Recueil 1986, pp. 192 y ss.

-también a Costa Rica- por las *acciones armadas fronterizas y transfronterizas*. En este asunto el Estado demandado interpuso una excepción preliminar de incompetencia de la Corte que fue desestimada por unanimidad, aunque a la misma se acompañó una S. ODA opinión individual¹⁶⁸.

De lo anterior concluimos que aunque los miembros de la Sala formada para conocer de esta controversia se hubieran mostrado favorables al incidente procesal de intervención, la actitud nicaragüense de desconfianza hacia la composición de esta Sala estaba, cuando menos, justificada.

4.2.2. Vínculo jurisdiccional¹⁶⁹.

Este aspecto ya lo hemos apuntado al tratar los requisitos que deben cumplir las demandas de intervención cuyo fundamento se encuentre en el art. 62 del Estatuto.

El supuesto nicaragüense resulta complicado. Aunque nos encontramos con declaraciones de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la CIJ *sub* art. 36.2 del Estatuto tanto del Estado que pretendía intervenir como de los dos Estados partes -El Salvador y Honduras-, éstos habían excluido de su declaración el objeto de la controversia¹⁷⁰. Además, aunque ello no fuera así,

¹⁶⁸ Vid. en CIJ Recueil 1988, p. 108 y ss. Finalmente esta diferencia se resolvió mediante un compromiso de las partes, por lo que Nicaragua comunicó a la Corte su intención de desistir de la continuación del procedimiento. Honduras no se opuso a ello, emitiéndose una Ordenanza de 27 de mayo de 1992 por la que la Corte hace público el desestimiento de las partes. Vid. Ordenanza de 27 de mayo de 1992, en CIJ Recueil 1992, p. 222.

¹⁶⁹ Ya nos referimos a esta cuestión en el epígrafe 4.1.1.a)iv) *supra*.

¹⁷⁰ Vid. las declaraciones de Honduras -de 6 de junio de 1986, por la que se modifica la anterior de 20 de febrero de 1960-, El Salvador -de 26 de noviembre de 1973- en

el instrumento por el que se otorgaba competencia a la Corte para conocer de aquélla era un compromiso¹⁷¹.

Por tanto, aunque El Salvador y Honduras no hubieran excluido «*los asuntos que pudieran afectar a su soberanía sobre los espacios terrestres y marítimos*» de sus declaraciones *sub art.* 36.2 del Estatuto, la competencia de la Sala no se derivaría de las declaraciones de las partes, sino del compromiso celebrado entre ellas. Según la argumentación anterior, el único vínculo jurisdiccional por el que un Estado podría participar en la controversia como interviniente sería el consentimiento de las partes en la misma¹⁷², consentimiento que, en este supuesto concreto, no se produjo. Honduras no se oponía a la intervención de Nicaragua a condición de que ésta se limitara al régimen jurídico del Golfo de Fonseca y de que su estatuto fuera el de tercero interviniente no parte¹⁷³. El Salvador, por su parte, rechazaba radicalmente la solicitud nicaragüense utilizando para ello todos los razonamientos imaginables¹⁷⁴.

La Sala se distanció de la interpretación literalista del art. 82.1.c) y acogió la tesis nicaragüense que distinguía entre intervenciones *propias* e *impropias*¹⁷⁵. Nicaragua entendía que en el supuesto de encontrarnos ante las

Apéndice II: Documentos 3.3. y 3.4. respectivamente. *Vid.* la declaración de Nicaragua -de 24 de septiembre de 1929- en CIJ *Annuaire* 1986/87, nº41.

171 *Vid.* texto original del mismo en Apéndice II: Documentos 2.3 -fuente: Ordenanza de 28 de febrero de 1990, en CIJ *Recueil* 1990, pp.95-97- la traducción a las lenguas oficiales de la Corte puede consultarse en la Sentencia de 11 de septiembre de 1992 en CIJ *Recueil* 1992, pp. 356-358.

172 E. DECAUX "L'intervention...op.cit., p.241; R.RIQUELME "La intervención...op.cit. pp.119-120 y "Las claves...op.cit. pp. 90-91.

173 *Vid.* en la Sentencia de 13 de septiembre de 1990, en CIJ *Recueil* 1990, p.99.

174 *Id.* nota anterior pp. 99 y 111-114, respectivamente.

175 *Vid.* A. REMIRO BROTONS en C4/CR 5 de junio 1990/2 pp.22 y ss.

primeras -intervenciones propias- no resultaba necesario probar la existencia de un vínculo de jurisdicción entre el tercero y las partes en la controversia¹⁷⁶. Por el contrario, cuando se trata de una intervención impropia resulta preceptiva su presencia¹⁷⁷. El precio fue, sin embargo, reducir a su mínima expresión los derechos del interviniente.

4.2.3. Efectos de la admisión de la solicitud sobre el estatuto jurídico del interviniente y sobre la composición de la Sala *ad hoc*.

De la práctica jurisprudencial de la Corte hasta el momento, tan sólo contamos con el caso de la intervención de Nicaragua en la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador para determinar el estatuto jurídico de un Estado interviniente ex art. 62 del Estatuto. En este asunto Honduras defendió una interpretación estricta del art. 85 del

¹⁷⁶ Vid. Opinión disidente de R.AGO en Recueil 1984, p. 119-124. En igual sentido la Opinión disidente a la Ordenanza por la que se desestima la intervención de Malta en CIJ Recueil 1981, p. 40 e Italia en CIJ Recueil 1984, pp. 27 y ss.

¹⁷⁷ Según el objeto perseguido con las solicitudes de intervención cuyo fundamento se encuentra en el art. 62 del Estatuto, cabe distinguir dos tipos: (1) Reivindicación de derechos, (2) Preservación de derechos, *limitada* y propia, *genuina* o auténtica. Vid. en este sentido Marcelo G. KOHEN "La requête...op. cit., p. 365; G. SPERDUTI "La sauvegarde de l'Etat tiers dans le procès devant la Cour Internationale de Justice", en RDI, 1988, p. 91; "Notes sur l'intervention dans le procès international", en AFDI, vol. 30, 1984, p. 277, denomina al primer tipo intervención con carácter *subsidiario*. También del mismo autor "Etude sur l'intervention dans le procès internationale", en Hacia un nuevo orden internacional y europeo. Homenaje al Prof. Manuel Díez de Velasco, Madrid, 1993, pp. 714-715; E. DECAUX "L'intervention", op. cit., pp. 254-255, prefiere calificarla de *agresiva*, mientras A. REMIRO BROTONS en C4/CR 5 de junio 1990/2, p. 22; prefiere denominarla *impropia*, idéntica calificación utiliza R. RIQUELME CORTADO "Las claves de la limitada autorización de la intervención de Nicaragua en la controversia insular y marítima entre Honduras y El Salvador (Sentencia de la Corte Internacional de Justicia - Sala- de 13 de septiembre de 1990)", en REDI, 1992/1, p. 55; y en La intervención... op. cit., p. 118.

Reglamento¹⁷⁸. El Profesor Derek W. BOWET, uno de sus abogados, consideraba que al tercero interviniente única y exclusivamente le correspondían los derechos reconocidos por este artículo¹⁷⁹. Nicaragua, en cambio, planteaba la posibilidad del estatuto jurídico de parte interviniente. A este respecto, el abogado de Nicaragua Prof. A. REMIRO BROTONS, en respuesta al anterior, concluía señalando que a quien en definitiva correspondía decidir el estatuto jurídico del tercero era a la Corte que conoce del incidente y lo haría «*exclusivement en fonction des exigences établies par l'article 62 du Statut*»¹⁸⁰.

Las referencias de la Sala al problema que nos ocupa son mínimas, dedicándole tan sólo dos párrafos¹⁸¹. En ellos indica la Sala que ésta es una de las múltiples cuestiones que ha de resolver *ex novo* por no encontrar solución en la jurisprudencia de la Corte. La Sala se pronunció indicando que un tercero interviniente carente de un vínculo jurisdiccional respecto de las partes en el procedimiento en causa no es parte en el mismo, por lo que no adquiere los derechos y no está sometido a las obligaciones en cuanto tal¹⁸².

178 Art. 85 del Reglamento de 1978: «1. Cuando sea admitida una petición para intervenir basada en el artículo 62 del Estatuto, el Estado que interviene recibirá copia de los escritos y documentos anejos y tendrá derecho a presentar una declaración escrita en el plazo que fije el Tribunal. Otro plazo será fijado para que las partes, si lo desean, presenten observaciones escritas a dicha declaración antes de la fase oral. Si el Tribunal no se hallare reunido, los plazos serán fijados por el Presidente. 2. Los plazos fijados conforme al párrafo anterior coincidirán dentro de lo posible con los que se hayan fijado para la presentación de escritos en el mismo asunto. 3. El Estado que interviene tendrá derecho a presentar, en el curso de la fase oral, sus observaciones sobre la cuestión objeto de la intervención »

179 Vid. en C4/CR 90/40/4 p. 49. Indica además que «*The assumption that Nicaragua is entitled to appoint its own ad hoc judge is quite unfounded*». La argumentación que le conduce a esta conclusión es que el art.31 del Estatuto únicamente confiere este derecho a las partes en la controversia y Nicaragua no posee esta condición.

180 Vid. en C47CR 90/5 pp. 46 y 19-50.

181 Párrafos 102 y 103, pp. 135-136, aunque va avanzando ideas en algunos anteriores. Vid. párrafo 99 en la pág. 134.

182 CIJ Recueil 1990, pp. 134-136. La Sala entiende (p.137) que como Nicaragua

Para que un tercero sea considerado parte es necesario un vínculo jurisdiccional o, en su defecto, consentimiento expreso de los Estados que poseen esta condición en el procedimiento principal¹⁸³. Interpretando a *sensu contrario* la afirmación anterior, concluimos que el tercero interviniente nunca tendrá el estatuto jurídico de parte en el mismo salvo que consiga la anuencia de todas las partes en la controversia.

En conclusión, la Sala acoge la tesis restringida, puesto que el tercero carece del estatuto jurídico de parte en la instancia. En definitiva, los derechos que se le conceden al Estado interviniente no parte en el proceso -según la Sala de la CIJ- son única y exclusivamente los que le atribuye el art. 85 del Reglamento de 1978. Limitada protección, si se tiene en cuenta que el objeto de su intervención es la repercusión de la Sentencia de la Corte sobre un interés jurídico propio. Al menos, habría que respetar el principio de igualdad, aunque tan sólo fuera en aquellos aspectos cuya decisión eventualmente pudiera afectar los intereses jurídicos susceptibles de protección. Por ello, el estatuto jurídico de **parte interviniente** creemos que es el más acertado para el caso que nos ocupa.

Si contemplamos la formación de las cuatro Salas que han existido hasta el momento, observamos que las partes en todas ellas cuentan con un Juez nacional o *ad hoc*. Cabría, pues, deducir que se confiere al tercer Estado la posibilidad de designar un Juez de este tipo. Sin embargo, si es necesario el

«n'a pas établi l'existence d'un tel intérêt susceptible d'être affecté par toute décision que la Chambre peut être requise de rendre en ce qui concerne la délimitation de ces eaux par toute décision sur la situation juridique des espaces maritimes extérieures au Golfe ou par toute décision sur la situation juridique des îles du Golfe.... 2.- Décide...que la République du Nicaragua est autorisée à intervenir dans l'instance, conformément à l'article 62 du Statut, dans la mesure, de la manière, et aux fins spécifiées dans le présent arrêt, mais ni d'avantage n'autrement»

¹⁸³ Vid. en CIJ Recueil. 1990, p.134.

consentimiento de las partes en defecto de vínculo jurisdiccional para que el tercero pueda intervenir, también será precisa su anuencia si se suscita la cuestión de la *recomposición* de esta formación¹⁸⁴. La posibilidad de designar un Juez *ad hoc* por el Estado interviniente depende del estatuto jurídico que se le confiera, ya que el art. 31 del Estatuto únicamente otorga el derecho a designar este tipo de Jueces a las partes. Por tanto, el tercero se encontrará amparado por este derecho sólo cuando las partes en el procedimiento principal consientan de manera expresa dicho estatuto jurídico¹⁸⁵.

Además de lo anterior hemos de tener en cuenta que de la decisión acerca del incidente de intervención, depende la entrada de un tercero distinto de las partes en el procedimiento en causa con la finalidad de defender sus intereses¹⁸⁶. El problema a plantear a continuación es el relativo al modo en que ello podrá hacerse ante un tribunal cuyos miembros han sido elegidos con el acuerdo de las partes.

Es necesario hacer referencia, pues, al tratamiento procesal concreto otorgado por la Sala *ad hoc* a Nicaragua, en cuanto Estado interviniente¹⁸⁷. Cuando se presenta la solicitud de intervención nicaragüense ya se habían

184 Resulta difícil imaginar que las partes en una controversia se mostrarán conformes con esta posibilidad, sobre todo si tenemos en cuenta la especialidad que presenta el método seguido para la elección de los miembros de estas Salas *ad hoc* de la Corte.

185 *Vid.* Sentencia de 13 de septiembre de 1990, en CIJ Recueil 1990, p.134.

186 *Vid.* las opiniones disidentes de T.O. ELIAS y N.K. TARASSOV a la Ordenanza de 28 de febrero de 1990 en CIJ Recueil 1990, pp. 10 y 15-17.

187 *Vid.* en este sentido la Opinión Disidente del Juez TARASSOV a la Ordenanza de 28 de febrero de 1990, en CIJ Recueil 1990, p. 17, cuando señala:

“...the Court would have been able to establish, in consultation with the President of the Chamber and those same Parties, such procedural guarantees as would effectively have enabled that State to defend its rights”

depositado las memorias y contramemorias de las partes en la controversia¹⁸⁸. Por tanto, debido al momento en que se depositó la solicitud de intervención, en el que estaba ya avanzado el procedimiento escrito, la igualdad procesal sólo sería predicable desde su aceptación como tal, pero no *ab initio*.

Una vez la Sala *ad hoc* admitió a Nicaragua como tercero interviniente, en virtud del art. 85 del Reglamento¹⁸⁹, este Estado presentó una declaración escrita -a la que tanto Honduras como El Salvador, presentaron observaciones-, y en el curso del procedimiento oral, unas conclusiones formales¹⁹⁰. Sin embargo, como se aceptó la intervención nicaragüense únicamente en cuanto al régimen jurídico de las aguas del Golfo de Fonseca, la Sala sólo tuvo en cuenta la declaración escrita en los aspectos relativos a aquel objeto¹⁹¹.

4.2.4. Efecto jurídico de la sentencia para el tercero interviniente no parte en el procedimiento principal.

El último de los problemas que nos queda por tratar es el relativo al efecto jurídico que puede tener sobre el tercero interviniente la Sentencia dictada en el procedimiento en causa. Si entendemos que se encuentra

¹⁸⁸ La fase escrita del procedimiento principal expiraba el 12 de enero de 1990. *Vid.* Ordenanza de 13 de diciembre de 1989, en CIJ Recueil 1989, pp. 129-130, auto éste que indicaba la fecha límite de depósito de réplicas. La demanda nicaragüense se depositó el 17 de noviembre de 1989, *Vid.* Ordenanza de 28 de febrero de 1990, p.4.

¹⁸⁹ *Vid.* la Sentencia de 13 de septiembre de 1990, en CIJ Recueil 1990, pp. 92 y ss.

¹⁹⁰ Ambas pueden verse en la Sentencia de 11 de septiembre de 1992, en CIJ Recueil 1992, p.378-380.

¹⁹¹ *Vid.* respectivamente las Sentencias de 13 de septiembre de 1990, en CIJ Recueil 1990, p. 13 y de 11 de septiembre de 1992, *Vid.* en CIJ Recueil 1992, pp.580-582.

jurídicamente obligado por la Sentencia, infringimos las disposiciones estatutarias, pero si consideramos que de aquélla no deriva una obligación jurídica, el incidente procesal que nos ocupa no tendría más efecto que el psicológico sobre Jueces abastecidos de una información adicional. El problema, apuntado por N. TARASSOV en su opinión a la Ordenanza de la Corte de 28 de febrero de 1990, tiene quizá mayor interés dos años después de su formulación. El Juez ruso -aún entonces soviético- se cuestionaba la justicia de la situación de un tercero interviniente, un Estado que debía proteger sus intereses y que en realidad estaba a merced de una construcción teórica como la realizada por la Corte en esta Ordenanza¹⁹². Dependiendo todo, en definitiva, de la admisión o no como parte del tercero.

La Sala *ad hoc*, en su Sentencia sobre el fondo del asunto, indicó el efecto que desplegaría sobre Nicaragua:

*«Nicaragua thus does not regard itself as obligated to treat the judgment as binding upon it (...) the chamber therefore concludes that in the circumstances of the present case, this judgment is not res judicata for Nicaragua»*¹⁹³

Esta solución es lógica si tenemos en cuenta que no es el Estado que pretende proteger sus intereses posiblemente afectados por la decisión de la Corte quien debe adoptar medidas, sino que es la Corte la que habrá de tenerlas en cuenta, para que no exista perjuicio para los terceros. Distinta es la situación cuando el objeto de la intervención es una reivindicación de derechos.

Sin embargo, ¿cómo puede combinarse la posición de principio de la Corte sobre los efectos de su Sentencia para el tercero interviniente con el régimen objetivo declarado para el Golfo de Fonseca y, más aún, al régimen impuesto en este espacio marino?. Recordemos que según la Sala de la CIJ se

¹⁹² Vid. en CIJ *Recueil* 1990, p. 15.

¹⁹³ Vid. Sentencia de 11 de septiembre de 1992, en CIJ *Recueil* 1992, p. 609-610.

trata de un *condominio* en una bahía de la que son ribereños tres Estados los dos que poseen el estatuto jurídico de partes y el interviniente carente de aquél.

La decisión de la Sala sobre el efecto de la Sentencia para el tercero interviniente fue objeto de una declaración -del Juez japonés Shigeru ODA- y de una opinión individual -del Juez designado *ad hoc* por Honduras, S. TORRES BERNARDEZ-. En primer lugar, el Juez ODA se muestra disconforme con los puntos de vista de la Sala acerca de esta cuestión¹⁹⁴, sugiriendo que el citado efecto -o, por mejor decir, falta de efecto- no alcanza aquellos aspectos de la Sentencia para los que fue admitido como interviniente¹⁹⁵. La sensibilidad del Juez japonés para las condiciones en que dicha admisión se produjo es, como puede verse, prácticamente nula.

Por su parte, S. TORRES BERNARDEZ, tras indicar que la Sentencia no posee efecto de cosa juzgada para Nicaragua, señala que las Sentencias de la Corte tienen otros efectos además del señalado¹⁹⁶. Como aprecia este Juez, el 62 del Estatuto -a diferencia de lo que ocurre en el 63 del mismo texto- no enuncia la obligatoriedad de la interpretación contenida en el fallo. Sin embargo, en su opinión, *mutatis mutandis* existe una obligación implícita en este sentido en el art. 62 del Estatuto, aunque expresamente no lo contemple¹⁹⁷. Esta solución podría, no cabe duda, resolver el problema planteado, aunque como señala, correctamente a nuestro entender, R.M. RIQUELME CORTADO, resulta una vía discutible, por cuanto no es posible establecer una relación

¹⁹⁴ *Id.* nota anterior, p. 619.

¹⁹⁵ Sh ODA, ya había indicado esta cuestión en sus opiniones individuales en los asuntos de la *Plataforma continental Túnez-Libia* -Sentencia de 14 de abril de 1981, *Vid.* en CIJ *Recueil* 1981, p. 23 y ss.-, y posteriormente en el de la *Plataforma Continental Malta-Libia* -Sentencia de 21 de marzo de 1984, *Vid.* en CIJ *Recueil* 1984, p. 90 y ss.-.

¹⁹⁶ *Vid.* Sentencia de 11 de septiembre de 1992, en CIJ *Recueil* 1992, p.730.

¹⁹⁷ *Id.* nota anterior, p. 731.

análoga entre ambos preceptos ya que los supuestos que contemplan resultan dispares tanto desde una perspectiva objetiva como teleológica¹⁹⁸.

Desde un punto de vista fáctico es necesario indicar, como hace R.M. RIQUELME CORTADO¹⁹⁹, que resulta muy difícil encontrar una interpretación conforme a la cual Nicaragua no resulte material y hasta físicamente afectada por la decisión de la Corte sobre el fondo. ¿Podrá este Estado aplicar un régimen jurídico distinto del condominio decretado por la Sala, a las aguas del Golfo de Fonseca que considera propias²⁰⁰? Este interrogante -con independencia del valor que pueda darse a la Sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana de 1917²⁰¹ en la diferencia que opuso a Nicaragua con El

¹⁹⁸ R.M. RIQUELME CORTADO La intervención de terceros...op. cit., p.142

¹⁹⁹ R.M. RIQUELME CORTADO La intervención de terceros...op. cit., pp.142-143.

²⁰⁰ La Sentencia de la Sala *ad hoc* de 1992 confirma el régimen jurídico señalado por la Corte de Justicia Centroamericana en la Sentencia de 9 de marzo de 1917, y prueba de ello es que la propia Sala reconoce que «*The Judgement of 1917 which thus examined the particular regime of the Gulf of Fonseca must therefore be taken into consideration as an important part of the Gulf's history*». Sin embargo, con ello comete a nuestro entender, distintos errores. El primero es extender el régimen de condominio declarado en la Sentencia de la CJC cuando en el asunto conocido por este Tribunal eran partes dos de los tres Estados ribereños del Golfo de Fonseca -El Salvador y Nicaragua- habiéndose opuesto al mismo reiteradamente el tercero -Honduras- (*Vid.* a este respecto la Sentencia de la Corte en la *demande de intervención nicaragüense en el asunto de la delimitación de la frontera terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador, de 13 de septiembre de 1990, en CIJ Recueil 1990, p. 106 y la de la Sala que conoció del fondo del mismo asunto de 11 de septiembre de 1992 en CIJ Recueil 1992, p. 600). El segundo error es el indicado por Honduras, como ya lo había sido antes por Nicaragua, respecto del propio concepto de condominio, régimen éste cuyo fundamento ha de ser necesariamente consensual, basado en el acuerdo de las partes afectadas. La propia Sala reconoce la dificultad de imponerlo en contra de la voluntad de las mismas y pese a todo se arriesga a declararlo. El tercero lo observamos en la declaración de la Sala acerca del Acta II de la Comisión Mixta de Límites de 1900 celebrado entre Honduras y Nicaragua puesto que en el citado texto las partes habían acordado efectuar la delimitación aplicando el criterio de la equidistancia. El motivo alegado para ello es que «*gives no clue that it was in any way inspired by the application of the uti possidetis iuris to the waters*» -*Vid.* en CIJ Recueil 1992, p. 601-602-. La CIJ afirma la naturaleza jurídica de condominio, a pesar de que este Acta II de la Comisión de Límites de 1900 había sido reconocido por El Salvador -*Id.* referencia anterior, pp. 605-606-. Por tanto, a pesar de la Sentencia de la CJC de 1917, como acabamos de ver, resulta problemático el establecimiento de un régimen jurídico de condominio en este espacio marítimo. Sobre todo si tenemos en cuenta la finalidad del mismo: conseguir que Honduras proyectara su soberanía hacia el Pacífico como si de un ribereño de este Océano se tratara.

²⁰¹ La actitud nicaragüense ante la Sentencia de la CJC, cuya jurisdicción era obligatoria para los Estados partes en el Convenio de Washington de 20 de diciembre de 1907, «*is and has consistently been opposed to the condominium solution*». Son los términos empleados por la Sala *ad hoc* para definir la actitud nicaragüense frente a este acto jurídico -*Vid.* en la

Salvador encuentra el complemento de otra, a saber. ¿cómo podrá Nicaragua evitar que le sea oponible el contenido de la Sentencia de 11 de septiembre de 1992 cuando esta indica que:

«...the central portion of the closing line appertains to the three states of the Gulf, El Salvador, Honduras and Nicaragua...»²⁰²

¿Cómo se puede persuadir de que las decisiones en las que se alude *directamente* a un Estado no parte en la controversia no le resultan en la práctica oponibles? ¿Basta acaso con insistir en que no le afectarán por cuanto la Sentencia es cosa juzgada entre las partes pero no respecto del tercero?

Quizá, como subraya la autora anteriormente citada, hubiera sido más coherente desde una perspectiva técnico-jurídica no haber aceptado a un Estado como *interviniente no parte*, sólo para algunos aspectos de la controversia. Sobre todo si tenemos en cuenta que a este tercer Estado no se le permitió defender sus intereses en igualdad de condiciones que a las partes, pero que en definitiva, en los aspectos para los que fue admitido -e incluso en aquellos para los que no lo fue- le vinculará, a pesar del pronunciamiento de la Sala en sentido contrario, desde la perspectiva fáctica indicada anteriormente.

Acerca de este incidente procesal podemos afirmar que con la redacción del nuevo Reglamento de 1978 se aprecia sobremanera su intención protectora de las partes en litigio, blindadas frente a toda intervención -no

Sentencia de 11 de septiembre de 1992, en CIJ Recueil 1992, p.597-. Antes de dictarse la Sentencia en el asunto considerado, Nicaragua, en vista del sentido que pudiera tener la misma, adverso a sus intereses, adopta una postura posteriormente puesta en práctica por los Estados Unidos en el *asunto de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua*. En 1917, el Gobierno de este último Estado declaró la falta de jurisdicción de la CJC para conocer del caso, además alegando problemas económicos el mismo día en el que se dictó la Sentencia envió telegramas a los gobiernos de los restantes Estados partes en el citado Tratado comunicándolos su incapacidad para continuar en esta calidad. Ver en este sentido A. ZAMORA RODRIGUEZ *Intereses Territoriales de Nicaragua: San Andrés y Providencia, Cayos, Golfo de Fonseca, Río San Juan, Managua*, 1995, pp. 188-231. Sin embargo, sabemos que las Sentencias son obligatorias y no requieren aceptación posterior alguna.

²⁰² Vid. Sentencia de 11 de septiembre de 1992 en CIJ Recueil 1992, p. 617.

deseada- de terceros Estados. Si a ello añadimos el procedimiento para designar la composición de las Salas *ad hoc*, la situación del tercero es desoladora, ya que únicamente podrá defender sus intereses, en la medida en que los Estados partes en la controversia principal se lo permitan, negándosele la posibilidad de recurrir al Pleno, como le sucedió a Nicaragua²⁰³.

Como conclusión, podemos calificar el fallo de 1992 de *equilibrismo jurídico*. Probablemente, la Corte protegió más y mejor a los Estados cuya solicitud de intervención fue rechazada que a Nicaragua, al aceptarla en los términos mezquinos en que lo hizo, evidentemente para librarse de los complejos problemas de composición de la Sala y de procedimiento que hubiera comportado una mayor coherencia, y no tener la entereza de plantearse la inoportunidad de ejercer la función judicial sobre el Golfo y más allá del Golfo cuando uno de sus ribereños no era *parte* en el procedimiento.

²⁰³ Vid. en este sentido la Ordenanza de 28 de febrero de 1990 en CIJ *Recueil* 1990, pp. 3 y ss y las Opiniones disidentes a la misma, especialmente las de los Jueces TARASSOV y SHAHABUDDEEN en pp. 11 y ss.

Capítulo Quinto: **Sentencias de las
Salas *ad hoc*.**

1. FORMACIÓN Y EFECTOS DE LAS SENTENCIAS: INTROMISIÓN DE LOS COMPROMISOS.

La Sentencia es el último acto de la instancia desarrollada ante los Tribunales. Es la forma en la que suelen terminar las controversias sometidas a conocimiento de la CIJ, salvo desistimiento o allanamiento. El primer problema que plantean las Salas de la Corte no es el de los efectos de sus Sentencias, sino el de la confección de las mismas.

En la CIJ no existe un Juez ponente, todos los Jueces colaboran activamente en la creación de sus fallos, pero al ser el Pleno del Tribunal un órgano demasiado numeroso para realizar esta labor en régimen asambleario, se siguen los trámites indicados en su Reglamento de Procedimiento¹, que permite canalizar la colaboración de toda la Corte en la redacción del fallo, gracias a una comisión de tres miembros elegidos entre aquellos Jueces que formaban parte de la mayoría en una primera votación de principio sobre las líneas básicas de la futura Sentencia. En este procedimiento el *Greffier* desempeña un papel de gran importancia, ya que se encarga de la traducción, distribución y destrucción de las notas redactadas por los Jueces, así como de la asistencia en la traducción y redacción de los proyectos de Sentencia y la

¹ Vid. la *Résolution visant la pratique interne de la Cour en matière judiciaire* (Règlement, article 19). Adoptée le 12 avril 1976, en Apéndice II: DOCUMENTOS.1. (Fuente: CIJ *Actes et documents Relatifs à l'organisation de la Cour* n°5, *Charte des Nations Unies, Statut et Règlement de la Cour et autres textes*, La Haya 1985, pp. 165-173); entre la doctrina M. BEDJAOUI "La fabrication des arrêts de la Cour Internationale de Justice", en *Mélanges Virally*, pp. 87-107; T. MOSQUERA IRURITA *La Corte Internacional de Justicia*, Bogotá 1988, pp. 61- 68; S. ROSENNE *The World Court. What it is and How it Works*, Dordrecht, 1995, 5ª ed., pp. 132-135; M. SCERNI "La procédure de la Cour Permanente de Justice Internationale", en *R.des C.*, 1938-III, t.65, pp. 666-667.

preparación del sumario de la publicación del fallo. La cuestión es si este esquema de trabajo, trasladado a las Salas es igualmente apropiado².

La confección real de la Sentencia no comienza una vez finalizada la fase oral del procedimiento, sino mucho antes. Evidentemente los Jueces van adquiriendo una opinión acerca del fondo del asunto en cuestión desde el mismo momento en que se inicia el estudio de la documentación presentada. Las deliberaciones son secretas³ y comienzan concluido el procedimiento oral y se producen en la forma indicada en la Resolución reguladora de la práctica interna de la Corte en materia judicial. En cuanto a la votación, todos los Jueces habrán de manifestarse en forma afirmativa o negativa acerca del contenido de la Sentencia, sin que quepan por tanto abstenciones al respecto. Los votos se emiten en forma oral y el orden empleado para ello es el inverso al de precedencia, de manera que los Jueces *ad hoc* son los primeros en pronunciarse⁴.

Este procedimiento es, en efecto, adecuado al Pleno por las dificultades derivadas del elevado número de miembros. Sin embargo, en las Salas *ad hoc* no existe este problema, por cuanto son formaciones reducidas de la Corte. Las Salas están formadas por un número de miembros que permite el trabajo conjunto de todos ellos tanto si su opinión se encuentra dividida en

² El art. 10 de la Resolución reguladora de la práctica interna de la CIJ en materia judicial señala su aplicación al procedimiento ante la Corte, con independencia de la naturaleza contenciosa o consultiva del mismo.

³ Esta no es una novedad de la CIJ, sino una característica propia de toda actuación judicial. Encontramos semejante disposición en el art. 31 de las Convenciones de La Haya de 1899 y art. 78 de 1907, art. 54.3 del Estatuto de la CPJI y de la CIJ, también art. 27 del Proyecto de Tribunal de Justicia Arbitral y 43 del Tribunal Internacional de Presas Marítimas.

⁴ Cabe clasificar las Sentencias de la CIJ de diferentes formas. Así J.C. WITENBERG y J. DESRIOUX en *L'organisation Judiciaire. La Procédure et la Sentence Internationales*, Paris 1937, p. 257, distinguen entre (1) Sentencias sobre el fondo o incidentales; (2) según sean el resultado de un procedimiento contradictorio o se hayan dictado en rebeldía y (3) aquellas que ponen fin al procedimiento -definitivas- o interlocutorias -preparatorias, ordenan una medida de instrucción, por ejemplo-.

cuanto al asunto sometido a su conocimiento, como si en su seno se produce un sentir unánime. En la primera hipótesis entregar al grupo mayoritario la elaboración del anteproyecto de Sentencia, forzará una cristalización premeditada de la misma. Integrar la Comisión, por otro lado, con los Jueces ordinarios de la Corte implicaría una discriminación de los Jueces *ad hoc*.

Los efectos de las Sentencias de la Corte son sobradamente conocidos, ya que el Estatuto se encarga de señalarlos y la Corte en su jurisprudencia los ha reiterado. Por una parte, el artículo 59 del Estatuto indica el efecto de *cosa juzgada* inmediato -desde su lectura en sesión pública-, a diferencia de lo que ocurre en el orden interno⁵. Además, ese efecto de cosa juzgada posee carácter relativo, por cuanto se encuentra doblemente limitado, según se desprende de la propia letra del precepto estatutario⁶. En primer, lugar observamos un límite subjetivo, ya que: «La decisión de la Corte no es obligatoria sino para las partes en litigio...», teniendo, por tanto los fallos de la Corte consideración de *res inter alios acta* respecto de terceros⁷. La segunda

⁵ En este sentido el art. 81 de la Convención de La Haya de 1907 y el art. 60 del Estatuto de la CPJI y de la CIJ. Jurisprudencialmente lo ha reconocido la CPJI en su Sentencia de 13 de junio de 1939 en el asunto de la sociedad comercial de Bélgica, ver en CPJI Série A/B, n°78, p. 176. También la CIJ en la Sentencia de 18 de noviembre de 1960, en el asunto de la Sentencia arbitral del Rey de España, de 23 de diciembre de 1906, CIJ Recueil 1960, p. 214.

⁶ Una cuestión diferente a la planteada y que nosotros aquí únicamente vamos a apuntar es la relativa a si el art. 59 del Estatuto se refiere a la Sentencia en su conjunto -también la *ratio decidendi*-, o únicamente la parte dispositiva. La Sentencia arbitral de 21 de octubre de 1994 en el asunto conocido como Laguna del Desierto -controversia sobre el recorrido de la traza del límite entre el Hito 62 y el Monte Fitz Roy (Argentina/Chile) - resolvió -parágrafo 70- de la siguiente manera esta cuestión: «El valor de *res judicata* de una Sentencia internacional se refiere, primeramente, a la parte dispositiva de ésta, o sea aquella en la cual el tribunal decide el litigio y determina los derechos y las obligaciones de las Partes. La jurisprudencia ha entendido también que aquellas proposiciones contenidas en los considerandos, que son los antecedentes lógicamente necesarios del dispositivo, tienen la misma obligatoriedad que éste».

⁷ La CPJI y, posteriormente la CIJ, se han pronunciado acerca de este efecto de la Sentencia internacional. La primera en el asunto de la Sociedad comercial de Bélgica, CPJI serie A/B, n°78, pp. 174-178; asunto Wimbledon CPJI Serie A n°2, p. 32; asunto de la fábrica de Chorzow, CPJI serie A, n°17, p. 29. La primera ocasión en que la CIJ proclama los efectos de su jurisprudencia es con ocasión de la tercera fase del asunto del Estrecho de Corfú. A pesar de que el Gobierno albanés no se personó en el procedimiento, contestó la competencia de la Corte para establecer la cuantía de las reparaciones debidas. A ello la Corte respondió de manera tajante, indicando que esa cuestión ya había sido resuelta por una Sentencia anterior, por lo «qu'aux

limitación posee carácter objetivo, ya que únicamente obliga a las partes en la controversia respecto del asunto concreto. En consecuencia, ésta no vincula a los Estados implicados respecto de asuntos objetivamente similares, sino tan sólo para el que ha sido judicialmente resuelto⁸.

El primero de los límites indicados suscita problemas cuando nos encontramos ante terceros que, sin tener consideración de partes, resultan afectados por el fallo de la Corte. Nos estamos refiriendo evidentemente al tercero interviniente no parte en un procedimiento. Esta cuestión se puso de relieve con ocasión de la intervención nicaragüense en el asunto de la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador. La propia Sala, consciente del problema, intenta tranquilizar al tercero en la misma Sentencia, invocando el art. 59 del Estatuto⁹, sin que pueda afirmarse que su capacidad de convencimiento haya sido memorable, dadas las

termes de son Statut (art. 60) qui, pour le règlement du présent différend oblige le Gouvernement albanais, cet arrêt est définitif et sans recours et qu'en conséquence il y a à cet égard chose jugée». Después de esta fecha se manifiesta en términos similares en el asunto *Haya de la Torre*, CIJ Recueil 1951, p. 77 y en el de *la Barcelona Traction -excepciones preliminares-*, CIJ, Recueil 1964, p. 20. También lo afirma la jurisprudencia arbitral. Existe temprana jurisprudencia arbitral en este sentido: controversia anglo-venezolana, Sentencia de 3 de octubre de 1899, *Vid.* RGDIP, 1901, p. 73, diferencia territorial entre Bolivia y Perú, Sentencia de 30 de diciembre de 1902, RGDIP, 1910, p.110. También el Tribunal de Justicia centroamericano se pronunció al respecto, en su Sentencia de 30 de septiembre de 1916 AJIL, 1917, pp. 181-229, en el asunto Costa Rica/Nicaragua respecto del Tratado Bryan Chamorro. En cuanto al fundamento de la predicada obligatoriedad, existen distintas posturas al respecto. Así para A. EL-QUALI *Effets Juridiques de la sentence internationale. Contribution à l'étude de l'exécution des normes internationales*, Paris, 1984, p. 67, el origen de este efecto se encontraría en el acuerdo. El mismo autor en la p. 74 afirma que se trata de una norma consuetudinaria, el efecto de cosa juzgada de las decisiones de órganos jurisdiccionales, judiciales o arbitrales; H. MOSLER en "Problems and tasks of International Judicial and Arbitral Settlement of Disputes Fifty after Years the Founding of the World Court" en *Judicial Settlement of International Disputes*, Berlin, 1974, pp. 13-14, concibe el efecto de cosa juzgada como una solución al problema de la eficacia de la justicia internacional en la resolución de conflictos; M. SCERNI "La procédure de la Cour Permanente de Justice Internationale", en *R.des C.* 1938-III, t. 65, p. 665, estima que la naturaleza jurídica de las Sentencias, el fundamento de su fuerza obligatoria y los límites subjetivos y objetivos de ésta son cuestiones de derecho internacional sustantivo; CH. DE VISSCHER *Aspects récents du droit procédural de la C.I.J.* Paris 1966, p.178, entiende que el efecto de cosa juzgada de las Sentencias de la Corte es una necesidad social.

⁸ La relatividad del efecto de cosa juzgada tampoco es una novedad en el Estatuto de la CPJI o de la CIJ, antes ya existía y derivaba del art. 56 de la Convención de La Haya de 1899 y 84 de la de 1907.

⁹ *Vid.* Sentencia de 11 de septiembre de 1992, en CIJ Recueil 1992, pp. 609-610.

características objetivas de la controversia objeto del fallo¹⁰. No se nos ocurre, como ya señaláramos en el capítulo anterior, la manera en la que la situación jurídica de las aguas de la Bahía de Fonseca, de la que son ribereños tres Estados, puede no ser obligatoria para uno de ellos, teniendo en cuenta además que la Sala lo considera un condominio.

El efecto definitivo de las Sentencias de la Corte se proclama en el artículo 60 del Estatuto, que indica: «*El fallo será definitivo e inapelable*». Este efecto definitivo no puede entenderse como sinónimo de *firmeza*, o imposibilidad absoluta de recurrir; su único significado es que estas decisiones definitivas no pueden ser objeto de apelación¹¹. Las Sentencias de la Corte son susceptibles de interposición de dos -y sólo dos- tipos de recursos: de interpretación -como señala el propio art. 60 del Estatuto- y de revisión -perfilado en el art. 61¹²-.

Los preceptos citados no especifican si los efectos mencionados derivarán de los fallos dictados por cualquier formación de la Corte o tan sólo de los emitidos por el Pleno. La primera posición sin embargo se desprende del art. 58 del Estatuto, que alude con carácter general a las Sentencias de la Corte, y, en todo caso, para evitar interpretaciones cuyo objeto fuera restringir su aplicación únicamente al Pleno se introdujo en 1945 en el art. 27 del Estatuto la precisión de que las Sentencias que pudieran emanar de cualquier tipo de Salas se entenderán Sentencias de la Corte.

¹⁰ Vid. *Supra* el epígrafe 4.2.4. del Capítulo Cuarto.

¹¹ También cabe definir este efecto como lo hace A. EL-QUALI en *Effets juridiques de la sentence internationale*, Paris 1984, p. 109, como inmediatez del efecto de cosa juzgada.

¹² Vid. respectivamente *Infra* epígrafes 4.1. y 4.2. de este capítulo.

En tiempos de la CPJI existía una disposición similar, pero era de rango no estatutario, sino reglamentario¹³ y, además, de un alcance muy concreto, pues se refería únicamente a los fallos de las Salas de Procedimiento Sumario, careciendo por tanto de aplicación a los que hubieran podido emitir otros tipos de Salas, planteando por ello más problemas de los que resolvía, porque de su interpretación *a sensu contrario* se desprendía que únicamente las Sentencias dictadas las Salas de Procedimiento Sumario se consideraban emitidas por la Corte¹⁴, interpretación que sólo en 1936 fue atajada gracias a una reforma reglamentaria, extendiendo expresamente el ámbito de aplicación del precepto a las Salas «especiales»¹⁵.

Necesario o simplemente oportuno, en la actualidad el art. 27 del Estatuto de la CIJ cortocircuita toda polémica. Las Salas, como el Pleno, son formaciones de la Corte y ambas emiten Sentencias que se imputan a la institución en términos de absoluta igualdad. En cuanto tales, poseen el mismo valor, despliegan idénticos efectos y son susceptibles de los recursos que con carácter general perfila el Estatuto¹⁶.

¹³ Artículo 70 de los Reglamentos de 1922 y 1926.

¹⁴ A pesar de las dudas que suscitaba el precepto recién citado, lo cierto es que de una interpretación sistemática del Reglamento se desprendía la consideración como Sentencias de la Corte de aquellos fallos que pudiera haber emitido alguna de sus Salas «especiales». Hasta 1936 la regulación reglamentaria de estas formaciones se encuentra en la Sección titulada *Procedimiento ante la Corte y las Salas especiales*, dentro de la que existía un precepto -el art. 64 de los Reglamentos de 1922 y 1926- que indicaba «la Sentencia tendría fuerza obligatoria desde su lectura, de acuerdo con el art. 58 del Estatuto». Esta disposición no aludía de forma específica a las Sentencias de este tipo de Salas. Sin embargo, cabía su aplicación debido a la rúbrica bajo la que se ubicaba Sección B, dedicada al procedimiento ante la Corte y las Salas especiales del Capítulo II -del procedimiento-, Título I -procedimiento contencioso-.

¹⁵ Según el art. 73 «Las Sentencias de las Salas especiales o Salas de procedimiento sumario son Sentencias de la Corte. Sin embargo, su lectura se produce en sesión pública de la Sala». Este precepto se encuentra dentro de la Sección Segunda "Procedimiento ante las Salas especiales y la Sala de procedimiento sumario" (arts. 69 a 73) del Título II relativo al Procedimiento Contencioso.

¹⁶ La Sala en esta Sentencia recuerda el art. 27 del Estatuto, al indicar «... il convient de rappeler que la Chambre, dont l'arrêt "sera considéré comme rendu par la Cour" (Statut, art. 27) est tenue de régler le présent différend "conformément au droit international" (art. 38)». Ver en CIJ Recueil 1986, p.575.

En cuanto a los efectos de las Sentencias dictadas por las Salas de la CIJ la última consideración que debemos formular es la relativa al art. 94.2 de la Carta. Efectivamente, la ejecución de las Sentencias de las Salas, en cuanto son Sentencias de la Corte, se encuentran amparadas por la previsión contenida en el precepto citado acerca de la posible ejecución forzosa¹⁷.

El problema de los efectos de las Sentencias de las Salas *ad hoc* adquiere un sesgo particular al hilo de las pretensiones que, al respecto contienen algunos compromisos que han sido fundamento para su constitución. Así el Acuerdo de 29 de marzo de 1979, entre Estados Unidos y Canadá, cuya notificación se utilizó como instrumento de introducción en la instancia que decidió la *delimitación de la frontera marítima del Golfo de Maine*, contenía un apartado -art. II.4- que indicaba la aceptación por ambos Estados de la decisión adoptada por la Sala en este asunto como definitiva y obligatoria -idéntica previsión se contiene en el art. IV.1 del Acuerdo de 16 de septiembre de 1983 entre Burkina Faso (entonces Alto Volta) y la República de Malí¹⁸-. De estas disposiciones convencionales cabía deducir un reconocimiento puntual a este efecto jurídico de las Sentencias de las Salas de la Corte. ¿Era necesario? ¿No podría llevar a engaño sobre las bases estatutarias, ajenas a la voluntad de las partes, de los efectos de las Sentencias de las Salas?

¹⁷ En el entendido de que el Capítulo Sexto de la Carta no autoriza al CdS a «modificar un fallo de la Corte, ni a desconocer los derechos y obligaciones que los Estados tienen directamente de la Carta en virtud de lo dispuesto en su artículo 94. Lo que puede hacer el CdS es abstenerse de actuar para hacer cumplir un fallo de la Corte, que es algo muy distinto y que no altera los derechos y obligaciones que los Estados partes puedan tener *inter se* en virtud de un fallo de la Corte o directamente de la Carta». Vid. Ponencia de S. TORRES BERNARDEZ "La función de la Corte Internacional de Justicia en el sistema de la Carta de las Naciones Unidas", p.7, presentada en el Congreso de las Naciones Unidas sobre el Derecho Internacional Público de Nueva York del 13 al 17 de marzo de 1995, dentro del Tema 2 : **Medios de solución pacífica de controversias entre Estados incluyendo el recurso, y pleno respeto, a la Corte Internacional de Justicia.**

¹⁸ El art. 6 del Acuerdo de 24 de mayo de 1986 entre Honduras y El Salvador dispone el compromiso de las partes de ejecutar la Sentencia íntegramente y de buena fe. Vid. los compromisos en Apéndice II: DOCUMENTOS 2.1. Estados Unidos/Canadá; 2.2. Burkina Faso/Mali y 2.3. Honduras/El Salvador.

En el asunto de la *delimitación de la frontera marítima en el Golfo de Maine* una vez recibida la notificación del acuerdo de 29 de marzo de 1979 entre Estados Unidos y Canadá -realizada por las partes¹⁹-, algunos miembros de la Corte plantearon a las partes unas cuestiones acerca de aspectos que podían entenderse contrarios tanto al Estatuto como al Reglamento de esta institución. La tercera de las preguntas formuladas versaba sobre la compatibilidad entre el artículo II.4 del Acuerdo de 29 de marzo de 1979 y el art. 27 del Estatuto²⁰. La respuesta de las partes al respecto sólo puede defraudar, ya que se limita a señalar la complementariedad y compatibilidad entre las disposiciones del Estatuto y el precepto controvertido del Acuerdo entre Estados Unidos y Canadá. Las partes fundamentaron la conclusión indicada señalando que el art. II.4 del acuerdo no resulta jurídicamente necesario, aunque tenía la finalidad de «*to inform domestic constituencies that my not be familiar with the Statute of the Court*»²¹.

Más preocupante resultó la actitud posterior de las partes en la controversia entre Burkina Faso y la República de Malí, que enviaron sendos mensajes a la Sala -24 de diciembre de 1986 y 10 de enero de 1987, respectivamente-, mediante los cuales ¡¡aceptaban la Sentencia emitida por la

¹⁹ Mediante carta conjunta dirigida a la Secretaría de la Corte, el 25 de noviembre de 1981.

²⁰ Vid. Ordenanza de 20 de enero de 1982, en CIJ Recueil 1982, p. 5. El resto de las cuestiones eran las siguientes: 1.- Entendían que la previsión conforme a la cual las vacantes que pudieran producirse en la composición de la Sala se cubrirían de un modo que las partes juzgasen aceptable podía resultar incompatible con los arts. 26.2 del Estatuto y 17.3 y 18.1 del Reglamento; 2.- La notificación del nombre del Juez designado *ad hoc* por Canadá determinaría la constitución de la Sala y el inicio del plazo de depósito de las memorias de las partes. Ambos Estados en este punto olvidaban tanto que el establecimiento de las Salas corresponde a la Corte, como que la notificación del nombre del Juez *ad hoc* no es el único requisito exigido por los arts. 31 del Estatuto y 35 del Reglamento; 4.- Las partes habían previsto la posible revisión de la Sentencia de la Sala por un tercero, en aparente oposición con los arts. 59 y 60 del Estatuto.

²¹ Vid. Ordenanza de 20 de enero de 1982, en CIJ Recueil 1982, p. 7

Cortell²². Esta actitud no deja de sorprender cuando menos, ya que la obligatoriedad de las Sentencias de la CIJ deriva del art. 94.1 de la Carta y del art. 59 del Estatuto de este Tribunal, sin que de la aceptación o no de las partes derive ningún efecto. Todo un reflejo de síndrome arbitral.

La prudencia de una previsión como las señaladas resulta más que discutible²³. Su contenido podía interpretarse entendiendo *a sensu contrario* que, en su defecto las partes podrían no reconocer el efecto obligatorio y definitivo de la Sentencia, es decir que el fundamento de estos efectos está exclusivamente en el Compromiso de las partes y no en el Estatuto de la Corte. Sostener tal cosa sería equivocado.

Estamos ante una reiteración, una superfluidad, animada por el deseo políticamente explicable de reforzar las características de la Sentencias ya consagradas en el Estatuto de la Corte. En todos los casos el fundamento de la obligatoriedad de las Sentencias de las Salasse encuentra en el Estatuto y **no** en el compromiso que puedan haber celebrado las partes en la controversia.

Por otra parte, si en virtud del art. 101 del Reglamento de la CIJ, como ya hemos visto²⁴, las partes pueden modificar de común acuerdo los arts. del Título III, referido al «*Procedimiento contencioso*», o realizar adiciones particulares a los mismos, modificaciones o ampliaciones que serán aplicadas por la Sala en cuestión si «*las estima apropiadas a las circunstancias del asunto*», cabe ahora subrayar que se exceptúan expresamente de esta posibilidad los preceptos dedicados al fallo -arts. 93-97-, entre los que se

²² Estos mensajes fueron publicados por el Secretario de la Corte. *Vid.* comunicados de la CIJ n°87/1.

²³ *Vid.* el comentario al respecto de E. DECAUX "L'arret de la chambre de la Cour Internationale de Justice dans l'affaire du différend frontalier (Burkina Faso/ République du Mali) arret du 22 décembre 1986", en *AFDI*, 1986, pp. 217-218.

²⁴ *Vid. supra* Capítulo Tercero.

encontraría el relativo al punto comentado; todo ello con independencia de la ociosidad de recurrir a esta alegación siendo las características de las Sentencia de rango estatutario y, por tanto, de imposible afectación por el ejercicio de las partes del ámbito de autonomía reconocida a su voluntad por el Reglamento en materias de procedimiento.

Por tanto, estas disposiciones de los compromisos señalados se entienden reiteraciones innecesarias del contenido tanto del Estatuto como del Reglamento, porque no se puede someter a una condición establecida por las partes en una controversia los efectos jurídicos de una Sentencia de la Corte. Son cláusulas peligrosas en la medida en que ciernen alguna duda sobre el verdadero fundamento de su obligatoriedad.

Tanto el Estatuto como el Reglamento de la CIJ se limitan a regular el fallo y los recursos de los que éste es susceptible, sin indicar a quién corresponde velar por la ejecución de las Sentencias de una Sala *ad hoc*. Sabemos que, por su propia naturaleza, estas Salas desaparecen una vez dictan Sentencia; por tanto, la cuestión radica en si corresponde al Pleno o a la Sala que dictó Sentencia ocuparse de su ejecución.

En cuanto a la práctica seguida hasta el momento, ha de señalarse que el compromiso entre Burkina Faso y la República de Malí dejó en manos de la Sala la designación de los expertos que habrían de proceder a la demarcación física de la frontera objeto del litigio y, por tanto, la ejecución de la Sentencia²⁵.

Por el contrario, El Salvador/Honduras ya habían acordado el establecimiento de una comisión de demarcación por el Convenio de 11 de

²⁵ El art. IV.2 de este acuerdo dispone que, en el año siguiente a la Sentencia, las partes procederán a la demarcación de la frontera. Además, en el mismo precepto, aunque en el apartado subsiguiente, las partes piden a la Sala que designe en la Sentencia tres expertos que la asistan para llevar a cabo la operación de la demarcación. *Vid.* en Apéndice II. DOCUMENTOS. 2.2.

febrero de 1986 con la finalidad de ejecutar la Sentencia. En efecto, el art. 6.1 del acuerdo entre El Salvador y Honduras, dispone la ejecución completa «en un todo» y con entera buena fe, estableciendo que la misma se llevará a cabo por la Comisión especial de Demarcación recién mencionada. El inicio de esta tarea se prevé que se produzca a más tardar tres meses después de la fecha de la Sentencia y la Comisión «*continuará diligentemente sus actuaciones hasta concluir la*».

Por tanto en éste, como en tantos otros aspectos relativos a las Salas *ad hoc*, habrá de atenderse a la voluntad de las partes. De ahí que, en defecto de indicación al respecto en el compromiso del que derivó la competencia de la Sala, lo más oportuno será atender a la voluntad actual de las partes, formulada en un nuevo acuerdo. Si las partes no consiguieran alcanzar un acuerdo en este punto la solución se complica, aunque podremos aplicar aquí la propuesta *infra* respecto de la formación competente para conocer de los recursos interpuestos frente a las Sentencias dictadas por una Sala²⁶. Sin embargo, esta opción no deja de plantear dificultades, derivadas de la misma naturaleza *ad hoc* de estas Salas.

2. LOS GRANDES PROBLEMAS.

A pesar -o tal vez a causa- de esta equiparación, las Sentencias de las Salas *ad hoc* suscitan recelos tanto entre la doctrina como en los miembros de la Corte. Las críticas pueden ordenarse alrededor de dos grupos de problemas, que serán sucesivamente abordados en este capítulo. En primer lugar, la posibilidad de provocar una ruptura en la línea jurisprudencial

²⁶ Vid. *infra* epígrafe 2.1. de este capítulo.

desarrollada hasta el momento en el seno del Tribunal. Si ello ocurriera, es decir, si en el seno de una Sala *ad hoc* se adoptara una decisión opuesta a la jurisprudencia de la Corte, se estaría imponiendo por parte de una minoría al Pleno una nueva línea de decisión. Este temor deriva de la carencia de procedimientos mediante los cuales los miembros de la Corte que no formen parte de la Sala puedan manifestar esa disconformidad, como indica T.O. ELIAS en su opinión disidente a la Ordenanza del Pleno por la que entendía que la competencia para resolver la solicitud nicaragüense de intervención correspondía a la Sala que estaba conociendo del fondo del asunto de la *delimitación de la frontera terrestre, insular y marítima entre Honduras y El Salvador* ²⁷. Ciertamente, las Sentencias de las Salas, en cuanto Sentencias de la Corte ex art. 27 del Estatuto, vinculan a todos los miembros de este Tribunal sin que éstos puedan tomar parte en sus trabajos, intervenir o formular opiniones acerca del contenido de aquéllas. Pero ello es así, no sólo en la CIJ, sino también en cualesquiera otros tribunales nacionales o internacionales que se organizan en Pleno y Salas. Intimamente unido a este problema está el debate sobre los remedios que se proponen para solucionarlo; en el supuesto en que el Pleno y la Sala hayan resuelto una cuestión de diferente manera cabe plantear si existiría la posibilidad de recurrir al Pleno para que resuelva el *conflicto* suscitado. Una especie de apelación sería una vía de solución posible, a semejanza de lo que ocurre en otras jurisdicciones internacionales que funcionan en Pleno y en Salas; pero para ello habría que reformar el Estatuto.

El segundo grupo de problemas al que haremos referencia es el relativo a la interposición de los recursos actualmente regulados. El Reglamento -art. 100.1- indica que la formación competente para conocer de las demandas de interpretación o revisión de los fallos de la Corte será la misma que los emitió, por tanto, el Pleno o la Sala concreta. Dada la naturaleza *ad hoc* de este

²⁷ Vid. Ordenanza de 28 de febrero de 1990, en CIJ Recueil 1990, p. 9

tipo de formaciones, la interposición de algún tipo de recursos conllevaría ciertas dificultades. Estas Salas, una vez han emitido Sentencia desaparecen²⁸. De modo que el problema en este punto es qué formación es la competente para conocer de los recursos interpuestos frente una Sentencia dictada por una Sala *ad hoc*: el Pleno o la propia Sala, resurrecta o recompuesta. La cuestión de fondo es la relativa a los plazos. Sabemos que las Salas *ad hoc* se constituyen para conocer de un determinado asunto. Sin embargo, según el Estatuto se puede interponer un recurso de revisión hasta diez años después de la fecha en que se dictó el fallo. Todo lo cual plantea serias dudas acerca de la aplicabilidad del art. 100.1 a estas formaciones extraordinarias de la Corte que son objeto de nuestro estudio.

2.1. El problema de la recurribilidad.

La primera cuestión que debemos plantear en el estudio de este tema es la de los tipos de recursos que pueden interponerse a una Sentencia dictada por una Sala de la Corte y en particular, por una *ad hoc* ²⁹. La remisión al procedimiento contencioso que, respecto de las Salas de la Corte, se contiene

²⁸ El art. 101 del Reglamento prevé que las partes, de común acuerdo, podrán proponer a la Sala que conoce de la controversia, las modificaciones procedimentales que estimen convenientes (salvo los arts. 93-97 relativos al fallo) y la Sala decidirá en consecuencia. Ello permite a las partes en una controversia insertar una cláusula en el compromiso respecto de esta cuestión.

²⁹ La posibilidad de formular recursos frente a los fallos de una jurisdicción internacional no es una cuestión nueva, sino que ya se contemplaban en las Convenciones de La Haya de 1899 (arts. 54-56) y 1907 (arts. 81-84). El art. 82 del texto de 1907 reconocía la competencia del Tribunal que dictó el Laudo arbitral objeto de interpretación salvo que las Partes en la controversia hubieran acordado otra cosa. La regulación del recurso de revisión - en art. 83- era más flexible aún, ya que solamente sería competente el Tribunal para conocer del mismo si las partes en el compromiso se hubieran reservado la facultad de solicitar la revisión de aquel acto arbitral. Por su parte, cabe afirmar que la autoridad de un órgano arbitral para resolver un recurso de interpretación deriva de su poder jurisdiccional, conferido por las partes en el compromiso. *Vid.* sobre estos recursos S. TORRES BERNARDEZ "A propos de l'interpretation et de la revision des arrêts de la Cour Internationale de Justice", en *Le droit International à l'heure de sa codification. Études en l'honneur de Roberto Ago*, Milán 1987, pp. 443-496.

en el art.90 del Reglamento, incluye la subsección dedicada a la regulación de las demandas de interpretación o de revisión -se trata de la Subsección F del Título III de este texto-. Por tanto, las Sentencias dictadas por una Sala son susceptibles de idénticos recursos que las del Pleno: interpretación y revisión.

El problema, en este sentido se plantea respecto de cual es la formación competente para conocer de estas demandas. En virtud del art. 100.1 del Reglamento, estos recursos habrán de plantearse ante la propia Sala que conoció del asunto. El objeto de esta previsión resulta evidente. En primer lugar una interpretación auténtica -objeto de este recurso- es la formulada por el órgano que emitió la Sentencia que se pretende interpretar. En segundo término, por lo que hace a una solicitud de revisión, ningún órgano mejor que la formación que conoció de un asunto puede determinar en qué medida el hecho descubierto puede ser por su naturaleza un factor decisivo respecto de aquél.

Sin embargo, a pesar de reconocer lo razonable y adecuada que resulta con carácter general la previsión contenida en el art. 100.1 del Reglamento, plantea algún problema por la naturaleza *ad hoc* de estas Salas y por los plazos establecidos para la interposición de los recursos. Este tipo de Salas constituye, como sabemos, para conocer de un asunto determinado y una vez que han dictado Sentencia se disuelven, desaparecen. En cuanto a los plazos para recurrir, observamos que el art. 61.4 del Estatuto prevé que los recursos de revisión caducan a los diez años contados desde la fecha de la Sentencia recurrida.

Al hilo de lo anterior, si la Sala que emitió la Sentencia es la competente para conocer del recurso interpuesto frente a ella, ¿qué ocurre con aquéllos que dejaron de ser miembros de la CIJ o con las vacantes que se hayan producido en la formación concreta con posterioridad a la Sentencia?

¿Cómo resuelven esta cuestión el TEDH y el TJCE? El art. 56.4 del Reglamento de Procedimiento del TEDH dispone respecto de la demanda de interpretación que ésta «*será examinada por la Sala que haya pronunciado la Sentencia, compuesta si es posible por los mismos Jueces*». Cabe pues la posibilidad de que en la composición de esta Sala participen Jueces que en el momento en que se introdujo la demanda carezcan de la calidad de Miembros del TEDH, en cuyo caso éstos «*serán llamados a conocer del caso*». Junto a este supuesto, el precepto indicado también se plantea el supuesto de la imposibilidad de tomar nuevamente parte en la Sala, por distintas causas, como el fallecimiento del miembro. Esta situación se resuelve mediante «*la sustitución del Juez de que se trate del mismo modo que hubiese sido aplicado para su designación en la Sala*».

En cuanto a los recursos de revisión, el art. 57.4 dispone que la admisibilidad de toda demanda de revisión se entiende como un nuevo caso, puesto que será examinada por una Sala constituida de acuerdo con el procedimiento prescrito para ello en el art. 43 del Convenio de Roma. Una vez esta Sala se ha pronunciado favorable a la admisibilidad de la demanda, la transferirá a la Sala que emitió la Sentencia objeto del recurso, salvo que ello no fuera posible, en cuyo caso procederá al estudio del caso.

El Reglamento de Procedimiento del TJCE contiene, por su parte, dos preceptos, los arts. 127.1 y 129.2, que conjuntamente considerados resultan sustancialmente idénticos al del 100.2 del Reglamento de la CIJ, por cuanto ambos disponen que las demandas de interpretación y de revisión serán atribuidas a la Sala que haya dictado la Sentencia contra la cual se formulen.

En las páginas que siguen nos detendremos en primer lugar en la consideración teórica del recurso interpretativo, para pasar luego a comentar el único precedente de la práctica de la Corte de La Haya, concerniente a la

interpretación de una Sentencia dictada por una Sala (de procedimiento sumario), la Sentencia nº3 de la CPJI, recaída en el *asunto de la interpretación de algunos preceptos del Tratado de Neuilly* ³⁰. A continuación retomaremos la perspectiva teórica para estudiar el recurso de revisión; en este caso, a diferencia del anterior, no podemos comparar la respuesta teórica con la aplicación práctica puesto que hasta el momento nunca se ha interpuesto un recurso de este tipo frente a una Sentencia dictada por una Sala *ad hoc*. Después revisaremos la respuesta que la doctrina ofrece a la cuestión planteada y, finalmente, nos ocuparemos de la solución aportada para resolver la cuestión de la interposición de recursos frente a los laudos arbitrales, así como la posibilidad de transponer la misma a las formaciones que nos ocupan.

2.1.1. El Recurso de interpretación.

A diferencia de lo que ocurre con el recurso de revisión, el Estatuto ni perfila ni denomina *recurso* a la interpretación de las Sentencias del Tribunal, un punto pobremente regulado a nivel estatutario y más a nivel reglamentario y, objeto, en todo caso, de una práctica muy escasa. Por lo que a su denominación concierne, el que no se le llame *recurso* es lógico desde una perspectiva técnica, ya que no nos encontramos ante un verdadero *recurso* -puesto que no hay reclamaciones de ningún tipo-, sino ante una solicitud de aclaración de puntos que pudieran haber quedado oscuros o resulten contradictorios en la Sentencia.

El objeto del *recurso interpretativo* es, justamente, aportar una interpretación *auténtica* de la Sentencia. Su fundamento será la existencia de

³⁰ Vid. Sentencia de 26 de marzo de 1925, CPJI Série A/B nº13

una divergencia real entre las partes acerca del contenido y alcance de este acto jurídico, sin que pueda utilizarse este medio para retomar o discutir otras cuestiones distintas de las indicadas³¹. De ello resultan las características del recurso interpretativo y, en primer lugar, su objeto, que habrá de ser clarificar los aspectos oscuros o contradictorios de la Sentencia³². La premisa es una contestación u oposición de pretensiones característica del procedimiento contencioso -conforme a las reglas del cual se substancia-, aunque esta vez limitado al alcance o sentido de algunos aspectos contenidos en el fallo del tribunal. Esa contestación u oposición de pretensiones entre las partes tendrá como fundamento el contenido de un acto jurídico concreto: la Sentencia, y no cualesquiera otros actos de la Corte. No cabe, por tanto, la interposición de un recurso de interpretación frente a una Ordenanza de la CIJ.

En la operación jurídica de interpretación se pretende «*determinar el sentido preciso de una norma, pero no puede modificarlo*»³³. Este límite, que debe respetarse al realizar la tarea de interpretación, lo había señalado la CIJ en la *solicitud de interpretación de la Sentencia de 20 de noviembre de 1950, en el asunto del Derecho de asilo*:

«*L'interprétation ne saurait en aucun cas dépasser les limites de l'arrêt telles que les ont tracées d'avance les conclusions des Parties*»³⁴

³¹ En este sentido se pronunció ya la CPJI en su Sentencia en *el asunto de la interpretación de las Sentencias n° 7 y 8*, ver en CPJI, Serie A/B, n° 26, también lo ha hecho la CIJ en los asuntos de *la interpretación de la Sentencia en el asunto del Derecho de Asilo*, Sentencia de 20 de noviembre de 1950, ver en CIJ Recueil 1950, pp.395 y ss.

³² Vid. en este sentido la Sentencia de la Corte en el *asunto del derecho de asilo*, en CIJ Recueil 1950, p. 402.

³³ Vid. Sentencia del Tribunal arbitral Internacional de 21 de octubre de 1994 en el asunto de la *controversia sobre el recorrido de la traza del límite entre el Hito 62 y el Monte Fitz Roy (Argentina/Chile)*, es el asunto conocido como Laguna del Desierto, parágrafo 75.

³⁴ Sentencia de 27 de noviembre de 1950, en CIJ Recueil 1950, p. 403.

En cuanto a la solicitud de interpretación, es posible que se produzca por la doble vía vista respecto de la incoación del procedimiento principal: demanda unilateral o notificación del compromiso. Sin embargo, ha sido la mencionada en primer lugar la única utilizada hasta el momento³⁵. La Corte -en cualquiera de sus formaciones- es libre de emitir o no la interpretación solicitada³⁶.

Por lo que a los aspectos procesales se refiere, en el artículo estatutario que regula este recurso observamos una dualidad dependiente del instrumento utilizado para introducir la solicitud de interpretación. Si este trámite se cumplió mediante una demanda unilateral, el procedimiento puede consistir en dos fases, una primera escrita, compuesta por el escrito del demandante -con la exposición de las razones que le amparan para solicitar la interpretación- y las observaciones a la misma formuladas de la contraparte, y una segunda fase, oral o escrita, en que el Tribunal dará a las partes la posibilidad de facilitarle información. La forma -oral o escrita- en la que se rindan los datos requeridos dependerá de la decisión de la Corte. Esta segunda fase del procedimiento, facultativa, sólo tendrá lugar si el Tribunal lo estima conveniente. Así hubo segunda fase oral en los asuntos de la *Interpretación de las Sentencias n° 7 y 8 de la CPJI* y de la *Interpretación de la Sentencia de 24 de febrero de 1982 en el asunto de la Plataforma Continental entre Túnez y Libia*, no así en los asuntos de la *interpretación de la Sentencia n°3 de la CPJI*, y tampoco en la de la Sentencia emitida por la CIJ en el *asunto del Derecho de asilo*.

³⁵ En el asunto de la *interpretación de la Sentencia n°3*, fue el Gobierno griego quien interpuso la demanda en este sentido; en el relativo a la *interpretación de las Sentencias n° 7 y 8*, el Estado recurrente fue Alemania. En el primer asunto del que conoció la CIJ en interpretación, el del *Derecho de Asilo*, el Gobierno colombiano fue el que depositó una demanda en este sentido. También se utilizó este instrumento en el asunto de la *interpretación de la Sentencia de 24 de febrero de 1982, en el asunto de la plataforma continental entre Túnez y Libia*.

³⁶ Vid. Sentencia de 26 de marzo de 1925 en CPJI, Série A/B n°13, p. 5.

En el supuesto de que el instrumento utilizado para interponer el recurso de interpretación fuera la notificación de un compromiso, el procedimiento se sustanciaría de una manera abreviada, porque la primera fase resulta innecesaria, por cuanto en el compromiso notificado habrán de precisarse entre otros aspectos los puntos que son objeto del desacuerdo. Además, es lógico prescindir del depósito de objeciones a la interpretación de la Sentencia, porque la solicitud de interpretación posee naturaleza consensual, en cuanto las partes están de acuerdo en acudir a este órgano para resolver los problemas en presencia.

A pesar de esta tramitación abreviada, la segunda de las fases se mantiene, con el mismo carácter facultativo; es decir, si la Corte lo entiende procedente dará oportunidad a las partes para que le faciliten información adicional a la contenida en el compromiso que sirvió como instrumento de interposición del recurso. Información que, igualmente, podrá ser facilitada escrita u oralmente.

Con independencia del instrumento utilizado, el procedimiento termina mediante una Sentencia -art. 100.2 del Reglamento- de la formación que pronunció el fallo objeto de recurso. Este precepto plantea dos cuestiones -además de la ya indicada *supra* acerca de las Salas *ad hoc* -: en primer lugar, la competencia para conocer del recurso concreto ¿deriva de la establecida en el asunto principal o, por el contrario, ha de establecerse nuevamente?, y, en segundo lugar ¿estamos ante un asunto distinto del que era objeto del primer fallo o se trata de una fase más del mismo?

La respuesta a la primera de las cuestiones formuladas es fácil; para el recurso de interpretación es suficiente el establecimiento de una *competencia unilateral*, entendiendo por tal la suficiencia de una instancia de parte. La existencia de esta competencia unilateral es obligatoria para la otra parte, a

pesar de la posible oposición de ésta. Nos encontramos por tanto ante una excepción al carácter voluntario de la jurisdicción de la Corte; es una jurisdicción estatutaria, en cuanto la fuente de la jurisdicción de la Corte en materia de interpretación de sus fallos se encuentra en el art. 60 del Estatuto³⁷. Lo anterior significa que de la interposición de una demanda de interpretación por una de las partes en la controversia que es objeto de esa Sentencia recurrida, deriva la competencia de la formación de la Corte que emitió aquélla para formular una interpretación auténtica de la misma. Esta conclusión se desprende de la disposición estatutaria que de manera muy clara señala: «*En caso de desacuerdo sobre el sentido o el alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes*»³⁸.

Por otra parte, esta jurisdicción estatutaria es de naturaleza incidental, ya que la competencia de la Corte dependerá de la relación existente entre la demanda de interpretación y la Sentencia objeto de recurso. Dado que, con la interposición de aquélla no puede perseguirse una finalidad distinta de la interpretación auténtica de este acto, se explica que L. CAVARE, S. ROSENNE o S. TORRES BERNARDEZ, entre otros, la denominen jurisdicción *accesoria* o *derivada*³⁹.

³⁷ A pesar de ello, no siempre se ha entendido de este modo, ya que en la *interpretación de la Sentencia en el asunto del Tratado de Neuilly*, la Sala se manifestó competente para conocer del recurso por estimar la existencia de un acuerdo entre las partes en este sentido, puesto que el agente búlgaro no dudó de la competencia de la misma. *Vid.* la Sentencia de 26 de marzo de 1925, en CPJI Série A/B n°13, p. 5.

³⁸ La misma afirmación se infiere del art. 98 del Reglamento, aunque a diferencia del texto transcrito, no lo indica de manera expresa.

³⁹ *Vid.* en este sentido L. CAVARE "Quelques remarques sur les recours en interprétation des arrêts rendus par les Cours de Justice internationales à propos de l'arrêt n°5-55 su 28 juin 1955 de la Cour de Justice de la CECA", en *Hommage d'une génération de juristes au Président Basdevant*, Paris, 1960, pp. 109-110; S. ROSENNE *The Law and Practice of the International Court of Justice*, Leiden 1965, pp. 531-532; S. TORRES BERNARDEZ "A propos de l'interprétation et de la revision des arrêts de la Cour Internationale de Justice", en *Le droit International à l'heure de sa codification. Études en l'honneur de Roberto Ago*, Milán 1987, p.459.

Por lo que hace a la segunda cuestión, estamos ante un nuevo procedimiento, aunque ciertamente relacionado con el anterior. Es un asunto diferente, y no una fase más del anterior, por cuanto se establecen plazos nuevos y el objeto del mismo es distinto del de aquél. La relación objetiva resulta innegable, pero el procedimiento a seguir por el recurso es distinto del anterior, encontrándose materialmente limitado. El procedimiento en el que se sustancia el recurso se circunscribe a aportar claridad al sentido y alcance del fallo anterior. Por tanto, en el curso de éste no pueden retomarse cuestiones relacionadas con el fondo del asunto resuelto mediante la Sentencia. Ello con absoluta independencia de que hubieran sido o no debatidas en el procedimiento que finalizó con el fallo que se recurre. Por tanto, si bien toma su origen en el asunto principal, no puede entenderse que sea parte de él. Además, su interposición se inscribe en la lista de la Secretaría de la Corte con un número propio y termina con la lectura pública de una Sentencia.

Este recurso ha sido escasamente instado ante la Corte. La última ocasión la proporcionó la interpretación de la *Sentencia de 24 de febrero de 1982, en el asunto de la Plataforma Continental entre Túnez y Libia*⁴⁰. Antes de pronunciarse acerca de la procedencia de la interpretación requerida por Túnez, la Corte se aseguró de la existencia de una diferencia entre las partes acerca del sentido y alcance de la Sentencia⁴¹. Con anterioridad, en tiempos de la CPJI, las solicitudes de interpretación alcanzaron a tres Sentencias, dos del Pleno⁴² y una de la Sala de Procedimiento Sumario⁴³.

⁴⁰ Vid. en CIJ Recueil 1985, pp. 192-252.

⁴¹ Id. nota anterior, p. 217 §46.

⁴² Las Sentencias nº7 y 8, objeto de una misma solicitud de interpretación, relativas al *asunto de la Fábrica de Chorzow*. Vid. Sentencia de 16 de diciembre de 1927, en CPJI Série A/B, nº 26, p. 10.

⁴³ Es el *recurso de interpretación a la Sentencia nº3 de la CPJI, recaída en el asunto del Tratado de Neuilly*. Vid. Sentencia de 12 de septiembre de 1924, en CPJI Série A/B, nº11.

Aunque el recurso interpuesto ante la Sala de Procedimiento Sumario no sirve como precedente respecto de las Salas *ad hoc*, dada su preconstitución y permanencia, no está de más que le dediquemos unos párrafos.

En efecto, con ocasión de la *Sentencia sobre la interpretación del artículo 179, anexo, párrafo 4 del Tratado de Neuilly* ⁴⁴, una vez dictada la Sentencia, uno de los Estados implicados -Grecia- interpuso un recurso interpretativo, fundamentando su petición en el art. 60 del Estatuto⁴⁵. El agente griego no especificó la formación de la Corte a la que dirigía su demanda, aunque la misma se infería del propio texto de la carta, dado que requería la interpretación auténtica de la Sentencia⁴⁶.

Sabemos que las Salas de procedimiento sumario se constituyen anualmente, el primero de febrero. La instrucción del recurso comenzó en el mes de noviembre, pero la Sentencia se dictó el 26 de marzo ¿qué formación conoció de él? ¿la que había realizado la instrucción del asunto? o ¿la posterior a la renovación? El hecho de que la composición de la Sala no cambiara de un año para otro restó toda virtualidad a las interrogantes abiertas. En realidad, las Salas de procedimiento sumario en esta primera época se caracterizaron por la continuidad personal desde 1922 hasta 1927/28, año en el que se sustituyó a WEISS por ANZILOTTI, manteniéndose los otros dos miembros -LODER y HUBER-⁴⁷.

⁴⁴ *Vid.* Sentencia de 12 de septiembre de 1924, en CPJI Série A/B, n° 11.

⁴⁵ *Vid.* la carta del Ministro de Grecia -E.G.KAPSAMBELIS- en La Haya al Presidente de la Corte, en CPJI Séries C, n°6, p. 13.

⁴⁶ El problema al que hubo de hacer frente la Sala de procedimiento sumario en esta ocasión era el derivado de la falta de previsiones reglamentarias acerca del recurso en cuestión. Tan sólo existía un precepto estatutario, el art. 60 cuyo contenido no ha sido objeto de modificaciones sustanciales hasta el momento.

⁴⁷ *Vid.* CIJ Serie E, n° 1, pp. 56-57; n°2, p.20; n°4, p.37

Pero si, fruto de esa renovación anual, se hubiera modificado la composición de la Sala, en virtud del art. 13 del Estatuto habría sido la formación anterior la que habría continuado conociendo de los casos que hubiere iniciado hasta su terminación. Esta disposición se aplicó en el asunto considerado de manera muy estricta, como se comprobó al determinarse quién debía presidir la Sala para evacuar el recurso. Cuando se sometió a conocimiento de la Sala de Procedimiento Sumario el asunto principal -el de la *interpretación del Tratado de Neuilly* era Presidente de la Corte LODER, que además presidía esta Sala. En las elecciones trienales que se produjeron para designar Presidente de la Corte, resultó electo otro miembro de esta misma Sala, HUBER⁴⁸. En aplicación del art. 13 del Estatuto de la CPJI, las deliberaciones estuvieron presididas no por éste último, sino por LODER, que era Presidente cuando el asunto se sometió a conocimiento de la Sala.

Esta disposición tiene un aspecto negativo, ya que en un momento concreto pudieron existir varias Salas paralelas del mismo tipo: la que continuó el estudio de un asunto iniciado antes de su modificación personal -Sala de procedimiento sumario *en funciones* - y la que es producto de esa nueva renovación. Sin embargo, transferir los asuntos iniciados por una Sala a otra de composición distinta sería ilógico y, además, poco práctico porque haría menos fiable la operación interpretativa y motivaría retrasos considerables en el desarrollo procesal.

Ya en tiempos de la CIJ este recurso ha dado lugar a una sola Sentencia del Pleno: la *Sentencia recaída en el asunto del Derecho de asilo*⁴⁹. En esta última, el agente colombiano presentó la demanda de interpretación el mismo día de la lectura pública del fallo objeto del recurso. El procedimiento se

⁴⁸ Vid. en este sentido CIJ Série E, nº1, p. 57

⁴⁹ Vid. Sentencia de 27 de noviembre de 1950 en CIJ Recueil 1950, p. 395 y ss.

sustanció en una única fase escrita, compuesta por la demanda colombiana, el escrito de objeciones presentado por parte de Perú y una nota conteniendo las alegaciones de Colombia a este último escrito. La Corte, tras el estudio de la documentación en presencia, rechazó la solicitud colombiana por entender que el objeto que este Estado perseguía con ella no era susceptible de fundamentar el recurso interpuesto. En este sentido la Corte es muy clara al indicar que

«Les "lacunes" que le Gouvernement de la Colombie croit apercevoir dans l'arrêt de la Cour sont en réalité des points nouveaux sur lesquels il ne peut être statué par voie d'interprétation. L'interprétation ne saurait en aucun cas dépasser les limites de l'arrêt telles que les ont tracées d'avance les conclusions des parties.»⁵⁰

En cuanto al objeto perseguido con la interposición de esta demanda en interpretación por parte del Estado recurrente, la Corte entiende que el mismo no resulta acorde con la clarificación del sentido y alcance de la Sentencia anterior, que debe fundamentar la introducción de este recurso interpretativo. La CIJ señala a este respecto que

«En réalité, les questions posées par le Gouvernement de la Colombie tendent à obtenir, par la voie directe d'un arrêt interprétatif, la solution de questions dont la Cour n'a pas été saisie par les parties en cause.»⁵¹

Por último, la Sentencia emitida resolviendo un recurso interpretativo tendrá carácter declarativo y no constitutivo, puesto que no añade nada a la cosa juzgada. La Corte mediante este acto solo explica lo que dijo y juzgó en el fallo que es objeto del recurso. A pesar de lo anterior, posee autoridad de cosa juzgada, efecto que depende del de la Sentencia interpretada. De estos fallos interpretativos derivará el efecto indicado en la medida en que no traspase los límites perfilados en la Sentencia que fundamenta el recurso.

⁵⁰ *Id.* nota anterior, p. 403

⁵¹ *Ibid.*

2.1.2. Recurso de revisión.

Estamos ante la única excepción que estatutariamente se contempla a la autoridad de cosa juzgada respecto de las Sentencias de la Corte. Es un verdadero recurso cuyo fundamento se encuentra en el descubrimiento de un *hecho nuevo*, desconocido por el Juez o la parte que solicita la revisión antes de pronunciarse la Sentencia, que puede ejercer una influencia decisiva, atentando por tanto contra la autoridad de cosa juzgada⁵².

El recurso de revisión está regulado en el art. 61 del Estatuto. Su interposición procede cuando aparezca «*un hecho de tal naturaleza que pueda ser factor decisivo* » para el asunto considerado. Sin embargo, la admisibilidad de este hecho como fundamento de este recurso está sometido a varios condicionamientos. En primer lugar, ese hecho descubierto debía ser «*desconocido de la Corte y de la parte que pida la revisión* », siendo irrelevante su ignorancia o no por todas las otras partes en la controversia. Es posible que la contraparte de la que solicita la revisión no sólo supiera de la existencia del hecho ahora descubierto, sino que además lo ocultara, al entender que la consideración del mismo podía perjudicar sus intereses en la controversia. Lo que sí resulta necesario es que el desconocimiento del hecho alegado por el recurrente no sea debido a su propia negligencia. Si la CIJ entendiera que la ignorancia de la parte que interpone el recurso se debe a su conducta negligente deberá rechazar la admisión del recurso.

Además de ser desconocido por el Tribunal y la parte que solicita la revisión, este hecho nuevo debe ser de naturaleza tal que pueda tener valor

⁵² La revisión se preve en el art. 55 de la Convención de La Haya de 1899, art. 83 de la Convención de la Haya de 1907, art. 61 del Estatuto de la CPJI y CIJ, art. 54 del Reglamento del TEDH y art. 41 del Estatuto del TJCE, entre otros instrumentos multilaterales.

decisivo para el caso resuelto mediante la Sentencia que es su objeto. En consecuencia, para la admisión del recurso no es necesario asegurar ese valor decisivo, sino tan sólo probar que puede tenerlo. Por otra parte, el hecho descubierto después de pronunciarse la Sentencia habrá de estar vinculado evidentemente al dispositivo de la Sentencia y a su *ratio decidendi*. De modo que, como señala S. TORRES BERNARDEZ, no podría pretenderse un pronunciamiento *ultra petita* de la Corte⁵³.

Del artículo 61 del Estatuto se desprende que el único instrumento de interposición del recurso de revisión previsto es la demanda unilateral, y lo mismo se deduce de las disposiciones reglamentarias pertinentes. El primer apartado del artículo 99 del Reglamento dedicado a regular este recurso, comienza señalando «*La demanda de revisión de un fallo se incoará mediante una solicitud...*». No podía ser de otra manera si tenemos en cuenta el objeto del recurso.

Existe una doble limitación temporal, por una parte relacionada con la lectura pública del fallo, ya que para poder fundamentar una demanda de revisión el hecho debe ser descubierto en un término de 10 años como máximo después de aquélla. En segundo lugar, respecto del propio descubrimiento en sí, dado que sólo dentro de los seis meses siguientes a su conocimiento podrá introducirse la demanda de revisión. Esta doble limitación temporal es inexcusable, de manera que si en algún aspecto no se cumple, la Corte no podrá conocer del recurso interpuesto.

Es necesario subrayar que estamos ante condicionamientos de carácter "constitucional", de manera que son indisponibles tanto por la Corte como por las partes, ya que están impuestos por el Estatuto de esta institución y

⁵³ S. TORRES BERNARDEZ "A propos de l'interprétation et de la révision des arrêts de la Cour Internationale de Justice", en *Le Droit International à l'heure de sa codification. Etudes en l'honneur de Roberto Ago*, Milán 1987, p. 472.

ni siquiera la Corte puede excusar su cumplimiento. Las partes no podrán por medio de un compromiso reducirlos o ampliarlos; no son normas dispositivas, sino imperativas, ya que no resultan afectadas por el art. 101 del Reglamento. Como señaló la CPJI en el asunto de *las Zonas Francas de la Alta Saboya y del País de Gex*, las partes no pueden mediante acuerdo modificar disposiciones estatutarias⁵⁴.

En este mismo sentido, las partes mediante un compromiso no podrán renunciar a la posibilidad de interponer estos recursos, aunque sí actuar sobre su procedimiento por encontrarse amparado por el art. 101 del Reglamento. Y es que, como apuntara M. SCERNI, la finalidad del art. 61 del Estatuto no es sólo proteger el interés de las partes, sino también velar por la buena administración de justicia⁵⁵.

En último término, teniendo en cuenta que, por su objeto, este recurso podría ser utilizado como maniobra dilatoria para evitar -o al menos retrasar- la ejecución del fallo, tanto el Estatuto como el Reglamento sabiamente han impedido el empleo fraudulento del mismo. Ambos textos confieren así a la Corte la facultad de negar la tramitación del recurso en cuestión hasta que no se haya procedido a ejecutar el fallo objeto de esta revisión. El Estatuto en este sentido prevé que «*Antes de iniciar el proceso de revisión la Corte podrá exigir que se cumpla lo dispuesto por el fallo*»⁵⁶. Por si esta precaución no fuera suficiente, el Reglamento se ocupa de instrumentarla al señalar: «*Si la Corte decide hacer depender la admisión de la demanda de revisión del previo*

⁵⁴ Vid. en CPJI Série A/B, n°46.

⁵⁵ Vid. en M. SCERNI en "La procédure de la CPJI" en R. des C., 1938-III, t. 65, p. 561-681.

⁵⁶ Vid. el artículo 61.3 del Estatuto.

cumplimiento del fallo de que se trate, deberá dictar una providencia a este efecto»⁵⁷.

Una vez recibida la demanda, ésta se pone en conocimiento de la contraparte, que tiene un plazo fijado por la Corte para considerar la admisibilidad de la solicitud de revisión. Si fuera necesario, el Tribunal podría disponer de turno de réplica, es decir permitir el depósito de sendos escritos con las opiniones de las partes acerca de la cuestión de la admisibilidad de la demanda. Sólo una vez estudiados estos documentos, el Tribunal se pronuncia sobre la apertura de un procedimiento sobre el recurso interpuesto. El Reglamento se remite a los trámites formales respecto de un procedimiento sobre el fondo para sustanciar este recurso de revisión.

De la práctica subsiguiente de este recurso podemos inferir escasas enseñanzas, ya que ha sido planteado en una sola ocasión y sin éxito. En 1985, en efecto, la Corte desestimó la demanda en revisión interpuesta por Túnez acerca de la Sentencia dictada en el *asunto de la Plataforma Continental (Túnez/Libia)* ⁵⁸. Algo más de dos años después de dictarse esta Sentencia, una demanda tunecina solicitaba la revisión de este acto jurídico -y también, además, su interpretación y la rectificación de un error material existente en ella⁵⁹. Tras la presentación por parte del Gobierno libio de las observaciones escritas al contenido de la demanda tunecina, tuvieron lugar las audiencias públicas. En cuanto a la demanda de revisión, primero la Corte estudia la afirmación tunecina acerca de la aparición de un hecho nuevo⁶⁰; en segundo

⁵⁷ Esta previsión se encuentra en el último apartado del artículo que el Reglamento dedica a este recurso: art. 99.5

⁵⁸ *Vid.* la Sentencia de 10 de diciembre de 1985 en CIJ Recueil 1985, pp. 192-252.

⁵⁹ El error se encontraba en las coordenadas que figuran en la sección C2 del párrafo 133 de la Sentencia.

⁶⁰ Este hecho nuevo era la resolución del Consejo de Ministros Libio de 28 de marzo de 1968, que afectaba -según Túnez- al conflicto en cuestión porque reconocía unas

término, comprueba si efectivamente era desconocido para la parte que ahora lo alega; y, por último, estudia si el mismo se adecúa a los requisitos estatutarios, es decir que por su naturaleza sea susceptible de ejercer una influencia decisiva. La Corte comprueba la ausencia de uno de los requisitos exigidos para admitir el recurso de revisión interpuesto -el hecho descubierto carece de las condiciones necesarias para fundamentar un recurso de este tipo- y, consecuentemente, no se plantea la presencia del resto de los requisitos preceptivos para solicitar el recurso de revisión:

*«A strictement parler dès lors qu'il est établi que la demande en revision ne remplit pas l'une des conditions de recevabilité prévues, la Cour n'a pas à aller plus loin et à se demander si les autres sont satisfaites »*⁶¹

2.1.3. Posibles remedios.

La cuestión concreta respecto de la competencia de las Salas para conocer de los recursos interpuestos frente a sus Sentencias, puede tener distintas soluciones. La primera de ellas sería la permanencia de las Salas *ad hoc*, durante los diez años posteriores a la Sentencia, en «reserva», previendo la posible interposición de un recurso de este tipo. En apoyo de esta respuesta tenemos el art. 100.1 del Reglamento que prevé

«Si la Sentencia ha sido pronunciada por una Sala, ésta conocerá de la demanda de interpretación o de revisión»

coordinadas del trazado de un sector del espacio objeto de delimitación, opuestas a las posteriormente defendidas por el Gobierno de aquel Estado en el curso del procedimiento anterior ante la Corte y que finalizó con la Sentencia objeto del actual recurso.

⁶¹ Vid. en CIJ Recueil 1989, p. 207, §29.

Sin embargo, la solución indicada no resulta aplicable a las Salas previstas en el art. 26.2 del Estatuto, cuya característica principal es su naturaleza *ad hoc*.

En cuanto a las opiniones doctrinales manifestadas al respecto, cabe señalar que, según A. ZIMMERMANN⁶², existe un único requisito a observar para el mantenimiento de las Salas después de dictar Sentencia. El mismo vendría dado por el hecho de que las partes facultaran a esta formación para actuar respecto de los recursos que puedan interponerse a la Sentencia en cuestión. Esto deberían hacerlo las partes en el instrumento por el que otorgaron jurisdicción a la Sala para conocer del asunto acerca del cual ya se ha pronunciado esta formación de la Corte.

Así, en el primero de los asuntos sometidos al conocimiento de una Sala *ad hoc* -el de la delimitación de la frontera marítima en el Golfo del Maine-, las partes en la controversia se reservaron la posibilidad de recurrir a la formación que había conocido del caso en el supuesto de que se produjera un desacuerdo acerca de la extensión de la frontera marítima⁶³.

Una solución alternativa a la indicada sería entender que a pesar del precepto estatutario señalado, para conocer de los recursos de que sea objeto una Sentencia de una Sala *ad hoc* habrá de constituirse otra del mismo tipo, aunque su formación difiera de la de aquélla que dictó la Sentencia.

Como fundamento de esta repuesta podemos aducir que el contenido del art. 100 del Reglamento de la CIJ se encontraba ya en los reglamentos de la CPJI -art. 66 del de 1922 y 1926 y 80 del de 1936-, así como en el de 1946. Por

⁶² A. ZIMMERMANN "Ad hoc chambers of the International Court of Justice" en DJIL, vol. 8, nº1, pp. 29-31.

⁶³ Vid. el art. VII (3) del Acuerdo de 29 de marzo de 1979 en CIJ Recueil 1984 p. 255.

tanto, se trata de un contenido heredado de la CPJI, cuyo Estatuto únicamente preveía la existencia de Salaspreconstituidas, por lo que no resultaría de aplicación a las formaciones de la Corte que carecen de este carácter.

Por otra parte, cabe argüir como hemos señalado en algún epígrafe anterior -acerca de la opción contraria a la indicada en el art. 100.1 del Reglamento-, que los recursos planteados a una Sentencia de la Corte son un nuevo asunto y no una fase más de la controversia en cuestión. El Registro General de la Corte otorga un número propio en el orden de asuntos ante esta institución a los recursos planteados a una Sentencia en lugar de compartir el del conflicto que terminó con el fallo que se recurre⁶⁴. En la misma dirección señalada, podemos indicar que los recursos se resuelven mediante una Sentencia.

En la doctrina ha sostenido esta opción el profesor R. OSTRIHANSKY⁶⁵. Este autor señala que los recursos no los resuelve la misma Sala, puesto que ésta se disuelve al dictar la Sentencia. El recurso habrá de ser conocido por una nueva Sala en la que no podrán participar aquellos que, habiendo sido miembros de la Sala que dictó la Sentencia inicial, no pertenezcan ya a la Corte en el momento de plantearse el recurso.

Por su parte, S. TORRES BERNARDEZ entiende que el art. 100.1 del Reglamento es aplicable a todo tipo de Salas, por tanto también a las *ad hoc*. Sin embargo, en estas últimas pueden presentarse inconvenientes prácticos para llevar a cabo esta aplicación, en cuyo caso, será la Corte quien deba

⁶⁴ En este sentido, a modo de ejemplo, cabe señalar el recurso interpretativo a la Sentencia de la Sala que conoció de la interpretación de algunos preceptos del Tratado de Neuilly. El asunto principal es el nº3 de la CPJI, mientras que el fallo que se aporta al recurso que se interpone es el nº4 de la misma Corte.

⁶⁵ R. OSTRIHANSKY "Chambers of the International Court of Justice" en ICJLQ, vol. 37.1, 1988, p. 46.

resolver el problema concreto⁶⁶. No cabe, por tanto aportar soluciones generales, sino que habrá que apreciar las cuestiones que plantea cada caso para resolverlas individualmente. Distinta de la anterior es la hipótesis de la renovación de la Corte entre la lectura pública del fallo y la interposición del recurso en cuestión. En este caso, la respuesta resulta clara, según el autor citado «*si l'essence même de ces procédures exige que l'interprétation et la révision d'un arrêt soient le fait de l'organe ⁶⁷ dont il émane, la survenance d'éventuelles modifications dans la composition ⁶⁸ de celui-ci ne pose, selon nous, aucun problème particulier* »⁶⁹.

En definitiva, conocidas las posturas sostenidas al respecto, es necesario señalar que en virtud del art. 101 del Reglamento

«las partes podrán proponer de común acuerdo modificaciones o adiciones particulares a los artículos contenidos en este título, exceptuados los arts. 93 a 97 inclusive, los cuales podrán ser adoptados por el Tribunal o por la Sala si los estima apropiados a las circunstancias del caso».

Por tanto, y puesto que los recursos se encuentran en la Subsección Segunda de la Sección F del Reglamento -la Subsección Primera se ocupa de los fallos y contiene los arts. 93 a 97-, denominada «*Demandas de interpretación o revisión de un fallo*», en virtud del art. 101 las partes podrán decidir que sea la Corte en Pleno quien conozca de los actos posteriores a la Sentencia y cuyo fundamento se encuentre en ella o confirmar, como aconteció en el asunto de la *delimitación de la frontera marítima en el Golfo del Maine*, que

⁶⁶ S. TORRES BERNARDEZ "A propos de l'interpretation et de la révision des arrêts de la Cour Internationale de Justice", en *Le Droit Internationale à l'heure de sa Codification. Etudes en l'honneur de Roberto Ago*, Milán 1987, p.492.

⁶⁷ En cursiva en el original

⁶⁸ *Id.* nota anterior

⁶⁹ S. TORRES BERNARDEZ "A propos de l'interpretation et de la révision des...op. cit., p.493

sea la propia Sala que conoció el conflicto en cuestión la que lleve a cabo tal tarea, a pesar de que en virtud del art. 100 del Reglamento esta disposición no sería necesaria.

Sin embargo, hemos de subrayar que, si acudimos al art. 101 del Reglamento, las modificaciones acordadas, en todo caso, deberán estimarse adecuadas por la Sala en cuestión -ya que estas variaciones se introducen en el acuerdo entre las partes que sirve, normalmente, como instrumento de incoación del procedimiento-. Si la Sala no considera apropiadas estas disposiciones, esta formación es libre de decidir su no aplicabilidad.

Personalmente, entre los argumentos indicados, los que más nos convencen son los expuestos en último término, en cuanto a que se estará a lo acordado por las partes. Pero la cuestión continúa abierta. Sabemos que el hecho de que sea una formación concreta la que conozca de un determinado recurso no implica la inamovilidad de sus miembros, ya que de hacerlo, deberíamos interpretar del mismo modo estas disposiciones respecto del Pleno de la Corte. Sin embargo, dada la importancia de la composición efectiva de las Salas *ad hoc*, la solución si no única, cuando menos la más razonable entre las posibles, sería dar la oportunidad de constituir una nueva Sala de este tipo, observando las ventajas atribuidas cuando se produjo la de aquella cuya Sentencia se recurre ahora.

El problema se plantea realmente cuando las partes no prevén remedio alguno en su acuerdo y posteriormente se interpone el recurso. La Corte, en este supuesto, como indicaba S. TORRES BERNARDEZ, deberá estudiar las circunstancias particulares del caso para intentar aportar una solución concreta al mismo. Es decir, en caso de duda será la Corte en Pleno el órgano capaz de decidir en consecuencia, puesto que cuando se plantea el recurso la Sala ya se ha disuelto. Si las partes dirigen la solución del recurso al

Pleno y existe acuerdo entre ellas en este sentido, procederá en consecuencia y viceversa: de no constar la existencia de acuerdo interpartes, el Presidente se informará acerca de las opiniones de las partes en conflicto.

En el supuesto de incomparecencia de una de las partes habría de aplicar la solución anterior, que la Corte decida acerca de la cuestión planteada.

Por tanto, en conclusión, el art. 100.1 del Reglamento implica una dificultad de cumplimiento ya que las Salas *ad hoc* carecen del carácter de preconstitución y permanencia. Rasgos que parece reclamar este texto respecto de las Salas a las que se dirige este precepto. Sin embargo, este problema no es predicable únicamente de las Salas *ad hoc* ya que las «especiales» también son temporales o pueden serlo, aunque sean preconstituidas, por tanto pueden carecer del segundo de los requisitos indicados: la permanencia y el art. 100.1 del Reglamento también resulta aplicable a esta formación. Lo lógico es pensar que si la Sala se ha disuelto -sea *ad hoc* o «especial»- y las partes no han previsto nada al respecto, el Pleno decidirá tras escuchar sus opiniones. Si las partes manifiestan puntos de vista dispares al respecto, lo más razonable es que el Pleno recupere la competencia sobre los recursos, aunque no sea una solución idónea. Cabe también entender que la disolución de la Sala se hace *sub conditione* de que no se presenten recursos, pero si ello fuera así, podríamos encontrarnos con supuestos, como los ya mencionados como la imposibilidad de que no sea materialmente posible de volver a reunir a los miembros de la antigua Sala ⁷⁰.

Buscando otros caminos cabría bucear en las soluciones adoptadas al respecto en el ámbito del arbitraje. Sabemos que el aspecto coincidente entre las Salas del 26.2 del Estatuto y los tribunales arbitrales es el de su composición

⁷⁰ Vid. a modo de ejemplo la Sala que conoció del *Golfo de Maine*, por el fallecimiento de R. AGO, o la *diferencia fronteriza* entre Burkina Faso y Mali, cuya composición sería en la actualidad imposible por el fallecimiento de M. LACHS y J.M. RUDA

y su carácter *ad hoc*; por tanto para clarificar el problema planteado puede ser ilustrativo acudir a la respuesta que estos órganos aportan a esta cuestión.

Las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 ya regulaban la interposición de estos dos tipos de recurso frente a laudos arbitrales⁷¹. Más aún, el recurso de interpretación se entendió tradicionalmente implícito en el compromiso, de manera que para impedirlo era necesario incorporar en él «*estipulación en contrario*» -art. 82 de la Convención de 1907-. Por el contrario, sí resulta preceptivo que las partes se reserven expresamente en el compromiso la facultad de pedir la revisión del laudo arbitral.

La cuestión en este punto es ante qué órgano o formación debe interponerse el recurso. En ambos casos, con carácter subsidiario al acuerdo entre las partes, se resuelve la cuestión que nos ocupa acudiendo al «*Tribunal que ha dictado la Sentencia*» objeto del recurso⁷². Por tanto, evidentemente se está haciendo referencia a la formación concreta que dictó el laudo que se recurre.

Pero sabemos que no siempre es posible que todos los miembros del tribunal que dictó la Sentencia objeto del recurso, se reúnan de nuevo para conocer de la interposición de éste. Las soluciones posibles son dos: 1) Actuar como si se tratara de cubrir una vacante producida en la formación del órgano arbitral en el curso del procedimiento; 2) Deferir el conocimiento del recurso a un nuevo tribunal arbitral o incluso someterlo a la CIJ⁷³.

⁷¹ Vid. en este sentido los arts. 54 y 56 de la Convención de La Haya de 1899 y 81 y 84 del texto de 1907.

⁷² Vid. el art. 55 de la Convención de La Haya de 1899 y los arts. 82 y 83 de la Convención de 1907.

⁷³ Como preveía el art. 29 del Modelo de Procedimiento Arbitral de la CDI.

En todo caso, la preferencia por una u otra opción dependerá de la voluntad de las partes en la controversia. Con una salvedad: la existencia de un vínculo jurisdiccional respecto de la CIJ, aplicable objetivamente al caso que nos ocupa, supuesto en el que será suficiente el depósito de una demanda unilateral ante la Secretaría de la Corte por la parte interesada en una decisión judicial. Aunque el art. 60 del Estatuto indica que la Corte interpretará la Sentencia «a solicitud de cualquiera de las partes» y el art. 98 del Reglamento reitera la posible introducción unilateral⁷⁴, la Corte no admite juzgar la interpretación o la revisión de una Sentencia arbitral en defecto de acuerdo de las partes -ver en este sentido el *asunto relativo a la Sentencia arbitral de 31 de julio de 1989 Guinea Bissau c. Senegal* ⁷⁵-. Una vez cumplido este trámite, será la Corte quien decida acerca de su competencia si existiera duda al respecto.

⁷⁴ Art. 98.3 «Si la demanda de interpretación se presenta en forma de solicitud escrita, los argumentos de la parte que la presenta serán expuestos en la misma y la parte contraria tendrá el derecho de presentar observaciones escritas en el plazo fijado por el Tribunal o, si éste no se hallare reunido, por el Presidente»

⁷⁵ El vínculo jurisdiccional que servía de fundamento competencial eran sendas declaraciones de aceptación de la jurisdicción de la Corte. La de Guinea Bissau es de 7 de agosto de 1989 -Vid. en CIJ *Annuaire* 1989-1990, vol. n° 44 p. 75 y la senegalesa de 2 de diciembre de 1985 -Vid. en CIJ *Annuaire* 1985-1986, vol. n° 40 p. 91-. Esta última reemplaza la declaración de 3 de mayo del mismo año -Vid. en CIJ *Annuaire* 1984-1985, vol. n° 39 p. 99-. Entre ellas la única diferencia existente es que en la posterior -de diciembre- se introduce un límite temporal a la jurisdicción de la Corte, ya que sólo se someten a su conocimiento las «diferencias de orden jurídico nacidas después de la presente declaración». Vid. la Sentencia de 12 de noviembre de 1991, en CIJ *Recueil* 1991, pp.53-185. Se trata de una Sentencia *difficil* si tenemos en cuenta las declaraciones y opiniones añadidas a la misma. Dos son declaraciones de los Jueces TARASSOV y K. MBAYE -Juez *ad hoc* designado por Senegal, una vez perdida la calidad de miembro de la Corte-; cuatro opiniones individuales, las de ODA, LACHS, NI y SHAHABUDDEEN y el resto, opiniones disidentes, una de ellas conjunta de AGUILAR MAWDSLEY y RANJEVA y las de WEERAMENTRY y THIERRY -Juez *ad hoc* de Guinea Bissau-.

2.2. El problema de la ruptura jurisprudencial.

2.2.1. Consideraciones Previas.

Los fallos emitidos por una Sala emanan de una formación reducida o extraordinaria de la Corte. Por tanto, en las Sentencias que han dictado las Salas constituidas hasta el momento, han participado como máximo -en una ocasión- cinco de los miembros ordinarios de la Corte. Por ello, no puede extrañarnos que se planteen cuestiones como las siguientes: ¿Hasta qué punto puede considerarse como Sentencia de la Corte un acto jurídico dictado, en el mejor de los casos, por un tercio de sus miembros? o ¿una Sentencia emitida por una minoría de la CIJ puede "imponerse" a la mayoría del mismo de manera que éstos habrán de asumir el contenido de aquélla como propio⁷⁶?

La respuesta a las preguntas recién formuladas ha de ser afirmativa, tomando como único fundamento jurídico el art. 27 del Estatuto de la Corte. Pueden indicarse apreciaciones de carácter político en contra de esta solución pero, en cualquier caso, el número de miembros que acuerden el contenido de un fallo carece de interés desde el momento en que la Sentencia la dicta la Corte. Por tanto, como Sentencia del Tribunal que es, con independencia del número de miembros que la decidan, es un acto la Corte, y en cuanto tal, tiene el mismo valor y despliega los mismos efectos de las Sentencias emanadas del Pleno. En definitiva, quien actúa es la CIJ, en una u otra de sus formaciones.

⁷⁶ Vid. en este sentido E. McWHINNEY "Judicial Settlement of Disputes. Jurisdiction and Justiciability" en R. des C., 1990-II, t.221, p. 116

Desde una perspectiva jurídica resulta indiferente el número de Jueces que componen la Sala. Además, no hemos de olvidar que son los miembros de la Corte quienes eligen mediante sufragio secreto entre ellos a los que van a formar parte de aquéllas⁷⁷.

Subyacente a esta reflexión se advierte el debate clásico en la doctrina internacionalista del valor de la jurisprudencia del Tribunal⁷⁸. Sea cual sea la forma en que éste se presente, se advierte el riesgo de que las Salas favorezcan una *ruptura* en líneas jurisprudenciales aún mayoritarias en el Pleno de la Corte⁷⁹. Aunque el *stare decisis* no funciona en la CIJ, parece lógico entender que las Sentencias de la Corte responden a la posición mayoritaria en el seno del Tribunal.

Ahora bien, la posibilidad de ruptura de la jurisprudencia de la Corte no debe considerarse necesariamente como sinónimo de la existencia de dos líneas jurisprudenciales diferentes y paralelas: la de la Corte, por una parte, y la de sus Salas, por otra. Ello es así, por dos razones, una práctica y otra jurídica.

⁷⁷ Vid. *Supra* epígrafe 2.2 del Capítulo Segundo.

⁷⁸ Acerca del valor de la jurisprudencia en Derecho Internacional existen múltiples estudios, entre ellos citaremos aquí los siguientes: G.ABI-SAAB "De la Jurisprudence. Quelques reflexions sur son rôle dans le développement du Droit International", en *Hacia un nuevo Orden Internacional y Europeo. Homenaje al Prof. Dr.D. Manuel Díez de Velasco*, Madrid, 1993, p. 19; J.A. BARBERIS "La jurisprudencia como fuente de Derecho de Gentes", en *ZaöRV*, vol.31, 1971, p. 642; CASTBERG "La méthodologie du Droit International Public" *R.des C.*, 1933-1, PP. 366-367; M. DUBISSON *La Cour Internationale de Justice* p. 110; P. GUGGENHEIM *Traité de Droit International*, Ginebra 1967, 2ª ed., t.1, p. 112; R. JENNINGS "Judicial Reasoning at an International Court", en *Vorträge Redem und Berichte aus dem Europa Institut*, Nr.236, 1991, p.7; L. KOPELMANAS "Custom as a Means of the Creation of International Law", en *BYIL*, 1937, pp. 141-142; M.LACHS "A Few Thoughts on the Independence of Judges of the International Court of Justice", en *CJTL*, 1987, pp. 593-600; M. SOERENSEN en *Les sources du Droit International*, Copenhagen, 1949, pp. 154-155; M.C. ORTEGA CARCELEN "Análisis del valor creador de la jurisprudencia en Derecho Internacional", en *REDI*, vol. XL, 1988-2, pp. 55-87; J.M. RUDA *Presente y Futuro del Tribunal Internacional de Justicia*, Granada 1990, pp. 24-25; C. DE VISSCHER "La Codification du Droit International", *R. des C.*, 1925-1, p. 357.

⁷⁹ Como señala entre otros M. BEDJAOU "Universalisme et regionalisme au sein de la Cour Internationale de Justice: La constitution de Chambres ad hoc" en *Liber amicorum. Colección de estudios jurídicos en homenaje al Prof. Dr.D. José Pérez Montero*, Oviedo 1988, p. 170. Ver la opinión de ODA en el asunto de la *Eletronica Sicula -S.p.A. -ELSI-*. Vid. la bibliografía indicada en la nota 11 del Capítulo Segundo.

En cuanto a la primera, podríamos pensar en la existencia de líneas jurisprudenciales paralelas si todas las Salas *ad hoc* de la Corte tuvieran una formación permanente, participaran siempre las mismas personas, siendo éstas una minoría disidente a las decisiones del Pleno o que, sin serlo en el momento de su designación para esta formación, *a posteriori* intentaran conformarse como tal.

Este fue uno de los argumentos utilizados por el Prof. Elihu LAUTERPACHT -abogado de El Salvador-, en la Sala que conoció de la solicitud nicaragüense de intervención en la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador⁸⁰. Recordemos que tres de sus cinco miembros, Jueces ordinarios de la Corte, habían votado en contra del dispositivo de Sentencias de la Corte en alguno de los asuntos en los que se había presentado una solicitud de intervención ante el Pleno: J. SETTE-CAMARA, R. JENNINGS y S. ODA⁸¹.

El segundo de los motivos apuntados deriva del valor jurídico de la jurisprudencia internacional. En este sentido, hemos de recordar que el art. 38.1.d) del Estatuto señala que el Tribunal podrá aplicar para resolver las controversias sometidas a su conocimiento

«las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 59».

⁸⁰ Vid. C4/CR 90/3, p. 82. Este aspecto se ha tratado *supra* Capítulo Cuarto, epígrafe 2.1.

⁸¹ Los dos primeros formularon opiniones disidentes a la demanda de intervención italiana en el asunto de la *Plataforma continental* entre Libia y Malta, *vid.* respectivamente en CIJ Recueil 1984, pp. 71 y ss. (opinión de SETTE-CAMARA) y 148 y ss. (Opinión de R. JENNINGS. El primero, S. ODA había formulado una opinión individual a la solicitud de intervención de Malta en el asunto de la *Plataforma Continental* entre Túnez y Libia, ver en CIJ Recueil 1981, pp. 23 y ss. y otra disidente a la solicitud italiana de intervención en el asunto de la *Plataforma Continental* entre Malta y Libia, ver en CIJ Recueil 1984, pp. 90 y ss.

Este precepto equipara, a los efectos que a nosotros nos interesan, la jurisprudencia y la doctrina de los iuspublicistas de reconocido prestigio, y si nada impide a *los publicistas de mayor competencia* discrepar entre sí -y consigo mismos- a lo largo de su carrera profesional ¿por qué impedirsele a la Corte?

Además, del artículo transcrito se desprende que la consideración de la jurisprudencia no es la de una fuente creadora del Derecho, sino la de un medio para su identificación e interpretación. Por otro lado, hemos de recordar, como señaláramos en el epígrafe 1. de este Capítulo, que el efecto de las Sentencias de la CIJ -según el art. 59 del Estatuto- es el de cosa juzgada con carácter relativo, lo que significa que los fallos de cualquiera de las formaciones de la Corte sólo son obligatorios para las partes en causa y respecto del asunto concreto sometido a conocimiento del Tribunal.

¿Significa ésto que los fallos de la CIJ carecen del valor de *precedente* ? El punto es discutido⁸². Las disposiciones del Estatuto amparan una respuesta afirmativa, luego relativizada por el peso de jueces de formación anglosajona. En todo caso, es indudable el valor *referencial* de la Sentencia, de

⁸² Sobre este tema podemos apuntar unas palabras de J.M. RUDA -Vid. *Presente y Futuro del Tribunal Internacional de Justicia*, Granada 1990, pp. 24-25-, que al abordar las dificultades que tiene la CIJ para llegar a adoptar una decisión subrayaba que además de ser un órgano colectivo *no es intelectualmente homogéneo* porque los magistrados provienen de distintos sistemas jurídicos. Precisamente como fundamento de esta aseveración utiliza

«la división interna por el valor del precedente. Para los anglosajones el precedente tiene un carácter casi obligatorio, mientras que ciertos Jueces, entre los que me incluyo, no se sienten tan obligados por lo que han dicho sus antecesores en 1940, por ejemplo y este es uno de los problemas serios de la Corte, que la puede dividir intelectualmente»

En este sentido, Sir R. JENNINGS -formado en un sistema de *common law*- en su opinión disidente a la Sentencia de 21 de marzo de 1984 en *la demanda de intervención italiana en el asunto de la Plataforma Continental* entre Libia y Malta, en CIJ Recueil 1984, p. 157, indica que es suficiente estudiar un poco la jurisprudencia de la Corte para constatar que el art. 59 del Estatuto no excluye que sus Sentencias posean autoridad del precedente. En similares términos se pronuncia S.J. TOOPE "Pragmatic Compromise or mere Transaction? The Use of Chamber Procedures in International Adjudication", en Va.JIL, 1990-1, p. 62.

su *ratio decidendi*, para aportar claridad a las normas internacionales objeto de consideración.

Por tanto, aunque formalmente el Estatuto proclame que no rige el *stare decisis*, su espíritu flota sobre la deliberación judicial como una *meiga* que sólo abandona el campo tras esforzados sortilegios. Prueba de ello es la jurisprudencia de la propia Corte repleta de referencias, matizaciones y explicaciones de fallos anteriores, que frecuentemente, sirven incluso como fundamento de una decisión⁸³. La misma utilización encontramos en la labor

⁸³ Así, señalaremos -sin ánimo de exhaustividad- como ejemplo los siguientes: en el asunto *del Estrecho de Corfú -Excepciones Preliminares-*, Sentencia de 25 de marzo de 1948, Vid. en CIJ Recueil 1947-48, p. 28; respecto de la Sentencia nº12 de 26 de abril de 1928 en el asunto *relativo a ciertos derechos de las minorías en la Alta Silesia (Escuelas menores)*, en CPJI Série A/B, nº 29, p. 23; en el asunto *del Estrecho de Corfú -fondo-*, Sentencia de 9 de abril de 1949, en CIJ Recueil 1949, p. 4 y ss., en su p. 24 se remite a la Opinión Consultiva nº13 de 23 de julio de 1926, acerca de *la Competencia de la Organización Internacional del Trabajo para regular accesoriamente el trabajo personal del patrón*, en CPJI Série B, nº 13, p. 19 y a la Ordenanza de 19 de agosto de 1929 en el asunto *de las zonas francas de la Alta Savoya y del País de Gex*, en CPJI Série A nº22, p. 13; en la Opinión Consultiva de 11 de abril de 1949 en CIJ Recueil 1949, p. 174 y ss en el asunto de la *reparación por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas*, en la p. 182 a la Opinión Consultiva de 23 de julio de 1926 sobre *la Competencia de la Organización Internacional del Trabajo para regular accesoriamente el trabajo personal del patrón*, en CPJI Série B, nº 13, p. 18 y en la p. 184 a la Sentencia de 26 de julio de 1927, en el asunto *de la Fábrica de Chorzow (demanda de indemnización-competencia)*, en CPJI Série A, nº8, p. 21; en la opinión consultiva de 3 de marzo de 1950 acerca de *la competencia de la Asamblea General para la admisión de un Estado en Naciones Unidas*, en CIJ Recueil 1950, p. 4 y ss., p. 6 a una Opinión precedente, de 28 de mayo de 1948, relativa a *las condiciones de admisión de un Estado como miembro de Naciones Unidas. Art. 4 de la Carta*, en CIJ Recueil 1947-48, p. 61 y en la p. 8 a la Opinión de 16 de mayo de 1925 sobre *el servicio postal polaco en Dantzig*, en CPJI Série B, nº 11, p. 39; la Opinión de 30 de marzo de 1950 acerca de *la interpretación de los Tratados de Paz con Bulgaria, Hungría y Rumanía*, en CIJ Recueil 1950, p. 65 y ss., en su p. 72 se refiere a la relativa al *estatuto de Carelia Oriental* de 23 de julio de 1923, en CPJI Série B nº5; en la Sentencia de 27 de agosto de 1952 en el asunto *relativo a los derechos de nacionales estadounidenses en Marruecos*, CIJ Recueil 1952, p. 176 y ss., en la p. 196 se refiere a la Opinión en el asunto *de la interpretación de los Tratados de paz...segunda fase*, CIJ Recueil 1950, p. 229, en la p. 207 a la Sentencia de 7 de junio de 1932 en el asunto *de las zonas francas...op. cit.*, p. 172; en la Sentencia de 18 de noviembre de 1953 sobre las excepciones preliminares interpuestas por Guatemala en el caso *Nottebohm*, en CIJ Recueil 1953, p. 111 y ss, p. 119 se refiere al *estrecho de Corfú...op. cit.* pp. 23-26 y 36, también al *Ambatielos* Sentencia de 1 de julio de 1952, en CIJ Recueil 1952, p. 28; en la Opinión Consultiva acerca de *los efectos de las Sentencias del tribunal administrativo de las Naciones Unidas acordando indemnizaciones* de 13 de julio de 1954, en CIJ Recueil 1954, pp. 47 y ss., p. 56 se remite a la Opinión Consultiva de *reparación de daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas*, de 11 de abril de 1949, en CIJ Recueil 1949, p. 182; en el asunto *Nottebohm -fondo-* Sentencia de 6 de abril de 1955, en CIJ Recueil 1955, p. 4 y ss, en la p. 24 alude a la Sentencia en el asunto de *las concesiones Mavormmatis en Palestina*, de 30 de agosto de 1924, en CPJI Série A, nº 2, p. 12 y a las Sentencias de 18 de junio y 26 de julio de 1927 en los asuntos *relativo a la denuncia del tratado chino belga-indicación de medidas cautelares- y Fábrica de Chorzow*, respectivamente en CPJI Séries A/B, nº 20 y 21, p. 17.

desarrollada por las Salas *ad hoc*; de hecho todas las Sentencias de las Salas buscan su fundamento en la jurisprudencia de la Corte; unas lo hacen de manera abrumadora⁸⁴ y otras en menor medida⁸⁵.

⁸⁴ Así en la Sentencia de 12 de octubre de 1984, emitida en el asunto de la delimitación de la frontera marítima en la región del Golfo de Maine, la Sala señala -en CIJ Recueil 1984, p. 275- la semejanza objetiva respecto del asunto de la delimitación de la Plataforma Continental entre Túnez y Libia -remitiéndose a la p. 58 de CIJ Recueil 1982-; en la p. 293 a la Sentencia de 20 de febrero de 1969, dictada en el asunto de la Plataforma Continental del Mar del Norte, en CIJ Recueil 1969, p. 33 y p. 46; a la decisión arbitral de 30 de junio de 1977 del Tribunal arbitral que conoció de la delimitación de la plataforma continental entre Francia y el Reino Unido; a la Sentencia de 24 de febrero de 1982 sobre la Plataforma Continental entre Túnez y Libia, en CIJ Recueil 1982, p. 21 y p. 47; p. 297 nuevamente a la Plataforma Continental del Mar del Norte, *Ibid.*, p. 30-31, p. 33 (en p. 298), pp. 46-47 (en p. 299), ello con el objeto de descartar la aplicación del criterio de la equidistancia al supuesto planteado. Más adelante -p. 309- vuelve a referirse a esta Sentencia *Ibid.*, p. 26- y también lo hace a la Sentencia de la competencia en materia de pesquerías, en CIJ Recueil 1951, pp. 138-139 acerca de la doctrina del estoppel, así como al asunto de los *Grisbadarna* -entre Noruega y Suecia-. Sin embargo, descarta la aplicabilidad al asunto concreto de las conclusiones extraídas de la Sentencia en el asunto del *Templo de Preah Vihear*, en CIJ Recueil 1962, pp. 22, 23 y 32; descartando también como precedente válido el de la Sentencia arbitral rendida por el Rey de España el 23 de diciembre de 1906. Nuevamente -p. 313- a la Plataforma Continental del Mar del Norte (CIJ Recueil 1969, p. 35, acerca de los métodos prácticos utilizables para realizar la delimitación; a la Plataforma Continental entre Túnez y Libia y a la Sentencia arbitral sobre la delimitación de la Plataforma Continental entre Francia y el Reino Unido, para señalar la irregularidad de las costas estatales. La última referencia jurisprudencial la encontramos en la p. 329 respecto de la Plataforma Continental del Mar del Norte (CIJ Recueil 1969, p. 36), con el objeto de subrayar la importancia que tienen las islas, islotes, rocas ... en la zona a delimitar a la hora de realizar la esta operación.

Asimismo, la Sentencia de 11 de septiembre, en la diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima entre Honduras y El Salvador, comienza refiriéndose a una Sentencia arbitral, la relativa a la frontera entre Guatemala y Honduras (RIAA, vol. II, p. 1325) como fundamento de la dificultad de la aplicación del *uti possidetis* de 1821; también -en las p. 389, 396- a la Sentencia de la diferencia fronteriza entre Burkina Faso y Mali (CIJ Recueil 1986, p. 586). En cuanto a la controversia insular y marítima, la Sentencia de 1992 se remite también a la jurisprudencia. En primer lugar -p. 555-, recuerda la afirmación de la Corte en el asunto de las *Concesiones Mavrommatis en Jerusalem* (CPJI, en Série A, n°5, p. 11) y la *Interpretación de los tratados de paz*, CIJ Recueil 1950, p. 74, acerca de que la existencia de una diferencia debe establecerse objetivamente. También -p. 558- la *Diferencia fronteriza* entre Burkina Faso y Mali, sobre la consideración de las efectividades coloniales; el *Laudo arbitral del Juez Huber* -p. 563- en la *isla de Palmas*, en cuanto que el ejercicio continuo y pacífico de la soberanía territorial equivale a título (*Vid.* en RGDIP, 1935, t. XLII, p. 164); la *Sentencia Minquiers et Ecréhous*, CIJ Recueil 1953, en distintos aspectos. En primer lugar -p. 564-, en cuanto al criterio de las efectividades, ya que los títulos que hacen valer las partes para aplicación del *uti possidetis* resultan ambiguos, recuerda que en el asunto indicado, la Corte entendió que la ausencia de títulos válidos franceses -s. XIX y XX- sobre las islas en conflicto impedían concluir su soberanía sobre las mismas pp. 67- 72.); en segundo término -p. 565- acerca de la importancia de los títulos históricos p. 53 y 57; además fundamenta la dependencia de Meanguerita respecto de Meanguera con el grupo de las islas Minquiers respecto de las islas de la Mancha, remitiéndose a la *Sentencia Minquiers y Ecréhous* (CIJ Recueil 1953, p. 71). Por otra parte, la Sala entiende que se ha establecido en la Sentencia de la *Plataforma continental del Mar del Norte*, CIJ Recueil 1969, p. 22, que los derechos de los Estados costeros sobre las zonas situadas a lo largo de sus costas existen *ipso facto* et *ab initio*. Respecto del principio de efecto útil o de interpretación efectiva, Honduras cita como jurisprudencia de la Corte, la siguiente: *Zonas francas de la Alta Savoya y del País de Gex*, CPJI Série A, n°22, p. 13, *Estrecho de Corfú* CIJ Recueil 1949, p. 24. La Sala entiende que la situación es similar a la planteada en el asunto de la *Sentencia arbitral de 31 de julio de 1989 entre Senegal y*

Sin embargo, a pesar de lo anterior, lo cierto es que en ejercicio de su poder judicial una Sala puede, en cualquier momento, emitir una Sentencia cuyo contenido suponga una *ruptura* con la línea jurisprudencial mantenida hasta el momento. Pero eso, y dado que la jurisprudencia no es una fuente formal del Derecho Internacional -ex art. 38.1 Estatuto-, no sería particularmente grave. Otra Sala, o el Pleno, podría desmentirla a continuación. Lo cierto es que esa actuación provocaría inseguridad jurídica en los Estados, clientes

Guinea Bissau, CIJ Recueil 1991, p. 72. Honduras fundamenta su postura acerca de la competencia de la Sala para la delimitación de las zonas marítimas en la Sentencia de la CPJI en el asunto del *Tratamiento de los nacionales polacos y de otras personas de origen o de lengua polaca en el territorio de Dantzing*, en CPJI Série A/B, n° 44, p. 24. En cuanto al concepto de bahía y bahía histórica, la Sala recuerda lo dicho al respecto en su jurisprudencia anterior, en primer lugar -respecto del concepto de aguas históricas- en el asunto de *competencia en materia de pesquerías* entre UK y Noruega (CIJ Recueil 1951, p. 130) y en la *Plataforma continental* entre Túnez y Libia -en cuanto a las bahías históricas-, en CIJ Recueil 1982, p. 74. Evidentemente en cuanto a la diferencia marítima la Sala no solo se remite, sino que adopta como un muy importante elemento probatorio la Sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana de 9 de marzo de 1917. Honduras utiliza como fundamento de su argumentación la Sentencia de 10 de noviembre de 1929, de la CPJI en el asunto de la *jurisdicción territorial de la Comisión Internacional del Oder*, CPJI Série A, n°23, p. 27. En cuanto al efecto que sobre Nicaragua -Estado interviniente- tendrá la Sentencia sobre el fondo del asunto, la Sala se remite a su Sentencia de 13 de septiembre de 1990, en CIJ Recueil 1990, p. 135-136.

85 La Sentencia de 22 de diciembre de 1986, en el asunto de *la diferencia fronteriza* entre Burkina Faso y Malí, se remite en cuanto a los actos unilaterales -en CIJ Recueil 1986, p. 573- a la de los *Ensayos nucleares*, CIJ Recueil 1974, pp. 267, 269 y 472, 474, también a la de las *actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua*, CIJ Recueil 1986, p. 132. Respecto de la distinción entre competencia de la Sala y la capacidad judicial de la Corte para responder al *petitum*, la Sala -p. 577-, se refiere al asunto del *Camerún Septentrional*, CIJ Recueil 1963, pp. 29,31; *Ensayos nucleares*, CIJ Recueil 1974, p. 271; -con idéntico objeto p.578-, a la *Plataforma Continental* entre Libia y Malta, CIJ Recueil 1985, pp. 23, 26; *Plataforma Continental del Mar del Norte*, CIJ Recueil 1969, pp. 20, 27-28; -p.579- *Oro amonedado procedente de Roma en 1943*, CIJ Recueil 1954, p. 32. En cuanto a la carga de la prueba -p. 587- a las *actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua*, CIJ Recueil 1984, p. 437. Acerca de la relevancia jurídica de las propuestas, anuncios o declaraciones llevadas a cabo por las partes en el curso de una negociación-p. 632-, la Sala se remite a la Sentencia sobre el fondo en el asunto de *la Fábrica de Chorzów*, en CPJI Série A, n°17, p. 51. Sobre la posibilidad de aplicación de la equidad *infra legem*, cuando las partes así lo han reconocido -p.633- *Plataforma Continental Túnez/Libia*, en CIJ Recueil 1982, p. 60; acerca del objeto perseguido con esta aplicación, *Competencia en Materia de Pesquerías*, CIJ Recueil 1974, p.33; sobre la consecuencia de la aplicación de la equidad *Plataforma Continental del Mar del Norte*, en CIJ Recueil 1969, p. 49.

Por su parte, la Sentencia de 20 de julio de 1989, en el asunto *relativo a la Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-*, se remite en múltiples aspectos al asunto *Interhandel*, por su similitud objetiva. Así, en CIJ Recueil 1989 p. 43, para rechazar uno de los argumentos estadounidenses, lo hace a CIJ Recueil 1959, p.28, también -en p.44-, una de las líneas de defensa italianas apoyada en el *estoppel*, *Ibid*, p.27. En la p. 47 se refiere a la sentencia de la CPJI sobre *los empréstitos brasileños*, ver en Série A, n°s 20/21, p.124, para alegar la falta de agotamiento de los recursos internos del Estado demandado habría que indicar la existencia de un recurso que no haya sido utilizado. También se refiere -en la p.76-, a la Sentencia del *derecho de asilo*, CIJ Recueil 1950, p. 284, recordando el alcance conceptual de «lo arbitrario».

potenciales exclusivos de los procedimientos contenciosos ante la Corte cuyos abogados buscan en la jurisprudencia internacional los más sólidos contrafuertes de sus alegatos ante la Corte. Pero nada de ello supondría un cambio cualitativo. La inseguridad, la incertidumbre es consustancial con el sistema de fuentes del Derecho Internacional y con su aplicación judicial. Y, a fin de cuentas, también el Pleno puede en un momento dado, alterar *su propia* jurisprudencia, cuyo valor, en definitiva, está unido a su capacidad de adaptación a renovadas circunstancias. Si el *precedente* vinculara jurídicamente a la Corte, el desarrollo del Derecho por vía jurisprudencial sería imposible, sólo serviría para su «petrificación» o «perpetuación».

En último término, en el Pleno también encontramos casos en los que se ha impuesto la opinión de unos miembros de la Corte a otros por escasa diferencia, o incluso por el voto de calidad del Presidente. El ejemplo paradigmático es el asunto del *Sudoeste Africano* (Etiopía c. Sudáfrica y Liberia c. Sudáfrica). En la primera fase de este procedimiento, en el que se conocía acerca de las excepciones preliminares planteadas por Sudáfrica, la Corte rechaza todas las excepciones sudafricanas, salvo una que decidió unir al fondo: el *locus standi* de los demandantes. Por tanto en esta Sentencia se resolvió la competencia de la Corte para juzgar el fondo del asunto por ocho votos contra siete⁸⁶. Sin embargo, en la segunda fase, la relativa al fondo, la Corte rechazó el objeto de las demandas de Etiopía y Liberia, sin entrar a conocer del asunto, por cuanto, tras deliberar sobre la capacidad jurídica de los

⁸⁶ Vid. CIJ Recueil 1962, p. 319 y ss. La *minoría mayoritaria* que apoyaron la decisión de la Corte estaba formada por: W.KOO (Chino), BADAWI (egipcio), MORENO QUINTANA (argentino), JESSUP (estadounidense), KORETSKY (soviético), BUSTAMANTE y RIVERO (Perú), J. ALFARO (panameño) y el Juez designado *ad hoc* por Etiopía y Liberia, L. MBANEFFO. Contrarios a la decisión de la Corte se pronunciaron: WINIARSKI (polaco), BASDEVANT (francés), MORELLI (italiano), SPENDER (australiano), FITZMAURICE (británico) y el Juez *ad hoc* sudafricano VAN WYK. A la Sentencia se añadieron la declaración del Juez SPIROPOULOS, las Opiniones individuales de BUSTAMANTE y RIVERO, JESSUP y L. MBANEFFO y disidentes de WINIARSKI, BASDEVANT, MORELLI y el Juez *ad hoc* sudafricano Van WYK, además de una Opinión disidente conjunta de los Jueces P. SPENDER y G. FITZMAURICE. Se encontraban ausentes en la votación los Jueces CORDOVA (mejicano) y TANAKA (japonés).

demandantes y su interés jurídico en el objeto de la demanda, resolvió por el voto de calidad del Presidente -Sir Percy SPENDER-, en minoría en la primera fase aceptar la excepción acumulada al fondo⁸⁷. ¿No puede hablarse en este sentido también de imposición de la opinión de una minoría sólo circunstancial o técnicamente mayoritaria a un número considerable de miembros de la Corte? Cabe recordar que las consecuencias negativas del mal paso dado por la Corte en 1966 se padecieron durante largos años.

En el Pleno los Jueces disconformes con la decisión mayoritaria o con la argumentación utilizada para llegar a ella pueden manifestarlo por medio de declaraciones, opiniones individuales o disidentes, según los casos. Lo mismo ocurre con los Jueces de las Salas, pero no con los Jueces de la Corte que no forman parte de ellas, aunque sus Sentencias son también de la CIJ⁸⁸.

Por tanto, no cabe establecer un paralelismo automático y exclusivo entre las Salas y la *ruptura* jurisprudencial. En cuanto al peligro manifestado por la doctrina de que las Salas *ad hoc* condujesen al establecimiento de líneas jurisprudenciales paralelas, simultáneas y diferentes del Pleno y las Salas, estaría en función de su composición. De hecho, ese peligro, sólo se hizo aparente en el asunto de la *Elettronica Sicula S.p.A* (ELSI), cuya sentencia se

⁸⁷ Vid. CIJ Recueil 1966, p. 6 y ss. en cuanto al fondo del asunto. Votan a favor de la minoría de calidad en el seno de la Corte: SPENDER (australiano), WINIARSKI (polaco), SPIROPOULOS (griego), G. FITZMAURICE (británico), MORELLI (italiano), GROS (francés) y el Juez *ad hoc* sudáfricano Van WYK. En contra votan: KOO (chino), KORETSKY (soviético), TANAKA (japonés), JESSUP (estadounidense), PADILLA NERVO (mexicano), FORSTER (senegalés) y L. MBANEFFO Juez designado *ad hoc* por Liberia y Etiopía. Se encontraban ausentes los Jueces BADAWI (egipcio), BUSTAMANTE y RIVERO (peruano) y ZAFRULLA-KHAN (paquistaní). De haber emitido sus votos probablemente no hubiera sido necesario recurrir al voto de calidad del Presidente de la Corte y quizás, el contenido de la Sentencia habría sido diferente.

Esta Sentencia va seguida de una Declaración del Presidente, P. SPENDER, Opiniones individuales de MORELLI y del Juez *ad hoc* Van WYK, y disidentes de W. KOO, KORETSKY, TANAKA, JESSUP, PADILLA NERVO, FORSTER y L. MBANEFFO.

⁸⁸ El art. 95.2 del reglamento de 1978 permite formular opiniones individuales, disidentes y declaraciones. Se trata de tres instituciones distintas que han ido evolucionando desde una única existente en el Estatuto de 1922: la opinión disidente. Aunque *de facto* existían las tres antes de 1978, es en esta fecha cuando el reglamento distingue conceptualmente las mismas.

ha considerado en algún aspecto discrepante de la decisión adoptada por la Corte en el asunto de la *Barcelona Traction Light and Power Company Limited Company* (Bélgica c. España)⁸⁹. No cabría decir lo mismo del resto, en particular de la Sentencia de la Sala en el asunto de la intervención de Nicaragua en la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador, generalmente considerada como un desarrollo progresivo de la jurisprudencia en este punto.

G. ABI-SAAB ha apuntado también la diferencia de razonamientos seguidos en la Sentencia del asunto de la *delimitación de la frontera marítima en la zona del Golfo de Maine* y la que pocos meses después emitió el Pleno en el asunto de la *Plataforma continental* (Libia/Malta)⁹⁰. Sin embargo, a pesar de la corrección de la afirmación anterior, es necesario afirmar que ello no sirve de fundamento a la idea de *ruptura* jurisprudencial que nos ocupa.

2.2.2. ¿*Elettronica Sicula S.p.A (ELSI)* v. *Barcelona Traction Light and Power Co. Limited*?

El único caso en el que se ha alzado alguna voz -una- acerca de la posible dualidad jurisprudencial Pleno/Sala ha sido con ocasión de la Sentencia dictada por la Sala *ad hoc* que conoció del asunto de la *Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-*⁹¹. El Juez ODA, en una opinión individual, estimó que la

⁸⁹ Sentencia de 5 de febrero de 1970, *Vid.* en CIJ Recueil 1970, pp. 4 y ss.

⁹⁰ *Vid.* G. ABI-SAAB : "De l'évolution de la Cour Internationale. Réflexions sur quelques tendances récentes" en RGDI, 92-2, p. 288. Sentencia de 3 de junio de 1985, *Vid.* en CIJ Recueil 1985, pp.13 y ss.

⁹¹ Sobre este asunto existen múltiples estudios, entre los que señalamos los siguientes: M.H. ADLER "The exhaustion of the local remedies rule after the International Court of

Sala estaba infringiendo la jurisprudencia de la Corte, porque entendía aplicable a este caso la doctrina establecida por la CIJ en el asunto de la *Barcelona Traction Light and Power Co. Limited*⁹², paralelismo imprudente porque las diferencias entre ambos asuntos, prevalecían, como veremos, sobre las identidades.

En la jurisprudencia de la Corte encontramos tres asuntos que tienen por objeto la protección diplomática al servicio de inversionistas nacionales, accionistas de sociedades extranjeras. Se trata de las Sentencias *Interhandel* -Suiza c. Estados Unidos⁹³-, *Barcelona Traction Light and Power Company Limited* -Bélgica c. España- y *Elettronica Sicula -ELSI- S.p.A* -Estados Unidos c. Italia-. Su identidad alcanza a las excepciones preliminares interpuestas, pues los tres Estados demandados (Estados Unidos, España e Italia respectivamente)

Justice's decision in ELSI", en ICLQ, 1990, t. 39-3, p. 641 y ss.; T.D. GILL "Elettronica Sicula S.p.A (ELSI) (United States v. Italy)", en AJIL, vol. 84, 1990-1, p. 249 y ss.; C. JEANCOLAS "L'arrêt Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) du 20 juillet 1989 (Etats-Unis d'Amérique c. Italie)" en RGDIP, 1990-3, p. 701 y ss.; P. JUILLARD "L'arrêt de la Cour Internationale de Justice (Chambre) du 20 juillet 1989 dans l'affaire de l'Elettronica Sicula (Etats-Unis c. Italie), procès sur un traité, ou procès d'un traité?", en AFDI, 1989, vol. XXXV, p. 276 y ss.; S.A. KUBIATOWSKI "The case of Elettronica Sicula S.p.A.: Toward Greater Protection of Shareholders'right in Foreign Investment" en CJTL, vol. 29, 1991-1, pp. 215 y ss.; F.A.MANN "Foreign investment in the International Court of Justice: The ELSI Case", en AJIL, 1992, vol. 86-1, pp. 92 y ss.; I. SEIDL-HOHENVELDERN "ELSI and Badger the two Raytheon Cases", en Rivista di Diritto Internazionale Privato e processuale, 1990, n°2, p. 261 y ss.; B. STERN "La protection diplomatique des investissements internationaux...op. cit., p. 897 y ss.; J.A. VIVES CHILLIDA "Las cuestiones relativas a la admisibilidad de la reclamación en la Sentencia Elettronica Sicula -S.p.A. (ELSI)(Estados Unidos/Italia)" en REDI, 1992-1, vol. XLIV, pp. 7 y ss.

⁹² Vid. en Sentencia de 20 de julio de 1989, en CIJ Recueil 1989, pp. 83-93, especialmente p. 84.

⁹³ Vid. en Sentencia de 21 de marzo de 1959, en CIJ Recueil 1959, p. 6 y ss. El objeto de este asunto era una demanda de restitución de los haberes de la sociedad suiza *Interhandel*. Mediante las decisiones de 6 de febrero y 24 de abril de 1942, con fundamento en el *Trading with the Enemy Act* de 6 de octubre de 1917, el Gobierno estadounidense había confiscado casi la totalidad de las acciones de la sociedad *General Aniline and Film Corporation* -GAF-, con nacionalidad del Estado demandado, por pertenecer a la sociedad *I.G. Farbenindustrie* de Frankfurt -Interhandel-, de manera que GAF según la interpretación del gobierno estadounidense estaba controlada por una sociedad enemiga. En 1946 se concluyó un acuerdo entre las tres potencias aliadas y Suiza -Acuerdo de Washington-; en virtud de su art. IV.1 el Gobierno estadounidense se comprometía a desbloquear los haberes suizos en su territorio. Sin embargo, once años más tarde aún no se habían restituido estos bienes, por lo que Suiza presentó una demanda ante la CIJ el 2 de octubre de 1957, por la que pretendía que la Corte declarara que Estados Unidos debía reintegrar los haberes de la sociedad *Interhandel* y subsidiariamente, la obligación de este Estado de acudir al arbitraje o un procedimiento conciliatorio para resolver la cuestión.

arguyeron falta de agotamiento de recursos internos para excluir la admisibilidad de la demanda. Aunque el alegato encontró dispar fortuna en los asuntos señalados, lo cierto es que mediante la interpretación jurisprudencial se ha ido progresivamente perfilando el contenido del citado requisito para el ejercicio de la protección diplomática de los Estados, y, en el caso concreto que nos ocupa, de las inversiones de los nacionales accionistas en sociedades extranjeras.

En las páginas que siguen, prescindiremos del asunto *Interhandel*, finalmente resuelto por la aceptación de la Corte de la excepción preliminar, para centrarnos en los dos restantes, dado que en ellos -donde la excepción preliminar fue desatendida- se han querido ver elementos de ruptura jurisprudencial de la Sala *ad hoc* que zanjó la *Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-*, con el Pleno que resolvió veinte años antes el asunto de la *Barcelona Traction Light and Power Company Limited*.

El asunto de la *Barcelona Traction* puede considerarse el más largo de los conocidos por la Corte, ya que la primera demanda se introdujo en el año 1958 y la última Sentencia se dictó en 1970⁹⁴. Sin embargo entre ambas fechas se produjo un desistimiento belga⁹⁵, la presentación de una segunda demanda

⁹⁴ Sentencia de 5 de febrero de 1970, en CIJ Recueil 1970, pp. 4 y ss. Existen múltiples comentarios a los aspectos que nos interesan de esta Sentencia. Entre ellos señalamos los siguientes: H.W. BRIGGS "Barcelona Traction: the jus standi of Belgium", en AJIL, 1971-2, vol. 65, pp. 327 y ss.; J. CHARPENTIER "Cour Internationale de Justice. Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited -(nouvelle requête: 1962) (Belgique c. Espagne). Exceptions préliminaires- Arrêt du 24 juillet 1964, CIJ, Recueil 1964, p.65" en AFDI, 1964, p. 327 y ss.; id. " Cour Internationale de Justice. Affaire de la Barcelona Traction. Arrêt du 5 février 1970" en AFDI, 1970, p. 307 y ss.; E. GRISEL "L'arrêt de la Cour Internationale de Justice dans l'affaire de la Barcelona Traction (seconde phase): problèmes de procédure et de fond" en Annuaire Suisse de Droit International, 1971, t.XXVII, p. 31 y ss.; J-V LOUIS "Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited. Exceptions Préliminaires. L'arrêt de la Cour Internationale de Justice du 24 juillet 1964", en RBDI, 1965-1, p. 253 y ss.; id. "L'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited. Deuxième phase. L'arrêt du 5 février 1970 de la Cour Internationale de Justice", en RBDI, 1971-1, p. 347 y ss.; A. MIAJA DE LA MUELA Aportación de la Sentencia del Tribunal de La Haya en el caso Barcelona Traction (5 de febrero de 1970) a la jurisprudencia internacional, Valladolid, 1970.

⁹⁵ Ordenanza de 10 de abril de 1961, Vid. en CIJ Recueil 1961, pp. 9-11.

y una Sentencia interlocutoria resolviendo una fase preliminar del procedimiento⁹⁶.

El objeto de la demanda belga depositada ante la Secretaría de la Corte el 23 de septiembre de 1958⁹⁷ contra España era una solicitud de reparación del perjuicio causado a sus nacionales por el comportamiento presuntamente ilícito de distintos órganos del Estado español; concretamente se alegaba la denegación de justicia por parte de los tribunales españoles.

Frente a esta demanda introducida por el Gobierno de Bélgica, España promovió tres excepciones preliminares, la tercera de las cuales era relativa a la nacionalidad de la víctima, ya que la sociedad perjudicada -*Barcelona Traction Light and Power Company Limited*- no tenía nacionalidad belga, sino canadiense⁹⁸. Después de su desistimiento, Bélgica interpuso una nueva demanda, frente a la que el Gobierno español introdujo las mismas excepciones preliminares que en la ocasión anterior. En la contramemoria española a esta última se repiten las excepciones formuladas a la demanda

⁹⁶ Sentencia de 24 de julio de 1964, *Vid.* en CIJ Recueil 1964, p. 6 y ss.

⁹⁷ *Barcelona Traction Light and Power Company Limited* era un *holding* con nacionalidad canadiense constituido en 1911 en Toronto. Para desarrollar una red de producción y distribución de electricidad en Cataluña, creó varias sociedades auxiliares, tres de las cuales tenían nacionalidad canadiense. Después de la Primera Guerra Mundial, un grupo belga, la *Société internationale d'énergie hydro-électrique* (Sidro) adquirió gran parte de las acciones de *Barcelona Traction*. Esta sociedad emitió múltiples series de obligaciones, emisión que se interrumpió en 1936, como consecuencia de la Guerra Civil española. Existieron varios planes de reembolso de la deuda de *Barcelona Traction* sin que ninguno de ellos llegara a materializarse. En 1948, tres portadores de obligaciones de *Barcelona Traction*, solicitaron a un Juez de Reus la declaración de quiebra de la sociedad por falta de pago de los intereses de sus bonos, declaración que se produjo con rapidez. A continuación se revocaron los dirigentes de la sociedad, vendiéndose sus acciones por adjudicación pública a una sociedad española: FECSA. Más tarde se creó una comisión tripartita -Canadá, España y el Reino Unido-, cuyos trabajos concluyeron con una declaración según la cual la actitud adoptada por el gobierno español no autorizando las transferencias de divisas estaba justificada. Bélgica entendió que los trabajos de esta comisión no le eran oponibles, por cuanto *res inter alios acta*.

⁹⁸ Esta tercera excepción preliminar contenía dos partes, la primera la señalada en el texto y la segunda, en la que España subrayaba el incumplimiento belga de uno de los requisitos exigidos para el ejercicio de la protección diplomática: el agotamiento de las vías internas de recursos en el Estado infractor.

precedente⁹⁹. La Corte, en su Sentencia de 24 de julio de 1964, rechaza todas las objeciones preliminares interpuestas por España, salvo las dos últimas que decide unir al fondo¹⁰⁰. Las que la CIJ retiene formaban una sólo en la contramemoria española a la primera demanda belga. Posteriormente se desglosan en dos -tercera y cuarta-, relativas respectivamente a la nacionalidad de la víctima y a la falta de agotamiento de recursos internos por el Estado demandante. Bélgica, tanto en el escrito que contiene las observaciones de su Gobierno a las excepciones preliminares, como en la audiencia oral, había solicitado la unión -sólo de la tercera, la que entendía carencia de *ius standi* -, con carácter subsidiario al rechazo de la excepción preliminar¹⁰¹.

La Corte, en 1970, acogió la tercera de las excepciones interpuestas por España, al entender que la capacidad para obrar del Gobierno belga en el asunto concreto, no había sido demostrada ante la Corte, por lo que

*«...il n'y a pas lieu que la Cour se prononce dans son arrêt sur tout autre aspect de l'affaire sur lequel elle ne devrait prendre position que si le Gouvernement belge avait un droit de protection à l'égard de ses ressortissants actionnaires de la Barcelona Traction»*¹⁰².

Por tanto, la Corte entiende que debe acoger la excepción española y declararse incompetente para conocer del fondo del asunto por no poseer Bélgica *ius standi* ante el Tribunal en este caso. La sociedad no tenía la nacionalidad belga, sino canadiense, y puesto que el presunto causante del perjuicio objeto de la controversia no era Canadá, sino un Estado distinto -España-, correspondía a las autoridades canadienses el ejercicio de la

⁹⁹ Aunque a ellas añade una cuarta -colocada en primer lugar-. En esta nueva objeción España solicita a la Corte una declaración de incompetencia para conocer acerca de las cuestiones planteadas por Bélgica, ya que el objeto de esta nueva demanda es el mismo cuyo conocimiento terminó en 1961, por un desistimiento belga.

¹⁰⁰ Vid. en CIJ Recueil 1964, p.8

¹⁰¹ Sentencia de 24 de julio de 1964, Vid. en CIJ Recueil 1964, pp.13-15.

¹⁰² Vid. en Sentencia de 5 de febrero de 1970, CIJ Recueil 1970, p. 51.

protección diplomática de la sociedad, en lugar de a Bélgica. Es cierto que los accionistas poseían la nacionalidad de este último Estado pero no así la persona jurídica cuya protección se pretendía ejercer.

El asunto de la *Elettronica Sicula S.p.A -ELSI-* se ha comparado con el de la *Barcelona Traction Light and Power Company Limited* en algunas ocasiones. Sin embargo, aunque el objeto de la controversia resulta semejante, el de la *Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-*, posee rasgos característicos peculiares.

Desde una perspectiva subjetiva entre los asuntos indicados, observamos algunas diferencias. En primer lugar tanto en el asunto *Elettronica Sicula -ELSI- S.p.A.*, como en el *Interhandel*, nos encontramos ante relaciones de carácter *bilateral* y no *triangular*¹⁰³. En ambos casos sólo hay dos Estados interesados: por una parte Suiza *-Interhandel -* y Estados Unidos *-Elettronica Sicula -ELSI- S.p.A.-*, que actúan respectivamente como demandantes. Por otra, encontramos como demandados a Estados Unidos *-Interhandel -* e Italia *-Elettronica Sicula -ELSI- S.p.A.-*, causantes del perjuicio objeto de la reclamación. Por el contrario, en el asunto de la *Barcelona Traction Light and Power Company Limited*, los Estados partícipes en esta relación jurídica, como ya se ha señalado, no son dos sino tres.

En segundo lugar, en el asunto de la *Elettronica Sicula S.p.A -ELSI-*, los actos presuntamente contrarios al Derecho Internacional fueron causados por el Estado del que es nacional la sociedad *-Italia-*, y no por un tercero ajeno a la persona jurídica objeto del perjuicio, como ocurrió en *Barcelona Traction*. En el caso de la *Elettronica Sicula* había de darse la posibilidad al Estado del que son nacionales los accionistas de que ejerciera su protección diplomática, por

¹⁰³ Denominación utilizada por B. STERN "La protection diplomatique des investissements internationaux. De Barcelona Traction, à Elettronica Sicula ou les glissements progressifs de l'analyse" en JDI, 1990-4, p. 904.

cuanto, de no hacerlo estaríamos permitiendo una situación de indefensión ante actos presuntamente ilícitos imputables al Estado cuya nacionalidad posee la sociedad. Además, difieren en cuanto a la naturaleza de la obligación infringida. En el caso de la *Barcelona Traction* se demanda a la Corte la reparación por la violación de una norma consuetudinaria, mientras que en el de la *Elettronica Sicula -ELSI-S.p.A.*, como en el *Interhandel*, el fundamento de la solicitud de reparación se encuentra en la infracción de una disposición convencional. En efecto, en el asunto de la *Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-*, nos encontramos con una demanda de reparación estadounidense debida a la presunta violación italiana del Tratado bilateral de Amistad, Comercio y Navegación, de 1948. Estados Unidos entendía que Italia había dispensado un trato discriminatorio y arbitrario a las sociedades accionistas de la ELSI. Como consecuencia de ello les había impedido dirigir de modo efectivo la sociedad italiana¹⁰⁴.

En concreto, Estados Unidos solicitaba una reparación por la requisa del gobierno italiano de una fábrica y otros elementos patrimoniales de la citada sociedad de nacionalidad italiana, cuyo capital se encontraba controlado al 100% por dos sociedades estadounidenses: Raytheon y Machlett, aunque desde 1967 era una sociedad independiente de éstas. La ELSI pretendía una liquidación voluntaria -aunque el procedimiento utilizado para llevarla a cabo no se adecuaba a las previsiones del Derecho italiano¹⁰⁵-. El Alcalde de Palermo adoptó entonces una Ordenanza de requisa temporal de la fábrica y sus bienes, decidiendo el gobierno italiano la creación de una sociedad de gestión para administrar la sociedad con el objeto de salvaguardar el empleo en la región. El

¹⁰⁴ Vid. en este sentido la Sentencia de 20 de julio de 1989, en CIJ Recueil 1989, p. 20.

¹⁰⁵ La ELSI arrastraba problemas económicos desde tiempo atrás, por lo que negociaba con el Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI), para obtener subvenciones del gobierno italiano, gestiones que fracasaron. Debido a los múltiples problemas con que se enfrentaban las sociedades accionistas de ELSI se planteaba el cierre y la liquidación de la sociedad para reducir pérdidas, aunque a pesar de éstas, el capital social de la empresa era superior al mínimo establecido en el Código Civil italiano.

Consejo de Administración de ELSI solicitó la quiebra voluntaria, produciéndose esta declaración pocos días más tarde.

Conocida la demanda estadounidense para que fuera una Sala *ad hoc* la que se ocupara del asunto, Italia se avino a que la diferencia se resolviera en esta formación. A pesar de ello, interpuso una única excepción por la que contestaba la admisibilidad de la demanda, al entender que Estados Unidos no había agotado los recursos internos italianos, excepción que las partes acordaron fuera estudiada conjuntamente con el fondo del procedimiento principal¹⁰⁶. Se trata por tanto, de una objeción desprovista -por acuerdo de las partes- del efecto propio de estos incidentes procesales: la apertura de un procedimiento preliminar para su análisis.

La Sala rechazó por unanimidad la excepción italiana y por mayoría la pretensión estadounidense sobre el fondo del asunto. En definitiva, adoptó una solución transaccional, de consenso intentando agradar a ambas partes¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Además, tanto en la contramemoria como en la dúplica, se contenía una segunda parte subsidiaria de la anterior, en la que Italia planteaba cinco aspectos acerca de los cuales solicitaba que la Sala se pronunciase, previendo el rechazo de la excepción -aspectos que se resumen en la declaración de que Italia no había violado los artículos del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1948 que alegaba Estados Unidos en su contra-. Italia, mantuvo la misma postura en el curso de las audiencias orales que siguieron al procedimiento. Se trataba de una actuación lógica, si tenemos en cuenta que de ser rechazada la excepción -como luego, en efecto, ocurriría-, la Corte entraría a estudiar el fondo del asunto. *Vid.* Sentencia de 20 de julio de 1989, en CIJ Recueil 1989, pp. 18 y 42.

¹⁰⁷ T.D. GILL "Elettronica Sicula S.p.A ...op. cit., p. 257-258; C. JEANCOLAS "L'arrêt Elettronica Sicula...op. cit., p. 740; B. STERN "La protection diplomatique des investissements internationaux...op. cit., p. 934. La única Sentencia adoptada por unanimidad hasta el momento en el seno de una Salas *ad hoc* ha sido la de la *diferencia fronteriza* entre Burkina Faso y la República de Malí. En el asunto del *Golfo de Maine*, la Sala tampoco pudo adoptar su decisión por unanimidad, puesto que contó con el voto en contra de A. GROS. En cuanto a la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador, la mayor parte de las cuestiones planteadas a la Sala fueron resueltas por unanimidad (de las quince, un total de ocho -cuatro relativas a distintos sectores de la frontera terrestre y las restantes de carácter insular-). Sin embargo, un gran número de ellas lo fue por mayoría de cuatro votos (hasta siete). El voto en contra fue formulado en cuatro ocasiones por el Juez *ad hoc* de Honduras, el español S. TORRES BERNARDEZ, la mayoría relativas al conflicto insular, salvo la decisión de la Sala de no determinar la situación jurídica de los espacios marítimos. En dos oportunidades, fue el Vicepresidente de la Corte, el japonés S.ODA, quien formuló el voto contrario, ambas relativas al conflicto marítimo y en concreto a la situación jurídica de las aguas, tanto de las del Golfo de Fonseca como de las exteriores a él. El Juez designado *ad hoc* por El Salvador, el griego N. VALTICOS, tan sólo formuló un voto en contra y fue respecto de la delimitación de la frontera terrestre y en concreto del trazado de la misma en el denominado sector cuarto.

aunque ello no privó a la Sentencia del voto en contra de S.M. SCHWEBEL, que firmó una opinión disidente¹⁰⁸.

Por tanto, vista la inexistencia de identidad objetiva entre los asuntos en causa -*Barcelona Traction Light and Power Company Limited* y *Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-*, debemos concluir señalando que no se produjo la ruptura jurisprudencial predicada por el Juez S.ODA.

2.2.3. Posibles remedios.

Como hemos señalado en párrafos anteriores, la única consecuencia derivada de la posibilidad de ruptura jurisprudencial entre el Pleno y las Salas *ad hoc* es la inseguridad jurídica añadida con la que se encontrarían los Estados para fundamentar sus posturas ante un determinado conflicto, inseguridad con un indeseable efecto disuasorio de sumisión a la jurisdicción de la Corte que, justamente, con las Salas *ad hoc* se quiere propiciar. Para evitarlo, se han propuesto algunos remedios, que vamos a considerar a continuación.

108 El Juez estadounidense S.M.SCHWEBEL, comienza su opinión disidente reconociéndose parcialmente favorable al contenido de la Sentencia y concretamente a dos aspectos de la misma, ambos casualmente, coincidentes con los que benefician al Estado del que es nacional, a saber: 1) la indicación del alcance de la regla de agotamiento de recursos internos; y, 2) la admisión como instrumento para la protección de los derechos de los nacionales -personas físicas o jurídicas- del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, celebrado entre las partes. A continuación, SCHWEBEL expresa su distanciamiento del contenido de la Sentencia en dos puntos fundamentales: a) la negativa de la Sala a aceptar que Italia hubiera violado el art. III del Tratado; y, b) con la opinión de esta formación acerca de que la requisa no era un acto de carácter arbitrario.

a.- Recurso al Pleno.

La posible existencia de la disparidad jurisprudencial es un problema que se ha planteado y resuelto por otros Tribunales Internacionales que también actúan en Pleno y en Salas.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos contiene en su Reglamento -art. 50- una doble previsión, ya que contempla dos supuestos distintos: uno en el que la Sala está **obligada** a enviar el asunto al Pleno y otro, en el que aquella formación está **autorizada** a hacerlo. La Sala **debe** realizar la citada remisión «*en cualquier estado de la causa*» -según reza el art. 50 del Reglamento-, siempre que «*la solución de esta o estas cuestiones puede conducir a una contradicción con una Sentencia pronunciada anteriormente por una Sala o por el Tribunal en Pleno*». El mismo precepto indica que la remisión no implica pérdida automática de competencia de la Sala concreta, ya que una vez el Pleno ha resuelto las cuestiones planteadas decidirá si mantiene «*el conocimiento sobre el conjunto del litigio*» u, ordenará «*el reenvío a la Sala, que recobrará para el resto su competencia inicial*». Por tanto, para evitar la ruptura de la línea jurisprudencial es preceptivo el envío del asunto al Pleno.

Por el contrario, la Sala **podrá** remitir el asunto al Pleno en el supuesto de que un asunto del que está conociendo una Sala provoque «*cuestiones graves que afecten a la interpretación del Convenio*».

Por lo que hace referencia a las Salas del TJCE, la solución que se aporta a la cuestión de la ruptura jurisprudencial es similar a la anterior. Sin embargo, ni su Estatuto ni su Reglamento la disponen de manera expresa. El

art. 95 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal señala en su apartado tercero que «la Sala, en cualquier momento del procedimiento podrá devolver al Tribunal un asunto». Adoptando este precepto como fundamento, la jurisprudencia del Tribunal ha resuelto el problema planteado¹⁰⁹. De acuerdo con la citada jurisprudencia las Salas podrán enviar al Pleno un asunto del que estén conociendo siempre que deban adoptarse nuevas decisiones importantes, o bien con el objeto de conocer la opinión del Pleno antes de quebrantar la unidad jurisprudencial¹¹⁰.

Esta solución es un procedimiento a tener en cuenta, aunque existe un problema relacionado con su fundamento jurídico, ya que ni el Estatuto ni el Reglamento de la Corte lo prevén expresamente -a diferencia de lo que ocurre con el TEDH-, y tampoco observamos ningún precepto en ambos textos que lo permita, como hemos visto que sucede en el Reglamento de Procedimiento del TJCE.

Por tanto, a pesar de que la solución indicada parece idónea, puesto que resuelve el problema que nos ocupa, no existe en los textos rectores de esta institución articulación posible que conduzca a su aplicación a la CIJ. Ni el

¹⁰⁹ Vid. en este sentido G. ISAAC *Manual de Derecho Comunitario General*, 3ª ed., Barcelona, 1995, p. 265; K.P.E. LASOK *The European Court of Justice. Practice and procedure*, 2ª ed., Londres, 1994, p.28; J-V LOUIS, G. VANDERSANDEN, D. WAELBROECK & M. WAELBROECK *Commentaire Megret. Droit de la CEE*, vol. 10. La Cour de Justice. Les actes des Institutions, 2ª ed. Bruselas 1994, p. 30; L. NEVILLE BROWN & T. KENNEDY *The Court of Justice of the European Communities*, 4ª ed., Londres, 1994, p.38 y 347; L. ORTUZAR ANDECHAGA *Aplicación judicial del Derecho Comunitario*, Madrid 1992, p. 66; D. RUZIE "Art. 165", en VV. AA. *Traité instituant la CEE. Commentaire article par article*, Paris 1992, p. 979; H.G. SCHERMERS & D.WAELBROECK *Judicial Protection in the European Communities*, 5ª ed. Leiden, 1992, p. 460 §798.

¹¹⁰ Vid. las Sentencias de 16 de diciembre de 1960, en el asunto 44/59 *Fidelaar c. Comisión*, en TJCE, Recueil 1960, pp. 1081 y ss.; de 9 de marzo de 1977, en el asunto 54/75, *De Dapper/Parlamento*, en TJCE Recueil 1977, p. 474 y ss.; de 15 de junio de 1976, en el asunto 110/75, *John Mills c. Banque Européenne d'investissement*, en TJCE Recueil 1976, p. 967; de 14 de julio de 1981, en el asunto 172/80, *Züchner/Bayerische Vereinsbank*, en TJCE Recueil 1981, pp. 2021 y ss.

Estatuto ni el Reglamento contemplan una relación jerárquica entre las formaciones de la CIJ, que es la que subyace a tales planteamientos.

b.- Participación del Presidente de la Corte en la formación de la Sala.

Una segunda solución a tener en cuenta, que tampoco se encuentra prevista en los textos indicados, es la participación del Presidente o Vicepresidente de la Corte como miembro nato de las Salas formadas en el seno del Tribunal¹¹¹.

Es necesario señalar en este punto que partimos de entender que ambos están investidos de la calidad de garantes de la unidad jurisprudencial, en cuanto el Presidente -o el Vicepresidente en ausencia de aquel- es responsable directo del trabajo de la Corte. Pero sabemos que la ruptura jurisprudencial no sólo es posible, sino en algunas circunstancias, también es deseable, en cuanto permite el desarrollo progresivo del Derecho y el voto del Presidente de la Corte no es por sí mismo más calificado que el de otro miembro de la Sala, a menos que ejerza también la Presidencia donde está y se presente *insólitamente una situación de empate*. Así que la presencia presidencial puede aportar, a lo más, aunque probablemente no sea poco, el peso de una cierta autoridad institucional y el mejor conocimiento de la marcha global de la Corte.

¹¹¹ A título de miembros *electos* los Presidentes de la Corte participaron en alguna de las Salas *ad hoc*. Así en el asunto de la *Eletronica Sicula S.p.A -ELSI-* N. SINGH -presidente de la CIJ en el momento de su constitución-, participó y presidió la Sala, falleció en el curso del procedimiento -en diciembre de 1988, cuando había dejado la Presidencia de la Corte-, siendo sustituido por el entonces, desde febrero de ese mismo año, Presidente de la Corte -J.M. RUDA-. En cuanto a la formación que conoció del asunto de la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador, uno de sus miembros fue Sir R. JENNINGS, Presidente de la Corte desde la renovación trienal de 1991 hasta 1994. Por tanto cuando se le designó miembro de la Sala no era Presidente de la Corte, aunque sí lo fue en el momento en que se pronuncia la Sentencia.

Pero ese papel posiblemente no requiera alzar al Presidente -o Vicepresidente- hasta el centro de la Sala. De hecho las consultas oficiosas para pulsar el estado de opinión del colegio de Jueces no han de ser descartadas.

Este remedio puede ser concebido alternativa o conjuntamente con el anterior. Así ocurre en el TEDH, cuyo Reglamento de Procedimiento -en su art. 21.3.b-, indica que el Presidente o Vicepresidente del Tribunal, formarán parte de la Sala de Pleno derecho. En cambio, tratándose de la formación de las Salas del TJCE, de la práctica se desprende la exclusión del Presidente del Tribunal.

El remedio apuntado, en el caso de la CIJ, obligaría a una enmienda reglamentaria, a menos que se adopte como un acuerdo de los Jueces la elección sistemática del Presidente o Vicepresidente como Presidente de las Salas *ad hoc* que lleguen a formarse.

Conclusiones.

PRIMERA.- Las Salas *ad hoc* de la CIJ son formaciones de naturaleza judicial. En ellas observamos algunos elementos típicamente arbitrales, como la relevancia de la opinión de las partes en la conformación de la Sala, insuficientes en todo caso para fundamentar la naturaleza arbitral de las Salas. La existencia de rasgos comunes entre el arbitraje y el arreglo judicial es lógica, puesto que éste es fruto de la evolución de aquél. En las Salas, los guiños arbitrales son importantes, pero más que de una transposición ha de hablarse de una adaptación a un ámbito propiamente judicial: el de la Corte.

SEGUNDA.- El método realmente seguido para designar la composición de una Sala *ad hoc* es *sui generis*, quedando el Pleno reducido a una suerte de Tribunal Permanente de Arbitraje.

Materialmente, el trámite de formación de una Sala *ad hoc*, asemejándose al del arbitraje, goza de características propias. La composición de un órgano arbitral es fruto de la voluntad de las partes. En la formación de una Sala *ad hoc* esa voluntad opera de forma más solapada, por cuanto formalmente corresponde al Pleno la designación de los miembros de esta formación reducida, mediante una elección secreta. La función del Presidente de la Corte en esta fase consiste en informarse de los puntos de vista de las partes acerca de la composición de la Sala, para transmitirlos al Pleno; en la práctica, no se descarta que el Presidente negocie con las partes una determinada formación para este órgano reducido.

TERCERA.- Con las Salas *ad hoc* se ha pretendido atraer a los Estados a la jurisdicción de la Corte con el señuelo de algunos elementos del arbitraje que potencian el papel de las partes en la composición del órgano decisor y el procedimiento, conservando y ofreciendo al mismo tiempo las ventajas que sin duda ofrece una jurisdicción internacional como la CIJ. En primer término el prestigio del Tribunal: del Pleno o de la Sala, la Sentencia no deja de ser una decisión dictada por el órgano judicial principal de las NN.UU. Los puntos sobre los que las partes han de lograr un acuerdo se reducen y se cuenta con el impagable apoyo logístico de la Secretaría de la Corte, tanto más de agradecer cuanto a las económicas se añaden las dificultades del contexto conflictivo en que se mueven las partes. Tanto los jueces ordinarios de la Corte, como los designados *ad hoc* y el personal de la Secretaría cobran de la partida presupuestaria que NN.UU. destina al efecto, por lo que las partes no han de utilizar sus respectivas arcas para remunerarlos, a diferencia de lo que ocurre en los procedimientos arbitrales. En último término, las Sentencias de las Salas *ad hoc*, en cuanto Sentencias de la Corte, están amparadas por el mecanismo de ejecución forzosa perfilado en el art. 94.2 de la Carta, aunque ésta sea una ventaja formal y no material, según las enseñanzas, hasta ahora, de la historia.

CUARTA.- Las Salas *ad hoc* carecen de un objeto definido. Mientras la finalidad de las Salas de Procedimiento sumario es acelerar éste y el carácter definidor de las Salas «especiales» es su especialización material, la existencia de las *ad hoc* no responde a una finalidad determinada y concreta.

El motivo de su inclusión en el Estatuto de 1945, fue la creación de un tipo de Salas para tramitar los asuntos que no cupieran en las restantes formaciones

CONCLUSIONES

reducidas. Por tanto se concibieron con un carácter residual. Se pensaba que si la confianza de los Estados se mantenía, la CIJ se iba a ver rápidamente saturada de trabajo. Para evitar estas situaciones de sobrecarga se introdujeron en el Estatuto de 1945 las Salas *ad hoc*. Se trataba de desviar a estas formaciones -mediando siempre la solicitud de las partes- el conocimiento de algunas cuestiones, cuando el ritmo de trabajo de la Corte así lo exigiera.

Posteriormente la CIJ, en pertinaz sequía, utilizó este tipo de Salas para atraer a los sujetos activamente legitimados para actuar ante ella, incluyendo elementos arbitrales en las Salas *ad hoc*. Todo con tal de salvar a la Corte y a la función judicial internacional.

QUINTA.- Normalmente la creación de formaciones reducidas en el seno de órganos judiciales responde a una razón fundamental: la mejor distribución de trabajo. Pero en el caso de las Salas *ad hoc* no es esa la razón.

Los motivos del funcionamiento de estas Salas hemos de buscarlos en la oportunidad política y, más concretamente, en el recelo de los Estados o de algunos de ellos a acudir al Pleno para resolver sus controversias. De ahí la atracción que provoca la invitación que se les hace a participar en la designación de los miembros de la Sala.

SEXTA.- La utilización de estas Salas -sólo 36 años después de su concepción- coincide cronológicamente con la salida del túnel de la crisis por el que pasó la Corte durante dos décadas. El efecto derivado de la

CONCLUSIONES

creación de las Salas *ad hoc* ha sido, paradójicamente, la recuperación de la confianza de los Estados en el Pleno de la Corte.

Cuando hablamos de *crisis* nos estamos refiriendo al descenso en el número de asuntos sometidos al conocimiento de la Corte. Hemos de tener en cuenta que desde 1960 hasta 1970 se sometieron a la CIJ sólo cuatro asuntos, el mismo número de controversias introducidas ante la Corte entre 1947 y 1949, mientras que en la década de los cincuenta la CIJ tuvo oportunidad de conocer de un total de veintinueve. En estas circunstancias resultaba preciso adoptar algún tipo de medidas para atraer a los Estados hacia el arreglo judicial y una de ellas fue la modificación de las Salas *ad hoc*. Las medidas adoptadas resultaron fructíferas, como revelan las estadísticas, pero el mérito sólo en parte es achacable a estas Salas, pues a los primeros años de euforia han sucedido otros de calma, en los que los Estados prefieren, al parecer, someter sus controversias al Pleno de la Corte.

SEPTIMA.- Para que una Sala *ad hoc* pueda conocer de un asunto se exige la presencia del elemento consensual. Este podrá materializarse en un momento anterior o posterior de la introducción del asunto a conocimiento de la Corte. En el primer caso el instrumento jurídico utilizado será el compromiso, por otra parte el más apropiado a estos fines. En el segundo estaremos ante una demanda unilateral seguida de un acuerdo interpartes, que se solapará a aquélla.

OCTAVA.- El compromiso es el instrumento más utilizado para recurrir a las Salas *ad hoc*. Mientras sólo nueve de los sesenta y seis de los asuntos sometidos a conocimiento del Pleno de la Corte hasta 1995 se han

CONCLUSIONES

introducido por esta vía, tres de los cuatro asuntos sometidos a las Salas *ad hoc* lo han sido en virtud de compromiso .

Por tanto, si bien no cabe predicar la exclusividad del compromiso como instrumento de incoación procesal ante las Salas *ad hoc*, sí que puede afirmarse su prevalencia fáctica a estos fines, debido a la idoneidad que presenta para ello. Podemos indicar a este respecto la relación existente entre los compromisos y las controversias de carácter fronterizo, en las que muy excepcionalmente se ha utilizado el instrumento unilateral.

Ni el Estatuto ni el Reglamento indican los contenidos mínimos de un compromiso, pero resulta evidente que no pueden contravenir las disposiciones del Estatuto y del Reglamento que posean carácter imperativo para las partes.

En definitiva, no existe especialidad alguna entre los compromisos cuya notificación sirve como instrumento para someter el conocimiento de una controversia al Pleno y los compromisos que cumplen la misma función respecto de una Sala *ad hoc*. Tan sólo cabe observar una diferencia: las disposiciones relativas a la composición de la Sala que aparecen en los últimos.

NOVENA.- El procedimiento ante las Salas no es un procedimiento especial, ya que se rige por las mismas normas procesales que el desarrollado ante el Pleno. Tampoco existe especialidad alguna en lo que a procedimientos incidentales se refiere.

Especialmente interesante resulta el relativo a la intervención de Nicaragua en el asunto de la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* (Honduras/El Salvador). Antes de 1990 -fecha en que se admite la

CONCLUSIONES

intervención nicaragüense- nunca se había acogido en la historia de la Corte un incidente de intervención con fundamento en el art. 62 del Estatuto. La aceptación parcial de la solicitud nicaragüense no es una peculiaridad de este incidente en las Salas respecto del Pleno, pero sí lo es de los órganos judiciales frente a los arbitrales.

La admisión por una Sala *ad hoc* de una demanda de intervención ex art. 62 del Estatuto es una prueba más de su carácter judicial.

DÉCIMA.- Las Sentencias dictadas por las Salas *ad hoc* han poseído hasta ahora un marcado carácter transaccional, por cuanto se intenta alcanzar una solución de consenso que garantice su ejecución; pero tampoco éste es un rasgo distintivo de estas formaciones respecto del Pleno de la Corte.

No se han cumplido, por otra parte, los temores doctrinales apuntados sobre los efectos que podrían derivar de la constitución de Salas *ad hoc* para la uniformidad de la jurisprudencia de la Corte. Prueba de ello es que las Salas fundamentan sus decisiones en fallos anteriores de la Corte, desarrollando en algunas ocasiones principios o líneas argumentales avanzadas en ellos.

Aunque formalmente el Estatuto no impide esta posibilidad, ninguna de las Salas se ha apartado de las decisiones anteriores del Tribunal.

UNDÉCIMA.- Las Salas *ad hoc* han tenido un doble efecto: (1) inmediato: la resolución de cuatro controversias internacionales y (2) mediato: el incremento de la confianza de los Estados hacia el Pleno de la Corte. Si tenemos en cuenta los asuntos sometidos a conocimiento de ambas formaciones del Tribunal, concluiremos que durante los últimos quince años

se ha reactivado la confianza en el Pleno, puesto que le ha sido sometido un número considerable de ellos. Ciertamente desde una perspectiva jurídica los fallos de ambas formaciones tienen idéntico valor y efectos. Sin embargo, las Sentencias del Pleno tienen un mayor prestigio político que las de las formaciones extraordinarias de la Corte.

DUODÉCIMA.- Las Salas *ad hoc* sólo poseen competencia en materia contenciosa. Esto no repercute negativamente en su *judicialidad*, por cuanto la actividad consultiva no es un rasgo definidor de la función judicial.

DECIMOTERCERA.- El futuro de las Salas puede definirse con una palabra: incierto. Ello a pesar de que se ha planteado la posibilidad de crear Salas regionales tomando como fundamento jurídico cualquiera de los parágrafos del art. 26 del Estatuto. Es cierto que de este precepto no derivan cortapisas. Sin embargo, la creación de este tipo de formaciones podría tener como consecuencia la regionalización del Derecho Internacional o la distinta evolución jurisprudencial de este ordenamiento jurídico¹. T.O. ELIAS estimó en su día que si se permitiera la constitución de Salas regionales debería instaurarse un mecanismo de seguridad que protegiera la unidad del Derecho Internacional, con el objeto de impedir la evolución particularizada del mismo. El instrumento que entendía idóneo para lograr este objetivo era el establecimiento de un recurso de apelación ante el

¹ De la que no deriva necesariamente un efecto negativo. Un ejemplo de Derecho Internacional regional ha sido el *Principio del Uti Possidetis Iuris*, nacido y desarrollado en las antiguas colonias de la Corona Española en el continente americano y cuya *importación* al Derecho Internacional General se ha producido con ocasión de la Sentencia de 1986 en el asunto de la *diferencia fronteriza* entre Burkina Faso y la República de Malí, dictada precisamente por una Sala.

Pleno². Sin embargo, entendemos que de esta solución deriva una jerarquización entre las distintas formaciones de la Corte, que no puede encontrar fundamento jurídico ni en el Estatuto ni en el Reglamento de esta institución³.

En otro orden de cosas, no creemos que el futuro de las Salas *ad hoc* de la CIJ pase por la regionalización de sus miembros. A pesar de resultar beneficiosas para la aplicación de normas particulares y controversias de naturaleza territorial es preferible acudir al Pleno de la Corte en los supuestos en los que se encuentren afectados principios universales⁴

A pesar de los recelos doctrinales y de las críticas expresadas por algunos miembros de la Corte, las Salas han cumplido hasta el momento una función no desdeñable, al resolver cuatro controversias internacionales -tres de ellas seculares-, que no habían encontrado solución mediante la aplicación de otros medios pacíficos.

En su declaración a la Sentencia de la Corte de 25 de julio de 1974, en el asunto de la *competencia en materia de pesquerías*, N. SINGH, indicaba

«The Court, as the principal judicial organ of the United Nations, taking into consideration the special field in which it operates, has a distinct role to play in the administration of justice. In that context the resolving of a dispute brought before it by sovereign States

² T. O. ELIAS "Report", op. cit., pp. 19-33.

³ También R.Y. JENNINGS defiende la posibilidad de creación de Salas regionales, aunque a diferencia de T.O. ELIAS, con independencia de la posibilidad de apelación. El problema de la fragmentación del Derecho Internacional no parece preocuparle, ya que la jurisprudencia no es fuente normativa, puesto que los tribunales no crean derecho, tan solo se limitan a aplicarlo. R.Y. JENNINGS "Report", op. cit., pp. 35-48. Avanza, sin embargo, que el éxito de estas Salas regionales puede ser más teórico que práctico, ya que a ningún Estado le gusta resolver sus controversias ante órganos judiciales formados por miembros de Estados vecinos.

⁴ S.M. SCHWEBEL "Ad Hoc Chambers of the International Court of Justice" AJIL, vol. 87, 1987, p. 851.

CONCLUSIONES

*constitutes an element which the Court ought not to ignore in its adjudicatory function»*⁵

Teniendo presente esta reflexión, se justifica una interpretación flexible del Estatuto de la Corte que no implica necesariamente el alejamiento del método judicial de solución de controversias ni una transgresión de las normas estatutarias. Así acontece con las Salas *ad hoc*, al desarrollar el Reglamento mediante una interpretación extensiva del art. 26.2 del Estatuto, en el límite de su flexibilidad. Si las instituciones de la Justicia Internacional -entre las que se encuentra la CIJ- han sido creadas para resolver los problemas de la Sociedad Internacional, deben adecuarse progresivamente tanto a sus necesidades como a sus oportunidades.

No obstante, la aplicación *flexible* de los preceptos estatutarios -hasta el extremo de lo (im)posible- que ha permitido el funcionamiento de estas formaciones, ha de contemplarse con cierta prevención, sobre todo cuando se ampara en interpretaciones de textos reglamentarios que pueden chirriar en su roce con el Estatuto de la Corte.

* * *

Setenta años después de la publicación de **La Justice Internationale** -1924-, obra de Nicolai POLITIS, que concluía esperanzado proclamando «*La era de la jurisdicción obligatoria ha comenzado*», no nos atrevemos a formular semejante afirmación. En los años veinte se produjo un hito de gran importancia en el arreglo jurisdiccional de controversias internacionales: la

⁵*Competencia en materia de pesquerías* -RFA c. Islandia y Reino Unido c. Islandia-, en CIJ Recueil 1974, p. 213.

creación de un tribunal internacional de ámbito geográfico universal y material general, rasgos ambos desconocidos hasta entonces. Además cabía aceptar esa jurisdicción como obligatoria por parte de los Estados que así lo desearan. Con ello se emprendió el largo camino hacia la jurisdicción internacional obligatoria. No podemos afirmar que en las décadas sucesivas el avance haya respondido a las expectativas en su día suscitadas. Los Estados prefieren resolver sus controversias por medios políticos, y en su defecto, por aquellos jurisdiccionales en los que puedan intervenir de manera decisiva. No en vano los intereses en juego en las controversias internacionales, se consideran a menudo de vital importancia para los Estados. Por tanto, si bien es cierto que la jurisdicción obligatoria comenzó su andadura en los años veinte, no lo es menos que el camino que le queda por recorrer es largo y difícil.

Casi diez años después de la edición del libro de N. POLITIS, CH. de VISSCHER, tras señalar que la CPJI había supuesto el paso de la justicia internacional inorgánica a la justicia internacional organizada, manifestaba que la jurisdicción internacional obligatoria era una cuestión de confianza, y ello en un doble sentido, en primer lugar hacia el resto de los Estados y, en segundo término, hacia la propia justicia internacional y por tanto hacia el propio ordenamiento jurídico aplicable⁶. El problema con el que nos encontramos en el momento actual es la imposibilidad real de resolver la doble vertiente que presenta este problema de confianza.

La cuestión es: ¿Cual es el modelo más adecuado para resolver en sede jurisdiccional las controversias internacionales? Las preguntas subsiguientes a formular serían ¿la jurisdicción internacional obligatoria es

⁶ Ch. De VISSCHER "La Cour Permanente de Justice Internationale et son rôle dans le règlement des différends entre Etats". en *Nordisk Tidsskrift for International Ret.* 1933, pp. 146-157.

CONCLUSIONES

sinónimo de eficacia en el aspecto que a nosotros nos interesa?; o, ¿será más eficaz un sistema judicial internacional flexible?; o, incluso, por el contrario ¿resultarán más beneficiosos los modelos mixtos arbitro-judiciales?

Por el momento, seguimos buscando la respuesta, puesto que, por una parte, tanto los órganos arbitrales como los judiciales en sus distintas formaciones, han resuelto un buen número de controversias internacionales mediante la aplicación del Derecho Internacional contribuyendo, con ello, al desarrollo de este ordenamiento. A pesar de lo cual, no se han erradicado las controversias internacionales, para cuya solución el Derecho Internacional aparece impotente, puesto que las partes en conflicto carecen de voluntad en este sentido, y por qué negarlo, a las grandes y medianas potencias internacionales tampoco les interesa la paz mundial genuina, por evidentes motivos económicos -entre otros el interés derivado de su condición de exportadores de armas-. A pesar de ello, el balance ha de ser positivo, puesto que la pacificación, aunque sea de un escaso número de conflictos, siempre ha de ser valorada de esta manera. Las Salas *ad hoc* han contribuido a ello; pero guardemos una cierta cautela. No olvidemos las palabras de A. LAPRADELLE cuando señalaba «...*il ne suffit pas que la justice soit juste, il faut encore qu'elle le paraisse*»⁷. Las Salas *ad hoc* no deben ser la mujer del César.

⁷ Vid. en Ch. ROUSSEAU "Le Droit International et l'idée de Justice", en *Le Droit International au service de la Paix, de la justice et du développement*. Mélanges Virally, Paris, 1991, pp. 399-403. La referencia citada en el texto se encuentra en la página 401.

**Apéndice I: Composición
de las Salas *ad hoc* de la CIJ.**

Miembros de la Sala encargada del *asunto de la delimitación de la frontera marítima en la Región del Golfo de Maine* (Canadá-Estados Unidos): R. Ago (Presidente), A. Gros, H. Mosler, S.M. Schwebel, M. Cohen (Juez *ad hoc*).

Roberto AGO (italiano) proviene de la carrera universitaria¹. Antes de su elección como Juez ordinario de la CIJ² fué nombrado por Honduras Juez *ad hoc* en el *asunto de la sentencia arbitral dictada por el Rey de España de 1906* (Honduras c. Nicaragua)³ y también fue Juez *ad hoc* del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 1982⁴. El prof. AGO fue miembro de la Corte desde el decimosegundo período de la Corte (1979) hasta 1995, año en el que falleció, siendo sustituido por el también italiano FERRARI-BRAVO hasta la finalización de su mandato (1997)⁵.

¹ Fue profesor de Derecho Internacional en distintas universidades italianas -Cagliari, Messina, Catania, Milán y Roma-, durante diecinueve años fue Presidente del Curatorium de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Participó en los Cursos de la Academia en distintas ocasiones entre 1936 y 1983, dictando en 1973 el Curso General de Derecho Internacional Público. Además impartió cursos, seminarios y conferencias en distintas Universidades del mundo.

² Fue abogado del Gobierno italiano y de otros gobiernos en distintas controversias sometidas a la CPJI, a la CIJ y a otros tribunales internacionales de arbitraje o comisiones de conciliación, además fue miembro del TPA y Presidente de distintos tribunales arbitrales.

³ *Vid.* Sentencia de 18 de noviembre de 1906, en CIJ Recueil 1960, pp. 192 y ss.

⁴ En el asunto X c. Reino Unido en 1982, *Vid.* en CIJ *Annuaire* 1982-83, p. 35.

⁵ Posee una extensa bibliografía sobre cuestiones de Derecho Internacional Público y también aunque en menor medida en Derecho Internacional Privado.

Ha formado parte de las Salas constituidas para conocer de los asuntos de *la delimitación de la frontera marítima en el Golfo de Maine* y posteriormente de *la Elettronica Sicula S.p.A -ELSI-*⁶. En la primera de ellas su designación respondió al acuerdo de las partes, mientras que en la citada en último lugar actuó como Juez nacional de uno de los Estados partes en la controversia: Italia⁷.

Desde su elección ha formulado múltiples opiniones de distinto carácter a las sentencias dictadas por la CIJ⁸. A nosotros nos interesa especialmente la Opinión Individual formulada a la sentencia de 24 de febrero de 1982, en el asunto de la *Plataforma Continental* entre Túnez y Libia, por la semejanza material respecto del asunto del Golfo de Maine, aunque no es de utilidad, porque cuando la misma se redactó la Sala ya estaba constituida.

En la citada opinión individual se manifiesta de acuerdo con la solución adoptada por la Corte, aunque muestra su disconformidad hacia la justificación de la inclinación de la línea fronteriza decidida, por entender que la Corte ha optado por la frontera existente *de facto* entre Túnez y Libia y que

⁶ Vid. Ordenanzas de 20 de enero de 1982, en CIJ Recueil 1982, p.8 y de 2 de marzo de 1987 en CIJ Recueil 1987, p. 4.

⁷ Igual que en otros supuestos similares, el desarrollo de la carrera profesional de este juez indica su proximidad a las posturas oficiales del país del que es nacional, puesto que fue delegado italiano en múltiples foros internacionales. Al respecto, vid. CIJ Annuaire 1978-79, pp. 27-28.

⁸ Las siguientes opiniones individuales: opinión consultiva de 20 de diciembre de 1980, sobre la *interpretación del acuerdo de 25 de marzo de 1951 entre la OMS y Egipto*, vid. en CIJ Recueil 1980, p. 155; a la Sentencia de 24 de febrero de 1982, en el asunto de la *Plataforma Continental Túnez/Libia*, vid. en CIJ Recueil 1982, pp. 95 y ss.; a la Sentencia de 27 de junio de 1986 en el asunto de las *actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* (fondo), vid. en CIJ Recueil 1986, pp. 181 y ss.; a la opinión consultiva de 27 de mayo de 1987, en el asunto de la *demanda de revisión de la Sentencia número 333 del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas*, vid. en CIJ Recueil 1987, p. 106 y ss. Formuló una opinión disidente a la Sentencia de 21 de marzo de 1984 en el asunto de la *Plataforma Continental Libia/Malta*, vid. en CIJ Recueil 1984, p. 115 y ss. También conjunta formulada con J.M. RUDA, H. MOSLER, R.Y. JENNINGS y G. DE LACHARRIERE la Ordenanza de 4 de octubre de 1984, en el asunto de las *actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua*. Demanda de intervención de la República de El Salvador, vid. en CIJ Recueil 1984, p. 219.

ambos Estados se han comportado históricamente -incluso las potencias administradoras antes de su acceso a la independencia- de acuerdo a la misma, de manera que este debía haber sido el criterio principal y no complementario que hubiera conducido a la Corte a la solución finalmente adoptada⁹.

André GROS (francés) proviene -igual que el anterior- de la carrera universitaria¹⁰, aunque también profesional como representante o consejero de su país y de otros Estados. Fue elegido miembro de la Corte durante el período decimoséptimo, en febrero de 1964 y reelegido en 1973, prorrogándose su mantenimiento en funciones debido la avanzada fase procesal en la que se encontraba el asunto de la *Plataforma Continental* entre Túnez y Libia¹¹. También continua siendo miembro de la Corte, en cuanto fue elegido para formar parte de la primera Sala *ad hoc* que se constituyó en la historia. Fue la que conoció de la *delimitación de la frontera marítima en el Golfo de Maine* entre Estados Unidos y Canadá¹². Su presencia en esta última formación provocó múltiples críticas doctrinales -señaladas en otro lugar de este trabajo- ya que fue una imposición de las partes en la controversia. El origen de la polémica suscitada se encontraba en el hecho de que A. GROS iba a ser sustituido en su calidad de miembro de la Corte, pocos días después de emitirse la Ordenanza de composición de la citada Sala, por Guy LADREIT DE

⁹ En CIJ, Recueil 1982, p. 18 y ss.

¹⁰ Ejerció como Profesor en las Facultades de Derecho de París, Nancy, Toulouse y Río de Janeiro. También dictó en 1959 un curso de la Academia de Derecho Internacional de La Haya

¹¹ *Id.* nota nº8, p. 143 y ss.

¹² *Vid.* Ordenanza de 20 de enero de 1982 en CIJ Recueil 1982, p. 8.

LACHARRIERE¹³. Esta actuación implicaba que uno de los Jueces que formaban parte de la Sala no sería miembro del Pleno desde el inicio de los trabajos de la Sala¹⁴. Casualmente, el de A. GROS fue el único voto en contra que recibió el contenido de la sentencia¹⁵.

Compaginó sus trabajos en cuanto miembro de la Corte con la participación en dos tribunales arbitrales: el que conoció de la diferencia entre Argentina y Chile respecto del *Canal de Beagle* (entre los años 1971 y 1977) y sustituyó a P. REUTER en 1976 en el asunto de la *delimitación de la Plataforma Continental* entre Francia y el Reino Unido (desde 1975 hasta 1978)¹⁶. Una vez concluido su mandato como Juez de la CIJ participó en el tribunal arbitral que conoció de la delimitación de la frontera marítima entre Guinea Bissau y Senegal¹⁷.

Durante su permanencia como miembro de la Corte, formuló múltiples opiniones individuales o disidentes en los asuntos en los que participó a lo largo

¹³ Guy LADREIT DE LACHARRIERE, fue miembro del Tribunal Permanente de Arbitraje entre los años 1975 y 1981, y había sido agente francés en los arbitrajes sobre la delimitación de la *plataforma continental* entre Francia y el Reino Unido y en el desarrollado entre Francia y Estados Unidos acerca del *acuerdo franco-americano sobre los servicios aéreos*. Vid. al respecto CIJ *Annuaire* 1981-1982, pp. 32-33.

¹⁴ Es cierto que también se mantuvo como miembro del Pleno, aunque sólo por espacio de unos días, ya que su mandato como tal expiraba el 5 de febrero y la Sentencia en el asunto de Túnez y Libia es de 24 del mismo mes. Por el contrario, la Ordenanza de la Corte por la que se fijan los plazos de depósito de las memorias y contramemorias de las partes es de 1 de febrero de 1982, Vid. en CIJ *Recueil* 1982, pp.15-16, y la primera Ordenanza dictada por la Sala es de 28 de julio del mismo año, vid. en CIJ *Recueil* 1982, pp. 557-558, por tanto cinco meses después de expirar el mandato de A. GROS como miembro del Pleno.

¹⁵ Vid. Sentencia de 12 de octubre de 1984, en CIJ *Recueil* 1984 p. 345 y su opinión disidente a la misma en las pp. 360-390.

¹⁶ Vid. la composición de ambos órganos arbitrales en A.M. STUYT *Survey of International arbitrations 1784-1989*, Dordrecht, 1990, n°435, p. 451 y n° 437, p. 453 respectivamente.

¹⁷ Órgano arbitral creado en aplicación del Acuerdo de Dakar de 12 de marzo de 1985. El laudo arbitral de 31 de julio de 1989 puede consultarse en RGDIJ, 1990, pp. 204-277.

de los casi veinte años como miembro de esta institución¹⁸. En cuanto al contenido de las mismas, nos vamos a centrar en las relativas a delimitaciones y en concreto las marítimas. Entendemos que el esfuerzo realizado por las partes en la controversia en cuestión -Estados Unidos y Canadá-, para la continuidad de A. GROS en la formación elegida -a pesar de carecer de la condición de miembro de la Corte-, responde más que a una regionalización occidentalista de la composición de la Sala, a las opiniones que respecto del objeto de la controversia había vertido en asuntos anteriores de similares características.

En la opinión disidente formulada en la Sentencia de la *Plataforma Continental Túnez/Libia*¹⁹ explica el sentido negativo de su voto. Siente no poder compartir la opinión mayoritaria de la Corte por entender que la argumentación utilizada carece de una fundamentación jurídica. Este Juez estima que la solución de esta controversia se materializa en una Sentencia de carácter transaccional, o conciliatorio y no en la aplicación de normas jurídicas internacionales. Partidario del criterio de la equidistancia + circunstancias

¹⁸ Vid. la opinión individual a la Sentencia de 5 de febrero de 1970 en el asunto de la *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited* -nueva demanda de 1962-, en CIJ Recueil 1970, pp. 267-285; a la Ordenanza de 12 de julio de 1973, acerca del mantenimiento en vigor de las medidas cautelares en el asunto de la *Competencia en materia de pesquerías* (Reino Unido c. Islandia y RFA c. Islandia) en CIJ Recueil 1973, pp. 306 y ss. y 317 y ss. respectivamente; a la Sentencia de 20 de diciembre de 1974 en el asunto de los *Ensayos Nucleares* (Australia c. Francia y Nueva Zelanda c. Francia), en CIJ Recueil 1974, pp. 254 y ss. y 480 y ss.; a la Opinión consultiva de 20 de diciembre de 1980 sobre la *interpretación del Acuerdo de 25 de marzo de 1951 entre la OMS y Egipto*, en CIJ Recueil 1980, pp. 73 y ss. Opinión disidente a la Opinión consultiva de 12 de julio de 1973 en la *demanda de reforma de la Sentencia nº158 del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas*, en CIJ Recueil 1973, pp. 252 y ss.; a la Sentencia de 25 de julio de 1974, en el asunto de la *competencia en materia de pesquerías* (Reino Unido c. Islandia y RFA c. Islandia) en CIJ Recueil 1974, pp. 126 y ss. y 234 y ss.; a la Sentencia de 24 de febrero de 1982 en el asunto de la *Plataforma Continental Túnez/Libia* en CIJ Recueil 1982, pp. 143 y ss.. Las declaraciones formuladas a la Ordenanza de 12 de julio de 1973, respecto de la demanda de Fijí de intervención en el asunto de los *Ensayos Nucleares* (Australia c. Francia y Nueva Zelanda c. Francia), en CIJ Recueil 1973, pp. 322 y 326 respectivamente; a la Opinión consultiva de 16 de octubre de 1975 acerca del *Sáhara Occidental*, en CIJ Recueil 1975, p. 69 y ss.; a la Sentencia de 19 de diciembre de 1978 en el asunto de la *Plataforma Continental del Mar Egeo*, en CIJ Recueil 1978, p. 49.

¹⁹ Vid. Sentencia de 24 de febrero de 1982, en CIJ Recueil 1982, pp. 143 y ss.

especiales, tal y como se puede comprobar en la jurisprudencia de la CIJ²⁰, y en la arbitral²¹, así como en el art. 6 de la convención de Ginebra sobre Plataforma Continental de 29 de abril de 1958, como regla subsidiaria al acuerdo de las partes²².

La declaración formulada en el asunto de la *Plataforma Continental del Mar Egeo* únicamente expresa su conformidad con el resultado adoptado por la Corte y el desacuerdo con los motivos que condujeron a la CIJ hacia la solución adoptada, excusando formular el fundamento de su opinión por entender que el carácter particular del asunto concreto parece prohibirlo²³.

Hermann MOSLER (RFA) procede de la carrera universitaria, habiendo ejercido como docente en distintas universidades alemanas²⁴ actividad que compartía con otras tareas profesionales²⁵. Es el primer y el único

²⁰ Sentencia de 20 de febrero de 1969 en el asunto de la delimitación de la *Plataforma Continental del Mar del Norte*, en CIJ Recueil 1969, pp. 7 y ss.

²¹ Sentencia de 30 de marzo de 1977 en el asunto de la *delimitación de la Plataforma Continental* entre Francia y Reino Unido, *Vid.* en ILM, 1979, p. 399.

²² Previsión esta última que desaparece en el 83 de la Convención de NN.UU. sobre Derecho del Mar de 1982, optándose por un único método aplicable: el acuerdo de las partes y en su defecto remisión a los procedimientos de arreglo pacífico de controversias previstos en la propia Convención.

²³ Esta declaración formulada a la Sentencia de 19 de diciembre de 1978, *Vid.* en CIJ Recueil 1978, p. 49.

²⁴ Profesor de Derecho Internacional Público, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en la Universidad de Bonn, de Derecho Público en la Universidad de Francfort, también en la Universidad de Heidelberg y director del Instituto Max Planck de Derecho Público comparado y de Derecho Internacional Público. Ha dictado distintas conferencias en la Academia de Derecho Internacional de La Haya -"La application du droit international public par les tribunaux nationaux" en 1957 y "The International Society as a Legal Community", en 1974- y en distintas universidades de diferentes países.

²⁵ Abogado en Bonn, Jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania durante dos años (1951-1953), Miembro del Consejo consultivo sobre el Derecho Internacional del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores (entre 1972 y 1976).

miembro de la Corte que poseyó la nacionalidad de uno de los Estados alemanes hasta 1994 en que se designó a Carl-August FLEISCHHAUER de la RFA -lógicamente puesto que es el único Estado alemán existente tras la unificación alemana producida el 3 de octubre de 1990, pero también poseía esta nacionalidad antes de esta fecha-. La CIJ nunca ha tenido un miembro del otro Estado alemán: la RDA. Fue elegido para formar parte de la composición del Tribunal desde 1976 hasta 1985, aunque se le mantuvo en funciones hasta que se dictó sentencia en el asunto de la *Plataforma Continental* (Libia/Malta). Antes de ser designado como tal, había sido nombrado por la RFA Juez *ad hoc* en el asunto de la *Plataforma Continental del Mar del Norte*²⁶.

Durante los nueve años que formó parte de la Corte, elaboró algunas opiniones²⁷. Formó parte de la Sala que conoció de la *delimitación de la frontera marítima en el Golfo de Maine*²⁸.

Stephen M. SCHWEBEL (estadounidense) igual que los anteriores ha compaginado su actividad universitaria²⁹ con el ejercicio

²⁶ Vid. Sentencia de 20 de febrero de 1969 en CIJ Recueil 1969, pp. 7 y ss.

²⁷ Formuló opiniones individuales a la Opinión consultiva de 20 de diciembre de 1980 en el asunto de la *interpretación del acuerdo de 25 de mayo de 1951 entre la OMS y Egipto*, vid. en CIJ Recueil 1980, p. 125 y ss.; a la Opinión consultiva de 20 de julio de 1982 sobre la *demande de revisión de la Sentencia n°273 del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas*, vid. en CIJ Recueil 1982, p. 379 y ss. Una Opinión conjuntamente formulada con J.M. RUDA, R.Y. JENNINGS, R. AGO y G. DE LACHARRIERE la Ordenanza de 4 de octubre de 1984, en el asunto de las *actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua*. Demanda de intervención de la República de El Salvador, vid. en CIJ Recueil 1984, p. 219 y otra en el mismo asunto, aunque en su Sentencia sobre la competencia de la Corte y admisibilidad de la demanda, *id.*, pp. 461-470. También Opiniones disidentes a la Sentencia de 3 de junio de 1985, en el asunto de la *Plataforma Continental entre Libia y Malta*, vid. en CIJ Recueil 1985, pp. 114 y ss, esta controversia posee similitudes objetivas respecto de la que nos ocupa, aunque por ser posterior a ella no nos sirve para conocer la opinión anterior de este Juez respecto de las delimitaciones de espacios marinos

²⁸ Vid. Ordenanza de 20 de enero de 1982 en CIJ Recueil 1982, p. 8.

²⁹ Profesor en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Altos Estudios Internacionales de la Universidad John Hopkins, Washington D.C, Cambridge, en la Universidad Nacional de Australia, en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra entre otros.

profesional³⁰, además de representar a los Estados Unidos en distintos foros y conferencias Internacionales³¹. Participó como agente adjunto de los Estados Unidos ante la CIJ en el asunto del *personal diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán*³². También fue Consejero de los Estados Unidos en el arbitraje de 1978 sobre el *Acuerdo franco-americano relativo a los servicios aéreos*³³ y miembro del consejo de arbitraje en el asunto de la *British Petroleum Company c. Iran and the National Iranian Oil Company* (1982)³⁴.

Es miembro de la Corte desde el 15 de enero de 1981. Ha redactado opiniones a algunas de las Sentencias adoptadas por la Corte en este período³⁵. También ha formado parte de dos Salas *ad hoc* constituidas para

³⁰ Con actividades privadas como abogado o públicas, al servicio de la Administración del Estado de su nacionalidad desempeñando diferentes tareas como Consejero Jurídico adjunto del Departamento de Estado, Consejero en Derecho Internacional, Asistente Especial del Secretario de Estado Adjunto para las cuestiones relativas a las Organizaciones Internacionales, entre otros.

³¹ Consejero Jurídico de los Estados Unidos y Representante suplente en la Sexta Comisión durante múltiples sesiones de la AGNU, representante de los Estados Unidos y Presidente de la delegación de Estados Unidos en el Comité Especial de principios de Derecho Internacional sobre las relaciones amistosas y la cooperación entre los Estados, en el Comité especial para la definición de la agresión y en el Grupo de Trabajo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el desarrollo encargado de elaborar la carta de los derechos y deberes económicos de los Estados.

³² Vid. Sentencia de 24 de mayo en CIJ Recueil 1980, p. 4.

³³ Vid. en AJIL, 1980, pp. 785-807 y en AFDI, 1979, pp. 314-337.

³⁴ Vid. en CIJ Annuaire 1981-1982, p. 31.

³⁵ Opiniones individuales a la Sentencia de 14 de abril de 1981 en el asunto de la *Plataforma Continental entre Túnez y Libia* -demanda de intervención de Malta-, vid. en CIJ Recueil 1981, pp. 35 y ss.; a la Sentencia de 24 de febrero de 1982 en el asunto de la *Plataforma Continental entre Túnez y Libia*, vid. en CIJ Recueil 1982, p. 99; a la Sentencia de 10 de diciembre de 1985, en el asunto de la demanda en revisión e interpretación de la Sentencia de 24 de febrero de 1982 en el asunto de la *Plataforma Continental entre Túnez y Libia*, vid. en CIJ Recueil 1985, p. 246; a la Opinión Consultiva de 26 de abril de 1988, acerca de *la aplicabilidad de la obligación de arbitraje en virtud de la sección 21 del acuerdo de 26 de junio de 1947, relativo a la sede de las Naciones Unidas*, vid. en CIJ Recueil 1988, pp. 42 y ss. Opiniones disidentes a la Opinión Consultiva de 20 de julio de 1982, sobre la *demanda de revisión de la Sentencia n°273 del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas*, vid. en CIJ Recueil 1982, pp. 454 y ss.; a la Sentencia de 21 de marzo de 1984, en el asunto de la *Plataforma Continental entre Libia y Malta* -demanda italiana de intervención-, vid. en CIJ Recueil 1984, pp. 131 y ss.; a la ordenanza de 4 de octubre de 1984, en el asunto de las *actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* -declaración salvadoreña de intervención-, vid. en CIJ Recueil 1984, pp. 223 y ss.; a la Sentencia en el asunto de las *actividades militares y*

conocer de asuntos en los que eran parte los Estados Unidos: el de la delimitación de la frontera marítima en el Golfo de Maine³⁶ y posteriormente de la Elettronica Sicula S.p.A -ELSI-³⁷, en la actualidad y desde febrero de 1994 es Vicepresidente de la CIJ.

La pertenencia del Prof. S.CHWEBEL a estas Salas responde a su nacionalidad, en este supuesto estamos ante un Juez nacional estadounidense³⁸ que formó parte de las dos Salas constituidas para conocer de controversias en las que el Estado de su nacionalidad era parte.

Maxwell COHEN, fue el Juez designado *ad hoc* por Canadá, país cuya nacionalidad ostenta. Procede de la carrera universitaria, habiendo desempeñado puestos docentes en Canadá³⁹. Además de lo anterior, ha sido director del Instituto de derecho aereo y espacial y ocupado diversos cargos

paramilitares en y contra Nicaragua -competencia y admisibilidad de la demanda- de 26 de noviembre de 1984, *vid.* en CIJ Recueil 1984, pp. 558-637; a la Sentencia de 3 de junio de 1985 en el *asunto de la Plataforma Continental entre Libia y Malta*, *vid.* en CIJ Recueil 1985, pp. 172 y ss.; a la Sentencia de 27 de junio de 1986, en el *asunto de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* -londo-, *vid.* en CIJ Recueil 1986, pp. 259 y ss.; a la Opinión consultiva de 27 de mayo de 1987 acerca de la *demanda de revisión de la Sentencia n° 333 del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas*, *vid.* en CIJ Recueil 1987, pp. 110 y ss.; a la Sentencia de 26 de junio de 1992 en el *asunto de ciertas tierras con fosfatos en Nauru* (Nauru c. Australia) excepciones preliminares. *Vid.* en CIJ Recueil 1992, pp. 329 y ss.

³⁶ *Vid.* Ordenanza de 20 de enero de 1982, en CIJ Recueil 1982, p.8.

³⁷ *Vid.* Ordenanza de 2 de marzo de 1987 en CIJ Recueil 1987, p. 4.

³⁸ Juez nacional estadounidense de reconocida proximidad a las opiniones oficiales de este Estado, si tenemos en cuenta el desarrollo de su carrera profesional hasta que fue nombrado miembro de la Corte. *Vid.* en CIJ Annuaire 1981-1982, p. 30.

³⁹ En las Universidades McGill, Ottawa y Carleton. Además de ser Presidente de la sección canadiense y de la de Montreal de la Asociación de Derecho Internacional, dictó un curso en la Academia de Derecho Internacional de La Haya en 1975: "The Regime of Boundary Waters: The Canadian-United States Experience".

relacionados con las Naciones Unidas, compatibilizando las tareas anteriores con la de delegado de su país en esta Organización Internacional⁴⁰.

⁴⁰ Vid. *Annuaire* 1981-82, pp. 39-40.

Miembros de la Sala encargada del *asunto de la diferencia fronteriza* (Burkina Faso-República de Mali): M. Bedjaoui (Presidente), M. Lachs, J.M. Ruda, F. Luchaire (Juez designado *ad hoc* por Burkina Faso) y G. Abi-Saab (por Mali).

Mohamed BEDJAOU (argelino), realizó sus estudios universitarios en Francia, siendo nombrado en 1958 Consejero Jurídico del Gobierno provisional de la República argelina. Desde entonces hasta 1970 desempeñó diferentes puestos en la administración, llegando a ser Ministro de justicia durante seis años. Posteriormente su trabajo se desarrolla en el ámbito internacional trabajando en distintas áreas en las Naciones Unidas, en unas ocasiones como representante de Argelia¹ y en otras no².

Fue designado miembro de la Corte en el año 1982, decimo tercer período, poco después de esta elección formó parte de la composición de la Sala *ad hoc* constituida para conocer de la diferencia fronteriza entre Burkina

¹ Participó en diferentes sesiones de la AGNU como miembro, Jefe adjunto o Jefe de la delegación argelina, Jefe de la delegación argelina en la Conferencia de las NN.UU. sobre la sucesión de Estados en materia de Tratados y en la Conferencia de NN.UU. sobre el Derecho del Mar. No sólo en esta Organización, sino también había tomado parte en distintas reuniones ministeriales o conferencias de Jefes de Estado y de Gobierno de los países no alineados como miembro, Jefe adjunto o Jefe de la delegación argelina.

² Copresidente de la Comisión de encuesta de las Naciones Unidas en Irán. Vicepresidente del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, Presidente del Grupo de los setenta y siete, experto de las Naciones Unidas para la Conferencia de Viena sobre la Sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas del Estado (1983), también miembro de la Comisión de Derecho Internacional, entre otras de las funciones desarrolladas en el seno de esta Organización.

Faso y la República de Mali³. Siendo nombrado presidente de la misma, aunque por orden de precedencia no le correspondía el ejercicio del cargo indicado, sin embargo, se procedió de esta manera debido a la importante actuación desarrollada por Argelia en el conflicto cuyo conocimiento se sometía a la citada formación⁴. Compaginó sus tareas como miembro de la Corte con las derivadas de su participación en los Tribunales arbitrales formados para las delimitaciones de las fronteras marítimas entre Guinea y Guinea Bissau y Guinea Bissau y Senegal⁵.

Antes de ser nombrado miembro de esta Sala había redactado una opinión individual en el asunto de las *actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua*⁶ y más tarde una opinión disidente en el relativo a unas *cuestiones de interpretación y aplicación de la Convención de Montreal de 1971 sobre el incidente aéreo de Lockerbie* -solicitud de medidas cautelares- Libia c. el Reino Unido⁷.

³ Vid. Ordenanza de 3 de abril de 1985, en CIJ Recueil 1985, pp.6-8.

⁴ Actividad desarrollada en el seno de una organización bien conocida por este jurista argelino: la Organización de la Unidad Africana, por cuanto había participado en diferentes sesiones del Consejo de Ministros y en múltiples reuniones desarrolladas por la misma.

⁵ Fue el único miembro de los dos tribunales arbitrales que repitió en esta última formación, ya que el primer órgano arbitral lo componían M. LACHS (Presidente) K. MBAYE y M. BEDJAQUI y el segundo J.A. BARBERIS (Presidente), A. GROS y M. BEDJAQUI. Estos tribunales arbitrales se constituyeron en aplicación de los acuerdos de Bissau de 18 de febrero de 1983 -diferencia entre Guinea y Guinea-Bissau- y de Dakar de 12 de marzo de 1985 -diferencia entre Guinea Bissau y Senegal y dictaron sus laudos respectivamente el 14 de febrero de 1985 -Vid. en ILM 1986, p. 251- y el 31 de julio de 1989 -puede consultarse en RGDIP, 1990, pp. 204 y ss.-.

⁶ Concretamente a la Ordenanza de 4 de octubre de 1984, respecto de la declaración salvadoreña de intervención. Vid. en CIJ Recueil 1984, p.222, en ella se muestra contrario a la negativa de la Corte a conceder la audiencia solicitada por El Salvador, una vez rechazada la declaración de intervención ex art. 63 del Estatuto.

⁷ Vid. Ordenanza de 14 de abril de 1992, en CIJ Recueil 1992, pp. 33 y ss.

Manfred LACHS (polaco). Su trayectoria profesional antes de su acceso a la CIJ tuvo tres facetas: una como profesor en la Universidad de Varsovia y desde 1990 en Groningue -Holanda-; otra en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia⁸; y, una tercera en Naciones Unidas⁹. Fue elegido miembro de la Corte en su octavo período, en 1967 y Presidente de esta institución en el trienio 1970-1973, ha permanecido en la Corte hasta su fallecimiento en enero de 1993.

Durante todos estos años que ha formado parte de la CIJ, ha tenido oportunidad de participar en múltiples asuntos y de elaborar declaraciones¹⁰ y opiniones¹¹ tanto respecto de las Sentencias como de las Opiniones consultivas

⁸ Como Director del departamento de asuntos jurídicos y de Tratados, Consejero Jurídico -y Embajador- y Ministro Plenipotenciario.

⁹ Como miembro de la delegación polaca en la Comisión de las Naciones Unidas para los crímenes de guerra en la inmediata segunda postguerra mundial, Consejero jurídico de la delegación polaca en la Conferencia de Paz de París y representante de Polonia en el Comité de las NN.UU. sobre el desarme. También ha sido miembro de la Comisión de Derecho Internacional, Presidente de la Subcomisión de la Comisión de Derecho Internacional sobre la Sucesión de Estados y de gobiernos, miembro del Comité consultivo de la función pública internacional de las Naciones Unidas, miembro del Comité especial de los procedimientos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y desarrollo. Miembro de la Comisión independiente sobre las cuestiones humanitarias internacionales de Ginebra, entre otras.

¹⁰ Insertó declaraciones respecto de la Sentencia de 5 de febrero de 1970, en el asunto de la *Barcelona Traction, Light and Power Company Limited* (nueva demanda de 1962), *vid.* en CIJ Recueil 1970, pp. 52-53; a la Sentencia de 18 de agosto de 1972 en el asunto de la *apelación acerca de la competencia del Consejo de la OACI* (India c. Paquistán), *vid.* en CIJ Recueil 1972, pp. 72 y ss.; a la Sentencia de 25 de julio de 1974, en el asunto de la *competencia en materia de pesquerías* (Reino Unido c. Islandia y RFA c. Islandia) -fondo-, *vid.* en CIJ Recueil 1974, pp. 35 y 206 respectivamente; a la Sentencia de 20 de diciembre de 1974, en el asunto de los *Ensayos nucleares* (Australia c. Francia), *vid.* en CIJ Recueil 1974, p. 253; a la Opinión Consultiva de 27 de mayo de 1987, en el asunto de la *demanda de revisión de la Sentencia n° 333 del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas*, *vid.* en CIJ Recueil 1987, pp. 74-75.

¹¹ Formuló opiniones disidentes a la Sentencia de 20 de febrero de 1969 en el *Asunto de la Plataforma Continental del Mar del Norte* (RFA c. Dinamarca y Holanda), *vid.* en CIJ Recueil 1969, pp. 219 y ss.; a la Opinión Consultiva de 20 de julio de 1982, sobre la *demanda de revisión de la Sentencia n° 273 del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas*, *vid.* en CIJ Recueil 1982, pp. 411 y ss. Opiniones individuales a la Sentencia de 19 de diciembre de 1978 en el asunto de la *Plataforma Continental del Mar Egeo*, *vid.* en CIJ Recueil 1978, pp. 50 y ss.; a la Sentencia de 24 de mayo de 1980, en el asunto relativo al *personal diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán* (Estados Unidos c. Irán), *vid.* en CIJ Recueil 1980, pp. 47 y ss.; a la Opinión Consultiva de 20 de diciembre de 1980, en el asunto de la *interpretación del acuerdo de 25 de marzo de 1951 entre la OMS y Egipto*, *vid.* en CIJ Recueil 1980, pp. 108 y ss.; a la Sentencia de 27 de junio de 1986, en el asunto de las *actividades militares y paramilitares en y contra*

emitidas por este Tribunal. Compaginó sus tareas como miembro de la Corte -en Pleno- con la derivada de su elección como Presidente del Tribunal arbitral que conoció de la *delimitación de la frontera marítima* entre Guinea y Guinea Bissau¹².

Formó parte de la Sala que conoció de la diferencia fronteriza entre Burkina Faso y la República de Mali¹³. Le correspondía -teniendo en cuenta el orden de precedencia- la Presidencia de la Sala, sin embargo, debido a la especial postura mantenida por Argelia en el conflicto analizado, se optó por designar a M. BEDJAOUI, de esta nacionalidad, como Presidente de esta formación, en lugar de respetar el criterio tenido en cuenta hasta el momento en las mismas.

Ninguna Sentencia a la que añadió opiniones individuales o disidentes se encontraba materialmente relacionada con el objeto de la controversia sometida a conocimiento de la Sala en cuya composición participó. Por tanto cabe concluir que la preocupación de Estados partes en ella era la de no provocar críticas semejantes a las de la Sala que conoció del asunto del Golfo de Maine, persiguiendo por tanto una legitimidad política de la Sala en cuestión. Objetivo éste conseguido mediante la aplicación del art. 9 del Estatuto a la formación concreta.

Nicaragua (fondo), *vid.* CIJ Recueil, 1986, pp. 158 y ss.; a la Sentencia de 12 de noviembre de 1991, en el asunto relativo a la *Sentencia arbitral de 31 de julio de 1989* (Guinea Bissau c. Senegal), *vid.* en CIJ Recueil 1991, pp. 92 y ss.; a la Ordenanza de 14 de abril de 1992, en el asunto relativo a unas *cuestiones de interpretación y aplicación de la Convención de Montreal de 1971 sobre el incidente aéreo de Lockerbie* -solicitud de medidas cautelares- (Libia c. el Reino Unido), *vid.* en CIJ Recueil 1992, p. 26-27.

¹² Que dictó su laudo arbitral el 14 de febrero de 1985, *Vid.* en ILM, 1986, p. 251.

¹³ *Vid.* Ordenanza de 3 de abril de 1985, en CIJ Recueil 1985, pp.6-8.

José María RUDA es la segunda ocasión en que un jurista argentino es designado para formar parte de la Corte¹⁴. Su carrera profesional hasta su elección como Juez de la CIJ estuvo estrechamente relacionada con las NN.UU.¹⁵, aunque posteriormente -a partir de la caída del General Perón- compartida con la actividad docente y diplomática en Argentina¹⁶. J.M. RUDA fue nombrado miembro de la CIJ en 1973, permaneciendo en esta formación hasta 1991. Durante este período formuló opiniones individuales¹⁷, conjuntas¹⁸ y disidentes¹⁹ a los fallos y dictámenes consultivos de la Corte.

Había sido elegido para formar parte de la composición de la Sala que conoció del asunto de la *delimitación marítima en el Golfo de Maine*, aunque en la

¹⁴ El primero fue L.M. MORENO QUINTANA, miembro de esta institución entre los años 1955 y 1964.

¹⁵ De hecho su carrera profesional se inicia en 1950 como funcionario de las NN.UU. en Nueva York en el seno de la División de la Codificación de Derecho Internacional de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Organización de las NN.UU., relator de la sexta Comisión durante la decimoseptima sesión de la AGNU y presidente de esta Comisión durante la decimoctava sesión, miembro y presidente de la CDI.

¹⁶ Fue Consejero de primera clase de la Embajada argentina en La Paz, Jefe del gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores y culto, Asesor Jurídico de este Ministerio y Subsecretario del mismo, Representante permanente en las Naciones Unidas, Representante de Argentina en las Sesiones de la AGNU desde 1959 a 1969, Jefe de la delegación Argentina en la AGNU, Jefe de la delegación en la Comisión mixta argentino-boliviana, representante de Argentina en múltiples foros internacionales.

¹⁷ Opiniones individuales a las Sentencias de 10 de diciembre de 1985, acerca de la demanda de revisión e interpretación de la Sentencia de 24 de febrero de 1982, en el asunto de la *Plataforma Continental entre Túnez y Libia* (Túnez c. Libia), *vid.* en CIJ Recueil 1985, pp. 232 y ss. y de 27 de junio de 1986, en el asunto de las *actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua -fondo-*, *vid.* en CIJ Recueil 1986, pp. 174 y ss. y a la Opinión Consultiva de 20 de julio de 1982, acerca de la *demanda de revisión de la Sentencia n° 273 del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas*, *vid.* en CIJ Recueil 1982, pp. 373 y ss.

¹⁸ Opiniones conjuntas a las Sentencias de 25 de julio de 1974, en el asunto de la *competencia en materia de pesquerías* (Reino Unido c. Islandia y RFA c. Islandia) *vid.* en CIJ Recueil 1974, pp. 45 y ss. y 217 y ss. respectivamente y de 3 de junio de 1985 en el asunto de la *Plataforma continental entre Libia y Malta*, *vid.* en CIJ Recueil 1985, pp. 76 y ss.; a la Ordenanza de 4 de octubre de 1984, acerca de la declaración de intervención de El Salvador en el asunto de las *actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua*, *vid.* en CIJ Recueil 1984, p. 219.

¹⁹ A las Opiniones Consultivas de 16 de octubre de 1975, en el asunto del *Sáhara Occidental*, *vid.* en CIJ Recueil 1975, pp. 175-176 y de 20 de diciembre de 1980, en el asunto de la *interpretación del acuerdo de 25 de marzo de 1951 entre la OMS y Egipto*, *vid.* en CIJ Recueil 1980, pp. 114 y ss.

misma Ordenanza de constitución de esta Sala se señala la petición del Presidente de la Corte para que cediera su puesto al Juez designado *ad hoc* por Canadá: Maxwell COHEN²⁰. Posteriormente, fue designado para las Salas que conocieron de los asuntos de la diferencia fronteriza entre Burkina Faso y la República de Mali²¹ y por último de la Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-²². Por tanto, se puede afirmar que en la única Sala en cuya composición no se encontró fué en la de la diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima entre Honduras y El Salvador²³.

Una vez cumplido su mandato como miembro ordinario de la Corte no abandonó su actividad jurisdiccional internacional y fue miembro y Presidente del Tribunal de reclamaciones Estados Unidos /Irán, del Tribunal administrativo de la O.I.T., del Comité de expertos de la O.I.T., de la Comisión de arbitraje de la Conferencia Internacional para la antigua Yugoslavia, Miembro del Centro de conciliadores y árbitros del Centro Internacional para el arreglo de diferencias relativas a inversiones y también participó como juez *ad hoc* designado por Qatar en el asunto de la *Delimitación marítima y cuestiones territoriales entre Qatar y Bahreïn* -Qatar c. Bahreïn-, falleció en el curso del procedimiento y fue cubierta su vacante por el español S. TORRES BERNARDEZ, quien casi treinta años antes (en 1955) le había sustituido en la División de Codificación del Derecho Internacional de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Secretariado de las NN.UU..

²⁰ Vid. Ordenanza de 20 de enero de 1982, en CIJ Recueil 1982, p.8.

²¹ Vid. Ordenanza de 3 de abril de 1985, en CIJ Recueil 1985, pp. 6-8

²² Vid. Ordenanza de 2 de marzo de 1987, en CIJ Recueil 1987, p. 4

²³ Vid. Ordenanza de 8 de mayo de 1987, en CIJ Recueil 1987, p. 12.

François LUCHAIRE, fue designado Juez *ad hoc* por Burkina Faso. Este Juez francés había sido profesor de Derecho, miembro del Consejo constitucional francés durante nueve años, desde 1965 hasta 1974 y también del Consejo económico y social de la República desde 1984²⁴.

Georges Michel ABI-SAAB. Este profesor de nacionalidad egipcia, fue el elegido por la República de Mali como Juez *ad hoc*. La formación de G.ABI-SAAB se caracteriza por su universalidad, ya que aunque se licenció en Derecho en la Universidad de El Cairo, continuó sus estudios tanto en Europa -Francia y concretamente en París- como en el continente americano -Estados Unidos (Michigan y Harvard)-. Además, obtuvo en 1964 el Diploma de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Es miembro del Instituto de Derecho Internacional. Antes de ser designado para este asunto había sido delegado de su país en diversos foros internacionales²⁵ y abogado de Túnez en el asunto de la *Plataforma Continental* entre Túnez y Libia²⁶. Después fue Juez *ad hoc* designado por Camerún en la *delimitación de la frontera terrestre y marítima entre Camerún y Nigeria* (Camerún c. Nigeria)

²⁴ CIJ Annuaire 1986-87, p. 39.

²⁵ CIJ Annuaire 1986-87, p. 40

²⁶ Vid. la Sentencia de 24 de febrero de 1982, en CIJ Recueil 1982, p.19

Miembros de la Sala encargada del *asunto de la Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-* (Estados Unidos c. Italia): N. Singh (Presidente, en 1989 sustituido por J.M. Ruda), R. Ago, Sir R. Y. Jennings, S.Oda y S.M. Schwebel.

N. SINGH, nació en la India y realizó sus estudios en su país de origen -Agra, Calcuta, Bihar, Delhi, Nepal-, Reino Unido -Londres, Cambridge- y Rusia -Moscú-. Fue miembro de la Corte desde 1973 hasta 1988, durante los tres últimos años había sido Presidente del Tribunal. Antes de formar parte de la CIJ había participado en el asunto de la *apelación sobre la competencia del Consejo de la OACI* (India c. Pakistán)¹ como Juez designado *ad hoc* por el país del que era nacional². Cuando se constituyó la Salas que conoció de la *Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-* N. SINGH era Presidente de la Corte, por lo que asumió este cargo en la Salas, fue la primera ocasión en la que se aplicó a la formación de las Salas el art.18.2 del Reglamento. Murió en el curso del procedimiento siendo sustituido por el entonces Presidente de la Corte J.M.

¹ Sentencia de 6 de febrero de 1973, en CIJ Recueil 1973, p. 46 y ss.

² Antes de eso trabajó en la función pública India a la que había accedido en 1937 llegando a ser Secretario del Presidente de la República de la India entre 1966 y 1972, Consejero constitucional del Gobierno de Bhoutan, Juez de Paz, Comisario Jefe de las elecciones del Gobierno de la India. Dirigió la delegación India en numerosas negociaciones bilaterales y conferencias internacionales, fue representante de su país en distintos foros internacionales. También fue presidente de la Conferencia Marítima de la O.I.T., Presidente del Grupo de expertos sobre navegación de la Comisión económica para Asia y el extremo-Oriente, Presidente de la Asamblea de la Organización intergubernamental consultiva de la navegación marítima, entre otros. Tareas que compaginó con las docentes en las Universidades de Madrás, Delhi, Bombay, Tribhuvan (Nepal) y Goa.

RUDA. A su muerte era miembro de la Corte por su participación en esta Sala, ya que su mandato como tal en el Pleno había expirado en febrero de 1988.

Antes de ser nombrado para formar parte de esta Sala había formulado declaraciones³ y opiniones individuales⁴. Era el otro especialista en Derecho del mar que existía en la formación de la Corte en el momento de constitución de la Sala del Golfo de Maine, y cuya ausencia de la misma provocó serias críticas, igual que ocurriera con la de S.ODA⁵.

Sir Robert Y. JENNINGS, (Reino Unido) fue miembro de la Corte desde el período décimotercero -1982-, hasta 1995, año en que renunció, siendo sustituido el 12 de julio de 1995 por R. HIGGINS, la primera mujer que forma parte de la Corte Internacional de Justicia. Antes de su elección como tal fue consejero de la República de Túnez en el asunto de la *delimitación de la Plataforma Continental* entre Túnez y Libia⁶. Además había participado en calidad de tal en asuntos arbitrales como el de *Río Encuentros, Canal de Beagle* (por Argentina), *delimitación de la frontera entre Dubai y Sharjah* (por este último

³ A la Sentencia de 25 de julio de 1974, en *el asunto de la competencia en materia de pesquerías -fondo-* (RFA c. Islandia y Reino Unido c. Islandia), ver en CIJ Recueil 1974, pp. 38-44 y 211-216, a la Opinión Consultiva de 16 de octubre de 1975, en *el asunto del Sahara Occidental*, en CIJ Recueil 1975, pp. 78-82, a la Ordenanza de 22 de junio de 1973, acerca de *la demanda de medidas cautelares en el asunto de los ensayos nucleares* (Australia c. Francia y Nueva Zelanda c. Australia), en CIJ Recueil 1973, pp. 108-110 y 145-146.

⁴ A la Sentencia de *los prisioneros de guerra paquistaníes*, en CIJ Recueil 1973, p. 332-333; a la Sentencia de 19 de diciembre de 1978 en *el asunto de la Plataforma Continental del Mar Egeo* (Grecia c. Turquía), en CIJ Recueil 1978, pp. 46-48; a la Opinión Consultiva acerca de *la demanda de reforma de la Sentencia n° 273 del Tribunal Administrativo de Naciones Unidas*, en CIJ Recueil 1982, p. 368-372.

⁵ Tiene varias obras escritas sobre este tema, aquí solo resaltaremos las dos siguientes: *International Conventions of Merchant Shipping*, Londres, 2ªed., 1973; N. SINGH y R. COLINAUX *Shipowners*, Londres 1969.

⁶ Vid. Sentencia de 24 de febrero de 1982, en CIJ Recueil 1982, p. 19.

Estado), *delimitación de la plataforma continental entre Francia y el Reino Unido*⁷.

Desde su designación como miembro de la Corte, ha redactado algunas opiniones conjuntas⁸ y disidentes⁹.

Fue elegido para formar parte de la composición de las Salas constituidas para conocer de los asuntos de la *Elettronica S.p.A. -ELSI*¹⁰ y posteriormente de la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador¹¹.

Sir R.Y.JENNINGS era partidario de la admisión de la demanda italiana de intervención en el asunto de la *Plataforma Continental* entre Libia y Malta, por entender que aunque la competencia de la Corte tiene fundamento voluntario, al tercero no puede negársele la posibilidad de proteger sus intereses jurídicos, y ello aún en ausencia de vínculos jurisdiccionales o consentimiento de las partes. Lo anterior lo entiende con una salvedad: que el

⁷ Vid. en CIJ *Annuaire* 1982-1983, p. 30.

⁸ Una Opinión conjuntamente formulada con J.M. RUDA, H. MOSLER, R. AGO y G. DE LACHARRIÈRE la Ordenanza de 4 de octubre de 1984, en el asunto de las *actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua. Demanda de intervención de la Republica de El Salvador*, vid. en CIJ *Recueil* 1984, p. 219.

⁹ A la Sentencia de 21 de marzo de 1984 acerca de la demanda italiana de intervención en el asunto de la *Plataforma Continental* entre Libia y Malta, vid. en CIJ *Recueil* 1984, pp.148 y ss.; a la Sentencia de 27 de junio de 1986, en el asunto de las *actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* -Iondo-, vid. en CIJ *Recueil* 1986, pp. 528 y ss.; a la Opinión Consultiva de 27 de mayo de 1987 en el asunto de la *demanda de revisión de la Sentencia n°333 del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas*, vid. en CIJ *Recueil* 1987, pp.134 y ss.; a la Sentencia de 26 de junio de 1992, en el asunto de *ciertas tierras con fosfatos en Nauru* (Nauru c. Australia). Excepciones preliminares, vid. en CIJ *Recueil* 1992, pp. 301-302.

¹⁰ Vid. Ordenanza de 2 de marzo de 1987, en CIJ *Recueil* 1987, p. 4.

¹¹ Vid. Ordenanza de 8 de mayo de 1987, en CIJ *Recueil* 1987, p. 12.

tercer Estado desee introducir una nueva acción contra una o las dos partes principales¹².

Shigeru ODA, es el segundo miembro japonés de la CIJ en el tiempo, el primer Magistrado de esta nacionalidad con que contó la Corte fue K. TANAKA, durante los años 1961-1970.

S. ODA antes de resultar elegido para formar parte de la composición de la Corte en 1976 (undécimo período), había actuado como consejero de la RFA en el asunto relativo a la *Plataforma continental del Mar del Norte*¹³.

Durante el período en que ha formado parte de la Corte ha elaborado opiniones individuales¹⁴ y disidentes¹⁵, así como alguna declaración¹⁶ a las Sentencias y Opiniones Consultivas emitidas por el Tribunal.

¹² En su Opinión disidente a la Sentencia de 26 de junio de 1992, en el asunto de ciertas tierras con fosfatos en Nauru. Excepciones preliminares (Nauru c. Australia) -en CIJ Recueil 1992, p. 240-, se muestra disconforme con el rechazo por la Corte de la excepción preliminar australiana por entender que había otros dos Estados cuyos intereses jurídicos se verían afectados por la decisión que adoptara la Corte sobre el fondo del asunto: Nueva Zelanda y el Reino Unido, ello es así por cuanto el Acuerdo de Tutela sobre Nauru de 1947 les confería a los tres Estados la administración de este territorio. Entiende por tanto que las obligaciones de las que deriva la responsabilidad imputada por Nauru a Australia son obligaciones solidarias, por lo que no cabe entender que este último Estado deba responder por la totalidad de la reparación. La Excepción Preliminar australiana cuestionaba ser el único demandado por unos hechos cuya responsabilidad solidaria le correspondía conjuntamente con Nueva Zelanda y el Reino Unido.

¹³ Vid. Sentencia de 20 de febrero de 1969, en CIJ Recueil 1969, p.4.

¹⁴ Formuló opiniones individuales al dictámen consultivo de 20 de diciembre de 1980, en el asunto de la interpretación del acuerdo de 25 de marzo de 1951 entre la OMS y Egipto, vid. en CIJ Recueil 1980, pp. 131 y ss.; a la sentencia de 14 de abril de 1981, en la demanda de intervención de Malta en el asunto de la delimitación de la Plataforma Continental entre Túnez y Libia, vid. en CIJ Recueil 1981, p. 23; a la Opinión Consultiva de 20 de julio de 1982 en el asunto de la demanda de revisión de la Sentencia nº 273 del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, vid. en CIJ Recueil 1982, pp. 325 y ss.; a la Ordenanza de 4 de octubre de 1984, acerca de la declaración salvadoreña de intervención en el asunto de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, vid. en CIJ Recueil 1984, pp. 220 y ss.; a la Sentencia de 10 de diciembre de 1985, acerca de la demanda en revisión e interpretación de la Sentencia de 24 de febrero de 1982, en el asunto de la Plataforma Continental entre Túnez y Libia, vid. en CIJ Recueil 1985, pp. 236 y ss.; a las Opiniones Consultivas de 27 de mayo de 1987, sobre la demanda de revisión de la Sentencia nº 333, del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, vid. en CIJ Recueil 1987, pp. 83 y ss.; de 26 de abril de 1988, acerca de la aplicabilidad de la obligación de arbitraje en virtud de la

Formó parte de la composición de las Salas que conocieron de los asuntos de la *Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI*¹⁷ y de la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador¹⁸.

S. ODA es un experto en el nuevo derecho del mar, una de las críticas que se hicieron a la composición de la Salas que conoció del *Golfo de Maine* fue precisamente su ausencia¹⁹. Esta se debió, según avanza E. McWHINNEY a que las partes lo relacionaban con el criterio de la equidistancia aplicable a la delimitación de espacios marinos, aunque cabe también la posibilidad de que no fuera éste el motivo, sino sencillamente su depurada

sección 21 del acuerdo de 26 de junio de 1947 relativo a la sede de las Naciones Unidas, vid. en CIJ Recueil 1988, pp. 37 y ss.; de 15 de diciembre de 1989, acerca de la aplicabilidad de la sección 22 del art. VI de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, vid. en CIJ Recueil 1989, pp. 200 y ss.; a la Ordenanza de 29 de julio de 1991, en el asunto de la demanda de medidas cautelares en el asunto del paso por el Gran Belt (Finlandia c. Dinamarca), vid. en CIJ Recueil 1991, pp. 25 y ss.; a la Sentencia de 12 de noviembre de 1991, en el asunto relativo al laudo arbitral de 31 de julio de 1989 (Guinea Bissau c. Senegal), vid. en CIJ Recueil 1991, pp. 81 y ss.

¹⁵ A las Sentencias de 24 de febrero de 1982, en el asunto de la *Plataforma continental* entre Túnez y Libia, *vid. en CIJ Recueil 1982, pp. 157 y ss.*; de 3 de junio de 1985, en el asunto de la *Plataforma continental* entre Libia y Malta, *vid. en CIJ Recueil 1985, pp. 123 y ss.*; de 27 de junio de 1986, en el asunto de las *actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* -fondo-, *vid. en CIJ Recueil 1986, pp. 212 y ss.*; de 26 de junio de 1992, en el asunto de *ciertas tierras con fosfatos en Nauru* (Nauru c. Australia) -excepciones preliminares-, *vid. en CIJ Recueil 1992, pp. 303 y ss.*

¹⁶ Declaración a la Ordenanza de 14 de abril de 1982, en el asunto relativo a unas *cuestiones de interpretación y aplicación de la Convención de Montreal de 1971, sobre el incidente aéreo de Lockerbie* -solicitud de Medidas Cautelares- (Libia c. el Reino Unido), *vid. en CIJ Recueil 1992, pp. 17-19.*

¹⁷ *Vid. Ordenanza de 2 de marzo de 1987 en CIJ Recueil 1987, p. 4*

¹⁸ *Vid. Ordenanza de 8 de mayo de 1987, en CIJ Recueil 1987, p. 12.*

¹⁹ Entre otras publicaciones es autor de las siguientes "The Territorial Sea and Natural Resources", en ICLQ, 1955, pp. 415-425; "A Reconsideration of the Continental Shelf Doctrine", en Tulane Law Review, 1957, pp. 21-36; "El Convenio de Ginebra sobre la Plataforma Continental", en BEDI, 1959, vol. XXII, pp. 67-84; "Proposals for Revising the Convention on the Continental Shelf", en CJTL 1968, vol. 12, pp. 264-284; "International Law of the Resources of the Sea", en R.desC., 1969-II, pp. 355-484; The Law of the Sea in Our Time, -2 volúmenes-, Leyden, 1977; "The Ocean: Law and Politics", en NILR, 1978, vol. 25, pp. 149-158; "Fisheries under the United Nations Convention on the Law of the Sea", en AJIL, 1983, vol. 77, pp. 739-755; International Control of the Sea Resources, Dordrecht, 1989

técnica jurídica y sus profundos conocimientos en la materia, aspectos en los que ni Estados Unidos ni Canadá, al parecer, estaban muy interesadas²⁰.

A favor del criterio de la equidistancia para la delimitación de la Plataforma Continental cuando las costas estuvieran situadas frente a frente o fueran adyacentes, se manifestó en su extensa opinión disidente a la Sentencia de 24 de febrero de 1982 en el asunto de la *Plataforma Continental* entre Túnez y Libia²¹, también en la de 3 de junio de 1985, en el asunto de la *Plataforma Continental* entre Libia y Malta²².

Ha sido el único miembro de la Corte que ha participado en los tres procedimientos de intervención suscitados hasta el momento. En la primera ocasión -Sentencia 14 de abril de 1981 sobre la *demanda de Malta de intervención en el asunto de la Plataforma Continental* entre Túnez y Libia-, formuló una opinión individual, por entender que la Corte poseía una estrecha concepción de este incidente²³. En la segunda, -Sentencia de 21 de marzo de 1984 acerca de la *demanda de Italia para intervenir en el asunto de la Plataforma Continental* entre Libia y Malta-, tras madurar los argumentos apuntados en el caso precedente, añadió un voto contrario a la decisión de la Corte y una opinión disidente. En ella indica que la existencia de un vínculo jurisdiccional entre el Estado que pretende intervenir y las partes en la controversia no es siempre necesario. Siendo el supuesto italiano un ejemplo de las hipótesis en las que la presencia del citado vínculo no debe ser

²⁰ E. McWHINNEY Judge Shigeru Oda and the Progressive Development of International Law, Dordrecht, 1993, p.54.

²¹ Vid. en CIJ Recueil 1982, pp. 157-277.

²² Señala que la regla de la equidistancia + circunstancias especiales, en cuanto norma consuetudinaria, debería ser la aplicada a la resolución del asunto en presencia, ver CIJ Recueil 1985, pp. 123-171.

²³ Vid. en CIJ Recueil 1981, pp. 23-34.

preceptivo²⁴. Por último en la Sentencia en la que se aceptaba este incidente procesal interpuesto por Nicaragua en el *asunto de la diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador, formuló una opinión individual, mostrando su desacuerdo con la limitación impuesta al Estado demandante por cuanto impedía la defensa completa de sus intereses jurídicos.

También adjunta una opinión disidente a la Sentencia de la Sala en el *asunto de la diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador, explicando el motivo por el que había emitido un voto negativo en la cuestión de la situación jurídica de los espacios marítimos del Golfo de Fonseca. En primer término subraya que el concepto de bahía con distintos Estados ribereños no existe como concepto jurídico. En segundo lugar, el concepto de bahía histórica no supone un régimen jurídico peculiar. Distanciándose, por último de la Sala en lo que a los derechos de Honduras se refiere tanto en el interior como en el exterior del Golfo de Fonseca. En el interior, por cuanto la Sala ha utilizado un criterio funcional del régimen jurídico de este espacio marino. El objeto del régimen de condominio acordado por la Salas es el de permitir la salida al Pacífico de los buques de pabellón hondureño, cuando debería haberse aplicado el art. 123 de la Convención de Jamaica sobre Derecho del mar²⁵. En cuanto a los derechos hondureños en el exterior del Golfo de Fonseca, indica que dada la situación geográfica de este Estado no le corresponde espacio alguno en el área indicada²⁶.

²⁴ Vid. en CIJ Recueil 1985, pp. 90-114.

²⁵ Ya que el art. 122 define como mar cerrado o semicerrado «un golfo, cuenca marítima o mar rodeado por dos o más Estados y comunicado con otro mar o el océano por una salida estrecha, o compuesto entera o fundamentalmente de los mares territoriales y las zonas económicas exclusivas de dos o más Estados ribereños»

²⁶ S.ODA también formuló una opinión individual a la Sentencia de la Sala *ad hoc* en el *asunto de la Elettronica Sicula S.p.A. -ELSI-* que es objeto de estudio *supra* en el Capítulo Quinto del presente trabajo.

Miembros de la Sala encargada del asunto de la diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima (Honduras-El Salvador): J. Sette-Cámara (Presidente), S. Oda, Sir R. Y. Jennings, N. Valticos (Juez designado *ad hoc* por El Salvador) y M. Virally (por Honduras, sustituido a su fallecimiento por S. Torres Bernárdez).

José SETTE-CAMARA (brasileño), fue miembro de la Corte desde 1979 (período decimosegundo) hasta 1988. Antes de formar parte de esta institución perteneció (desde 1945) al cuerpo diplomático de su país y su representante en foros internacionales¹. Ha sido Vicepresidente de la Corte en el trienio 1982-1985.

Durante su permanencia como miembro de la CIJ ha formulado opiniones individuales² y alguna disidente³.

¹ Fue Jefe de la Delegación brasileña en distintas sesiones de la AGNU y en la Conferencia de NN.UU. sobre Sucesión de Estados en materia de Tratados, Delegado en la Sexta Comisión de la AGNU, Miembro de la CDI para terminar el mandato de Gilberto Amado, siendo elegido miembro de esta Comisión una vez cumplida esta tarea, relator, vicepresidente y presidente de esta Comisión.

² A la Opinión Consultiva de 20 de diciembre de 1980, en el asunto de la interpretación del acuerdo de 20 de diciembre de 1951, entre la OMS y Egipto, *vid.* en CIJ Recueil 1980, pp. 178 y ss.; a la Sentencia de 3 de junio de 1985 en el asunto de la *Plataforma Continental* entre Libia y Malta, *vid.* en CIJ Recueil 1985, pp. 60 y ss.; a la Sentencia de 27 de junio de 1986, sobre el fondo en el asunto de las *actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua*, *vid.* en CIJ Recueil 1986, pp. 192 y ss.

³ A la Sentencia de 21 de marzo de 1984 acerca de la solicitud italiana de intervención en el asunto de la *Plataforma Continental* entre Libia y Malta, *vid.* en CIJ Recueil 1984, pp. 71 y ss.

El motivo de su opinión disidente a la Sentencia de la Corte por la que se negaba *la demanda italiana de intervención en el asunto de la Plataforma Continental* entre Libia y Malta, se encuentra en que en defecto de controversia entre las partes y el tercero, considera que no resulta necesaria la presencia de vínculo jurisdiccional entre ellos, no estamos ante una exigencia estatutariamente prevista. En el caso en cuestión, Italia desea únicamente preservar sus intereses jurídicos posiblemente afectados por la decisión de la Corte sobre el asunto de fondo. Por tanto, la única consecuencia que cabe extraer de lo anterior habrá de ser que de la inexistencia del indicado vínculo jurisdiccional no tiene por qué derivar el rechazo de la intervención solicitada.

Es el único de los tres miembros de la Corte elegidos para formar parte de la Sala que conoció de la diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima entre Honduras y El Salvador que no había formado parte de ninguna Sala antes de ser designado para ésta. No podrá igualar el record de sus compañeros de formación, dado que su mandato como miembro de la Corte expiró en 1988, antes que la Sala en cuestión emitiera Sentencia en el asunto señalado, por tanto, también fue el único de los tres que fue nombrado como miembro del Tribunal para formar parte de la Sala en cuestión, y cuando se dictó la Sentencia únicamente poseía esta condición respecto de esta formación reducida de la Corte. Sin embargo, como hemos tenido ocasión de comprobar, este hecho no es la primera vez que se produce en la historia de las Salas, sino que existía un ejemplo anterior de esta situación, el de A. GROS en la Sala constituida para conocer de la *delimitación fronteriza en el Golfo de Maine* entre Estados Unidos y Canadá.

Nicolas VALTICOS fue designado Juez *ad hoc* por El Salvador. Esta no era la primera ocasión en que actuaba en calidad de tal, puesto que

había sido elegido Juez *ad hoc* por Malta, para actuar en el asunto de la *Plataforma continental* que enfrentó a este Estado con Libia⁴. Aunque lo fue tras la dimisión el 13 de octubre de 1984 por motivos de salud de Jorge CASTAÑEDA y para sustituir a éste⁵. Posteriormente Bahrein lo designó Juez *ad hoc* en el asunto de la *Delimitación marítima y cuestiones territoriales entre Qatar y Bahrein*. Es miembro del Instituto de Derecho Internacional, del que ha sido su secretario desde 1981. Además de lo anterior es miembro del TPA.

Michel VIRALLY, profesor universitario de nacionalidad francesa⁶. Fue designado Juez *ad hoc* por Honduras y falleció en el curso del procedimiento. Antes había sido Consejero del Gobierno francés en distintos procedimientos arbitrales: el *acuerdo aéreo de 27 de marzo de 1946* entre Francia y Estados Unidos (1963 y 1978) y en la delimitación de la *Plataforma continental* entre Francia y el Reino Unido (1976-1977). Además de lo anterior, también había sido representante o miembro de la delegación de su país en diferentes Comités, Comisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Conferencia de Viena sobre el Derecho de los Tratados en 1968. También era miembro del Instituto de Derecho Internacional⁷.

⁴ Antes incluso había sido Presidente de la Comisión de NN.UU. para la demarcación entre Iraq y Kuwait.

⁵ Vid. en la Sentencia de 3 de junio de 1985 en CIJ Recueil 1985, pp. 13 y ss.

⁶ Ha ejercido como profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias políticas y económicas de Estrasburgo, en el Instituto de Estudios políticos, en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, en la Universidad de Ginebra, en la Universidad de derecho, economía y ciencias sociales de París. Desde 1976 fue director de la *Revue Generale de Droit International Public*.

⁷ Vid. en CIJ Annuaire 1986-87, pp. 41-42.

Santiago TORRES BERNARDEZ fue designado Juez *ad hoc* por Honduras al fallecimiento de M. VIRALLY. Durante largo tiempo fue Director Adjunto de la División de Codificación de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas⁸, Secretario Adjunto de la Comisión de Derecho Internacional y de las Conferencias Diplomáticas de Plenipotenciarios sobre la Codificación y el Desarrollo Progresivo del Derecho Internacional.

Durante seis años -desde 1980 a 1986- fue *Greffier* de la Corte Internacional de Justicia, director de estudios del Centro de Estudios e Investigación de la Academia de Derecho Internacional de la Haya, también fue miembro del TPA hasta 1995. En la actualidad es miembro del Instituto de Derecho Internacional, Juez *ad hoc* designado por Qatar para sustituir a J.M. RUDA, en el asunto de Qatar/Bahrein y, más recientemente, Juez *ad hoc* designado por España en el asunto de la *competencia en materia de pesquerías* frente a Canadá.

⁸ Antes fue Miembro de la Comisión Internacional para el establecimiento de los hechos creada en virtud del protocolo adicional I de las Convenciones de Ginebra de 1949 para la protección de las víctimas de guerra.

APENDICE II: DOCUMENTOS

1. RÉOLUTION VISANT LA PRATIQUE INTERNE DE LA COUR EN MATIÈRE JUDICIAIRE¹

(Règlement, article 19)

ADOPTÉE LE 12 AVRIL 1976

La Cour décide de reviser la résolution du 5 juillet 1968² visant la pratique interne de la Cour en matière judiciaire et adopter les articles consignés dans la présente résolution relatifs à sa pratique interne en matière judiciaire. La Cour reste entièrement libre de s'écarter de la présente résolution dans un cas d'espèce, si elle estime que les circonstances le justifient.

Article 1

i) Après la clôture de la procédure écrite et avant l'ouverture de la procédure orale, la Cour se réunit en chambre du conseil pour permettre aux juges d'échanger des vues sur l'affaire et de signaler les points sur lesquels ils considèrent qu'il faudrait, les cas échéant, provoquer des explications pendant les plaidoiries.

ii) Dans les affaires comportant deux tours de plaidoiries, la Cour tient une nouvelle délibération aux mêmes fins, après le premier tour.

¹ FUENTE: CIJ Acts and Documents Concerning the Organisation of the Court, n° 5, 1989, p. 165.

² Avant 1968, en vertu de la décision prise en 1946 par la Cour internationale de Justice de se conformer provisoirement à la pratique de la Cour permanente de Justice internationale, la pratique interne de la Cour en matière judiciaire était régie par la résolution que la Cour permanente avait adoptée le 20 février 1931, telle qu'elle avait été modifiée le 17 mars 1936.

iii) La Cour se réunit aussi de temps à autre en chambre du conseil pendant la procédure orale pour permettre aux juges d'échanger des vues sur l'affaire et de s'informer mutuellement des questions qu'ils pourraient avoir l'intention de poser dans l'exercice du droit que leur confère l'article 61, paragraphe 3, du Règlement.

Article 2

Après la fin de la procédure orale, un délai approprié est donné aux juges pour l'étude de l'argumentation présentée à la Cour

Article 3

i) A l'expiration de ce délai, une délibération a lieu pendant laquelle le Président indique les points qui, à ses yeux, devraient être discutés et tranchés par la Cour. Chaque juge peut alors présenter des observations sur l'exposé du Président ou attirer l'attention sur tous autres points ou question qu'il considère comme pertinents et peut à tout moment, au cours de la délibération ou à la fin de celle-ci, faire distribuer des textes contenant l'énoncé de nouvelles questions ou l'énoncé amendé de questions déjà signalées.

ii) Pendant cette délibération, tout juge peut présenter des observations sur la pertinence des points ou des questions qui se posent en l'espèce. Le Président invite aussi les juges à faire connaître leurs impressions préliminaires sur quelque point ou quelque question que ce soit.

iii) Le Président donne la parole aux juges dans l'ordre où ils la demandent.

Article 4

i) A la suite de cette délibération et dans un délai approprié, chaque juge prépare une note écrite qui est distribuée aux autres juges.

ii) Dans cette note écrite, le juge exprime son opinion sur l'affaire en indiquant notamment:

- a) s'il y aurait lieu de ne pas examiner plus avant certaines des questions signalées ou s'il ne serait ni nécessaire ni utile que la Cour les tache;
- b) les questions précises auxquelles la Cour devrait répondre;
- c) son opinion provisoire quant aux réponses à apporter aux questions mentionnées sous b) ci-dessus et sur quels motifs il fonde cette opinion;
- d) sa conclusion provisoire sur la solution à donner à l'affaire.

Article 5

i) Après que les juges ont eu l'occasion de prendre connaissance des notes écrites, une nouvelle délibération a lieu pendant laquelle tous les juges, invités par le Président à prendre la parole, en règle générale dans l'ordre inverse de l'ancienneté, doivent exprimer leur opinion. Tout juge peut, à propos de l'exposé d'un autre juge, formuler des observations ou demander des explications complémentaires.

ii) Au cours de cette délibération, tout juge a la faculté de faire distribuer le texte d'une question supplémentaire ou le texte amendé d'une question déjà signalée.

iii) A la demande de tout juge, le Président prie la Cour de décider si un vote doit avoir lieu sur quelque question que ce soit.

Article 6

i) Sur la base des vues exprimées pendant les délibérations et dans les notes écrites, la Cour désigne un comité de rédaction au scrutin secret et à la majorité absolue des juges présents. Elle élit deux membres qui doivent être choisis

parmi les juges dont les exposés oraux et les notes écrites se sont avérés les plus proches de l'opinion de la majorité de la Cour telle que cette majorité semble se dégager à ce moment.

ii) Le Président est d'office membre du comité de rédaction, à moins qu'il ne partage pas l'opinion de la majorité de Cour telle que cette majorité semble se dégager à ce moment, auquel cas il est remplacé par le Vice-Président. Si le Vice-Président ne peut être désigné pour le même motif, la Cour élit un troisième membre du comité suivant la procédure fixée ci-dessus; en ce cas, le plus ancien des juges élus préside le comité.

iii) Si le Président n'est pas membre du comité de rédaction, le comité discute de son projet avec lui avant de la soumettre à la Cour. Si le comité n'estime pas possible d'adopter des amendements proposés par le Président, il les soumet à la Cour en même temps que son projet

Article 7

i) Un avant-projet de décision est distribué aux juges, lesquels peuvent présenter des amendements écrits. Après avoir examiné ces amendements, le comité de rédaction soumet un projet révisé à discuter par la Cour en première lecture.

ii) Les juges qui désirent présenter une opinion individuelle ou dissidente en communiquent le texte à la Cour après la fin de la première lecture, dans la délai fixé par la Cour.

iii) Le comité de rédaction fait distribuer un projet de décision amendé à discuter en une seconde lecture, au cours de laquelle le Président demande si des juges désirent proposer de nouveaux amendements.

iv) Les juges qui présentent des opinions individuelles ou dissidentes ne peuvent faire de modifications ou d'additions à leur opinion que dans la mesure où des changements ont été apportés au projet de décision. Pendant la seconde lecture, ils font connaître à la Cour les modifications ou additions qu'ils se proposent d'apporter à leur texte pour cette raison. Un délai est fixé par la Cour pour le dépôt des textes révisés des opinions individuelles ou dissidentes; copie de ces textes est adressée à la Cour.

Article 8

i) A la fin de la seconde lecture ou après un délai approprié, le Président invite les juges à exprimer leur vote final sur la décision ou la conclusion dont il s'agit, dans l'ordre inverse de leur ancienneté et de la manière prévue au paragraphe v) du présent article.

ii) Si la décision a trait à des points qui peuvent être séparés, la Cour applique en principe, à moins que la nature de l'affaire n'exige qu'elle procède autrement, la méthode suivante:

a) tout juge peut demander un vote distinct sur chacun des points;

b) lorsque la Cour doit se prononcer sur sa compétence ou sur la recevabilité d'une demande, les votes séparés sur des points particuliers concernant la compétence ou la recevabilité (sauf s'il résulte de l'un de ces votes qu'une exception préliminaire est bien fondée en vertu du Statut et du Règlement) sont suivis d'un vote sur la question de savoir si la Cour peut procéder à l'examen de l'affaire au fond ou, au cas où ce stade est déjà atteint, sur la question globale de savoir si en définitive la Cour est compétente ou la demande recevable.

iii) Dans les cas visés par le paragraphe ii) du présent article ou dans tout autre cas où un juge le demande, le scrutin final n'intervient qu'après une discussion

sur la nécessité de votes distincts, un délai approprié s'écoulant si possible entre la discussion et le scrutin.

iv) Sur le point de savoir si elle doit mentionner dans sa décision les votes distincts prévus au paragraphe ii) du présent article, la Cour décide.

v) Lorsqu'ils sont invités par le Président à exprimer leur vote final dans une phase quelconque de la procédure, ou à voter sur une question concernant la manière de procéder au vote sur la décision ou la conclusion dont il s'agit, les juges doivent se prononcer seulement par un vote affirmatif ou négatif.

Article 9

i) Bien que, pour cause de maladie ou autre motif jugé suffisant par le Président, un juge n'ait pu assister à une partie des audiences publiques ou du délibéré de la Cour décrit aux articles 1 à 7 de la présente résolution, il peut participer au scrutin final, à condition que:

a) pendant la plus grande partie de la procédure, il se soit trouvé ou soit resté au siège de la Cour ou en tel autre lieu où la Cour siège et exerce ses fonctions aux fins de l'affaire conformément à l'article 22, paragraphe 1, du Statut;

b) s'agissant des audiences publiques, il ait été en mesure d'en lire le compte rendu officiel;

c) s'agissant du délibéré décrit aux articles 1 à 7, il ait pu au moins présenter une note écrite, lire les notes de ses collègues et examiner les projets préparés par le comité de rédaction;

d) s'agissant de la procédure dans son ensemble, il ait suffisamment participé aux audiences publiques et au délibéré décrit aux articles 1 à 7 pour être en mesure de parvenir à une conclusion judiciaire sur tous les

points de fait et de droit qui présentent de l'importance pour la décision à rendre en l'espèce.

ii) Tout juge ayant qualité pour participer au scrutin final doit voter en personne. Au cas où, tout en étant en mesure d'exprimer un vote, un juge ne peut être présent à la séance à laquelle le scrutin doit intervenir, pour cause d'incapacité physique ou pour une autre raison impérative, le scrutin est reporté, si les circonstances le permettent, jusqu'à ce que le juge puisse y assister. Si la Cour estime que les circonstances rendent un report impossible ou inopportun, elle peut, à fin de permettre au juge d'exprimer son vote, décider de se réunir ailleurs qu'en son lieu de séances habituel. Si l'on ne peut recourir en pratique à aucune de ces deux solutions, le juge peut être autorisé à exprimer son vote de toute autre manière dont la Cour décide qu'elle est compatible avec le Statut.

iii) Si un doute s'élève sur le point de savoir si un juge peut voter dans les conditions prévues aux paragraphes i) et ii) du présent article et que ce doute ne peut être dissipé au cours de la discussion, la question est, sur la proposition du Président ou à la demande de tout autre juge décidée par la Cour.

iv) Lorsqu'un juge exprime son vote final dans les conditions prévues aux paragraphes i) et ii) du présent article, le paragraphe v) de l'article 8 s'applique.

Article 10

Les dispositions qui précèdent sont applicables aussi bien en matière contentieuse qu'en matière consultative.

2. Compromisos

2.1. ACUERDOS CELEBRADOS ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CANADA DE 29 DE MARZO DE 1979¹

2.1.1. TRAITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE VISANT À SOUMETTRE AU RÈGLEMENT OBLIGATOIRE LE DIFFÉREND RELATIF À LA DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE MARITIME DANS LA RÉGION DU GOLFE DU MAINE

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Etats-Unis d'Amérique,

Reconnaissant qu'ils n'ont pu résoudre par voie de négociation leurs différends en matière de délimitation du plateau continental et des zones de pêche du Canada et des Etats Unis d'Amérique dans la région du golfe du Maine,

Désirant parvenir à un règlement amical de ces différends dans les meilleurs délais,

Sont convenus de ce qui suit:

¹ FUENTE: ICJ Pleadings, oral arguments documents: *Case Concerning Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area* (Canada/United States of America) vol. I, pp. 8-25.

Article I

En application de l'article 40 du Statut de la Cour internationale de Justice, les Parties notifient la Cour du compromis annexé aux présentes entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique visant à soumettre à une chambre de la Cour internationale de Justice la question de la délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine. La chambre de la Cour internationale de Justice est réputée avoir été constituée lorsque le Greffier de la Cour a été notifié du nom du juge *ad hoc* ou des noms des juges *ad hoc*.

Article II

Si, pour une raison quelconque, la chambre visée à l'article I n'a pas été constituée conformément aux dispositions du présent traité et du compromis à la fin du sixième mois civil révolu suivant la date d'entrée en vigueur du présent traité, l'une ou l'autre Partie peut dénoncer le compromis à tout moment avant la constitution de la chambre, auquel cas les compromis entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique visant à soumettre à une cour d'arbitrage la question de la délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine entre en vigueur. En cas de dénonciation du compromis, les Parties notifient conjointement la Cour internationale de Justice de la discontinuation de la procédure aux termes du compromis.

Article III

Si, à quelque moment que ce soit après la constitution de la chambre conformément aux dispositions du présent traité et du compromis, il n'est pas pourvu à une vacance à la chambre d'une manière que les Parties jugent

acceptable dans les quatre mois suivant la date à laquelle s'est produite la vacance, l'une ou l'autre Partie peut dénoncer le compromis dans les deux mois qui suivent le délai de quatre mois, auquel cas le compromis d'arbitrage annexé aux présentes entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des Etats-Unit d'Amérique visant à soumettre à une cour d'arbitrage la question de la délimitation de la forintière maritime dans la région du golfe du Maine entre en vigueur. En cas de dénonciation du compromis, les Parties notifient conjointement la Cour internationale de Justice de la discontinuation de la procédure aux termes du compromis.

Article IV

Le présent traité sera ratifié en conformité avec les exigences nationales des Parties et entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification. Il demeurera en vigueur jusqu'à son abrogation par voie d'accord entre les Parties.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent traité.

FAIT en double exemplaire à Washington ce vingt-neuvième jour de mars 1979, en français et en anglais, chaque texte faisant également foi.

**2.1.2. COMPROMIS ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET
LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE VISANT À
SOUMETTRE À UNE CHAMBRE DE LA COUR INTERNATIONALE
DE JUSTICE LA QUESTION DE LA DÉLIMITATION DE LA
FRONTIÈRE MARITIME DANS LA RÉGION DU GOLFE DU MAINE**

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique,
Reconnaissant qu'ils n'ont pu résoudre par voie de négociation leurs différends
en matière de délimitation du plateau continental et des zones de pêche de l'un
et l'autre pays dans la région du golfe du Maine,
Désirant parvenir à un règlement amical de ces différends dans les meilleurs
délais,

Sont convenus de ce qui suit:

Article I

Les parties soumettent la question posée à l'article II à une chambre de la Cour
internationale de Justice, composée de cinq personnes et constituée après
consultation avec les Parties, en application du paragraphe 2 de l'article 26 et
de l'article 31 du Statut de la Cour et conformément aux dispositions du présent
compromis.

Article II

1. La chambre est priée de statuer, conformément aux règles et principes du
droit international applicables en la matière entre les Parties, sur la question
suivante:

Quel est le tracé de la frontière maritime unique divisant le plateau continental et les zones de pêche du Canada et des Etats-Unis d'Amérique à partir d'un point situé par 44° 11' 12" de latitude nord et 67° 16' 46" de longitude ouest jusqu'à un point devant être fixé par la chambre à l'intérieur d'une zone délimitée par des lignes droites reliant les coordonnées géographiques suivantes: 40° de latitude nord et 67° de longitude ouest; 40° de latitude nord et 65° de longitude ouest; 42° de latitude nord et 65° de longitude ouest?

2. La chambre est priée de décrire le tracé de la frontière maritime en termes de lignes géodésiques reliant les coordonnées géographiques des points. La chambre est également priée, à seules fins d'illustration, d'indiquer le tracé de la frontière sur la carte n° 4003 du Service hydrographique du Canada et sur la carte n° 13006 de la *United States Ocean Survey*, conformément aux dispositions de l'article IV.

3. Les Parties prient la chambre de nommer un expert technique, désigné conjointement par les Parties, pour l'aider dans la considération des questions techniques et notamment dans la préparation de la description de la frontière maritime et des cartes mentionnées au paragraphe 2. Le Greffier est prié de fournir à l'expert technique des exemplaires des pièces de procédure de chaque Partie lorsque lesdites pièces sont communiquées à l'autre Partie. L'expert assiste à la procédure orale et se tient à la disposition de la chambre pour toute consultation que cette dernière estime nécessaire aux fins du présent article.

4. Les Parties acceptent comme définitive et obligatoire pour elles-mêmes la décision de la chambre rendue en application du présent article.

Article III

1. Au sud et à l'ouest de la frontière maritime devant être délimitée par la chambre en application du présent compromis le Canada ne peut, et au nord et à l'est de ladite frontière maritime les Etats-Unis d'Amérique ne peuvent, à quelque fin que ce soit, revendiquer ou exercer de juridiction ou de droits souverains sur les eaux ou sur le fond marin et le sous-sol de la mer.

2. Aucune disposition du présent compromis ne modifie la position de l'une ou l'autre Partie à l'égard de la nature juridique ou de l'étendue vers le large du plateau continental, de la juridiction en matière de pêches, ou de la juridiction ou des droits souverains à toute autre fin en vertu du droit international.

Article IV

La chambre et l'expert ou les experts techniques sont priés, et les Parties dans leurs présentations à la chambre sont tenues, de se conformer aux dispositions techniques suivantes:

a) Toutes les coordonnées géographiques des points mentionnés sont établies en fonction de la station origine de la triangulation nord-américaine de 1927.

b) Toutes les lignes droites sont des lignes géodésiques. Si elles sont nécessaires aux fins de l'arrêt, les courbes, y compris les parallèles de latitude, sont calculées en fonction de la station origine de la triangulation nord-américaine de 1927.

c) Bien que les Parties utilisent des niveaux de référence différents dans la région du golfe du Maine, les deux sont considérés étant communs.

d) S'il est nécessaire de se référer à la laisse de basse mer de l'une ou l'autre Partie, les cartes les plus récentes et à plus grande échelle possible publiées par la Partie en cause sont utilisées.

e) Si un ou plusieurs points sur une carte donnée ne sont pas établis en fonction de la station origine de la triangulation nord-américaine de 1927, la chambre demande à l'agent de la Partie en cause de lui fournir les points origine corrigés.

f) Comme les Parties n'utilisent pas les mêmes symboles normalisés sur leurs cartes marines, la chambre, l'expert ou les experts techniques consultent au besoin les agents et leurs conseillers pour assurer l'interprétation correcte du symbole ou du signe en question.

g) La chambre, l'expert ou les experts techniques sont priés de consulter au besoin les Parties au sujet de tout programme informatique mis au point conjointement par les Parties aux fins de calculs techniques, et d'utiliser de tels programmes au besoin.

Article V

1. Ni l'une ni l'autre Partie ne communique à titre de preuve ou d'argument ni ne divulgue publiquement de quelque manière que ce soit la nature ou le contenu des propositions en vue d'un règlement du différend relatif à la délimitation des frontières maritimes, ou des réponses à ces propositions, faites au cours des négociations ou discussions entreprises depuis 1969.

2. Chaque Partie notifie et consulte l'autre Partie avant de communiquer à titre de preuve ou d'argument la correspondance diplomatique ou toute autre correspondance confidentielle entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique portant sur la question de la délimitation des frontières maritimes.

Article VI

1. Sans préjuger aucune question relative à la charge de la preuve, les Parties prient la chambre d'autoriser la procédure suivante au regard des pièces de procédure écrite:

a) un mémoire soumis par chacune des Parties au plus tard sept mois après que le Greffier a reçu notification du nom du juge *ad hoc* ou des noms des juges *ad hoc*;

b) un contre-mémoire soumis par chacune des Parties au plus tard six mois après l'échange des mémoires;

c) toute autre pièce de procédure jugée nécessaire par la chambre.

2. La chambre peut prolonger ces délais à la demande de l'une ou l'autre Partie.

3. Les pièces de procédure écrite présentées au Greffier ne sont pas communiquées à l'autre Partie tant que le Greffier n'a pas reçu la pièce de procédure correspondante de l'autre Partie.

Article VII

1. A la suite de la décision de la chambre, l'une ou l'autre Partie peut demander la tenue de négociations en vue d'une entente sur l'extension de la frontière maritime vers le large sur une aussi grande distance que les Parties le jugent souhaitable.

2. Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'extension de la frontière maritime dans l'année qui suit la date d'une telle demande, chaque Partie peut

2.1.3. COMPROMIS ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D' AMÉRIQUE VISANT À SOUMETTRE À UNE COUR D'ARBITRAGE LA QUESTION DE LA DÉLIMITACION DE LA FRONTIÈRE MARITIME DANS LA RÉGION DU GOLFE DU MAINE

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,

Reconnaissant qu'ils n'ont pu résoudre par voie de négociation leurs différends en matière de délimitation du plateau continental et des zones dans la région du golfe de Maine où l'un ou l'autre exercent la juridiction exclusive en matière de pêches,

Désirant parvenir à un règlement amical de ces différends dans les meilleurs délais,

Sont convenus de ce qui suit:

Article I

1. Les Parties soumettent la question posée à l'article II à une cour d'arbitrage (ci-après la cour) composée de cinq personnes dont conviennent mutuellement les Parties, l'une de ces personnes étant désignée à la présidence par les Parties.

2. Aux fins du présent compromis d'arbitrage, la cour est réputée constituée lorsque les Parties annoncent conjointement sa constitution aux fins prévues dans le présent compromis d'arbitrage.

3. Les Parties nomment conjointement un greffier. Si, un mois après la constitution de la cour, le greffier n'a pas été nommé, le président de la cour s'acquitte de cette fonction dans le mois qui suit.

4. Chaque Partie nomme un agent dans le mois qui suit la constitution de la cour.

Article II

1. La cour statue, conformément aux principes et aux règles du droit international applicables en la matière entre les Parties, sur la question suivante:

Quel est le tracé de la frontière maritime unique divisant le plateau continental et les zones de pêche du Canada et des Etats-Unis d'Amérique à partir d'un point situé par 44° 11' 12" de latitude nord et 67° 16' 46" de longitude ouest jusqu'à un point devant être fixé par la cour à l'intérieur d'une zone délimitée par des lignes droites reliant les coordonnées géographiques suivantes: 40° de latitude nord et 67° de longitude ouest; 40° de latitude nord et 65° de longitude ouest; 42° de latitude nord et 65° de longitude ouest?

La décision est pleinement motivée.

2. La cour décrit le tracé de la frontière maritime en termes de lignes géodésiques reliant les coordonnées géographiques des points. La cour indique également, à seules fins d'illustration, le tracé d la frontière sur la carte n° 4003 du Service hydrographique du Canada et sur la carte n° 13006 de la *United States National Ocean Survey*, conformément aux dispositions de l'article IV.

3. La cour nomme un expert technique désigné conjointement par les Parties pour l'aider dans la considération des questions techniques et notamment dans la préparation de la description de la frontière maritime et des cartes mentionnées au paragraphe 2 du présent article. Le greffier fournit à l'expert technique copie des pièces de procédure de chaque Partie lorsque lesdites pièces sont communiquées à l'autre Partie. L'expert assiste à la disposition de la procédure orale et se tient à la cour pour toute consultation que cette dernière estime nécessaire aux fins du présent article.

Article III

1. Au sud et à l'ouest de la frontière maritime devant être délimitée par la cour en application du présent compromis d'arbitrage, le Canada ne peut, et au nord et à l'est de ladite frontière maritime les Etats-Unis d'Amérique ne peuvent, à quelque fin que ce soit, revendiquer ou exercer une juridiction ou des droits souverains sur les eaux ou sur le sous-sol de la mer.

2. Aucune disposition du présent compromis d'arbitrage ne modifie la position de l'une ou l'autre Partie à l'égard de la nature juridique ou de l'étendue vers le large du plateau continental, de la juridiction en matière de pêche, ou de la juridiction ou des droits souverains à toute autre fin en vertu du droit international.

Article IV

Le cour et l'expert ou les experts technique ainsi que les Parties dans leurs présentations à la cour se conforment aux dispositions techniques suivantes:

a) Toutes les coordonnées géographiques des points mentionnés sont établies en fonction de la station origine de la triangulation nord-américaine de 1927.

b) Toutes les lignes droites son des lignes géodésiques. Si elles sont nécessaires aux fins de l'arrêt, les courbes, y compris les parallèles de latitude, sont calculées en fonction de la station origine de la triangulation nord-américaine de 1927.

c) Bien que les Parties utilisent des niveaux de référence différents dans la région du golfe du Maine, les deux sont considérés comme étant communs.

d) S'il est nécessaire de se référer à la laisse de basse mer d'une ou l'autre Partie, les cartes les plus récentes et à plus grande échelle possible publiées par la Partie en cause sont utilisées.

e) Si un ou plusieurs points sur une carte donnée ne sont pas établis en fonction de la station origine de la triangulation nord-américaine de 1927, la cour demande à l'agent de la Partie en cause de lui fournir les points origine corrigés.

f) Comme les Parties n'utilisent pas les mêmes symboles normalisés sur leurs cartes marines, la cour, l'expert ou les experts techniques consultent au besoin l'agent et leurs conseillers pour assurer l'interprétation correcte du symbole ou du signe en question.

g) La cour, l'expert ou les experts techniques consultent au besoin les Parties au sujet de tout programme informatique mis au point conjointement par les Parties aux fins de calculs techniques, et utilisent de tels programmes au besoin.

Article V

1. Ni l'une ni l'autre Partie ne communique à titre de preuve ou d'argument ni ne divulgue publiquement de quelque manière que ce soit la nature ou le contenu des propositions en vue d'un règlement du différend relatif à la délimitation des

frontières maritimes, ou des réponses à ces propositions, faites au cours des négociations ou des discussions entreprises depuis 1969.

2. Chaque Partie notifie et consulte l'autre Partie avant de communiquer à titre de preuve ou d'argument la correspondance diplomatique ou toute autre *correspondance confidentielle entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique* portant sur la question de la délimitation des frontières maritimes.

Article VI

1. Sous réserve des dispositions du présent compromis d'arbitrage, la procédure de la cour est assujettie au Règlement de la Cour internationale de Justice dans la mesure où la cour le juge applicable et pertinent. La cour a le pouvoir d'arrêter d'autres dispositions générales au besoin.

2. En l'absence d'unanimité, les décisions de la cour relatives à toutes les questions, tant en ce qui concerne le fond que la procédure, sont prises à la majorité des membres, y compris toutes les questions concernant la compétence de la cour, l'interprétation du présent compromis d'arbitrage et la décision relative à la question énoncée à l'article II.

Article VII

La cour établit son siège en lieu fixé en accord avec les Parties. Tant que la détermination de son siège n'est pas faite, la cour peut se réunir au lieu choisi à titre provisoire par son président. Le greffier communique aux Parties une adresse pour le dépôt de leurs pièces de procédure écrite et autres documents.

Article VIII

Les Parties suivent la procédure suivante devant la Cour:

a) Les procédures sont écrites et orales.

b) Sans préjuger aucune question relative à la charge de la preuve, les procédures écrites consistent en:

- i) un mémoire soumis par chacune des Parties au plus tard sept mois après la constitution de la cour;
- ii) un contre-mémoire soumis par chacune des Parties au plus tard six mois après l'échange des mémoires;
- iii) toute autre pièce jugée nécessaire par la cour.

La Cour peut prolonger ces délais à la demande de l'une ou l'autre Partie.

2. Les pièces de procédure écrite présentées au greffier ne sont pas communiquées à l'autre Partie tant que le greffier n'a pas reçu la pièce de procédure correspondante de l'autre partie. Sauf s'il en est convenu autrement, les pièces de procédure écrite ne sont communiquées au public qu'une fois la procédure orale commencée.

3. La procédure orale suit la procédure écrite et se tient en public au lieu et à la date que peut déterminer la cour après consultation des deux Parties.

Article IX

1. Les pièces de procédure écrite et orale sont en anglais ou en français; les décisions de la cour sont rendues dans ces deux langues.

2. La cour pourvoit en tant que de besoin à la traduction et à l'interprétation, au personnel de secrétariat et de bureau, ainsi qu'aux locaux et à l'achat ou à la location de matériel de bureau.

Article X

1. La rémunération des juges de la cour et les dépenses générales de l'arbitrage sont supportées également par les deux Parties.
2. Chaque Partie supporte ses frais propres entraînés par ou pour la préparation et la présentation de ses thèses.

Article XI

Il est pourvu à tout siège devenu vacant à la Cour selon la procédure suivante:

- a) Si le président de la cour ne peut remplir ses fonctions et que, après deux mois, les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur le fait de pourvoir à la vacance et sur le choix du nouveau président, les autres juges de la cour, après consultations avec les parties, choisissent parmi eux un nouveau président dans un délai d'un mois. Le nouveau président pourvoit à la vacance dans les six mois suivant la date à laquelle s'est produite la vacance, à la suite d'autres consultations avec les Parties.
- b) Si un juge de la cour autre que le président ne peut remplir ses fonctions et que, après deux mois, les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur le choix d'un candidat, le président de la cour pourvoit au siège vacant dans les six mois suivant la date à laquelle s'est produite la vacance, à la suite de consultations avec les Parties.

Article XII

1. La décision de la cour relative à la question posée à l'article II est définitive et obligatoire pour les Parties.

2. L'une ou l'autre Partie peut, dans les trois mois suivant la décision, déférer à la cour toute contestation en ce qui concerne l'interprétation et la portée de la décision.

3. La cour est habilitée à corriger toute erreur technique ou d'écritures dans sa décision à la demande de l'une ou l'autre Partie, dans les six mois suivant sa décision.

Article XIII

1. A la suite de la décision de la cour ou de la chambre de la Cour internationale de Justice constituée en application du compromis entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Canada visant à soumettre à une chambre de la Cour internationale de Justice la question de la délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine, l'une ou l'autre Partie peut demander la tenue de négociations en vue d'une entente sur l'extension de la frontière maritime vers le large sur une aussi grande distance que les Parties le jugent souhaitable.

2. Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'extension de la frontière maritime dans l'année qui suit la date d'une telle demande, l'une ou l'autre Partie peut notifier l'autre de son intention de soumettre la question de l'extension de la frontière maritime vers le large au règlement obligatoire par tierce partie.

3. Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions d'une telle soumission dans les trois mois qui suivent cette notification, l'une ou l'autre Partie peut soumettre la question de l'extension de maritime vers le large à la cour constituée en conformité du présent compromis d'arbitrage, pourvu qu'au moins trois juges de la cour soient en mesure de remplir ces fonctions. Si un

juge de la cour ne peut remplir ses fonctions, il est pourvu à la vacance de la manière prescrite à l'article XI.

4. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 et que la question ne peut être soumise à la cour en application du paragraphe 3, l'une ou l'autre Partie peut demander au Président de Cour internationale de Justice de choisir, après consultation avec les Parties, cinq personnes qui constitueront une cour d'arbitrage.

5. Si la décision visée au paragraphe 1 est rendue par une chambre de la Cour internationale de Justice et que le présent compromis entre subséquemment en vigueur, une cour d'arbitrage est constituée conformément aux dispositions de l'article I du présent compromis, aux fins de statuer sur la question visée au paragraphe 2 du présent article.

6. Les dispositions du présent compromis d'arbitrage s'appliquent, *mutatis mutandis*, à la procédure établie dans le présent article et la décision de la cour d'arbitrage est définitive et obligatoire pour les Parties.

Article XIV

Le présent compromis d'arbitrage entre en vigueur conformément à l'article II ou à l'article III du traité entre le le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique visant à soumettre au règlement obligatoire le différend relatif à la delimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine, signé en ce jour, et demeure en vigueur jusqu'à la dénonciation du dit traité.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent traité.

FAIT en double exemplaire à Washington ce vingt-neuvième jour de mars 1979,
en français et en anglais, chaque texte faisant également foi.

2.2. COMPROMISO CELEBRADO ENTRE BURKINA FASO Y LA REPUBLICA DE MALI

COMPROMIS DU 16 SEPTEMBRE 1983 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA ET LE GOUVERNEMENT DE MALI¹

«Le Gouvernement de la République de Haute-Volta et le Gouvernement de la République du Mali,

Désireux de parvenir dans les meilleurs délais à un règlement du différend frontalier qui les oppose, fondé notamment sur le respect du principe de l'intangibilité des frontières de la colonisation, et de procéder à la délimitation et à la démarcation définitives de leur frontière commune.

Se référant à l'accord conclu entre eux en vue du règlement du différend frontalier qui les oppose,

Sont convenus de ce qui suit:

Article I

Objet du litige

1. La question posée à la chambre de la Cour internationale de Justice constituée conformément à l'article II ci-après est la suivante:

¹ FUENTE: Sentencia de 22 de Diciembre de 1986 CIJ Recueil 1986.

3. Les pièces de procédure écrite présentées au Greffier ne sont pas transmises à l'autre Partie tant que le Greffier n'a pas reçu la pièce de procédure correspondante de l'autre Partie.

Article IV

Arrêt de la Chambre

1. Les Parties acceptent, comme définitif et obligatoire pour elles-mêmes, l'arrêt de la Chambre, rendu en application du présent compromis.

2. Dans l'année suivant cet arrêt les Parties procéderont à la démarcation de la frontière.

3. Les Parties prient la Chambre de désigner dans son arrêt trois experts qui les assisteront aux fins de l'opération de démarcation.

Article V

Entrée en vigueur, publication et notification

1. Le présent compromis entrera en vigueur à la date de sa signature.

2. Il sera enregistré au Secrétariat des Nations Unies en application de l'article 102 de la Charte des Nations Unies à l'initiative de la Partie la plus diligente.

3. En application de l'article 40 du Statut de la Cour, le présent compromis sera notifié au Greffier de la Cour par une lettre conjointe des Parties.

4. Si cette notification n'est pas effectuée conformément au paragraphe précédent dans le délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du présent compromis, celui-ci sera notifié au Greffier de la Cour par la Partie la plus diligente.»

2.3. COMPROMISO ENTRE HONDURAS Y EL SALVADOR

«COMPROMISO ENTRE HONDURAS Y EL SALVADOR PARA SOMETER A LA DECISION DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA LA CONTROVERSIA FRONTERIZA TERRESTRE, INSULAR Y MARITIMA EXISTENTE ENTRE LOS DOS ESTADOS, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE ESQUIPULAS, REPUBLICA DE GUATEMALA, EL DIA 24 DE MAYO DE 1986¹.

El Gobierno de la República de Honduras y el Gobierno de la República de El Salvador,

Considerando que el 30 de octubre de 1980, en la ciudad de Lima, Perú, suscribieron el Tratado General de Paz, por medio del cual, *inter alia*, delimitaron la frontera terrestre de ambas Repúblicas en aquellas secciones en donde no existía controversia;

Considerando que dentro del plazo previsto en los artículos 19 y 31 del tratado General de Paz, de 30 de octubre de 1980, no se llegó a un arreglo directo sobre las diferencias de límites existentes con respecto a las demás zonas terrestres en controversia, y en lo relativo a la situación jurídica insular y de los espacios marítimos;

Han designado como sus respectivos Plenipotenciarios, Honduras al Señor Ministro de relaciones Exteriores, Abogado Carlos López Contreras, y El Salvador al Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Licenciado Rodolfo

¹ FUENTE: Ordenanza de 13 de Septiembre de 1990 en CIJ Recueil 1990, pp.95-97.

Antonio Castillo Claramount, quienes, una vez encontrados en buena y debida forma sus Plenos Poderes:

CONVIENEN EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1º

Constitución de una Sala

1. En aplicación del artículo 34 del Tratado General de Paz suscrito el 30 de octubre de 1980, las Partes someten las cuestiones mencionadas en el Artículo Segundo del presente Compromiso a una Sala de la Corte Internacional de Justicia, compuesta por tres miembros, con la anuencia de las Partes, las cuales la expresarán en forma conjunta al Presidente de la Corte, siendo esta conformidad esencial para la integración de la Sala, que se constituirá de acuerdo a los Procedimientos establecidos en el Estatuto de la Corte y en el presente Compromiso.

2. Adicionalmente, integrarán la Sala dos jueces *ad-hoc* especialmente nombrados uno por El Salvador y otro por Honduras; los que podrán tener la nacionalidad de las Partes.

Artículo 2º

Objeto del litigio

Las Partes solicitan a la Sala:

1. Que delimite la línea fronteriza en las zonas o secciones no descritas en el Artículo 16 del Tratado General de Paz, de 30 de octubre de 1980.

2. Que determine la situación jurídica insular y de los espacios marítimos.

Artículo 3º

Procedimiento

1. Las Partes solicitan a la Sala autorizar que el procedimiento escrito consista en:

a) una Memoria presentada por cada una de las Partes, a más tardar diez meses después de la notificación de este Compromiso a la Secretaría de la corte Internacional de Justicia;

b) una Contramemoria presentada por cada una de las Partes, a más tardar diez meses después de la fecha en que se haya recibido la copia certificada de la Memoria de la otra Parte;

c) una réplica presentada por cada una de las Partes, a más tardar diez meses después de la fecha en que se haya recibido la copia certificada de la Contramemoria de la otra Parte;

d) la Corte podrá autorizar, o prescribir la presentación de una Dúplica, si las Partes están de acuerdo a este respecto o si la Corte decide de oficio o a solicitud de una de las Partes si esta pieza de procedimiento es necesaria.

2. Las piezas antes mencionadas del procedimiento escrito y sus anexos presentadas al Secretario, no serán transmitidas a la otra Parte, en tanto el Secretario no haya recibido la pieza de procedimiento correspondiente a dicha Parte.

3. El procedimiento oral, la notificación del nombramiento de los respectivos agentes de las Partes y cualesquiera otras cuestiones procesales, se ajustarán a lo dispuesto en el Estatuto y el Reglamento de la Corte.

Artículo 4º

Idiomas

El caso se ventilará en los idiomas inglés y francés, indistintamente.

Artículo 5º

Derecho aplicable

Dentro del marco del apartado primero del Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la Sala, al dictar su fallo, tendrá en cuenta las normas de derecho internacional aplicables entre las Partes, incluyendo, en lo pertinente, las disposiciones consignadas en el Tratado general de Paz.

Artículo 6º

Ejecución de la Sentencia

1. Las Partes ejecutarán la sentencia de la Sala en un todo y con entera buena fe. A este fin, la Comisión Especial de Demarcación que establecieron mediante el Convenio de 11 de febrero de 1986, iniciará la demarcación de la línea fronteriza fijada por la sentencia, a más tardar tres meses después de la fecha de la misma y continuará diligentemente sus actuaciones hasta concluirla.

2. Para tal efecto, se aplicarán las reglas establecidas sobre la materia, en el mencionado Convenio de creación de la Comisión Especial de Demarcación.

Artículo 7º

Entrada en vigor

1. El presente Compromiso entrará en vigor el 1º de octubre de 1986, una vez que se haya cumplido con los procedimientos constitucionales de cada Parte.
2. Será registrado en la Secretaría general de las Naciones Unidas de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, conjuntamente o por cualquiera de las Partes. Al mismo tiempo se hará del conocimiento de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 8º

Notificación

1. En aplicación del Artículo 40 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el presente Compromiso será notificado al Secretario de la misma por nota conjunta de las Partes. Esta notificación se efectuará antes del 31 de diciembre de 1986.
2. Si esta notificación no se efectúa de conformidad con el párrafo precedente, el presente Compromiso podrá ser notificado al Secretario de la Corte por cualquiera de las Partes dentro del plazo de un mes siguiente a la fecha prevista en el párrafo anterior.»

3. DECLARACIONES DE ACEPTACION DE LA JURISDICCION OBLIGATORIA DE LA CORTE

3.1. CANADA¹

7 IV.70

[Traduction de l'anglais]

Au nom du Gouvernement canadien.

1) Nous notifions par la présente l'abrogation de l'acceptation par le Canada de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, acceptation qui a jusqu'à présent produit effet en vertu de la déclaration faite le 20 septembre 1929 et ratifiée le 28 juillet 1930² en application de l'article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et rendue applicable à la Cour internationale de Justice en vertu du paragraphe 5 de l'article 36 du Statut de ladite Cour.

2) Nous déclarons que le Gouvernement canadien, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité et jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation, la juridiction de la Cour en ce qui concerne tous les différends qui s'élèveraient après la date de la présente déclaration, au sujet de situations ou de faits postérieurs à ladite déclaration, autres que:

¹ FUENTE: CIJ Annuaire 1981-82 p. 63-64.

² C.I.J. Annuaire, 1956-1957, p. 208-209.

a) les différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;

b) les différends avec le gouvernement d'un autre pays membre du Commonwealth britannique de nations, différends qui seront réglés selon une méthode convenue entre les parties ou dont elles conviendront;

c) les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction du Canada;

d) les différends auxquels peuvent donner lieu ou qui concernent la juridiction ou les droits invoqués ou exercés par le Canada en ce qui concerne la conservation, la gestion ou l'exploitation des ressources biologiques de la mer, ou les mesures de prévention ou de lutte contre la pollution ou la contamination du milieu marin dans les zones marines adjacentes au littoral canadien.

3) Le gouvernement canadien se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus, ou toutes autres réserves qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les nouvelles réserves, modifications ou retraits devant prendre effet à partir de la date de ladite notification.

Nous vous prions de bien vouloir transmettre la présente notification aux gouvernements de tous les Etats qui ont accepté la clause facultative ainsi qu'au Greffier de la Cour internationale de Justice.

New York, le 7 avril 1970.

L'ambassadeur et représentant permanent
(Signé) YVON BEAULNE.

3.2. ETATS-UNIS D'AMERIQUE¹

26 VIII 46.

[Traduction de l'anglais]

Nous, Harry S. Truman, Président des Etats-Unis, déclarons au nom des Etats-Unis d'Amérique, en application de l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice et en conformité avec la résolution adoptée, en date du 2 août 1946, par le Sénat des Etats-Unis d'Amérique (par un vote des deux tiers des sénateurs présent), que les Etats-Unis d'Amérique reconnaissent comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour international de Justice sur tous les différends d'ordre qui s'élèveront à l'avenir et ayant pour objet:

- a) l'interprétation d'un traité;
- b) tout point de droit international;
- c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;
- d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international;

Sous la réserve que cette déclaration ne s'applique pas:

¹ FUENTE: CIJ Annuaire 1981-82 P.66-67.

a) aux différends dont la solution est confiée par les parties à d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà existants ou qui pourront être conclus à l'avenir; ou

b) aux différends relatifs à des question relevant essentiellement de la compétence nationale des Etats-Unis d'Amérique, telle qu'elle est fixée par les Etats-Unis d'Amérique; ou

c) aux différends résultant d'un traité multilatéral, à moins que 1) toutes les parties au traité que la décision concerne soient également parties à l'affaire soumise à la Cour, ou que 2) les Etats-Unis d'Amérique acceptent expressément la compétence de la Cour; et

Sous la réserve enfin que cette déclaration demeure en vigueur pour une durée de cinq ans et qu'elle reste en vigueur de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date où notification est donnée de l'intention d'y mettre fin.

Fait à Washington, le 14 août 1946

(Signé) Harry S. TRUMAN.

3.3.1. HONDURAS¹

[Traduction de l'espagnol]

10 III 1960

«Par la présente, le Gouvernement de la République du Honduras, dûment autorisé par le Congrès national, en vertu du décret n°99 du 29 janvier 1960, à renouveler la déclaration visée au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour Internationale de Justice, *déclare*

1) Renouveler la déclaration qu'il a faite le 19 avril 1954² pour six ans, déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 24 mai de la même année, qui vient à l'expiration le 24 mai 1960 et par laquelle il a reconnu comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sous tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet:

- a) l'interprétation d'un traité;
- b) tout point de droit international;
- c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;
- d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

¹ FUENTE: CIJ Annuaire 1984-85, n°39, pp. 78-79.

² Nations Unies, Recueil des Traités, I n° 236, vol. 190.

2) Cette nouvelle déclaration est faite sous condition de réciprocité et pour une durée indéterminée, à partir de la date à laquelle elle sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Fait au Palais National, à Tegucigalpa (D.C.), le 20 février 1960.

(Signé) Ramón VILLEDA MORALES.

Le secrétaire d'Etat aux relations extérieures.

(Signé) Andrés ALVARADO PUERTO».

3.3.2.HONDURAS¹

[Traduction de l'espagnol]

6 VI 1986

«Par la présente, le Gouvernement de la République du Honduras, dûment autorisé par le Congrès national, en vertu du décret n°75-86 du 21 mai 1986, à modifier la déclaration faite le 20 février 1960² concernant le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour Internationale de Justice, *déclare* :

Modifier comme suit la déclaration qu'il a faite le 20 février 1960:

1) Reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet:

- a) l'interprétation d'un traité;
- b) tout point de droit international;
- c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;
- d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

¹ FUENTE: CIJ Annuaire 1985-86, n°40, pp. 71-72.

² CIJ Annuaire 1984-85, p. 78-79.

2) La présente déclaration ne s'applique pas, toutefois, aux différends auxquels la République du Honduras serait partie et qui appartiennent aux catégories suivantes:

a) les différends pour lesquels les parties ont décidé ou pourraient décider de recourir à un autre moyen ou à d'autres moyens de règlement pacifique des différends;

b) les différends ayant trait à des questions relevant de la juridiction interne de la République du Honduras, conformément au droit international,

c) les différends ayant trait à des faits ou des situations ayant leur origine dans des conflits armés ou des actes de même nature qui pourraient affecter le territoire de la République du Honduras, et dans lesquels cette dernière pourrait se trouver impliquée, directement ou indirectement;

d) les différends ayant trait:

i) aux questions territoriales concernant la souveraineté sur les îles, les bancs et les cayes; les eaux intérieures, les golfes et la mer territoriale, leurs statuts et leurs limites;

ii) à tous les droits de souveraineté ou de juridiction concernant la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental, leurs statuts et leurs limites;

iii) à l'espace aérien situé au-dessus des territoires, des eaux et des zones décrits dans le présent alinéa d)

3) Le Gouvernement de la République du Honduras se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment la présente déclaration, ou les réserves qu'elle contient, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4) La présente déclaration remplace la déclaration formulée par le Gouvernement de la République du Honduras le 20 février 1960.

Fait au Palais Présidentiel, à Tegucigalpa (D.C.), le 22 mai 1986.

Le Président de la République

(Signé) José AZCONA H.

Le secrétaire d'Etat aux relations extérieures

(Signé) Carlos LOPEZ CONTRERAS»

3.4. EL SALVADOR¹

[Traduction de l'espagnol]

26 XI 73²

«En ma qualité de ministre des relations extérieures et au nom du Gouvernement de la République d'El Salvador,

Considérant que le paragraphe 5 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice dispose que les déclarations faites en application de l'article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale comportent l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice aux termes des déclarations initiales;

Considérant que le Gouvernement d'El Salvador, en application de l'accord du pouvoir exécutif du 26 mai 1930, ratifié par le pouvoir législatif par décret n° 110 du 3 juillet 1930, a formulé une déclaration reconnaissant la compétence obligatoire de la Cour permanente de Justice internationale, comportant des réserves contenues dans le document en question et se fondant sur la constitution politique de la République, qui à l'époque était celle promulguée le 24 août 1886;

Considérant qu'après la notification de ladite déclaration d'autres constitutions politiques de la République ont été promulguées, celle en vigueur actuellement l'étant depuis le 24 janvier 1962, et que par ailleurs, après que ladite déclaration a été faite, la Charte des Nations Unies a été adoptée le 26 juin

¹ Fuente: CIJ Anuario, 1985-86, n°40, pp. 68-70.

² Par lettre adressée le 24 novembre 1978 par le représentant permanent auprès des Nations Unies au Secrétaire général de l'Organisation, cette déclaration a été prorogée pour une période de dix ans à compter du 26 novembre 1978, avec toutes les exceptions et réserves qu'elle comporte.

1945 et la Charte de l'Organisation des Etats américains le 30 avril 1948, amendée par le Protocole de Buenos Aires de 1967;

Considérant qu'en conséquence il convient d'adapter les termes de la déclaration à ceux qui sont énoncés dans la constitution politique actuellement en vigueur ainsi qu'aux circonstances contemporaines; tenant compte en outre des textes de déclarations similaires d'autres Etats Membres des Nations Unies,

Décide par conséquent de formuler la déclaration suivante:

Conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, El Salvador reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet:

- a) l'interprétation d'un traité;
- b) tout point de droit international;
- c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;
- d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

La présente déclaration s'applique uniquement aux situations ou aux faits postérieurs à la date d'aujourd'hui, elle est faite sous condition de réciprocité de la part de tout autre Etat partie à un différend avec El Salvador; et sous réserve des exceptions suivantes pour lesquelles El Salvador n'accepte pas la compétence obligatoire de la Cour:

- i) les différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;
- ii) les différends qui selon le droit international relèvent essentiellement de la compétence nationale d'El Salvador;
- iii) les différends avec El Salvador concernant ou portant sur:
 - 1) le statut de son territoire, la modification ou la délimitation de ses frontières ou toute autre question connexe;
 - 2) la mer territoriale et ses ressources, à moins qu'El Salvador n'accepte expressément la juridiction de la Cour;
 - 3) la situation de ses îles, baies et golfes et des baies et golfes historiques ou en régime de condominium, reconnus ou non par des jugements des tribunaux internationaux;
 - 4) l'espace aérien au-dessus de son territoire terrestre et maritime;
- iv) les différends se rapportant à des faits ou des situations d'hostilité, de conflit armé, des actes de légitime défense individuels ou collectifs, une résistance à l'agression, le respect des obligations imposées par des organismes internationaux et tout autre acte, mesure ou situation semblable ou connexe, dans lesquels El Salvador a pu, esto ou risque d'être impliqué à quelque moment que ce soit;
- v) les différends antérieurs à la date de la déclaration, à savoir tous ceux dans lesquels les motifs, les raisons, les faits, les causes, les origines, les définitions, les allégations et les fondements sont antérieurs à la date d'aujourd'hui, bien qu'ils aient été soumis à la Cour ou portés à sa connaissance à une date postérieure à la date d'aujourd'hui; et

vi) les différends auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application d'un traité multilatéral, sauf 1) si toutes les parties au traité sont également parties à l'affaire portée devant la Cour ou 2) si El Salvador accepte expressément la juridiction de la Cour.

La présente déclaration annule et remplace la déclaration formulée antérieurement devant la Cour permanente de Justice internationale² et entrera en vigueur pour une période de cinq ans à partir de la date d'aujourd'hui. Il est entendu que ce qui précède ne préjuge pas du droit que se réserve El Salvador de pouvoir à tout moment modifier, compléter ou expliquer les exceptions énoncées ou y déroguer.

La présente déclaration est formulée conformément à l'accord exécutif n° 826 du 24 novembre 1973, ratifié par le pouvoir législatif par décret n°488 du 26 novembre 1973.

Je vous prie de bien vouloir classer comme il convient la présente déclaration et l'enregistrer immédiatement conformément à la pratique établie sur la base de la Charte des Nations Unies.

San Salvador, le 26 novembre 1973.

Le ministre des relations extérieures,

(Signé) Mauricio A. BORGONOVO POHL.

² CIJ Annuaire 1972-73, p.80.

4. Propuesta de declaración de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la CIJ

PROPOSED FORM OF QUALIFIED U.S. ACCEPTANCE OF WORLD COMPULSORY JURISDICTION IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 36(2) OF THE STATUTE OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE¹

The government of the United States accepts in conformity with paragraph 2 of article 36 of the Statute of the International Court of Justice, until such time as notice may be given to terminate such acceptance, as compulsory *ipso facto* and without special agreement, and on the basis and condition of reciprocity, the jurisdiction of the International Court of Justice in any dispute, providing that, at the instigation of either party:

(1) a dispute shall be submitted to a chamber of the International Court of Justice consisting of such members of the court as are elected by the court in accordance with the preferences of the parties expressed in an agreement between them, and that, if no such agreement is reached or the court fails to elect the judges named in the agreement, the court shall not be deemed to have jurisdiction over the dispute between those parties;

¹ FUENTE: T.M. FRANCK *Judging the World Court*, Nueva York 1986, pp. 111-112.

(2) a dispute shall be submitted to the court, or, at the instance of either party, to an agreed chamber of the court, solely for the purpose of obtaining the determination by the court or its chamber as to the principles and rules of international Law applicable to that dispute.

The acceptance of the jurisdiction of the court made by this declaration under paragraph 2 of article 36 of the Statute of the International Court of Justice shall apply to all disputes relating to or connected with facts or situations of hostilities, armed conflicts, individual or collective actions taken in self-defense, resistance to aggression, fulfillment of obligations imposed by international bodies, and other similar or related acts, measures, or situations in which the United States is, has been, or may in the future be, involved.

This acceptance of the jurisdiction of the court shall not apply to disputes in respect of which any other party to the dispute has accepted the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice only in relation to or for the purpose of the dispute; or where the acceptance of the court's compulsory jurisdiction on behalf of any other party to the dispute was deposited or ratified less than twelve months prior to the filing of the application bringing the dispute before the Court.

Bibliografía.

1.- Bibliografía específica sobre las Salas *ad hoc*.

1.1. - Salas. Generalidades

- M. BEDJAOUI "Remarques sur la creation de Chambres *ad hoc* au sein de la Cour Internationale de Justice", en **Colloque de Lyon. La Juridiction Internationale Permanente**, París 1987, pp. 73-78.

- M. BEDJAOUI "Universalisme et regionalisme au sein de la Cour Internationale de Justice: la constitution de Chambres «ad hoc»" en **Liber amicorum. Colección de estudios jurídicos en homenaje al Profesor Dr. D. José Pérez Montero**, Oviedo 1988, pp. 155-171.

- C. ESCOBAR HERNANDEZ "Las Salas *ad hoc* del Tribunal Internacional de Justicia", en **Hacia un nuevo Orden Internacional y Europeo. Homenaje al Prof. Dr. D. Manuel Díez de Velasco**, Madrid 1993, pp. 291-317.

- G. GUILLAUME **Les Formations restreintes des Juridictions Internationales**, París 1992.

- J.N.HYDE "A Special Chamber of the International Court of Justice: An Alternative to Ad Hoc Arbitration" en **AJIL**, 1968, vol. 62, núm.2, pp. 439-441.

- R. JENNINGS "Chambers of the International Court of Justice and Courts of arbitration" en **Humanité et Droit International. Mélanges René-Jean Dupuy**, Paris 1991, pp. 196-208.
- M. LACHS "Some Comments on Ad Hoc Chambers of the International Court of Justice" en **Humanité et Droit International. Mélanges René Jean Dupuy**, Paris 1991, p. 203-210.
- H. LEIGH y S.D. RAMSEY "Confidence in the Court: It Need not be a «Hollow Chamber»" en **The International Court of Justice at a Crossroads**, Nueva York, 1987, p. 106-122.
- M.A. LUKAS H. MEYER "The Ad Hoc Chambers: Perspectives of the Parties and the Court", en *Archiv des Völkerrechts*, 27 (1989), pp. 413-441.
- H. MOSLER "The ad hoc Chambers of the International Court of Justice: Evaluation after Five Years of Experience" en **International Law at a time of Perplexity. Essays in honour of Shabtai Rosenne**, pp. 449-460.
- R. OSTRIHANSKY en "Chambers of the International Court of Justice" en *ICLQ*, vol. 37, 1, 1988, pp. 30-52.
- A. PILLEPICH "Les Chambres" en **La Juridiction Internationale Permanente. Colloque de Lyon**, Paris 1987, pp. 45-72.
- A. DE SAAVEDRA Y MUGUELAR en "La creación y el funcionamiento de las Salas «ad hoc» del Tribunal Internacional de Justicia" en **Liber amicorum José Pérez Montero**, tomo III, Oviedo 1988, pp.1285-1303.
- S.M. SCHWEBEL "Ad hoc Chambers of the International Court of Justice" en *AJIL*, vol. 81-4 (1987) pp.831-854.

- S.M. SCHWEBEL "Chambers of the International Court of Justice Formed for Particular Cases" en **International Law Time of Perplexity. Essays in honour Shabtai Rosenne**, Dordrecht 1989, pp. 739-770.
- S.J. TOOPE "Pragmatic Compromise or mere Transaction? The Use of Chamber Procedures in International Adjudication", en *Va.JIL*, 1990-1, pp. 53-97.
- A. ZIMMERMANN "Ad hoc chambers of the International Court of Justice" en *DJIL*, vol. 8 nº1, pp.1-32.

1.2. - Estudios sobre los asuntos conocidos por las Salas *ad hoc*.

A) DELIMITACION DE LA FRONTERA MARITIMA EN EL GOLFO DE MAINE ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CANADA

- L.M. ALEXANDER **The Gulf of Maine Case: An International Discussion**, Nueva York, 1988.
- Hungdah CHIU: "The Problem of Delimiting the Maritime Boundary between the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf of Opposite States", en R.St.J. MACDONALD (ed.) **Essays in honour of Wang TIEYA**, Dordrecht, 1994, pp. 181-190.
- J. COOPER "Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area", en *Ocean Development and International Law Journal*, 1986-16, pp. 59 -90.

BIBLIOGRAFIA

- E. DECAUX "L'arrêt de la chambre de la Cour Internationale de Justice sur l'affaire de la délimitation de la frontière maritime dans le Golfe du Maine (Canada/Etats-Unis) arrêt du 12 octobre 1984" en AFDI, 1984, pp. 304 -339.
- N.P. DUNNING "Boundary Delimitation in the Gulf of Maine: implications for the Future of a Resource Area", en Ocean yearbook, 1986-6, pp. 390 -398.
- M. B. FELDMAN & D. COLSON "The Maritime Boundaries of the United States" en AJIL, 1981, vol.75 n°4, pp. 729 -763.
- G. GUYOMAR "La constitution au sein de la Cour Internationale de Justice d'une chambre chargée de régler le différend de frontières maritimes entre les Etats-Unis et le Canada" en AFDI, 1981, p.214 -221.
- D.N. HUTCHINSON "The Seaward Limit to Continental Shelf Jurisdiction in Customary International Law", BYIL, 1985, pp.111-188.
- L.H. LEGAULT "A Line for all uses: The Gulf of Maine Boundary Revisited", en International Journal, XL, 1985, pp. 461 -477.
- L.H. LEGAULT & D.M. McRAE "The Gulf of Maine" en CYIL, pp. 267 -290.
- T.L. McDORMAN, P.M. SAUNDERS & D. L. VANDERZWAAG "The Gulf of Maine Boundary. Dropping anchor or Setting a Course?", en MP, 1985 (9), pp. 90-107.
- D.M. McRAE " Adjudication of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine", en CYIL, 1979, p. 292 -303.
- D.M. McRAE "Proportionality and the Gulf of Maine Maritime Boundary Dispute" en CYIL, 1981, p. 287 -302.

- D.M. McRAE "Gulf of Maine Case (1984)", en D. PHARAND & V. LEANZA (ed.) **The Continental Shelf and the Exclusive Economic Zone**, Dordrecht, 1993, pp.119-127.
- E. McWHINNEY "Special Chambers within the International Court of Justice. The Preliminary Procedural aspect of the Gulf of Maine case" en SJIL&C,12, 1985, p. 1 -13.
- P. MENGOZZI "La funzione e i caratteri dell'acquiescenza e del riconoscimento nella pronuncia che ha peso la Camera Speciale della Corte Internazionale di Giustizia nel caso del Golfo del Maine", en B. VUKAS (ed.) **The Legal Regime of Enclosed or semi-enclosed seas: The Particular Case of the Mediterranean**, Zagreb, 1988.
- L.D.M. NELSON "The Roles of Equity in the Delimitation of Maritime Boundaries", en AJIL, 1990, vol. 84, n°4, pp. 837 -858.
- I. RAILEANU "Equity in Maritime Boundary Delimitations: *The Gulf of Maine Case*", en HICLR, 1991-3, vol. 14, pp. 669-711.
- Sang-Myon RHEE "Equitable Solutions to the Maritime Boundary Dispute Between the United States and Canada in the Gulf of Maine" en AJIL, julio 1981, vol. 75, n°3, pp. 590 -628.
- D.R. ROBINSON, D.A. COLSON & B.C. RASHKOW "Some Perspectives on Adjudicating before the World Court: The Gulf of Maine Case" en AJIL, 1985, vol. 79, n°3, pp. 578 -597.
- J. SCHNEIDER "The Gulf of Maine Case: The Nature of an Equitable Result" AJIL, 1985, vol. 79, n°3, pp. 539 -577.
- A.F. SHELLEY "Law of the Sea: Delimitation of the Gulf of Maine", en Harvard International Law Journal, 1985, vol. 26, pp. 646 -654.

- N.T.TERRES "The Gulf of Maine Delimitation", en MJIL&T, 1985-1, vol.9, pp. 117-186.
- L. DE VORSEY & M.C. DE VORSEY "The World Court Decision in the Canada-United States Gulf of Maine Seaward Boundary Dispute: A Perspective From Historical Geography", en Case Westerns Reserve Journal of International Law, 1986 (18) pp. 415 -442.
- E. ZOLLER "La première constitution d'une chambre spèciale par la Cour Internationale de Justice: Observations sur l'Ordonnance du 20 janvier 1982" en RGDIP, vol. 86 (1982), p.305-324.

B) DIFERENCIA FRONTERIZA ENTRE BURKINA FASO Y LA REPUBLICA DE MALI

- G. BARRIE "Uti Possidetis Versus Self Determination and Modern International Law: In Africa the Chickens Are Coming Home to Roost", en Tij.dskrif vir die Sud-Afrikaanse Reg, 1988-3, pp. 451-456.
- E. DECAUX "L'arrêt de la Chambre de la Cour Internationale de Justice dans l'affaire du différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) arrêt du 22 décembre 1986", en AFDI, 1986, t. XXXII, pp. 215-238.
- J.C. GAUTRON "Création d'une Chambre au sein de la Cour Internationale de Justice. Mesures conservatoires et médiation dans le différend frontalier entre le Burkina Faso et le Malí. Ordonnance du 10 janvier 1986", en AFDI, 1986, t. XXXII, pp. 192-214.

- Mvumbi-di-Ngoma MAVUNGU **Le règlement judiciaire des différends interétatiques en Afrique**, Friburgo, 1992.
- G.J. NALDI "The Case Concerning the Frontier Dispute between Burkina Faso and Mali: Provisional Measures of Protection", en ICLQ, vol. 35-4, 1986, pp. 971-975.
- G.J. NALDI "The Case Concerning the Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali): *Uti Possidetis* in an African Perspective", en ICLQ, vol. 36, 1987-4, pp. 893-903.
- J-P QUENEUDEC "Le Règlement du différend frontalier Burkina Faso/Mali par la Cour Internationale de Justice" en Revue Juridique et Politique, 1988.42, pp. 29-41.
- L.I. SANCHEZ RODRIGUEZ "*Uti possidetis*: la reactualización jurisprudencial de un viejo principio (a propósito de la sentencia del TIJ -Sala- en el asunto Burkina Faso/República de Malí)", en REDJ, 1988-2, vol. XL, pp. 121-151.

C) ELETTRONICA SICULA S.p.A. -ELSI- ESTADOS UNIDOS C. ITALIA

- M.H. ADLER "The Exhaustion of the Local Remedies Rule after the International Court of Justice's Decision in ELSI", en ICLQ, 1990, t.39-3, pp. 641 -653.
- T.D. GILL "Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (United States v. Italy). en AJIL, vol. 84, 1990-1, pp. 249 -267.

- E. GRISEL "L'arrêt de la Cour Internationale de Justice dans l'affaire de la Barcelona Traction (seconde phase): problèmes de procédure et de fond" en *Annuaire Suisse de Droit International*, 1971, t.XXVII, p.31 - 48.
- K.J. HAMROCK "The ELSI case: Toward an International Definition of «Arbitrary» Conduct", en *TILJ*, 1992-3, pp. 837-864.
- C. JEANCOLAS "L'arrêt Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) du 20 juillet 1989 (Etats-Unis d'Amerique c. Italie)" en *RGDIP*, 1990-3, p. 701 -742.
- P. JUILLARD "L'arrêt de la Cour Internationale de Justice (Chambre) du 20 juillet 1989 dans l'affaire de l'Elettronica Sicula (Etats-Unis c. Italie), procès sur un traité, ou procès d'un traité?", en *AFDI*, 1989, vol. XXXV, p. 276 -297.
- S.A. KUBIATOWSKI "The case of Elettronica Sicula S.p.A.: Toward Greater Protection of Shareholders'right in Foreing Investment" en *CJTL*, vol. 29, 1991-1, pp. 215 -244.
- F.A.MANN "Foreign Investment in the International Court of Justice: The ELSI Case", en *AJIL*, 1992, vol. 86-1, pp. 92 -102.
- I. SEIDL-HOHENVELDERN "ELSI and Badger the two Raytheon Cases", en *Rivista di Diritto Internazionale Privato e processuale*, 1990, n°2, p. 261 -276.
- J.D. SPOTA "Introductory Note", en *ICSID Review Foreign Investment Law Journal*, vol. 4 1989, pp. 320-329.
- B. STERN "La protection diplomatique des investissements internationaux. De Barcelona Traction, à Elettronica Sicula ou les glissements progressifs de l'analyse" en *JDI*, 1990-4, p. 897-948.
- P.D. TROOBOFF "International Decisions. Elettronica Sicula S.p.A. (United States v. Italy)", en *AJIL*, enero 1990, vol. 84 n°1, pp. 249-258.

- J.A. VIVES CHILLIDA "Las cuestiones relativas a la admisibilidad de la reclamación en la sentencia *Elettronica Sicula* -S.p.A. (ELSI) (Estados Unidos/Italia)" en REDI, 1992-1, vol. XLIV, pp. 7 -23.

D) DIFERENCIA FRONTERIZA TERRESTRE, INSULAR Y MARITIMA ENTRE HONDURAS Y EL SALVADOR

- M.A.BLEICHERT, "The Effectiveness of Voluntary Jurisdiction in the International Court of Justice: El Salvador v. Honduras, A Case in Point", en FILJ, 1992-1993, pp.799-847.
- E. DECAUX "Le différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras), arrêt de la Chambre de la C.I.J. du 11 septembre 1992. La délimitation terrestre", en AFDI, 1992, vol. XXXVIII, pp.393-426.
- C.A. HARTZENBUSCH, "International Litigation: Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras) Gen. No.75, 1992 I.C.J.-(Judgment of Sept.11)(Nicar.intervening)", en HILJ, 1993, vol. 34, pp.241-257.
- R. HERRERA CACERES **Honduras y El Salvador ante la Corte Internacional de Justicia**, Tegucigalpa, 1987.
- M. G. KOHEN "La requête à fin d'intervention du Nicaragua dans l'affaire du différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras). L'ordonnance de la Cour du 28 février 1990, et l'arrêt de la Chambre du 13 septembre 1990" en AFDI, 1990, p.341-367.
- L. LUCCHINI "Le différend entre le Honduras et El Salvador devant la C.I.J. Aspects insulaires et maritimes", en AFDI, 1992, vol. XXXVIII, pp. 427-459.

- G. MARTINEZ BLANCO **Enfoque histórico y jurídico de la controversia limítrofe entre Honduras y El Salvador**, Tegucigalpa, 1991.
- J.J. QUINTANA "The intervention by Nicaragua in the case between El Salvador and Honduras before an *ad hoc* chamber of the International Court of Justice" en NILR, 1991, pp. 199-208.
- S.R. RATNER "Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras), Application to Intervene. 1990 ICJ Rep. 92, 29 ILM 1345 (1990)" en AJIL, vol. 85, 1991-4, pp. 680-686.
- R. RIQUELME CORTADO "Las claves de la limitada autorización de intervención de Nicaragua en la controversia insular y marítima entre Honduras y El Salvador (Sentencia de la CIJ (Sala) de 13 de septiembre de 1990), en REDI, vol. XLIV, 1992.1, pp.25-56.
- R. RIQUELME CORTADO **La intervención de terceros Estados en el proceso internacional**, Tecnos 1993.
- I. SCOBIE "The International Court of Justice and the Gulf of Fonseca. When Two Implies Three but Entails One", en MP, 1994 (3), vol. 18, pp. 249-262.

2.- Corte Internacional de Justicia. Reforma del Reglamento.

- G. ABI-SAAB "De l'évolution de la Cour Internationale. Reflexions sur quelques tendances recentes", en RGDIP, vol. 96, 1992/2, pp. 273-298.
- M. BARTOS "La révision du Statut de la Cour Internationale de Justice", en *Revue de la Politique Internationale*, 1974, nº 570-593, pp. 9-11.

- C. DOLFEN "The World Court: Reform or Re-Appraisal", en CYIL, 1968, pp. 199-212.
- R.J. DUPUY "La Cour Internationale de Justice et le monde d'aujourd'hui" en RBDI, 1966.1, pp. 28-49.
- R.J. DUPUY "La réforme du règlement de la CIJ" en AFDI, 1972, pp. 265-283.
- R. FALK **The Role of Domestic Courts in the International Legal Order**, Nueva York, 1974.
- T. FRANK **Judging The World Court**, Nueva York 1986.
- G. GUYOMAR **Commentaire du Règlement de la Court Internationale de Justice. Interpretation et pratique**, Paris 1973.
- G. GUYOMAR **Commentaire du Règlement de la Court Internationale de Justice adopté le 14 avril 1978. Interpretation et pratique**, Paris 1983.
- L. GROSS "Conclusions", en **The Future of the International Court of Justice**, Nueva York , 1976, p. 727 -731.
- E. HAMBRO "Quelques observations sur la révision du Règlement de la CIJ" en **Mélanges offerts à Charles Rousseau**, Paris 1985, pp. 125-137.
- C. JENKS **The Prospects of International Adjudication**, 1964.
- P.C. JESSUP "The International Court of Justice Revisited", en Va.JIL, 1971-3, vol. 11, pp. 299-309.
- E. JIMENEZ DE ARECHAGA "Amendments to rules of procedure of the International Cour of Justice" en AJIL, vol. 67, 1973, pp. 1-22.

- E. JIMENEZ DE ARECHAGA "Les amendments au Règlement de la Cour Internationale de Justice" en **Conference Commémorative Gilberto Amado**, Ginebra 1972, p. 29 - 78.
- E. LUTZ "The World Court in a Changing World: An Agenda for Expanding the Court's Role from a United States Perspective". en *Stanford Journal of International Law*. 1990, vol. 91 (2), pp. 265-343.
- E. McDOWELL (ed) **Digest of United States Practice in International Law**, 1976.
- H. MOSLER & R. BERNHARDT (ed.) **Judicial Settlement of International Disputes**, 1974.
- D. PARTAN "Introduction: Increasing the Effectiveness of the International Court", en *HILJ*, 1977, pp. 559- 575.
- S. PETREN "Quelques réflexions sur la revision du Règlement de la Cour Internationale de Justice", en **Mélanges offerts à Charles Rousseau**, Paris 1974, pp. 187-198.
- A. QADEER "The International Court of Justice: A Proposal to Amend Its Statute", en *HJIL*, 1982, pp. 35 - 52.
- T.S. RAMA RAO "Review of functioning of the ICJ -some considerations relating to the amendment of its Statute" en *IJIL*, 1971, 11, pp. 20-37.
- R.M^a RIQUELME CORTADO "Constitución por la CIJ de una sala especializada en medio ambiente", en *REDI*, 1994-2, pp. 895-899.
- S. ROSENNE "The Changing Role of the International Court", en *Israel Law Review*, 1985, p. 182 -203.

- A. DE SAAVEDRA Y MUGUELAR "El nuevo Reglamento de la Corte Internacional de Justicia", en REDI, vol. 33, 1981-1, p.300-310.
- E. WEISS "Judicial Independence and Impartiality: A Preliminary Inquiry", en **The International Court of Justice at a Crossroads** (L. DAMROSCH ed.), Nueva York, 1987, pp. 123-154.

2.- Bibliografía complementaria.

2.1.- Generalidades de la Corte

- G. ABI-SAAB "De la jurisprudence. Quelques reflexions sur son rôle dans le développement du Droit International", en **Hacia un nuevo orden internacional y europeo. Homenaje al Prof. Dr. D. Manuel Díez de Velasco**, Madrid 1993, pp. 19-26.
- S.A. ALEXANDROV **Reservations in Unilateral Declarations Accepting the Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice**, Dordrecht, 1995.
- R. ALTAMIRA **El proceso ideológico del Tribunal de Justicia Internacional**, 1921.
- ANWAR-I-QADEER "The International Court of Justice: a Proposal to Amend its Statute" en HJIL, 1981-82, pp. 35-52.

- T.S. BATRA **International Institutions: The United Nations Charter and the International Court of Justice**, 2^a ed., Nueva Delhi 1987.
- M. BARTOS "La révision du Statut de la Cour Internationale de Justice", en *Revue de la Politique Internationale*, 1974, N° 570-593, pp. 9-11.
- J. BLOCISZEWSKI "De la competence de la Cour Permanente de Justice Internationale", en *RGDIP*, 1922, pp. 23-46
- A. BLOED & P. VAN DIJK (ed.) **Forty Years International Court of Justice: Jurisdiction, Equity and Equality**, Europa Instituut University of Utrecht, 1988
- Ph. BRETTON "Vers un élargissement de la Cour Internationale de Justice? La déclaration américano-soviétique du 23 septembre 1989 relative à une initiative commune à propos de la CIJ", en *AFDI*, 1990, vol. XXXVI, pp. 322-340.
- H.W. BRIGGS "Reservations to the Acceptance of Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice", en *R. des C.*, 1958-I, t. 93, pp. 223-367.
- H.W. BRIGGS "Barcelona Traction: The jus standi of Belgium", en *AJIL*, 1971-2, vol. 65, pp. 327 -372.
- V. BRUNS "La Cour Permanente de Justice Internationale. Son organisation et sa competence", en *R. des C.*, 1937-IV, t.62, pp. 551-671.
- M.A. CALOYANNI "L'organisation de la Cour Permanente de Justice Internationale et son avenir", en *R. des C.*, 1931, t. 38, pp. 655-785.
- G. CANSACCHI "L'identità e non continuità fra la Corte Permanente di Giustizia Internazionale e la Corte Internazionale di Giustizia" en *Comunicazioni e Studi*, vol. XIV, 1975, pp. 123-135.

- R. CASADO RAIGON "El enfoque jurisprudencial de los artículos 36 parágrafo 5º, y 37 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia", en REDI, vol. XXXIX, 1987-1, pp. 23-44.
- R. CASADO RAIGON **La jurisdicción contenciosa de la Corte Internacional de Justicia. Estudio de las reglas de su competencia**, Córdoba, 1987.
- A. COCATRE-ZILGIEN "Justice Internationale Facultative et Justice Internationale Obligatoire", en RGDIP, 1976-I, pp. 689-737.
- CONAC "L'affaire relative à l'incident aérien du 27 juillet 1955 entre Israël et la Bulgarie devant la Cour Internationale de Justice" en RGDIP, 1960, pp.711-736.
- B. CONFORTI "L'arrêt de la Cour Internationale de Justice dans l'affaire de la délimitation du Plateau Continental entre la Lybie et Malte", en RGDIP, 86-2, tomo 90, pp. 313-343.
- CORTE INTERNATIONAL DE JUSTICIA **La Corte Internacional de Justicia**, La Haya 1976.
- COUR PERMANENTE D'ARBITRAGE **Première Conference de Membres de la Cour. 10 et 11 septembre**, La Haya 1993.
- J. CRAWFORD "The Legal Effect of Automatic Reservations to the Jurisdiction of the International Court of Justice", en BYIL, 1979, pp. 63-86.
- J. CHARPENTIER "La Cour Internationale de Justice. Affaire de la Barcelona Traction Light and Power Company Limited -nouvelle requête:1962) (Belgique c. Espagne). Exceptions Préliminaires-Arrêt du 24 juillet 1964", en AFDI, 1964, pp. 327 -352.

- J. CHARPENTIER "La Cour Internationale de Justice. Affaire de la Barcelona Traction. Arrêt du 5 février 1970", en AFDI, 1970, pp. 307 -328.
- S.K. CHATTERJEE "The Role of the Ad-Hoc Judge in the International Court of Justice", en IJIL, 1979-1, pp. 372-381.
- B. CHENG **General Principles of Law as applied by International Courts and Tribunals**, Londres 1953.
- L.F. DAMROSCH **The International Court at a Crossroads**, Nueva York 1987.
- E. DECAUX "L'arrêt de la Cour Internationale de Justice dans l'affaire du Plateau Continental (Lybie/Malte). Arrêt du 3 juin 1985", en AFDI, 1985, pp. 294-323.
- L. DELBEZ **Les principes généraux du contentieux international**, Paris 1962.
- O. DELEAU "L'examen du rôle de la Cour Internationale de Justice par l'Assemblée Générale des Nations Unies", en AFDI, 1970, pp. 325-337.
- M. DUBISSON **La Cour Internationale de Justice**, Paris 1964.
- T.O. ELIAS "Report", en **Beitrag zum ausländisches öffentliches Volkerrecht**, 1974, vol. 62, pp. 19-33.
- T.O. ELIAS **The International Court of Justice and some Contemporary Problems**, La Haya 1983.
- C. ESPOSITO MASSICI **La jurisdicción consultiva de la Corte Internacional de Justicia**, Madrid 1996.

- A.P. FACHIRI **Permanent Court of International Justice**. 2ª ed., Londres 1932.
- R.A. FALK "Realistic Horizons for International Adjudication", en VAJIL, 1971-3 vol. 11, pp. 314-326.
- R. FALK **The Role of Domestic Courts in the International Legal Order**, Nueva York, 1974.
- G. FITZMAURICE "The Law and Procedure of International Court of Justice 1951-1954: Questions of Jurisdiction, Competence and Procedure", en BYIL 1958, p. 1 -159.
- G. FITZMAURICE **The Law and Procedure of the International Court of Justice**, Cambridge, 1986, vols. I y II.
- T. FRANK **Judging the World Court**. Nueva York 1986.
- G. FISCHER "Les réactions devant l'arrêt de la CIJ concernant le Sud-Ouest africain" en AFDI, 1966, p. 144 -176.
- C. GARCIA BAUER "El sistema Permanente de Justicia Internacional y la Corte de La Haya", en Revista de la Asociación Guatemalteca de Derecho Internacional, 1976-2, nº2, pp. 7-54.
- J. GARDNER "United States Termination of the Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice" en CJTL, 1986, nº24, pp.421-427.
- A. GIANELLI "La protezione diplomatica di societa' dopo la sentenza concernente la Barcelona Traction", en RDI, vol. LXIX, 1986, pp. 762-798.
- J.B. GOLDEN "The World Court: The Qualifications of the Judges", en Columbian Journal of Law and Social Problems, 1978, vol. 14-1, pp. 1-46.

- L. GROSS "Compulsory Jurisdiction under the Optional Clause History and Practice", en L.F. DAMROSCH (ed.) **The International Court of Justice at a Crossroads**, Nueva York 1987, pp.19-57.
- G. GUYOMAR "Le refus de compromettre et ses remèdes en Droit International Public positif", en RGDIP, 1960, pp. 499-515.
- E. HAMBRO "The Jurisdiction of the International Court of Justice", en R. des C. 1950-I, t. 76, pp. 123-213.
- T. HOLTON **An International Peace Court. Design for a Move from State Crime toward World Law**, La Haya, 1970.
- M.HUDSON **The Permanent Court of International Justice**, 2^a ed. Londres, 1943.
- M.W. JANIS (ed.) **International Courts For the Twenty-First Century** Dordrecht, 1992.
- R.Y. JENNINGS "The United Nations at Fifty. The International Court of Justice after Fifty Years", en AJIL, 1995, pp. 493-505.
- E. JIMENEZ DE ARECHAGA **La constitución de las Naciones Unidas** t.II, Madrid 1958.
- E. JIMENEZ DE ARECHAGA "The Work and the Jurisprudence of the International Court of Justice 1947-1986", en BYIL, 1987, pp. 1-38.
- I.S. KERNO "L'Organisation des Nations Unies et la Cour Internationale de Justice", R. des C., 1951-I, t.78, pp. 506-574.
- M.G. KOHEN "Le règlement des différends territoriaux à la lumière de l'arrêt de la Cour Internationale de Justice dans l'affaire Libye/Tchad", en RGDIP, 1995-2 pp. 301-342.

- B. KWIATKOWSKA "Judge Shigeru Oda's Opinion in Law-of-the- Sea Cases Equitable Maritime Boundary Delimitation", en GYbIL, 1993, vol. 36, pp. 225-294.
- J.F. LACHAUME "Le juge «ad hoc»" en RGDIP, 1966 vol 70, pp. 265-358.
- M. LACHS "Problems of the World Court: A Member's Perspective" en New York Center for International Studies Policy Papers, 1970, vol.3, n°4, pp. 1-25.
- M. LACHS "Le Juge International à visage découvert, les Opinions et le vote" en **Libro Homenaje al Profesor A. Miaja**, t.II, Madrid 1979, pp. 939-959.
- M. LACHS "A Few Thoughts on the Independence of Judges of the International Court of Justice", en CJTL, 1987, pp. 593-600.
- M. LACHS "Evidence in the Procedure of the International Court of Justice: Role of the Court", en **Contemporary International Law and Human Rights. Essays in honour of Judge Taslim Olawale Elias**, vol. I, Dordrecht 1992, pp. 265-276.
- H. LAUTERPACHT **The Development of International Law by the International Court**, Londres, 1958.
- E. LAUTERPACHT **Aspects of the Administration of International Justice**, Cambridge, 1991.
- R.S. LEE "A Case for Facilitation in the Settlement of Disputes", en GYIL, vol. 34, 1991, pp. 138-174.
- J-V LOUIS "Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company Limited. Exceptions Préliminaires. L'arrêt de la Cour Internationale de Justice du 24 juillet 1964", en RBDI, 1965-1, p. 253 -278.

- J-V LOUIS "L'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company Limited. Deuxième phase. L'arrêt du 5 février 1970 de la Cour Internationale de Justice", en RBDI, 1971-1, p. 347 -367.
- L.C. MARION "La saisine de la Cour Internationale de Justice par voie de compromis", en RGDIP, t. 100, 1995-2, pp. 257-300.
- E. McWHINNEY "Law, Politics and «Regionalism» in the Nomination and Election of World Court Judges", en SIJL&C, 1986, pp. 1-27.
- E. McWHINNEY "Judicial Settlement of Disputes. Jurisdiction and Justiciability en R. des C., 1990-II, t.221, pp. 13-194.
- E. McWHINNEY **Judicial Settlement of International Disputes. Jurisdiction, Justiciability and Judicial Law-Making on the Contemporary International Court**, Dordrecht, 1991.
- E. McWHINNEY "'Internationalizing' The International Court: The Quest for Ethno-Cultural and Legal-Systemic Representativeness", en **Contemporary International Law and Human Rights. Essays in honour of Judge Taslim Olawale Elias**, vol. I, Dordrecht 1992, pp. 277-289.
- M. MEDINA **La Organización de las Naciones Unidas**, Madrid 1974.
- J. MERRILLS "The Optional Clause Today", en BYIL, 1979, pp. 86-116.
- J. MERRILLS **International Dispute Settlement**, Londres 1984.
- A. MIAJA DE LA MUELA **Aportación de la sentencia del Tribunal de La Haya en el caso Barcelona Traction (5 de febrero de 1970) a la jurisprudencia internacional**, Valladolid, 1970.
- A. MIAJA DE LA MUELA "Derecho y política en el Tribunal Internacional de Justicia" en REDI, 1954, pp. 463-490.

- A. MIAJA DE LA MUELA "La «sucesión» del Tribunal Permanente de Justicia Internacional por el Tribunal Internacional de Justicia" en **Estudios sobre el Tribunal Internacional de Justicia**, Zaragoza 1967, pp.39-72.
- L. MILLAN MORO "El juez «ad hoc» en la Corte Internacional de Justicia" en **Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz**, 1990 p. 213-258.
- J. MONNIER "Le Règlement pacifique des litiges internationaux diagnostic et perspectives", en *Annuaire Suisse de Droit International*, 1981, vol. XXXVII, pp. 9-24.
- G. MORELLI "La Théorie générale du procès international", en *R. des C.*, 1937, III, t. 61, pp. 253-373.
- H. MOSLER "The Area of Justiciability: Some Cases of Agreed Delimitation in the Submission of Disputes to the International Court of Justice", en **Essays in International Law in honour of Judge Manfred Lachs**, La Haya 1984, pp. 409-421.
- E.K. NATWI **The Enforcement of International Judicial Decisions and Arbitral Awards in International Law**, Leiden 1966.
- L.D.M. NELSON "The Arbitration of Boundary Disputes in Latin America", en *NILR*, 1973, pp. 267-298.
- R. NUÑEZ ESCALANTE "La cláusula facultativa de competencia obligatoria de la Corte Internacional de Justicia", en *Estudios Internacionales*, 1, 1971, pp. 34-43.
- D.D. NSEREKO "The International Court, Impartiality and Judges Ad Hoc", en *IJIL*, 1979, pp. 207-230.

- S. ODA "The International Court of Justice viewed from the Bench (1970-1993)", en *R.des C.*, 1993-7, vol. 244 pp. 9-190.
- K. OELLERS-FRAHM "Compromis" en BERNHARDT (ed.) *EPIL*, t.I (1981), pp. 46 -48.
- E. ORIHUELA CALATAYUD "España y la jurisdicción obligatoria del Tribunal Internacional de Justicia" en *REDJ*, vol. XLI, 1989-I, pp. 68-105.
- E. ORIHUELA CALATAYUD "La Sentencia dictada por el TIJ en el asunto relativo a la delimitación de la Plataforma Continental entre la Jamahiriya Araba Libia y Malta", en *REDI*, 1988-2, vol. XL, pp. 105-120.
- J.A. PASTOR RIDRUEJO **La jurisprudencia del Tribunal Internacional de La Haya (Sistematización y comentarios)**, Madrid, 1962.
- S. PETREN "La Cour Internationale de Justice comme juridiction de recours" en *Comunicazioni e studi*, vol. XIV, 1975, pp. 687-697.
- M. Ch. PHILIP y M. J.-Y. DE CARA: "Nature et evolution de la juridiction internationale" en **Colloque de Lyon. La Juridiction Internationale Permanente**, Paris 1987, p.3 -43.
- A. PIERO SERENI **La Jurisdicción Internacional**, Valladolid, 1969.
- R. PINTO "L'Organisation judiciaire internationale: La Cour Internationale de Justice" en *J.CI.DI.*, fascs. 216, 217, 218.
- L.V. PROTT "The Role of the Judge of the International Court of Justice", en *RBDI*, 1974-2, vol. X, pp. 473-507.
- A. REMIRO BROTONS **Discurso de investidura de Doctor "Honori Causa" de José María Ruda**, Madrid 1990.

- S.M. SCHWEBEL "Preliminary Rulings by the International Court of Justice and the Instance of National Courts", en *Va.JIL*, 1988(28), pp. 495-506.
- L. SICO "Les affaires Tunisie/Libie (1982). Guinée/Guinée-Bissau (1985) et Libye/Tunisie (1985)", en D. PHARAND & V. LEANZA (ed.) **The Continental Shelf and the Exclusive Economic Zone**, Dordrecht, 1993, pp.133-141.
- N. SINGH **International Judicial Jurisdiction**, Dordrecht, 1989.
- N. SINGH **The Role and Record of the International Court of Justice**, Leyde 1989.
- L. SIORAT: "L'article 37 du Statut de la Cour Internationale de Justice" en *AFD*, 1962, pp. 285-330.
- J. SIOTIS "The Institutions of the League of Nations" **The League of Nations in retrospect**, N.U. 1983 .
- R. SZAFARZ **The Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice**, Dordrecht, 1993.
- K. TANAKA "Independence of International Judges" en *Comunicazioni e studi* vol. XV, 1975, pp. 855-871.
- S. TORRES BERNARDEZ "La «Reciprocidad» en el «sistema de jurisdicción obligatoria» establecido en el art. 36, párrafo 2 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia", *Cursos Internacionales de Vitoria-Gasteiz*, 1988, Universidad del País Vasco, pp. 317-438.
- S. TORRES BERNARDEZ "Resignations at the World Court", en Y. DINSTEIN (ed.) **International Law at a time of Perplexity. Essays in Honour of Shabtai Rosenne**, Dordrecht, 1989, pp. 953-975.

- S. TORRES BERNARDEZ "Reciprocity in the System of Compulsory Jurisdiction and in other Modalities of Contentious Jurisdiction Exercised by the International Court of Justice", en **Contemporary International Law and Human Rights. Essays in honour of Judge Taslim Olawale Elias**, vol. I, Dordrecht 1992, pp. 291-329.
- S. TORRES BERNARDEZ "La función de la Corte Internacional de Justicia en el sistema de la Carta de las Naciones Unidas", **Congreso de las Naciones Unidas sobre Derecho Internacional Público**, Nueva York, 1995.
- M. VIRALLY "Le champ opératoire du règlement judiciaire international" en *RGDIP*, t.87, 1983-2, pp. 281-314.
- Ch. de VISSCHER "La Cour Permanente de Justice Internationale et son rôle dans le règlement des différends entre Etats", en *Nordisk Tidsskrift for International Ret*, 1933, pp. 145-157.
- Ch. de VISSCHER **Problèmes d'interprétation judiciaire en Droit International Public**, Paris 1963.
- Ch. de VISSCHER **Aspects récents du droit procédural de la Cour Internationale de Justice**, Paris 1966.
- C.H.M. WALDOCK "Decline of the Optional Clause " en *BYIL*, 1955-56, vol. XXXII, pp. 244-287.
- F.P. WALTERS **Historia de la Sociedad de Naciones**, Madrid 1972.
- E. WARREN "Toward a More Active International Court", en *Va.JIL*, 1971-3, vol. 11, pp. 295-298.
- L.A. WILLIS "From Precedent to Precedent: The triumph of Pragmatism in the Law of Maritime Boundaries", en *CYIL*, 1986, vol. XXIV, pp. 3-60.

-A.C. ZAMORA RODRIGUEZ **Intereses territoriales de Nicaragua: San Andrés y Providencia, Cayos, Golfo de Fonseca, Río San Juan** Managua,1995.

2.2.- Procedimientos incidentales.

- G. ABI-SAAB **Les Exceptions Préliminaires dans la procédure de la Cour Internationale**, Paris 1967.

- F. AMMOUN "La jonction des Exceptions Preliminaires au fond en Droit International Public", en Comunicazioni e studi, vol. XIV, 1975. pp. 17-39.

- M. BARTOS "L'intervention yougoslave dans l'affaire du Détroit de Corfou", en Comunicazioni e studi, vol. XIV, 1975, pp.41-53.

- P. BERNARDINI "Arbitrato internazionale e misure cautelari", en Rivista dell'arbitrato, 1993-1, pp. 13-27

- M. BETTATI "L'affaire du Plateau Continental de la mer Egée devant la Cour Internationale de Justice: demande en indication de mesures conservatoires, ordonnance du 11 septembre 1976", en AEDI, 1976, vol. XXII, pp. 99-115.

- H.W. BRIGGS "La compétence incidente de la Cour en tant que compétence obligatoire", en RGDIP, 1960, vol. 64, p. 217-229.

- G. CELLAMARE "La competenza a decidere sull'ammissibilità dell'intervento nel processo pendente dinanzi ad una camera della Corte Internazionale di Giustizia", en RDI, 1990-2, pp. 383-385.

- G. CELLAMARE "In tema di intervento ai sensi dell'art.63 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia", en RDI, 1985-4, pp. 817-823.
- A. COCATRE-ZILGIEN "Les mesures conservatoires en Droit International", en Revue Egyptienne de Droit International, 1955, vol. 11, pp. 73-114.
- A. COCATRE-ZILGIEN "Les mesures conservatoires décidées par le juge ou l'arbitre international", en RGDIP, 1966, vol. 37, p. 2-41.
- A. DAVI **L'Intervento davanti alla Corte Internazionale di Giustizia**, Nápoles 1984.
- E. DECAUX "L'intervention" en **Colloque de Lyon. La Juridiction Internationale Permanente**, París 1987, pp. 219-255.
- E. DUMBAULD **Interim Measures of Protection in International Controversies**, La Haya 1932.
- T.O. ELIAS "The International Court of Justice and the Indication of Provisional Measures of Protection", en **Gilberto D'Amado Memorial Lecture**, 1978.
- T.O. ELIAS "The Limits of the Right of Intervention in a Case before the International Court of Justice" en **Völkerrecht als Rechtsordnung Internationale Gerichtsbarkeit Menschenrechte Festschrift für Hermann Mosler**, Nueva York, 1983, pp. 159-172.
- J.B. ELKIND **Interim Protection. A functional Approach**, La Haya 1981.
- GOLDSWORTHY "Interim Measures of Protection in the International Court of Justice", en AJIL, 1974, pp. 258 -279.
- D.W. GREIG "The Balancing of Interests and the Granting of Interim Protection by the International Court", en **Australian Yearbook of International Law**, 1995, vol. 11, pp. 108-140.

- P. GUGGENHEIM **Les mesures provisoires de procédure Internationale et leur influence sur le développement du Droit des gens**, Paris, 1931.
- P. GUGGENHEIM "Les mesures conservatoires dans la procédure arbitrale judiciaire", *R. des C.*, 1932-II, vol. 40, pp. 645-761.
- A. HAMMARSKJOLD "Quelques aspects de la question des mesures conservatoires en Droit International Positif", en *Juridiction Internationale*, Leiden, 1938.
- E. HAMBRO "The Binding Character of the Provisional Measures of Protection Indicated by the International Court of Justice", en **Rechtsfragen der Internationalen organisation. Festschrift für Hans Wehberg zu seinem 70 Geburtstag** (V. KLOSTERMANN ed.), Frankfurt, 1956.
- E. HAMBRO "Intervention Under Article 63 of the Statute of the International Court of Justice Latests Developments", en **Studi in onore di Manlio Udine**, Milán 1975, pp. 397-407.
- P.C. JESSUP "Intervention in the International Court" en *AJIL*, vol. 75, 1981-1982, pp.903-909.
- E. JIMENEZ DE ARECHAGA "Intervention Under Article 62 of the Statute of the International Court of Justice", en **Völkerrecht ab Rechtsordnung Internationale**, 1983, pp. 453-465.
- K. HERNDL "Borchgrave case" en *EPIL*, t.2, pp. 37-39.
- P. LAMBERTI ZANARDI "Il procedimento sulle eccezioni preliminari nel processo davanti alla Corte Internazionale di Giustizia", en *RDI*, 1965, pp. 531-568

- P. LAMBERTI ZANARDI "Forme nuove di contestazione della competenza della Corte Internazionale di Giustizia e potere della Corte di apprire d'ufficio il procedimento sulla competenza" en Comunicazioni e Studi, vol. XIV, 1975, pp. 439-477.
- M. MABROUK **Les exceptions de procédure devant les juridictions internationales**, Paris, 1966.
- MENDELSON "Interim Measures of Protection in Cases of Contested Jurisdiction", en BYIL, 1972-73, p. 307 -348.
- J.T. MILLER "Intervention in Proceedings Before the International Court of Justice", en **The Future of the International Court of Justice** (L. GROFFIER ed.), vol. II, 1976, pp. 550-571.
- G. MORELLI "Eccezioni preliminari di merito?", en RDI 1975, pp. 5-11.
- G. MORELLI "Note sull'intervento nell processo internazionale" en RDI, 1980, pp.805-815.
- G. MORELLI "Sul controllo della Corte Internazionale di Giustizia circa l'ammissibilità dell'intervento in causa" en RDI, 1984-1, p.7-15.
- G. MORELLI,"Questioni preliminari nel processo internazionale" en RDI, 1977, pp. 43-56.
- G. MORELLI "Fonction et objet de l'intervention dans le procès international" en **Essays in International Law in honour of Judge Manfred Lachs**, 1984, Haya 1984, pp. 403-408.
- S. ODA "Intervention in the International Court of Justice. Articles 62 and 63 of the Statute", en **Völkerrecht ab Rechtsordnung Internationale**, 1980, pp. 629-648.

- K. OELLERS-FRAHM "Interim measures of protection" en EPIL, t.1 (1981), pp.69 -72.
- P. PESCATORE "Les mesures conservatoires et les Referes" **Colloque de Lyon. La juridiction internationale Permanente**, Paris, 1987, p.315-362.
- H.A. ROLIN "Force obligatoire des Ordonnances de la Cour Permanente de Justice Internationale en matière de mesures conservatoires", en **Mélanges offerts à Ernest Mahaim**, tomo II, Paris, 1935, p. 280-298.
- S. ROSENNE "The reconceptualization of objections in the International Court of Justice" en Comunicazioni e studi, vol. XIV, 1975, p. 740 -761.
- S. ROSENNE "Some reflections on Intervention in the International Court of Justice", en NILR, 1987, pp. 75-90.
- S. ROSENNE **Intervention in the International Court of Justice**, Dordrecht, 1993.
- Ch. ROUSSEAU "Le Règlement arbitral et judiciaire et les Etats tiers", en **Mélanges offerts à Henri Rolin. Problèmes de Droit des Gens**, Paris, 1964, pp. 300-310.
- E.S.A. SALKIEWICZ **Les mesures conservatoires dans la procédure des deux Cours de La Haye**. Memoria presentata para el Diploma de IUHEI de Ginebra, Marzo de 1984.
- I.F.I. SHISHATA **The Power of the International Court of Justice to Determine its own Jurisdiction. Compétence de la Compétence**, La Haya 1965.
- A.M. STUYT "«contre-memoire» ou livre blanc? Nouvelles tendances à la Cour Internationale de Justice", en RGDIP, 1978-II, pp. 401-433.

- G. SPERDUTTI "La recevabilité des exceptions préliminaires de fond dans procès international", RDI, 1970, pp. 461-490.
- G. SPERDUTTI " Le eccezioni tratte dalla nozione di dominio riservato qu eccezioni preliminari di merito" en RDI, 1974, pp.649 -656.
- G. SPERDUTI "Notes sur l'intervention dans le procès international" en AFDI 1984, vol. XXX, p. 273-281
- G. SPERDUTTI "L'intervention de l'état tiers dans le procès international: une nouvelle orientation", en AFDI, 1985, vol. XXXI, pp. 286-293.
- G. SPERDUTTI "La sauvegarde des droits de l'Etat tiers dans le procès devant la Cour Internationale de Justice" en RDI, 1988, pp.86-93.
- G. SPERDUTI "Etude sur l'intervention dans le procès internationale" en **Hacia un nuevo orden internacional y europeo. Homenaje al Prof. Manuel Díez de Velasco**, Madrid 1993, pp.713-717.
- J. SZTUCKI **Interim Measures in the Hague Court**, Deventer, 1983.
- G. TESAURO "Le misure cautelari della Corte Internazionale di Giustizia", en Comunicazioni e Studi, vol. 14, 1979, pp. 873-901.
- H.W.A. THIRLWAY "Preliminary Objections" en EPIL, tomo I (1981), p. 178-180
- H.W.A. THIRLWAY "The Indication of Provisional Measures by the International Court of Justice", en R. BERNHARDT (ed.) **Interim Measures Indicated by International Courts**, Berlin 1993, pp. 1-36.
- U. VILLANI "In tema di indicazioni di misure cautelari da parte della Corte Internazionale di Giustizia" en RDI, 1974, pp. 670-676

- U. VILLANI "Le misure cautelari nell'affaire della piattaforma continentale del mare Egeo" en RDI, vol. LX, 1977, p.137.
- J.C. WITENBERG "La Recevabilité des Réclamations devant les Juridictions Internationales", en R. des C., 1932 -III, vol. 41, pp. 3-136.
- B.A. WORTLEY, Q.C. "Interim reflections on procedures for interim measures of protection in the International Court of Justice" en Comunicazioni e studi, vol. XIV, 1975, pp. 1009-1019.

2.3.- Sentencias de la Corte. Efectos, ejecución y recursos

- M. BEDJAOUI "La fabrication des arrêts de la Cour Internationale de Justice" en **Mélanges Virally**, pp. 87-107.
- E. BOREL "Les voies de recours contre les sentences arbitrales", en R. des C. 1935-II, pp. 3-169
- L. CAVARE "L'arrêt de la CIJ du 18 Novembre 1960 et les moyens d'assurer l'exécution des sentences arbitrales", en **Mélanges offerts à Henri Rolin**, **Problèmes de Droit des Gens**, Paris, 1964, pp. 39-54.
- L. CAVARE "La notion de Jurisdiction Internationale", en AFDI, 1956, pp. 49-509.
- L. CAVARE "Quelques remarques sur les recours en interprétation des arrêts rendus par les Cours de Justice Internationale à propos de l'arrêt n°5-55 du 2 juin 1955 de la Cour de Justice de la CECA", en **Hommage d'une génération de juristes au Président Basdevant**, Paris 1960, pp. 96-113.

- M. DECLEVA "Opinioni Dissenzienti e Principio della public nell'ordinamento della Corte Internazionale dell'Aia", en Comunicazioni e stu vol. XIV, 1975, pp. 267-282.
- A. EL-OUALI **Effets Juridiques de la Sentence International Contribution à l'étude de l'exécution des normes internationale** Paris, 1984.
- E. GAJA "Considerazioni sugli effetti delle sentenze di merito della Cor Internazionale di Giustizia", en Comunicazioni e Studi, vol. XIV, 1975, pp. 31 335.
- L. GROSS "Limitations upon the Judicial Function" en AJIL, 1964-2, pp.41 431.
- L. GROSS "Observations sur le mode de délibération de la Cour Internationa de Justice", en Comunicazioni e studi, vol. XIV, 1975, pp. 377-386.
- G. GUYOMAR "La révision par la Cour Internationale de Justice de la résolutio visant la pratique interne de la Cour en matière judiciaire", AFDI, 1976, pp. 11 119.
- H.J. HAHN "International Organizations, Succesion" en EPIL vol. 5, pp. 16 168.
- R. JENNINGS "The Collegiate Responsibility and Authority of the Internation Court of Justice", en L.F. DAMROSCH (ed.) **The International Court at Crossroads**, Londres 1987, pp. 343-353.
- R. JENNINGS "Judicial Reasoning at an International Court", en Vorträge Bedem und Berinte aus dem Europa Institut, Nr. 236, 191, pp. 1-8.

- LIMBURG "L'autorité de chose jugée des décisions des juridictions internationales", R. des C., 1929-V, vol.nº30, pp. 523-615.
- R. MONACCO "Les Jugements Internationaux déclaratoires ou applicateurs des principes généraux", en **Essays in International Law in Honour of Judge Manfred Lachs**, la Haya 1984, pp.389-401.
- G. MORELLI "Sulla Nozione di Sentenza Internazionale Dichiarativa", en **Droit Internationale à l'heure de sa codification. Etudes en l'honneur de Roberto Ago**, Milán, 1987, pp. 209-217.
- M.C. ORTEGA CARCELEN "Análisis del valor creador de la jurisprudencia en el Derecho Internacional", en REDI, 1988-2, vol. XL, pp. 55-87.
- P. PAONE "Considerazioni sull'esecuzione delle sentenze della Corte Internazionale di Giustizia", en Comunicazioni e studi, vol. XIV, 1975, pp. 621-670.
- S. ROSENNE "Le règlement arbitral et judiciaire et les États tiers", en **Mélanges offerts à Henri ROLIN. Problèmes de Droit des gens**, Paris 1964, pp. 300-310.
- S. ROSENNE "Article 27 of the Statute of the International Court of Justice", en Va.JIL, 1991, pp. 213-231.
- G. SALVIOLI "La jurisprudence de la Cour Permanente de Justice Internationale", en R. des C., 1926-II, pp. 5-114.
- S. TORRES BERNARDEZ "A propos de l'interpretation et de la revision des arrêts de la Cour Internationale de Justice", en **Le Droit Internationale à l'heure de sa codification. Études en l'honneur de Roberto Ago**, Milán 1987, pp. 443-496.

- E. TUNCEL **L'exécution des décisions de la Cour International Justice selon la Charte des Nations Unies**, Neuchâtel, 1960.
- E. ZOLLER "Observations sur la révision et l'interprétation des sentenc arbitrales", en AFDI, 1978, pp. 327 -360.

2.4.- Otros Tribunales Internacionales

- R. ALONSO GARCIA **Derecho Comunitario. Sistema constitucional administrativo de la Comunidad Europea**, Madrid, 1994
- J.B. ACOSTA ESTEVEZ **Proceso, procedimiento y recursos ante Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas**. Barcelona 1988.
- J.M. BANDRES SANCHEZ-CRUZAT **El Tribunal Europeo de l Derechos del Hombre**, Barcelona 1983
- J. BOULOIS **Droit Institutionnel des Communautés Européennes**, ed. París, 1991.
- J. DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ "la reforma institucional de l Comunidades Europeas acordada en Maastricht", en Gaceta Juridica de Comunidad Europea, D-18, pp. 9-96.
- P. DURAN Y LALAGUNA **Manual de Derechos Humanos**, Granada 1983
- M-A EISSEN **El Tribunal Europeo de Derechos Humanos**, Madrid 198
- E. GARCIA DE ENTERRIA, E. LINDE, L.I. ORTEGA y M. SANCHEZ MORON **sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos**, 2ª e Madrid 1983.

- D. HERRENDORF **Principios de Derechos Humanos y Garantías**, Buenos Aires, 1991.
- K.P.E. LASOK **The European Court of Justice. Practice and Procedure**, Londres 1994.
- E. LINDE PANIAGUA **El sistema europeo de protección de los Derechos Humanos**, Madrid 2ªed. 1983.
- J. LOPEZ BARJA DE QUIROGA **El Convenio, el Tribunal Europeo y el Derecho a un juicio justo**, Madrid 1991.
- J.M. MORENILLA RODRIGUEZ **El Convenio Europeo de Derechos Humanos: Ambito, órganos y procedimientos**, Madrid 1985
- L. NEVILLE BROWN & T. KENNEDY **The Court of Justice of the European Communities**, Londres 1994.
- K. RIECHENBERG "El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", en **El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El Tribunal de Primera Instancia** (ed. Gobierno Vasco, Jornadas de San Sebastián 11-18 de octubre), Bilbao, 1991, pp. 83-98.
- G. SCHRANS "La Comunidad y sus instituciones", en **Treinta años de Derecho Comunitario**, Luxemburgo 1984, pp. 17-34.
- R. SILVA DE LAPUERTA **El procedimiento ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas**, 2ª ed. Madrid 1993
- G. VANDERSANDEN & A. BARAV **Contentieux Communautaire**, Bruselas 1977.

3.- Obras Generales

- J. BARBERIS "Los actos jurídicos unilaterales como fuente del Derecho Internacional Público", en **Hacia un nuevo orden internacional europeo. Homenaje al Prof. Dr. D. Manuel Díez de Velasco**, Madrid 1993, pp. 101-116.
- V.D. DEGAN **L'interprétation des accords en Droit International**, L. Haya, 1963.
- M. DIEZ DE VELASCO **Instituciones de Derecho Internacional Público**, 9ª ed., Madrid 1991.
- T.O. ELIAS **The Modern Law of Treaties**, Leiden, 1974.
- J.D. GONZALEZ CAMPOS, L.I. SANCHEZ RODRIGUEZ Y M.P. ANDRE SAENZ DE SANTA MARIA **Curso de Derecho Internacional Público**, Madrid 1990.
- H. KELSEN **The Law of the United Nations**, Londres 1951.
- D.P. O'CONNELL **International Law**, vol. II, 2ª ed., Londres 1970.
- J.A. PASTOR RIDRUEJO **Curso de Derecho Internacional Público Organizaciones Internacionales**, 5ª ed. Madrid 1994.
- P. PAZARTZIS **Les Engagements Internationaux en matière de Règlement Pacifique des Différends entre États**, Paris 1992.
- A. REMIRO BROTONS **Derecho Internacional Público. 1. Principios Fundamentales**, Madrid 1982.

- A. REMIRO BROTONS **Derecho Internacional Público. 2. Derecho los Tratados**, Madrid, 1987.
- Ch. ROUSSEAU **Derecho Internacional Público**, 3ª ed, Barcelona 1966.
- L.I. SANCHEZ RODRIGUEZ "Problemas de fronteras en América: Las fronteras terrestres entre países iberoamericanos", en **Derecho Internacional Público: Problemas actuales**, Madrid, 1993, pp. 183-228.
- E. SCHWARZANBERGER **International Law**, Londres, 1948, tomo II.
- J. TACSAN **The Dynamics of International Law in Conflict Resolution** Dordrecht 1992.

4. Documentos más utilizados

4.1. Textos normativos

- Pacto de la Sociedad de Naciones, Paris, 25 de enero de 1919.
- Carta de las Naciones Unidas, San Francisco, 26 de junio de 1945.
- Estatuto de la CPJI de 1920 en CPJI Serie D, núm.1, 1ª ed., pp. 29-50.
- Estatuto de la CPJI de 1926, en CPJI Serie D, núm.1, 1ª ed pp. 7-27.
- Estatuto de la CPJI de 1936 en CPJI Serie D, núm 1, 4ª ed., 1940, pp. 13-30.
- Reglamento de la CPJI de 1922, en CPJI Serie D, núm. 1, 1ª ed., pp. 66-82
- Reglamento de la CPJI de 1926, en CPJI Serie D, núm.1, 1ª ed. pp. 33-65

- Reglamento de la CPJI de 1936 en CPJI Serie D, 4ª ed., 1940, pp. 31-61.
- Estatuto de la CIJ de 26 de junio de 1945, en CIJ Actes and Documents concerning the Organization of the Court., núm. 1, 2ème ed., Mayo 1947, pp. 3-52.
- Reglamento de la CIJ de 6 de mayo de 1946, en CIJ Actes and Documents concerning the Organization of the Court , núm. 1, 2ème ed., Mayo 1947, pp. 5-83.

4.2. Decisiones de la CPJI

- Opinión consultiva de 23 de julio de 1923, acerca del *Estatuto de Carestía Oriental* , en CPJI Série A/B , nº4.
- Sentencia de 17 de agosto de 1923, en el *asunto del vapor Wimbledon* , en CPJI Série A/B, nº5.
- Opinión consultiva de 15 de septiembre de 1923, sobre la *Concesión de Ciudadanía polaca* , en CPJI Serie A/B, nº7.
- Sentencia de 30 de agosto de 1924 en el asunto de las *Concesiones Mavrommatis en Palestina* en CPJI Série A/B, nº9.
- Sentencia de 12 de septiembre de 1924, en el *asunto del Tratado de Neuilly artículo 179 parte IX, sección IV, anexo, parágrafo 4º (Interpretación)* , en CPJI Série A/B nº11.
- Sentencia de 26 de marzo de 1925, en el asunto de la *interpretación de sentencia número 3*, en CPJI Série A/B, nº13.

BIBLIOGRAFIA

- Sentencia de 26 de marzo de 1925 en el asunto de las *Concesiones Mavrommatis en Jerusalem* , en CPJI, en Série A/B, nº14.
- Opinión de 16 de mayo de 1925 sobre *el servicio postal polaco en Dantzig*, CPJI Série A/B, nº 15.
- Sentencia de 25 de agosto de 1925 en el asunto de *Ciertos intereses alemanes en la Alta Silesia polaca*, en CPJI, Série A/B, nº16.
- Opinión consultiva de 21 de noviembre de 1925 acerca de *la interpretación del artículo 3. parágrafo 2 del Tratado de Lausana*, en CPJI Série A/B, nº 17.
- Opinión Consultiva de 23 de julio de 1926, acerca de *la Competencia de Organización Internacional del Trabajo para regular accesoriamente el trabajo personal del patrón*, en CPJI Série A/B, nº 19.
- Sentencia de 18 de junio de 1927 en el asunto *relativo a la denuncia del tratado chino belga-indicación de medidas cautelares-* , en CPJI Séries A/B nº20.
- Sentencia de 26 de julio de 1927, en el asunto *de la Fábrica de Chorzow (demanda de indemnización-competencia)*, en CPJI Série A/B, nº21.
- Sentencia de 10 de octubre de 1927, en el asunto de las *Concesiones Mavrommatis en Jerusalén*, en CPJI Série A/B, nº23.
- Sentencia de 16 de diciembre de 1927 en el asunto de la *Interpretación de las sentencias nº 7 y 8 -Fábrica de Chorzow-* , en CPJI Séries A/B nº 26.
- Sentencia de 26 de abril de 1928 en el asunto relativo a *algunos derechos de las minorías en la Alta Silesia (Escuelas menores)*, en CPJI Série A/B, nº29.
- Sentencia de 13 de septiembre de 1928 en el asunto *de la fábrica Chorzow, -demanda de indemnización-fondo-* CPJI Serie A/B, nº32.

- Sentencias de 12 de julio de 1929 en el *Asunto relativo al pago de distintos empréstitos serbios emitidos en francos y asunto relativo al pago en oro de empréstitos federales brasileños emitidos en francos* , en CPJI Séries A/B, nº 3.
- Ordenanza de 19 de agosto de 1929 en el asunto de *las Zonas francas de Alta Savoya y del País de Gex* , CPJI Séries A/B, nº22.
- Sentencia de 10 de noviembre de 1929, en el asunto de la *jurisdicción territorial de la Comisión Internacional del Order*, CPJI Série A, nº23, p. 27.
- Opinión consultiva de 4 de febrero de 1932 sobre el *Tratamiento de las minorías nacionales polacos y de otras personas de origen o de lengua polaca en territorio de Dantzing*, en CPJI Série A/B, nº 44.
- Sentencia de 7 de junio de 1932 en el asunto de *las zonas francas de la Alta Savoya y del País de Gex* , CPJI, Serie A/B, nº46.
- Sentencia de 24 de junio de 1932, en el asunto de la *Interpretación del estatuto del territorio de Memel*, en CPJI Série A/B, nº47.
- Ordenanzas de 3 de agosto de 1931, en el asunto del *estatuto jurídico del Territorio de Groenlandia Oriental*, en CIJ Série A/B, nº48.
- Ordenanza de 4 de febrero de 1933, acerca de la *Administración del Príncipe Von Pless* -CPJI Série A/B, nº52.
- Sentencia de 5 de abril de 1933 en el asunto del *estatuto jurídico del Territorio de Groenlandia Oriental*, CPJI Serie A/B, nº53.
- Ordenanza de 11 de mayo de 1933, en el asunto del *Príncipe de Pless*, CPJI Serie A/B nº54.

BIBLIOGRAFÍA

- Ordenanza de 12 de mayo de 1933, en sobre los *Recursos contra algunas Sentencias del Tribunal Arbitral Mixto húngaro-checoslovaco*, en CPJI Sé A/B, nº56.
- Ordenanza de 29 de julio de 1933 en el *asunto de la Reforma Agraria polaca* en CPJI, Série A/B, nº58.
- Ordenanza de 23 de mayo de 1936 en el *Asunto Pajzs, Csáky, Estherházy*, CPJI Série A/B, nº66.
- Ordenanza de 27 de junio de 1936 en el asunto *Losinger y Cia*, en CPJI Sé A/B, nº67.
- Sentencia de 6 de noviembre de 1937 en el asunto *Borchgrave*, en CPJI Sé A/B, nº72.
- Ordenanza de 30 de abril de 1938, en el asunto *Borchgrave* en CPJI Serie A, nº73.
- Sentencia de 14 de junio de 1938, en el asunto de *Ciertos fosfatos Marruecos*, en CPJI Séries A/B, nº74.
- Ordenanza de 23 de febrero de 1939 en el asunto del *Ferrocarril Panevezys saldutiskis*, en CPJI Série A/B, nº75.
- Sentencia de 4 de abril de 1939, en el asunto de la *Compañía de electricidad de Sofía y Bulgaria*, en CPJI Séries A/B, nº77.
- Sentencia de 13 de junio de 1939 en el *asunto de la sociedad comercial Bélgica*, ver en CPJI Série A/B, nº78
- Ordenanza de 5 de diciembre de 1939 en el asunto de la *Compañía Electricidad de Sofía*, en CPJI Série A/B, nº 79.

4.3. Decisiones de la CIJ

- Sentencia de 25 de marzo de 1948 en el asunto del *Estrecho de Corfú* Rei Unido c. Albania, Excepción preliminar, en CIJ Recueil 1947-1948, p. 15 y ss.
- Opinión consultiva de 28 de mayo de 1948, relativa a *las condiciones admisión de un Estado como miembro de Naciones Unidas. Art. 4 de la Carta* en CIJ Recueil 1947-48, p. 61y ss.
- Sentencia de 9 de abril de 1949 en el *asunto del Estrecho de Corfú -fondo*, en CIJ Recueil 1949, p. 4 y ss.
- Opinión Consultiva de 11 de abril de 1949 sobre la *reparación por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas*, en CIJ Recueil 1949, p. 174 y ss.
- Sentencia de 15 de diciembre de 1949 en el asunto del *Canal de Corfú*, Rei Unido c. Albania, Fijación del monto de la reparación, en CIJ Recueil 1949, 244 y ss.
- Opinión consultiva de 3 de marzo de 1950 acerca de la *competencia de Asamblea General para la admisión de un Estado en Naciones Unidas*, en CIJ Recueil 1950, p. 4 y ss.
- Opinión consultiva de 30 de marzo de 1950 sobre la *Interpretación de Tratado de Paz* con Bulgaria, Hungría y Rumanía, en CIJ Recueil 1950, pp. 65 y ss.
- Opinión consultiva de 18 de julio de 1950 sobre la *Interpretación de Tratado de Paz* con Bulgaria, Hungría y Rumanía -segunda fase- en CIJ Recueil 1950, pp. 221 y ss.

- Opinión consultiva de 28 de mayo de 1951 sobre las *Reservas a la Convención para la prevención y la represión del crimen de genocidio*, en (CIJ) Recueil 1951, p. 15 y ss.
- Sentencia de 13 de junio de 1951, en el asunto *Haya de La Torre (Colombia/Perú)*, en CIJ Recueil 1951, p. 76 y ss.
- Ordenanza de 5 de julio de 1951 -medidas cautelares- asunto de *Anglo-iranian oil Company* (Reino Unido c. Irán), en CIJ Recueil 1951, p. 89 y ss.
- Ordenanza de 22 de agosto de 1951 en el asunto de la *Anglo-iranian Company* -Reino Unido c. Irán-, en CIJ Recueil 1951, pp. 106 y ss.
- Ordenanza de 31 de octubre de 1951, en el asunto de los *Derechos de los extranjeros nacionales de Estados Unidos en Marruecos* -Francia c. Estados Unidos-, CIJ Recueil 1951, pp. 109 y ss.
- Sentencia de 18 de diciembre de 1951 en el asunto de *la competencia en materia de pesquerías* -Reino Unido c. Noruega-, en CIJ Recueil 1951, pp. 110 y ss.
- Sentencia de 1 de julio de 1952 en el asunto *Ambatielos. Excepción preliminar* (Grecia c. el Reino Unido), en CIJ Recueil 1952, p. 28 y ss.
- Sentencia de 22 de julio de 1952, en el asunto de la *Anglo-iranian Company* (Reino Unido c. Irán), en CIJ Recueil 1952, pp. 93 y ss.
- Sentencia de 27 de agosto de 1952 en el asunto *relativo a los derechos nacionales estadounidenses en Marruecos*, CIJ Recueil 1952, p. 176 y ss.
- Sentencia de 17 de noviembre de 1953 en el asunto *Minquiers y Ecréhéc* -Francia/Reino Unido-, en CIJ Recueil 1953, p. 47 y ss.

- Sentencia de 18 de noviembre de 1953, en el asunto *Notteboht Liechtenstein c. Guatemala*, en CIJ Recueil 1953, p. 119 y ss.
- Sentencia de 15 de junio de 1954, en el asunto *oro amonedado procedente Roma* (Italia c. Francia, Reino Unido y Estados Unidos) en CIJ Recueil 1954, p. 16 y ss.
- Opinión Consultiva de 13 de julio de 1954 acerca de *los efectos de las Sentencias del tribunal administrativo de las Naciones Unidas acordadas indemnizaciones*, en CIJ Recueil 1954, pp. 47 y ss.
- Opinión consultiva de 7 de junio de 1955, sobre el *Procedimiento de verificación aplicable a las cuestiones relativas a información y peticiones sobre el territorio del Sudoeste Africano*, en CIJ Recueil 1955, p. 67 y ss.
- Opinión consultiva de 1 de junio de 1956 acerca de la *Admisibilidad de la audición de los solicitantes por el Comité del Sudoeste Africano*, en CIJ Recueil 1956, p. 23 y ss.
- Sentencia de 6 de julio de 1957, en el asunto de los *Empréstitos Noruega* (Francia c. Noruega), en CIJ Recueil 1957, pp. 9 y ss.
- Ordenanza de 24 de octubre de 1957 en el asunto *Interhandel*, en CIJ, Recueil 1957, p. 105 y ss.
- Ordenanza de 27 de octubre de 1957, en el asunto *Interhandel*, en CIJ Recueil 1957, pp. 122 y ss.
- Sentencia de 26 de noviembre de 1957, en el asunto del *Derecho de paso y territorio indio* (Portugal c. India) en CIJ Recueil 1957, p. 125 y ss.
- Sentencia de 21 de marzo de 1959, en el asunto *Interhandel* (Suiza c. Estados Unidos), CIJ Recueil 1959, pp. 6 y ss.

- Sentencia de 26 de mayo de 1959 en el asunto relativo al *incidente aéreo de 27 de julio de 1955* (Israel c. Bulgaria), en CIJ Recueil 1959, p. 127 y ss.
- Ordenanza de 30 de mayo de 1960, en el asunto del *incidente aéreo de 27 de julio de 1955* -Estados Unidos c. Bulgaria-, en CIJ Recueil 1960, pp. 146 y ss.
- Ordenanza de 31 de agosto de 1960, en el asunto de la *Compañía del puer muelles y depósitos de Beirut y la Sociedad de Radio Oriente* - Francia Líbano-, en CIJ Recueil 1960, pp. 186 y ss.
- Sentencia de 18 de noviembre de 1960, en el asunto de la *Sentencia arbitral del Rey de España, de 23 de diciembre de 1906*, CIJ Recueil 1960, p. 192 y ss.
- Ordenanza de 10 de abril de 1961, en el asunto de la *Barcelona Traction Light and Power Ltd.* -Bélgica c. España, primera demanda-, en CIJ Recueil 1961, pp. y ss.
- Sentencia de 26 de mayo de 1961, en el *Templo de Preah Vihear. Excepción preliminares* (Camboya c. Tailandia), en CIJ Recueil 1961, p. 17 y ss.
- Sentencia de 15 de junio de 1962 en el asunto del *Templo de Preah Vihear* -Camboya c. Tailandia-, en CIJ Recueil 1962, pp. 6 y ss.
- Ordenanza de 7 de agosto de 1962, el asunto de la *Barcelona Traction Light Power* Bélgica c. España, en CIJ Recueil 1962, p. 310 y ss.
- Sentencia de 21 de diciembre de 1962 en el asunto del *Sudoeste africano Excepciones preliminares* (Etiopía c. Sudáfrica y Liberia c. Sudáfrica), en (CIJ Recueil 1962, p. 319 y ss.
- Sentencia de 2 de diciembre de 1963, en el asunto del *Camerún septentrional* -Camerún c. Reino Unido-, en CIJ Recueil 1963, pp. 15 y ss..

- Sentencia de 18 de julio de 1966, en el asunto del *Sudoeste africano*, en Recueil 1966, pp. 5 y ss.
- Sentencia de 24 de julio de 1964 en el asunto de la *Barcelona Traction Li and Power Company Limited. Excepciones preliminares* (Bélgica c. España), CIJ Recueil 1964, p.6 y ss.
- Sentencia de 20 de febrero de 1969 en el *Asunto de la Plataforma Continer del Mar del Norte* (RFA c. Dinamarca y Holanda), en CIJ Recueil 1969, pp. 219 ss
- Sentencia de 5 de julio de 1970 en el asunto de la *Barcelona Traction Li and Power Company Limited.* (Bélgica c. España), en CIJ Recueil 1970, p.4 ss.
- Opinión consultiva de 21 de junio de 1971 acerca de las *Consecuencias jurídicas para los Estados de la presencia continua de Africa del Sur en Namibia (Sudoeste Africano) nonobstant la resolución 276 (1970) del Consejo Seguridad*, ver en CIJ Recueil 1971, p. 16 y ss..
- Ordenanzas de 12 de julio de 1972, en el asunto de la *Competencia materia de pesquerías -UK y RFA c. Islandia-*, en CIJ Recueil 1972, pp.17 y 35 ss respectivamente.
- Sentencia de 18 de agosto de 1972 en el asunto de la *Competencia materia de pesquerías -Reino Unido c. Islandia-*, en CIJ Recueil 1972, pp. 46 y ss.
- Ordenanzas de 17 de agosto de 1972, en el asunto de la *Competencia materia de pesquerías -Reino Unido c. Islandia y RFA c. Islandia-*, en CIJ Recueil 1972, pp. 14 y 32 y ss. respectivamente.

BIBLIOGRAFIA

- Sentencias de 2 de febrero de 1973, en el asunto de la *Competencia materia de pesquerías* (Reino Unido c. Islandia y la R.F.A. c. Islandia) en C Recueil 1973, p. 4 y ss. y 49 y ss. respectivamente.
- Ordenanzas de 22 de junio de 1973 en el asunto de los *Ensayos Nucleares* Australia y Nueva Zelanda c. Francia-, en CIJ Recueil 1973, pp. 99 y 135 y respectivamente.
- Opinión consultiva de 12 de julio de 1973 acerca de la *demanda de reforma la sentencia nº158 del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas*, en C Recueil 1973, pp. 252 y ss.
- Ordenanza de 12 de julio de 1973, mantenimiento en vigor de las medidas cautelares en el asunto de la *Competencia en materia de pesquerías* (Reino Unido c. Islandia y RFA c. Islandia) en CIJ Recueil 1973, pp. 306 y ss. y 317 y respectivamente;
- Ordenanzas de 12 de julio de 1973, en el *asunto de los ensayos nucleares* Australia y Nueva Zelanda c. Francia-, en CIJ Recueil 1973, pp. 321 y 325 y ss.
- Ordenanza de 13 de julio de 1973, en el asunto de los *Prisioneros de guerra paquistaníes* Paquistán c. India, en CIJ Recueil 1973, p. 328 y ss..
- Sentencias de 25 de julio de 1974 en el asunto de la *Competencia en materia de pesquerías* (Reino Unido c. Islandia y la R.F.A. c. Islandia) Fondo, en C Recueil 1974, pp. 3 y ss. y 175 y ss. respectivamente).
- Sentencias de 20 de diciembre de 1974 en el asunto de los *Ensayos nucleares* Australia c. Francia y Nueva Zelanda c. Francia, en CIJ Recueil 1974, pp. 253 y 457 y ss. respectivamente
- Opinión consultiva de 16 de octubre de 1975, acerca del *Sahara Occidental* en CIJ Recueil 1975, p. 12 y ss.

BIBLIOGRAFÍA

- Ordenanza de 11 de septiembre de 1976 en el asunto de la *Plataforma Continental del Mar Egeo*, Grecia c. Turquía, en CIJ Recueil 1976, p. 172 y ss.
- Sentencia de 19 de diciembre de 1978 en el asunto de la *Plataforma Continental del Mar Egeo*, Grecia c. Turquía, en CIJ Recueil 1978, p. 3 y ss.
- Ordenanza de 15 de diciembre de 1979, en el asunto del *Personal diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán*, en CIJ Recueil 1979, pp. 7 y ss.
- Sentencia de 24 de mayo de 1980 en el asunto del *Personal diplomático y consular de Estados Unidos en Irán*, Estados Unidos c. Irán, en CIJ Recueil 1980, p. 3 y ss.
- Opinión consultiva de 20 de diciembre de 1980, *acerca de la interpretación del acuerdo de 25 de marzo de 1951 entre la OMS y Egipto*, en CIJ Recueil 1980, p. 155 y ss.
- Sentencia de 14 de abril de 1981 en el asunto de la *Plataforma continental entre Túnez y Libia - solicitud de intervención de Malta-*, en CIJ Recueil 1981, pp. 3 y ss.
- Ordenanza de 20 de enero de 1982 en el *Asunto de la delimitación de frontera marítima en el Golfo del Maine* entre Estados Unidos y Canadá, en CIJ Recueil 1982, p. 4 y ss.
- Ordenanza de 1 de febrero de 1982, en el *asunto de la delimitación de frontera marítima en el Golfo de Maine* Estados Unidos/ Canadá, en CIJ Recueil 1982, p. 16 y ss.
- Sentencia de 24 de febrero de 1982 sobre la *Plataforma Continental* en Túnez y Libia, en CIJ Recueil 1982, p. 21 y ss.

- Opinión consultiva de 20 de julio de 1982 sobre la *demanda de revisión de sentencia nº273 del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas*, en (Recueil 1982, p. 379 y ss.
- Ordenanza de 28 de julio de 1982, en el *asunto de la delimitación de frontera marítima en el Golfo de Maine* Estados Unidos/ Canadá, en CIJ Recu. 1982, pp. 557 y ss.
- Ordenanza de 5 de noviembre de 1982, en el *Asunto de la delimitación de frontera marítima en el Golfo de Maine* entre Estados Unidos y Canadá, en (Recueil 1982, p. 560 y ss.
- Ordenanza de 27 de julio de 1983, en el *Asunto de la delimitación de frontera marítima en el Golfo de Maine* entre Estados Unidos y Canadá, en (Recueil 1983, pp. 4 y ss.
- Sentencia de 21 de marzo de 1984 en el asunto de la *Plataforma Continental entre Libia y Malta*, en CIJ Recueil 1984, p.3 y ss.
- Ordenanza -medidas cautelares- de 10 de mayo de 1984, en el asunto de *actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* en CIJ Recueil 1984, pp. 186 y ss.
- Ordenanza -intervención ex art. 63 del Estatuto de El Salvador- de 4 de octubre de 1984 en el asunto de *las actividades militares y paramilitares en y con Nicaragua*, en CIJ Recueil 1984, p. 216 y ss..
- Sentencia de 12 de octubre de 1984 -Sala- *delimitación de la frontera marítima en el Golfo de Maine* (Estados Unidos/Canadá) en CIJ Recueil, 1984, p. 241 y ss.

BIBLIOGRAFIA

- Sentencia de 26 de noviembre de 1984, en el asunto de *las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* (Nicaragua c. Estados Unidos) en CIJ Recueil 1984, p. 392 y ss.
- Ordenanza de 3 de abril de 1985 en el asunto de la *diferencia fronteriza entre Burkina Faso y la República de Malí*, en CIJ Recueil 1985, p. 6-8.
- Ordenanza de 12 de abril de 1985 en el asunto de la *diferencia fronteriza entre Burkina Faso y la República de Malí*, en CIJ Recueil 1985, pp. 10 y ss.
- Sentencia de 3 de junio de 1985, en el *asunto de la Plataforma Continental entre Libia y Malta*, en CIJ Recueil 1985, p. 24 y ss.
- Ordenanza de 3 de octubre de 1985, en el asunto de la *Diferencia fronteriza entre Burkina Faso y la República de Malí*, CIJ Recueil 1985, p. 189 y ss.
- Sentencia de 10 de diciembre de 1985 en el asunto de la *interpretación de Sentencia de 24 de febrero de 1982, en el asunto de la plataforma continental entre Túnez y Libia*, en CIJ Recueil 1985, pp. 192 y ss.
- Ordenanza de 10 de enero de 1986, en el asunto de la *diferencia fronteriza entre Burkina Faso y Mali*, en CIJ Recueil 1986, p. 8 y ss.
- Sentencia de 22 de diciembre de 1986 -Sala- en el asunto de la *diferencia fronteriza entre Burkina Faso y Mali* CIJ Recueil 1986, pp. 554 y ss.
- Sentencia de 27 de junio de 1986, en el asunto de las *actividades militares, paramilitares en y contra Nicaragua* (Nicaragua c. Estados Unidos), en CIJ Recueil 1986, pp. 23-24
- Ordenanza de 2 de marzo de 1987, en el *asunto de la Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI)*, en CIJ Recueil 1987, p. 3 y ss.

- Ordenanza de 9 de abril de 1987 en el asunto de *la diferencia fronteriza en Burkina Faso y la República de Mali*, en CIJ Recueil 1987, p 7 y ss.
- Ordenanza de 8 de mayo de 1987 en el asunto de *la diferencia fronter terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador, en CIJ Recueil 19 pp. 165 y ss.
- Opinión consultiva de 27 de mayo de 1987, sobre *la demanda de revisión la sentencia número 333 del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas*, CIJ Recueil 1987, p. 106 y ss
- Ordenanza de 29 de mayo de 1987 en el asunto de *la diferencia fronter terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador, en CIJ Recueil 19 pp. 176 y ss.
- Ordenanza de 17 de noviembre de 1987, en el asunto de *la Elettronica Sic S.p.A. -ELSI-*, en CIJ Recueil 1987, pp. 185 y ss.
- Ordenanza de 8 de mayo de 1987, en el asunto de *la diferencia fronter terrestre, insular y marítima* entre Honduras y El Salvador, en CIJ Recueil 19 p. 13 y ss.
- Ordenanza de 17 de noviembre de 1987 en el asunto de *la Elettronica Sic S.p.A. -ELSI-* en CIJ Recueil 1987, p.185 y ss
- Opinión Consultiva de 26 de abril de 1988, acerca de *la aplicabilidad de obligación de arbitraje en virtud de la sección 21 del acuerdo de 26 de junio 1947, relativo a la sede de las Naciones Unidas*. en CIJ Recueil 1988, pp. 4: ss.
- Ordenanza de 20 de diciembre de 1988 en el asunto de *la Elettronica Sic S.p.A. -ELSI-*, Estados Unidos c. Italia, en CIJ Recueil 1988, p. 158 y ss.

- Sentencia de 20 de diciembre de 1988 en el asunto de las *Acciones armadas fronterizas y transfronterizas* -Nicaragua c. Honduras-, en CIJ Recueil 1988, 70 y ss.
- Ordenanza de 12 de enero de 1989 en el asunto de la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* Honduras/El Salvador, en CIJ Recueil 1989, p.3 y ss.
- Sentencia de 20 de julio de 1989 -Sala- en el asunto de la *Elettronica Siciliana S.p.A. -ELSI-* Estados Unidos c. Italia, en CIJ Recueil, 1989, pp. 15 y ss.
- Ordenanza de 13 de diciembre de 1989 en el asunto de la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre El Salvador y Honduras, en CIJ Recueil 1989, p. 129 y ss.
- Ordenanza de 28 de febrero de 1990 -Pleno- en el asunto de la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre El Salvador y Honduras, en CIJ Recueil 1990, p. 4 y ss.
- Ordenanza de 2 de marzo de 1990 en el asunto relativo a la *Sentencia arbitral de 31 de julio de 1989* -Guinea Bisau c. Senegal- en CIJ Recueil 1990, pp. 64 y ss.
- Sentencia de 13 de septiembre de 1990 -intervención de Nicaragua-en el asunto de la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre El Salvador y Honduras, en CIJ Recueil 1990, pp. 92 y ss.
- Ordenanza de 14 de octubre de 1990 en el asunto de la *diferencia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre El Salvador y Honduras, en CIJ Recueil 1990, p. 146 y ss.
- Ordenanza de 29 de julio de 1991 en el asunto del *Pasaje por el Gran Belts* -Finlandia c. Dinamarca-, en CIJ Recueil 1991, p. 12 y ss.

- Ordenanza de 26 de septiembre de 1991, en el asunto de las *actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* ver en CIJ Recueil 1991, pp. 4 ss.
- Sentencia de 12 de noviembre de 1991 en el asunto de *la Sentencia arbitral 31 de julio de 1989 Guinea Bissau c. Senegal*, en CIJ Recueil 1991, pp. 53-70
- Ordenanza de 14 de abril de 1992, en el asunto de las *Cuestiones de interpretación y aplicación de la Convención de Montreal de 1971, acerca del Incidente aéreo en Lockerbie* -Libia c. UK y Libia c. Estados Unidos-, en CIJ Recueil 1992, pp. 3 y 128 y ss. respectivamente.
- Sentencia de 26 de Junio de 1992, en el asunto *de las tierras con fosfatos de Nauru. Excepciones Preliminares* (Nauru c. Australia), en CIJ Recueil 1992, pp. 240 y ss.
- Sentencia de 11 de septiembre de 1992 -Sala- en el asunto de *la diferencia de frontera terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras*, en CIJ Recueil 1992, pp. 351 y ss.
- Ordenanza de 8 de abril de 1993, en el *Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la prevención y represión del crimen de genocidio* -Bosnia y Herzegovina c. Yugoslavia (Serbia y Montenegro)- en CIJ Recueil 1993, p. 3 y ss.
- Ordenanza de 13 de septiembre de 1993 en el asunto de la *Aplicación de la Convención de la Prevención y represión del crimen de genocidio* -Bosnia y Herzegovina c. Yugoslavia (Serbia y Montenegro)- , en CIJ Recueil 1993, pp. 325 y ss.
- Sentencia de 3 de marzo de 1994, en el asunto de la *Diferencia territorial en Libia y Chad*, en CIJ Recueil 1994, pp.6 y ss.

- Asunto relativo al *Proyecto Gabčíkovo-Nagymaros* (Hungría c. Eslovaquia), Ordenanza de 20 de diciembre de 1994, en CIJ Recueil 1994, p. 151 y ss.
- Sentencia de 15 de febrero de 1995 en el asunto de la *jurisdicción admisible en la delimitación marítima y cuestiones territoriales entre Qatar y Bahrain* -Qatar c. Bahrain-, en CIJ Recueil 1995, pp. - ;
- Sentencia de 30 de junio de 1995 en el *asunto de Timor Oriental* -Portugal c. Australia-, en CIJ Recueil 1995, pp.

4.4. Otros

- Sentencia arbitral rendida por el Rey de España el 23 de diciembre de 1990 relativa a la frontera entre Guatemala y Honduras (RIAA, vol. II, p.1325)
- Sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana de 9 de marzo de 1990 en el asunto *Costa Rica c. San José de Costa Rica*, 1997
- Sesión Pública, piezas de procedimiento y correspondencia en el *asunto del Tratado de Neuilly*, artículo 179 parte IX, sección IV, anexo, párrafo (Interpretación) , en CPJI, Série C, nº6.
- Sesión Pública, piezas de procedimiento y correspondencia en el *asunto de la interpretación de la sentencia nº3* , en CPJI Série C, nº6.
- *Résolution relative à la revision du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale*, Resolución de la Asamblea de la Sociedad de Naciones de 28 de septiembre de 1929, en CPJI, Serie D. nº1 pp. 8-9.

- *Protocole concernant la revision du Statut de la Cour Permanente de Jus Internationale*, Protocolo de 14 de septiembre de 1929, en CPJI, Serie D, pp. 9-10.
- Actas de las sesiones de modificaciones reglamentarias de 1926 y 1936, CPJI Serie D núm. 2, addendum núm. 1, 2, 3 y 4.
- Resolución de la AGNU 171 (II), de 14 de noviembre de 1947
- Resolución de la AGNU 3232 (XXIX) de 12 de noviembre de 1974 *Examen las funciones de la Corte Internacional de Justicia*.
- Sentencia arbitral de 21 de octubre de 1994 en la *controversia sobre recorrido de la traza del límite entre el Hito 62 y el Monte Fitz R* (Argentina/Chile)
- Decisión arbitral de 30 de junio de 1977 del Tribunal arbitral que conoció de *delimitación de la plataforma continental* entre Francia y el Reino Unido.
- Sentencia de 16 de diciembre de 1960, en el asunto 44/59 *Fidelaar Comisión*, en TJCE, Recueil 1960, pp. 1081 y ss.
- Sentencia de 15 de junio de 1976, en el asunto 110/75, *John Mills c. Banq Europeénne d'investissement*, en TJCE Recueil 1976, p. 967 y ss.
- Sentencia de 9 de marzo de 1977, en el asunto 54/75, *De Dapper/Parlamen* en TJCE Recueil 1977, p. 474 y ss;
- Sentencia de 30 de marzo de 1977 en el asunto de la delimitación de *Plataforma Continental* entre Francia y Reino Unido, ver en ILM, 1979, p. 399.
- Sentencia de 14 de julio de 1981, en el asunto 172/80, *Züchner/Bayerisc Vereinsbank*, en TJCE Recueil 1981, pp. 2021 y ss.

BIBLIOGRAFIA

- Laudo arbitral de 31 de julio de 1989 Guinea Bissau/Senegal, en RGI 1990, pp. 204-277.

